

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE DERECHO**

**Departamento de Estudios Superiores en Derecho Constitucional**



**TESIS DOCTORAL**

# **El control parlamentario en Costa Rica : una perspectiva de derecho comparado**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR  
PRESENTADA POR

**Olman Ugalde González**

DIRECTOR:

**Pablo Lucas Verdú**

**Madrid, 2015**



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

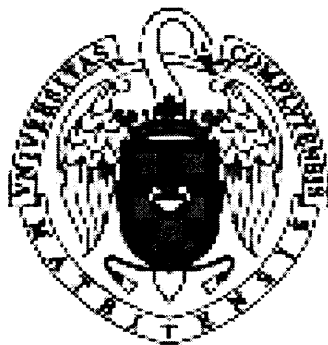


TE  
273

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO CONSTITUCIONAL



TESIS DOCTORAL

EL CONTROL PARLAMENTARIO EN COSTA RICA: UNA PERSPECTIVA DE  
DERECHO COMPARADO

Para la colación del grado de Doctor presenta:  
D. Olman Ugalde González

Director:  
PROF. DR. D. Pablo Lucas Verdú

Madrid, Diciembre 2005

EL CONTROL PARLAMENTARIO EN LA  
REPÚBLICA DE COSTA RICA:  
UNA PERSPECTIVA DE DERECHO  
COMPARADO.

ESTA TESIS DOCTORAL QUE PRESENTA EL LICENCIADO OLMAN UGALDE GONZÁLEZ, HA SIDO DESARROLLADA BAJO LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN, DEL PROFESOR PABLO LUCAS VERDÚ, CATEDRÁTICO EMÉRITO, DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, FACULTAD DE DERECHO, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO CONSTITUCIONAL, Y MIEMBRO DE LA ACADÉMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS.

Fdo. D. Olman Ugalde González

Vº Bº del Director

Fdo. Prof. Dr. D. Pablo Lucas Verdú.



## ***"Dedicatorias".***

EN ESTE EXTRAORDINARIO MOMENTO, CON TODA HUMILDAD DOY INFINITAS GRACIAS AL SUPREMO CREADOR DE NUESTRA VIDA, DIOS Y A SU AMADO HIJO, JESUCRISTO, SU SANTÍSIMA Y VENERADA MADRE, LA VIRGEN MARÍA; EN ELLA REPRESENTADA LA PATRONA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES, ASÍ COMO LA PATRONA DE MÉXICO, LA VIRGEN DE GUADALUPE, EN LA QUE ME HE ASIDO FUERTEMENTE, CUANDO ME HE ENCONTRADO AGOBIADO, HALLANDO EN TODO INSTANTE SU REFUGIO Y AMPARO, POR ESTO SIN TEMOR A EQUIVOCARME AFIRMO QUE HAN SIDO Y SON PILARES FUNDAMENTALES PARA HABER PODIDO LLEGAR HASTA ESTE TAN SOÑADO MOMENTO, EN LA CULMINACIÓN EXITOSA DE MI DOCTORADO.

POR TAL RAZÓN, LES DEDICO PRINCIPALMENTE ESTE TRIUNFO Y RUEGO SIEMPRE Y EN TODA HORA SU PROTECCIÓN.

TAMBIÉN DEDICO ESTE DOCTORADO, A MI AMADA ESPOSA, EVADINA GONZÁLEZ CARRILLO, Y LE OFREZCO MI ESPECIAL GRATITUD YA QUE ADEMÁS DE UNA ADMIRABLE AMIGA, ESPECIAL COMPAÑERA, COLABORADORA, HA COMBATIDO A MI LADO E INCLUSO HA SACRIFICADO SUS INTERESES PERSONALES POR PERMANECER LUCHANDO JUNTOS, Y ME HA PROPORCIONADO SU MANO EN MOMENTOS DE DEBILIDAD, ADEMÁS MEDIANTE LA LUZ DE SUS OJOS CONVIERTE MI CAMINO EN TRANSPARENCIA; Y MI VIDA EN ALEGRÍA. GRACIAS AMADA Y

QUERIDA ESPOSA ÉSTE TRIUNFO TAMBIÉN TE PERTENECE  
DISFRÚTALE.

DEDICO ÉSTE TRIUNFO A MIS ADORADOS HIJOS: OLMAN  
FRANCISCO QUIEN ME APOYÓ EN ESTA GRAN LUCHA, TE DOY LAS  
GRACIAS, A MI ADORADA PRINCESA, FERNANDA ISABEL, QUIÉN  
CADA VEZ QUE TUVE QUE DEJARLES SOLOS, EN POS DE ÉSTA  
META, DERRAMÓ GRANDES LÁGRIMAS DE SUFRIMIENTO Y DOLOR,  
PERO SIEMPRE ME DIJO "ADELANTE PAPITO", DEMOSTRANDOME  
SU CONFIANZA Y AMOR, GRACIAS AMADA HIJA, POR ELLO A MI  
FAMILIA LES REITERO MI ETERNA GRATITUD.

EN ESTAS DEDICATORIAS NO PUEDO OLVIDAR A MIS QUERIDOS  
PROGENITORES:

REYNALDO UGALDE PÉREZ Y OLGA GONZÁLEZ CORRALES,  
QUIENES SENCILLOS Y HUMILDES CAMPESINOS, SIEMPRE HAN  
ESTADO A MI LADO PARA QUE HOY SEA UN HOMBRE DE BIEN,  
GRACIAS QUERIDOS PADRES.

## ***"Agradecimientos".***

EN LA CULMINACIÓN DE ESTA TESIS DOCTORAL, ESPECIALMENTE DOY LAS GRACIAS Y OFREZCO MI ETERNA GRATITUD, AL DOCTOR PABLO LUCAS VERDÚ, POR SU ACERTADA DIRECCIÓN Y DEDICACIÓN PARA QUE MI DOCTORADO SEA HOY UNA EFECTIVA REALIDAD.

TAMBIÉN DEJO PATENTE EN ESTE INSTANTE MI MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, "AECI", PRIMERO: POR CONFIAR EN MÍ Y EN SEGUNDO TERMINO POR SER BENEFICIARIO DE LA PRIMERA BECA QUE SE CONCEDE, A UN INVIDENTE COSTARRICENSE PARA ESTUDIOS DOCTORALES, TAMBIEN A MI PATRONO EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, POR DARME LAS FACILIDADES Y APOYO, PARA CULMINAR TRIUNFANTEMENTE CON ÉSTA META; ASIMISMO HAGO EXTENSIVO ÉSTE AGRADECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES "ONCE" EN NOMBRE DE LA FOAL.

DE IGUAL FORMA, DESEO AGRADECER A TODAS AQUELLAS PERSONAS; QUIENES CONFIARON Y CREYERON EN MI, ENTRE ÉSTAS :

LAS EDUCADORAS DE LA INFANCIA, MAESTRAS SILVIA PICADO E ISABEL SALAS.

PROFESORES UNIVERSITARIOS: COMO LA LICDA. ADRIANA ROJAS, EL DR. FERNANDO CASTILLO Y LA LICDA. YAMILETH BENAVIDES.

A MIS ESPECIALES AMIGOS, COMO EL SEÑOR EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DR. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, Y SU ESPOSA LA SEÑORA LORENA CLARE DE RODRÍGUEZ.

TAMBIÉN AGRADEZCO A TANTOS Y TANTAS PERSONAS QUE PRESTARON SUS OJOS Y VOZ, PARA GRABARME LIBROS, ACOMPAÑARME A DETERMINADOS LUGARES, SIN EMBARGO, EN LAS PERSONAS DE ANITA (LA ESPAÑOLA DEL COLEGIO GUADALUPE), SU DIRECTOR SEÑOR JULIÁN SANTOS, A LA "GUAPA", Y DOÑA MAYRA, EN ELLOS MI HOMENAJE Y AGRADECIMIENTO PARA TODOS.

UNA ESPECIAL DEDICACIÓN A LOS MATRIMONIOS CONFORMADOS POR EL SEÑOR JUAN PORRAS FERNÁNDEZ Y SU ESPOSA DOÑA ISABEL. COMO AL DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO SERRANO AGUILERA Y MARÍA JOSÉ, EN QUIENES EN LA MADRE PATRIA NO SOLO ENCONTRE A UNOS AMIGOS, SINO A UNOS GRANDES Y MUY ESPECIALES HERMANOS, PUESTOS POR DIOS, MI ETERNA GRATITUD, PARA AMBOS POR MARCAR HUELLA EN MI CAMINO.

FINALMENTE, AGRADEZCO Y DEDICO ESTE TRIUNFO A LOS PERSONEROS Y JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA; ESPECIALMENTE A QUIÉN ERA SU PRESIDENTE EN EL AÑO DOS MIL, LICENCIADO JUAN DIEGO CASTRO FERNÁNDEZ. A TODOS EN GENERAL GRACIAS, Y A LOS QUE NO PUDE MENCIONAR MIL DISCULPAS.



## ***PENSAMIENTO.***

“LA DESESPERANZA ESTÁ FUNDADA EN LO QUE SABEMOS,  
QUE ES NADA; Y LA ESPERANZA  
ESTÁ FUNDADA SOBRE LO QUE IGNORAMOS, QUE ES  
TODO”.

MAURICE MAETERLINCK.

DICIEMBRE DEL AÑO, 2005.





# ***Tesis Doctoral***

## **EL CONTROL PARLAMENTARIO EN LA REPÚBLICA DE COSTA RICA: UNA PERSPECTIVA DE DERECHO COMPARADO.**

### **PRESENTACIÓN DEL INDICE:**

PORTADA.----- 1

VISTO BUENO DEL DIRECTOR.----- 3

DEDICATORIAS.----- 5

AGRADECIMIENTOS.----- 7

PENSAMIENTO.----- 11

***INTRODUCCIÓN GENERAL.----- 27***

A) JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.----- 27

B) OBJETIVOS PARA LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.----- 45

***Primera parte:***

***Teoría sobre la separación de los poderes del Estado y el Control del gobierno.----- 47***

**Capítulo I**

**Teoría sobre la Separación de los Poderes del estado.----- 49**

A) LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS DE LA SEPARACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO.----- 49

B) VALORACIÓN ACERCA DE LA TEORÍA DE LA SEPARACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO.----- 57

PENSAMIENTO DE LOS DOCTRINARIOS COSTARRICENSES acerca de los principios de LA TEORÍA DE LA SEPARACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO.----- 77

**CAPÍTULO II.**

**El Control sobre el gobierno.----- 81**

A) DIFERENTES CONCEPCIONES DE CONTROL.----- 81

B) DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE CONTROL JUDICIAL O JURISDICCIONAL Y EL CONCEPTO DE CONTROL POLÍTICO.----- 89

C) DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL PARLAMENTARIO, EN GENERAL.----- 97

D) ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE CONTROL POLÍTICO, EN LOS REGÍMENES DE GOBIERNOS PRESIDENCIALISTAS.----- 111

## ***Segunda Parte:***

# ***EVOLUCIÓN histórica del Derecho Constitucional de la república de Costa Rica 117***

## **Capítulo I**

**Consideración histórica del Derecho político de la república de Costa Rica.----- 121**

A) INTRODUCCIÓN A LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.----- 121

B) ELECCIÓN DEL PRIMER DIPUTADO POR LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, A LAS CORTES ESPAÑOLAS DE CÁDIZ DE MIL OCHOCIENTOS DOCE.----- 124

C) BREVE PANORAMA HISTÓRICO DE LA INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE COSTA RICA.----- 128

D) DEBATE CON RESPECTO A ¿CUAL FUE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA?. 143

E) POSICIÓN DEL INVESTIGADOR SOBRE CUAL FUE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.- 155

F) PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.----- 163

### ***Tercera Parte:***

***El derecho político costarricense en la actualidad.----- 173***

### **Capítulo I**

**El control Político del gobierno de la república de Costa Rica en la actualidad----- 179**

A) PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE CONFIGURAN AL ESTADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DE CONFORMIDAD CON SU CONSTITUCIÓN POLÍTICA VIGENTE DE SIETE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.----- 179

B) PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA VIGENTE DE SIETE DE NOVIEMBRE DE MIL  
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.----- 186

C) CONTRIBUCIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA  
REPÚBLICA DE COSTA RICA DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y  
NUEVE A NUESTRO ACTUAL CONTROL POLÍTICO,. ----- 211

D) PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN DE CONTROL  
POLÍTICO EJERCIDA, POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  
REPÚBLICA DE COSTA RICA, DURANTE LOS PERIODOS QUE  
TRANSCURREN DE LOS AÑOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y  
NUEVE AL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.----- 247

E) FUNCIÓN DE CONTROL POLÍTICO, DESEMPEÑADA POR LA  
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,  
DURANTE EL PERIODO QUE TRANSCURRE DEL AÑO MIL  
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, AL TIEMPO ACTUAL.----- 263

## **Capítulo II**

### **Resultados producidos del análisis del trabajo de campo desarrollado en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.----- 281**

A) PRESENTACIÓN DE LA FORMA EN LA CUAL SE TRATARÁN LAS INFORMACIONES RECOLECTADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN.----- 281

A1) PRIMER APARTADO DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADA A LOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS, DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.----- 283

A2) SEGUNDO APARTADO DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADO A LOS SEÑORES LEGISLADORES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.----- 289

B) PRESENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS BRINDADAS POR EL SEGUNDO GRUPO DE ENCUESTADOS Y ENCUESTADAS, PARA EL TRABAJO DE ESTA INVESTIGACIÓN.----- 379

B1) PRIMER APARTADO DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADO AL SEGUNDO GRUPO DE ENCUESTADOS.----- 379

B2) SEGUNDO APARTADO DE ESTA ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADO AL SEGUNDO GRUPO DE ENCUESTADOS.----- 384

C) RECAPITULACIÓN DE LOS RESULTADOS LOGRADOS, DE LAS  
RESPUESTAS OBTENIDAS DE LOS DOS GRUPOS ESTUDIADOS.- 413

C1) GRADOS DE CONGRUENCIA, ENTRE LAS OPINIONES DE  
AMBOS GRUPOS DE ENCUESTADOS.----- 413

C2) DIVERGENCIAS, EN LAS OPINIONES BRINDADAS POR AMBOS  
GRUPOS DE ENCUESTADOS.----- 420

C3) ASPECTOS DE MAYOR RELEVANCIA A RESALTAR SOBRE LOS  
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN.----- 423

### **Capítulo III**

**Análisis comparado entre los mecanismos de control  
político, empleados en el régimen de gobierno  
parlamentario español, en CONTRAPOSICIÓN con  
los mecanismos de control político, utilizados en el  
régimen de gobierno presidencialista de la República  
de Costa Rica. Y propuestas de  
Cambios a su modelo de control político, ejercido  
por su Asamblea legislativa.----- 427**

A) ANÁLISIS COMPARADO ENTRE AMBOS REGÍMENES DE  
GOBIERNOS.----- 427

B)	PROPUESTAS DE CAMBIOS AL SISTEMA DE CONTROL POLÍTICO, EJERCIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.-----	450
----	--	-----

## **CAPITULO IV**

	<b>Conclusiones finales de la investigación.-----</b>	<b>459</b>
--	---	------------

	<i>BIBLIOGRAFÍA.-----</i>	<i>477</i>
--	---------------------------	------------

A)	MONOGRAFÍAS.-----	477
----	-------------------	-----

B)	ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS.-----	487
----	-------------------------------	-----

C)	OTRAS FUENTES INFORMATIVAS.-----	489
----	----------------------------------	-----



# **ANEXOS**

## ***ANEXOS que contiene la investigación.----- 491***

### ***Anexo número uno:***

#### ***Procedimiento metodológico empleado durante el desarrollo de la investigación.—491***

1.1. TIPO DE ESTUDIO.-----	491
1.2. POBLACIÓN.-----	492
1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SUJETOS A ENCUESTAR.-----	493
1.4. VARIABLES.-----	496
1.4.1. VARIABLE NÚMERO UNO: UTILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL POLÍTICO EN LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.-----	496

1.4.2. VARIABLE NÚMERO DOS:	
EFICACIA DEL CONTROL POLÍTICO EN LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.-----	496
1.4.3. DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LAS VARIABLES	496
1.4.4. DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LAS VARIABLES-	497
1.4.5. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA EFICACIA DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL POLÍTICO EN LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.-----	497
1.4.6. INSTRUMENTACIÓN Y DEFINICIÓN OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL POLÍTICO EN LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.-----	498
1.4.7. PARA EFECTOS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN DEBEMOS ENTENDER COMO INSTRUMENTO DE CONTROL POLÍTICO.-----	498
1.5. DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN. -----	498
1.5.1. CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO.-----	498
1.5.2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN ENCUESTA DE OPINIÓN.-----	500

1.5.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA ELABORAR EL TRABAJO DE CAMPO.-----	501
--	-----

1.6.- Proyección para el Análisis de la información y procesamiento de los datos.-----	509
--	-----

1.7.- Alcances y proyecciones del estudio.-----	509
---	-----

### **Anexo número dos.**

<b>Encuesta de opinión sobre el control político de la República de Costa Rica.-----</b>	<b>511</b>
--	------------

---

### **Anexo número tres:**

<b>Principales características de los siete Partidos Políticos, representados en el Poder Legislativo, de la República de Costa Rica, para el período constitucional que transcurre del ocho de mayo del dos mil dos, al ocho de mayo dos mil seis.-----</b>	<b>517</b>
--	------------

3.1. PARTIDO POLÍTICO, UNIDAD SOCIAL CRISTIANA.-----	517
--	-----

3.2. PARTIDO POLÍTICO, LIBERACIÓN NACIONAL.-----	520
--	-----

---

3.3. PARTIDO POLÍTICO, ACCIÓN CIUDADANA.-----	522
3.4. PARTIDO POLÍTICO, BLOQUE PATRIÓTICO.-----	524
3.5. PARTIDO POLÍTICO, MOVIMIENTO LIBERTARIO.-----	526
3.6. PARTIDO POLÍTICO AUTÉNTICO HEREDIANO.-----	528
3.7. PARTIDO POLÍTICO, RENOVACIÓN COSTARRICENSE.-----	530

***Anexo número cuatro.***

<b><i>Documento oficial proporcionado por la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.-----</i></b>	<b><i>535</i></b>
---	-------------------

***Anexo número cinco.***

<b><i>Acta legislativa ciento nueve del año mil novecientos noventa y cinco, que versa sobre el primer voto de censura, que se ha producido en el país. -----</i></b>	<b><i>553</i></b>
---	-------------------

***Anexo número seis. acta legislativa ciento trece de catorce de diciembre del año mil novecientos noventa y cinco, en donde se***

***aprueba el único voto de censura, que se ha  
producido en contra de un ministro del  
gobierno de la República de Costa Rica. .-- 589***



## ***Introducción General.***

### ***El control parlamentario en la República de Costa Rica: una perspectiva de Derecho comparado.***

#### **A) Justificación y planteamiento del problema.**

El objetivo medular, de la presente investigación, consiste en evaluar la función de control político que desarrolla en la actualidad la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sobre su gobierno y demás instituciones públicas del Estado costarricense.

Por este motivo, con el fin de cumplir con el propósito determinado, se analiza adecuadamente, la eficacia de los instrumentos de control político, que la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece con la buena y única intención, de que los diputados de su Asamblea Legislativa puedan desempeñar convenientemente, la preponderante función que les corresponde desarrollar a través del ejercicio del trabajo de control político, practicado éste desde el congreso.

Conforme a lo propuesto, en el presente trabajo se elabora un estudio, en el cual incluimos el desarrollo, que han tenido los procedimientos de control político en la República de Costa Rica; para tales acciones se considera indispensable valorar al Derecho Constitucional comparado; en relación con los orígenes del Parlamento costarricense, entendiendo a éste último como órgano de control.

Acorde a lo puntualizado anteriormente, el investigador procede a formular el problema que determina esta ocurriendo en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, en el momento de utilizar los mecanismos de control político y consecuentemente a la hora de aplicar el control político en las instituciones estatales.

En esta investigación, se considera básico y necesario analizar los principios de la teoría de la separación de los poderes del Estado, fundamentándose en que el control político, se sustenta en los principios de esta teoría; principalmente tomando en consideración la distinción que debe prevalecer entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Porque el poder Judicial por su función tan especializada, ha sido abstraído de poder intervenir en materias referentes a la temática del control político; elemento que se ha confiado principalmente al parlamento, y en un menor grado al ejecutivo.

Aclaremos, que el tratamiento a realizar sobre los principios de esta doctrina, será a partir de la aparición del Estado liberal, debido a que con este valioso acontecimiento, se vinieron a cambiar los principios de la legitimidad, y entonces a partir de ese momento de nuestra historia, el Estado viene a sustentarse en los preceptos de la legitimidad democrática y la igualdad entre los ciudadanos.

Como es bien sabido; con anterioridad al nacimiento del Estado liberal, lo que predominaba, en el mundo era un estado en el cual se caracterizaba la desigualdad entre los seres humanos, porque se concedía gran trascendencia a la posición social y económica, que ostentara el individuo en el núcleo social en donde estuviese ubicado, o sea, con esto no todas las personas disponían de los mismos derechos, sólo como modo de ejemplificación, de esta gran problemática nos permitimos recordar, en esa época los esclavos, las personas de color, individuos con discapacidad y mujeres, no eran titulares de disfrutar y gozar de derechos de participación política; con esto queda de manifiesto, lo que prevalecía en la edad media, era entonces exclusivamente, la desigualdad



entre los seres humanos y jamás la igualdad, como afortunadamente la podemos disfrutar en la actualidad, gracias a los avances logrados en la legislación para que se vinieran a respetar, los derechos de unos y otros.

Como ya lo indicamos, esta situación empieza a cambiar, para las personas a partir del nacimiento del Estado liberal, con el surgimiento del concepto de la representación política, y es con éste acontecimiento que se produce que el parlamento pase a representar al pueblo, o sea que es éste último como su verdadero y único detentador, quién oportunamente le viene a otorgar su legitimación, para que le venga a representar por medio de sus delegados o legisladores.

Con lo anterior tenemos que el Estado liberal que se establece a fines del siglo XVIII, en superación del Estado absoluto, viene a imponer como sustrato político la teoría de la división de poderes, y con el cambio del Estado, se produce un replanteamiento del parlamento, de acuerdo a las nuevas coordenadas políticas, que el Estado Liberal impone, entonces es en este momento tal como señala la doctora María Asunción García Martínez, "cuando se configura la función Legislativa entre las del Estado". Y de conformidad con ello, se consigue institucionalizar, el principio de la separación de poderes, como un garante del control del poder, ya que la finalidad de la teoría de la separación de los poderes del Estado, se encuentra fundamentada en asegurar que el poder se limite, encomendándole a distintos órganos del Estado su ejercicio. De tal modo que el parlamento, va a recibir del pueblo, el Poder Legislativo como una función que le pertenece de forma exclusiva a la nación quién se la va a encomendar para que la ejerza en su nombre. Por lo que junto con la función legislativa, asignada al parlamento; también se delimita una función de control.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> García Martínez, Asunción

"La actividad legislativa del Parlamento, como mecanismo de control político".

En revista de las Cortes Generales, segundo cuatrimestre año, 1988. P. 62-63.

Además, el ejercicio del gobierno, fué transferido al Poder Ejecutivo, con lo cual se advirtió la necesidad de que éste poder; se hallare controlado y con el objetivo de evitar, que se produjeran abusos en la practica del poder, conformaron la función de control parlamentario, encaminada a establecer límites para el manejo del poder.

Función contralora que fue otorgada al parlamento, y a propósito de lo cual fueron creados los mecanismos propios de control político, a saber:

Las Preguntas, comparecencias, comisiones de investigación, interpelaciones, cuestión de confianza, moción de censura y otros. Mecanismos, a través de los cuales, el parlamento vigila y supervisa que el gobierno no llegue a extralimitarse o tiranizarse en el desempeño de sus funciones ejecutivas.

Consideramos que el trabajo del ejercicio del control parlamentario a través de la aplicación de tales mecanismos de control político, por parte de los Parlamentos, o Asambleas Legislativas, sobre los gobiernos, adquiere mayor vigencia y alcanza su auge durante el siglo XX, principalmente después de la segunda mitad de dicho siglo.

Para el autor costarricense Alex Solís Fallas, el control político se ha manifestado como lo siguiente:

“Clásicamente ha constituido una de las funciones típicas, encargadas a los órganos legislativos. Se manifiesta como un mecanismo horizontal, de responsabilización cuyo parámetro de referencia esta conformado por los principios y valores democráticos constitucionales, así como las necesidades de limitar el ejercicio del poder político”.

Añade, que sus canales de expresión han sido históricamente, las preguntas, las interpelaciones y los votos de censura; sus efectos, la caída o la dimisión de ministros y gabinetes. De conformidad con esta limitada concepción, la función

de control se expresa en la exigencia de responsabilidad gubernamental y por tanto en su capacidad para "derribar gobiernos".<sup>2</sup>

En cambio, para la doctrina española, el control parlamentario es entendido de la siguiente manera:

como aquella actividad parlamentaria encaminada a través de una multiplicidad de mecanismos, destinados a la comprobación de la actividad del poder ejecutivo y a la adecuación de los parámetros establecidos por el parlamento, susceptibles de producir consecuencias diversas entre ellas; la exigencia de la responsabilidad política al gobierno.

Esto quiere decir, que el control político debemos observarlo, como aquella actividad que realiza el parlamento sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo, con la finalidad de verificar que el ejecutivo no realice abusos a través del poder que se le deposita.

Al respecto se pueden destacar dos características del control parlamentario:

1.- El control parlamentario ejercido por parte de la mayoría del parlamento hacia el gobierno que tiende en ocasiones a llegar a su destitución; dependiendo esto de las conductas de este último y de que el parlamento apruebe como medio de desaprobación a su función una moción de censura en su contra.

2.- El control parlamentario, que es ejercido en el parlamento por las minorías y mantiene como propósito fundamental conseguir desgastar la imagen del gobierno ante la opinión pública.

---

<sup>2</sup> Solís Fallas, Alex.

"Reyes sin Corona, Rendición de Cuentas y Evaluación de Resultados".  
Editorial del Este, San José, Costa Rica, año 2002, p. 138.

Por otra parte, como se precisó al inicio, el objetivo medular de la investigación, que desplegamos, se concentra en la república de Costa Rica, porque observamos que los instrumentos de control político fueron incorporados a su Constitución Política, hasta el siete de noviembre del año mil novecientos cuarenta y nueve y aunque esto debe ser calificado como un avance muy valioso y positivo en el desarrollo de la democracia de la nación costarricense; no podemos dejar de afirmar, que ciertamente este importantísimo suceso tarda bastante tiempo en sucederse, en razón a que el país había alcanzado su independencia en el primer cuarto del siglo XIX y a criterio del investigador, la República de Costa Rica se llega a consolidar, constitucionalmente hasta después de la segunda mitad del siglo XX, con la emisión de su Constitución Política de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve.

Norma jurídica que trae sucesos de notoria relevancia para la democracia de la nación costarricense, dentro de los cuales necesariamente se debe destacar la incorporación, del control político como una de las funciones exclusivas de la Asamblea Legislativa.

Se determina que los instrumentos de control político, dispuestos en la Constitución Política de la República de Costa Rica, no son totalmente eficaces ni eficientes ya que observamos que estos no han sido operacionalizados adecuadamente para que en el momento que sean requeridos por la Asamblea Legislativa para cumplir con su obligación de control político, le concedan las facilidades que en ellos se concentran.

Lo anterior lo afirmamos, con fundamento en varias razones, entre las cuales podemos resaltar o destacar las siguientes:

Se observa que entre los instrumentos de control político se encuentra incluida la moción de censura, mecanismo de control parlamentario, que no se corresponde con el régimen de gobierno de la República de Costa Rica, y posiblemente con esta medida se dejan de introducir, en su Carta Magna,

instrumentos de control político que sí podrían acrecentar el ejercicio de la función contralora, a desempeñar por la Asamblea Legislativa de la República costarricense, sobre su gobierno y demás Organismos públicos.

Con relación a la labor de control político que desarrolla la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, el doctor, Rodolfo Saborío Valverde manifiesta en su libro Rendición de Cuentas en Costa Rica, diagnóstico y Propuesta de Sistematización; lo siguiente:

“Debilidad del control parlamentario. Como señalamos, los efectos de las competencias del control político parlamentario son muy limitados. No existe la censura vinculante y las conclusiones de las comisiones de investigación han sido vaciadas de fuerza política, a esto debemos agregar la falta de sistematización del trabajo del control político, que ha sido visto como una tarea extraordinaria o especial, siendo que forma parte de las actividades esenciales del parlamento. El control parlamentario debe pasar a ser una tarea constante, ejercido por las comisiones permanentes, reorganizadas de acuerdo con una estructura que refleje la realidad del sector público costarricense”.<sup>3</sup>

Además el análisis de la Constitución Política de la República de Costa Rica y del reglamento de la Asamblea Legislativa, nos llevan a diagnosticar, que los instrumentos dispuestos por la Carta Magna, para desempeñar el control político, no han sido desarrollados a conciencia y profundidad para que cuando por el congreso sean utilizados, puedan garantizarle toda la eficacia y eficiencia que poseen.

Esta deficiencia resalta en la República de Costa Rica, si se toma en consideración que entre los mecanismos de control político establecidos por su Constitución Política, hallamos comprendido el instrumento de la interpelación,

---

<sup>3</sup> Saborío Valverde, Rodolfo.

"Rendición de Cuentas en Costa Rica, Diagnostico y propuesta de Sistematización".

Primera Edición. Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, año 2004 p. 98.

que es un mecanismo de control político, sumamente importante y necesario para que los parlamentos en los regímenes democráticos, puedan llevar a cabo su función contralora, cuando son utilizados de forma apropiada.

Situación que es evidente y patente no sucede en la República de Costa Rica; dado que su aplicación esta suscrita de forma exclusiva para los ministros de gobierno, lo que indiscutiblemente viene a obstaculizar y limitar la utilización y ventajas que se pueden obtener del mismo, en razón que no permite que éste instrumento de control político pueda aportar toda la utilidad que en él se concentra, por estar de esta manera determinado constitucionalmente.

Lo anteriormente descrito imposibilita que por parte de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, se pueda recurrir al mecanismo de la interpelación, para proceder a interpelar a otros jefes de la administración pública, como pueden ser gerentes o presidentes de las instituciones autónomas o semi-autónomas y aún cuando el objetivo primordial del control político esta fundamentado en supervisar la labor del Poder Ejecutivo tal mecanismo de control político no puede ser empleado en su contra, con lo que lógicamente se pierde una excelente forma de cumplir con la tarea del control parlamentario.

De conformidad a lo que se establece en la Constitución Política costarricense, tampoco es viable que el Poder Legislativo de la República, pueda recurrir al instrumento de control de la interpelación, con el propósito de interpelar al presidente de la República, o a cualquier autoridad de la Corte Suprema de Justicia, para complicar esta situación están exceptuados de la interpelación los asuntos en tramitación de carácter diplomático o aquellos que se refieran a operaciones militares pendientes.

Esto incluso nos lleva a una gran interrogante dado a que el país no mantiene fuerzas militares, porque con la promulgación de la Constitución Política de

siete de noviembre de 1949, fué abolido de forma permanente el ejército en la República de Costa Rica.

Como se precisó anteriormente, advertimos incorporado en la carta magna costarricense, el instrumento de control político, denominado moción de censura, mecanismo de control político, característico de los regímenes de gobiernos parlamentarios y jamás de los regímenes de gobiernos presidencialistas como es el costarricense. En razón que su objetivo es muy claro y preciso, provocar la caída de aquél jerarca, o gobierno, que sean censurados, esto lo podemos ejemplificar con el siguiente caso:

Sí en un régimen parlamentario como es el español, su parlamento consigue aprobar una moción de censura, en contra de un ministro o jerarca superior, forzosamente ese funcionario se encuentra obligado a dimitir inmediatamente, y no existe ningún medio posible que le autorice a permanecer en su cargo.

En cambio si la moción de censura alcanza al gobierno en su totalidad, esto les exige la dimisión y como resultado de la censura recibida, deben ser nombradas nuevas autoridades, para que gobiernen la nación.

Como puede apreciarse, en los sistemas políticos parlamentarios, la moción de censura cumple un papel sumamente relevante y determinante por lo explicado, estimamos que sus ministros y el gobierno en su totalidad deben cuidar mucho sus actuaciones para que las mismas se encuentren totalmente ajustadas al ordenamiento jurídico parlamentario establecido; Porque como se explicó de llegar a recibir una moción de censura, de parte del parlamento, vendrían a perder sus puestos irreversiblemente y de forma inmediata.

A contrario sensu, cuando en la República de Costa Rica, la Asamblea Legislativa, consigue aprobar una moción de censura en contra de uno de los ministros del gobierno; los resultados son totalmente irrelevantes, y podríamos decir, simbólicos porque su aprobación no es vinculante ni sobrelleva ninguna

clase de sanción coactiva. Esto quiere decir, que si el ministro no acepta la censura ni conciente en dimitir al ministerio que desempeña, simplemente no lo realiza y la Asamblea Legislativa no tiene ninguna manera real de obligarle a abandonar el cargo ministerial que ocupa en ese momento.

En razón a que en la República de Costa Rica, la única persona, que constitucionalmente está autorizada a solicitarle a un ministro que renuncie a su cargo, o en su defecto, proceder a destituirle es el presidente de la República y si el ministro censurado, mantiene la confianza del presidente de la República, como ya ha sucedido en el pasado, los esfuerzos en discutir y debatir la moción de censura fueron totalmente superfluos; y en lugar de traer beneficios para la República, más bien como resultado de esta moción de censura lo único que obtenemos son altos costos económicos para el país, y consecuentemente deterioro de las relaciones entre las fuerzas políticas representadas en el congreso.

Asimismo, el instrumento de control político, que con mayor frecuencia es empleado por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, son las comisiones de investigación, pero ineludiblemente éstas también requieren ser operacionalizadas de la mejor manera para poder obtener de su empleo una adecuada eficacia y eficiencia.

Al respecto, nos referiremos a los desenlaces de estas comisiones, fundamentados en pronunciamientos que al efecto ha brindado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la nación; decidiendo recursos de amparo, interpuestos por los investigados. Con la finalidad de poder evaluar, cuales son las restricciones o beneficios que para la Asamblea Legislativa tienen los fallos emitidos por este alto tribunal.

Adicional a los instrumentos antes detallados, encontramos otras formas de control político, existentes dentro de la Constitución, así por ejemplo advertimos la posibilidad que concede a los señores legisladores el artículo 110



constitucional, para que dentro de las sesiones de la Asamblea Legislativa, los señores diputados puedan realizar cualquier clase de denuncia, sin poder por éste motivo ser imputados de delito.

Por todo lo enunciado hasta el momento en el desarrollo de esta investigación, se estudian dos grandes áreas de interés, en el campo del Derecho público, fundamentadas en la utilización de los instrumentos de control político y la eficacia y eficiencia del ejercicio del control político, practicada por los diputados de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Este aspecto es interesante y por medio de la exploración de las áreas de interés anteriormente mencionadas, se pretenden dilucidar las siguientes interrogantes proporcionadas por el problema de saber:

¿Cuál es la eficacia del control político, que lleva a cabo la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica por medio de la utilización de los instrumentos de control político?

De esta forma es que queda planteado el problema de la presente investigación.

Adicionalmente, se califica importante informar que el Estado costarricense durante toda su historia constitucional, se ha caracterizado por conservar una única forma de gobernarse, sustentada por un régimen de gobierno presidencialista. Ciertamente en ocasiones visualizándose de modo confuso como se podrá evidenciar durante el desarrollo de la presente investigación.

Por lo enunciado hasta ahora, es que el investigador en esta oportunidad se propone conceptualizar en forma diferente el concepto de control político, que siempre se ha solido usar por la doctrina y en la República de Costa Rica, por los diputados, prensa, abogados y tratadistas del Derecho como si éste fuera sinónimo de control parlamentario. Cuando en la realidad a juicio del investigador, ambos términos relacionados con el control político, deben ser

considerados como totalmente diferentes; dependiendo esto del régimen de gobierno al que nos estemos refiriendo, por este motivo en esta investigación se va a tratar de proceder a distinguir entre ambos conceptos.

Para calificar al Estado costarricense con el término correcto de conformidad con su régimen de gobierno, que al ser presidencialista le viene a corresponder, el de control político, en lugar de control parlamentario, el cual es propio de los regímenes de gobiernos parlamentarios como ya se ha evidenciado anteriormente.

Por otra parte, es importante llamar la atención como habíamos precisado que el control político se fundamenta en los principios de la teoría sobre la separación de los poderes del Estado, dado que esta teoría tiene como finalidad asegurar que el poder se limite en si mismo; por tal motivo, es que otorga su ejercicio a diferentes poderes, a saber Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

Con fundamento en lo señalado en el primer apartado de ésta investigación, se examinan brevemente los postulados de la teoría a la cual se hace alusión, reflexionando en que ésta, ha llegado a convertirse en una garantía para el control del poder, en consecuencia de lo cual se trata de sus propósitos.

Posteriormente a esto exponemos diferentes y diversas valoraciones, que le han sido formuladas a la doctrina de la separación de los poderes del Estado, expuestas por connotados y reconocidos entendidos del Derecho Constitucional en general.

En la segunda sección de este estudio, se presenta; un análisis en el cual expresamos en que consiste el control del gobierno, con la finalidad de ofrecer y proporcionar una idea precisa y clara en la que explicamos como debe entenderse ha de ser la función de control político, que corresponde efectuar a los parlamentos en los regímenes políticos que cuentan con Estados

democráticos. Con este propósito, procedemos a examinar los diferentes mecanismos de control político, a saber, instrumentos tales como:

La moción de censura, cuestión de confianza, preguntas parlamentarias, interpelaciones, comisiones de investigación y comparecencias.

Además, con el objetivo de diferenciar entre los conceptos de control político y el concepto de control parlamentario, analizamos lo que en España, es entendido como lo que debe interpretarse, es el control en sentido amplio en contra posición a lo que corresponde entender es el control en sentido estricto. Esto quiere decir que cuando estamos tratando el control en sentido amplio, incorporamos las formas estrictas de control y la responsabilidad política, que son la moción de censura y la cuestión de confianza. En cambio cuando se trata del control en sentido estricto no se está incluyendo la responsabilidad política o sea que nos quedan únicamente, preguntas, interpelaciones, comisiones de interpelaciones y peticiones de comparecencias.

Para ofrecer una idea más concreta acerca de los instrumentos de control político, de considerarle necesario trataríamos de agruparles por régimen político, con el fin de recomendar a todos los detentadores del poder, incluir en sus regímenes de gobierno todos aquellos mecanismos de control político que sean eficaces en cada régimen en particular.

A este respecto, primeramente se procederá a definir los conceptos de control político y control judicial; con la finalidad de que los ciudadanos, conozcan y no se equivoquen ni confundan al momento de escuchar sobre las clasificaciones que se da al control y que cuando les corresponda evaluar a determinado poder del Estado, tengan claro, a que clase de control se refieren; y por tanto a cual autoridad estatal compete en cada tiempo su ejercicio; por tanto se explica, en que momento se trata, de la aplicación del control político, que siempre va a corresponder su práctica al Poder Legislativo.

En contraposición al empleo del control jurisdiccional que corresponde su ejercicio en todo tiempo al Poder Judicial.

En la tercera parte del trabajo, se ofrece una pequeña síntesis histórica de las principales características, que dieron nacimiento al Derecho constitucional de la República de Costa Rica.

También se procede a tratar sobre los criterios de autores costarricenses, en los cuales exponen su posición acerca de cuál fué la primera Constitución Política con que se organizó la provincia de Costa Rica, con posterioridad a conseguir su independencia de España, en el mes de octubre, del año 1821.

Cabe indicar que no existe uniformidad de pareceres sobre cuál fué ésta primera norma constitucional, ya que unos sostienen que esta norma constitucional lo fué el "Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno".

Para otros esta Carta Política, lo fue la "Constitución Federal de Centro América de veintidós de noviembre de mil ochocientos veinticuatro".

Finalmente para otras personas, la primera Constitución lo fué la "Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco".

Para continuar con tal interrogante, el autor de esta investigación se permite incorporar a tal debate a la "Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce".

Esto con el propósito de proceder a determinar si es esta norma jurídica española, la que más bien merece recibir el título de haber sido la primera Constitución con que se regula y organiza la provincia de Costa Rica, como fuente inspiradora de su constitucionalismo.

Al finalizar con el análisis de este tema, el autor de esta tesis doctoral procede a brindar su criterio, con relación a cuál de las cuatro normas constitucionales indagadas, considera merece recibir el título de haber sido la primera Constitución Política con que se organizó la provincia de Costa Rica en el año mil ochocientos veintiuno, posterior a su independencia de España el veintinueve de octubre del año, mil ochocientos veintiuno.

A continuación se procede a analizar los parlamentos, con que ha contado la República de Costa Rica, destacando sus características, si han sido parlamentos unicamerales o bicamerales.

Este análisis, es practicado para determinar con absoluta propiedad en que momento de nuestra historia constitucional es que se incorpora al control político, como función obligatoria de su Asamblea Legislativa; y cuál de sus Constituciones Políticas inscribe tan preponderante cambio en el crecimiento político, de la República costarricense.

En la cuarta parte, de esta investigación se evalúa el papel actual que cumple el control político en la práctica Costarricense, prestando especial atención, a los instrumentos o mecanismos de control político que utiliza la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, para ejercer su esencial y fundamental función de control político, sobre el Gobierno costarricense.

Con tales propósitos, se procedió a aplicar una encuesta de opinión a la totalidad de los señores diputados de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, a algunos de sus principales asesores, y a altas autoridades de las siguientes instituciones:

Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Procuraduría general de la República, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes de la República.

Además, de un consultor independiente.

Esto se realiza con el objetivo de contraponer el criterio que los señores diputados, manejan acerca del ejercicio del control político y de los instrumentos que la Constitución Política les provee, para que desarrollen tal función contralora. Con la opinión que poseen las autoridades de las instituciones anteriormente descritas, el criterio del consultor externo y la posición que mantiene el investigador al respecto.

En consecuencia de lo cual y por interés de la propia investigación, se tomó la decisión de aplicar por igual la encuesta de opinión y sin ninguna clase de modificación a los dos grupos considerados para el presente estudio.

Adicionalmente se procede a expresar en cuántas ocasiones, durante la historia del control político de la República de Costa Rica, han sido empleados por parte de la Asamblea Legislativa, en contra de ministros de gobierno, los mecanismos de control político, denominados como moción de censura o interpelación, indicando sus resultados y beneficios, si los han encauzado realmente.

En la quinta parte de esta tesis doctoral, se prosigue con un análisis comparado entre los instrumentos de control político utilizados en los regímenes de gobierno de España, y de la República de Costa Rica.

Para finalmente una vez organizados los resultados obtenidos de la investigación de campo y evaluado el análisis comparado, además del material bibliográfico, proceder a operacionalizar los resultados producidos, para concluir presentando a los señores legisladores de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica; propuestas, tendientes a que se tramiten y efectúen, modificaciones parciales a la Constitución Política costarricense, con el único propósito de llegar a perfeccionar la actividad de control político, desempeñada por esa Asamblea Legislativa, a través de incorporar nuevos instrumentos de control y de operacionalizar de una forma eficaz y eficiente los ya existentes y

de calificarse necesario proceder a recomendar la exclusión, de cualquier mecanismo de control político presente, que se dictamine que es inadecuado y poco provechoso para el régimen de gobierno de la República costarricense.

Agregadamente, se proponen recomendaciones tendientes a que lleguen a tramitarse reformas al reglamento de su Poder Legislativo, con la finalidad de acoplar esta importante norma jurídica a los requerimientos actuales de los diferentes Poderes del Estado costarricense y por lo concerniente al control político, que es un mecanismo vital y fundamental en los gobiernos democráticos, para el fortalecimiento y crecimiento de todas sus instituciones democráticas de forma transparente de cara al pueblo.

Asimismo, planteamos recomendaciones que tienen como propósito; que se llegue a mejorar el grado de coordinación existente, que se mantiene entre la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, y sus dos entes auxiliares como son; la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República.





## ***Objetivos para la presente investigación.***

### **B1. Objetivo general número, uno.**

Evaluar en la actualidad la función del control político, así como los instrumentos de control que utiliza, la Asamblea Legislativa para realizar su función de control político, sobre el gobierno de la República de Costa Rica.

#### **Objetivo específico B1.1.**

Realizar un perfil del conocimiento que del control político, manejan los diputados de la República de Costa Rica.

#### **Objetivo específico B1.2.**

Proponer modificaciones parciales a la Constitución Política de la República de Costa Rica, para que se incluyan nuevos mecanismos de control político y perfeccionen los instrumentos de control político actuales.

#### **Objetivo específico B1.3.**

Justificar que se excluya la moción de censura del sistema político costarricense, por no ser funcional al sistema de gobierno de la República de Costa Rica.

#### **Objetivo específico B1.4.**

Recomendar acciones correctivas para mejorar el grado de coordinación existente entre la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica,

Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes de la República.

## B2 Objetivo general número, dos.

Analizar los instrumentos de control de acuerdo a su eficacia, utilizados en los sistemas políticos parlamentarios en contraposición con los empleados en los sistemas de gobierno presidencialistas.

### Objetivo específico B2.1.

Analizar los instrumentos de control político, establecidos en la Constitución Política de la República de Costa Rica, para acreditarles con propiedad a que régimen político pertenecen.

### Objetivo específico B2.2.

Evaluar la eficacia de los instrumentos de control político empleados por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

## B3. Objetivo general número tres.

Analizar los criterios de los autores costarricenses sobre cuál fue la primera Constitución Política de la República de Costa Rica.

### Objetivo específico B3.1.

Proponer a los diputados de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, reconocer a la Constitución de Cádiz como la primera Constitución, con que se organiza la provincia de Costa Rica, como fuente inspiradora de su constitucionalismo.

## ***Primera parte:***

### ***Teoría de la separación de los poderes del Estado, y Control del gobierno.***

Este primer apartado de la investigación, se encuentra subdividido en dos capítulos a saber:

En el Capítulo I se considera acerca de la Teoría sobre la separación de los poderes del Estado. este capítulo se divide en tres epígrafes:

A) En este epígrafe se reflexiona con relación a lo que tiene que ver con los principios TEÓRICOS de la teoría de la separación de los poderes del Estado. Se proporciona una pequeñísima reseña histórica de esta teoría y de sus precursores.

B) En el epígrafe segundo, se plantea propiamente, la valoración que algunos de los principales tratadistas del Derecho realizan sobre la Teoría de la Separación de los poderes del Estado.

C) En este epígrafe, se exponen los criterios o pensamientos de algunos tratadistas del Derecho de la República de Costa Rica, con relación a la teoría de la separación de los poderes del Estado.

El capítulo II, se haya dividido en cuatro epígrafes, y en él se considera propiamente, sobre la temática relativa con lo concerniente al Control político o

parlamentario, que se debe ejercer por los parlamentos sobre los gobiernos; con relación a lo cual, se profundiza en los siguientes tópicos relacionados con estos elementos:

A) En este epígrafe, nos introducimos en lo que son los diferentes instrumentos de control, que se emplean ya sea en los regímenes parlamentarios o presidencialistas.

B) En este segundo epígrafe, se procede a distinguir entre los conceptos de control judicial o jurisdiccional y el concepto de control político. Asimismo, se señala a qué autoridad estatal, en cada caso, compete el ejercicio de cada uno de estos dos controles.

C) En el tercer epígrafe, se procede a la descripción de los instrumentos de control político, que son utilizados por los regímenes de gobiernos parlamentarios.

D) Para finalmente en este último epígrafe concluir con la descripción de los mecanismos de control político, que son empleados en los regímenes de gobiernos presidencialistas.

## **Capítulo I**

### ***Teoría sobre la separación de los poderes del Estado.***

#### **A) Los principios Teóricos de la separación de los poderes del Estado.**

Considero que es muy importante y conveniente, referirse en esta investigación a la doctrina, de la separación de los poderes del Estado, considerándola como un factor preponderante a tomar en consideración, para el desarrollo de esta tesis doctoral, reflexionando que esta doctrina es la que viene a otorgar su fundamento al control parlamentario o político, que realizan los parlamentos o poderes legislativos en los estados, organizados obviamente con regímenes políticos de corte democrático. En donde se respetan los derechos de sus ciudadanos, a través del verdadero ejercicio de la democracia.

Como es ampliamente sabido fué el Barón de Montesquieu, quién en su obra, "El Espíritu de las leyes" en el capítulo VI, en el libro, undécimo de su L'Esprit des lois. En donde expuso su pensamiento, acerca de ésta Institución, con relación a lo cuál afirmó lo que a continuación se describe:

El principio básico que inspira la vida política práctica de los ciudadanos, se sustenta en la separación de poderes y razonaba indicando, en cada Estado existen tres poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo de las cosas que dependen del Derecho de gentes, que posteriormente modifica y llama Poder Ejecutivo del Estado y Poder Ejecutivo de las cosas que dependen del Derecho

civil. Denominación que cambia rápidamente, llamándole poder de juzgar. El baron de Montesquieu, sostenía con respecto de esto, que la libertad del ciudadano, consiste en aquella tranquilidad de espíritu, originada en la opinión que cada individuo posee de su seguridad, por cuanto precisaba es indispensable, no se concentren varios poderes en un mismo órgano, ya que cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo, en la misma persona o en el mismo cuerpo, no existe libertad. Tampoco subsistiría libertad, si el poder judicial no está separado de los anteriores dos poderes. Proseguía dictaminando acerca de esta situación:

“la libertad política, de un ciudadano, es aquella tranquilidad de espíritu, que proviene de la idea, que cada uno mantiene acerca de su seguridad”.<sup>4</sup>

En consecuencia de lo anterior, para que las personas siempre nos apreciemos que somos libres, es indispensable que los gobiernos que nos dirigen sean de tal naturaleza, que los ciudadanos podamos vivir con confianza y seguridad en el ordenamiento jurídico democrático, en donde habitemos, sin permanecer preocupados por las acciones que lleven a cabo las demás personas. Sino más bien poniendo nuestra confianza en el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente.

Con relación a lo puntualizado, el aristócrata Francés, Montesquieu afirmaba la obligatoriedad de no concentrar varios poderes en un mismo órgano y al respecto dictaba:

“para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, gracias a la disposición de las cosas, el poder venga a frenar al poder”.

Por esta razón es que insistía en la idea relacionada con lo siguiente:

---

<sup>4</sup>Montesquieu.

"Del Espíritu de las Leyes".

Introducción Enrique Tierno Galván. Traducción Mercedes Blázquez y Pedro de Vega.

Editorial Tecnos año 1985, p. 106-107.

“Cuando se reúnen en una misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura la potestad legislativa y la potestad ejecutiva, no existe libertad”. En razón a que queda para los ciudadanos el temor de que el mismo monarca o el mismo senado procedan hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas de la misma manera, tal como fueron elaboradas. Por lo consiguiente, argumentaba su pensamiento de esta forma:

“Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de principales, o de nobles, o de pueblo, ejerciesen estos tres poderes, el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias de los particulares”.<sup>5</sup>

De aquí la necesidad de venir a separar, el ejercicio del poder entre los tres poderes clásicamente conocidos, o sea Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Para con ello lograr que el poder, el cual es uno solo venga en si mismo, a auto-limitarse o a auto-frenarse. Por el ejercicio del mismo entre diferentes titulares o distintos poderes.

También es innegable que se cuenta con antecedentes, de los principios de la teoría en estudio, debido al influjo recibido de John Locke, justificador de la revolución gloriosa de 1688 en Inglaterra, quién distinguió al poder legislativo, al que otorgó primacía sobre el poder ejecutivo, y del poder federativo. En razón a que consideró, que como consecuencia de la primacía de la ley sobre los otros poderes, el poder legislativo no es posible que pueda delegarse.<sup>6</sup>

Se aclara, que no tenemos el propósito de extendernos, ni profundizar sobre los orígenes de esta doctrina, fundamentándolo en que los tratados y manuales del

---

<sup>5</sup>Montesquieu.

Obra citada. op.cit. Editorial Tecnos año 1985, p. 107.

<sup>6</sup> Locke, John.

“Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, un Ensayo acerca del Verdadero Origen, Alcance y fin sobre el Gobierno Civil”.

Traducción, prologo y notas, Carlos Mellizo.

Alianza Editorial, Madrid, primera edición 1990, p. 151 y subsiguientes.

Derecho Constitucional y la historia de las ideas políticas, ya se han ocupado con detenimiento, en numerosos países, del mundo en desarrollar los orígenes relacionados con los principios concernientes a esta teoría.

Por tal motivo es que únicamente como dato histórico, recordaremos que sobre los principios de esta doctrina, encontramos vestigios mucho antes de la aparición del Estado como término y concepto. En lo tocante, es frecuente recordar, a Aristóteles, quién en su *Política*, libro sexto, mencionaba tres poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial.<sup>7</sup>

Además Aristóteles, había adelantado, que:

"Son tres los elementos de todos los regímenes sobre los que debe meditar, el buen legislador, lo ordenado para cada régimen, de esos tres elementos una pregunta es cual es el que delibera sobre los asuntos públicos. La segunda la que concierne a las magistraturas o sea cuales son las que conviene que haya en que asuntos deben tener competencia y como a de ser su elección y la tercera que elemento es el que se encarga de la administración de justicia".<sup>8</sup>

Entonces mediante la distribución señalada, Aristóteles venía a diferenciar entre las funciones o labores deliberantes, las ejecutivas y las judiciales, que asignaba a distintos ejecutores.

En cambio, Emilio Miñana, cita al prologuista, Barthélemy Saint-Hilaire, como uno de los primeros autores en indicar, que fué Aristóteles, quién en su obra "*la política*", exhibe una teoría completa sobre la división de poderes políticos, y diferencia tres modos de ejercer el poder público.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Aristóteles.

"*La Política*".

Traducción y notas García Valdez, Manuela.

Editorial Gredos, año 1988. P. 150.

<sup>8</sup> Aristóteles.

Obra citada op.cit. Editorial Gredos, año 1988, p. 150-151.

<sup>9</sup> Miñana, Emilio.



Mientras, que el gran maestro, Pablo Lucas Verdú, nos menciona que descubrimos antecedentes de este principio, en los escritos de los siguientes autores:

En Aristóteles cuando se refirió, principalmente, a una división de funciones en la polis: (Senado, autoridades, tribunal popular), pero sin llegar a asentar un postulado dogmático e institucional. Asimismo nos hace referencia, al historiador griego Polibio: quién en su Historia, libro VI, capítulo 12, al describir la Constitución romana, puede citarse como antecedente, pero su teoría se adscribe más al modelo de la forma política mixta, como ideal de gobierno".<sup>10</sup>

Debemos destacar, que es uniforme la opinión de los autores mencionados, referente a que fue Aristóteles, el primero en hacer referencia una división de poderes, pero sin llegar a desarrollar sus ideas tal como si lo realizó el Barón de Montesquieu. Con su interpretación de la Constitución Británica; y desde ese momento se inician a implementar sus pensamientos en diversos países del mundo, hasta llegar en la actualidad a convertirse en una de las teorías con mayor éxito alcanzado, con su develamiento a cerca de la separación de los poderes del Estado en; Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Con relación a lo planteado, el profesor, Luis López Guerra precisa que la aportación de Montesquieu, al constitucionalismo moderno se dio en dos tipos de consideraciones:

---

"La División de los Poderes del Estado". Madrid: año, 1917, p. 28 y subsiguientes.

<sup>10</sup> Lucas Verdú, Pablo.

"Curso de Derecho Político, volumen II, la Crisis de la Teoría del Estado en la actualidad, Federalismo y Estado Federal. La Teoría de la Constitución en el Marco del Derecho Político". Editorial Tecnos año 1986, p. 134-135.

1.- "Montesquieu no se limita a describir una realidad, sino que establece un principio o criterio de conducta, la garantía de la libertad exige la existencia de varios poderes dentro del Estado".

2.- "En segundo lugar cada uno de esos poderes deberá llevar a cabo independientemente de los demás una de las funciones básicas del Estado. El principio de separación de poderes significaba así y ha sido interpretado en la práctica, que cada una de las tres funciones del Estado que Montesquieu define como la legislativa, ejecutiva y judicial debía ser desempeñada por un poder diferente". <sup>11</sup>

Como nos afirma el profesor López Guerra, esta doctrina presupone, un aspecto sumamente importante, como es conseguir la protección y tutela de la libertad de los pueblos, por medio de una separación más equitativa del poder el cual vuelvo a reiterar es uno solo, pero que necesita estar en diferentes manos, para poder llegar a alcanzar su ideal. El cual presupone que no se den abusos excesivos por parte de todos aquellos a los cuales venga a competir su ejercicio. Por lo cual es necesario precisar que, el respeto a la libertad necesariamente implica, el respeto al ordenamiento jurídico, en igualdad de condiciones para todos sus ciudadanos.

Con esto tenemos que posteriormente al acontecimiento de la revolución Francesa, es cuando descubrimos en una Constitución, en primera oportunidad el término que trata sobre la separación de los poderes del Estado, y lo encontramos precisamente incorporado en la primera Constitución Francesa la cual fue elaborada y promulgada en Francia en el año mil setecientos noventa y uno.

---

<sup>11</sup> López Guerra, Luis.

"Introducción al Derecho Constitucional".

Tirant lo blanch libros edita Tirant lo blanch Valencia, año 1994, p. 71

Ante tal acontecimiento la doctrina de la separación de los poderes del Estado, comienza a adquirir mayor autoridad en Europa, y con este argumento inicia a ser implementado dicho modelo de separación en algunas de las naciones europeas.

Tenemos que En el continente Iberoamericano, el primer Estado que acepta e incorpora este modelo político, fundamentado en la doctrina de los principios de la separación de los poderes del Estado, es en los Estados Unidos de América y lo instituyeron en su primer Constitución Política que promulgaron en el año mil setecientos ochenta y siete, Carta Magna que cuenta con más de doscientos años de promulgación y vigencia continua, norma política la cual manda aún hoy a los ciudadanos de los Estados Unidos de América.

Por lo que establecidos en dicho antecedente, en el continente Iberoamericano, prácticamente, en la totalidad de sus países, se ha venido implementando y aplicando el modelo desarrollado a través de los principios sustentados en la doctrina de la separación de los poderes del Estado.



## **B) Valoración acerca de la Teoría de la Separación de los poderes del Estado.**

El propósito principal, de la Teoría de la separación de los poderes del Estado, reside en asegurar la libertad de los seres humanos, prescribiéndose como un medio a través del cual se suministra una limitación al ejercicio del poder, por lo que necesariamente debemos entenderle como una teoría cautelar, en razón a que se ocupa de que éste no venga a quedar en manos de una sola autoridad, sino que se llegue a ejercer por varios órganos, como son el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y mediante esta forma de organización política, el poder por su propia fuerza operativa, permita que el poder venga a frenar al poder, y de esta manera, es como viene a cumplir un papel fundamental, el control político o parlamentario que desempeñan los parlamentos sobre los gobiernos, porque por medio de la utilización de los instrumentos de control político; los Poderes Legislativos o parlamentos se convierten en un contra freno para los poderes Ejecutivos.

Asimismo, también el Poder Ejecutivo, como lo observaremos en el desarrollo de esta investigación, cuenta con mecanismos de control que sirven como contrafrenos, para que los parlamentos, no abusen en el manejo del poder que les ha sido designado por parte de los pueblos, que son los legítimos y únicos detentadores del poder que ellos desempeñan.

Considerando, el tratamiento de las diferentes valoraciones que sobre la teoría de la separación de los poderes del Estado, mantenida por el baron de Montesquieu, y antes por sus predecesores y acoplándose a diferentes análisis, y aportaciones que han realizado los distintos tratadistas del Derecho, y en particular los especialistas en Derecho constitucional. El autor de la presente tesis doctoral, se propone manifestar algunas de sus propias consideraciones relacionadas con la teoría de la separación de los poderes del Estado.

Deseo previamente subrayar, la lógica de la posición de Montesquieu.

Ciertamente su teoría es mecanicista. Pero no podemos olvidar que en la sociedad todo obedece a un orden y lo primero que se requería es esto, evitar todo abuso en el empleo del poder, por parte de sus titulares, o titular cuando era uno solo el que mantendría todo el poder bajo su dominio, sin dejar posibilidad de actuación a los demás ciudadanos.

La separación de los poderes en tres, como es bien conocida, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, viene a sostener que el poder, es uno solo y pertenece a un único sujeto, o sea el pueblo, sea entregado por el mismo, a distintos titulares, que deben ejercerle en su nombre, y por consiguiente, es indiscutible que esté en manos de distintos poderes, dentro de los cuales es menester y oportuno debe producirse una distribución de las distintas funciones correspondientes, basado esto en la especialización que caracteriza al mundo moderno actual.

Además, al ser el poder uno solo y estar encomendado su ejercicio a distintos titulares, se hace absolutamente necesario, y conveniente que se desarrolle y verifique la coordinación entre estos diferentes poderes, para que unos y otros puedan conocer las funciones que cumplen entre ellos; de ahí la importancia que mantiene el control político, o parlamentario, a través del uso de los distintos instrumentos de control político. Esta es la forma que entre ellos tienen para evitar que se manifieste el abuso en el desempeño del poder para que el pueblo conozca, cómo los distintos poderes utilizan el poder que les ha sido entregado mediante el desarrollo de las funciones que les compete cumplir en cada caso en particular. Y a través de ese conocimiento pueda enderezar el rumbo del Estado a sus principios democráticos.

Debemos aclarar, que Montesquieu, en su interpretación de la Constitución Inglesa, afirma que, los ingleses practican la libertad, y por tal motivo pensaba, que ésto se produce en razón de que existe una separación de poderes y por ello, consideraba, que ese modelo de Institución, debía ser trasladado a todos

los países que poseyeren una tradición democrática y respetuosa por la libertad. Por lo que a la luz de lo comentado, se puede afirmar, naturalmente, que la interpretación realizada por Montesquieu, se aplicó más tarde a parte del Continente Europeo y, por supuesto antes a los Estados Unidos de América. No obstante a todo esto , insisto que, Montesquieu interpretó, la separación de poderes, de una manera estricta y mecanicista.

Evidentemente el transcurso del tiempo y la evolución de nuestra sociedad han llevado a imponer mejoras y cambios a la doctrina propuesta, y esta las ha aceptado, lo que quiere decir que su mecanicismo, cede ante mejoras. Entre estos tenemos, la implementación del control político, que viene a cumplir con el fin mismo de la doctrina de la separación de poderes, concerniente a evitar que se manifiesten abusos en el empleo del poder, de modo que el poder frene al poder, lo cual se consigue de una forma eficaz y eficiente con un buen desempeño de las funciones de control político, que no son solo tarea del parlamento, sino además, en menor grado, del Poder Ejecutivo, y necesariamente también del único y verdadero titular, o sea me refiero al pueblo, quién a su vez debe estar vigilante para evitar que se den los sabidos y conocidos excesos en su ejercicio, por parte de los distintos titulares del poder.

En consecuencia, considero que la doctrina de la separación de los poderes del Estado, salvando sus interpretaciones tradicionales, apuntadas anteriormente fue un develamiento, sumamente extraordinario para el desarrollo del Derecho Constitucional y, por ende, para el progreso del control político. Pues de no existir diferentes poderes en manos de distintos titulares, el control político, o parlamentario, carecería de total sentido, Ya que el titular del poder, podría emplearle a su mejor juicio, sin tener que recurrir a ofrecer o brindar justificaciones de lo que realiza a ninguna persona, y entonces sucedería como lo advirtió en su momento, el baron de Montesquieu:

“Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de principales, o de nobles, o de pueblo, ejerciesen estos tres poderes, el de hacer las leyes, el

de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias de los particulares".<sup>12</sup>

Refiriéndose a la doctrina de la separación de los poderes del Estado, Telesforo Ojea y Somoza, nos manifiesta, en su libro titulado parlamentarismo, que una de las causas, en la cual se fundamenta la organización de poderes, la encontramos construida a través de la división del trabajo, como un medio de defender los intereses colectivos. Con relación a lo cuál destacaba, lo siguiente:

"la complejidad de las funciones encomendadas al Estado, hacen imposible que una sola persona se encargue de la alta gestión de todos los negocios públicos".

Además agregaba que la división del trabajo se presenta en todos los ordenes de la actividad humana, por tal razón consideraba es necesario llevarlas a las funciones del Estado y entendía que "el poder es uno y reside exclusivamente en el pueblo".

Por lo que es el pueblo, quién lo delega en personas, para que en su representación lo desempeñen, a estas funciones clasificadas en grupos es lo que se llama poderes Legislativo, Ejecutivo. y Judicial. Expresaba que abona a la división de poderes, la necesidad de dividir en el poder, para evitar la tiranía. Por que sí, en una persona se concentra todo el poder, se creería el verdadero soberano y exclamaría como Luis XIV "El Estado soy yo".<sup>13</sup>

Recuerda, que el eminente Montesquieu, razonando en la necesidad, de separar el poder mencionaba lo siguiente:

---

<sup>12</sup> Montesquieu.

Obra citada op.cit. Editorial Tecnos año 1985, p. 106-107.

<sup>13</sup> Ojea y Somoza, Telesforo.

Parlamentarismo, Madrid: año 1884, p. 11-16.



“si el mismo individuo que pueda hacer la Ley como legislador, la aplica como Juez y tiene el encargo de ejecutarla todo estará perdido” <sup>14</sup>

Considero como una reflexión muy oportuna y apropiada la expresada por el señor, Telesforo Ojea y Somoza, ya que ciertamente si no existiera una separación de poderes y una especialización en las funciones que se desempeñan en todos los ámbitos, estatales y privados, la sociedad estaría en un caos, dado que no existiría un orden, el cual es necesario para la vida en comunidad. De ahí la importancia de la doctrina de la separación de poderes, ya que permite que los poderes estatales se separen y a su vez también coordinen funciones entre sí. Porque entiendo separación no implica, obligatoriamente la ausencia de coordinación y colaboración. Ya que de observarlo de esta forma prácticamente se estaría diciendo, que el poder no es uno solo. Lo cual no es lógico ni posible.

El tratadista Maurice Hauriou, nos explicaba, refiriéndose a la doctrina de la separación de los poderes del Estado, que los poderes públicos separados:

“constituyen, por el hecho de su colaboración en las mismas funciones del Estado, un sistema de poderes, ligados entre sí y equilibrándose mutuamente”. Más clarificaba, el equilibrio, entre los poderes no debe suponer, que sean iguales en sus facultades. Al contrario, no deparaba, en señalar que existe siempre, un poder que domina a los otros, aunque la acción sea la de limitarse. Ejemplificaba esto, con lo vivido durante la historia del régimen parlamentario inglés, apuntando que, en un principio, la prerrogativa del poder ejecutivo, fué mucho más poderosa, que la del Parlamento. Luego subrayaba, que después fue el Parlamento el que llegó casi a eclipsar la prerrogativa del rey, y posteriormente de la guerra de 1914, el Parlamento se esfuma ante un Primer ministro omnipotente. <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ojea y Somoza, Telesforo.

Obra citada, op.cit. año 1884, p. 16 y siguientes.

<sup>15</sup> Hauriou, Maurice.

Principios de Derecho Público y Constitucional.

Por lo consiguiente para Maurice Hauriou, el predominio del poder ejecutivo sobre el poder legislativo es conforme al orden. Pero esta jerarquía de poderes, supone la separación de ellos, y esto hace posible, que exista el equilibrio de los poderes separados entre sí, agrega que en todos los poderes públicos, se contiene la misma soberanía del Estado, pero manifestándose ésta, mediante diferentes operaciones de voluntad; hay, por lo tanto, una separación de poderes, y si existe también una jerarquía, se combina con la separación.<sup>16</sup>

Además Maurice Hauriou, explicaba que, Montesquieu, había precisado que una de las garantías que procura la libertad política, esta proporcionada por la separación de poderes: la que proviene de la moderación del poder, ocasionada por la misma separación.

Adicionalmente, el tratadista Hauriou juzgaba, que se daba otra garantía, que no había sido expresada formalmente, por el Barón de Montesquieu pero que estaba implícita en su sistema, sostiene que esta resulta de la continuidad del gobierno, de la ausencia de interrupciones y de sobresaltos en la marcha de los asuntos, y creando seguridad y orden, con esto se viene a producir libertad. Suponía que esta idea fundamental, es la única que permite definir los poderes públicos, con independencia de la función principal que realizan, y por consiguiente, no subordinándolos a sus funciones, ejemplificaba:

si se define el poder legislativo como el poder de hacer la ley, se lo define por su función, se lo subordina a ésta, y bien pronto desaparecerá entonces el poder legislativo tras la función legislativa; pero si se define, este poder, como el poder de deliberación, se lo define por su modo de operación, se le reconoce un poder deliberante que, no está absorbido por la función de hacer la ley, y

---

Editorial Comares, S.L. año 2003, p. 418.

<sup>16</sup> Hauriou, Maurice.

Obra citada, op.cit. Editorial Comares, S.L, año 2003, p. 418.

entonces permanece el poder por encima de la función, lo cual es conforme al orden.<sup>17</sup>

El tratadista don Adolfo Posada, tratando sobre los principios de la separación de poderes, comenta, que a partir de la teoría postulada por Montesquieu, la separación de los poderes en los Estados, se desarrollo, bajo el influjo de la práctica constitucional, y de la elaboración de las teorías del Estado. Por esta razón, indica Posada, que una vez analizadas, las diferentes teorías que han sido formuladas cabe proceder a distinguir en primer término:

“Las que responden más directamente al sentido mecánico de Montesquieu, y que se producen generalmente con ocasión del estudio del Derecho constitucional, a veces como una teoría del mismo; y de otro, las que se formulan a partir del concepto de la actividad funcional del Estado, y considerando el proceso, de su diferenciación orgánica e institucional”.

En tal caso, las primeras, son definidas por su carácter mecánico, por lo cual se dice:

“La distinción y división de Poderes prodúcese generalmente atendiendo a más exigencias formales y de estructura, que a criterios de verdadera diferenciación funcional”. Por lo cual dicese; la consideración de Poder otorgase a la institución sustantiva, especialmente si emana, más o menos directamente de la soberanía, o participa en su ejercicio y puede ser factor eficaz, para mantener un equilibrio político. Con frecuencia se ha girado y se gira alrededor de los tres poderes conceptuados, ya sea como una aplicación analógica de las facultades humanas —la razón, el legislativo; el juicio, el judicial; la voluntad, el ejecutivo—, ya como el desarrollo de un razonamiento práctico».

Toda ciudad-Estado, decía Kant, encierra en sí tres poderes, a saber:

---

<sup>17</sup> Hauriou, Maurice.

Obra citada, op.cit, Editorial Comares, S.L, año 2003, p. 419-420.

la voluntad universalmente, conjunta en una triple persona (trias política); el poder soberano (soberanía), en la persona del legislador; el poder ejecutivo (según la ley), en la persona del gobierno, y el poder judicial (como reconocimiento de lo Mío, de cada cual, según la ley), en la persona del juez (potestas legislativa, rectoría et judiciaria). Lo cual corresponde a las tres proposiciones de un razonamiento práctico: a la mayor —o principios—, que contiene la ley de una voluntad; a la menor que contiene el precepto de conducta, en consecuencia de la ley.<sup>18</sup>

En cambio el gran tratadista clásico, del siglo XX, Hans Kelsen, expuso acerca de la teoría de la separación de poderes, que la misma, fué empleada como una doctrina para separar la legislación, la jurisdicción y la administración. Por esto sostenía, que ésta nació originariamente, como un postulado político, para conseguir una estructura más conveniente de la organización estatal, posteriormente se le ve convertirse en una verdad teórica de la ciencia del Estado. Sostenía, que esta doctrina, surgida en la Europa del siglo XIX, se caracteriza por el dualismo entre su tendencia teórica y su tendencia política, y manifiesta, cuando se enseña, que si bien el poder del Estado es unitario e indivisible, se compone, sin embargo, de tres poderes coordinados, no se hace sin la idea oculta de allanar el camino por medio de la teoría, a una distribución técnica de los tres poderes o funciones entre tres órganos o grupos de órganos aislados unos de otros y jurídicamente independientes.<sup>19</sup>

Adicionalmente Para Hans Kelsen, atender el poder estatal, como sustancia divisible cuantitativamente, es una idea completamente errónea. Debido a que apenas cabe esperar, que la separación de la legislación y la ejecución (en sentido amplio), garantice en firme la "libertad» de los súbditos".

---

<sup>18</sup> Posada, Adolfo.

"Tratado de Derecho Político".

Editorial Comares S.L, año 2003, p. 347-348.

<sup>19</sup> Kelsen, Hans.

"Teoría General del Estado".

Editorial Comares S.L año 2002,p. 425-426.

También, Kelsen sostiene, que si consideramos, a los órganos de la legislación como completamente distintos y separados de los ejecutivos, siempre queda intacta, la posibilidad de penetrar a su arbitrio en la esfera de la libertad individual, por medio de las normas generales creadas, y razona, si la ejecución responde al principio de legalidad, no hay salvación para la libertad individual. La legalidad de la ejecución no sólo debe ser asegurada por la separación de poderes, sino que incluso es una consecuencia de ésta.<sup>20</sup>

Además Kelsen considera, que ésta no se consigue aislando los poderes, sino dividiendo, repartiendo el poder legislativo entre distintos órganos. Por eso no se puede, identificar el principio de la mayor división posible del poder, con el principio específico de la separación de los tres poderes del Estado y destaca también, que el parlamento y el Jefe del Estado, en las repúblicas organizadas sobre el principio de separación participa de algún modo en el proceso legislativo, asimismo dice, el principio de separación de poderes no se realiza tampoco en el sentido de una partición de la legislación y la ejecución entre distintos órganos. Tanto las limitaciones como la consecuente aplicación del principio, redundan invariablemente en provecho exclusivo del monarca.<sup>21</sup>

Mientras que en la obra de Carl Schmitt "Teoría de la Constitución" éste autor comenta sobre la doctrina de la separación de poderes, de esta forma:

"las experiencias hechas por el pueblo inglés en la primera revolución inglesa, con el señorío de su Parlamento, condujeron hacia intentos teóricos y prácticos de distinguir y separar los distintos campos de la actuación del poder del Estado".<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kelsen, Hans.

Obra citada op.cit. Editorial Comares S.L, año 2002, p. 427.

<sup>21</sup>Kelsen, Hans.

Obra citada op.cit. Editorial Comares S.L, año 2002, p. 428-430.

<sup>22</sup> chmitt, Carl.

"La Teoría de la Constitución".

Además se resalta que la "distinción más importante y fundamental que resultó de ahí fue la distinción de la Ley como una norma permanente, obligatoria para todos, incluso para el propio legislador, y, por lo tanto, general, que no puede quebrantarse para un caso particular, respecto de las restantes ramas de la actividad de voluntad estatal". También se recuerda que en Locke se encuentra la repetida justificación de la distinción entre Legislativo y Ejecutivo; en donde se indica; "no es bueno que los mismos hombres que hacen las leyes las apliquen; porque la ley pierde su carácter de ley tan pronto como el Legislador pueda utilizar la forma de la ley para medidas y mandatos particulares a su arbitrio". Además se aclara que esta arranca de un sistema de incompatibilidades. Por lo que con la diferenciación de varios poderes se anuda el ulterior pensamiento orgánico de introducir más amplias divisiones en el seno de los campos así diferenciados de la actividad del Estado para alcanzar un alto grado de controles y frenos. Por tanto se detalla; "la diferenciación no sirve sólo a la separación, porque entonces surgiría una pluralidad de actividades estatales, aisladas, sin conexión ninguna, sino que tiene el fin de producir un equilibrio". <sup>23</sup>

En cambio los profesores, doctores, Pablo Lucas Verdú, y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, consideran en su obra Manual de Derecho Político, acerca del principio de la separación de poderes, lo siguiente:

"Este principio básico característico del Estado constitucional, no se ha entendido nunca de manera textual". Porque consideran que:

"los distintos poderes no son compartimientos estanco, sino que existen numerosas relaciones entre ellos, más intensas en los sistemas parlamentarios y menos intensas en los sistemas presidencialistas".

---

Editorial, Alianza S.A. Año 1982,p. 186.

<sup>23</sup>Schmitt, Carl.

Obra citada, op.cit. Editorial, Alianza S.A. Año 1982,p. 186 y siguientes.

Por lo que añaden "Estamos ante un principio tendencial, que pretende en último extremo garantizar la libertad de los ciudadanos, impidiendo la concentración en unas solas manos del poder de decisión política y posibilitando el funcionamiento del principio mayoritario, junto con el del respeto de las minorías en el proceso de decisión política, así estas pueden controlar a la mayoría y al poder y preparar la alternancia".<sup>24</sup>

Adicionalmente, Los profesores, Lucas Verdú, y Lucas Murillo de la Cueva, nos exponen acerca de los principios de la doctrina de la separación de poderes, la siguiente posición nos manifiestan ambos especialistas:

"Desde el momento que el Poder Ejecutivo pasa a manos de gobiernos, emanados de la mayoría parlamentaria de modo que se da una homogeneidad entre los titulares de ambos poderes". Entonces opinan, "la separación pierde su sentido inicial".

Y por tal objeto el principio cobra un significado nuevo, ahora no se trata de asignar en modo rígido cada una de las funciones del Estado, a un conjunto de órganos independientes entre sí. Más bien mencionan que debe; "hacer esa asignación de manera tendencial estableciendo entre unos y otros órganos una serie de controles en interacciones recíprocas que vallan en beneficio de la libertad de los ciudadanos, en un doble sentido:

A) impidiendo la concentración en unas solas manos del poder de división política.

---

<sup>24</sup> Lucas Verdú, Pablo, y Lucas Murillo de la Cueva, Pablo.

"Manual de Derecho Político".

volumen I, editorial Tecnos, Madrid, año 1987, p. 83.

B) Posibilitando el funcionamiento del principio mayoritario, como criterio de adopción de decisiones y respeto de las minorías que podrán siempre controlar desde el parlamento lo actuado por el gobierno".<sup>25</sup>

Con relación a los principios de esta doctrina, comenta el reconocido, profesor Luis López Guerra en su libro *Introducción al Derecho Constitucional*:

"La garantía de los Derechos de los ciudadanos, aparece según se ha dicho como la justificación última del Derecho Constitucional, esta libertad solo es posible en una comunidad ordenada por el Derecho, y elemento esencial de esa ordenación es que los poderes públicos estén también sujetos al Derecho, de forma que su configuración y sus competencias no dependan de la voluntad más o menos arbitraria de una o unas pocas personas sino de las previsiones de la ley".

Además, agrega; "La determinación de cuales sean los poderes del Estado y cuales sus atribuciones y de quienes deben ocupar esos poderes, es una de las tareas esenciales del Derecho Constitucional".<sup>26</sup>

Mientras que Carl Schmitt, al referirse a cerca de la teoría de la separación de los poderes del Estado, había sostenido que existe una diferencia muy marcada entre lo que significa el concepto de separación en contraposición con lo que constituye el concepto de división. Por lo cual señalaba:

Separación significa un aislamiento completo, que sirve tan sólo como punto de partida de la ulterior organización y después, es decir, en la posterior regulación, consiente sin embargo, algunas vinculaciones.

---

<sup>25</sup>Lucas Verdú, Pablo, y Lucas Murillo de la Cueva, Pablo.

Obra citada op.cit. Editorial Tecnos, Madrid, año 1987, p. 183 y subsiguientes.

<sup>26</sup> López Guerra, Luis.

Obra citada op.cit. Tirant lo blanch libros edita Tirant lo blanch Balencia, año 1994, p. 269-270



En cambio que, división significa, propiamente una distinción en el seno de uno de los varios poderes, por ejemplo, la división del Poder Legislativo en dos Cámaras, un Senado y una Cámara de diputados. Además señala es de esta forma que surge un típico esquema de organización con tres poderes: Legislativo Ejecutivo y Administración de Justicia. Agrega, esta división tripartita se ha aceptado en general, y dice no hay ninguna Constitución del Estado burgués de Derecho cuya regulación orgánica no esté dominada por el principio de la distinción de poderes.<sup>27</sup>

El profesor Pablo Lucas Verdú, mantiene que la doctrina de la separación de los poderes debemos interpretarle como:

“un postulado, un principio dogmático del Estado constitucional liberal, puesto que se considera indispensable, para asegurar la libertad de los ciudadanos, en la medida que limita el poder político, atribuyendo a órganos distintos correspondientes, a Instituciones diferentes, el ejercicio de cada función estatal. De modo que un individuo, un grupo de individuos o una asamblea no puedan al mismo tiempo dictar leyes y aplicarlas por vía administrativa o judicial”.

Continúa destacando que se trata de un principio dogmático porque con esto:

“se afirma la identidad absoluta entre la separación de poderes y el reconocimiento y garantías de la libertad”.

Por tal circunstancia expone, que a la separación de los poderes, requerimos comprenderle como un: “principio institucional, porque a partir de la Constitución norteamericana de 1787, de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, de la Constitución francesa de 1791 y de la Constitución de Cádiz de 1812, ha servido para una distribución, de las funciones del Estado entre órganos distintos, sin perjuicio de sus interrelaciones y colaboraciones”.

---

<sup>27</sup> Schmitt, Carl.

Obra citada op.cit. Alianza Editorial S.A, año 1982, p. 188-189.

Adicionalmente nos recuerda, esto se expone en el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de 1789 en la que se prescribe: "Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni determinada la separación de poderes carece de Constitución".<sup>28</sup>

Para André Hauriou, es importante reflexionar sobre la línea de investigación empleada por Montesquieu, quién se valió de la protección de la libertad, a la que denominó como, "libertad política". Para esto examina cuales son las clases de instituciones políticas, que mejor pueden proteger la libertad y subraya que, esta condición se dará en un sistema, en el cual los poderes estén separados y de ser preciso, en caso contrario, venir a frenarse recíprocamente.<sup>29</sup>

Prosigue exponiendo, Hauriou, que se notaba ostensiblemente la necesidad de un control del poder, en la época, del rey y sus ministros. Aporta, esto está bien, entendido en la expresión moderna de "censores de los gobernantes". Pero explica este término, no aparece en los escritos de Montesquieu, nos advierte, "Esta expresión parece haber sido utilizada por primera vez por Raymond Aron, en sus lecciones sobre la sociedad industrial".

Pero enjuicia, que al razonar el autor del Espíritu de las leyes, sobre la necesidad de frenar el poder con el poder, lo estaba diciendo. Manifiesta que la libertad exige, para estar protegida, que las diversas partes componentes sean confiadas a diferentes titulares y que estos titulares tengan la facultad de "frenarse" o "impedirse".

---

<sup>28</sup> Lucas Verdú, Pablo.

Obra citada op.cit, Volumen II. Editorial Tecnos año 1986 p. 133.

<sup>29</sup> Hauriou, André.

"Derecho Constitucional e Instituciones Políticas".

Ediciones Ariel Barcelona, año 1961, p. 236.

Sobre todo cuando uno de ellos intente aventurarse en el camino del despotismo.<sup>30</sup>

Al contrario, Karl, Loewenstein, establece que la separación de poderes constituye exclusivamente:

"la forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del control político".

Con relación a lo cual prosigue manifestando.

"lo que corrientemente, aunque erróneamente se suele designar como la separación de los poderes estatales, es en realidad la distribución de determinadas funciones estatales a diferentes órganos del Estado".

Complementa su criterio asegurando lo siguiente;

"El concepto de poderes, pese a lo profundamente enraizado que está debe ser entendido, en este contexto de una manera meramente figurativa".<sup>31</sup>

En cambio el profesor, Jorge de Esteban, nos comenta acerca de la separación de poderes lo siguiente:

Nos asevera lo cual entendemos en la actualidad por el principio de la división de poderes tiene dos claros significados:

"Por una parte, aparece como un esfuerzo de racionalización respecto al funcionamiento de toda organización política de carácter estatal. Por otra, responde a la finalidad de evitar una excesiva concentración del poder y, por supuesto y con mayor razón, un poder absoluto o despótico".

---

<sup>30</sup> Hauriou, André.

Obra citada op.cit. Ediciones Ariel Barcelona, año 1961, p. 237.

<sup>31</sup> Loewenstein, Karl.

"La Teoría de la Constitución".

Editorial Ariel, segunda edición cuarta reimpresión, Barcelona año, 1986, p. 54-55.

Además agrega; "se podría afirmar que en su presentación más radical este principio no ha existido nunca. Por el contrario, la concentración absoluta del poder tampoco es fácil que sea una realidad, puesto que hasta el dictador más poderoso no puede hacer todo por él mismo y no tiene más remedio que delegar algunas facultades. Sentadas así las cosas es evidente que este principio se encuentra en el origen del Estado del Derecho y, por consiguiente, del constitucionalismo moderno". <sup>32</sup>

Además, manifiesta el mismo profesor Jorge de Esteban, que la doctrina del francés Montesquieu, nos contribuye con cuatro enseñanzas a saber:

La primera de las enseñanzas reside en que, "los diversos poderes deben colaborar entre sí, pero siempre que se adopten también diversos «frenos y contrapesos»".

La segunda gravita en que, "la evolución de los sistemas políticos ha comportado, con el advenimiento de la democracia moderna, que se haya superado el número limitado de los tres poderes clásicos del Estado y hoy se pueda hablar de varios poderes más".

La tercera viene a radicar en que, "El Estado de Derecho, tal y como lo concebimos en la actualidad, ha supuesto paradójicamente el reforzamiento de ese poder «nulo» o «invisible», según denominaba el pensador francés al judicial, para convertir a este poder en el arco de bóveda de este tipo de Estado".

Finalmente, la cuarta de las enseñanzas se viene a fundamentar en que, "La negación más peligrosa del esquema creado por Montesquieu puede proceder del partido único en los regímenes totalitarios o incluso, en los regímenes

---

<sup>32</sup> De Esteban Jorge.

"Tratado de Derecho Constitucional I".

Servicio de publicaciones, de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, tomo I, Ediciones Castaña, año, 2001, p. 211.

democráticos, de la existencia de un partido hegemónico que, en uno u otro caso, acaben monopolizando todo el poder del Estado".<sup>33</sup>

Según la opinión de León Duguit, manifestada en su manual de Derecho Constitucional, lo que hoy se llama separación de poderes no tiene la menor analogía con la separación de poderes de la Constitución francesa de 1791, al respecto puntualiza:

"Con el nombre de separación de poderes se entiende hoy una colaboración de órganos de representación y una repartición de funciones".

Además añade:

"Si a los autores place designar con el mismo nombre de separación de poderes, dos cosas absolutamente diferentes, el sistema de 1789 y el sistema actual, no vemos el menor inconveniente en ello. Pero deberá reconocerse que no es este el medio más a propósito para llevar un poco de claridad a las teorías del derecho político".

Posteriormente menciona:

"Si la regla general de la separación de poderes es una regla de nuestro derecho constitucional, ningún texto de principio existe que pueda guiar ni entorpecer la labor de determinar el sentido y la extensión de dicha regla".

Adicionalmente manifiesta:

"Fácil es demostrar que lo que se llama hoy separación de poderes no es más que una regla, en virtud de la cual ocurre que existen muchos órganos de representación de la soberanía nacional, que existe además, una colaboración íntima y constante de estos órganos, una acción recíproca de uno sobre otro, y también una separación entre el personal administrativo y el personal judicial, y

---

<sup>33</sup> De Esteban Jorge,

Obra citada op.cit. servicio de publicaciones, de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, tomo I, Ediciones Castaña, año 2001, p. 214.

una independencia, lo más grande posible, atribuida al personal judicial". Luego, complementa su parecer indicando:

"los dos órganos, el Parlamento y el Gobierno, personificado por el jefe del Estado, ejercen uno sobre el otro una acción recíproca constante, y colaboran de una manera íntima en la tarea de suscitar y estimular la actividad general del Estado, pero colaboran de manera diferente a causa de la diversidad de su estructura. Si esto es a lo que se llama la separación de los poderes legislativo y ejecutivo, bien está".

Pero agrega:

"habrá que convenir en que se está muy lejos del sistema de 1791, en el que cada uno de los órganos incorporaba un elemento distinto de la soberanía, y debía ser independiente y soberano en su esfera. Por eso creemos que, para evitar una confusión, en vez de separación de poderes, deberá decirse colaboración de órganos".<sup>34</sup>

Cabe resaltar, del análisis expuesto por Duguid, que da la impresión de que éste entiende el poder como si a este debiéramos concebirle como varios poderes separados rígidamente, y que por ello debían existir diferentes detentadores, y desde ese punto de vista no encuentra lógica la separación de poderes, promulgada por Montesquie.

Pero si no perdemos de vista que el poder es uno solo, y que pertenece a un único y exclusivo titular; o sea al pueblo, entonces entenderemos lógica y comprensible, la posición del baron de Montesquieu, el cual precursaba una separación de poderes, y aunque no lo dice con sus propias palabras, se sobre entiende que pretendía que entre los poderes existiera una función de control que autolimitara, el ejercicio de cada uno de los poderes, o sea que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, se auto controlarán o auto limitarán entre

---

<sup>34</sup> Duguid, León.

"Manual de Derecho Constitucional". Madrid, año, 1913, p. 150 y subsiguientes. 1

sí, y de esta forma llegar a conseguir, que el poder por su propia forma operativa, retornara a frenar al poder. Realizándose esto a través de la coordinación y control entre los diferentes titulares de los distintos poderes existentes en el Estado, que es de la manera realmente, como opera en la actualidad la doctrina de la separación de poderes. Encauzándose de una forma muy eficaz para esto el ejercicio del control Parlamentario o político. El cual considero viene a cumplir la función determinada, de que el poder pueda frenar en si mismo al poder, y con esto evitar obviamente que se den los sabidos abusos en el ejercicio del poder, cuando no existen controles constitucionales establecidos para tales propósitos

En la obra de Touchard, Jean, titulada como Historia de las Ideas Políticas, valorándose la teoría de Montesquieu se apunta lo siguiente:

"La teoría política de Montesquieu es una teoría de los contrapesos, es preciso que el poder detenga al poder".

Además se precisa lo siguiente:

"la separación de poderes, los cuerpos intermedios, la descentralización y la moral son para él otros tantos contrapesos, otras tantas fuerzas que impiden que el poder caiga en el despotismo".

Adicionalmente asegura Touchard:

"La separación de poderes, se ha convertido, gracias a Montesquieu, en una especie de dogma. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre proclamará: toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución".

Prosigue comentando;

"sin embargo, la doctrina de la separación de poderes no tiene en Montesquieu el alcance que le han atribuido sus sucesores, se contenta con afirmar que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial no deben encontrarse en

las mismas manos; pero de ningún modo piensa en preconizar una rigurosa separación entre los tres poderes".<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Touchard, Jean:

"Historia de las Ideas Políticas".

Editorial Tecnos Madrid, SA. Año, 1985, p. 190 y subsiguientes.



## **C.- Pensamiento de los doctrinarios costarricenses, acerca de los principios de la teoría de la separación de los Poderes del Estado.**

Con relación a esta doctrina, la licenciada Karpinski, Rose Marie y otros; en su obra, Reflexiones sobre el Poder Legislativo Costarricense. Nos apuntan lo siguiente:

"Hoy la separación de Poderes es una técnica de organización, distribución y limitación del Poder, y por ello es un instrumento importante de Democracia".

Prosiguiendo con su exposición nos añaden;

"bajo la influencia de la crisis es que los Poderes aparecen lentos y poco eficientes, lo que afecta a la democracia dentro de la sociedad civil"... Luego dicen; "es muy claro que toda solución de estas ineficiencias debe plantearse tanto al interior como al exterior de los Poderes del Estado, es decir, abarcando los niveles de decisión, ejecución, administración y cumplimiento de las leyes".

Continúan comentando;

"la realidad nos presenta a ambos órganos, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, dominados por un mismo Partido Político; dominio que incluso se ha extendido al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Contraloría General de la República".

Además dicen "aún actualmente es motivo de crisis que un Partido Político que controla el Poder Ejecutivo no controle el Poder Legislativo. Esta situación, que en la época dorada del Derecho Constitucional Clásico era la ideal, hoy es vista como algo inconveniente y perjudicial para la buena marcha de los asuntos públicos".....<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Karpinski, Rose Marie. Castillo, Fernando. Trejos, Adrián

"Reflexiones sobre el Poder Legislativo Costarricense".

CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1949. Primera Edición. Asamblea Legislativa, año, 1989. P. 281.

Para el reconocido doctrinario costarricense, licenciado, Rubén Hernández Valle, el principio de la división de Poderes esta dado por lo siguiente:

La "traducción al plano jurídico del problema básico, planteado a toda organización humana, de la división del trabajo en el sentido que los diferentes órganos estatales tienen que cumplir determinadas funciones".

Y nos agrega en su disertación:

"el principio trata de garantizar, al mismo tiempo la libertad de los gobernados, ya que la distribución del Poder Político, entre varios detentadores, tiende precisamente a evitar su concentración y ejercicio abusivo por parte de un solo órgano estatal". Continúa comentando;

"lo que erróneamente se suele designar como la división de Poderes estatales, es en realidad la distribución de determinadas funciones públicas entre diferentes órganos del Estado". <sup>37</sup>

El pensamiento expuesto por el licenciado Hernández Valle, tiene bastante similitud, con el criterio esbozado por Telesforo Ojea y Somozacitado en páginas precedentes, acerca de la doctrina de la separación de los poderes del Estado.

Pero de ninguna manera, comparto que se piense, que la teoría de Montesquieu, sea inaplicable al Estado moderno, en razón de que soy de la opinión, respetando obviamente los pensamientos de aquellos que no comparten mis ideas, que Montesquieu, siempre imaginó, que para que el poder pudiera frenar al poder, necesariamente debía originarse la colaboración entre los distintos poderes, ciertamente dio mayor valor a los poderes legislativos y ejecutivos, que al poder judicial. Lo que también es verdad es que aunque se han hecho muchos intentos, por dictar una teoría nueva. La tesis de

---

<sup>37</sup> Hernández Valle, Rubén.

"Democracia y Participación Política".

Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, año, 1991, p. 82-83.

Montesquieu, predomina, en la gran mayoría de los países. Y para concluir con este comentario debo indicar, que la "Teoría de la separación de los Poderes", ha demostrado adaptabilidad y hasta algún grado de flexibilidad para adaptarse a los diferentes cambios, que le han llevado los tiempos que vivimos en la época actual.

Con relación a la doctrina de la separación de poderes, el también doctrinario, de la República costarricense, doctor Alex Solís Fallas nos aporta el siguiente criterio:

"El fin principal de la división de Poderes es evitar la concentración de poder y, por consiguiente, la tiranía. De manera que si las facultades y competencias del Poder Ejecutivo se incrementan; correlativamente debe incrementarse la función contralora del parlamento. Sólo así se encontrará un nuevo balance en el sistema de pesos y contrapesos, que caracteriza el sistema democrático constitucional.<sup>38</sup>

Con su dictamen el doctor, Solís Fallas, nos está diciendo y mostrando que la doctrina de la separación de poderes, encuentra su fundamento, en un efectivo ejercicio del control político o parlamentario. Para con ello evitar abusos en el ejercicio del poder, o sea esta reconociendo que la doctrina de la separación de los poderes del Estado, es de una u otra forma permiable a los cambios; pese a la rigidez, con la que siempre se le ha calificado, por gran parte de los doctrinarios del Derecho.

En cambio, el doctor Rodolfo Saborío Valverde, en una mención muy breve de la doctrina de la separación de Poderes, en su libro, titulado, Rendición de cuentas en Costa Rica, Diagnostico y propuesta de sistematización. Nos comenta:

---

<sup>38</sup> Solís Fallas Alex.

"El Control Parlamentario".

2.ed. San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia año, 1995, p. 54-55

Más que de “una división de poderes hoy en día se habla de una especialización de funciones, en donde cada uno asume las funciones delineadas constitucionalmente, pero que mantiene con los otros una constante relación de colaboración y controles recíprocos, lo que deviene en un sistema de frenos y contrapesos que previene la arbitrariedad. El desarrollo institucional también ha llevado a la aceptación de la presencia de otras instancias adicionales a los tres poderes clásicos”.<sup>39</sup>

Lógicamente tal como alude el doctor, Saborío Valverde, es necesario que en la aplicación de la doctrina de la separación de poderes, se origine una colaboración entre los distintos poderes, que algunos suelen llamarles órganos e indicar que lo que se da es una división de funciones, o colaboración entre los distintos entes u órganos. Lo que se debe estar claro es que la doctrina de la separación de poderes busca evitar, que el poder se concentre en unas solas manos y que el mismo, entregado a diferentes poderes, se auto limite en si mismo, de ahí el control en su funcionamiento auto-controlador.

---

<sup>39</sup> Saborío Valverde, Rodolfo.

Obra citada. op.cit, primera Edición. Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, año 2004 p. 75.

## **Capítulo II.**

### **El Control sobre el gobierno.**

#### **A) Diferentes concepciones de control.**

Para referirnos al control que se ejercita sobre los diferentes gobiernos de corte democrático, necesariamente debemos abordar distintas concepciones sobre el control como un todo. Para luego poder concentrarnos en el control político o parlamentario.

En primer termino, debemos establecer, que a través del ejercicio del control, es la forma mediante la que se logra, limitar el empleo del poder. Para estos efectos la Constitución adquiere un papel fundamental, ya que por medio de la misma es el modo como se establecen las bases para limitar al poder y garantizarle sus distintos derechos a los pueblos, esto descansa especialmente, en lo dispuesto en el artículo dieciséis de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de mil setecientos ochenta y nueve, en donde se prescribe lo siguiente:

“Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni determinada la separación de poderes carece de Constitución”.<sup>40</sup>

Con relación a lo apuntado, el profesor, Manuel Aragón en su libro Constitución y Control del Poder nos reflexiona sobre lo siguiente:

---

<sup>40</sup> Lucas Verdú, Pablo.

Obra citada op.cit, Volumen II. Editorial Tecnos año 1986 p. 133.

“Efectivamente, el control es un elemento inseparable del concepto de Constitución si se quiere dotar de operatividad al mismo”. Agrega, “si la Constitución es norma y no mero programa puramente retórico. El control no forma parte únicamente de un concepto “político” de Constitución, como sostenía Schmitt, sino de su concepto jurídico, de tal manera que sólo si existe control de la actividad estatal puede la Constitución desplegar su fuerza normativa y sólo si el control forma parte del concepto de Constitución puede ser entendida ésta como norma”.<sup>41</sup>

Como lo señala el profesor Manuel Aragón la Constitución es una norma básica, para poder conseguir llegar a limitar al poder, debido a que en ella, se estatuyen todos los parámetros a seguir por los titulares del poder. Así como por el pueblo, quién debe velar y obligar al cumplimiento de los límites establecidos para el ejercicio del poder.

Por tal razón con la finalidad de evitar, abusos en el empleo del poder, Los parlamentos, en los regímenes democráticos, cuentan con diversos instrumentos de control, para desempeñar la función de control político o parlamentario sobre sus respectivos gobiernos, con estos medios precisamente se procura evitar, que se presenten abusos en el poder que les ha sido designado.

Con tales propósitos, los parlamentos disponen de los siguientes instrumentos de control político o parlamentario a saber:

Las preguntas parlamentarias, las interpelaciones, las comisiones de investigación y las comparecencias, estos instrumentos han sido clásicamente las herramientas de control político, empleados por los distintos parlamentos o Asambleas Legislativas en los Estados democráticos.

---

<sup>41</sup> Aragón, Manuel.

“Constitución y Control del Poder”.

Ediciones Ciudad Argentina año, 1995, p. 11.

Asimismo, los Estados disponen de otros instrumentos de control parlamentario, como vienen a ser: la moción de censura, y la cuestión de confianza, pero tradicionalmente estos dos medios de control político han sido de uso exclusivo de los regímenes parlamentarios, y nunca de los regímenes presidencialistas. Dado la finalidad que ambos instrumentos de control político conllevan.

Como puede interpretarse, todos estos instrumentos de control han sido desarrollados para el ejercicio del trabajo de control parlamentario o político y son utilizados por los diversos parlamentos, o Asambleas Legislativas como en nuestro caso, viene a ser el de la República de Costa Rica, para desempeñar su esencial y fundamental labor de control político sobre el gobierno.

Como se indicó algunos de los mecanismos de control parlamentario son propiamente de uso de los regímenes parlamentarios, en razón que en ellos se adquieren resultados concretos, que no es posible conseguirles en los regímenes de gobiernos presidencialistas como viene a ser en nuestro estudio el régimen de gobierno costarricense.

Según anota Ana Fiorella Carvajal Carvajal, a juicio de la doctrina, los términos de control pueden agruparse en dos bloques;

“Por un lado, se encuentran aquellos autores que consideran que el control, además de consistir en la fiscalización de la actividad gubernativa en relación con determinados parámetros, implica la posibilidad de imponer medidas correctoras”. por el otro, ubica, “aquellos que consideran que el control se limita a la verificación de la actividad del Ejecutivo, pero sin que puedan imponerse sanciones al mismo”.

Señala, "dentro del primer grupo puede ubicarse, de la doctrina italiana, a Galeotti, de la española, a Santaolalla.<sup>42</sup>

Galeotti, citado por Ana Fiorella, Carvajal Carvajal, "considera que el concepto de control debe obtenerse del estudio de sus elementos esenciales: fin, estructura y objeto. El fin consiste en la salvaguarda de ciertos valores, que el órgano controlante tiene el deber de tutelar. En cuanto a la estructura, el control no puede limitarse al juicio sobre la actividad controlada sino que, junto a él, debe existir la posibilidad de imponer una medida sancionatoria en sentido amplio, de forma tal que el órgano controlante pueda influir sobre el hecho controlado para alcanzar los fines tutelados".

Finalmente, dice, "en cuanto al objeto, sostiene que no debe reducirse a la actividad precedente de un sujeto, sino que debe abarcar cualquier fenómeno jurídico respecto al cual sea posible proponer determinados valores".

Por su parte, Santaolalla citado por la misma autora, considera:

"que el control implica el ejercicio de facultades sancionatorias, entendiendo por tales, las medidas de que el sujeto controlante dispone para corregir la conducta del sujeto controlado". De esta forma, el control parlamentario "supone un juicio político de oportunidad sobre la conducta del Gobierno, o de sus miembros, y una decisión que pueda afectar a la situación y a los actos de éstos, esto es, que tiene consecuencias sancionatorias".<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Carvajal carvajal, Ana Fiorella.

"El poder de investigación de la Asamblea Legislativa Costarricense".

Tesis para optar por el Título de Licenciada en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, año, 1990, p. 13.

<sup>43</sup> Carvajal carvajal, Ana Fiorella.

Obra citada, op.cit, Tesis para optar por el Título de Licenciada en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, año, 1990, p. 13-16.



Por lo anteriormente enunciado, no se considera prudente que en un régimen presidencialista como es el de la República de Costa Rica, se sostenga como instrumento de control político a un instrumento típico de control parlamentario como viene a ser la moción de censura, debido a que sus efectos son irreales, en razón que no se puede conseguir el objetivo primordial que en la misma se sobrelleva, y que concierne a la caída del gobierno.

En cambio, cuando en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, se ejerce el control político, se lleva adelante una labor inspectora de la administración pública. O sea lo que se cumple es un juicio político, que no es en ninguna forma vinculante y por tanto, no se encauzan en sanciones jurídicas, el único resultado que se produce es cuando se dan a conocer a través de los medios de comunicación, y por medio de la presión política.

Por la diferencia, que se enmarca entre un gobierno de régimen parlamentario y un gobierno de régimen presidencialista, es que el autor de esta investigación, se propone tratar de enunciar una definición diferente de control parlamentario de la de control político, aunque tiene claro que ambos conceptos emanan del parlamento quién en si mismo representa un medio de control, pero al tratarse de dos conceptos según la opinión del investigador, se debe distinguir entre ellos para no confundirse a la hora de tratar de ambos conceptos, y así poder profundizar en la importancia de una materia tan significativa y trascendental como viene a ser la del ejercicio del control parlamentario o político según sea el caso, lo relevante y lo que realmente interesa es el papel que éste juega en el fortalecimiento y consolidación de la democracia en el mundo actual.

Otro aspecto que se precisa clarificar en profundidad es el relacionado con las diferencias existentes entre los conceptos de control judicial o jurisdiccional y el concepto de control parlamentario o político, con la finalidad de exponer con propiedad a cuales autoridades compete en cada momento su ejercicio y cuales en su defecto son los resultados o consecuencias del trabajo de cada uno de

estos dos controles. De esta forma el pueblo que es el verdadero titular del poder, podrá conocer en todo momento a que autoridad corresponde el ejercicio del control de que se trate. Mediante el desarrollo de esta investigación, me he dado cuenta que el pueblo costarricense, en muchas ocasiones no tiene claro cuando se le esta tratando sobre el ejercicio del control político o cuando nos referimos al control jurídico o jurisdiccional, en razón que no se le suelen aclarar las diferencias existentes entre ambos términos de control.

Por este motivo considero que una vez detallado este aspecto será más fácil abordar con mayor precisión el tratamiento de los demás instrumentos de control parlamentario o político, existentes en cada uno de los distintos regímenes de gobiernos democráticos. Así como recomendar cuales de tales instrumentos de control político se aprecian como más oportunos para ser empleados en los regímenes parlamentarios así como en los regímenes de carácter presidencialistas.

Para enfrentarnos a la problemática de tratar el tema del control y antes de entrar directamente con el análisis del control político, conozcamos en forma general como define María Moliner, en el Diccionario del uso del español el término control; a este respecto nos indica:

Esta palabra es de origen francés y tuvo originariamente el significado de «comprobación» o inspección»; después se ha hecho internacional y a esos significados se han añadido otros afines. En español se emplea ampliamente, a pesar de haber sido hasta a ora enconadamente combatida por los puristas, con muy variados matices que pueden agruparse en dos acepciones: Ñ («Ejercer, Establecer, llevar»). Tiene los significados de «comprobación, \*inspección, observación, \*vigilancia» y hasta, en algunos casos, «cuenta» o «medida»; en resumen, de acción de mantenerse conscientemente enterado de cierta cosa cuyo Conocimiento interesa para determinada finalidad”.

Además señala: "tiene los significados, afines a los anteriores, de «autoridad, dirección, \*dominio, intervención, mando, preponderancia, regulación...» o sea, de limitación de la libertad o espontaneidad de una acción o fenómeno". <sup>44</sup>

Con lo planteado en ésta definición podemos concretar que el objetivo, del control, como hemos venido indicando, tiene por propósito, realizar una función tendiente a controlar y limitar al poder, a través del examen operado o de la evaluación del cumplimiento de determinadas metas, previamente señaladas; precisamente este es el papel que debe cumplir el Parlamento, cuando ejerce la función de control político.

Sin embargo, considero que el parlamento, a perdido bastante de su rol en esta temática y por diferentes razones, estas funciones poco a poco han ido incluyendo a otros órganos externos, entre los que podemos citar a los que hace alusión el profesor, Manuel Aragón en su obra Constitución y Control del Poder, y que versan sobre; "conflictos de atribuciones o de competencias". Así, como, de "la desaparición de ámbitos exentos, en el establecimiento de nuevas instituciones de fiscalización (como la figura del ombudsman), en la extensión del control parlamentario a actividades o entidades de carácter administrativo, en la multiplicación, por vías formales, de otros medios de control del poder a cargo de asociaciones, sindicatos o grupos de interés e incluso en la creación (para determinados ámbitos: Consejo de Europa, Comunidades Europeas) de instrumentos supranacionales, políticos y jurídicos, de control". <sup>45</sup>

Esto quiere decir, que el control político ha dejado de ser una materia exclusiva del parlamento, para también ser llevada a cabo por otros medios como son los de comunicación pública, y grupos sociales independientes.

---

<sup>44</sup> Moliner María

"Diccionario del uso del español año 1996".  
Ediciones Gredos, dirección electrónica 1996.

<sup>45</sup> Aragón, Manuel.

Obra citada, op.cit. Ediciones Ciudad Argentina año, 1995, p. 41.

Continuando con, el tratamiento de los distintos conceptos de control, debemos indicar, que éste puede ser contable, administrativo, jurídico, de verificación, de inspección, fiscalización o comprobación, y de muchas concepciones más, pero únicamente, nos vamos a centrar primordialmente en el control político o parlamentario, en razón que éste es el núcleo central de esta investigación, por lo cual no nos será posible profundizar en los otros tipos de control.

## **B) Diferenciación entre los conceptos de control judicial o jurisdiccional y el concepto de control parlamentario o político.**

Para enmarcar las diferencias entre estos dos términos o conceptos de control debemos precisar en primer lugar que el control jurídico, es una materia que corresponde ser desarrollada en todo momento al poder judicial.

El doctor, Francisco Rubio y Llorente, nos expone con mucha propiedad sobre el control jurídico, el siguiente punto de vista.

"El control jurídico del poder, aunque no específico del Estado Constitucional alcanza en él una eficacia antes desconocida y continúa desarrollándose en nuestro tiempo con la instauración de sistemas que, como el de la jurisdicción constitucional, aseguran la sumisión al Derecho del propio legislador y proporcionan al ciudadano un medio eficaz para reaccionar frente a los actos antijurídicos del poder cuando todos los medios ordinarios han sido intentados en vano". Prosigue señalando; en el control jurídico no existe dominio ni superioridad del órgano controlante sobre el controlado, pues aquél carece de criterio o voluntad propios. Sus decisiones, que por eso han de ser motivadas, no hacen otra cosa que aplicar al caso concreto la regla preestablecida (en principio al menos, formulada siempre de forma general y abstracta) y no operan sobre la existencia del órgano controlado, sino simplemente sobre los resultados de su actuación".<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Rubio Llorente, Francisco.

"La Forma del Poder".

Centro de Estudios Constitucionales 2º edición Madrid, año, 1997, p. 207-208.

Esto significa, que el control jurídico, tiene por propósito limitar al poder, mediante la garantía de los derechos de las personas, con fundamento en el principio de legalidad, o sea que esta es una respuesta para los actos que se puedan valorar como antijurídicos, por tal razón las decisiones que se asuman deben ser motivadas y justificadas.

Mientras que el profesor Manuel Aragón, nos comenta en lo tocante:

"El control jurídico es un control necesario en cuanto que el órgano que lo ejerce necesariamente ha de resolver siempre que libremente se solicite su intervención, y en cuanto que también tal control necesariamente ha de existir si se quiere evitar la consolidación de las normas minuscuamperfectas, lo que no impide que, de facto, puedan darse ese tipo de normas, pese a la existencia del control, en la medida en que no se inste su procedimiento".

Nos prosigue agregando, "no por el órgano que en cada momento aparezca gozando de superioridad, sino por un órgano independiente e imparcial, dotado de singular competencia técnica para resolver cuestiones de Derecho. ". expresa; "en el control jurídico, precisamente por ser un control objetivado, la limitación no resulta, como en el control político, de un choque de voluntades, sino de una norma abstracta". Por lo que el, "órgano de control no es un órgano limitante, sino actualizador de una limitación preestablecida, ajeno, en principio, a toda relación de supremacía o jerarquía con el órgano limitado". Agrega, "cuando el órgano jurisdiccional declara la nulidad de una ley por inconstitucional, o de un decreto o de una resolución administrativa por ilegal, no está actuando en situación de supremacía sobre el Parlamento, el Gobierno o la autoridad administrativa, no está limitando el poder,, sino asegurando que los límites del poder se cumplen, es decir, no está limitando, pero sí controlando". <sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Aragón, Manuel.

Obra citada, op.cit. Ediciones Ciudad Argentina año, 1995, p. 81-84.

Con lo explicado, queda de manifiesto que el control jurídico, siempre es una responsabilidad del poder judicial, y que se ejerce en función de la legalidad, y para garantizar la adecuación de la conducta a la norma jurídica preestablecida.

## **El control político o parlamentario.**

En cambio el control político viene a ser una responsabilidad que ha sido otorgada al parlamento, por lo cual su ejercicio le compete de forma exclusiva, con lo que el poder judicial se encuentra exento de lograr intervenir en el mismo.

Para el profesor, José Antonio Alonso de Antonio y Ángel Luis de Antonio, el control político debemos concebirle como:

“Aquella función indeclinable del parlamentarismo democrático que, al utilizar un criterio de oportunidad política, produce una valoración subjetiva condicionante de la acción del Gobierno, al fijarle líneas de actuación que operarán como marco habilitante, pudiendo verificar en un momento posterior su grado de ejecución en orden a formar un juicio crítico para la eventual exigencia de responsabilidad política”.<sup>48</sup>

Asimismo, podemos entenderle de la siguiente manera:

Como aquel poder, que emanan del pueblo, de donde se originan todos los poderes del Estado, o sea que proviene de la soberanía popular. Realiza o otorga la elección de los titulares del poder en que se encuentra depositado el mismo, (poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

---

<sup>48</sup> José Antonio Alonso de Antonio Ángel Luis Alonso de Antonio

“Introducción al Derecho Parlamentario”.

Editorial DYKINSON, S. L. Madrid, año, 2002 p. 199.

Con lo que el poder Legislativo en apariencia, somete al poder Ejecutivo a una constante crítica sobre sus actuaciones en diferentes campos tales como: aprobación de los presupuestos, informe del presidente sobre el estado de la nación, interpelaciones, comisiones de investigación y otros.

Manifiesto que en apariencia, por que dada la línea de partido, que normalmente, asumen los legisladores de gobierno, no son todos los diputados quienes desempeñan esa función, sino más bien éste es un trabajo, de los partidos de oposición, por que los diputados del partido gobernante, en su mayoría, tratan más bien de arropar a su gobierno, con lo cual incrementan en muchas ocasiones un desprestigio hacia la función parlamentaria.

Con relación a esta situación el profesor Pablo Lucas Verdú, ha escrito lo siguiente:

“En la generalidad de los países democráticos, los parlamentos han perdido protagonismo, a favor de los partidos e incluso de los sindicatos. Han visto disminuir su función mediadora entre la sociedad y las instituciones políticas. Realizan con dificultades o de modo incompleto, la función integradora de intereses. Cumplen con lentitud e insatisfactoriamente sus misiones específicas y tradicionales (Deliberación, legislación, fiscalización)”.<sup>49</sup>

El planteamiento del profesor Lucas Verdú, se correlaciona con lo que el costarricense, doctor Alex Solís Fallas ha citado en su libro el control parlamentario, en el que ha expresado lo que a continuación se expone:

---

<sup>49</sup> Lucas Verdú, Pablo.

“Problemas actuales de la institución parlamentaria, la crisis del parlamento articulación técnico jurídica, análisis científico-político, y reajuste de reingeniería constitucional”.

Separata de revista comparada, universidad internacional Menéndez Pelayo, número nueve verano, del año 1982. p. 12.



"La Asamblea Legislativa ha perdido su majestad. Todos los días se oye hablar de manera negativa del Primer Poder de la República: en el aula universitaria, los medios de comunicación colectiva, la calle y hasta en los bares. Todos hemos escuchado que los diputados no trabajan, pero que, a pesar de eso, se aumentan periódicamente su salario". Continúa señalando, "también es corriente oír que los padres de la Patria rompieron el quorum o que muchos andan de viaje". Prosigue, "se acusa a la Asamblea de no legislar con la prontitud que demandan los tiempos modernos. Se alarman los ciudadanos por el tiempo invertido en frecuentes y superficiales discusiones políticas y por su lentitud para tomar decisiones, aun en asuntos de mucha trascendencia". Agrega, "lamentablemente, mucho de lo que se afirma es cierto. Existen niveles de irresponsabilidad que irritan a los ciudadanos".....<sup>50</sup>

Conforme a estos dos comentarios, podemos pensar que el control político, , en la República de Costa Rica, es atendido de forma poco eficiente, debido a que en muchas ocasiones privan más los intereses personales, que los del país. Con lo cual el control ejercitado, no es lo satisfactorio que se quisiera. Esto es algo que necesita un examen más profundo y que se plantea solo como modo de reflexión.

Al respecto comenta el doctor Alex Solís Fallas, en relación al ejercicio del trabajo del control parlamentario, que se desempeña en la República costarricense:

"Lamentablemente, esa función del control parlamentario apenas se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo en el Parlamento costarricense. Se desconoce con exactitud en qué consiste, cuál es su naturaleza, sus alcances, límites e instrumentos disponibles para llevarla a cabo. Como resultado, de manera generalizada, el control parlamentario se reduce a las comisiones

---

<sup>50</sup> Solís Fallas Alex.

Obra citada, op.cit, 2.ed. San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia año, 1995, p. 22-23.

especiales de investigación y a asuntos relacionados con la ética en el ejercicio de la función pública". <sup>51</sup>

Lo que manifiesta el doctor Solís lleva bastante verdad, dado que adicionalmente los instrumentos dispuestos para el ejercicio del control político, como ya le hemos mostrado, desafortunadamente no se encuentran bien instrumentalizados, para permitir una adecuada función de control político, sobre el gobierno, pero a este aspecto volveremos nuevamente en un capítulo posterior.

Prosiguiendo con el tema central del estudio, o sea sobre el análisis del control parlamentario, nos indica, el señor letrado de las Cortes de Cataluña Francesc Bauvall, lo siguiente:

"Podemos afirmar la escasa efectividad de las funciones de control del Parlamento sobre el Gobierno, porque sólo se controla aquello que pretende la mayoría parlamentaria, es decir, aquello que pretende el Gobierno. Por todo ello el Parlamento queda reducido a un locus donde tienen lugar las funciones parlamentarias, en general con publicidad". <sup>52</sup>

Manuel RAMÍREZ, citado por Bauvall, Francesc. en la intervención de la mesa redonda el futuro de la institución parlamentaria, El Parlamento y sus transformaciones actuales, en la Asamblea regional de Murcia, MANIFIESTA, "la doctrina se plantea no pocas preguntas sobre la pervivencia de un eficaz control democrático ¿En qué medida el Parlamento no es actualmente más que una caja de resonancia de los acuerdos previos de los partidos<sup>9</sup> ¿En qué medida

---

<sup>51</sup> Solís Fallas Alex

"Guía práctica para el control parlamentario".

1. ed. San José, CR: : Asamblea Legislativa : Centro para la Democracia, año, 1996, p. 7-9.

<sup>52</sup> Bauvall, Francesc.

"Parlamento y Opinión Pública".

Tecnos Madrid, año, 1995, p. 31.

es posible seguir hablando de un auténtico control de un ejecutivo que dispone de mayoría parlamentaria?”. Prosigue indicando “el desempeño de las funciones parlamentarias en la forma en la que nos hemos referido, que es paradigmático en sistemas de parlamentarismo mayoritario, donde el gobierno dispone de mayoría absoluta, ha llevado a la doctrina a plantearse si el parlamento como institución está o no en crisis”.<sup>53</sup>

En este mismo sentido el doctor, Francisco Ruvio Llorente, en la intervención de la mesa redonda el futuro de la institución parlamentaria, ha reflexionado de la siguiente forma:

“El Parlamento está integrado por partidos y partidos muy disciplinados, el Gobierno es el Gobierno designado por la mayoría parlamentaria, y la mayoría parlamentaria no tiene nada que controlar porque es como controlarse a sí misma, y nadie se controla a sí mismo”.

Prosigue agregando, “hablar de un control del parlamento sobre el Gobierno es seguir utilizando unas categorías y unas formas de hablar que vienen del pasado y que resultan levemente anacrónicas”.

Nos continúa comentando; Ese parlamento que controlaba los gobiernos decimonónicos, era un parlamento soberano, y hoy día es un órgano controlado”.<sup>54</sup>

Asimismo, en ésta misma Asamblea, tratando a cerca del futuro de la institución parlamentaria, Yordi Zulee Tura, comentaba:

---

<sup>53</sup> Bauvall, Francesc.

Obra citada, op.cit, Tecnos Madrid, año, 1995, p. 32 y siguientes.

<sup>54</sup> Garrorena Morales, Ángel, Editor.

“El Parlamento y sus transformaciones actuales”.

Jornadas organizadas por la asamblea regional de Murcia once al trece de abril de 1988.

El futuro de la institución parlamentaria, por Rubio Yorente, Francisco.

Editorial Tecnos 1990, p. 387

"El futuro del parlamento, como poder legislativo seguirá siendo el de una instancia, para la formación de mayorías de gobierno y para la legitimación de las decisiones que esta mayoría toma".<sup>55</sup>

Como puede advertirse, los anteriores análisis, se refieren a regímenes en donde operan los gobiernos parlamentarios, pero esto también ocurre en los regímenes presidencialistas, cuando los que ocupan el poder mantienen mayoría en las Asambleas Legislativas, o Congresos.

Puede observarse que iniciamos atendiendo la temática sobre el ejercicio del control político, y este nos ha ido derivando hacia otro derrotero, como es el proyectarnos hacia una crisis de la institución parlamentaria independientemente, del régimen político del cual se trate. Considero, que esto es importante, por que vamos encontrando una causa más, que nos enmarca, la problemática quizá más grave del porqué el desempeño del trabajo de control político, sobre los gobiernos es ineficaz. Esto es importante por que esto también, tiene que hacer caer en cuenta a los partidos políticos minoritarios, de que no están cumpliendo apropiadamente su rol, ni obteniendo el rédito que le pueden lograr, de aprovecharlo apropiadamente.

Finalmente, aprecio como se dice popularmente en la República de Costa Rica, que esta situación tiene mucha carnita, para seguirle analizando, ya que son mucho los factores a examinar, pero por las características de la investigación, dejo esta problemática, solamente introducida, para que en estudios, posteriores sea extendida, por otros estudiosos del tema.

---

<sup>55</sup> Garrorena Morales, Ángel, Editor.

Obra citada, op.cit. Editorial Tecnos 1990, p. 380.

## **C) descripción de los instrumentos de control parlamentario.**

En el desarrollo de este apartado, voy a proceder a definir los distintos mecanismos de control parlamentario, empezando primeramente, por los que clásicamente se suelen emplear a saber:

Preguntas parlamentarias, comparecencias, interpelaciones y comisiones de investigación, para luego introducir a la cuestión de confianza y a la moción de censura.

Quizá lo que voy a introducir, sea muy conocido por la mayoría de quienes me lean, pero también lo hago pensando, en la República costarricense, para la cual estoy realizando éste trabajo, y en los futuros estudiantes y porque no profesores que no sean especialistas en esta temática y que deseen ampliar sus conocimientos profundizando en la misma temática.

Iniciando con lo propuesto definamos el término pregunta parlamentaria, y expongamos sus principales características:

### **Pregunta parlamentaria:**

La pregunta parlamentaria, debemos entenderle como aquel medio mediante el cual, los diputados o senadores, interrogan al gobierno sobre determinada materia.

José Antonio Alonso de Antonio y Ángel Luis Alonso de Antonio, definen a las preguntas parlamentarias como:

“instrumentos ordinarios de control parlamentario al Gobierno solicitando de éste, conjuntamente o de forma individual a cada uno de sus componentes, datos, informaciones o aclaraciones sobre un asunto específico”.<sup>56</sup>

Las preguntas parlamentarias, se caracterizan, por que pueden ser planteadas mediante dos formas:

1.- Las preguntas pueden ser establecidas por escrito, dirigidas a la cámara, de diputados o de senadores según sea el caso de que se trate.

2.- También pueden realizarse de forma oral, cuando se este conociendo de las mismas, y ajustándose a lo establecido reglamentariamente, en la legislación de que se trate.

Solo como ejemplo de estas, en la legislación española, las mismas se encuentran reguladas en el reglamento del congreso de los diputados en los artículos, ciento ochenta y seis punto uno, y en el artículo ciento sesenta de la cámara del senado.<sup>57</sup>

Al respecto, José Antonio Alonso de Antonio y Ángel Luis Alonso de Antonio, explican:

Las preguntas son: “un derecho individual de cada parlamentario”. Agregan, “se presentarán por escrito, bien a la Mesa en el caso del Congreso”.

---

<sup>56</sup> José Antonio Alonso de Antonio Ángel Luis Alonso de Antonio

Obra citada, op.cit, Editorial DYKINSON, S. L. Madrid, 2002 p. 204.

<sup>57</sup> Constitución Española y Reglamento del Congreso de los diputados.

“Revisión por la letrada de las Cortes Mercedes Araujo Díaz de Terán”.

Madrid, septiembre año, 2004. Imprenta Nacional del boletín nacional del Estado, novena edición

O a la Presidencia de la Cámara en el Senado. Añaden la finalidad de las preguntas parlamentarias, “es fiscalizar la labor del ejecutivo mediante el acceso a información sobre un tema puntual y concreto”.

Las preguntas versan en la legislación española, normalmente sobre la regularidad del funcionamiento de algún servicio administrativo.<sup>58</sup>

Finalmente, como dice Ana Feorela Carvajal Carvajal, “en el parlamentarismo actual, en el que hay un predominio de los grupos o partidos políticos sobre los parlamentarios aislados, las preguntas se presentan como el canal a través del cual pueden éstos últimos expresar sus posiciones y preocupaciones individuales, frente a la a veces excesiva, disciplina de partidos”.

En cuanto a la manera de presentar las preguntas parlamentarias, en la mayoría de los Parlamentos se exige su presentación escrita; así lo establecen, por ejemplo, los Reglamentos de la Asamblea Nacional (art. 133) y del Senado (art. 74 y 75) de Francia; del Bundestag (art. 111) de Alemania Federal y de la Cámara de Diputados (art. 128) y del Senado (art. 145) de Italia.<sup>59</sup>

### **Comparecencias:**

Las comparecencias les podemos definir, como aquellos medios por los cuales, los ministros o integrantes de gobierno, se suelen presentar al parlamento y exponer cualquier problemática, que se le este presentando en el desempeño

---

<sup>58</sup> José Antonio Alonso de Antonio Ángel Luis Alonso de Antonio  
Obra citada, op.cit, Editorial DYKINSON, S. L. Madrid, 2002 p. 205.

<sup>59</sup> Carvajal carvajal, Ana Fiorella.

Obra citada, op.cit, Tesis para optar por el Título de Licenciada en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, año, 1990, p. 38.

de su cartera ministerial, así, como aclarar las dudas que le surjan a los señores diputados o señoras, diputadas en determinada temática.

En la República de Costa Rica, las comparecencias, se encuentran reguladas en la Constitución política, en el artículo, ciento cuarenta y cinco, en donde se establece lo siguiente:

"Los Ministros de Gobierno podrán concurrir en cualquier momento, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea Legislativa, y deberán hacerlo cuando ésta así lo disponga".<sup>60</sup>

Las comparecencias son similares a las interpelaciones, solo que en el caso de la República costarricense, estas pueden producirse de modo voluntario, sin que medie un llamado de la Asamblea Legislativa. Sino en estos casos, más bien el ministro lo realiza por iniciativa propia para tener informado a los diputados de determinados temas que considera necesarios.

### **Las interpelaciones:**

Las interpelaciones son instrumentos que están previstos como medios de los cuales se valen los parlamentos o asambleas legislativas, para formular preguntas dirigidas a los Gobiernos sobre determinadas materias de carácter general o de particular relieve político.

Santaolalla López, citado por: José Antonio Alonso de Antonio Ángel Luis Alonso de Antonio; define las interpelaciones como:

---

<sup>60</sup> Altamirano Ramírez, Marina, Fallas Vega, Elena y Linkimer Bedoya Llihanni.

"Constitución Política de la República de Costa Rica, anotada y concordada con jurisprudencia de la Sala Constitucional".  
3.ed.- San José, Costa Rica.

Editorial Investigaciones Jurídicas, abril del año 2005, p. 550



"preguntas dirigidas al Gobierno sobre materias de carácter general o de particular relieve político, y que suelen provocar la apertura de un debate que, eventualmente, puede terminar con la votación de una moción en la que la Cámara fija su posición respecto al asunto debatido". <sup>61</sup>

Las interpelaciones son también mecanismos de control parlamentario aunque tampoco tengan en principio una consideración coactiva o de sanción. A diferencia de las preguntas, las interpelaciones en el Congreso de los Diputados españoles, pueden ser formuladas tanto por los diputados como por los Grupos parlamentarios, artículo ciento ochenta reglamento del congreso. En el Senado se continúa hablando de los senadores individualmente Artículo ciento setenta punto uno. Reglamento del senado.

Además, a diferencia del alcance puntual de las preguntas, las interpelaciones, conforme afirma, Santaolalla López;

"se corresponden con cuestiones más amplias y genéricas, relacionadas directamente con la médula de alguna política gubernamental o bien con hechos aislados, pero dotados de una gran resonancia política y social". <sup>62</sup>

En algunos países como el español, la interpelación suele provocar la apertura de un debate que termina con la votación de una moción en donde la Cámara fija suposición respecto al asunto debatido.

Esto quiere decir, que por medio de la interpelación, el parlamento llama a los ministros de gobierno o a cualquier otro funcionario para interrogarle, sobre cualquier situación que se considere oportuno hacerle preguntas al respecto.

En la República de Costa Rica, la interpelación se encuentra regulada, en el artículo ciento veintiuno de la Constitución Política, numeral veinticuatro, y en el

---

<sup>61</sup> José Antonio Alonso de Antonio Ángel Luis Alonso de Antonio

Obra citada, op.cit, Editorial DYKINSON, S. L. Madrid, año, 2002 p. 205.

<sup>62</sup> José Antonio Alonso de Antonio Ángel Luis Alonso de Antonio

Obra citada, op.cit, Editorial DYKINSON, S. L. Madrid, 2002 p. 205 y subsiguientes.

Reglamento Legislativo artículos: ciento ochenta y cinco, ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete.<sup>63</sup>

En la República costarricense, respecto a las interpelaciones, constitucionalmente se determina lo siguiente:

"24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes".<sup>64</sup>

Como puede apreciarse en la República costarricense, la interpelación únicamente puede ser aplicada a los ministros de gobierno, además no existe previsto ningún procedimiento, que culmine con una moción como si ocurre en otras legislaciones. Tampoco esta establecida la obligación para el ministro de tener que acudir obligatoriamente a la comparecencia a la cual ha sido citado.

---

<sup>63</sup> Reglamento Legislativo.

Interpelación y censura a los ministros.

Artículo 185. Moción de Interpelación

"Tienen derecho los diputados de pedir a la Asamblea que acuerde llamar a cualquiera de los Ministros de Gobierno, sea para interpellarlo o para que dé informes o explicaciones sobre los asuntos que se discuten. La moción que se presente para el caso, es una moción de orden".

Artículo 186. Visita del Ministro

"Cuando en atención al llamado, ingrese el Ministro al recinto de la Asamblea, el Presidente le informará el motivo de su comparecencia y le concederá inmediatamente la palabra para que haga la exposición o dé las explicaciones del caso. Una vez concluida la intervención del Ministro, se les concederá la palabra a los diputados que deseen hacerle preguntas concretas".

Artículo 187. Debate general sobre la comparecencia del Ministro

"Cuando no las hubiere, o estén contestadas las que se formularen, se abrirá, si algún diputado lo solicita, un debate general sobre la materia objeto de la comparecencia del Ministro, conforme con las disposiciones generales de este Reglamento. Durante este debate, será optativo para el Ministro permanecer en el recinto parlamentario".

<sup>64</sup> Ramírez Altamirano, Marina.

"Manual de Procedimientos Legislativos".

2.ed, San José Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, octubre año 1998, p. 38

## **Las comisiones de investigación:**

Las comisiones de investigación son, pequeños grupos de diputados que acompañados, de asesores legales y en otras materias de ser necesario, integra el plenario legislativo, para que investiguen cualquier asunto que le consideren de interés.

José Antonio Alonso de Antonio y Ángel Luis Alonso de Antonio, les definen como: "órganos parlamentarios colegiados y temporales que, con eficacia ad extra al Parlamento, se encargan de verificar y analizar un hecho de interés general como medio de exigencia de responsabilidad política o para coadyuvar a la depuración de una eventual responsabilidad jurídica". <sup>65</sup>

En el Estado costarricense, las comisiones de investigación, se encuentran normadas en el artículo ciento veintiuno constitucional numeral veintitrés y en el Reglamento Legislativo, de los artículos del noventa al noventa y siete.

A éste tenor la Carta magna costarricense, establece:

"23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente.

Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla". <sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> José Antonio Alonso de Antonio Ángel Luis Alonso de Antonio  
Obra citada, op.cit, Editorial DYKINSON, S. L. Madrid, año, 2002 p. 208-209.

<sup>66</sup> Solís Fallas, Alex.

"Tráfico de drogas : consecuencias y soluciones".

San José : Imprenta Nacional, 1988, p. 21 y subsiguientes:



## **Mociones de censura:**

Las mociones de censura son mecanismos de control parlamentario de empleo prioritario de los regímenes políticos parlamentarios.

Esto en razón que con las mociones de censura, se obtiene un resultado determinante, consistente en que cuando, se aprueba por el parlamento una de estas mociones de censura, obligatoriamente el gobierno debe dimitir y elegirse nuevos gobernantes.

Lo anterior obviamente no ocurre en los regímenes de carácter presidencial, por que las mociones de censura aprobadas no son vinculantes. Entonces no se puede obligar a dimitir al gobierno, ni tampoco el gobierno en nombre del presidente puede disolver las cámaras. O Parlamento.

La disolución de Parlamento, la define Manuel Fraga Iribarne en su obra el Parlamento Británico, de la siguiente manera:

“el procedimiento normal de terminar la vida de un Parlamento, la disolución es una prerrogativa real que ejerce constitucionalmente de acuerdo con el consejo de sus Ministros”. Agrega; “En principio debe admitirse que existe una ((convención constitucional» de que la disolución es conferida a requerimiento del Primer Ministro”. <sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Fraga Iribarne, Manuel

“El Parlamento Británico”.

Instituto de Estudios Políticos, Madrid, año 1961, p. 78

A continuación, aprovechando unos documentos, que me fueron proporcionados por funcionarios del archivo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, presentaré, una pequeña reseña de la inclusión del voto de censura como instrumento de control parlamentario, en la República costarricense.

Breve reseña histórica, a los orígenes del voto de censura en la República costarricense:

A cerca de la incorporación del voto de censura, tan importante en el marco del control político del Parlamento sobre el ejecutivo, veamos lo que los diputados constituyentes argumentaron en aquel momento histórico:

La moción fue propuesta por la fracción social demócrata de la Constituyente el distinguido jurisconsulto y diplomático Fernando Fournier defendió la propuesta diciendo que el implantar en Costa Rica, un sistema semiparlamentario que se practica en algunos países de América, como en Cuba, Guatemala y Perú; es un sistema intermedio entre el presidencialista que hemos vivido siempre en Costa Rica y el parlamentario adoptado en la mayoría de los países de Europa. Se ha comprobado que el sistema parlamentario, como el de Inglaterra, no es adecuado para los países latinos, lo ocurrido en España, Italia, Francia, lo demuestra, pero se ha creído que un sistema intermedio si puede adoptarse a la ideología de los pueblos latinos. Más adelante, reitera el Lie. Fournier que el voto de censura a un Ministro no vendría por motivos intrascendentes, sino por razones poderosas, cuando un Ministro haya cometido graves errores que perjudiquen a los intereses nacionales. Y termina diciendo el Lie. Fournier que si los funcionarios públicos son responsables ante los Tribunales, con más razón lo deben ser ante la Asamblea popular. Otro defensor de la proposición fue el Constituyente F. Vargas Vargas para quien esta institución era beneficiosa para los intereses del país. Dijo que si un Ministro está llevando el país al caos, a la ruina, lo lógico es que la Asamblea lo llame a cuenta. Y don Fernando Volio Sancho recopiló disposiciones al respecto

de varios países de la región para fundamentar la propuesta de la Fracción Social Demócrata. En el caso de Bolivia, las Cámaras pueden acordar la censura de los actos del Ejecutivo, dirigiéndola contra los Ministros del Estado, separada o conjuntamente. En Ecuador el Ministro de Estado que hubiere sido censurado por el Congreso dejará de ser tal y no podrá volver a serlo durante los años posteriores, ni en el período presidencial. En el Perú, el Ministro censurado debe dimitir, el Presidente de la República para que la ejecute y le ponga el enjuiciamiento al Ministro, si hubiera incurrido en responsabilidad.

Panamá y Guatemala tenían en la época, disposiciones de esta naturaleza, de tal manera que allí podemos encontrar en parte, la explicación de la moción de censura en el Derecho Constitucional Costarricense.<sup>68</sup>

Posiciones opuestas a que el voto de censura llevara incorporada una sanción jurídica.

Don Juan Rafael Arias Bonilla, en su intervención en la Constituyente(1) dijo que si se acepta que el Ministro que reciba un voto de censura, debe dimitir, traería como consecuencia conflictos entre el Legislativo y el Ejecutivo, llevando la desventaja el Poder que no tiene la fuerza pública. Don Juan Rafael Arias era de aquellas personas que creían que no hacía falta incorporar a la Constitución lo referente a la dimisión del Ministro pues creía que una vez censurado éste, renunciaría por su propia voluntad. El costarricense de aquellos años, aceptaría la moción si estuviera dirigida a que la Asamblea tuviera una mayor vigilancia sobre el Poder Ejecutivo, como fuerza moral, pero no ante un voto de censura que provoque la caída de un Ministro.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Información de las actas de la Asamblea nacional constituyente.

<sup>69</sup> Información de las actas de la asamblea nacional constituyente.





## **La cuestión de confianza:**

La cuestión de confianza, es un mecanismo que utiliza el jefe del gobierno, en los sistemas parlamentarios, para solicitar la confianza del parlamento, en determinada política gubernamental, pero si el parlamento no se la otorga entonces el gobierno, se encuentra obligado a presentar su dimisión.

En el Estado español, la cuestión de confianza, es un asunto que se encuentra regulada en el artículo ciento doce, de la Constitución Española, en donde se dispone al efecto:

"el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada a ese gobierno, cuando vote a favor de la misma la Mayoría simple de los Diputados.<sup>70</sup>

La cuestión de confianza representa un medio de control parlamentario sobre el Gobierno, debido a que la iniciativa la puede tomar exclusivamente el jefe del ejecutivo, al respecto puede observarse que, en primer lugar, supone un medio de presión del Gobierno sobre el Parlamento mediante eso que Blon-del, y que repite la doctrina más autorizada, denominó "amenaza de suicidio del Gobierno". Es decir, se intenta forzar el mantenimiento del respaldo inicial de la Cámara al Presidente del Gobierno porque de lo contrario se produciría una situación de inestabilidad política no solucionada además de forma automática como en el caso de la aprobación de una moción de censura. Es obvio que la cuestión de confianza supone, en segundo lugar, una forma de que el Parlamento, en éste caso sólo el Congreso de los Diputados, haga patente su

---

<sup>70</sup> Constitución Española 27 de diciembre año, 1978.

Centro de Estudios Políticos y constitucionales, Madrid año, 2001.

posición, su control en definitiva, sobre el Gobierno con la posibilidad de que éste tenga que presentar su dimisión. La legitimación para presentar la cuestión de confianza sólo se reconoce, al Presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros artículo 112 numeral ce. Es decir, la deliberación previa si bien constitucionalmente es obligatoria, no es vinculante para la decisión final, que la toma el Presidente, prueba de su carácter central en el entendimiento del Gobierno en la Constitución española.

Otro aspecto importante a destacar es el objeto de la cuestión de confianza, que se establece en el artículo ciento doce CE, en donde se dispone que la cuestión de confianza sólo puede plantearse sobre el programa del Presidente del Gobierno o sobre una declaración de política general.<sup>71</sup>

Cabe señalar que la Constitución Política de la República de Costa Rica, no contiene contemplado el asunto de la cuestión de confianza, lo que me parece lógico debido a que el nuestro es un régimen de gobierno presidencialista y éste es un mecanismo previsto para los regímenes de gobierno parlamentarios como previamente fue analizado en páginas precedentes.

---

<sup>71</sup> José Antonio Alonso de Antonio Ángel Luis Alonso de Antonio  
Obra citada, op.cit, Editorial DYKINSON, S. L. Madrid, año, 2002 p. 219-223.

## **D - Análisis de los mecanismos de control político, en los REGÍMENES de gobiernos presidencialistas.**

Como en el apartado anterior, han sido explicados ampliamente, los diferentes mecanismos de control político, a saber: las preguntas parlamentarias, las comparecencias, las interpelaciones, las comisiones de investigación, las mociones o votos de censura y la cuestión de confianza.

Con fundamento en lo anterior únicamente nos queda precisar cuales de los mecanismos de control parlamentarios descritos, se consideran que son más eficaces y eficientes para aplicarse en los regímenes políticos de gobiernos presidencialistas.

En lo tocante debemos precisar que, las preguntas parlamentarias, las comparecencias, las interpelaciones y las comisiones de investigación son los mecanismos de control político, que se aprecian como más apropiados para ser empleados en los regímenes políticos, que ostentan gobiernos presidencialistas.

En razón de que la cuestión de confianza y la moción de censura tienen unas utilidades, imposibles de alcanzarles en los sistemas de gobiernos presidencialistas. Como son lograr que el gobierno al recibir una moción de censura se encuentre obligado a presentar al parlamento su dimisión. También otra forma de dimisión es cuando pierde una solicitud para que el parlamento le mantenga la confianza otorgada, o en su defecto que por el presidente del ejecutivo se acuerde disolver las cámaras.

Como puede notarse el voto de censura es un procedimiento por el cual el Parlamento puede acordar censurar al gobierno o a los Ministros, pero este medio de acción que ejercen las Asambleas Legislativas, en los regímenes presidencialistas no implica su dimisión, por lo que este instituto deviene en ineficaz. Ya que el voto de censura en esas condiciones no tiene sanción coactiva, porque no produce la caída del Ministro, entonces la sanción es

exclusivamente de carácter moral y político, debido a que en esas condiciones la moción de censura, no llega a establecer en la norma constitucional su respectiva sanción coactiva, lo que sí se realiza en los regímenes parlamentarios.

Después de todo lo que hemos venido analizando durante el transcurso del desarrollo de esta tesis doctoral, nos llega el momento de proceder a distinguir entre los conceptos de control parlamentario y el concepto de control jurídico.

Tengo claro que lo que pretendo postular va a traer criterios a favor y criterios en contra, pero me siento en la obligación de tratar de diferenciar entre ambos conceptos.

Antes de entrar a formular el concepto de control político, y el concepto de control jurídico deseo razonar un poco mi posición en lo tocante respecto a las diferencias que observo:

El término parlamento tiene sus fundamentos en los regímenes parlamentarios, donde se transfiere para los regímenes presidencialistas, aunque en éstos últimos se asumen, los conceptos de Congreso como ocurre en la cámara de diputados de los Estados Unidos de América, o de Asamblea Legislativa como sucede en la República de Costa Rica y gran cantidad de los países Iberoamericanos. Se preguntarán a donde quiero llegar con esta disertación, al respecto deseo concienciar, que en un régimen parlamentario, el nombre de parlamento recibe su fundamento en la función que desempeña, y en la dependencia que se produce entre los órganos Legislativos y Ejecutivos, asunto que no ocurre en los regímenes presidencialistas. Porqué esta situación, simplemente porque en los sistemas presidencialistas, el Ejecutivo no depende del parlamento, congreso, o asamblea legislativa para mantener su nombramiento, ni éstos últimos órganos están expuestos a que el jefe del gobierno solicite su disolución. En razón que se opera bajo los principios de la separación de poderes, y cada uno de estos órganos es independiente, y

responsable por su función de forma exclusiva, de aquí que el control político cobre tanta importancia, debido a que finalmente el que va a brindar la sanción coactiva, no se encuentra en ninguno de los poderes (Legislativo, Ejecutivo), pero si existe sanción coactiva o de reprobación. Entonces se estarán preguntando quién es el que castiga, en estos casos la sanción deviene del verdadero titular del poder o sea el pueblo, quién decide retirar su confianza a ese grupo gobernante, y que mayor sanción que perder la confianza del electorado. Por este motivo el control político cobra una importancia de enormes valías.

Es importante clarificar una cuestión al respecto de lo cual estoy tratando, debido a que vengo hablando de sanción coactiva, y quedemos claros hablo de sanción coactiva no jurídica, ya que entre ambas también se enmarca una diferencia muy importante, como es que en la sanción coactiva se viene a realizar una separación de un funcionario, de determinado cargo político, o a retirarle la confianza a cualquier grupo gobernante. Esto no implica en ningún momento que se le este juzgando por otra causa diferente en los tribunales de justicia. Pero si se le esta sancionando, con la pérdida de su cargo.

Se preguntarán porque he estimado importante presentar estas consideraciones, esto lo realizo para diferenciar con mayor exactitud entre los conceptos de control político y control parlamentario.

Además, esto lo realizo para probar que en el control parlamentario, se obtiene un resultado inmediato, como es una vez aprobada una moción de censura, o retirada la confianza del parlamento a un gobierno, ese gobierno necesariamente debe marcharse, también ese gobierno de encontrar que el parlamento entorpece su función puede recurrir a la disolución de ambas cámaras.

En cambio en los sistemas presidencialistas en donde se ejerce de forma más viva el control político éste debe esperar a las próximas elecciones para recibir

la sanción coactiva o de reprobación que provendrán del jugador en este caso el pueblo.

Por todo lo detallado y muchas razones más que habría que perfilar con mucho más detalle y cuidado afirmo, que el control parlamentario es fruto de los regímenes de carácter parlamentario, a contrario sensu, el control político es producto de los regímenes presidencialistas. Esto no quiere decir que en los regímenes parlamentarios no se ejerza control político, ni que en los regímenes de corte presidencialista no se desempeñe control parlamentario, únicamente que en estos últimos casos el control parlamentario proviene prácticamente de una sola causa que es el juicio político, más conocido como impeachment.

Continuando con éste análisis, expongo el parecer de la profesora doctora María Asunción García Martínez: Quién reflexiona de esta manera:

“Una cuestión es el control jurídico, que es cuando se haya prevista la sanción concreta en determinada norma como puede ser la Constitución, sea ésta sanción política o de cualquier otra manera”.

Otra cosa diferente es el control jurisdiccional o judicial; que es el control que se impone por los jueces en el Poder Judicial.

Finalmente el control parlamentario o político, “es el que impone el parlamento, o la Asamblea Legislativa”.

Después de todo lo anterior brindemos el concepto de control político y el de control parlamentario.

### **El control político, debemos definirle de la siguiente forma:**

“Como aquel control que es ejercido, por el pueblo, congreso de los diputados, grupos parlamentarios, diputados individuales y órganos como el defensor del pueblo, grupos sociales como sindicatos, prensa y otros. Con este control político, todos los anteriores, vigilan y supervisan que el gobierno no se abuse y extralimite en el poder que le a sido designado por el pueblo. Este control es de naturaleza política y no obtiene una sanción coactiva inmediata”.

### **El control parlamentario debemos precisarle de la siguiente manera:**

“Como aquel control, que es ejercitado por el parlamento, en virtud de no estar de acuerdo con determinada actuación gubernamental, por tanto, se les somete a un juicio parlamentario, por medio de la moción de censura o cuestión de confianza y dependiendo de ese resultado se puede ocasionar la caída del gobierno, en el entendido que estos medios de reprobación sean aprobados”.





## ***Segunda parte:***

### ***Evolución histórica del Derecho Constitucional de la República de Costa Rica.***

Este segundo apartado de la investigación, está conformado por un único capítulo, el cual se encuentra subdividido en seis epígrafes los que se hallan relacionados de forma exclusiva a la República de Costa Rica, en los cuales se expone; un pequeño detalle sobre las principales características históricas, del Derecho público costarricense.

A) Inicia este capítulo justificándose en el primer epígrafe, que a pesar de lo dispuesto en el objetivo de la presente investigación, el cual pretende, exponer y analizar con propiedad cual es el rol, que en la actualidad, cumple la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, a través del ejercicio de las funciones de control político, que lleva a cabo sobre su gobierno y demás instituciones estatales.

Aclaremos que pese a lo primero, consideramos conveniente y oportuno brindar una pequeña síntesis histórica de las principales características, que dieron nacimiento al ordenamiento constitucional de la provincia de Costa Rica, en el año mil ochocientos veintiuno.

Por tal razón es que nos proponemos inspeccionar brevemente lo prescrito, en las primeras cuatro Constituciones políticas, con que se ha organizado la actual República de Costa Rica.

B) En este segundo epígrafe, se resalta la importancia que tuvo para la provincia de Costa Rica, la elección de su primer diputado, a las Cortes Españolas de Cádiz de mil ochocientos doce. Destacándose los beneficios que

para la provincia de Costa Rica, conllevó la aprobación de la Constitución española de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce.

C) En este siguiente epígrafe, se brinda un breve panorama histórico de algunas de las principales características que dieron base a la independencia de la provincia de Costa Rica, el veintinueve de octubre del año mil ochocientos veintiuno.

Adicionalmente, se examinan dos fuertes divergencias de criterios, provocadas por dos posiciones surgidas en la época en que ocurrió la independencia de la provincia de Costa Rica. En razón que el primer grupo, gestionaba que se diera la anexión de la provincia costarricense, al Estado mexicano y el segundo grupo, al contrario sensu, procuraba que se aprovechara la libertad obtenida y persistiera como una República libre e independiente conforme a como lo es en la actualidad.

D) En este epígrafe continuamos presentando un debate, en el que se analiza la posición respecto a la creencia de los historiadores y abogados costarricenses, a cerca de ¿cuál fue la primera Constitución con que se organizó la provincia de Costa Rica posteriormente a su independencia?.

Debido a que para la mayoría de costarricenses esta Carta Política, lo fué el, Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia de uno de diciembre del año, mil ochocientos veintiuno.

En cambio para otros costarricenses y algún no nacional, esta norma jurídica lo es, La Constitución de la Federación centro-americana dictada el veintidós de noviembre del año, mil ochocientos veinticuatro.

Para otros esta es la Ley fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero del año mil ochocientos veinticinco.

Con relación a lo expuesto, el autor de esta investigación, se permitió incorporar a tal debate a la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo del año, mil ochocientos doce.

Con la finalidad de determinar, si más bien no es a esta Carta Política española a la que debemos mencionar como la primera Constitución política, con la cuál se organizó la provincia de Costa Rica en el año mil ochocientos veintiuno, posterior a su independencia, entendiendo a esta norma jurídica española, como fuente inspiradora del constitucionalismo costarricense.

E) Con relación a lo anterior en este subsiguiente epígrafe, El autor de esta tesis doctoral, emite su criterio al respecto, señalando a su juicio cual de las cuatro Cartas Políticas auscultadas, fué la primera Constitución con que se organiza la provincia de Costa Rica, cuando alcanza a convertirse en un Estado libre e independiente.

Adicionalmente proporciona los motivos por los cuales califica al Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, de uno de diciembre del año, mil ochocientos veintiuno, como la segunda Constitución con que se rigió la provincia de Costa Rica.

F) En este último Epígrafe, se brindan las principales características de los diferentes poderes legislativos con que ha contado la República de Costa Rica, destacándose en cual Constitución Política de la nación, se incorpora por primera ocasión al control político, entre una de las funciones de su Asamblea Legislativa. (Poder Legislativo).



## ***Capítulo I***

### ***Consideración histórica del Derecho político de la República de Costa Rica.***

#### **A) Introducción a los Antecedentes históricos del derecho público de la República de Costa Rica.**

No obstante, que el objetivo primordial de esta tesis doctoral, como hemos venido manifestando, se encuentra fundamentado primordialmente en presentar y analizar cual es el rol, que en la materia del ejercicio del control político, desarrolla en la actualidad, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, a través del empleo de las funciones de control político, que lleva a cabo sobre su gobierno y demás instituciones del Estado.

Con el propósito de llegar a conocer este aspecto en detalle es conveniente y significativo destacar la forma a través de la cual, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, ha evolucionado durante su historia constitucional, hacia las llamadas funciones de control político, hasta llegar a culminarse con la labor que en esta materia desempeña en la actualidad la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Como precedente, a introducirnos, en esta cuestión, se considera oportuno y necesario ofrecer una pequeña síntesis histórica de las principales características, que dieron fundamento al nacimiento del Derecho público en la República de Costa Rica.

En consecuencia de lo anunciado precedentemente, es que se califica importante proceder a estudiar brevemente lo establecido, en las primeras cuatro Constituciones Políticas, con las cuales se organizó la República

costarricense. Obviamente sin olvidarnos de hacer referencia a importantísimos y valiosísimos antecedentes que se originaron previos a la independencia de la provincia de Costa Rica, entre los que se resalta como un aspecto de gran trascendencia, la elección del diputado por la República de Costa Rica a las Cortes españolas de Cádiz acaecidas el diecinueve de marzo del año mil ochocientos doce.

Se reflexiona que como resultado, al inestimabilísimo suceso que proporciono la participación de los diputados de los países Iberoamericanos, en las Cortes españolas de Cádiz de mil ochocientos doce, entre los cuales se encontró la provincia de Costa Rica, con su diputado señor presbítero don Florencio del Castillo.

Este acontecimiento nos lleva a pensar objetivamente fue el que proporcionó mayor seguridad y confianza, a los gobernantes Iberoamericanos para empezar a combatir por su libertad e independencia, la que comienza a adquirirse en algunos países Americanos, años después a tan significativo acontecimiento. Como fue el proporcionado por la participación de los diputados ibero americanos en las Cortes españolas de Cádiz de mil ochocientos doce.

Con esta situación incluimos que una vez ocurrida la independencia del país de México y subsiguientemente realizada la de la provincia de Guatemala, el quince de septiembre del año mil ochocientos veintiuno, las demás provincias Centroamericanas también deciden continuar con el derrotero marcado, por la nación mexicana y por la provincia de Guatemala.<sup>72</sup>

Y entonces, proceden a independizarse ellas también de España, o sea que este acaecimiento quiérase o no, fue fundamental para la independencia de las

---

<sup>72</sup> Prats, José María, dirección de obra:

"Enciclopedia de Costa Rica su historia, tierra y gentes".

ed. San José, Océano grupo Editorial, volumen I, año, 1997. p. 246

demás provincias centro americanas, entre las cuales indiscutiblemente se encontraba la provincia de Costa Rica, la que culmina con su independencia finalmente el veintinueve de octubre del año, mil ochocientos veintiuno a través de la firma de su acta de independencia la que se realiza en su capital la que en aquella época era la Ciudad de Cartago.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Peralta, Hernán G.

"Agustín de Iturbide y Costa Rica".

Editorial Costa Rica, año 1968, p. 186.

## **B) Elección del primer diputado por la República de Costa Rica, a las Cortes Españolas de Cádiz de mil ochocientos doce.**

Encontramos, como el primer gran antecedente político de relevancia, y destacada notoriedad en el cual vienen a intervenir los costarricenses, en representación de la pequeña provincia de Costa Rica, se remonta al año 1810, cuando se concede la elección de nuestro diputado, para que nos represente en las Cortes Españolas de Cádiz.<sup>74</sup>

Cortes que fueron celebradas en el año mil ochocientos doce. Evento que ocurre con anterioridad a nuestra independencia, en razón de que como se especificó anteriormente, ésta se origina de la independencia de Guatemala, sucedida el quince de septiembre del año mil ochocientos veintiuno y como ya indicamos la República de Costa Rica se independiza de España, oficialmente hasta el veintinueve de octubre de ese mismo año.

No obstante, a esto, corresponde aclarar que la diputación conjunta que la provincia, mantenía con la provincia de Nicaragua, había independizado de España, a ambas provincias el trece de octubre del año mil ochocientos veintiuno; pero la República de Costa Rica oficializa su libertad con la firma de su acta de independencia firmada en la ciudad de Cartago, antigua capital de la provincia, hasta el veintinueve de octubre del año, mil ochocientos veintiuno.

Con esto concretamos que con la participación en las Cortes Españolas de Cádiz, de mil ochocientos doce se origina la primera participación en un acto relativo a la función legislativa y electoral, al cual asisten los criollos Costarricenses, en representación de la pequeña provincia de Costa Rica.

---

<sup>74</sup> Obregón Quesada, Clotilde.

"El Proceso Electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, año 1808-1998".  
Editorial de la Universidad de Costa Rica, Primera edición año 2000, p. 30



Se ultima que este acontecimiento se remonta a los días dos de julio y uno de octubre, del año mil ochocientos diez, cuando se reunió en la ciudad de Cartago, el Cabildo, presidido por su gobernador, señor don Tomás de Acosta, con el único propósito de obedecer la orden del Supremo Consejo de Regencia, fechada catorce de febrero de mil ochocientos doce, en la que se establecía que debía elegirse, un diputado por la provincia de Costa Rica, que llevase la representación de la provincia a Cortes Españolas en el año mil ochocientos doce.

Esta fue la primera ocasión en que se designa a un criollo costarricense, para que representare políticamente a la provincia de Costa Rica; en un evento de tal magnitud, nombramiento que como determiné anteriormente, recayó en el Presbítero, don Florencio del Castillo, quién fue el diputado por la provincia de Costa Rica, a las Cortes de Cádiz, con una participación muy destacada y digna, para los costarricenses y demás ciudadanos centroamericanos.<sup>75</sup>

Esta reunión de Cortes inscribe un suceso muy importante relativo al desarrollo político, de los representantes de los países de Ibero América. Debido a que fue, durante su celebración, cuando se dio la aprobación de la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce y tal acontecimiento sirvió como sustente para que se instituyeran las diputaciones provinciales, organismos por los cuales más habían luchado los diputados de Ibero América.

Estas diputaciones en Centro América podemos indicar que funcionaron durante dos legislaturas fundamentados en:

"los periodos de vigencia de la Constitución de Cádiz, el primero de 1813 a 1814.

---

<sup>75</sup> Obregón Quesada, Clotilde.

Obra citada, op.cit. Editorial de la Universidad de Costa Rica, Primera edición año 2000, p. 31.

Y el segundo de 1820 hasta después de la independencia de la provincia de Costa Rica".<sup>76</sup>

Identificamos, el acto de la participación de la República de Costa Rica, en las Cortes de Cádiz, como uno de los de mayor importancia, en los cuales han podido participar los costarricenses, debido a que es el que da sustento a la participación política de los costarricenses. Ciertamente en esa época, en la provincia de Costa Rica, no se contaba con una organización política en la que sobresaliera la conformación de un gobierno y de un Parlamento, pero con ese primer suceso, se elige a nuestro diputado, para que nos representase en las Cortes Españolas de Cádiz, lo que nos da origen a dos funciones entrelazadas, se legisla, labor de los parlamentos y se elige, labor electoral, y con tal acontecimiento se puede asegurar empieza la participación política de los costarricenses, ya que del mismo se derivan otras actuaciones de importancia, hasta que aparece la independencia de las provincias del Centro de América, la que inicia el quince de septiembre del año mil ochocientos veintiuno, con la firma del acta de independencia de la provincia de Guatemala y la invitación al resto de las provincias centroamericanas para seguir sus pasos.

En la obra Historia General de Costa Rica, se registra que los efectos positivos de la aplicación en Costa Rica de la Constitución española de Cádiz, en su primera etapa, se hicieron sentir de inmediato:

"cuando generaron un crecimiento cuantitativo de los ayuntamientos, al establecerse en una ley-reglamento que cuatro días después de emitirse la Constitución en los pueblos con más de mil personas, debería formarse un municipio. Además decretaban la libertad de pensamiento, el respeto a la propiedad privada, la libertad de comercio, la representación popular, la

---

<sup>76</sup> Obregón Quesada, Clotilde.

Obra citada, op.cit. Editorial de la Universidad de Costa Rica, primera edición año 2000, P. 32.

abolición de las torturas como pena infamante, la abolición del Santo Oficio y se dieron muchas otras conquistas liberales". <sup>77</sup>

Se inscribe que es de esta forma en que comienza la aplicación de la Constitución española de Cádiz, en la provincia de Costa Rica, la que podemos manifestar tiene una segunda etapa la que ocurre en el año, mil ochocientos veinte, al establecerse en España el régimen constitucional. <sup>78</sup>

Esta segunda fase continúa cuando en,

"Costa Rica la carta fue jurada nuevamente el 30 de julio de ese año por las autoridades civiles y militares y el inmenso pueblo, según rezan los documentos de la época, en este segundo período se logro cierta ampliación por cuanto no solo encontró una provincia ligeramente más desarrollada en lo económico y en lo social sino que la experiencia del primer ciclo hizo que se implantara en forma más rápido y efectivo el modelo institucional". <sup>79</sup>

Desde esa fecha en adelante, la Constitución de Cádiz, continúa normando a la provincia de Costa Rica, hasta que se llega a emitir, el primero de diciembre del año, mil ochocientos veintiuno el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia.

Pero es necesario y obligatorio clarificar, que con este acontecimiento no termina la aplicación de la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, en la República de Costa Rica, sino más bien ese acontecimiento refuerza, la validez de dicha norma jurídica, como podrá observarse en los posteriores apartados de la presente investigación

---

<sup>77</sup> Cruz de Lemos, Vladimir.

"Historia General de Costa Rica".

San José; Costa Rica: Euroamericana de Ediciones año 1987 p. 40-41.

<sup>78</sup> Obregón Quesada, Clotilde.

Obra citada, op.cit. Editorial de la Universidad de Costa Rica, primera edición año 2000, P. 39.

<sup>79</sup> Cruz de Lemos, Vladimir.

Obra citada, op.cit. Euroamericana de Ediciones año 1987 p. 42.

## **C) Breve panorama histórico de la independencia de la provincia de Costa Rica.**

Se cuenta con informaciones de que la provincia de Costa Rica, era desde inicios del siglo XIX, una pequeña provincia del Imperio Español y dada su condición de territorio de frontera, había sido la parte más austral del Virreinato de Nueva España; y esta pequeñísima provincia, se encontró adherida a la Capitanía General de Guatemala y a la Audiencia que tuvo su sede, en ciudad de Guatemala, hasta que se consiguieron instituir las Diputaciones Provinciales, como uno de los resultados derivados de la aprobación de la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce.<sup>80</sup>

Como hemos venido afirmando, la independencia de la provincia de Costa Rica, se puede manifestar, se originó como consecuencia de la independencia de la provincia de Guatemala, y con este acto se da base a la independencia de las demás provincias del área Centro Americana. Es de esta manera que la provincia de Costa Rica, oficializa su independencia el día veintinueve de octubre de mil ochocientos veintiuno, al firmarse en la Ciudad de Cartago, su acta de independencia. Recalcamos mucho esta fecha, puesto que en la República de Costa Rica, la fecha de independencia se celebra oficialmente todos los años, los días quince de septiembre, al igual que en el resto de los demás países Centro Americanos; con lo que con tal acto de celebración conjunta, se extravía nuestra verdadera fecha de independencia.

Conviene aclarar, que la provincia de Costa Rica, para conseguir su independencia, no llega a combatir con su metrópoli, sino que esto se produce de forma pacífica y sin derramamiento de sangre ni pérdidas de vidas de ciudadanos costarricenses, más bien si se quiere, se presenta de modo sorpresivo e inesperado, y por ende al hallarse libre e independiente, se

---

<sup>80</sup> Obregón Quesada, Clotilde.

Obra citada, op.cit. Editorial de la Universidad de Costa Rica, primera edición año 2000, P. 26.

encuentra obligada a enfrentarse con enormes problemas, derivados de su pequeñez territorial, poquísima infraestructura y gran pobreza de sus gentes, lo que da como resultado serios obstáculos, sociales, económicos y culturales. Ya que con anterioridad a su independencia, ésta había sido una región olvidada y muy descuidada, de tal manera que en el año mil ochocientos nueve, incluso su Gobernador, el señor Acosta, le había llegado a calificar, como la provincia, más indigente de toda la monarquía Española, tomando en cuenta que no se conocían periódicos, tampoco existía imprenta, ni Botica y eran contadas las pocas personas que supiesen leer y escribir. Adicionalmente, no se disponía de armamento de guerra, tropas disciplinadas, jefes militares, ni elementos de riqueza o de comercio, toda la riqueza pública con que se disponía en la provincia consistía principalmente en un poco de cacao, que servía para el consumo interior y también se utilizaba además como moneda, asociado a lo anterior su población era muy escasa; con gran trabajo en esa época sus pobladores llegaban a sesenta mil habitantes.<sup>81</sup>

Un factor más de dificultad al que debieron hacer frente los costarricenses; estuvo suscitado por la poca experiencia política que poseían sus dirigentes, esto es notorio y palpable, en razón que al encontrarse siendo libres, no tenían claro ni sabían que hacer con el naciente Estado, si unirlo a una entidad política mayor, como pudo ser, en aquella ocasión, el Imperio Mexicano de Iturbide o la República Federal Centroamericana, o declararla como una República democrática, libre e independiente como lo es en la actualidad. Aunado a este factor, se sostuvo una enconada lucha, para determinar, cual de sus cuatro principales ciudades, sería elegida para que fuese su capital, la que finalmente y después de muchas dificultades fué establecida en la ciudad de San José, hasta la fecha de hoy.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> González Viquez, Cleto.

"Obras históricas, tomo I".

Editorial Universitaria, San José, Costa Rica, año 1958, p. 17 y subsiguientes.

<sup>82</sup> Obra coordinada por: Domingo García Belaunde- Francisco Fernández Segado- Rubén Hernández Valle.

"Los Sistemas Constitucionales Iberoamericanos".

Editorial Dykinson, Madrid, año 1992, p. 213.

Es preciso consignar que el veintinueve de octubre del año, mil ochocientos veintiuno cuando la provincia de Costa Rica, declara su independencia definitiva del Gobierno Español, se mantenía, como una realidad su anexión al Imperio Mexicano, sustentado en las regulaciones del plan de Iguala. De hecho que el catorce de octubre del año, mil ochocientos veintiuno, el señor Gallegos, se refirió a la anexión al país de México. Mientras que el dieciséis de octubre de ese mismo año el ayuntamiento de San José solicitó se realizara la elección de un: "gobierno propio, independiente, de tipo provincial, que, aunque interino, pudiese personificar a Costa Rica como tal entidad dentro de la comunidad centroamericana". <sup>83</sup>

Conjuntamente los directores del Ayuntamiento de San José, el treinta de octubre del año mil ochocientos veintiuno, se pronuncian indicando no conocer el plan de iguala, también conocido como de las tres garantías. En el que se procuraba la anexión de la provincia de Costa Rica, al Estado mexicano. <sup>84</sup>

Cabe determinar que a partir de ese suceso. Surgen en el área Centroamericana, incluyendo entre ellas a la República de Costa Rica, dos tendencias políticas, de corte claramente definido. Estas dos tendencias políticas se denominaron:

- 1.- Anexionistas y se definían como imperialistas.
- 2.- Separatistas que se justificaban como republicanos. <sup>85</sup>

Desde ese momento de nuestra historia política, inician en la República de Costa Rica, las contiendas entre esas dos tendencias políticas; de ideas

---

<sup>83</sup>Peralta, Hernán G.

Obra citada, op.cit. Editorial Costa Rica, año 1968, p. 155.

<sup>84</sup> Peralta, Hernán G.

Obra citada, op.cit. Editorial Costa Rica, año 1968, p. 151.

<sup>85</sup> Peralta, Hernán G.

Obra citada, op.cit. Editorial Costa Rica año 1968, p. 139 y subsiguientes.

totalmente contrarias y opuestas en sus objetivos, a lo que debería hacerse con el naciente Estado costarricense.

Por tal motivo, el grupo político, que conformaban los separatistas, y que en especial, eran dirigidos por los pobladores de las localidades de lo que son hoy en día las provincias de Heredia y Cartago, inician con una fuerte lucha en razón que pretendían a cualquier precio, anexar a la provincia de Costa Rica, al Estado Mexicano de Iturbide.

Mientras que el grupo político liderado por los anexionistas, y representados por los habitantes de los pueblos, que conforman en la actualidad, las provincias de Alajuela y San José, procuraban más bien que la provincia, se instituyera como una República libre e independiente, como es actualmente, esto se logra consolidar años después.

También es interesante, destacar como un aspecto más de relevancia, acerca del origen institucional del régimen político costarricense, es que el mismo es de procedencia netamente Consejo, en consecuencia de lo cual, de los Ayuntamientos que organizaron la vida pública de Costa Rica, de mil ochocientos veintiuno a mil ochocientos veinticuatro, no podía esperarse que surgiera otra forma más de gobierno, que la República democrática, de la que hoy en día nos encontramos tan orgullosos los costarricenses.<sup>86</sup>

Es menester recordar que el doce de noviembre de mil ochocientos veintiuno se reunieron en Cartago, los Delegados de los pueblos de la provincia. En esta reunión se integró una junta en calidad de gobierno provisional, en la que se aceptó la renuncia del representante de España, Coronel don Juan Manuel de Cañas, asumiéndose en ese momento, todas sus funciones tanto civiles como militares, y ante ese panorama el veintitrés de noviembre, se acuerda por la junta, que se redacte el plan de gobierno provisional para toda la provincia,

---

<sup>86</sup> Peralta, Hernán G.

Obra citada, op.cit. Editorial Costa Rica año 1968, p. 141-142.

para lo que conformaron una comisión con los señores, don Juan de los Santos Madrí, don José Santos Lombardo, el licenciado don Rafael Barrueta, don Juan Mora Fernández y don Joaquin de Iglesias.<sup>87</sup>

Finalmente, el primero de diciembre de mil ochocientos veintiuno fué discutido y aprobado el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, firmándole los representantes de veintidós ciudades, Villas y Pueblos, entre otros los legados de Cartago, San José, Heredia y Alajuela, que eran las mayores poblaciones de la provincia costarricense.

Cabe indicar que el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, estuvo conformado, por siete capítulos y 58 artículos y lo caracterizó el interinato.<sup>88</sup>

Como se puede notar en lo descrito, este Pacto nació como un plan de gobierno interino, para toda la provincia, más que como una Constitución, de hecho que en el mismo nunca aparece el nombre de Constitución, sino que se hace en espera de elegir el Estado al que se incorporará la provincia de Costa Rica.

Pese a lo ya advertido es revelador exponer, que para llegar a contar con un régimen político, como el que ostenta la República de Costa Rica actualmente, se debieron superar muchas contiendas internas, a las que por falta de tiempo y por que se desvían del objetivo medular de la investigación, no será viable referirse en esta tesis doctoral, pero se anota como relevante:

superar la fallida anexión a México, la que se prescribió en el artículo II del acta de su independencia, y que se ratificó, en las reformas operadas al Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, el diez de enero de

---

<sup>87</sup> Peralta, Hernán G.

"el Derecho Constitucional y la Independencia de Costa Rica".

Trejos Hermanos San José Costa Rica, año, 1965, p. 9-16.

<sup>88</sup> Fernández Guardia, Ricardo.

"La Independencia y otros Episodios".

Editorial Trejos Hermanos, San José, Costa Rica, año 1928, p. 28-32.



mil ochocientos veintiuno en las que, resuelven la anexión al imperio mexicano, con las instrucciones siguientes:

se enviarán los "diputado o diputados que se le señalen y se sujetará a la Constitución, que aquel Soberano Congreso establezca".

Manifestándoles que se observaría nuestro Pacto, hasta que se formara la Constitución del Imperio o señalasen por parte de México, las autoridades y orden que debían regirla.<sup>89</sup>

Con esto se tiene que el Estado mexicano, desaprovechó la gran oportunidad, que los costarricenses, le colocaron en bandeja de plata, para que se adueñaran de la provincia de Costa Rica, lo que pudieron hacer simplemente designando sus autoridades, para que les gobernaran, lo que hubiese sido completamente legal y ajustado a la voluntad expresada por los representantes de la provincia, conforme a lo convenido en las reformas efectuadas al Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, el diez de enero de mil ochocientos veintidós.

---

<sup>89</sup> Mena Brenes, Marco A. Compilador.

"Colección de Constituciones de Costa Rica, del Pacto de Concordia a la Constitución Política de 1949".

San José, Costa Rica. Imprenta Nacional, año 2000 p. 21 y subsiguientes.

Reformas al Pacto Social. En la muy noble y muy leal ciudad de Cartago, reunidos en la Junta de provincia los señores electores de partido que suscriben, después de haber observado las formalidades prevenidas por los artículos 13 y 14 del Pacto provincial concluido y celebrado en esta ciudad el 1 de diciembre próximo pasado y de acordar en sesiones preparatorias cuanto pareció conducente al lleno legal de su misión, previo el reconocimiento y aprobación de sus respectivos nombramientos y poderes, y en conformidad del artículo 15, se ha discutido el Pacto indicado en toda su extensión. En cuya consecuencia, en uso de sus respectivos poderes, acordó la Junta hacer y hace las declaraciones siguientes:

1ª Que habiéndose formado el proyecto antes que la provincia, como parte del reino de Guatemala, fuese invitada por el Excmo. señor don Agustín de Iturbide, presidente de la Serenísima Regencia de México, a unirse a aquel Imperio, y estando ahora decididos los pueblos a la unión, enviará esta provincia a las Cortes de México al diputado o diputados que se le señalen y se sujetará a la Constitución que aquel Soberano Congreso establezca: en cuyo concepto queda reformado el artículo 1º y cumplido el final del 45.

2ª—Que en conformidad de la anterior declaración se observará nuestro Pacto con las reformas que aquí se expresan, hasta que se forme la Constitución del Imperio o que la Serenísima Regencia, oída la Representación de la provincia, señale las autoridades y orden que deban regirla.

Lo mencionado finalmente, no llega a consolidarse dado a que México no cumplió con las condiciones pactadas para la unión, por lo menos con este argumento el Congreso de representantes de la provincia, se reúnen y resuelven, que Costa Rica se encuentra totalmente libre y sin enlace de unión alguno, al imperio mejicano, por no haberse concretado por ese Estado, lo convenido para su anexión. Debido a que las instituciones fundamentales prometidas por el emperador Don Agustín I, habían degenerado y teniéndose el temor de mirar inmersa a la provincia, en las discordias de los partidarios del absolutismo y de la República que existían en el norte.

Por lo que apoyándose en estas argumentaciones, se acordó declarar que la provincia de Costa Rica, era libre, neutral y pacífica espectadora, y que se pondría en vigorosa defensa para resguardarse de los atentados que sufriera en contra de su libertad.

Con este panorama de confusiones, el catorce de marzo del año, mil ochocientos veintitrés el Congreso de representantes aprueba, una moción, con la finalidad de poner a la provincia de Costa Rica, bajo el protectorado de Colombia, lo que finalmente tampoco aconteció.

Además, en esa misma fecha se acuerda reorganizar el gobierno de Costa Rica, confiándolo a una junta de tres individuos que se llamó Diputación de Costa Rica, conformada por un jefe político, un intendente y un comandante general de armas. A esta junta, también se le ha solido dar el nombre de tribunal superior de justicia o triunvirato.<sup>90</sup>

Concluyendo finalmente, el Congreso de representantes, el diecisiete de marzo de mil ochocientos veintitrés, con la aprobación del primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, en el cual en su artículo dos se conservaba la disposición, que establecía que la Provincia de Costa Rica,

---

<sup>90</sup> Fernández Guardia, Ricardo.

Obra citada, op.cit. Editorial Trejos Hermanos, San José, Costa Rica, año 1928, p. 105 y subsiguientes.

"Sería dependiente o confederada, únicamente de potencia americana a quien le conviniese adherirse".<sup>91</sup>

Con este panorama de confusiones, últimamente, se termina siendo parte de la Federación Centroamericana, a la que se incorpora la provincia de Costa Rica, al decretarse el veintidós de noviembre del año, mil ochocientos veintitrés la Constitución Federal para las provincias centro americanas, dicha anexión fue producto de las circunstancias políticas de la época, más que a una decisión debidamente reflexionada, por lo que igualmente se separa años después dado a que este proyecto también llegó a fracasar.<sup>92</sup>

Nos llama la atención que la vigencia normativa de este Estatuto o (Constitución), fuere tan efímera, tomando en consideración que el dieciséis de mayo del año, mil ochocientos veintitrés , se emitió el segundo Estatuto Político, como su nueva Constitución, o sea que la norma constitucional anterior, no rigió a la provincia, ni siquiera por un periodo de dos meses.

Esto como consecuencia a que el grupo político, encabezado y dirigido por los imperialistas el veintinueve de marzo de mil ochocientos veintitrés, procedieron a apoderarse del cuartel de Cartago y a proclamar el imperio mejicano; contando para esto con el apoyo de la población de Heredia.

Como respuesta a tal enmaraño, los pobladores de Alajuela y San José, resolvieron no estar conformes con tal actuación y en razón de esto, se pronunciaron a favor de la República, y de esta forma, el cinco de abril del mismo año, las fuerzas militares de Republicanos e imperialistas se enfrentaron en la zona del Alto de Ochomogo y allí dolorosamente y tristemente para todos los nacionales, se procedió a derramar la primera sangre de un hermano costarricense.

---

<sup>91</sup> Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, catorce de marzo de 1823.

<sup>92</sup> Peralta, Hernán G.

Obra citada, op.cit. Editorial Costa Rica año 1968, p. 312 y subsiguientes.

Luego el republicano, don Gregorio José Ramírez se adueñó de la ciudad de Cartago, y a consecuencia de esta victoria, la capital de la provincia fue trasladada en primera oportunidad a San José por decreto del Congreso de delegados.<sup>93</sup>

Por otra parte en opinión de muchos de los historiadores y escritores, en la República de Costa Rica desde su independencia, hasta el siete de noviembre del año mil novecientos cuarenta y nueve, se han emitido, catorce constituciones políticas. Pero del análisis de la historia constitucional del país, se determina que estas Cartas Magnas, han sido menos a las consignadas.

Tenemos, que las primeras ocho constituciones, con que se organiza el Estado costarricense, fueron dictadas durante los primeros cincuenta años de vida constitucional, de (mil ochocientos veintiuno a mil ochocientos sesenta y nueve). Época que se puede calificar como el período Constitucional, más inestable con que se ha encontrado la Nación costarricense durante toda su vida constitucional. Debido a que las otras tres constituciones, con que se ha regulado el país, al contrario de lo anterior han sido producidas durante el lapso de más de ciento veintidós años de vida constitucional independiente.

Es necesario aclarar que la Constitución que rigió al país, en el año, mil novecientos diecisiete, solo estuvo vigente por un período de dos años; en razón que la misma fue fruto de un régimen dictatorial liderado por los hermanos Tinoco. Por lo cual al volver el país, al estado de democracia se puso nuevamente en vigencia la Constitución política de mil ochocientos setenta y uno, y la Constitución con que hoy en día se regula el Estado costarricense data de siete de noviembre del año mil novecientos cuarenta y nueve y cuenta en la actualidad con un período de continuidad de más de cincuenta y cuatro años de vigencia constitucional.

---

<sup>93</sup> Fernández Guardia, Ricardo.

"Cartilla Histórica de Costa Rica".

Imprenta Lehmann, San José Costa Rica, año 1957, p. 63.

Con lo explicado anteriormente, se puede demostrar, que la estabilidad constitucional vivida por la República de Costa Rica, a partir del año mil ochocientos setenta y uno ha sido bastante estable.<sup>94</sup>

Se debe aclarar que el dato que se consigna por parte de los escritores a cerca de que la República de Costa Rica durante toda su historia de vida constitucional, ha contado con catorce constituciones es erróneo, porque en realidad solamente se han promulgado por asambleas constituyentes de la República de Costa Rica, once constituciones y además, se participó en la elaboración de la Constitución para la Federación Centro Americana dictada el veintidós de noviembre de mil ochocientos veinticuatro.

Para que no quede ninguna duda de lo que se afirma se van a agrupar todas estas Cartas Políticas, de la número uno a la número once indicando el año de promulgación y el periodo de vigencia de cada una de ellas, de la siguiente manera:

1.- "Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno".

Producido, el uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno y derogado, con el primer Estatuto Político, el diecisiete de marzo de mil ochocientos veintitrés.  
Periodo de existencia, un año, tres meses y dieciséis días.

2.- "Primer Estatuto Político de la provincia de Costa Rica de diecisiete de marzo de mil ochocientos veintitrés".

Producido, el diecisiete de marzo de mil ochocientos veintitrés y derogado con el segundo Estatuto Político, el dieciséis de mayo de mil ochocientos veintitrés.  
Periodo de existencia, un mes y veintinueve días.

---

<sup>94</sup> Coordinada por: Domingo García Belaunde- Francisco Fernández Segado- Rubén Hernández Valle.  
Obra citada, op.cit, editorial Dykinson, Madrid, año 1992, p. 214.

3.- "Segundo Estatuto Político de la provincia de Costa Rica de dieciséis de mayo de mil ochocientos veintitrés".

Producido, el dieciséis de mayo de mil ochocientos veintitrés y derogado con la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco.

Periodo de existencia, un año, ocho meses y cinco días.

4.- "Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco".

Fué producida, el veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco, existió como carta política, por primera vez, del veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco al veintisiete de mayo de mil ochocientos treinta y ocho.

Periodo de existencia, trece años, cuatro meses y seis días.

Luego fué habilitada por segunda vez, el seis de junio de mil ochocientos cuarenta y dos y derogada oficialmente, con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica de diez de abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Nuevo periodo de existencia, un año, diez meses y cuatro días.

5.- "Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica de diez de abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro".

Fué producida, el diez de abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro y derogada con la Constitución de veintiuno de enero de mil ochocientos cuarenta y siete.

Periodo de existencia, dos años, nueve meses y once días.

6.- "Constitución Política de veintiuno de enero de mil ochocientos cuarenta y siete". Carta Política reformada el veintidós de noviembre de mil ochocientos cuarenta y ocho".

Producida, el veintiuno de enero de mil ochocientos cuarenta y siete y derogada oficialmente con la Constitución de veintisiete de diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve.

Periodo de existencia, doce años, once meses y seis días.

7.- "Constitución Política de veintiséis de diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve".

Fué producida, el veintisiete de diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve y derogada con la Constitución de quince de abril de mil ochocientos sesenta y nueve.

Periodo de vigencia, nueve años, tres meses y diecinueve días.

8.- "Constitución Política de quince de abril de mil ochocientos sesenta y nueve".

Producida, el quince de abril de mil ochocientos sesenta y nueve y derogada oficialmente con la Constitución de siete de diciembre de mil ochocientos setenta y uno.

Periodo de existencia, dos años, siete meses y veintidós días.

9.- "Constitución Política de siete de diciembre de mil ochocientos setenta y uno".

Fué producida, el siete de diciembre de mil ochocientos setenta y uno, y anulada el treinta de julio de mil ochocientos setenta y seis por un golpe de Estado. Entonces la primera vez subsistió, por el termino de 3 años, siete meses y veintitrés días.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Obregón Loría, Rafael.

"El Poder Legislativo en Costa Rica".

Asamblea Legislativa año 1966, p. 376.

Luego esta misma Constitución con algunas reformas fue puesta en vigencia por segunda vez por el propio dictador, días antes de su muerte, mediante decreto ejecutivo de veintiséis de abril de mil ochocientos ochenta y dos en que devolvía al país, al orden constitucional.<sup>96</sup>

Entonces la Constitución del año mil ochocientos setenta y uno llegó a regir nuevamente a Costa Rica, hasta el veintisiete de enero de mil novecientos diecisiete, cuando una vez más fue roto el orden Constitucional, mediante un golpe de estado provocado por los hermanos Tinoco.

Con lo que el segundo periodo de vigencia fue de 34 años, nueve meses y un día.<sup>97</sup>

10.- "Constitución Política de dieciocho de junio de mil novecientos diecisiete". Existió por dos años, dos meses y dieciséis días, hasta el tres de septiembre de mil novecientos diecinueve, cuando mediante decreto ejecutivo fué derogada y puesta por tercera vez en vigencia la Constitución Política de mil ochocientos setenta y uno. Hasta que finalmente fué derogada oficialmente con la Constitución Política de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, subsistiendo en esta ocasión por un tiempo de treinta años, dos meses y cuatro días.

11.- "Constitución Política de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve".

Es la Constitución vigente en la actualidad. Con más de cincuenta y cuatro años de subsistencia en forma ininterrumpida, de vida constitucional.

Como puede observarse en la República de Costa Rica, desde el año mil ochocientos veintiuno y hasta el año mil novecientos cuarenta y nueve, por

---

<sup>96</sup> Obregón Loría, Rafael.

Obra citada, op.cit. Asamblea Legislativa año 1966, p. 387.

<sup>97</sup> Obregón Loría, Rafael.

Obra citada, op.cit. Asamblea Legislativa año 1966, p. 443.



asambleas constituyentes, debidamente instituidas, únicamente y de manera oficial han sido instituidas once Constituciones políticas, de la forma anteriormente descritas. Aunque la mayoría de ellas, obedecieron a la fuerza de los militares, que ponían y quitaban presidentes a su antojo.

Adicionalmente, la República de Costa Rica, también se encontró, regida por la Constitución que regulaba a todas las naciones que constituyeron la Federación Centroamericana. En relación a esto cabe señalar que la Constitución de la República Federal de Centro América de veintidós de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, y que fué reformada el trece de febrero de mil ochocientos treinta y cinco. Rigió a Costa Rica hasta el veintisiete de mayo de mil ochocientos treinta y ocho, con un periodo de vigencia de trece años, seis meses y tres días. Queda por definir la situación, de si es posible otorgar el título de Constitución de la República de Costa Rica, a la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce? Con lo que estos datos podrían parcialmente cambiar.

Además, algunos escritores e historiadores, llegan a incluir entre las constituciones políticas que han regido a la República de Costa Rica, a la Ley de Bases y garantías de ocho de marzo de mil ochocientos cuarenta y uno. Ley que fue puesta en vigencia, mediante decreto ejecutivo dictado por el licenciado Braulio Carrillo el ocho de marzo de mil ochocientos treinta y ocho, mediante su decreto ejecutivo, y que fue derogada oficialmente, el seis de junio de mil ochocientos cuarenta y dos, una vez que ya había sido derrocada la dictadura del licenciado Carrillo.

Esta norma jurídica, tuvo un periodo de existencia de un año, dos meses y veintidós días. Pero lógicamente no es posible de ninguna manera aceptarle ni citarle entre una de las constituciones con que se ha regulado la república de Costa Rica. Dado a que para que se pueda llamar a una norma Constitución, la misma debe cumplir con varios requerimientos obligatorios de los cuales la Ley de Bases y Garantías carece sustancialmente. En razón que nunca se convoco a

una asamblea nacional constituyente para su promulgación, lo que si hicieron en el país, los otros usurpadores del poder, convocando asambleas constituyentes para emitir las constituciones políticas que debían regular al Estado costarricense y con ello normalizando la situación anómala que habían provocado con su actuar, al usurpar el poder por la fuerza. Pero al participar los costarricenses en las asambleas constituyentes y proporcionar su consentimiento a las mismas, daban como validas, las constituciones que se promulgaban.

## **D) El debate con respecto a ¿cuál fue la primera Constitución Política de la República de Costa Rica?.**

En el Estado costarricense, se ha sostenido entre los historiadores y tratadistas, del Derecho, un debate, sobre si el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno, debe recibir el título de haber sido la primera Constitución Política, con que se regula la provincia de Costa Rica.

O si, en su defecto este galardón debe ser otorgado a la Constitución Federal de Centro América de veintidós de noviembre de mil ochocientos veinticuatro.

O si más bien este título pertenece a la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco?.

Se incorpora a tal exámen a la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, con la finalidad de valorar si más bien es a ésta última Constitución, a la que debe otorgársele la primacía de haber sido la primera Carta política con la que se organiza el Estado costarricense, entendiéndole como fuente inspiradora de su constitucionalismo.

Para la mayoría de los tratadistas o abogados costarricenses consultados, el "Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno", ha sido la primera Constitución política, con que contó la República de Costa Rica, para iniciar con su ordenamiento público.

Esta opinión debe ponerse en duda, debido a que cuando la República de Costa Rica, se beneficia de la independencia, se organiza, tomando como base la Constitución de Cádiz de mil ochocientos doce y la Constitución de los Estados Unidos de América de mil setecientos ochenta y siete. Bajo estas dos influencias, el uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno, produce la norma constitucional, denominada como:

"Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia".

Continuándose con ese hecho, la historia constitucional de la provincia, ahora como Estado libre e independiente.

En la obra Historia General de Costa Rica se comenta por el historiador Bladimir de la Cruz, lo siguiente:

"Se elabora un nuevo texto constitucional denominado Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica en diciembre de 1821, este se sustenta en todos sus extremos en la Constitución de 1812 y le otorgo carácter de Derecho supletorio".<sup>98</sup>

Con relación a la emisión, de esta norma jurídica, se van a presentar algunas consideraciones, dado a que como ya se advirtió, para la mayoría de los Constitucionalistas de la nación, el Pacto, es acreditado como la primera Constitución, con la que se ha normado la Patria. Por lo cual, en muchos de los documentos doctrinarios se referencia como, la Carta Política número uno, con la cual contó la República de Costa Rica.

Se debe cuestionar esta posición, ya que el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, aunque ha sido una norma jurídica de gran relevancia y de extraordinaria importancia, y por ende, el que consolida el origen de su desarrollo constitucional, presenta ciertas contradicciones, para considerarle, como la primera Constitución con que contó la nación, por esto primeramente, se debe analizar y meditar al respecto, si el Pacto, cumple o no con las exigencias técnico jurídicas, para poderle declarar como Constitución, sin antes realizar un análisis del mismo, que permita determinar, si debe calificarse como una efectiva Constitución o designarle, como otra clase de

---

<sup>98</sup> Cruz de Lemos, Vladimir.

Obra citada, op.cit. Euroamericana de Ediciones año 1987, p. 43

norma jurídica y si realmente se le puede clasificar como Constitución, qué posición debe recibir en la historia constitucional del Estado costarricense.

Para iniciar con el análisis de este asunto obsérvese, lo que se prescribe en el Artículo dieciséis de la Declaración Francesa, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano elaborada en 1789, por la Asamblea Constituyente en los inicios del constitucionalismo moderno, con el propósito de acreditar, si en un Estado se cuenta con Constitución o no. Al respecto en ésta Declaración se manifiesta:

“Toda sociedad en donde no estén garantizados los derechos y establecida la separación de poderes, carece de Constitución”.<sup>99</sup>

Con fundamento en lo indicado en el análisis del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno, se detectan una serie de inconsistencias, que llevan a dudar, acerca del parecer de los constitucionalistas y estudiosos que adjudican al Pacto de Concordia el nombre de Constitución. En este instrumento normativo, no queda evidente, que existiera separación de poderes, tal como es entendida por la Declaración Francesa, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ni como fué comprendida por el barón de Montesquieu, al plasmar su pensamiento a cerca de los principios que debían considerarse, para que operara en un Estado, la Institución de la separación de poderes, y por ende la aplicación del control parlamentario, como dispositivo eficaz para frenar el abuso, en el ejercicio del poder, pierde todo sentido, debido a que su aplicación se hace imposible, si no existe un sistema político, en donde operen varios poderes, ejercidos por distintos órganos.

Por lo enunciado, del exámen preliminar del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno, detectamos ciertas señales, que nos inducen a pensar, que se debe discrepar del punto de

---

<sup>99</sup>López Guerra, Luis.

Obra citada op.cit. Tirant lo blanch libros edita Tirant lo blanch Balencia, año 1994, p. 271.

vista de los que afirman que ésta norma jurídica, fué la Constitución número uno, en la historia constitucional de Costa Rica. Esto por cuanto en el mismo Pacto, no es posible visualizar, con propiedad una organización de poderes, ni es posible distinguir tampoco ninguna estructura orgánica en el que se pueda reconocer, ningún sistema político en el que aparezca, una distribución parlamentaria en cualquiera de sus formas, sea organizado como un Parlamento unitario o como un régimen Parlamentario, con sus respectivas cámaras, ni siquiera es posible distinguir un Poder Ejecutivo, ni un Poder Judicial, con sus funciones debidamente estructuradas, o sea, que no se configuraba, una efectiva organización política, sustentada en la separación de poderes.

Además, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, prescribía en su capítulo cuarto, en relación al Gobierno que se constituía, que para la administración, conservación y prosperidad de la provincia se establecería en su seno una Junta de gobierno provisional, la que estaría compuesta por siete vocales elegidos popularmente, sin disponerse nada más al respecto.

Como se puede apreciar, a través de esa modalidad de organización, no se manifiesta una forma de gobierno, que permita caracterizar, en ella una organización política fundamentada en la separación de poderes. Asimismo, es innegable que pese, a esta organización tan deficitaria no prosperó ninguna dictadura totalitaria. Aunque es claro que la junta gubernativa se atribuía todos los poderes, de conformidad con lo que se disponía en los artículos veintiséis a veintinueve del Pacto, en razón que la junta se dividía en tres secciones o comisiones, para el pronto despacho de los negocios, con responsabilidad cada una a la misma Junta, con lo que no se dejaba la probabilidad de que en el Estado costarricense existiesen otros poderes.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Mena Brenes, Marco A.

Obra citada, op.cit. San José, Costa Rica. Imprenta Nacional, año 2000, p. 11.

Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia:

Otra incompatibilidad que exhibe el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, es que éste exponía en su artículo quince que una vez revisado, el Estatuto por la junta electoral, entraría en vigor y qué ésta sería una Ley fundamental interina de la provincia, lo que se viene a contradecir en si mismo, ya que si algo es interino, no podría calificársele de fundamental ni al contrario, proceder a llamar una Ley fundamental como interina.<sup>101</sup>

El señor Hernán Peralta en su libro, "Agustín de Iturbide y Costa Rica" alude al criterio expresado por reconocidos abogados costarricenses, que hacen referencia, acerca de cual fué el origen del Derecho Constitucional costarricense. Por considerarles de relevancia, se reproducen algunos de ellos:

Don Ricardo Jiménez, refiriéndose al Pacto de Concordia dice;

"este Pacto es el germen de nuestro derecho publico".

Don José Francisco Peralta manifiesta:

"a la primera ley constitutiva de Costa Rica diósele el nombre de Pacto Social Fundamental".

Don Gonzalo Ortiz Martín afirma:

"De aquí (del Pacto), arranca nuestro derecho público".

---

Art. 26.— "La Junta se dividirá en tres secciones o comisiones para el pronto despacho de los negocios, con responsabilidad cada una a la misma Junta, por la que serán acordadas las providencias que por su naturaleza, gravedad y trascendencia general lo requieran".

Art. 27.— "La primera sección se compondrá del presidente y dos vocales, haciendo uno de secretario, y ésta despachará en los ramos militar y de hacienda".

Art. 28.— "La segunda sección se compondrá de un vocal presidente y otro secretario y despachará en lo político".

Art. 29.— "La tercera sección se compondrá de un vocal presidente y otro secretario y despachará en todo lo de economía y policía pública".

<sup>101</sup> Mena Brenes, Marco A.

Obra citada, op.cit. San José, Costa Rica. Imprenta Nacional, año 2000,

Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia:

Art. 15.- "Hallándose completa la junta, discutirá este Pacto, alterando, modificando o ratificándolo como le parezca; y esta determinación será una ley interina fundamental de la provincia".

El profesor Noriega era del mismo parecer y opinaba:

“Los ayuntamientos, nombraron sus legados, que reunidos formaron una Junta Gubernativa interina, que redactó la primera ley constitutiva de Costa Rica, la cual se llamó Pacto Social fundamental interino de Costa Rica”.

Mientras que don Elías Leiva, es de un criterio diferente, y cita la constitución federal y la de 1825 como las primeras que organizaron el país.

Opinión compartida por: Don Alberto Brenes Córdoba y don Cleto González Víquez.

De fuera de Costa Rica, se menciona como referencia, a favor de la constitución de 1825, la opinión contenida en la obra clásica del señor Posada.<sup>102</sup>

Como puede advertirse, ninguno de los juristas antes citados, entienden a la Constitución de Cádiz de mil ochocientos doce, entre una de las Cartas políticas que han regulado al país, pese a las referencias tan insistentes que hacía esa norma jurídica, se encuentran establecidas tanto en el propio Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, como en los Estatutos Políticos de diecisiete de marzo de mil ochocientos veintitrés y de dieciséis de mayo de ese mismo año.

La diversidad de dictámenes, es comprensible, si se reflexiona que el primer Poder Legislativo, en la República de Costa Rica se advierte, correctamente establecido en la “Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco”.

Es en esta norma constitucional, en donde se observa por primera vez que en la República de Costa Rica, opera una organización política, fundamentada, en el modelo de separación de Poderes, esto de conformidad con lo que instituía su Artículo veinticuatro, en donde se mandaba que el

---

<sup>102</sup> Peralta, Hernán G.

Obra citada, op.cit, Editorial Costa Rica, año 1968, p. 199-201.



"Supremo Poder del Estado estaría dividido en Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Conservador".

Como puede observarse en las anteriores normas jurídicas, no era viable identificar una organización política, que aportase con transparencia los poderes que debían regir al Estado costarricense.

Prosiguiendo con este examen, es necesario referirse a la afirmación de Mario Alberto Jiménez, contenida en su libro, Desarrollo Constitucional de Costa Rica, en la que expone que:

"con la Constituyente de Cádiz comienza, verdaderamente, la historia constitucional de Costa Rica y que la Carta de Cádiz es, cronológicamente, nuestro primer documento constitucional".

Continúa razonando su creencia exponiendo, tanto es así, que el mismo

"Pacto Social Fundamental admite subsidiariamente, y así lo dispone en su artículo 13, que las elecciones se ajustarán previas a las demás formalidades establecidas en la Constitución" (española).

Además, resaltaba que en el artículo cuarenta y uno, de esta norma jurídica se ordenaba "que la justicia se administre pronta y rectamente conforme a la Constitución española y leyes existentes, singularmente la de 9 de octubre de 1812".<sup>103</sup>

Es evidente que la vigencia normativa, que el Pacto otorgaba a la Constitución gaditana, era más que notoria, por lo cual, se puede pensar en compartir el criterio emitido por el señor Jiménez, con fundamento en que la Constitución de Cádiz, es repetidamente requerida en el Pacto de Concordia, además de haber sido, base fundamental para su ordenamiento público.

---

<sup>103</sup> Jiménez, Mario Alberto.

"Desarrollo Constitucional de Costa Rica".

Tercera edición, Editorial Costa Rica, San José, año 1974, p. 27.

Lamentablemente aunque el señor Mario Alberto Jiménez alude a que debe ser concebida la Constitución de Cádiz, como la primera Constitución con que se regula el Estado costarricense, posteriormente, no defiende su posición y más bien el mismo en sus obras señala al Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, como la primera Carta Magna con la que se organiza la nación.

Mientras que la historiadora costarricense, Clotilde Obregón, en su libro historia del Poder Ejecutivo de Costa Rica, comenta que:

"Costa Rica se independiza de España y se organiza, teniendo como guía la Constitución de Cádiz".<sup>104</sup>

Esto nos lleva a valorar, si en realidad es que la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, fué la primera Carta política con que cuenta la República de Costa Rica posterior a su independencia. Además, si se hace un análisis a profundidad de ésta norma jurídica, y se confronta con el Pacto de Concordia, se observa que el Pacto, es una reproducción muy semejante a la Carta Política española.

Todo esto nos enfrenta, con la interrogante de determinar ¿cuál instrumento normativo de los siguientes fué la primer Constitución de la República de Costa Rica?

La Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce?  
el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno?

La Constitución Federal de Centro América de veintidós de noviembre de mil ochocientos veinticuatro?

O la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco?

---

<sup>104</sup>Obregón Quesada, Clotilde.

Obra citada, op.cit. Editorial de la Universidad de Costa Rica, primera edición año 2000, P. 41.

La respuesta a tal interrogante se espera aparezca del análisis del Pacto, pero surgen bastantes dudas sobre la posición, de que el Pacto de Concordia sea su primera Constitución y se puede pensar que los primeros años, la Provincia se rigió por unas normas, que por sus características se podría valorar, que se asimilan más a leyes comunes, subordinadas en su actuar a la Constitución española de Cádiz.

El Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, disponía en su preámbulo:

"La provincia de Costa Rica, libremente congregada y legítimamente representada por los legados reunidos en esta ciudad (Cartago) de todos los pueblos que la componen y suscriben, teniendo en consideración que por haberse jurado, la independencia absoluta del Gobierno español, se hallan libres los pueblos para constituirse en nueva forma de gobierno; y deseando esta provincia conservarse libre, unida, segura y tranquila por un pacto de unión y concordia, ínterin que informándose las otras pueda concurrir al establecimiento, de un gobierno supremo constitucional, se constituye éste provisional".<sup>105</sup>

Como se puede considerar, de la propia literalidad del preámbulo, no se puede decidir, si se estaba creando una norma para regular el Gobierno transitorio, o si se había constituido la Constitución, que debió regir al Estado. Esto no es claro debido a que en el mismo Pacto se establece:

"concurrir al establecimiento de un gobierno supremo constitucional, se constituye éste provisional".

Esto lógicamente deja la interrogante si la Norma jurídica, se emite únicamente para regular el gobierno interino que se estaba constituyendo y con ello quedaba pendiente, cuál sería su Constitución definitiva? Y con lo indicado

---

<sup>105</sup> Mena Brenes, Marco A.

Obra citada, op.cit. San José, Costa Rica. Imprenta Nacional, año 2000, p. 13.

permanece la incógnita, de qué clase de norma jurídica estaban aprobando; ¿un Pacto, un tratado, una Ley común o su Constitución definitiva?.

Adicionalmente, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, a través de sus propias disposiciones le concede vigencia normativa a la Constitución de Cádiz, para que les regular, con base a la disposición contenida en su Artículo seis, en donde se mandaba que los derechos de ser considerados como ciudadanos del país, se suspenderían o perderían por las disposiciones previstas en los artículos veinticuatro y veinticinco de la Constitución Española.<sup>106</sup>

Como se puede interpretar, con esta resolución se le estaba otorgando a la Constitución de Cádiz, un valor de norma jurídica normativa, para que los

---

<sup>106</sup>.Constitución de Cádiz de 1812

Art. 24.- La calidad de ciudadano español se pierde:

“Primero. Por adquirir naturaleza en país extranjero.

Segundo. Por admitir empleo de otro Gobierno.

Tercero. Por sentencia en que se impongan penas aflictivas o infamantes, si no se obtiene rehabilitación.

Cuarto. Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español sin comisión o licencia del Gobierno”.

Art. 25.- El ejercicio de los mismos derechos se suspende:

“Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral.

Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos.

Tercero. Por el estado de sirviente doméstico.

Cuarto. Por no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocido.

Quinto. Por hallarse procesado criminalmente.

Sexto. Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano”.

costarricenses conservaran o perdieran sus Derechos de ser considerados como ciudadanos de su propio Estado. Conjuntamente, con esta delegación se sometía a los costarricenses de un modo explícito a la Constitución del mismo País, que acababan de independizarse.

Adicionalmente por lo que se establece, en el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, se puede concebir que, a la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, materialmente se le debe entender como la norma jurídica, que establece la primera regulación orgánica de la República de Costa Rica, esto a través de la fuerza normativa, que le proporcionaba el propio Pacto de Concordia y demás leyes vigentes. Lo que se evidencia, observando lo que se disponía en los Artículos trece, veinticuatro, cuarenta y uno y cincuenta y ocho del mismo Pacto, en el que se les remitía de forma literal y exclusiva a la Norma constitucional española.<sup>107</sup>

Si se examina críticamente de la literalidad de lo expuesto se puede, interpretar, que a la Constitución Española se le puede asignar un valor similar al Pacto, y quizá superior. Considerando que se dispone,

---

<sup>107</sup> Mena Brenes, Marco A.

Obra citada, op.cit. San José, Costa Rica. Imprenta Nacional, año 2000,

Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia:

Art. 13.— "Los electores de partido celebrarán el primer domingo 6 de enero próximo, junta de provincia en esta ciudad, y nombrando de su seno presidente, escrutadores y secretario, previas las demás formalidades establecidas en la Constitución (española), que igualmente se observarán en las juntas antedichas, se tendrá la junta por instalada".

Art. 24.— "La Junta reasumirá la autoridad superior de capitanía y superintendencia general, mando político, diputación provincial y de audiencia, en cuanto lo protectivo, no en lo judicial. Y en consecuencia podrá expedir y dictar todas las providencias que demande la libertad, seguridad y buena administración de la provincia en sus respectivos atributos, conforme a este Pacto y a la Constitución española y leyes vigentes, en lo que a él no se opongan".

Art. 41.— "En lo judicial, la Junta, como tribunal de protección únicamente, hará que los jueces constitucionales administren pronta y rectamente justicia conforme a la Constitución española y leyes existentes, singularmente la de 9 de octubre de 1812".

Art. 58.— "Que los poderes que deban otorgar los electores de parroquia a los de partido sean tan amplios como los que estos últimos daban a los diputados de Cortes, según el artículo 100 de la Constitución, cuya fórmula se observará con respecto a este objeto".

“conforme a este Pacto y a la Constitución española y leyes vigentes, en lo que a él no se opongan”.

Entendiéndose con esta disposición, que lo que no debe oponerse al Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, son las leyes vigentes y no la Constitución Española, con todo lo anterior no se deja claro a que Norma jurídica debe nombrarse como la primera Constitución de la República de Costa Rica?.

El Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, fué reformado el diez de enero de mil ochocientos veintidós, pero siempre fué conservado como una norma jurídica interina, prolongando en él, la mayoría de las disposiciones que sujetaban a Costa Rica, a la Carta Magna Española; con esto se mantenía la zozobra para los costarricenses, de que por fin designaran a que Estado anexarían a la provincia de Costa Rica.

Se debe recordar que la provincia de Costa Rica, se había independizado de España, el veintinueve de octubre del año mil ochocientos veintiuno y emite el Pacto citado, el uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno, lo que muestra que existen más de treinta días en que podríamos considerar que la Nación se rigió sin Constitución, pero en verdad esta situación no sucedió así, ya que desde que se inicia su organización política, se toma como base la Constitución de Cádiz de mil ochocientos doce, lo que se reafirma en las disposiciones del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, de diez de enero de mil ochocientos veintidós. También es cierto, que la Constitución de los Estados Unidos de América de mil setecientos ochenta y siete, mantuvo gran influencia en su modelo de organización, pero esta influencia no es de inicio sino, la misma toma fuerza, con la emisión de la Constitución Federal de Centro América de veintidós de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, cuando se asume, el modelo presidencialista, vigente en la nación de los Estados Unidos de América.

## **E) Posición del investigador sobre ¿cual fue la primera Constitución Política de la República de Costa Rica?.**

Por todo lo detallado anteriormente, acerca del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia de uno de diciembre del año mil ochocientos veintiuno, me permito concretar y determinar que esta norma jurídica, no fué la primera Constitución política, con la cual se organizó la provincia de Costa Rica, posterior a obtener su independencia del gobierno español el veintinueve de octubre de mil ochocientos veintiuno.

Tampoco acepto la posición que ese lugar de preponderancia se le deba otorgar a la Constitución Federal de Centro América de veintidós de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, ni comparto que esta norma jurídica lo sea, la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero del año mil ochocientos veinticinco.

De todo lo expuesto es que se demuestra, tanto del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, así como de sus dos Estatutos políticos de diecisiete de marzo y de dieciséis de mayo de mil ochocientos veintitrés; que su primera Constitución, como fuente inspiradora del constitucionalismo de la República de Costa Rica, por toda la aplicación que se le otorgó para que rigiera a los costarricenses, fué la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce.

Esto Entendiéndole como fuente inspiradora de su constitucionalismo.

Adicionalmente, de haberse convertido en el instrumento fundamental, para la organización política y constitucional de la provincia de Costa Rica.

Por lo cual, sin ninguna duda a equivocarme, aseguro que a quedado probado y demostrado que el origen y desarrollo del derecho público, costarricense, es de procedencia netamente española, y le corresponde fundamentalmente a la

Constitución Española de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce.

Dado que con el nacimiento de esta norma jurídica, se marca la participación política de los ciudadanos costarricenses, iniciándose este camino, en el año mil ochocientos diez, con la elección del diputado por la provincia de Costa Rica, que representó a la provincia en las Cortes de Cádiz celebradas en marzo de mil ochocientos doce, entonces desde esa fecha hasta antes de alcanzar la independencia en el año mil ochocientos veintiuno; la provincia de Costa Rica, se rige por medio de las disposiciones y regulaciones de la Constitución Gaditana.

Posteriormente a que la provincia de Costa Rica, jura su independencia de la monarquía española, el veintinueve de octubre de mil ochocientos veintiuno, nos seguimos normando con las disposiciones de la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, esto es tan real y verdadero, que es el propio Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia; quién a través de sus disposiciones viene a proporcionar a la Constitución Española de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, toda la vigencia normativa, que pudiese requerir o necesitar, para que se convirtiera en la primera Constitución con que cuenta la República de Costa Rica, entendiéndola como fuente inspiradora de su constitucionalismo.

Por otra parte deseo aclarar que al Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica de uno de diciembre del año mil ochocientos veintiuno; con todas las inconsistencias detalladas, le podemos admitir como hijo de la Constitución de Cádiz tantas veces recordada durante el desarrollo de este análisis.

Adicionalmente los dos estatutos políticos, con muy pequeñas excepciones, eran realmente el mismo Pacto de Concordia.

Por tal razón un verdadero cambio estructural se encuentra hasta en la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero del año, mil



ochocientos veinticinco, de donde podemos notar empieza, en la República de Costa Rica, el presidencialismo y la aplicación de la doctrina de la separación de los poderes del Estado.

Por todo lo expresado considero; que al Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno, pese a sus notorias debilidades e inconsistencias, le podemos admitir, como la segunda Constitución, con la cual cuenta el Estado costarricense.

Para llegar a emitir el siguiente dictamen he considerado como determinantes los siguientes factores:

1.- Que el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno, a través de sus disposiciones proporcionó la vigencia normativa, que requería la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, para convertirse en la primera Constitución como fuente inspiradora del constitucionalismo de la República de Costa Rica.

2.- Asimismo tomé en consideración para emitir este juicio, lo que postula el maestro de maestros, doctor Pablo Lucas Verdú, quién manifiesta que, una cosa es tener Constitución y otra cosa más diferente, es estar en Constitución. Bajo este pensamiento, opino que el Estado de Costa Rica, estuvo más en Constitución, por la inspiración de sus ciudadanos, al entender al Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, como su norma suprema e indiscutiblemente, sin llegar a olvidar la época política, en que vivieron sus hacedores.

3.- Que pese a no contar con un sistema de gobierno, en donde prevaleciera una estructura política basada en la separación de poderes, requerimiento de la declaración francesa, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para que en

un Estado, exista Constitución, se cumplieron con algunos requerimientos, sumamente importantes, como fue que se respetaron los derechos y libertades de los ciudadanos, lo que faculta a calificar al Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia, como la segunda Carta política con la que se organiza el Estado de Costa Rica en el año mil ochocientos veintiuno.

Pero sería un enorme error y una injusticia para la historia del desarrollo constitucional de la República de Costa Rica, no clarificar con propiedad el origen de su primera Constitución. Por tal razón y pese a que el tema en discusión se separa un poco del punto medular de la investigación; considere oportuno abordarlo; y después de brindar mis consideraciones, me encuentro muy satisfecho de proceder a presentar en especial a los costarricenses y a los no nacionales, a la Constitución Española de Cádiz de mil ochocientos doce, como la Carta Política número uno con que se ha regido la Nación costarricense. Por esto en el desarrollo de este estudio, cuando se haga mención a la primera Constitución de la República de Costa Rica, nos referiremos a la Constitución española de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, y el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, será calificado como la segunda Carta Política, con que se ha regido la Patria costarricense.

Para que no quede ninguna duda de lo propuesto, se exponen algunas disposiciones, contenidas en el primer Estatuto Político, de la provincia de Costa Rica, de diecisiete de marzo de mil ochocientos veintitrés, norma jurídica, que es promulgada, como su nueva Constitución, al no haberse concretado el proyecto de la anexión de la Provincia al Estado Mexicano.

Es importante, llamar la atención que esta nueva Carta Magna, también sometía a los costarricenses, a los preceptos de la Constitución Española de Cádiz de mil ochocientos doce, dado a que en su artículo diez, se mantenía la disposición de que los Derechos de ser considerado como costarricense se

perdían o suspendían de acuerdo a los Artículos veinticuatro y veinticinco, de la Constitución Española.

Además, llamo a reflexionar sobre las disposiciones contenidas en los artículos treinta y cuatro, treinta y cinco, y cuarenta y uno del primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, con fundamento a que cuando se refieren a las actuaciones del gobierno, declaran, que deben tener a la vista la Constitución, leyes vigentes y el presente Estatuto; y resulta que a la Carta política, que se refieren, es al mismo Estatuto político, que era su Constitución vigente.

Por este motivo, más bien considero que se estaban refiriendo, nuevamente a la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, aunque esto no queda de manifiesto, sino que se deduce de lo expuesto, en razón que el artículo cuarenta y uno también disponía, que el jefe político, debía obedecer lo dispuesto en los párrafos dos a diez del artículo trescientos treinta y cinco de la Constitución, y curiosamente el Estatuto político, a que nos referimos, únicamente poseía cincuenta y tres artículos con lo que esta Constitución no podría ser el Estatuto Político al que se hace referencia.<sup>108</sup>

Como se puede notar ni siquiera en la tercera Constitución emitida por la nación, se dejan de someter a los costarricenses a las disposiciones contenidas en la Constitución Española de Cádiz de diecinueve de marzo de 1812, tantas veces recordada en la presente investigación. Esto es más que notorio con

---

<sup>108</sup> Mena Brenes, Marco A.

Obra citada, op.cit. San José, Costa Rica. Imprenta Nacional, año 2000, Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, de 17 de marzo de 1823

Art. 34.— “Para el gobierno interior observará, puntualmente guardada la proporción debida, el reglamento interior del presente Congreso”.

Art. 35.- “ Tendrá a la vista la Constitución y leyes vigentes en sus operaciones y muy especialmente las decisiones del actual Congreso y el presente Estatuto,de cuyo espíritu no podrá desviarse”.

Art. 41.— “El jefe político deberá además observar lo prevenido en los párrafos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º , 9º y 10º del artículo 335 de la Constitución”.

fundamento a que se le mantiene en todo momento la validez normativa, concedida en primera instancia por el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno, y prolongada posteriormente por el primer Estatuto Político de diecisiete de marzo de mil ochocientos veintitrés y para que no pueda presentarse ninguna vacilación en razón de lo que se trata, miraremos que también en el segundo Estatuto Político, emitido el dieciséis de mayo de mil ochocientos veintitrés, se conservan las disposiciones del primer Estatuto Político, que somete a los costarricenses; a los preceptos de la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce.

Es importante destacar que con independencia de que estos Estatutos Políticos, les estén entendiendo como nuevas constituciones, en realidad en el fondo, lo que se practicaban, son reformas constitucionales, como modernamente lo ideamos en la actualidad, indiscutiblemente no hay que dejar de lado que en los inicios del siglo XIX, no se tenía muy claro el concepto de Constitución, por ello en ocasiones, se denominaba a textos de esta forma, aunque no fuesen verdaderamente textos constitucionales, en el sentido literal que hoy en día les concedemos.

Para finalizar es necesario exponer con transparencia y sinceridad que en la República de Costa Rica, hasta en la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco se observa una verdadera organización política, fundamentada en la separación de poderes, porque con anterioridad a la emisión de esta norma jurídica no es posible caracterizar ninguna organización política con esas peculiaridades, sino que se notan modelos políticos improvisados, de hecho que se basan para la organización política en la Constitución de Cádiz, luego se emite el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno, al que se ha solido llamar erróneamente como la primera Constitución de la República de Costa Rica. Continuándose con la emisión de los Estatutos políticos de diecisiete de marzo de mil ochocientos veintitrés y de dieciséis de mayo de ese

mismo año, esto casi de forma consecutiva, y las tres normas mencionadas, contienen con poquísimas diferencias la misma estructura y las mismas deficiencias. Que tampoco se llegan a solucionar con la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco. Ley que ciertamente surge de la fallida Constitución Federal de Centro América de veintidós de noviembre de mil ochocientos veinticuatro.

Por esta razón se puede dictaminar que en la República de Costa Rica, la estabilidad constitucional, se adquiere de la Constitución política de mil ochocientos setenta y uno y se llega a ratificar con la Constitución Política que se emite el siete de noviembre del año mil novecientos cuarenta y nueve. Cabe señalar que esta última carta magna ostenta una menor vigencia, si le comparamos con la Constitución de mil ochocientos setenta y uno. Pero la Constitución Política de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, aporta a la República de Costa Rica, una mayor estabilidad política, y confianza en el ordenamiento jurídico y político nacional. De hecho que desde su emisión al momento actual solamente ha recibido las reformas constitucionales, que se han creído necesarias, pero esta importantísima norma jurídica ha mantenido la estabilidad constitucional que le consolida como la Carta política más estable con que ha contado la República de Costa Rica desde el momento de su independencia.

Finalmente agregamos, que una vez resuelta la interrogante de cual fue la primera Constitución de la República de Costa Rica, y habiendo concluido que esta norma jurídica, es la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, entendiéndola como fuente inspiradora de su constitucionalismo.

Esto nos lleva a aclarar que el dato de las once constituciones de la República de Costa Rica señalado anteriormente, debe modificarse, y entonces quedar en doce Cartas Políticas de la siguiente forma:

- 1.- Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce.
- 2.- Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica de uno de diciembre de mil ochocientos veintiuno.
- 3.- Primer Estatuto Político de diecisiete de marzo de mil ochocientos veintitrés.
- 4.- Segundo Estatuto Político de dieciséis de mayo de mil ochocientos veintitrés.
- 5.- Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco.
- 6.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica de diez de abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro.
- 7.- Constitución Política de veintiuno de enero de mil ochocientos cuarenta y siete.
- 8.- Constitución Política de veintiséis de diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve.
- 9.- Constitución Política de quince de abril de mil ochocientos sesenta y nueve.
- 10.- Constitución Política de siete de diciembre de mil ochocientos setenta y uno.
- 11.- Constitución Política de dieciocho de junio de mil novecientos diecisiete.
- 12.- Constitución Política de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve.

## **F) Principales Características de los poderes Legislativos de la República de Costa Rica.**

Se advierte, que en esta investigación se hace referencia, a un sistema de gobierno presidencialista, en donde se encuentra inserta una Asamblea Legislativa, debido a que la forma política de la República de Costa Rica, siempre ha sido una República presidencial, por tanto el Poder Legislativo responde a las características de este modelo de gobierno.

Aunque el objetivo de esta investigación como anteriormente se comentó, esta cimentado primordialmente en subrayar la trascendental labor que se debe cumplir por el poder legislativo de la República de Costa Rica, a través del ejercicio del control político, en este apartado del trabajo, se presentan algunas particularidades de los poderes legislativos, con que ha contado el país, hasta que se llega a incorporar al control político, como función de su Asamblea Legislativa. Lo que tenemos se establece, por primera vez en la Constitución política de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, debido a que antes de esa oportunidad, el control político como tal, no formaba parte de las funciones asignadas a sus poderes legislativos.

Para no producir confusión, en los lectores, se debe aclarar que aunque la provincia de Costa Rica se había independizado el veintinueve de octubre de mil ochocientos veintiuno y que de esa fecha a mil ochocientos veinticinco ya se habían dictado varias constituciones, el primer Poder Legislativo de su historia se observa constituido oficialmente hasta en la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco, porque con anterioridad a esta fecha, no se legisló con los poderes típicos de la doctrina de la separación de los poderes del Estado.

El primer Poder Legislativo de la historia de la República de Costa Rica, se caracterizó por ser unicameral, o sea que únicamente lo integraba una cámara

de diputados. Pero esta situación en ocasiones viene a crear confusión; dado a la disposición del artículo veinticuatro de esta ley fundamental, en la que se establecía que:

“El Supremo Poder del Estado, estaría integrado por los poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y conservador”.

Se debe anotar que la República de Costa Rica, del año mil ochocientos veinticinco al año mil ochocientos treinta y ocho se establece con una conformación, basada en cuatro poderes; en donde los poderes Legislativo y Conservador actuaban como dos poderes independientes, en contrario de lo normal que son los tres poderes típicos promulgados por la doctrina de la separación de los poderes del Estado.

De lo dispuesto en el artículo cincuenta y cinco de la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, se observa que oficialmente, a su primer Poder Legislativo, no se le asignan constitucionalmente funciones que se puedan relacionar con el ejercicio del control político, que actualmente practican los parlamentos en los países democráticos.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup>Mena Brenes, Marco A.

Obra citada, op.cit. San José, Costa Rica. Imprenta Nacional, año 2000, Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, de 21 de enero de 1825:

Artículo 68. Pertenece al Poder Conservador exclusivamente:

- 1.- Dar o negar la Sanción de toda Ley, resolución legislativa, o decreto del Congreso.
- 2.- Velar sobre el cumplimiento de la Ley Fundamental y demás del Estado y dar cuenta al Congreso de las infracciones que advierta o se le informen.
- 3.- Observar la conducta de los funcionarios públicos y declarar cuando ha lugar a la formación de causa contra el Ministro General del despacho, contra el Jefe Político Superior, contra el Intendente, contra el Comandante General, y contra los Jefes de las rentas principales por delitos cometidos en el ejercicio de sus encargos.
- 4.- Aconsejar al Poder Ejecutivo sin excepción alguna en todo aquello que éste le consulte.
- 5.- Proponer en terna al Poder Ejecutivo los individuos de que habla su tercera atribución.



Más bien, se identifican algunas funciones que podemos enlazar con cierto control difuso, en las labores que se atribuyen al Poder Conservador, también identificado como el consejo, que estuvo integrado por un grupo de individuos electos popularmente, su número no debía ser menor de tres ni superar la cantidad de cinco. El Segundo Jefe del Estado, (Entiéndase vicepresidente de la República era su Presidente; o el que éste designara, en su ausencia.

Es necesario precisar que no existía una secuencia lógica, entre las funciones que constitucionalmente se concedían al Poder Conservador; en relación a las que competían a los otros poderes del Estado. Ya que el Conservador tenía entre sus deberes, funciones que correspondían a los otros poderes del Estado. Ciertamente el Poder Conservador tenía labores que tienen alguna relación con un control difuso; pero propiamente no se puede decir que ejercía un control político, como modernamente se le entiende hoy en día.

El Poder Conservador, se caracterizaba por poseer, ingerencia en las facultades concernientes a los otros poderes. Ya que se convertía en un freno para las intervenciones del Poder Legislativo. Pero a su vez también por medio de sus actuaciones, participaba en el Poder Ejecutivo; porque una de sus funciones se tipificaba por ser su asesor y como ya se enunció el segundo jefe del Estado o sea el vicepresidente, era su Jefe. Con esto se muestra que también el Poder Ejecutivo, de una forma indirecta intervenía en el rol que correspondía cumplir al Poder Legislativo. Es decir, como hemos venido reiterando, al poder conservador competía también asesorar al poder ejecutivo.

Con todo lo señalado hasta el momento, se denota que en aquella época, el control político no operaba por ningún lado, ya que al poder que le debía competir ejercer el control político, más bien era de una u otra forma controlado por el Poder Conservador y por ende por el Poder Ejecutivo lo que convertía a este último en un poder muy fuerte.

Con lo que realmente la separación de poderes, tal como se promulgaba y pretendía no era evidente, aunque la conformación política que se establecía consistía en cuatro poderes independientes entre sí. Pero realmente los poderes Legislativo y Conservador, por lo dispuesto, actuaban más como dos Cámaras, que como dos poderes independientes, lo que deja de manifiesto, que aún en esta época se continúan arrastrando los problemas organizativos de los primeros días de la independencia. Estos cuatro Poderes perduraron de 1825 a 1838; período en que Costa Rica formó parte de la Federación Centro Americana, hasta que acuerda su separación de la misma en el año 1838.

Se tiene que el primer lunar en la democracia costarricense, se encuentra proporcionado por el golpe de Estado, propinado por el licenciado, Braulio Carrillo, el veintisiete de mayo de mil ochocientos treinta y ocho, y algunos podrían pensar que esto fué lo que aleja a Costa Rica de la Federación Centro Americana; aclaramos que en realidad esto no se dio así, ya que con anterioridad al golpe de estado, la citada federación renqueaba, porque el país de Nicaragua mediante decreto del treinta de abril de mil ochocientos treinta y ocho, había acordado separarse de la misma y el Estado hondureño a través de decreto del veintiséis de octubre de mil ochocientos treinta y ocho ratificado por una de sus constituyentes de cinco de noviembre del mismo año, había declarado lo siguiente: "El Estado de Honduras es libre, soberano e independiente".<sup>110</sup>

Como se puede reflexionar la República de Costa Rica, fué el tercer Estado en desligarse de la fallida Federación Centro Americana y a partir de esa fecha inicia una nueva etapa en el desarrollo de su historia constitucional, esta vez bajo la dictadura del licenciado Braulio Carrillo.

---

<sup>110</sup> Jiménez Mario Alberto.

"Desarrollo Constitucional de Costa Rica".

Tercera edición. Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, año, (1979), p. 57.

En esta investigación no se va a entrar a analizar esta dictadura, por ser contraria al tema en análisis, solamente se consigna que la misma tuvo una permanencia de casi cuatro años, de (mil ochocientos treinta y ocho a mil ochocientos cuarenta y dos), hasta que en abril de ese último año el dictador fué derrocado por una traición, que se originó cuando sus tropas, fueron a interceptar las tropas dirigidas por el general don Francisco Morazán quién traía la idea de que desde Costa Rica, iba a reconstruir la fallida Federación Centroamericana. La traición ocurre cuando:

"Las dos fuerzas se avistaron en un lugar llamado El Jocote, donde Villaseñor y Morazán celebraron un pacto, que por odio al despotismo de Carrillo lo consintieron las tropas costarricenses. En virtud de este pacto, Carrillo depuso el mando y salió del país". Pero la caída del Licenciado Carrillo, trajo algunos problemas para la nación.

"Caída y muerte de MORAZAN.

El despotismo de Morazán, las reclutas y contribuciones forzosas que decretó exasperaron al pueblo, ya muy irritado por los desmanes de su soldadesca. El 29 de mayo de mil ochocientos cuarenta y dos fue asaltado el cuartel de Heredia por josefinos partidarios de Carrillo y con este motivo dictó Morazán dos decretos de un rigor extremo. La revolución se hizo inevitable. A las dos de la mañana del 11 de septiembre se pronunció la ciudad de Alajuela y seis horas después el pueblo josefino, acaudillado por el general don Antonio Pinto, rompió las hostilidades contra Morazán. Al día siguiente llegó en auxilio de San José el coronel don Florentino Alfaro con tropas de Alajuela. Después de sangrientos combates en que tomaron parte hasta las mujeres, Morazán, viéndose perdido, desamparó el cuartel principal donde se había defendido bizarramente y huyó en la madrugada del 14 a Cartago, donde fue capturado.

Morazán fue traído a San José y fusilado el día 15 de septiembre de mil ochocientos cuarenta y dos".<sup>111</sup>

Cabe indicar que durante la vigencia de la dictadura del licenciado Carrillo, el dictador emitió el decreto de ocho de marzo de mil ochocientos cuarenta y uno, mediante el cual puso en vigencia la Ley de Bases y Garantías, en la que se declaraba inamovible en el gobierno, y jefe de una cámara consultiva, la que nombraba las otras autoridades nacionales. O sea que de una u otra forma, el licenciado Carrillo no dejaba posibilidades de desarrollo a la democracia costarricense, ya que mantenía bajo su control el manejo de todos los órganos del Estado.<sup>112</sup>

La Ley de Bases y Garantías, estuvo en vigor por catorce meses y veintinueve días. Cuando mediante Decreto de seis de junio de mil ochocientos cuarenta y dos, fué declarada nula e insubsistente y sin ningún valor al declararse nulo el decreto expedido por el licenciado, Braulio Carrillo el ocho de marzo de mil ochocientos cuarenta y uno. Por lo que a través de ese mismo acto, se declararon restablecidas las garantías individuales y políticas de la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, de veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco, norma jurídica que nuevamente volvió a regir al país, por un periodo de veintitrés meses y dos días. Debido a que el diez de abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro se emitió una nueva Constitución política para que rigiera el destino de la nación costarricense.<sup>113</sup>

Se determina que en las constituciones políticas que rigieron a la República de Costa Rica del año mil ochocientos cuarenta y cuatro al año mil novecientos

---

<sup>111</sup>Fernández Guardia, Ricardo.

Obra citada, op.cit, Imprenta Lehmann, San José Costa Rica, año 1957, p. 70-71.

<sup>112</sup> Peralta Hernán G.

"Las Constituciones de Costa Rica".

Instituto de Estudios Políticos Madrid, año 1962, p. 58

<sup>113</sup> Peralta Hernán G.

Obra citada, op.cit, Instituto de Estudios Políticos Madrid, año 1962, p. 286 y subsiguientes,

diecisiete, el control parlamentario o político no formaba parte de las funciones constitucionales, que se otorgaban a sus parlamentos o cámaras, aunque se desarrollaban algunas de estas funciones, como se puede entender si vemos que al parlamento le competía aprobar los presupuestos, pero también en ocasiones realizaban labores, totalmente contrarias al control político, y en oportunidades, hasta de inconstitucionales y arbitrarias se pueden calificar, vamos a ilustrar con algunos de estos casos.

Adicionalmente por no ser estos aspectos afines a la investigación que se sigue, no se va a profundizar en sus desenvolvimientos, únicamente destacamos, que la Constitución Política de diez de abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro instituía un Poder Legislativo conformado por dos cámaras, una de diputados, y la otra de senadores.

Al contrario la Constitución de mil ochocientos cuarenta y siete, entre algunos de los cambios que dio están los siguientes:

Se suprimió el Senado, el Congreso constaba de diez diputados y del Vicepresidente del Estado, quién era su Presidente nato, se creó la comisión Permanente del Congreso, para actuar durante los recesos del mismo Congreso, compuesta de tres diputados y del mismo Vicepresidente del Estado. Pero luego la Carta Magna de mil ochocientos cincuenta y nueve volvió nuevamente a un poder legislativo de dos cámaras, el cual se mantuvo también en la Constitución de mil ochocientos sesenta y nueve, pero nuevamente en la Carta política de mil ochocientos setenta y uno, se volvió a una sola cámara, suprimiéndose el senado. <sup>114</sup>

Aclaro, que no me refiero sobre la Constitución de mil novecientos diecisiete, por ser ésta fruto de un golpe de estado. Además a esto su vigencia fué muy tenue, menos de dos años, cuando cayó la dictadura de los hermanos Tinoco.

---

<sup>114</sup> Peralta Hernán G.

Obra citada, op.cit, Instituto de Estudios Políticos Madrid, año 1962, p. 86-99.

Solamente me voy a referir brevemente a algunos acontecimientos únicamente para ilustrar, que en las épocas que fueron de los años mil ochocientos cuarenta a mil ochocientos ochenta y dos, el control político no se consideraba para nada, además que se vivía una situación de mucha inestabilidad, en donde los presidentes y vicepresidentes, renunciaban con mucha facilidad a sus puestos, el Congreso no les admitía en ocasiones su dimisión. Un caso de estos se vive en la República de Costa Rica, el treinta de enero de mil ochocientos cincuenta y dos, cuando el presidente Juan Mora, procedió a disolver el Congreso, por estas razones según se consigna:

“una pequeña fracción de diputados objetaba ciertos proyectos administrativos, entre ellos un reglamento de Justicia”.

Entonces el presidente “Mora llegó a irritarse profundamente y en su empeño de acabar con ese estorbo y de mandar a su arbitrio, presentó el 28 de Enero su renuncia y abandonó el puesto”.

Pero el Congreso, le solicitó, no abandonar su cargo, con tal apoyo legislativo y en la certeza de que nadie se aventuraría a contradecir sus decisiones, el treinta de enero de mil ochocientos cincuenta y dos procedió con la disolución del congreso.<sup>115</sup>

También el presidente de la República señor Jesús Jiménez, el uno de agosto de mil ochocientos sesenta y tres, procedió a aplicar la misma formula, con la disolución de ambas cámaras.

Olvidándose y desconociendo con este acto el régimen político que mantenía la República de Costa Rica, que era presidencialista, y actuando como si se tratase de un régimen parlamentario.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup>González Viquez, Cleto.

Obra citada, op.cit, Editorial Universitaria, San José, Costa Rica, año 1958, p. 201 y subsiguientes.

<sup>116</sup>González Viquez, Cleto.

Obra citada, op.cit, Editorial Universitaria, San José, Costa Rica, año 1958, p. 266.

También el Poder Legislativo, en el año mil ochocientos sesenta y nueve, aprobó un voto de censura contra el presidente de la República, sin estar previsto constitucionalmente la posibilidad del voto de censura.

Como puede mirarse estos son actos totalmente irregulares, además de ilegales y totalmente contrarios a nuestro régimen de gobierno el cual en aquella época como ya indiqué, era presidencialista, y por tanto el presidente de la República, no estaba potestado de ninguna forma constitucionalmente para poder disolver al congreso. Lo más grave era que esos actos eran aceptados, como normales, por la sociedad y por los parlamentarios.

Para comentar se conoce de muchos otros actos de parecida irregularidad tanto cometidos por los poderes legislativos, así como por los Ejecutivos, pero el motivo principal de la investigación y el factor tiempo, lamentablemente no nos dan la oportunidad, de seguirles abordando en esta ocasión ya que se salen del contexto de la presente tesis doctoral. Por lo que quedaran para acometerles en una próxima investigación.





## ***Tercera parte***

### ***Actualidad del Derecho Político Costarricense.***

Este tercero y último apartado, de la investigación, se encuentra constituido, por tres capítulos, las propuestas y conclusiones finales, además, de los respectivos anexos de la investigación.

Los tres capítulos, se encuentran desarrollados de la siguiente manera:

El capítulo primero, se subdivide en cinco epígrafes de la siguiente forma:

A) En este epígrafe se presentan brevemente las principales características políticas y administrativas que configuran al Estado costarricense de conformidad con su Constitución política vigente de siete de noviembre de 1949, aprovechamos también esta oportunidad para tratar de modo sucinto lo relativo al tribunal supremo de elecciones.

B) En este segundo epígrafe se continua exponiendo las principales características de la Constitución Política de siete de noviembre de 1949, que regula en la actualidad a la República de Costa Rica. Prestando prioridad a los órganos que tienen relación directa con el control político.

C) Para en este tercer epígrafe entrar a analizar las contribuciones de la Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949 al actual control político, de la nación costarricense.

D) En este cuarto epígrafe, continuamos con el análisis de la labor de control político, que lleva acabo la Asamblea Legislativa de la nación costarricense, por medio del empleo de los instrumentos de control político, que utiliza para tales propósitos.

Este epígrafe, concerniente al análisis de la labor de control político en la actualidad, lo subdividimos en dos partes, por eso en el ítems D.- examinamos brevemente, la labor de control político desempeñada durante el periodo que corre del año 1949 al año 1989, aquí vemos cuantas veces han sido empleados los instrumentos de control político y evaluamos sus resultados.

E) En el siguiente epígrafe, analizamos, la función de control político, que se ha realizado de 1989 a la actualidad. Aclaramos que tomamos como parámetro de inicio, del segundo ítems, el año 1989, porque fue en esa época en la cual fué creada la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, también conocida en la República de Costa Rica, como Sala Cuarta, y este suceso presenta un cambio radical, en el ejercicio jurídico de todas las instituciones públicas y privadas del país.

El capítulo II se divide en tres grandes epígrafes, y cada epígrafe se subdivide en varios subepígrafes, en donde se ofrece un análisis de los resultados derivados del trabajo de campo, desempeñado con los señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, e importantes jerarcas del Estado costarricense, pertenecientes a las siguientes instituciones de la nación:

Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Defensoría de los Habitantes de la República, y varios asesores jurídicos de la propia Asamblea Legislativa, además de un consultor externo, altamente

calificado, por tal motivo en cada uno de los epígrafes se abordan estos aspectos:

En el epígrafe a) hacemos una presentación de la forma en la cual se tratan las diferentes informaciones recolectadas a través de la aplicación de la encuesta de OPINIÓN.

En el subepígrafe a1) Procedemos a tratar el Primer apartado de la encuesta de opinión aplicada a los señores diputados y señoras diputadas, de la República de Costa Rica.

En cambio, en el subepígrafe a.2) abordamos el Segundo apartado de la encuesta de opinión aplicado a los señores legisladores de la República de Costa Rica.

En el epígrafe B) Se realiza una presentación y análisis de las distintas respuestas brindadas por el segundo grupo de encuestados y encuestadas, para el trabajo de esta investigación.

En cambio, en el subepígrafe, B1) tratamos lo CONCERNIENTE al Primer apartado de la encuesta de opinión aplicado al segundo grupo de encuestados.

En el segundo subepígrafe, abordamos lo que se trata en el Segundo apartado de esta encuesta de opinión aplicado al segundo grupo de encuestados.

Finalmente en el epígrafe, C) efectuamos una Recapitulación de los resultados logrados, de las respuestas obtenidas de los dos grupos estudiados en el trabajo.

En el subepígrafe c1) nos referimos a los Grados de congruencia, entre las opiniones de ambos grupos de encuestados.

En cambio en el subepígrafe, C2) ANALIZAMOS divergencias, en las opiniones brindadas por ambos grupos de encuestados.

Para concluir el desarrollo del capítulo, en el subepígrafe C3) resaltando aquellos aspectos de mayor relevancia a resaltar sobre los resultados de la encuesta de opinión.

El capítulo III, tiene dos epígrafes:

En el epígrafe A) Preparamos un trabajo de Derecho Comparado, sobre el ejercicio del control político, a través del empleo de los instrumentos de control político.

El estudio comparativo incluye a los regímenes de gobiernos parlamentarios y presidencialistas:

En éste punto se comparan los instrumentos de control político empleados en la República de Costa Rica.

En contraposición con los mecanismos de control parlamentarios utilizados en el régimen parlamentario de España.

Por tanto se clarifica al respecto que el primer país ostenta un régimen de gobierno, asentado en un régimen político presidencialista, en contra posición al segundo país o sea España, que se sustenta en un régimen de gobierno parlamentario.

En el epígrafe B) Se elaboran y ofrecen las consideraciones y recomendaciones de propuestas de cambio, que se consideran necesarias para mejorar el trabajo de control

político desempeñado en la actualidad por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, a través del empleo de los mecanismos de control político.

En el capítulo IV.

Se facilitan las conclusiones finales de la investigación, y posterior a esto se aportan los diferentes datos bibliográficos. Los que se agrupan por monografías.

en orden alfabético.

Luego Artículos de periódicos.

Finalmente otras fuentes informativas.

Para terminar este estudio, con los anexos, pertenecientes a toda la investigación, proporsionando especial atención a la tercera parte del trabajo, en cuyo caso, se proporcionan las características principales del instrumento que utilizamos en la investigación (encuesta de opinión).

Empleada para recopilar toda la información de los dos grupos encuestados, de los cuales a algunos se procedió a aplicarles el instrumento de manera personal.

Conjuntamente, se describen las características primordiales del instrumento metodológico empleado en el desarrollo de la investigación, para construir el trabajo de campo que se ejecutó en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, y en las dependencias, precedentemente enumeradas así como en el despacho del consultor privado, anteriormente mencionado.

Adicionalmente, procedimos a describir de manera muy breve, a cada uno de los siete partidos políticos, que se encuentran representados en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, para el periodo constitucional que transcurre del ocho de mayo del año dos mil dos hasta el ocho de mayo del año, dos mil seis.



## ***Capítulo I***

### ***El control Político del gobierno de la República de Costa Rica , en la actualidad.***

#### **A) Principales características políticas y administrativas que configuran el Estado de la República de Costa Rica de conformidad con su Constitución política vigente de siete de noviembre del año mil novecientos cuarenta y nueve.**

Para insertarnos en la realidad, de la República de Costa Rica, y con el propósito de originar un mayor conocimiento, de sus primordiales características, exponemos como introducción, al sistema político actual de la Nación costarricense, una síntesis de la organización política y administrativa del país, que permita señalar, de forma resumida toda su conformación, política, territorial, y administrativa.

Tomando en consideración, para tal objeto, las esenciales particularidades que consolidan a la Constitución Política de la República de Costa Rica, de siete de noviembre del año, mil novecientos cuarenta y nueve. Carta política que normaliza al Estado costarricense en la actualidad, y que se destaca por la importancia en el papel desarrollado, para el fortalecimiento de la democracia, de la cual disfruta este país.

Como modo de referenciación, nos permitimos indicar, que la República de Costa Rica se encuentra ubicada, en América Central entre el mar Caribe, el Océano Pacífico y las Repúblicas de Nicaragua al norte y Panamá al sur, con una extensión territorial bastante pequeña, en razón que todo su territorio

nacional, únicamente alcanza a llegar a un total de cincuenta y un mil cien, kilómetros cuadrados.

La República, computa en la actualidad, una población de cuatro millones de habitantes, pero con una fuerte tendencia a crecer por la alta inmigración, que se mantiene asiduamente al país, debido a los enormes problemas políticos y sociales, ampliamente conocidos, que se viven en algunos países Iberoamericanos, cercanos a la República de Costa Rica.

Para los efectos de la Administración Pública, todo su territorio se encuentra dividido en siete Provincias y ochenta y un cantones, los que a su vez se distribuyen en distritos y caseríos. La Capital de la República, se denomina San José y cuenta con las Provincias de Alajuela, Heredia, Cartago, Limón, Puntarenas y Guanacaste, las cuales conforman todo su territorio nacional.

Adicionalmente, conforme a lo dispuesto en los artículos doce y trece de su Código Municipal, en cada uno de sus cantones prevalece un gobierno municipal, (Ayuntamiento) integrado por un cuerpo deliberativo denominado Concejo, bajo la dirección de un alcalde y su suplente, todos estos funcionarios en la República de Costa Rica, son de elección popular.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Código Municipal de la República de Costa Rica.

Artículo 12.-

"El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.

Artículo 13.- Son atribuciones del Concejo:

- A) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el periodo por el cual fue elegido.
- B) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa.
  - c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley.
- C) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales.
- e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 del 2 de mayo de 1995 y su reglamento.
- f) Nombrar y remover al auditor o contador, según el caso, y al Secretario del Concejo.



Igualmente, en la República de Costa Rica, la administración pública se encuentra compuesta por el Estado y los demás entes públicos, cada uno de ellos con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado; en donde el Derecho público regula la organización y actividad de estos entes, salvo normas expresas en contrario.

Por tal motivo, su actividad obligatoriamente siempre, debe estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficacia y eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen, y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

- 
- g) Nombrar directamente, por mayoría simple, a los miembros de las Juntas Administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las Juntas de Educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, por igual mayoría, nombrar a los representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera.
  - h) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código.
  - i) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en tramite.
  - j) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el reglamento que se elaborara con el asesoramiento del Tribunal Supremo de Elecciones, observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas populares, lo preceptuado por la legislación electoral vigente. En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe el Tribunal Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos formales exigidos en el código y reglamento supraindicado. Los delegados del Tribunal supervisarán el desarrollo correcto de los procesos citados.
  - k) Aprobar el Plan de desarrollo municipal y el Plan operativo anual, que el Alcalde Municipal elabore con base en su programa gobierno. Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las municipalidades.
  - l) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso y resolver lo que corresponda.
  - m) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones.
  - n) Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con el reglamento se emitirá para el efecto.
  - n) Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la remoción automática del cargo de regidor o alcalde municipal.
  - o) Dictar las medidas de ordenamiento urbano.
  - p) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades públicas de economía mixta.
  - q) Autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que estime pertinentes para beneficio del cantón.
  - r) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente".

En el Estado costarricense, la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo debe subyugarse al siguiente orden:

1.- La Constitución Política, que es la Ley superior de la República,, su rango o jerarquía está sobre todas las normas existentes en el país. Ésta contiene el conjunto más importante de principios y normas que regulan y protegen las acciones diarias de los habitantes de nuestro país, como por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, al libre tránsito, etc.; también establece la organización política, social, económica y legal del Estado. <sup>118</sup>

1.1. Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;

1.2. Las leyes y los demás actos con valor de ley;

1.3. Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;

1.4. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y

1.5. Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas.

2.- Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.

2.1. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos están sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.

---

<sup>118</sup> Cantillo Gamboa, Vanlli, Cubero Barquero, Karen, Blanco León, Daniel, Jiménez Lizano, Alexander, Madriz Piedra, Gerardo, Rivera Ramírez, Jorge, Tosso Jara, Reiner "La Sala Constitucional al Alcance de todos".

Editado por la Sala Constitucional, Año 1999. p. 5.

Disponible en <http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/>

Fundamentalmente, el ordenamiento administrativo, se entiende integrado por las normas no escritas necesarias para garantizar, un equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo. Por tanto, la administración Pública solo puede actuar sometida al ordenamiento jurídico y realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.

Finalmente, para lo que interesa, la Ley General de la Administración Pública costarricense dispone en su artículo veintiuno que los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado son:

"El Presidente de la Republica, los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno". <sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Ley General de la Administracion Publica, de la República de Costa Rica

No. 6227.

Artículos "uno, cuatro, seis, siete y veintiuno".

Artículo uno.

"La Administración Publica estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho publico y privado".

Artículo cuatro.

"La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio publico, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios".

Artículo seis.

1.- "La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetara al siguiente orden:

- A) La Constitución Política;
- B) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;
- C) Las leyes y los demas actos con valor de ley;

D) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia; e) Los demas reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas.

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.

3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estaran sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos".

Artículo siete.

También en la República de Costa Rica, según establece su Carta Política, en los artículos ciento ochenta y ocho, y ciento ochenta y nueve, las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Las instituciones autónomas son:

Los Bancos del Estado, las instituciones aseguradoras del Estado y las que la Constitución Política determina, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.<sup>120</sup>

Asimismo, en la República de Costa Rica, para todo lo que tiene relación con la asignatura del sufragio, la Carta Magna establece un tribunal especializado denominado, Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los supremos Poderes del Estado, al que le está asignada exclusivamente y de forma independiente y exclusiva la organización, dirección y vigilancia de los actos relacionados con el sufragio. Entre algunas de sus principales funciones debemos destacar:

---

1. "Las normas no escritas - como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales de derecho - servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.

2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.

1. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior".

Artículo veintiuno.

1. "Los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado serán: El Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno.

2. El Poder Ejecutivo lo forman: El Presidente de la República y el Ministro del ramo".

<sup>120</sup> Córdoba Ortega, Jorge, Fallas Vega, Elena, Ramírez Altamirano, Marina y Valerín Rodríguez.

Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículos ciento ochenta y ocho y ciento ochenta y nueve. Concordada, anotada y con resoluciones de la Sala Constitucional. 2º ed. San José: Investigaciones Jurídicas, 1996.

Cuando deba producirse la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias electorales, obligatoriamente la Asamblea Legislativa debe consultar al Tribunal Supremo de Elecciones; y éste necesariamente debe emitir su pronunciamiento, del cual cuando la Asamblea Legislativa pretenda apartarse requerirá contar con el voto de las dos terceras partes del total de sus legisladores, de otra forma le será imposible realizarlo.

Igualmente, la Constitución Política ordena, que los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, gocen de las inmunidades y prerrogativas que se establecen para los miembros de los Supremos poderes del Estado; y deben cumplir con las funciones que se instituyen en los artículos ciento dos y ciento tres constitucionales.<sup>121</sup>

En razón de lo anteriormente descrito, en la República de Costa Rica, el señor historiador, Oscar Aguilar Burgarelli, ha venido a denominar en nuestra República, al Tribunal Supremo de Elecciones, como el cuarto poder de la Patria costarricense.<sup>122</sup>

Aunque debemos clarificar, para no ocasionar confusiones, que constitucionalmente en nuestra Carta Magna, no se encuentra establecido de tal manera.

Con lo planteado administrativamente, se tiene que la República de Costa Rica le podemos tipificar, como un Estado que se estructura con un régimen de gobierno centralizado.

---

<sup>121</sup> Ramírez Altamirano, Marina y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit. 2.ed.- San José:

Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 191-197

<sup>122</sup> Aguilar Burgarelli, Oscar.

"La Constitución de 1949".

San José, Editorial Costa Rica, año, 1968, p. 160.

## **B) Principales características que conforman a la Constitución política de la República de Costa Rica promulgada el siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve.**

La Constitución Política que regula en la actualidad a la República de Costa Rica, como ya habíamos clarificado fué promulgada oficialmente el siete de noviembre del año, mil novecientos cuarenta y nueve, y esta norma jurídica se encuentra conformada por dieciocho títulos a saber:

Título I, la República,  
título II, los costarricenses,  
título III, los extranjeros,  
título IV, derechos y garantías individuales,  
título V, derechos y garantías sociales,  
título VI, la religión,  
título VII, la educación y la cultura,  
título VIII, derechos y deberes políticos,  
título IX, el Poder Legislativo,  
título X, el Poder Ejecutivo,  
título XI, el Poder Judicial,  
título XII, el régimen municipal,  
título XIII, la Hacienda Pública,  
título XIV las instituciones autónomas,  
título XV, el Servicio Civil,  
título XVI, el juramento constitucional,  
título XVII, reformas a la Constitución,  
título XVIII, disposiciones finales y transitorias.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Ramírez Altamirano, Marina y Fallas Vega Elena.

"Constitución Política de la República de Costa Rica, anotada y concordada con jurisprudencia de la Sala Constitucional.". 2.ed.- San José:

En esta Carta Política se instituye un régimen de gobierno presidencialista, y con fundamento, en que el objetivo primordial de esta tesis doctoral se encuentra cimentado en la evaluación del control político, por tal razón necesariamente me encuentro obligado a suscribir, el análisis en la descripción de los órganos que tienen relación con el tema en estudio.

La República de Costa Rica, se caracteriza por ser un Estado unitario, no autonómico, ni federado y de conformidad con lo que determina, el artículo uno de la Carta Política vigente se define por ser;

“una República democrática, libre e independiente”.<sup>124</sup>

La soberanía constitucionalmente se instituye en el artículo dos, reside exclusivamente en la Nación. Por ello, según lo establece el artículo tres de la propia Carta Magna, a ninguna persona le está permitido arrogársela; al que lo hiciere se le procederá a juzgar por el delito de traición a la Patria.<sup>125</sup>

La República de Costa Rica, en la actualidad se organiza con un sistema de Gobierno, constituido por tres Poderes independientes entre sí, a saber, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a ninguno de estos poderes, constitucionalmente le está permitido delegar el ejercicio de ninguna de sus propias funciones, y conforme a lo fijado por el artículo nueve de su Carta Política, el gobierno se acredita como:

“Popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí:

Legislativo, Ejecutivo, y Judicial”.<sup>126</sup>

---

Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen I, octubre del año 1999, p. 15-17.

<sup>124</sup> Ramírez Altamirano, Marina y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit. 2.ed.- San José:

Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen I, octubre del año 1999, p. 19-21

<sup>125</sup> Ramírez Altamirano, Marina y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit. 2.ed.- San José:

Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen I, octubre del año 1999, p. 21-22.

<sup>126</sup> Altamirano Ramírez, Marina, Fallas Vega, Elena y Linkimer Bedoya Lihanni.

El Poder Legislativo de la República de Costa Rica, se conforma por una Asamblea Legislativa, la cual se integra de cincuenta y siete diputados que representan a la nación, para un periodo constitucional de cuatro años, y de conformidad con lo que establecen los artículos ciento cinco y ciento seis constitucionales, los cuales literalmente disponen:

Artículo ciento cinco.

“La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional.

El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa”.

(Así reformado por ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002.



NOTA: El transitorio único de la ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002 dispone: "Las leyes especiales referidas en los artículos 105 y 123 de la Constitución Política, aquí reformados, deberán dictarse dentro del año siguiente a la publicación de esta Ley. Durante este plazo, no entrará en vigor lo aquí dispuesto.". <sup>127</sup>

Artículo ciento seis.

"Los Diputados tienen ese carácter por la Nación y serán elegidos por provincias.

La Asamblea se compone de cincuenta y siete Diputados. Cada vez que se realice un censo general de población, el Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias las diputaciones, en proporción a la población de cada una de ellas". <sup>128</sup>

De las funciones exclusivas que la Carta magna establece para la Asamblea Legislativa, en el artículo ciento veintiuno constitucional, nos permitimos destacar las siguientes:

- 1.- "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones".
- 2.- "Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia".
- 3.- "Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos".

---

<sup>127</sup> Altamirano Ramírez, Marina, Fallas Vega, Elena y Linkimer Bedoya Llihanni.

Obra citada. Op.cit. 3.ed.- San José, Costa Rica.

Editorial Investigaciones Jurídicas, abril del año 2005, p. 613-614.

<sup>128</sup> Ramírez Altamirano, Marina y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit. 2.ed.- San José:

Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 199-201.

4.- "Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos".

5.- "Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la paz".

6.- "Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, para la totalidad o parte del territorio y hasta por treinta días; durante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado. En ningún caso podrán suspenderse derechos o garantías individuales no consignados en este inciso".

7.- "Recibir el juramento de ley y conocer de las renunciaciones de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno, resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo".

8.- "Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento".

9.- "Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República".

10.- "Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República".

11.- "Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales".

12.- "Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación monetaria".

13.- "Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio nacional".

14.- "Darse el Reglamento para su régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se podrá modificar sino por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros".

15.- "Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente. Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla".

16.- "Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los

intereses públicos. Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes”.<sup>129</sup>

Además, en la República de Costa Rica, constitucionalmente se instauran, las prohibiciones siguientes, para los legisladores vigentes, y para todos aquellos que lleguen a ser diputados en la Asamblea Legislativa.

El artículo ciento siete constitucional, prohíbe que se pueda realizar la reelección sucesiva de los diputados. Asimismo en el artículo ciento nueve de la Constitución Política, se instituye la prohibición de que no pueden aspirar a una diputación, de no ser que renuncien a sus puestos al menos con seis meses de anticipación a las elecciones nacionales, el presidente de la República o quien lo sustituya, en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección, los Ministros de Gobierno, los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones y el Director del Registro Civil, los militares en servicio activo, los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia, los gerentes de las instituciones autónomas, y los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.

130

Nuestra Carta Política, establece, en los artículos del ciento once al ciento doce, la prohibición concerniente a que los diputados, no pueden aceptar, cargos en los otros Poderes del Estado o en las instituciones autónomas, excepto cuando se trate de un Ministerio de Gobierno, o sean llamados a formar parte de delegaciones internacionales, o sirvan como catedráticos universitarios.

---

<sup>129</sup>Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada op.cit. Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 221-304.

<sup>130</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada op.cit. Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 202-203 y 203-204

Tampoco se les autoriza a celebrar, en ninguna forma posible contratos con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos.<sup>131</sup>

Durante esta legislatura, la Asamblea Legislativa, ha infringido varias veces los artículos ciento once y ciento doce constitucionales.

Como estoy advirtiendo estos dos artículos constitucionales, han sido quebrantados y violentados en varias ocasiones por los legisladores en general. Y ni siquiera, lo que es más grave determino, se han percatado de la enorme infracción constitucional, en la cual han estado cayendo con sus actuaciones en lo tocante. Es bastante impresionante y llamativo que tal asunto, también haya escapado, al análisis, de los principales constitucionalistas del país, y a la mirada siempre crítica de nuestra prensa nacional. Como de aquellos que pudieron ser perjudicados, ante las infracciones constitucionales acontecidas. Las infracciones al mandato constitucional a las que hago referencia las ejemplifico en los siguientes casos:

1.- El primero de estos casos, se origina el 2 de junio del año dos mil cuatro, cuando el diputado, licenciado José Miguel Corrales Bolaños, acepta la postulación, para Contralor General de la República, infringiendo con tal acto, la disposición constitucional contenida en los artículos ciento once y ciento doce constitucionales.

En el periódico la nación de Costa Rica, sección sala de redacción leemos el mismo dos de junio del dos mil cuatro:

"El exdiputado liberacionista, Álex Solís Fallas fue designado hoy en la tarde como nuevo contralor general de la República, al obtener 46 votos de 49 diputados presentes en el plenario de la Asamblea Legislativa.

---

<sup>131</sup>Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 205-206.

Su contendor, el diputado liberacionista José Miguel Corrales Bolaños obtuvo tres votos”.....<sup>132</sup>

2.- El siguiente caso tenemos que sucede, el día diecisiete de agosto del año dos mil cuatro. Cuando la licenciada Gloria Valerín, acepta la postulación para magistrada propietaria de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con este acto, nuevamente y quizá con mayor gravedad, en esta oportunidad, se reitera la infracción a la Constitución Política, si tomamos en consideración la trascendental función que desarrolla en la República de Costa Rica la Sala Constitucional, como garante del cumplimiento de las leyes en general, pero en especial de los mandatos constitucionales, lo que naturalmente es contrario, con la ética, la moral y la Ley. Es lamentable, y lo que es peor aún, como se evidencia el grado del poco conocimiento, que los legisladores demuestran mantener respecto al manejo de la norma constitucional, ya que en tal elección incluso su nombre recibió veintiún votos de las bancadas políticas en plenario, durante la votación para dicho cargo. Con el propósito de que se pueda observar el criterio manifestado por algunos de los legisladores anexo, a pie de página una publicación del periódico la nación de Costa Rica del martes dieciocho de agosto, del dos mil cuatro, en la cual aparecen estas declaraciones.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Reportajes del periódico, la nación de Costa Rica, días dos de junio del dos mil cuatro, sección sala de redacción y tres de junio sección nacionales. [www.nacion.com](http://www.nacion.com)

<sup>133</sup> La diputada socialcristiana Gloria Valerín entró ayer a competir por el cargo de magistrada de la Sala Constitucional. La oficialista recibió la máxima cantidad de sufragios entre todos los concursantes, 21, en la última de tres rondas de votación que se realizaron el lunes. Además: “Va a ser muy difícil que gane” En los tres escrutinios, ningún candidato obtuvo los 38 sufragios que se requieren por disposición de la Constitución Política. La legisladora socialcristiana no participó en un concurso público que promovió la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. No obstante, en el plenario hay absoluta libertad de proponer aspirantes, como sucedió ayer con Valerín. Los jefes de fracción y el presidente legislativo, Gerardo González, acordaron continuar la votación el próximo jueves, a partir de las 3:30 p. m. Mientras tanto, procurarán alcanzar un acuerdo político para nombrar a un aspirante de consenso. Sin embargo, los partidos no vislumbran una negociación debido a la división imperante en las fracciones. No se descarta incluso que aparezcan nuevos candidatos propuestos por las bancadas. El apoyo a Gloria Valerín fue en crecimiento. En la primera ronda, dos diputados votaron por ella y en la segunda lo hicieron 11 legisladores. Su rival más fuerte fue Paul Rueda, quien arrancó con 23 votos, bajó a 15 en la segunda ronda y cayó a 10 sufragios en la última. Rueda fue propuesto por los socialcristianos; sin embargo, conforme avanzó la votación perdió respaldo entre los rojiazules. Federico Vargas, jefe

"La diputada socialcristiana Gloria Valerín entró ayer a competir por el cargo de magistrada de la Sala Constitucional. La oficialista recibió la máxima cantidad de sufragios entre todos los concursantes, 21, en la última de tres rondas de votación que se realizaron el lunes". También se anota, "El apoyo a Gloria Valerín fue en crecimiento. En la primera ronda, dos diputados votaron por ella y en la segunda lo hicieron 11 legisladores". Los votos que recibió Valerín provinieron principalmente de sus compañeros de bancada, de un pequeño grupo de liberacionistas y de dos minoritarios.

---

de los diputados socialcristianos, dijo que después de la primera votación se dieron cuenta de que Rueda no tenía suficiente apoyo.

Respaldo Los votos que recibió Valerín provinieron principalmente de sus compañeros de bancada, de un pequeño grupo de liberacionistas y de dos minoritarios. Valerín dijo anoche que será muy difícil que ella o cualquier otro candidato logre los 38 votos requeridos. Rueda y otros juristas como Magda Inés Rojas, Julio Jurado y Fernando Castillo fueron recomendados por la Comisión de Nombramientos al plenario. No obstante, el aval de la Comisión no es vinculante; esto es, los legisladores pueden respaldar o proponer a cualquier otro aspirante. Julio Jurado fue el que recibió más votos de los cuatro concursantes recomendados por la Comisión de Nombramientos (10 en la primera y segunda rondas, y 7 en la tercera). Castillo obtuvo cuatro sufragios en la primera ronda y uno en la segunda y tercera. Magda Inés Rojas solo consiguió un voto en la tercera ronda. Federico Vargas, jefe de los socialcristianos, confirmó que insistirán en la candidatura de Gloria Valerín. Aun así, Vargas considera difícil lograr un acuerdo político en torno a la figura de su compañera de partido. ¿Por qué? Valerín no tendría el respaldo del sector mayoritario de la fracción del Partido Liberación Nacional más cercano al expresidente Óscar Arias Sánchez. Tampoco los votos del Partido Acción Ciudadana, que ayer postuló para el cargo a Julio Jurado. Cuatro legisladores del Bloque Patriótico respaldaron a la abogada Silvia Solís, quien se desempeña como jefa de sus asesores. Humberto Arce, coordinador del Bloque Patriótico, prefirió no referirse acerca de un eventual apoyo para Valerín.

"Va a ser muy difícil que gane" Pocas veces, Gloria Valerín, ha estado tan cauta en sus manifestaciones como anoche. "Eso no está decidido. Fue una sorpresa y algo honroso para mí. "Los 38 votos van a ser difíciles de conseguir, no solo para mí, sino para cualquiera. "Eso es lo único que voy a decir", agregó. –Pero, doña Gloria, usted siempre habla mucho–Eso (candidatura) no estaba trabajado. Fue al filo (inicio) de la sesión que la fracción me lo dijo. No había ningún plan. Pero después surgió la posibilidad. Poco a poco, Gloria Valerín respondió, con cautela, otras preguntas. – Pero su fracción apoyaba a Paul Rueda –Había una evidencia que Rueda no tenía los votos. –Usted dijo semanas atrás que no aspiraría al cargo. ¿Por qué ahora sí? –Fue por insistencia de mis compañeros. Pero también me parece que el plenario tiene la potestad de valorar personas que se conocen. –¿Ellos se lo pidieron? –Sí. –Hay legisladores que no creen prudente que diputados opten por cargos elegidos por ellos mismos. –Mis compañeros reconocen a una persona que tiene la capacidad de ir a la Sala IV. Soy una mujer abogada, con más de 30 años de servicio público. –Tampoco creen prudente que un político vaya a la Corte Suprema de Justicia. –Todas las personas que han estado en la Sala IV han tenido color político. Lo importante es que cuando uno llega, su partido es la defensa de la Constitución.

3.- Finalmente tenemos, que el día cuatro de abril del dos mil cinco, el diputado licenciado Federico Vargas Ulloa, presentó sus atestados, ante la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa, para optar por el cargo de Defensor de los Habitantes. Véase al respecto entrevista con dicho diputado, publicada en el periódico la nación de Costa Rica, sección nacionales del día seis de abril del año dos mil cinco. <sup>134</sup>

Se debe aclarar, que por presiones externas y comentarios contrarios publicados en la prensa nacional, posteriormente éste diputado procedió a retirar su postulación.

Cabe destacar, que si alguno de los anteriores nombramientos se hubiera producido, por parte de la Asamblea Legislativa, necesariamente éste acto, devendría en nulidad, sería inválido e ineficaz, en virtud que ocurriría, en desobediencia e infracción a un mandato constitucional, de conformidad a lo dispuesto en los artículos ciento once y ciento doce de nuestra Constitución Política. <sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Entrevista con el diputado Federico Vargas Ulloa, publicada en el periódico la nación de Costa Rica, del día seis de abril del dos mil cinco en referencia a su aspiración a Defensor de los Habitantes de la República de Costa Rica. [www.nacion.com](http://www.nacion.com)

<sup>135</sup> Artículos constitucionales actuales vigentes en análisis:

Artículo 111.-

"Ningún diputado podrá aceptar, después de juramento, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o

de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones.

Esta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones internacionales, ni para los que desempeñen cargos en instituciones de beneficencia, o sean catedráticos de la Universidad de Costa Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del Estado.

(Así reformado por leyes Nos. 3118 de 16 de mayo de 1963 y 5697 de 9 de junio de 1975)".

Artículo 112.-

"La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular.

Los Diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos



Nuestro principal objetivo, con tal advertencia, es que nuestra Asamblea Legislativa, no continúe cometiendo errores de tal magnitud, como los anteriormente enumerados y poder evitar en el futuro, proseguir incurriendo en tan grandes contravenciones a nuestra Carta Política. Sólo de esta forma lograremos fortalecer nuestro sistema democrático y el respeto, obediencia y apego a los mandatos constitucionales. Y por ende hacer que los controles vengan a ser más eficaces, eficientes y oportunos.

Por lo precedentemente expuesto, dictamino que se hace urgente, proceder a regular en el Reglamento Legislativo, esta situación para que los legisladores en el futuro inmediato, tengan claro que en su calidad de diputados, no les esta permitido constitucionalmente, participar por cargos en los otros Poderes del Estado o en las instituciones autónomas, y que si lo realizan, se harán acreedores a la sanción que la propia Constitución Política dispone en el artículo ciento doce, para ello, consistente en lo siguiente:

“La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la credencial de Diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un Ministerio de Gobierno, el Diputado incurriere en algunas de esas prohibiciones”.

Lo que cabe preguntarse cuando se producen estas infracciones constitucionales, por parte de los legisladores, es a quién corresponde aplicar la sanción que establece la Carta Política¿ debido a que la Constitución Política, no

---

que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado obras, suministros o explotación de servicios públicos.

La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la credencial de Diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un Ministerio de Gobierno, el Diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones”.

lo determina, en tales circunstancias, surge la duda de a quién le compete declarar la pérdida de la credencial del diputado.

Considero que de darse una situación como la anteriormente detallada ésta debería venir a ser una responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones, cabe aclarar que esta responsabilidad no le esta asignada como tal. Aunque lógicamente considero que la Asamblea Legislativa, debe regular de tal manera esta situación, para que ni siquiera se acepte la postulación de un diputado en ejercicio, para cargos como los enumerados.

Es muy importante dejar clarificado, que no es que el diputado puede retirarse a su conveniencia, para participar en la elección y si no logra el cargo por el que aspira, regresar de nuevo como diputado, porque esto obligatoriamente esta infringiendo la disposición constitucional, cuya prohibición es muy precisa en lo consiguiente.

Para finalizar aprecio que los casos antes detallados se han producido de buena fe, por lo cual es el momento de evitar que no vuelvan a ocurrir, legislando este asunto apropiadamente, en el Reglamento Legislativo, de tal forma que el diputado conozca las limitaciones que le conlleva su cargo.

Otro aspecto importantísimo a destacar en este caso, es que esta es una de las ocasiones en la cual los constituyentes, se preocuparon de forma especial en limitar el acceso de los legisladores a otros cargos, en que ellos mismos, funjan como electores, éste aspecto aprecio, quisieron dejarle tan claro que es una de las pocas oportunidades en la cual la propia Carta Magna, estableció sin ninguna duda la sanción a aplicar cuando ocurriesen las infracciones constitucionales; por tal razón es que me parecen imperdonables tales omisiones al mandato constitucional.

Otra función muy importante y de suma responsabilidad, que debemos comentar, le compete desempeñar a la Asamblea Legislativa, en obediencia de

un mandato constitucional, es la prevista en el numeral nueve del artículo ciento veintiuno constitucional, en la cual se legisla para lo que interesa:

“Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento”.<sup>136</sup>

Al respecto en los artículos ciento ochenta y nueve al ciento noventa y dos del Reglamento Legislativo, se establece lo siguiente:

En lo tocante el artículo ciento ochenta y nueve, dispone:

“Cuando fuere acusado ante la Asamblea alguno de los funcionarios públicos citados en la fracción novena del artículo 121 de la Constitución Política, presentada la acusación y leída con los demás documentos que la acompañaren, se pasará el expediente a una comisión integrada por tres diputados elegidos por la Asamblea”.

En el artículo ciento noventa se establece que:

“Tal comisión, una vez organizada conforme lo dispone este Reglamento, recibirá todas las pruebas que presenten, tanto el acusador como el acusado, y terminada la información, dará cuenta de ella a la Asamblea, acompañándola con el correspondiente informe”.

En cambio, en el artículo ciento noventa y uno, se estatuye:

---

<sup>136</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 221-304.

“El informe de la comisión y los respectivos documentos se leerán en sesión secreta en presencia del acusado, invitado al efecto. Después de la lectura se concederá la palabra al acusado, si concurriere, para que exponga, si lo desea, lo que juzgue conveniente a su defensa; se retirará en seguida y la Asamblea, después de haber deliberado, procederá a declarar por los dos tercios de votos del total de sus miembros, si hay o no lugar a formación de causa contra el funcionario. En caso afirmativo, lo pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia, para que sea juzgado conforme con derecho, con lo cual quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones”.

A contrario sensu, el artículo ciento noventa y dos establece para la suspensión del funcionario lo siguiente:

“Cuando los miembros de los Supremos Poderes, Ministros de Gobierno o Ministros Diplomáticos de la República, fueren acusados o resultaren comprometidos como autores o como cómplices de un delito común, y el hecho lo hubiere puesto el Juez o Tribunal que conozca de la causa en conocimiento de la Asamblea, acompañando certificación de los antecedentes necesarios sin que el interesado hubiere renunciado en forma expresa a su fuero, se pasará el asunto a conocimiento de una comisión integrada por tres diputados, a fin de que rinda informe indicando si debe ser o no levantado el fuero. Si posteriormente el Juez o Tribunal informare a la Asamblea que dentro de la causa se ha dictado y ha quedado firme un auto de prisión y enjuiciamiento, necesariamente se procederá a declarar la suspensión del acusado”.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Reglamento Legislativo.

Artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa, ciento noventa y uno y ciento noventa y dos.

Artículo ciento ochenta y nueve. Acusación de funcionarios públicos

“Cuando fuere acusado ante la Asamblea alguno de los funcionarios públicos citados en la fracción novena del artículo 121 de la Constitución Política, presentada la acusación y leída con los demás documentos que la acompañaren, se pasará el expediente a una comisión integrada por tres diputados elegidos por la Asamblea”.

Artículo ciento noventa. Trámite en Comisión de la acusación

“Tal comisión, una vez organizada conforme lo dispone este Reglamento, recibirá todas las pruebas que presenten, tanto el acusador como el acusado, y terminada la información, dará cuenta de ella a la Asamblea, acompañándola con el correspondiente informe.

Artículo ciento noventa y uno.

Asimismo, debemos consignar que la Asamblea Legislativa, en la República de Costa Rica, se apoya para realizar su función de control, en la labor de dos instituciones adscritas al congreso, como vienen a ser la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República. A estas entidades auxiliares les corresponde desarrollar las siguientes funciones:

### **Contraloría General de la República.**

En la República de Costa Rica, la Contraloría General de la República, de conformidad a lo que dispone su Ley orgánica, Nº 7428. en el artículo uno es:

“Un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley”.

Además, acorde a lo cual dispone su artículo dos,

“En el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República goza de absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público. Sus decisiones solamente se encuentran

---

“Formación de causa contra el funcionario El informe de la comisión y los respectivos documentos se leerán en sesión secreta en presencia del acusado, invitado al efecto. Después de la lectura se concederá la palabra al acusado, si concurriere, para que exponga, si lo desea, lo que juzgue conveniente a su defensa; se retirará en seguida y la Asamblea, después de haber deliberado, procederá a declarar por los dos tercios de votos del total de sus miembros, si hay o no lugar a formación de causa contra el funcionario. En caso afirmativo, lo pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia, para que sea juzgado conforme con derecho, con lo cual quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones”.

Artículo ciento noventa y dos. Suspensión del funcionario.

“Cuando los miembros de los Supremos Poderes, Ministros de Gobierno o Ministros Diplomáticos de la República, fueren acusados o resultaren comprometidos como autores o como cómplices de un delito común, y el hecho lo hubiere puesto el Juez o Tribunal que conozca de la causa en conocimiento de la Asamblea, acompañando certificación de los antecedentes necesarios sin que el interesado hubiere renunciado en forma expresa a su fuero, se pasará el asunto a conocimiento de una comisión integrada por tres diputados, a fin de que rinda informe indicando si debe ser o no levantado el fuero. Si posteriormente el Juez o Tribunal informare a la Asamblea que dentro de la causa se ha dictado y ha quedado firme un auto de prisión y enjuiciamiento, necesariamente se procederá a declarar la suspensión del acusado”.

sometidas a la Constitución Política, a tratados o convenios internacionales y a la ley”.

Conforme a lo exhibido el “Contralor General de la República y el Subcontralor General de la República responden ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones”.<sup>138</sup>

## **Defensoría de los Habitantes de la República:**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, N° 7319, artículos uno y dos, la Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano adscrito al Poder Legislativo, con plena independencia funcional, administrativa y de criterio.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Ley ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA de Costa Rica, N° 7428.

Artículos uno y dos.

Artículo uno, Naturaleza Jurídica Y ATRIBUCIÓN General.

“La Contraloría General de la República es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley”.

Artículo dos, Garantía de independencia.

“En el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República goza de absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público. Sus decisiones solamente se encuentran sometidas a la Constitución Política, a tratados o convenios internacionales y a la ley. El Contralor General de la República y el Subcontralor General de la República responden ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones”.

<sup>139</sup> Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, N° 7319. Artículos uno y dos.

Artículo uno. Atribución general.

El Defensor de los Habitantes de la República es el órgano encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes. Este órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes.

Artículo dos Independencia.

El Defensor de los Habitantes de la República está adscrito al Poder Legislativo y desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio. La Asamblea Legislativa evaluará, anualmente, el funcionamiento de la Institución, mediante el informe presentado por ese funcionario, el cual se conocerá y discutirá en el capítulo que se establezca en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa.

Lo anterior implica que, junto con la Contraloría General de la República, es auxiliar de la Asamblea Legislativa en la labor de control que ejerce este poder público. En esta tríada que compone al Poder Legislativo, la Asamblea es la que ejerce el control político directa y explícitamente, mientras que la Contraloría lo ejerce a través de la vigilancia superior de la hacienda pública y la Defensoría de los Habitantes lo hace mediante el control de la legalidad, la moralidad y la justicia de las acciones u omisiones de la actividad administrativa del sector público, en tanto puedan afectar derechos e intereses de los habitantes. La Defensoría actúa de oficio o a solicitud de parte. Si en el ejercicio de sus funciones, llega a tener conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe recomendar y prevenir al órgano respectivo, la rectificación correspondiente, bajo los apercibimientos de ley, pero si se considera que el hecho puede constituir delito, debe denunciarlo ante el Ministerio Público.

El ámbito de acción de la Defensoría de los Habitantes es el sector público; carece de competencia para intervenir en asuntos entre sujetos privados. Tampoco puede intervenir en asuntos que estén en conocimiento de los tribunales de justicia (incluye Sala Constitucional y Tribunales Contencioso-Administrativos).<sup>140</sup>

## **El Poder Ejecutivo:**

En la República de Costa Rica, acorde a lo que establece el artículo ciento treinta constitucional, el Poder Ejecutivo, lo ejercen en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno, en calidad de obligados colaboradores.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Fuente informativa, documento general informativo, proporcionado por la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.

Elaborado por, Artavia Medrano, Argentina.

Jefe Unidad Asuntos Internacionales el cual se adjunta íntegramente como anexo.

<sup>141</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Mientras, el artículo ciento cuarenta y siete constitucional, establece que; El Consejo de Gobierno lo conforman el Presidente de la República y los Ministros, para ejercer, bajo la Presidencia del primero, las funciones siguientes:

- 1) "Solicitar de la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional y la autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la paz;"
- 2) "Ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley;"
- 3) "Nombrar y remover a los Representantes Diplomáticos de la República;"
- 4) "Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya designación corresponda al Poder Ejecutivo;"
- 5) "Resolver los demás negocios que le someta el Presidente de la República quien, si la gravedad de algún asunto lo exige, podrá invitar a otras personas para que, con carácter consultivo, participen en las deliberaciones del Consejo".<sup>142</sup>

Con lo planteado podríamos considerar, que en la República de Costa Rica, su presidente asume una doble investidura, proporcionada la primera, por la presidencia de la República, y la segunda por ser el jefe de gobierno.

El Poder Ejecutivo, en la República de Costa Rica, mantiene un amplio poder, en razón que tiene mucha ingerencia, debido a sus diferentes atribuciones, en el nombramiento de altos jerarcas públicos. También mantiene iniciativa exclusiva en la producción de las leyes, en el periodo de sesiones extraordinarias. Y puede hacer, uso del veto, para rechazar aquellos proyectos de Ley, que no aprecie como oportunos.

---

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 319.

<sup>142</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 376-377.



El veto es una figura, que se encuentra regulada en la Constitución Política, en los artículos del ciento veinticinco al ciento veintiocho.

En el artículo ciento veinticinco, se establece que si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes. Pero se instituye, una limitación al ejercicio de este derecho, con relación al proyecto de Ley que aprueba el presupuesto ordinario de la República, en este caso no procede el veto.

También el artículo ciento veintiséis, ordena que para que el veto tenga efectos vinculantes, el Poder Ejecutivo deberá objetarle, dentro de los diez días hábiles, contados a partir de la fecha, en que haya recibido el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, y podrá objetarle fundamentado en las razones siguientes:

“porque lo juzgue inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último caso las propondrá al devolver el proyecto”.

Además se ordena; “si no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo”.

También la Constitución Política, dispone en el artículo ciento veintisiete, que una vez reconsiderado el proyecto por la Asamblea Legislativa, con las observaciones del Poder Ejecutivo, si la Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos del total de sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la República. Pero si se adoptaren las modificaciones propuestas, se devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo, quien no podrá negarle la sanción. Pero de ser desechadas, y de no reunirse los dos tercios de votos para resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la legislatura siguiente.

Además se legisla en el artículo ciento veintiocho constitucional:

Que si el veto se fundare, en razones de inconstitucionalidad, no aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a la Sala Constitucional, para que resuelva el diferendo, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente. Se tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales por la Sala, y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa, para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene disposiciones inconstitucionales.<sup>143</sup>

En el Reglamento Legislativo, artículos del ciento ochenta y uno al ciento ochenta y tres, se establece el tramite siguiente para la atención del veto.

El artículo ciento ochenta y uno, en lo conducente dispone:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política, el término dentro del cual se deben atender los decretos legislativos, se fija en la siguiente forma:

- 1.- "Los diez días a que hace referencia el artículo 126 de la Constitución Política, han de ser hábiles para el despacho en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo concurrente.
- 2.- El término a que se hace referencia en el aparte anterior, comenzará a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que se reciba por parte del Poder Ejecutivo el decreto correspondiente.
- 3.- Los días se entenderán reducidos a las horas de despacho en ambos Poderes.

---

<sup>143</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 312-315.

4.- Para cómputo de días en cuanto a la Asamblea Legislativa, no interesará que la misma esté en receso, siempre que sus oficinas administrativas estén abiertas al despacho.

5.- Si el día final de un término es feriado o de asueto, para cualquiera de ambos Poderes, se tendrá por prorrogado hasta el día siguiente hábil, y el vencimiento se operará en el instante en que deba cerrarse el despacho ordinario de las oficinas”.

En cambio el artículo ciento ochenta y dos nos establece:

“Cuando el Poder Ejecutivo objetare algún proyecto de ley, el Presidente de la Asamblea lo pasará a la misma comisión que conoció del asunto a que se refiere, para que vierta el informe del caso. Si el informe propusiere el resello, se aprobará o rechazará en una sola sesión. Si el informe aceptare las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo y fueren aprobadas, se someterá a los dos debates de ley y la resolución final se sujetará en un todo a lo que dispone el artículo 127 de la Constitución Política; si, por el contrario, el dictamen no aceptare las objeciones ni propusiere el resello y lo aprobare la Asamblea, se dará por concluido el asunto”.

Asimismo en el artículo ciento ochenta y tres se establece, que cuando el veto fuere, contra proyectos, de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, será del conocimiento exclusivo del Plenario de la Asamblea Legislativa”.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> Reglamento Legislativo, Artículos del ciento ochenta y uno al ciento ochenta y tres.

Artículo ciento ochenta y uno.

Cómputo del plazo para la interposición del veto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política, el término dentro del cual se deben atender los decretos legislativos, se fija en la siguiente forma:

- 1.- "Los diez días a que hace referencia el artículo 126 de la Constitución Política, han de ser hábiles para el despacho en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo concurrente.
- 2.- El término a que se hace referencia en el aparte anterior, comenzará a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que se reciba por parte del Poder Ejecutivo el decreto correspondiente.
- 3.- Los días se entenderán reducidos a las horas de despacho en ambos Poderes.

---

4.- Para cómputo de días en cuanto a la Asamblea Legislativa, no interesará que la misma esté en receso, siempre que sus oficinas administrativas estén abiertas al despacho.

5.- Si el día final de un término es feriado o de asueto, para cualquiera de ambos Poderes, se tendrá por prorrogado hasta el día siguiente hábil, y el vencimiento se operará en el instante en que deba cerrarse el despacho ordinario de las oficinas".

Artículo ciento ochenta y dos, trámite en general.

"Cuando el Poder Ejecutivo objetare algún proyecto de ley, el Presidente de la Asamblea lo pasará a la misma comisión que conoció del asunto a que se refiere, para que vierta el informe del caso.

Si el informe propusiere el resello, se aprobará o rechazará en una sola sesión.

Si el informe aceptare las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo y fueren aprobadas, se someterá a los dos debates de ley y la resolución final se sujetará en un todo a lo que dispone el artículo 127 de la Constitución Política; si, por el contrario, el dictamen no aceptare las objeciones ni propusiere el resello y lo aprobare la Asamblea, se dará por concluido el asunto".

Artículo ciento ochenta y tres.

Veto contra proyectos de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena

"El veto interpuesto por el Poder Ejecutivo, contra un proyecto aprobado por una Comisión Legislativa Plena, será del conocimiento exclusivo del Plenario de la Asamblea Legislativa".

## **El Poder Judicial.**

En la República de Costa Rica, conforme a lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y dos de la Carta Magna, el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley. Se halla sometido de forma exclusiva a la Constitución Política y a la ley y las resoluciones que dicta en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.<sup>145</sup>

La Corte Suprema de Justicia, es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial. Se encuentra constituida, por veintidós Magistrados, designados por la Asamblea Legislativa (Parlamento) por períodos de ocho años, reelegibles indefinidamente.

En la República costarricense, la Corte Suprema de Justicia, no escucha o resuelve casos concretos; más bien, se divide en cuatro cámaras especializadas, denominadas:

Sala Primera, Sala Segunda, Sala Tercera y Sala Constitucional, más conocida en la República como Sala cuarta. Las tres primeras están integradas, por cinco magistrados propietarios, pero en cambio la Sala Constitucional cuenta con siete magistrados en las mismas condiciones.

La Sala Constitucional fue creada en 1989, mediante reforma de los artículos diez y cuarenta y ocho de la Constitución Política.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 381-382.

<sup>146</sup> Para mayor información, sitio web de la Sala Constitucional, en

<http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/>

La misión fundamental, de la Sala Constitucional, consiste en garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República costarricense, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución política, o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la República de Costa Rica.

### **C) Contrlbuciones de la Constitución Política de la República de Costa Rica de mil novecientos cuarenta y nueve al actual control político de la nación.**

La Constitución Política de la República de Costa Rica, promulgada el siete de noviembre del año, mil novecientos cuarenta y nueve, como hemos analizado en páginas anteriores, vino a llenar un vacío muy grande, al incorporar una cuestión muy importante para el fortalecimiento de la democracia de la República costarricense, como es el de la inclusión de manera oficial y por primera oportunidad del control político, ya que como hemos determinado durante el desarrollo de la investigación, precedentemente a esta fecha en la República de Costa Rica, el control político no constituía parte de las funciones que debían desempeñar las Asambleas Legislativas.

Con relación a esta situación se comenta, en el libro, Reflexiones sobre el Poder Legislativo Costarricense por la licenciada Rose Marie Karpinski, y otros :

"hoy el Parlamento tiene dos funciones fundamentales: por un lado, la potestad de legislar que, en virtud del principio de presunción de competencia, se puede avocar a regular cualquier materia siempre y cuando no estén atribuidas por la Constitución Política a otro órgano u ente de nuestra organización político-administrativa; y, por el otro, la potestad del control político, mediante la cual ejerce la labor de crítica y vigilancia sobre la labor del gobierno".

Continúan manifestando, "Uno de los instrumentos más importantes con que cuenta el Parlamento para ejercer el control político es la facultad de nombrar Comisiones Especiales de Investigación". Prosiguen, "en nuestra historia constitucional el Parlamento costarricense no siempre contó con este instrumento"..... Añaden, "no es sino en el período Contemporáneo, en la Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, que se consagra esta atribución en el artículo 121". <sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Karpinski, Rose Marie. Castillo, Fernando. Trejos, Adrián

Obra citada. Op.cit. Primera Edición. Asamblea Legislativa, año, 1989. P. 257.

Como se explica , por la señora Karpinski y otros, cuando hacen relación al control político, la Carta Magna promulgada el siete de noviembre del año mil novecientos cuarenta y nueve, viene a instituir, en el artículo ciento veintiuno, incisos once, veintitrés y veinticuatro; propiamente cuatro instrumentos, para el ejercicio del trabajo de control político. Estos mecanismos son:

- 1.- Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;
- 2.- Las comisiones de investigación;
- 3.- Las interpelaciones y
- 4.- Las censuras.

Al respecto en el artículo ciento veintiuno constitucional, incisos once, veintitrés y veinticuatro se dispone específicamente lo siguiente:

"11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República".

"23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente.

Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla". <sup>148</sup>

"24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los

---

<sup>148</sup> Solís Fallas, Alex.

Obra citada, op.cit. San José : Imprenta Nacional, 1988, p. 21 y subsiguientes:



intereses públicos. Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes”.<sup>149</sup>

Pero no solo estos mecanismos establece la Constitución Política, para el desempeño del trabajo de control político, debido a que también estatuye otros instrumentos de control político a saber:

1.- En el artículo ciento treinta y nueve constitucional, numeral cuarto, se establece la siguiente obligación para el presidente de la República:

“Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación”.<sup>150</sup>

2.- El artículo ciento cuarenta constitucional instituye, en el numeral once, la siguiente obligación que corresponde conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:

11.- “Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en uso de sus atribuciones”.<sup>151</sup>

3.- El artículo ciento cuarenta y cuatro constitucional, establece la obligación siguiente para los ministros de gobierno.

---

<sup>149</sup> Ramírez Altamirano, Marina.

Obra citada, op.cit, editorial Investigaciones Jurídicas, octubre año 1998, p. 38.

<sup>150</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 325-326.

<sup>151</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 326-372.

“presentarán a la Asamblea Legislativa cada año, dentro de los primeros quince días del primer período de sesiones ordinarias, una memoria sobre los asuntos de su dependencia”.<sup>152</sup>

4.- El artículo ciento ochenta y uno, también establece la siguiente obligación para el Poder Ejecutivo:

“Enviaré a la Contraloría la liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios que se hubieran acordado, a más tardar el primero de marzo siguiente al vencimiento del año correspondiente; la Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su dictamen, a más tardar el primero de mayo siguiente. La aprobación o improbación definitiva de las cuentas corresponde a la Asamblea Legislativa”.<sup>153</sup>

5.- El artículo ciento ochenta y cuatro de la Carta Magna, también manda en el numeral tercero una obligatoriedad para la Contraloría General de la República consistente en lo siguiente:

3.- “Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, con el detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugerencias que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos”.<sup>154</sup>

También encontramos un décimo mecanismo de control político, pero éste no es propiamente constitucional, me refiero a los informes que debe brindar

---

<sup>152</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 374.

<sup>153</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 465-466.

<sup>154</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 481-485.

anualmente, el defensor de los Habitantes, a la Asamblea Legislativa, relativos al trabajo desempeñado por la Defensoría de los Habitantes.

Recapitulando, debemos concretar, que a nuestro criterio, la Asamblea Legislativa, de la República de Costa Rica, constitucionalmente cuenta, con nueve herramientas oficiales de control político, referidos directamente con dicho trabajo controlador, estos instrumentos son los que inmediatamente procedemos a entrar a analizar en detalle, se aclara que el examen no se va a efectuar en el orden que anteriormente fueron citados.

1.- "Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República".

Éste, a mi juicio es un instrumento de control político sumamente importante y valioso de llegarse a utilizar apropiadamente, en concordancia con la disposición del artículo ciento cuarenta constitucional, apartado once, la cual ordena:

"Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en uso de sus atribuciones". Y además, al constituirse los presupuestos como el límite de acción de los Poderes Públicos.<sup>155</sup>

La Constitución Política de la República de Costa Rica, establece en el artículo ciento veintiuno inciso once, la obligación de la Asamblea Legislativa, de dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Para lo cual debe ajustarse a las siguientes disposiciones, instituidas constitucionalmente.

El artículo ciento setenta y seis, ordena que, el "presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración pública, durante el año económico".

---

<sup>155</sup> Saborío Valverde, Rodolfo.

Obra citada. Op.cit. Primera Edición. Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, año 2004 p. 27.

También instituye una prohibición consistente en lo siguiente:

“en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”. Además dispone, el presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre.

Asimismo en el artículo ciento setenta y siete constitucional, se legisla que la “preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un Departamento especializado en la materia”. Se dispone que dicho departamento tiene autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los Ministros de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. Pero se establece la siguiente salvedad :

“los gastos presupuestos por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio, no podrán ser objetados por el Departamento a que se refiere este artículo.

Otro aspecto de importancia que se regula es el consistente en que en el “proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico”.<sup>156</sup>

También la Carta Magna ordena en el artículo ciento setenta y ocho, que el proyecto de presupuesto ordinario debe ser sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa, por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de septiembre de cada año, y la ley de presupuesto que le autoriza deberá estar definitivamente aprobada antes del treinta de noviembre del mismo año.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 449-462.

<sup>157</sup>. Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 462-463.

Es importante destacar que la Constitución Política, en el artículo ciento setenta y nueve, establece la siguiente prohibición referida a la Asamblea Legislativa, en el mencionado artículo se dispone:

“La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos”.<sup>158</sup>

Además en el artículo ciento ochenta se regula:

“El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo”.<sup>159</sup>

El presupuesto en la Asamblea Legislativa, debe cumplir con el siguiente procedimiento de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Legislativo:

En el artículo ciento setenta y ocho se establece; una vez recibido de parte del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley de presupuesto, la Comisión de Asuntos Hacendarios designará, por votación de su seno, una subcomisión de presupuesto de cinco miembros, en el mencionado artículo, se acuerda, que por lo menos uno de los miembros de la subcomisión deberá ser de cualquiera de las fracciones representadas en la Asamblea que no sea de Gobierno.

También se legisla, que la subcomisión creada al efecto rendirá su informe a la comisión a más tardar el primero de octubre. Asimismo, se autoriza a la subcomisión de presupuesto, que para el desempeño de su trabajo, posee la facultad de citar, en calidad de asesores, a funcionarios de la Contraloría

---

<sup>158</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 463-464.

<sup>159</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 449-465.

General de la República y de la Oficina de Presupuesto, según se considere del caso. Además, la subcomisión, solicitará al Banco Central de Costa Rica el nombramiento de delegados suyos, como asesores permanentes de la subcomisión.

Los diputados que presenten mociones, tendientes a modificar el proyecto deberán hacerlo ante la Comisión, como fecha máxima el quince de octubre, y la votación del proyecto deberá producirse a más tardar el 20 de octubre.

Si a las 23:30 horas de ese día no se hubiere votado el proyecto, se suspenderá su discusión, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes y, sin más discusión, de inmediato, se procederá a la votación. Obligatoriamente, el dictamen o los dictámenes sobre el proyecto deberán ser rendidos antes de las veintitres horas del día, veinticinco de octubre, a partir de esa fecha tales documentos deberán estar disponibles para consultas de los diputados.

Inicio del trámite en el Plenario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento setenta y nueve del Reglamento Legislativo, en la sesión del día primero de noviembre, o en la sesión inmediata siguiente, si ese día la sesión no se celebrare, se iniciará la discusión del proyecto de ley en primer debate, al cual se dará prioridad sobre cualquier otro asunto en trámite. Por moción de orden aprobada por la Asamblea, ésta podrá convertirse en comisión general para discutir el proyecto en primer debate. En este caso la Presidencia de la Asamblea dará a los diputados un plazo de cinco días hábiles para presentar mociones nuevas o de reiteración de mociones rechazadas en Comisión, debiéndose conocer estas últimas con prioridad a las otras. Vencido este plazo la Secretaría no dará curso a nuevas mociones. También se establece que; si el veintisiete de noviembre de cada año, a las veintitrés horas y cincuenta y cinco minutos, no se hubiera agotado la discusión del proyecto de presupuesto, que se esté tramitando en primer debate, se tendrá por agotada esa discusión, y por aprobado dicho proyecto y quedará señalada automáticamente, la sesión subsiguiente para el segundo debate.

Asimismo, se dispone, si el veintinueve de noviembre de cada año, a las veintitrés horas y treinta minutos no se hubiere agotado la discusión del presupuesto ordinario, en segundo debate, se tendrá ésta por agotada y el proyecto se someterá a votación de inmediato, sin más discusión. Conjuntamente, se realiza la salvedad que, si los días veintisiete y veintinueve de noviembre fueran domingos o feriados, se considerarán habilitados, con el objeto de que la Asamblea pueda celebrar sesión esos días, para darle primero y segundo debates al proyecto de Presupuesto Ordinario.

Por otra parte, cuando se deba proceder con un presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias debe cumplirse con lo siguiente:

1.- El proyecto de ley pasará a ocupar el primer lugar del Orden del Día de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, al día siguiente de haber sido recibido por la Secretaría de la Asamblea Legislativa. Y conservará ese lugar hasta su votación final, la que debe producirse dentro del plazo improrrogable a los quince días hábiles siguientes. El informe o los informes sobre el proyecto deberán ser rendidos dentro de los tres días hábiles subsiguientes al de la votación. Concluido el término citado conforme a lo dispuesto en el artículo ciento ochenta del Reglamento Legislativo, el proyecto se conocerá en sesión plenaria a partir de las dieciocho horas, y conservará este lugar hasta su votación final.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Reglamento Legislativo, artículos del ciento setenta y ocho al ciento ochenta.

Artículo ciento setenta y ocho, trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios

"A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 de la Constitución Política, para la discusión del Presupuesto Ordinario de la República se observarán las siguientes reglas:

La Comisión de Asuntos Hacendarios designará, por votación de su seno, una subcomisión de presupuesto de cinco miembros, tan pronto como reciba el proyecto de ley de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo.

Por lo menos uno de los miembros de la subcomisión deberá ser de cualquiera de las fracciones representadas en la Asamblea que no sea de Gobierno. Esta subcomisión rendirá su informe a la comisión a más tardar el 10. de octubre.

Para su trabajo, la subcomisión de presupuesto tendrá la facultad de citar, como asesores, a funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Oficina de Presupuesto, según se considere del caso. La subcomisión, asimismo, solicitará al Banco Central de Costa Rica el nombramiento de delegados suyos, como asesores permanentes de la subcomisión. Las mociones tendientes a modificar el proyecto deberán ser presentadas en la Comisión a más tardar el día 15 de octubre. Las que se presenten después de esa fecha no serán de recibo. La votación del proyecto deberá producirse a más tardar el 20 de octubre. Si a las 23:30 horas de ese día no se hubiere votado el proyecto, se

suspenderá su discusión, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes y, sin más discusión, de inmediato, se procederá a la votación. El dictamen o los dictámenes sobre el proyecto deberán ser rendidos antes de las 23:00 horas del 25 de octubre, fecha a partir de la cual tales documentos deberán estar disponibles para consultas de los diputados".

Artículo ciento setenta y nueve, trámite en el Plenario.

1. "En la sesión del día primero de noviembre, o en la sesión inmediata siguiente, si ese día la sesión no se celebrare, se iniciará la discusión del proyecto de ley en primer debate, al cual se dará prioridad sobre cualquier otro asunto en trámite. Por moción de orden aprobada por la Asamblea, ésta podrá convertirse en comisión general para discutir el proyecto en primer debate. En este caso la Presidencia de la Asamblea dará a los diputados un plazo de cinco días hábiles para presentar mociones nuevas o de reiteración de mociones rechazadas en Comisión, debiéndose conocer estas últimas con prioridad a las otras. Vencido este plazo la Secretaría no dará curso a nuevas mociones. 2. Si el 27 de noviembre de cada año, a las veintitrés horas y cincuenta y cinco minutos no se hubiera agotado la discusión del proyecto de presupuesto que se esté tramitando en primer debate, se tendrá por agotada esa discusión y por aprobado dicho proyecto y quedará señalada, automáticamente, la sesión subsiguiente para el segundo debate. 3. Si el 29 de noviembre de cada año, a las veintitrés horas y treinta minutos no se hubiere agotado la discusión del presupuesto ordinario, en segundo debate, se tendrá ésta por agotada y el proyecto se someterá a votación de inmediato, sin más discusión. Si los días 27 y 29 de noviembre fueran domingos o feriados, se considerarán habilitados, con el objeto de que la Asamblea pueda celebrar sesión esos días, a la hora de costumbre o a otra que acuerde para darle primero y segundo debates al proyecto de Presupuesto Ordinario. 4. Los días 27 y 29 de noviembre de cada año, la Asamblea celebrará sesiones plenarias por lo cual en esos días no habrá sesiones de las comisiones permanentes ordinarias, permanentes especiales, especiales ni de las comisiones legislativas plenas.

Artículo ciento ochenta, presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias. En la tramitación de presupuestos extraordinarios, y de modificación de presupuestos vigentes ordinarios o extraordinarios, se procederá de la siguiente manera:

1. El proyecto de ley ocupará el primer lugar del Orden del Día de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, al día siguiente de la fecha en que sea recibido por la Secretaría de la Asamblea Legislativa. Conservará ese lugar hasta su votación final, la cual deberá producirse dentro de un plazo improrrogable de los quince días hábiles siguientes. El informe o los informes sobre el proyecto deberán ser rendidos dentro de los tres días hábiles siguientes al de la votación. Transcurrido este término, y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 180, el proyecto se conocerá en sesión plenaria a partir de las dieciocho horas, y conservará este lugar hasta su votación final. 2. No se le dará curso a mociones destinadas a suprimir, trasladar o aumentar partidas que no estén específicamente comprendidas en el proyecto que se debate. 3. La Asamblea podrá suprimir o rebajar cualquiera de las partidas comprendidas en el proyecto en debate, pero sólo en el tanto comprendido en el propio proyecto. 4. Por medio de moción, también la Asamblea podrá aumentar una partida contenida en el proyecto, ya sea mediante el traslado de fondos destinados a crear o ampliar otra partida contenida en el mismo proyecto, o señalando una nueva renta, según certificación sobre la efectividad fiscal de la misma, que deberá extender la Contraloría General de la República. Al suprimir o rebajar las partidas propuestas en el proyecto -no las que existan especificadas en su presupuesto vigente-, la Asamblea podrá formar nuevas partidas para cubrir gastos no comprendidos en el presupuesto que se trata de modificar, o bien para aumentar partidas vigentes no comprendidas en el proyecto.

5. Cuando la Asamblea Legislativa haya sido convocada para conocer específicamente sobre la modificación de uno o varios artículos o incisos de un presupuesto vigente, durante el período de sesiones extraordinarias, los diputados no podrán presentar mociones referidas a artículos o incisos no comprendidos en el proyecto objeto de la convocatoria. A más tardar, un mes después de haber comenzado la discusión de un proyecto de presupuesto extraordinario, en el Plenario de la Asamblea Legislativa, este



2.- La liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios que se hubieran acordado,.

Por la relación que existe entre el anterior mecanismo de control político, voy a proceder a analizar, en segundo lugar, el instrumento de control relativo con la obligatoriedad que establece el artículo ciento ochenta y uno constitucional, relativo a la obligación que mantiene el Poder Ejecutivo, de enviar a la Contraloría, la liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios que se hubieran acordado, a más tardar el primero de marzo siguiente al vencimiento del año correspondiente; y el cual la Contraloría debe remitirlo a la Asamblea, junto con su dictamen, a más tardar el primero de mayo siguiente. Para que ésta proceda con la aprobación o improbación definitiva de las cuentas.

Este es un instrumento de control político sumamente importante, porque a través del presente procedimiento el Poder Legislativo, puede hacer una evaluación del como se están invirtiendo los fondos públicos y si se están gastando tal como fueron solicitados.

El artículo ciento noventa y cuatro del Reglamento Legislativo, prescribe, el trámite siguiente para el informe.

Primeramente, la Comisión para el control del ingreso y el gasto público, analizará los documentos referidos en el artículo ochenta y nueve del Reglamento Legislativo y, a más tardar el último día del mes de mayo, rendirá un informe al Plenario, en el cual recomendará aprobar o improbar la liquidación. Cinco días hábiles después de recibido y leído este informe, el Plenario dedicará la segunda parte de las cuatro sesiones siguientes a su

---

proyecto deberá aprobarse -por analogía- de acuerdo con las disposiciones finales del artículo 179 de este Reglamento.

discusión. Si a las veintiuna horas de la cuarta sesión no se hubiere agotado el debate, el Presidente lo suspenderá y de inmediato, le someterá a votación.

Se regula que las fracciones legislativas de más de diez diputados dispondrán de hasta dos horas, para la discusión del informe en el Plenario, y las que no alcancen ese número dispondrán, cada una, de hasta treinta minutos. Si los jefes de las fracciones, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea, concertaren prórrogas a estos plazos, sin infringir lo dispuesto en el párrafo precedente, el uso de la palabra se concederá a las fracciones guardando la misma proporcionalidad.<sup>161</sup>

Como ya indique considero que este instrumento es sumamente importante, para conocer que ocurre con los recursos públicos, pero observo una total ausencia de normativa en el caso de que la liquidación del presupuesto no se llegue a aprobar, y aquí aprecio también un error en el ejercicio del trabajo de control político, que compete a los partidos políticos de oposición, para llegar a la ciudadanía, con un asunto como el antes detallado.

Otro aspecto que visualizo, como inconveniente en el análisis del presupuesto, es que la Asamblea no se pronuncie, respecto a la liquidación de los presupuestos de las instituciones autónomas y municipales. Dejando esto como una responsabilidad exclusiva de la Contraloría General de la República, pero considero que este es un aspecto a regular en el Reglamento Legislativo, porque, acorde a lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y tres constitucional, la Contraloría General de la República, es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, para la vigilancia de la Hacienda Pública, por lo cual no encuentro incompatibilidades, para que el parlamento se pueda pronunciar, lo que hay que hacer es crear las condiciones normativas en el Reglamento Legislativo.

---

<sup>161</sup> Ramírez Altamirano, Marina.

Obra citada. Op.cit. 2.ed, San José Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, octubre año 1998, p. 279.

Para que se pueda advertir con mayor claridad lo que afirmo, observemos lo que disponen los artículos ciento ochenta y tres y ciento ochenta y cuatro constitucionales en lo conducente:

Artículo ciento ochenta y tres:

“La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores”.

Artículo ciento ochenta y cuatro. Son deberes y atribuciones de la Contraloría.

- 1.- “Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella;
- 2.- Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación;
- 3.- Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugerencias que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos;
- 4.- Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios públicos.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Ramírez Altamirano y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999, p. 477-485.

Con lo expuesto considero, que podría realizarse, una mejor función de control político, si nuestra Asamblea Legislativa, analizara la totalidad de los presupuestos públicos y no en forma parcial como se efectúa actualmente. Ya que con la omisión anterior, más del cincuenta por ciento de los presupuestos públicos, como un todo,, no se están evaluando por el parlamento. Y soy del criterio como le exprese, que con una modificación al Reglamento Legislativo o en su defecto a la Ley orgánica de la Contraloría General de la República, esto podrá corregirse. Facilitando con tal regulación un mejor trabajo, del control político a desarrollar, por parte de la Asamblea Legislativa, y de coordinación entre la Asamblea y su auxiliar.

3.- El mensaje escrito del presidente de la República, a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones; relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República.

Éste es un medio de control político, sumamente interesante, que regula nuestra Constitución Política, en el artículo ciento treinta y nueve numeral cuarto, en donde se instituye la obligación para el presidente de la República, de que cada primero de mayo, debe brindar un mensaje por escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República.

Además constitucionalmente, tiene el deber de proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, el progreso y bienestar de la República costarricense.

Trámite que se proporciona al mensaje presidencial, por parte de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica:

"Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración

y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación;

Con relación a este informe, nos comenta, el doctor Rodolfo Saborío Valverde, en su reciente libro, Rendición de Cuentas en Costa Rica, diagnóstico y Propuesta de Sistematización.

“Del conocimiento del Mensaje Presidencial no se deriva ningún efecto jurídico, al punto que la Asamblea Legislativa no tiene siquiera la atribución de aprobarlo o improbarlo”.<sup>163</sup>

Por todo lo advertido hasta el momento, reflexiono es oportuno y conveniente que por parte de la Asamblea Legislativa, se proceda a revisar y modificar una medida tan desafortunada como la precedentemente analizada.

Otra situación que considero, debe venir a corregirse en una próxima reforma parcial a la Constitución Política, es que el presidente de la República, tenga la obligación de presentar el informe de forma personal, porque tal como esta redactado en la actualidad el numeral cuarto constitucional, en donde se establece la obligatoriedad de tal informe, no se manifiesta que sea el presidente quién deba exponerle, con lo cual éste se encuentra facultado para enviarlo a través de un ministro o hasta simplemente hacerlo llegar por cualquier medio, a la Asamblea Legislativa y con tal acto, estaría cumpliendo con el mandato constitucional, pero se estaría perdiendo, la grandeza que conlleva tal informe.

La Asamblea Legislativa, para tratar el informe en examen, conforme lo establece el Reglamento Legislativo, en el artículo ciento noventa y tres determina; que las dos primeras sesiones del plenario de la Asamblea

---

<sup>163</sup> Saborío Valverde, Rodolfo.

Obra citada. Op.cit. Primera Edición. Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, año 2004 p. 76.

Legislativa, posteriores al primero de mayo, se dedicarán al análisis del mensaje constitucional del Presidente de la República.

Para este tema, se dispone, realizarán sesión desde las quince horas y no podrá ser levantada antes de las diecinueve horas. Cada fracción representada por un único diputado cuenta con un turno hasta de treinta minutos, las que mantienen dos o más legisladores, tienen un lapso hasta de sesenta minutos y las dos fracciones mayoritarias, hasta de ciento veinte minutos. La fracción de gobierno podrá hacer sus observaciones al final.

El licenciado Rubén Hernández Valle, en su libro Derecho Parlamentario Costarricense, refiriéndose al informe del presidente de la República, comenta:

“Este es el único caso, en nuestro Derecho Parlamentario, de un debate reglado en el verdadero sentido de la palabra, pues se le otorga a cada fracción política el derecho de externar, su criterio sobre el mensaje presidencial de manera proporcional al número de diputados que tenga en la Asamblea. Este debate reglado es una forma indirecta de determinación de la política nacional, pues numerosas conclusiones que se extraen de él, culminan posteriormente en excitativas al Poder Ejecutivo o en leyes de la República en relación con temas centrales en el ámbito social, económico o político del país”.<sup>164</sup>

Pese al respetable criterio, exteriorizado por el excelente jurista Hernández Valle. Dictamino, a la medida considerada, como una acción poco lógica, en razón que se procede a analizar, el informe posteriormente a cuando estaba el presidente en el Plenario.

Analizando esta cuestión, es indiscutible, que se pierde la valiosísima oportunidad de tal análisis cuando estaba el presidente de la República,

---

<sup>164</sup> Hernández Valle, Rubén.

“Derecho Parlamentario Costarricense”.

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, septiembre del año, 2000, p. 371.

presente en el plenario, y cuando a mi juicio era el momento oportuno para realizar los interrogamientos o cuestionamientos necesarios al respecto. Sostengo que proporcionaría mayores réditos, si el debate se realizara con la presencia del presidente de la República, en el plenario de la Asamblea.

En este aspecto, considero que nuevamente, vuelven a fallar los partidos de la oposición, por que pierden la oportunidad de condicionar y cuestionar el trabajo desempeñado por el gobierno.

Por todo lo precedentemente descrito, reflexiono que el Reglamento Legislativo, se debe proceder a modificar, para convertir el informe del presidente de la República, en un verdadero debate del estado de la nación, disponiendo un tiempo determinado, para cada una de las fracciones políticas, para que puedan realizarles replicas al informe presidencial.

#### **4.- Las memorias anuales ministeriales.**

La Carta Magna costarricense, estipula en el artículo ciento cuarenta y cuatro constitucional, que los ministros de gobierno, presentarán a la Asamblea Legislativa, todos los años, durante los primeros quince días del primer período de sesiones ordinarias, una memoria referente a los asuntos de su dependencia. Pero no se establece, el contenido para esas memorias, ni que las mismas deban ser expuestas en el parlamento, para que los diputados puedan consultar sus inquietudes al respectivo ministro.

En esta cuestión, lo único que se requiere es regular en el Reglamento Legislativo tal asunto, con lo cual este instrumento de control político, cobraría una mayor vigencia y tendría un mayor impacto en la prensa nacional y por ende en la ciudadanía costarricense, si se le tratará en plenario y se le divulgará.

Con relación a las memorias ministeriales en el Reglamento Legislativo, solamente se decide en el inciso cuarto del artículo ochenta y cinco, lo que prosigue:

“Analizar las memorias de labores que rinden anualmente los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y rendir treinta días hábiles después de haber sido recibidos en la Comisión un informe al Plenario Legislativo sobre cada una de ellas”.<sup>165</sup>

En este asunto detectamos varias debilidades, ya que considero, no se esta proporcionando la importancia que deben tener las memorias ministeriales, en razón a que no se establece una verdadera evaluación de sus contenidos y una oportuna discusión de sus resultados, mucho menos se regula, llamar a los ministros en estos casos, para requerirles aclarar cuestiones que resulten ser oscuras, o inconsistentes.

Además otro aspecto, que me llama sobre manera la atención, es cuando se dispone:

“Analizar las memorias de labores que rinden anualmente los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y rendir treinta días hábiles después de haber sido recibidos en la Comisión, un informe al Plenario Legislativo sobre cada una de ellas”.

Al respecto me pregunto ¿Qué sucede con las memorias ministeriales presentadas por los otros ministerios? Será acaso que ¿no tienen importancia? Debido a que no se regula nada al respecto, contradiciendo con esto un mandato constitucional.

Nuevamente, observo se desaprovecha, un importante mecanismo de control político, al no regularle adecuadamente, por tal razón en este punto también

---

<sup>165</sup> Reglamento Legislativo, artículo ochenta y cinco, numeral cuarto.



procede una reforma constitucional y al Reglamento Legislativo, con la finalidad de corregir todas las inquietudes que se nos presentan y para adecuar este importante instrumento, a efecto de poder desempeñar, sobre las memorias ministeriales una verdadera función de control político, que ofrezca al pueblo toda la información que requiera, y además permita a los ministros clarificar, todos aquellos aspectos en los cuales los señores diputados muestren, poseer intranquilidades en lo tocante.

## **5.- Los informes que deben rendir a la Asamblea Legislativa el Poder Ejecutivo y los ministros, cuando esta los solicite en uso de sus atribuciones.**

Valoro, que este también se convierte en un instrumento de control político, sumamente importante el cual, regula nuestra Carta Política, en el artículo ciento cuarenta, inciso once y que en concordancia, con esta disposición, también se norma en el artículo ciento once del Reglamento Legislativo, en el cual se ordena:

“Las comisiones permanentes y especiales, por medio de sus presidentes, y los diputados, en forma personal, podrán solicitar toda clase de informes a las instituciones del Estado. Dichas solicitudes deberán ser atendidas con prontitud y de manera prioritaria por las instituciones y los funcionarios requeridos”.

Esta es una cuestión que a mi juicio es importantísima, porque de aquí, se podrían lograr muy buenos resultados, pero reconozco que una vez más aparecen las deficiencias en el reglamento Legislativo, por razón a que no se dispone ningún procedimiento para aquellos funcionarios, que omitan cumplir con tal mandato constitucional, por lo que se nota reiteradamente, la deficiencia en la implementación de estos importantísimos y valiosísimos mecanismos de control político.

Dictamino, que si se llega a normar apropiadamente, el empleo de este conveniente instrumento de control político, proporcionado por nuestra Carta Magna, en el mismo, los Legisladores, van a encontrar, una de las herramientas más fuertes y valiosas, con las cuales podrán realizar, un trabajo de control político, el cual vendrá a ser oportuno, eficiente y eficaz.

El exdiputado, Alex Solís Fallas, en referencia a este mecanismo nos aporta:

“Si las instituciones y los funcionarios públicos no atienden las peticiones de los diputados, estos disponen de herramientas, como el recurso de amparo y la denuncia pública, para obligarlos a entregar los informes solicitados y a brindar a los ciudadanos las explicaciones del caso”.<sup>166</sup>

Considero, que una de las situaciones que darán mayor éxito al empleo de este instrumento de control político, será mantener constantemente informado al pueblo de aquellas instituciones o jerarcas públicos, cuando se nieguen a cumplir con la disposición constitucional previamente analizada, porque esto será una forma de presión constante contra el Poder Ejecutivo, e incluso tal grado de presión, puede conllevar hasta la caída o renuncias de jerarcas públicos.

---

<sup>166</sup> Solís Fallas Alex.

“Control Político y jurisprudencia constitucional”.

/Alex Solís Fallas, San José, CONAMAJ, año, 2000, p. 128.

## **6.- La memoria anual, de la Contraloría General de la República.**

Esta memoria anual de la Contraloría General de la República, viene a ser otro importantísimo mecanismo de control político, regulado en el artículo ciento ochenta y cuatro constitucional, pero para el tratamiento de la citada memoria, en el Reglamento Legislativo, no se estatuye ningún procedimiento, con lo cual valoro, este instrumento de control político, no cumple eficientemente con el objetivo para el cual fue instituido, y únicamente se ha llegado a convertir en un medio de consulta para los diputados, por tanto dictamino que a la memoria se le puede obtener un mejor provecho, si se llega a regular en el Reglamento Legislativo y se discute en plenario.

## **7.- El informe que debe brindar anualmente, el defensor de los Habitantes, a la Asamblea Legislativa. Relativos al trabajo desempeñado por la Defensoría de los Habitantes.**

Este no es un instrumento de control político, propiamente constitucional, por que fue aprobado mediante Ley, sin embargo ha alcanzado igual o más relevancia que cualquiera de los mecanismos de control político, anteriormente descritos.

Al respecto comenta el doctor Hugo Alfonso Muñoz Quesada, en la obra Temas Claves de la Constitución Política, que la Defensoría de los Habitantes, es la "institución que ocupa el primer lugar en popularidad (encuesta de octubre de 1996), aun por encima de la Iglesia Católica, de la Contraloría General de la República y de la Sala Constitucional". <sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> A. A. V. V.

"Temas Claves de la Constitución Política".

Homenaje al doctor Carlos José Gutiérrez Gutiérrez.

Editorial, INVESTIGACIONES JURÍDICAS S.A. septiembre del año, 1999 P. 111.

El informe emanado de parte de la Defensoría de los Habitantes, mantiene como finalidad, reseñar las violaciones a los intereses de los ciudadanos, vigilando a través de su acción, que la labor del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios , los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho.

Asimismo, procura promocionar y divulgar los derechos de los habitantes y su protección. El trabajo de la Defensoría de los Habitantes, es muy importante en el país, aunque sus dictámenes no son vinculantes. Pero su efecto es muy significativo, debido a que suscita la intervención de la opinión pública por medio de la difusión de sus actuaciones. Lo cual ocasiona que las instituciones públicas y demás organismos se encuentren obligadas a colaborar en el cumplimiento de sus funciones y por tal motivo le deban proporcionar la atención requerida.

De acuerdo a lo anterior, el doctor Alex Solís Fallas, ha llegado a citar a la Defensoría de los Habitantes como:

“Un contralor de constitucionalidad, de legalidad y moralidad en el ejercicio de la función pública”. Además nos añade, “Se acepta que la expansión ineficiente de la actividad administrativa del Estado ha determinado que los controles tradicionales, en los campos político, administrativo y jurisdiccional sean insuficientes para asegurar el ajuste del sector público a la moral, la justicia, el Derecho de la Constitución y el principio de legalidad”.<sup>168</sup>

Luego de haber analizado y descrito, los siete mecanismos de control político, procedemos a examinar los instrumentos que propiamente el Reglamento Legislativo establece como mecanismos de control político, y que los regula en los artículos del ciento ochenta y cinco al ciento ochenta y ocho. También se establecen, en el artículo ciento veintiuno de la Constitución Política, y estos

---

<sup>168</sup> Solís Fallas Alex.

Obra citada. Op.cit. San José, CONAMAJ, año, 2000, p. 104-105.

mecanismos son; comisiones de investigación, interpelaciones a ministros de gobierno y censuras para estos mismos funcionarios.

## **1.- Las Comisiones de Investigación.**

Con relación al empleo, de este significativo instrumento de control político, la Carta Magna, establece mediante el artículo ciento veintiuno numeral veintitres, que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, es la conformación de comisiones investigadoras, para tales propósitos, estipula lo siguiente:

"Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente".

Además dispone "Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla".

Al respecto de las comisiones investigadoras explica, la licenciada Marina Ramírez Altamirano;

"Las Investigadoras son las que autoriza la Constitución Política, como medio de control político de la Asamblea Legislativa. Son de carácter temporal y se integran con el fin de que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende y rindan el informe correspondiente". <sup>169</sup>

Debemos aclarar que únicamente están exentos, de poder ser investigados aquellos asuntos, que sean calificados como secreto de Estado, esto de conformidad con lo que ordena la Constitución Política en el artículo treinta, párrafo segundo. Por lo demás, la Carta Magna otorga y garantiza total libertad,

---

<sup>169</sup> Ramírez Altamirano, Marina.

Obra citada. Op.cit. 2.ed, San José Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, octubre año 1998, p. 65.

con el propósito de que se pueda investigar cualquier asunto en el cual la Asamblea Legislativa, centre su interés, sin mayores limitaciones al respecto.<sup>170</sup>

El experimentado jurista costarricense, Alex Solís Fallas, nos asegura en su libro titulado el Control Parlamentario:

“Se tiende a creer, que el único mecanismo de control parlamentario de que dispone la Asamblea, son las comisiones especiales de investigación. Se ignora, o al menos no se tiene conciencia, de una gama riquísima de posibilidades que el texto constitucional ofrece a los legisladores, para controlar y pedir cuentas a los funcionarios públicos y al Gobierno en general”.<sup>171</sup>

Las Comisiones de investigación, una vez recabadas todas las probanzas concernientes, debe dar uno o varios dictámenes al Plenario, los cuales pueden ser de mayoría, y uno o varios de minoría. Si el dictamen, no es rendido dentro del plazo establecido por el Plenario, sin que lo haya prorrogado el Presidente, mandará a archivar el asunto correspondiente sin más trámite, resolución que carece de todo recurso.

Los dictámenes no se publican, salvo que la Comisión conviniere lo contrario. En tales hipótesis, la publicación incluye, de manera forzosa, todos los dictámenes; si fueren varios. Exceptuando, cuando por acuerdo unánime se excluyan algunos de ellos. Si se acuerda la publicación, el asunto no puede ingresar en la Orden del Día del Plenario; sino transcurridos dos días después de su publicación.<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> Ramírez Altamirano, Marina y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit. 2.ed.- San José:

Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen I, octubre del año 1999, p. 245-255.

<sup>171</sup> Solís Fallas Alex.

Obra citada. Op.cit. 2.ed. San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia año, 1995, p. 47.

<sup>172</sup> Hernández Valle, Rubén.

Obra citada. Op.cit. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, septiembre del año, 2000, p. 454.

En relación al tratamiento de las comisiones, el Reglamento Legislativo, en su artículo noventa, dispone que son Comisiones Especiales investigadoras:

“Las referidas en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, las que actuarán conforme a las disposiciones de la Carta Magna, así como aquéllas que nombre la Asamblea para el estudio de un asunto determinado o el cumplimiento de una misión”.

Asimismo, se nos determina en el artículo noventa y seis del Reglamento que:

“Los informes de las comisiones especiales se pondrán en conocimiento de los diputados, en forma impresa o por cualquier otro medio idóneo. Se elevarán a conocimiento del Plenario, para el trámite correspondiente, pero no podrán ser conocidos antes de que transcurran, al menos dos días, después de que fueron puestos a disposición de los diputados”.

Y se aclara que; “cuando su gestión se refiera a proyectos de ley, los respectivos dictámenes sufrirán el trámite que para ellos señala el Reglamento, sin que el asunto deba ser conocidos por ninguna de las comisiones permanentes”.

También se establece en el artículo noventa y seis bis. del mismo Reglamento; informes de las Comisiones Especiales de Investigación.

Se decide, que los informes de las comisiones especiales de investigación, se deberán tramitar conforme al siguiente procedimiento:

A.- “Los informes de las comisiones especiales de investigación no podrán ser modificados. No obstante, mediante moción de fondo podrá solicitarse la exclusión de una o más recomendaciones contenidas en el informe. Dicha moción debe ser aprobada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea”. (Treinta y ocho legisladores).

B.- "Si durante la discusión del informe de una comisión especial de investigación, surgieren hechos nuevos de relevancia, la Asamblea podrá otorgar a la misma Comisión que informó un nuevo plazo para analizar tales hechos. En este caso, se suspenderá la discusión del informe hasta tanto la comisión rinda el informe respectivo. El nuevo informe se incorporará a las recomendaciones generales y se modificará en lo pertinente el informe en discusión del Plenario.

C.- Si finalizado el período constitucional en que se llevó a cabo la investigación no se hubiere votado el informe respectivo, el mismo será conocido y discutido, únicamente, en la primera legislatura del siguiente período constitucional, sin que sea procedente una nueva prórroga. En caso de no votarse, el Presidente, sin más trámite ordenará el archivo del expediente". <sup>173</sup>

## **2.- Las interpelaciones a los ministros de gobierno.**

Con relación al empleo de este mecanismo de control político, la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece en el artículo ciento veintiuno, numeral veinticuatro:

"Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno". Al respecto aparece esta gracia, "se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes". Asimismo están exentos de la interpelación todos aquellos asuntos que sean calificados

---

<sup>173</sup> Reglamento Legislativo, artículos 90, 96 y 96.bis.  
Constitución Política artículo 121, inciso 23.



como secreto de Estado, esto conforme dispone la Constitución Política en su artículo treinta, segundo párrafo.

Prosiguiendo con el análisis de la interpelación, en el Reglamento Legislativo, artículos ciento ochenta y cinco, ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete prescribe;

Los diputados tienen derecho de pedir a la "Asamblea que acuerde llamar a cualquiera de los Ministros de Gobierno, sea para interpelarlo o para que dé informes o explicaciones sobre los asuntos que se discuten". La moción que se presente para el caso, es una moción de orden. En esta redacción, pareciera que son todos los ministros, pero esto no es así, debido a que constitucionalmente, existe una salvedad para los "asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes". Así como los secretos de Estado.

Limitación que a mi juicio, no tiene razón de ser, porque los asuntos diplomáticos, deben ser de conocimiento público en un sistema democrático como el costarricense, y no encuentro lógico, que este ministerio se encuentre exento de la supervisión del ejercicio del trabajo del control político, que le compete desempeñar al primer poder de la República, como es la Asamblea Legislativa.

También pierde sentido la disposición que dicta; "a operaciones militares pendientes". Esto si tomamos en consideración que la misma Carta Política vigente, establece en el artículo doce:

"Se proscribe el Ejército como institución permanente". Además ordena;

"Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias". Y se establece la permanente prohibición; "sólo por convenio continental o para la defensa nacional, podrán organizarse fuerzas militares;

unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.

Y si se tratará de no comprometer, la seguridad externa de la República, esta el recurso, que ofrece la Carta Magna, de declarar secreto de Estado una cuestión que se califique como muy grave o perjudicial para la Nación.

Como puede observarse, después de haber transcurrido más de cincuenta y cuatro años, de la proscripción del ejército, entonces no tiene a mi juicio lógica mantener tal prerrogativa. Por lo cual se precisa una modificación al artículo ciento veintiuno constitucional, con la finalidad de modificar, las dos situaciones comentadas.

Por otra parte el artículo ciento ochenta y seis del Reglamento Legislativo, dispone para las visitas de los ministros:

Cuando atendiendo un llamado, “ingrese el Ministro al recinto de la Asamblea, el Presidente le informará el motivo de su comparecencia y le concederá inmediatamente la palabra, para que haga la exposición o dé las explicaciones del caso. Una vez concluida la intervención del Ministro, se les concederá la palabra a los diputados que deseen hacerle preguntas concretas”.

En este caso, observo algunas debilidades en el procedimiento, tal como se haya establecido, debido a que soy del criterio, que al ministro cuando se le convoca, debería informársele del motivo de su comparecencia, para que pueda preparar mejor sus alegatos, y los diputados con ello, también puedan realizar preguntas más apropiadas. Pero además, considero que las interpelaciones deben ser reglamentadas, para que se den en forma ordinaria cada seis meses y de manera extraordinaria cuando la Asamblea Legislativa lo acuerde por votación de mayoría simple de los legisladores presentes en Plenario, en cualquiera de ambas comparecencias cada uno de los ministros deberán presentarse ante el plenario y brindar una exposición del funcionamiento de su

ministerio. Como de las limitaciones que encuentran para llevar adelante una mejor función ministerial.

En la actualidad, el artículo ciento ochenta y siete del Reglamento Legislativo, establece debate general, sobre la comparecencia del Ministro;

“Cuando no las hubiere, o estén contestadas las que se formularen, se abrirá, si algún diputado lo solicita, un debate general sobre la materia objeto de la comparecencia del Ministro, conforme con las disposiciones generales de este Reglamento. Durante este debate, será optativo para el Ministro permanecer en el recinto parlamentario”. Califico, esta disposición como un despropósito y poco provechosa debido a que no se establece de forma obligatoria la permanencia del ministro hasta la finalización del debate. Perdiéndose con esto la oportunidad que se dispone con la presencia del ministro, y desaprovechando entonces el trabajo que se puede cumplir a través del ejercicio de un mejor control político.

Otro aspecto limitante que encuentro en las comparecencias de los ministros es que la Carta Magna costarricense establece, interpelar a los ministros, pero no instituye ninguna sanción para aquellos ministros que desatiendan el mandato legislativo y constitucional. Conjuntamente la interpelación solo puede ser empleada como ya se indicó, de forma exclusiva para los ministros de gobierno con lo que lógicamente se limita su eficiencia, eficacia y oportunidad, al excluir a los demás jerarcas públicos de tal procedimiento.

Otra situación que a mi opinión es inconveniente para el buen funcionamiento de las interpelaciones a ministros, es cuando nuestra Carta Política establece en el artículo ciento cuarenta y cinco:

“Los Ministros de Gobierno podrán concurrir en cualquier momento, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea Legislativa”.

Esto ocasiona que si un ministro conoce que posiblemente vaya a ser interpelado, decida presentarse voluntariamente al plenario, con lo cual, los diputados no estarán preparados para hacer frente a tal comparecencia y el impacto en la prensa nacional no será el mismo, con lo cual la información generada, tampoco será posiblemente la esperada.

En razón de lo examinado, considero se precisa una modificación constitucional, para que los ministros solo puedan acudir al plenario cuando sean llamados por la Asamblea Legislativa o en su defecto cuando ellos mismos, hayan solicitado audiencia para tratar una cuestión en especial.

Con esto las comparecencias llegarán a convertirse en un asunto de interés y los legisladores podrán estar preparados para prestar una mejor atención al tema expuesto por el ministro, y por ende ofrecer un preferible cuidado a cualquier asunto ministerial, que beneficie la buena marcha del ministerio del cual se trate.

Un aspecto que no debemos olvidar, es que las interpelaciones para los Ministros de gobierno existen en nuestra Carta Política, hasta en la Constitución de mil novecientos cuarenta y nueve, acorde lo cita el doctor Hugo Alfonso Muñoz Quesada, en su obra *La Asamblea Legislativa en Costa Rica*.<sup>174</sup>

Asimismo nos manifiesta, el doctor Muñoz Quesada en la obra, *Temas Claves de la Constitución*, En homenaje, al doctor Carlos José Gutiérrez Gutiérrez; refiriéndose a la interpelación a los ministros de gobierno:

"Las interpelaciones a los ministros no han tenido éxito, porque no existe una reglamentación adecuada, tampoco tradición que supla esa ausencia de

---

<sup>174</sup> Muñoz Quesada, Hugo Alfonso.

"*La Asamblea Legislativa en Costa Rica*".

San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica año, 1977 P. 112.

normas". Añade, la preparación de los diputados para realizar esta actividad de preguntas suele ser superficial". <sup>175</sup>

### **3.- Los votos de censura a los ministros de gobierno.**

A nuestro criterio, este es el instrumento de control político con menor eficacia, previsto por nuestra Constitución Política. Para su empleo la Carta Magna, estatuye en el artículo ciento veintiuno numeral veinticuatro; censurar a los ministros de gobierno,. Pero para poder realizarlo deberá contar con los votos de dos tercios de los diputados presentes, y haber acontecido lo siguiente:

"cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos".

Para la censura en el mismo artículo constitucional, se presenta la siguiente salvedad:

"se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes".

En el Reglamento Legislativo, artículo ciento ochenta y ocho, se establece que, "los votos de censura a que se refiere el inciso 24) del artículo 121 de la Constitución Política, deberán pedirse en forma escrita por uno o varios de los diputados".

Además, se acuerda que una vez recibida la solicitud, el "Directorio fijará la fecha para discutir la petición".

---

<sup>175</sup> A A. V V.

Obra citada. Op.Cit. Editorial, INVESTIGACIONES JURÍDICAS S.A. septiembre del año, 1999 P. 113.

Pero se determina que la discusión no podrá efectuarse; "antes de cinco días, ni después de diez, contados a partir del día en que se presentó la iniciativa".

Una vez asumido el respectivo acuerdo en la Asamblea Legislativa; "el Directorio comunicará inmediatamente esa fecha al Ministro correspondiente". Asimismo, se establece que es obligatorio que la pretendida moción de censura concrete los motivos en que se sustenta. Y se decide que, "el pronunciamiento de la Asamblea se considera firme y no será procedente, en consecuencia, el recurso de revisión". <sup>176</sup>

Cabe señalar que en la República de Costa Rica, la imposición del voto de censura, no conlleva ninguna sanción coercitiva, únicamente es un voto de carácter político y moral, por ende no obliga al ministro a dimitir ni al Poder Ejecutivo a destituirle. <sup>177</sup>

Esto en razón que la propia Carta Política, establece en el artículo ciento treinta y nueve; son deberes y atribuciones exclusivos de quien ejerce la Presidencia de la República:

"1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno;....

Personalmente, considero que mantener la censura en un régimen político como el costarricense, tal como se encuentra regulada es un gran error, debido a que resulta ser un mecanismo, económicamente muy costoso para ser sostenido por un país, pobre, como el costarricense, y porque la propia Carta Magna establece, otros mecanismos más eficaces, eficientes y funcionales, que la moción de censura .

Por este motivo abogo porque, mediante una modificación parcial a la Constitución Política, en donde se evalúen y operacionalicen mejor todos los

---

<sup>176</sup> Reglamento Legislativo artículo ciento ochenta y ocho, Constitución Política artículo ciento veintiuno, inciso veinticuatro.

<sup>177</sup> Karpinski, Rose Marie. Castillo, Fernando. Trejos, Adrián

Obra citada. Op.cit. Primera Edición. Asamblea Legislativa, año, 1989. P. 228.

instrumentos de control político vigentes, se excluya la moción de censura, o en su defecto se le otorguen mayores consecuencias a las actuales. Pues, tal como esta estatuida no tiene ningún sentido ni lógica mantenerle entre los instrumentos de control político.

Aprecio, como muy oportuno el análisis del doctor Hugo Alfonso Muñoz Quesada, en la obra Temas Claves de la Constitución. En donde con muy buen tino determina el doctor Muñoz Quesada:

“Los instrumentos de control de carácter parlamentario, como la censura, las interpelaciones y las preguntas, deben ser objeto de una adecuada regulación reglamentaria”. Asimismo agrega, “las preguntas a los ministros para obtener información no obedecen a un planteamiento claro, coherente y sistemático”. Nos añade, “convendría realizar un esfuerzo de capacitación para enseñar a asesores de los diputados a formular preguntas oportunas, adecuadas e inteligentes a los ministros y a otros funcionarios del Poder Ejecutivo y dar un seguimiento necesario para colaborar con las tareas del diputado”.<sup>178</sup>

Además, de los anteriores instrumentos de control político, a los cuales podemos otorgar la calificación de formales, encontramos en la Carta Magna costarricense, otros mecanismos, que indirectamente se emplean como instrumentos de control político, pero que no se establecen como tales, solo como modo de ejemplificación consideremos lo siguiente:

En nuestro país, el diputado, acorde a lo dispuesto en el artículo ciento diez constitucional, cuenta con un fuero de inmunidad, que le autoriza y protege para realizar cualquier tipo de denuncias, sin poder ser perseguido por ello.

Pero a nuestro juicio, este no es un instrumento propiamente de control político, sino una prerrogativa de la cual le provee el escaño o sea es una

---

<sup>178</sup> A A. V V.

Obra citada. Op.cit. Editorial, INVESTIGACIONES JURÍDICAS S.A. septiembre del año, 1999 P. 112.

facilidad con la cual dispone el legislador y que de una forma indirecta se llega a convertir en un medio de control político, pero que no podemos calificarle propiamente como instrumento de control político, constitucionalmente dictado para esas finalidades, más bien,, como ya indicamos estas son prerrogativas de las cuales dispone el diputado individualmente, para de una forma indirecta, poder ejercer algunas acciones de control político, hacia los otros poderes. Que en ocasiones, lo representa mediante llamadas telefónicas o a través de cartas, conferencias de prensa y otros. Los cuales en muchas oportunidades resultan ser tan eficaces, eficientes y oportunos, tanto como los formales o aún más.

Sobre este particular, nos expresa el doctor Alex Solís Fallas;

"Muchas veces una carta o una conferencia de prensa, o una denuncia sobre determinado asunto formulada por un legislador, en condición personal, puede tener mayor efecto colectivo, que cualquiera de los controles establecidos formalmente dentro de la Constitución. <sup>179</sup>

En relación a lo que se estudia, comentan los catedráticos Hugo Alfonso Muñoz Quesada y Constantino Urcuyo F:

"En sentido estricto, no toda actividad llevada a cabo por el órgano legislativo, individual o colectivamente, que incide directa o indirectamente en la ejecución de las políticas públicas, puede entenderse como control". Además añaden, "Existen otros actos del parlamento, como la emisión de leyes, reformas constitucionales y otros que, incidiendo en las políticas del órgano ejecutivo, no configuran técnicamente el ejercicio del control parlamentario". <sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Solís Fallas Alex.

Obra citada. Op.cit. 2.ed. San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia año, 1995, p. 56.

Muñoz Quesada Hugo Alfonso y Urcuyo F, Constantino.

"Desarrollo Legislativo y reforma Política en América Latina".

San José, Costa Rica. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL, año, 1997, p. 41.



Un aspecto que me interesa analizar, debido a que lleva a confusión, como si este fuera un medio propiamente de control político, es cuando se procede por la Asamblea Legislativa, al nombramiento de los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia o cuando se debe efectuar la prorroga de sus respectivos nombramientos.

Esta situación, he notado, tiende a confundirse, por algunos de los doctrinarios costarricenses; como modos de ejemplificación en tales asuntos, observemos lo siguiente:

La licenciada Marina Ramírez Altamirano, a escrito en su obra Manual de Procedimientos Legislativos:

“Otras formas de control político de la Asamblea, son: nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios de alto rango”.....<sup>181</sup>

Al respecto, es necesario dejar aclarado que posteriormente a este acto en el ejercicio de sus propias funciones ambos poderes son totalmente independientes. Lo cual es patente si valoramos, lo que se establece en el artículo nueve constitucional, en el que se legisla con transparencia y determinación:

“El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Ramírez Altamirano, Marina.

Obra citada. Op.cit. 2.ed, San José Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, octubre año 1998, p. 38

<sup>182</sup>Ramírez Altamirano, Marina y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit. 2.ed.- San José:

Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen I, octubre del año 1999, p. 34-41.

Ciertamente, en la República de Costa Rica, los poderes Legislativo y Ejecutivo, tienen una legitimación directa del pueblo, dado que es éste último, quién les viene a otorgar su legitimación para sus actuaciones, esto a través del voto o sufragio.

En cambio, el Poder Judicial conforme a lo que se dispone en el artículo ciento veintiuno constitucional, inciso tres, adquiere su legitimación del Poder Legislativo debido a que en el aludido inciso leemos;

“Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia”.

Con el anterior acto, tenemos que realmente la Asamblea Legislativa, cuando cumple con ésta función, lo personifica en obediencia del mandato constitucional. Y no con el propósito de desempeñar una función controladora, sobre el Poder Judicial. Porque si le aceptáramos de esa manera, entonces estaríamos atentando contra la independencia de los poderes vigente en la República de Costa Rica.

Por tal razón es evidente que pese a la obligación constitucional que mantiene la Asamblea Legislativa de realizar el nombramiento de los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la separación de los poderes del Estado, en la República de Costa Rica, esta muy clara en la Carta Política, y el poder Judicial procede en sus actuaciones con total independencia, respecto a las funciones que incumben desarrollar a los poderes Legislativo y Ejecutivo.

**D.- Principales características que determinan a la función de control político ejercida, por la Asamblea legislativa de la República de Costa Rica, durante los periodos que transcurren de los años mil novecientos cuarenta y nueve al año mil novecientos ochenta y nueve.**

Para iniciar con el desarrollo de este acápitat, debemos precisar que en la Constitución Política actual, de la República de Costa Rica, el control político no se encuentra formalmente definido, por lo que la interpretación queda a opinión del que corresponda analizarle. Por eso, es variada la opinión de los doctrinarios costarricenses, al momento de determinar los mecanismos de control político, que ofrece nuestra Carta Magna para cumplir con tan preponderante función contralora, o controladora como también se le suele denominar.

Con relación a lo expuesto, nos manifiesta el consolidado doctrinario del Derecho costarricense, doctor Hugo Alfonso Muñoz Quesada, en el libro temas Claves de la Constitución Política;

"El control político no aparece definido en la Constitución Política; algunos artículos señalan formas de control, pero no existen un concepto claro ni norma alguna que lo defina. Así cabe señalar que, entre las funciones de la Asamblea Legislativa, en su artículo 121 se establece un conjunto de actividades o mecanismos encaminados a comprobar el funcionamiento de los órganos del Estado. Entre estos instrumentos cabe mencionar las interpelaciones y la censura, la obligación de los ministros de comparecer, el control de las memorias de los ministerios y, finalmente, las comisiones de investigación".

Al respecto nos continúa exponiendo que las comisiones investigadoras son; "órganos constitucionales que han jugado un papel significativo, en particular a

partir de 1986, con las denominadas comisiones sobre el narcotráfico.<sup>183</sup>

Porque en las primeras décadas de vigencia de la Constitución Política actual, el trabajo desempeñado por las comisiones investigadoras, fue poco evidenciador de problemáticas, que impactaran en la ciudadanía costarricense. Estos órganos inician a cobrar relevancia, en el periodo constitucional mil novecientos ochenta y seis, mil novecientos noventa, con las investigaciones sobre el narcotráfico, cuando se tuvo la virtud, de llevar al debate parlamentario, el tema de los vínculos del narcotráfico y las nefastas consecuencias de esa actividad.

En relación con este tema, nos manifiesta el doctor Hugo Alfonso Muñoz Quesada en el libro, *Temas Claves de la Constitución Política*, que tales investigaciones, pusieron de relieve deficiencias procesales, en el campo jurídico, debido a que se encontraron con la ausencia de reglas claras y por tales razones en varios aspectos, desbordaron sus competencias procesales: pruebas en conciencia, ausencia de instrumentos de recusación, para apartar a personas que tenían motivo para ello, en el proceso de investigación. Por tal razón nos añade el doctor Muñoz Quesada, "Los puntos mencionados ratificaron la necesidad de una oportuna y precisa reglamentación".<sup>184</sup>

Otro aspecto de vital trascendencia, al cual nos hace alusión en esta obra, el doctor Hugo Alfonso Muñoz Quesada, es el que concierne a que entre:

"La coordinación con instituciones auxiliares de la Asamblea Legislativa no está debidamente estructurada, desarrollada". Nos añade éste autor, "se necesita un esfuerzo institucional para establecer vínculos estables, constantes y sistemático; así debe ocurrir con la Contraloría General de la República, que fiscaliza los fondos públicos; y con la Defensoría de los Habitantes que supervisa, en favor de los derechos humanos, para que la conducta de la

---

<sup>183</sup> A A. V V.

Obra citada. Op.cit. Editorial, INVESTIGACIONES JURÍDICAS S.A. septiembre del año, 1999 P. 110.

<sup>184</sup> A A. V V.

Obra citada. Op.cit. Editorial, INVESTIGACIONES JURÍDICAS S.A. septiembre del año, 1999 P. 114.

administración se ajuste al ordenamiento jurídico, a la ética y a la justicia". Resueltamente nos dice el doctor Muñoz Quesada; "desde la creación de la Contraloría General de la República, órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, en 1949, no se ha logrado establecer un vínculo institucional estrecho entre ambas instituciones. La necesidad de crear esos ligámenes resulta fundamental a estas alturas del siglo XX". Además agrega; el fortalecimiento del control parlamentario para dar seguimiento a la ejecución de leyes, en particular en materia presupuestaria, necesita integrar necesariamente esos esfuerzos, con la creación de instancias de enlace, de coordinación entre ambas instituciones".<sup>185</sup>

También el exdiputado, y reconocido jurista costarricense, Alex Solís Fallas, quién precisamente ocupó su diputación en ese período constitucional, nos comenta sobre el trabajo desarrollado por las comisiones investigadoras:

"Como fruto de ese esfuerzo investigativo, se anularon contratos; se despidieron o tuvieron que renunciar funcionarios públicos del más alto nivel; se reorganizaron los cuerpos policiales; se integró la Comisión Nacional de Drogas; se promulgó la Ley contra el Narcotráfico; se depuraron procedimientos de entrada y salida de nacionales y extranjeros por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Asimismo nos agrega, "se tomó plena conciencia de la importancia de una función legislativa relegada a un segundo plano o al menos poco explorada en el Parlamento costarricense; es decir, el control parlamentario". Continúa comentando, "como testigo de cargo, recuerdo que, en algunas ocasiones, la discusión desbordó todo límite razonable en el Parlamento, por la forma, el tono, los conceptos y el tiempo empleado en la discusión de los temas. Esto llevó a que muchos legisladores, de uno u otro partido, para justificar o compartir un informe, desvirtuaran, inconvenientemente, hasta donde lo permitían las circunstancias, conceptos e instituciones consagradas en el ordenamiento jurídico....."<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> A A. V V.

Obra citada. Op.cit. Editorial, INVESTIGACIONES JURÍDICAS S.A. septiembre del año, 1999 P. 110-111.

<sup>186</sup> Solís Fallas Alex.

Obra citada. Op.cit. 2.ed. San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia año, 1995, p. 45-47.

Como podemos visualizar del comentario, del doctor Solís Fallas, en esas ocasiones las comisiones de investigación, laboraban sin ningún límite, pero estos aparecen con las regulaciones que dicta la Sala Constitucional a partir de mil novecientos noventa y uno, y que a posteriori procederemos a analizar en profundidad.

Otra situación de relevancia, que nos muestra el doctor Alex Solís Fallas, en su libro el Control Parlamentario, es la consistente en que hasta mil novecientos setenta y ocho, el desempeño del ejercicio del control político se suspendía, durante el período de sesiones extraordinarias. Añade "En 1978, se debatió ese punto en la Asamblea Legislativa. Hasta esa fecha, se interpretó que durante el período de sesiones extraordinarias, se suspendía el control político, sobre la base de lo establecido en el artículo 118 de la Constitución". Agrega, "tal interpretación se varió a partir de diciembre de 1978. En ese momento histórico, los legisladores inventaron y practicaron, por la vía de hecho, la inclusión, en el orden del día, el conocimiento de un nuevo punto, relacionado con el control en su justificación, los diputados argumentaron que la suspensión del control político no era lógica, precisamente cuando se producía un desplazamiento de funciones legislativas al Poder Ejecutivo y cuando el principio de frenos y contrapesos se debilitaba por el aumento de las potestades normativas del Poder Ejecutivo. Así, sostenían ellos, como contrapartida, el Poder Legislativo también debía aumentar sus posibilidades de control político, y no anularlas por completo durante los períodos de sesiones extraordinarias".<sup>187</sup>

Un aspecto más a destacar en los períodos constitucionales en análisis, es que durante el transcurso de estos cuarenta años, las mociones de censura solicitadas para ministros de gobierno, fueron tan escasas que ni siquiera llegaron a la docena, además ninguna de las tramitadas logró alcanzar el

---

<sup>187</sup> Solís Fallas Alex.

Obra citada. Op.cit. 2.ed. San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia año, 1995, p. 65-66.

número de votos requeridos para su aprobación, por tal razón solo como modo de ejemplificación vamos a referirnos únicamente a un par de ellas.

A la primer moción de censura que vamos a referirnos, es la que se tramitó, en fecha cuatro de octubre del año, mil novecientos setenta y uno, bajo el expediente a-22e-5432. Moción de censura gestionada, por el señor diputado Saborío Alvarado, en contra del ministro de agricultura y ganadería, señor Fernando Batalla E.

Este voto de censura, se fundamentó, en el perjuicio que a criterio del diputado Saborío, había causado el Ministro, al interés público al haber utilizado la información obtenida en el seno del Consejo de Gobierno, para realizar varias operaciones especulativas con dólares, tanto a su nombre como a nombre de sus familiares cercanos o de empresas en las cuales directa o indirectamente tenía interés el señor Ministro.

El día cinco de octubre de ese mismo año, se conoció en el seno de la Asamblea Legislativa la moción del voto de censura, y de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente, se fijó la sesión del día miércoles trece de octubre para discutir la moción. Conforme al artículo ciento veintiuno constitucional, numeral veinticuatro, se entró en la discusión de la moción, y debido a que el ministro, Fernando Batalla Esquivel, no se hizo presente en el Plenario, se procedió a dar la palabra de primero al proponente de la moción, diputado Saborío Alvarado, que tuvo una participación muy amplia y entre sus muchas intervenciones manifestó:

"Yo interpreto que esta moción debe ser conocida y aprobada, no porque haya un delito, que este típicamente contemplado en el Código Penal vigente. Para la censura procede porque ha habido un miembro de un poder que ha cometido un acto que yo califico de inmoral..." folio 115.

Sobre la importancia del voto de censura opinó que

"es medular en este momento crucial que atraviesa el sistema parlamentario costarricense, porque antiguamente, y eso es cuando había dignidad, cuando a un Ministro le sucedía algo parecido o similar a lo que ha ejecutado el señor Ministro de Agricultura y Ganadería, no habría necesidad de conocer la moción de censura, porque en esos tiempos, si el Ministro no renunciaba el Presidente lo llamaba y le pedía la renuncia" Folio 117.

Todo este procedimiento, durante la discusión se llevó a cabo sin la presencia del Ministro, quien se negó a acudir al seno de la Asamblea Legislativa, y contrario a toda ética, solamente se defendía a través de los medios de comunicación, máxime cuando ya era de dominio público el hecho de que existía una moción de censura, en su contra. En este punto los diputados se encontraban ante la disyuntiva de conocer y resolver el asunto y juzgar a una persona que no quería realizar, uso del derecho que le otorgaba la Constitución Política de irse a defender al seno de la Asamblea Legislativa. El argumento que utilizaba el Ministro, por medio de la prensa se basaba en que la compra de dólares fue para cancelar una deuda preexistente. Sin embargo, se logró comprobar que a la fecha de la compra de los dólares, él no había formalizado ningún negocio. Más tarde aparecen unas facturas firmadas por un presunto acreedor por concepto de una venta de ganado que de todas formas, carecía de una serie de trámites normales y mínimos requeridos en las compras de ganado como lo son los registros genealógicos, fotografías, etc.

Lo que ocurrió en el caso que explicamos según consigna el expediente fue:

El Ministro Batalla, aprovechándose de su participación en los Consejos de Gobierno se enteró de una devaluación de nuestra moneda, por lo que se apuró a realizar una serie de compras de dólares. Esta situación la reseña muy bien el diputado Saborío Alvarado, cuando dice que "hay que reconocerle al señor Batalla, que como activo, para realizar negociaciones en los Bancos no le gana nadie en este país. Y tanto corrió el Ministro el día que se vencía el plazo en que vendían dólares al 6.65, que



cuando llegó a hacer la última compra al Banco de Costa Rica, le rechazaron el cheque porque no tenía fondos. Y entonces, diligente como es, les dijo a los funcionarios del Banco de Costa Rica que el iba a arreglar el asunto al Banco Nacional. Los empleados le dijeron que ya se acercaban las tres de la tarde y que perfectamente podía dejarlo para el día siguiente, él dijo que no, que le urgía; se fue al Banco Nacional, arregló lo del cheque que no tenía fondos, en razón de que no había tramitado unos depósitos, volvió al Banco de Costa Rica, pero ya había cerrado la puerta. Pero como era el señor Ministro de Agricultura y Ganadería, pasó después de las tres de la tarde y estuvieron los empleados que lo pueden atestiguar, hasta las cuatro y treinta de la tarde tramitándole la última compra de dólares que logró hacer el Ministro de Agricultura y Ganadería ese día, en razón de que lo atendían ya fuera de horas porque se trataba de un miembro de los Supremos Poderes.." (Folio 130) .

A pesar del revuelo que causó esta moción de censura, el Ministro no accedía a presentarse a la Asamblea, y continuaba defendiéndose a través de la prensa, con la venia del entonces Presidente de la República, don José Figueres Ferrer. Tanto recurrió a la prensa, que en una oportunidad involucró a la Contraloría General de la República, al decir que "después de un examen exhaustivo de 90 días, la Contraloría ha confirmado la correcta tramitación de mi negocio ganadero y doy por bien recibidos los ataques a cambio del altísimo valor moral que para mi y para mis hijos tienen los conceptos de su carta". (Folio 132).

Fue tal el abuso del Ministro, que la Contraloría se vio obligada a hacer una publicación para aclararle a la opinión pública que no había de ninguna manera vertido un pronunciamiento y eximido de culpa al Ministro de Agricultura sino que solamente levantó un informe que le había solicitado la Asamblea Legislativa.

No obstante que el voto de censura que se promovía en el seno de la Asamblea Legislativa en contra del Ministro de Agricultura, el Presidente de la República le

daba todo su apoyo, en contra de toda ética pues aunque en el sistema jurídico costarricense no exista una sanción que permita la destitución inmediata del Ministro, como sucede en los sistemas Parlamentarios, es a todas luces inmoral mantener en el cargo a un Ministro censurado ya por la opinión pública.

Finalmente, discutida la moción de censura, por los señores Diputados, que sumaban cuarenta y ocho, pasaron a emitir su voto. Como resultado de la votación, la moción de censura fue desechada, pues se lograron veinticinco votos a favor y veinticuatro en contra, con lo que la moción de censura no se logró aprobar ya que se requerían treinta y ocho votos, pese a la gravedad de los hechos demostrados.<sup>188</sup>

Cabe comentar, al respecto, que nos produce decepción y lastima, para no emplear otros términos más fuertes, el resultado de esta moción de censura, y como se dejó impune, un acto el cual, a toda vista es un abuso de poder y un acto delictivo, porque a mi juicio la moción de censura debió haber sido aprobada por unanimidad y además solicitársele a la Corte Suprema de Justicia, iniciar una investigación al respecto, para aplicar las sanciones penales que procedieran.

Al segundo expediente legislativo que realizaremos referencia es el que se tramitó el dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, bajo el número de expediente a-40e7671. Presentado por el Diputado Ricardo Rodríguez S. CONTRA el Ministro de Seguridad Pública Benjamín Pizza C.

Este voto de censura, se fundamentaba en el motivo que el ocho de mayo de mil novecientos ochenta y cinco un avión Hércules C-130 de los Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto de Llano Grande en Liberia, y que fue un hecho público y notorio. Lo más grave, fue que este avión ingresó al país y

---

<sup>188</sup> Expediente legislativo a-22e-5432.

"Moción de censura gestionada, por el señor diputado Saborío Alvarado, en contra del ministro de agricultura y ganadería, señor Fernando Batalla esquivel".

permaneció en ese aeropuerto, sin que la Asamblea Legislativa diera su aprobación, como lo requiere el artículo ciento veintiuno constitucional, numeral cinco. Esto porque el Ministro decidió, que esa aeronave no requería el permiso legislativo.

Cuando esta moción de censura, entra en discusión el día veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, se dio la palabra en primer lugar al Diputado Rodríguez Solórzano, quien repitió verbalmente los motivos en que basaba la moción de censura.

Según registra el expediente, también participaron otros diputados en la discusión, entre ellos Ferreto Segura, al decir: "En la sesión de ayer, cuando vi ese grupo de personas en las barras, que más que un grupo, era una turba que se reunía, amenazándonos con armas punzo cortantes y también ostentando armas de fuego, no pude menos que recordar La Marsellesa; una estrofa de la Marsellesa que dice:

"Esa turba sangrienta y audaz degollar nuestros hijos desea, para ahogar en su sangre la idea las armas preparad, no hay tiempo que perder, marchad, marchad, a defender la santa libertad" (Folio 60).

Éste mismo diputado, continúa diciendo que "hay que decir a propósito de la turba de anoche, que tenían aparatos de radio que utilizaban ostentiblemente para comunicar con su cuartel, venían preparados para la emergencia de una gran confrontación, y tenían aparatos técnicos, modernos para mantener la comunicación con su jefe en el Ministerio de Seguridad Pública." (Folio 61).

Mientras el Diputado Chaverri Soto agregó: "En lo personal, señores diputados, tengo el criterio de que de cualquier manera concierne mucho más a los intereses del país, el que la Asamblea se reserve la competencia y que no quede el punto entonces al arbitrio del Ejecutivo: resuelto por lo menos desde mi punto de vista personal, este asunto, es evidente que se ha producido una omisión, un error o una falta, si se quiere del Ministro de Seguridad Pública, ahora procede entonces analizar si la falta cometida por el Ministro, admitiendo

que la hubiere cometido, es una falta que justifique el voto de censura, que es la máxima sanción política que puede establecer ésta Cámara de diputados" (Folio 121).

Finalmente, este voto de censura fue desechado, ya que de los 41 diputados presentes durante la sesión en la que se realizó la votación, solo once votaron afirmativamente, mientras que treinta lo hicieron en contra del voto de censura.<sup>189</sup>

Según la información que nos fué facilitada, por el área de archivo de la Asamblea Legislativa, en la República de Costa Rica del año mil novecientos cuarenta y nueve al año mil novecientos ochenta y nueve, cronológicamente se registra han tramitado las siguientes mociones de censura, de las cuales no se ha aprobado ninguna.

1.- Voto de censura planteado por varios señores diputados de la Oposición contra varios señores Ministros, por incumplir el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Constitución Política. Fue iniciado el diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y seis. Desechado. Consta en el Expediente Número A-40 E-7671.

2.- Voto de Censura de varios diputados contra el Ministro de Gobernación, Seguridad Pública y contra el de Educación por la no presentación a tiempo de las Memorias de sus Ministerios. Iniciado el veintitres de mayo de mil novecientos sesenta. Retirado, consta en el Expediente Número A-40 E-7671.

3.- Voto de censura presentado por los diputados Suames Valverde, Ortuño Sobrado, Suñol Leal y otros contra el Ministro de Salubridad Pública, Dr. Terán

---

<sup>189</sup> Moción de censura, tramitada el dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, "bajo el número de expediente a-40e7671". Presentada por el Diputado Ricardo Rodríguez S. CONTRA el Ministro de Seguridad Pública Benjamín Piza C.

Valles Max. Iniciado el doce de junio de mil novecientos sesenta y cuatro. Desechado; consta en el expediente Número A-40 E-7671.

4.- Voto de censura, iniciativa de los diputados Molina Quesada y Gutiérrez Gutiérrez contra el Ministro de Hacienda licenciado. Álvaro Hernández Piedra. Iniciado el dos de julio de mil novecientos sesenta y ocho, desechado ya que de los cuarenta y nueve diputados presentes, veintiocho votaron a favor y 21 en contra. Consta en el Expediente Número A-40 E-7671.

5.- Voto de censura presentado por iniciativa del diputado Saborío Alvarado contra el ministro de Agricultura y Ganadería Fernando Batalla Esquivel. La moción de censura no fue aprobada de los cuarenta y ocho diputados presentes, veinticinco votaron a favor y veinticuatro en contra. Iniciado el cuatro de octubre de mil novecientos setenta y uno. Desechado. Expediente número A-22 F-5432.

6.- Voto de Censura presentado por la Fracción de Liberación Nacional (entre otros Arauz Aguilar, Castillo Morales, Solano Calderón, en contra del Ministro de Seguridad pública Juan José Echeverría Brealey. Esta moción de censura no fue aprobada de los cuarenta y cuatro diputados presentes, 25 votaron en contra y solo 19 a favor de la censura. Consta en el Expediente A-E-6850. Presentada el nueve de julio de mil novecientos setenta y nueve .

7.- Voto de censura presentado por el diputado Rodríguez Solórzano contra el Ministro de Seguridad Pública Benjamín Pizza Carranza. Esta moción fue rechazada, de cuarenta y un diputados únicamente once votaron a favor y treinta en contra. Iniciado el dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y cinco. Consta en el expediente Número A-40E-7671.

Interpelaciones y comparecencias de ministros al plenario legislativo.

Las interpelaciones para los ministros de Gobierno, es uno de los mecanismos de control político, de mayor importancia con los que cuenta la Asamblea Legislativa, en la República de Costa Rica.

Las interpelaciones constituyen un mecanismo de control político, bastante importante, debido a que por medio de ellas, los diputados pueden informarse acerca de un asunto dudoso, y también llegar a controlar la actividad del Gobierno.

A continuación exponemos los resultados de un par de casos de interpelaciones.

1.- Expediente número A-16E10001 a iniciativa de diputado Valverde Vega. Esta interpelación se presentó el doce de abril de mil novecientos sesenta y seis. Al ministro de Seguridad Pública, Mario Quirós Sasso, y al Ministro de Agricultura, Abundio Gutiérrez Matarrita, sobre inversiones de los Somoza.

Con esta interpelación se buscaba, que el Ministro Quirós Sasso, , informara sobre las incursiones de fuerzas militantes extranjeras en el territorio nacional, de que venían hablando los diferentes medios de comunicación.

Que el Ministro de Agricultura y Ganadería, informara sobre la solución que se dio al planteamiento hecho, por los señores Somoza, según la prensa diaria, para que se les permitiera enviar a Nicaragua, el ganado que tenían en las fincas de Guanacaste.

Los Ministros se hicieron presentes a la sesión extraordinaria N° 38 del veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y seis, previamente el Ministro de Seguridad Pública, había remitido a la Asamblea un informe escrito, con las explicaciones del caso y que entre otras cosas manifestaba:

"En cuanto al punto concreto de la interpelación, debo informar a la Asamblea Legislativa que el día que se le tributo el homenaje al General Anastasio Somoza Debayle en la ciudad de Liberia, en el mes de abril en curso, se cometió un acto violatorio de la Soberanía Nacional, al aterrizar en el aeropuerto de dicha ciudad un avión D-C 3 de transporte no artillado, perteneciente a la Fuerza Aérea del ejército de Nicaragua, piloteado por el mayor piloto aviador Orlando Villalta, director General de Aeronáutica Civil, sin haberse solicitado previamente al Ministerio de Seguridad Pública, el permiso para obtener la correspondiente e indispensable autorización, del Gobierno de Costa Rica" Folio 9.

Asimismo, agrego: "el Ministerio de Seguridad siempre se ha mantenido vigilante y celoso para impedir la entrada al país de gentes armadas cualquiera que sea su procedencia. Cuando el General de la División Anastasio Somoza Debayle entró en sociedad con empresarios costarricenses y adquirió participación mayoritaria en la Hacienda el Murciélagos, intento en las primeras visitas a ese lugar de hacerse acompañar de una escolta o guardia personal armada, viéndome obligado a hacerle saber que si él creía necesario protección personal, ésta la daría el Gobierno de Costa Rica" folio 9.

Durante la sesión en que estuvieron presentes los Ministros, únicamente intervino el Ministro de Agricultura y Ganadería, pues el de Seguridad había brindado su informe por escrito. El ministro de Agricultura manifestó entre otras cosas:

"Señores diputados: cumplo con la obligación de comparecer ante ustedes para responder a la excitativa en que se le solicita al Ministro de Agricultura y Ganadería informar a esta Asamblea del resultado habido de las gestiones de los señores Somoza para permitirles trasladar ganado de Costa Rica a Nicaragua" folio 38.

El asunto sobre este traslado de ganado fue sometido al conocimiento del Consejo de Producción del cual la Junta Directiva acordó dar la negativa para

permitir la exportación de ese ganado, pues se trataba de una exportación, por lo que debía ajustarse a las leyes respectivas”.

Una vez proporcionados los informes por parte de los dos interpelados, estos solicitaron la venia para retirarse del Plenario. Así concluyo la interpelación, aunque no la discusión del tema. Debemos agregar que en las interpelaciones lo único que existe es un ánimo de informar, por lo que una vez hecho esto los Ministros pueden retirarse.<sup>190</sup>

2.- Expediente número A-40E-7665 iniciado por varios diputados en contra del ministro de Transportes, señor Hernán Azofeifa. Con el fin de que el señor Ministro de explicaciones acerca de la adquisición de vagonetas que recientemente ha hecho el Gobierno de la República.

El ministro se hizo presente el ocho de abril a proporcionar las explicaciones del caso, por lo que manifestó: "A pesar del progreso que se ha alcanzado en la extensión de la red de carreteras y caminos, muchas de las vías existentes sufren de un mantenimiento inadecuado y se encuentran en condiciones bastante deterioradas. En los últimos años los recursos presupuestarios, tanto locales como externos, se han dedicado en mayor cuantía al mantenimiento, la rehabilitación y el mejoramiento de la red en comparación con los recursos que se destinan a construcción nueva" folio 4.

Continuó agregando: "Finalmente los estudios técnicos demostraron la necesidad de adquirir equipo adicional para hacerle frente a los programas de mantenimiento previamente elaborados" folio 6.

Y añadió: "Sobre el soporte legal de esta adquisición de equipos, señor Presidente y señores diputados, podemos mostrar a los señores diputados el Convenio de Cooperación Económica entre el Estado de España y la República de Costa Rica conocido como convenio de San Sebastián y ratificado por el

---

<sup>190</sup> Interpelación bajo el expediente número A-16E10001 a iniciativa del diputado Valverde Vega. Esta interpelación se dio el doce de abril de mil novecientos sesenta y seis. En contra del ministro de Seguridad Pública, Mario Quirós Sasso, y del Ministro de Agricultura, Abundio Gutiérrez Matarrita.



Primer Poder de la República y por Ley Número 5549 de nueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro. También la opinión legal de la Procuraduría General de la República, vertida el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro,.. También consta aquí en el expediente el dictamen favorable del Ministerio de Planificación; así como el del Banco Central de Costa Rica" folio 8.

"La realización de una licitación pública internacional, financiada con los fondos provenientes de esta operación crediticia, sería inicua e improcedente a la luz de los términos impuestos por el crédito; pues si los equipos no se adquieren de la firma española mencionada, el suministro de los fondos no se produciría, lo que hace nugatorio cualquier intento por abrir un concurso público con este préstamo, como nosotros lo hubiéramos deseado" folio 10.

"Así consideramos que las condiciones de estos créditos son adecuadas, y el hecho de ser suscritos en pesetas españolas, representa todavía una ventaja adicional; es necesario señalar que desde su principio y con la plena aceptación de las autoridades nacionales, se estableció que el crédito estaba sujeto en todos sus extremos a la adquisición de bienes y servicios originados en España, señalándose que las vagonetas serían adquiridas de la Empresa Nacional de Auto caminos S.A., y lo manifestó así porque esa cláusula se establece en forma expresa en el Convenio de Financiamiento" (folio 14).

Una vez dadas las explicaciones por el Ministro de Transportes, la discusión continuó, pero sin ninguna consecuencia o resultado, como lo es por lo menos una votación al respecto y con ocasión del asunto examinado por los diputados, como sucede en el voto de censura. Aquí, en las interpelaciones, el Ministro da sus explicaciones y ahí todo acaba.<sup>191</sup>

Las interpelaciones en la República de Costa Rica, son un instrumento poco utilizado, de hecho que podríamos arriesgarnos a dictaminar que el control

---

<sup>191</sup> Interpelación tramitada bajo el expediente número A-40E-7665 iniciada por Varios diputados en contra del ministro de Transportes, señor Hernán Azofeifa.

político en el país, inicia a tener relevancia a partir del año mil novecientos ochenta y seis. Con las comisiones investigativas sobre el narcotráfico, en razón que anteriormente a esto, sus resultados son muy apacibles.

**E) Labor de control político desempeñada por la Asamblea legislativa de la República de Costa Rica, durante el periodo que transcurre del año mil novecientos ochenta y nueve, al tiempo actual.**

En este periodo el control político, se ha desempeñado con los instrumentos de control político, ampliamente analizados en los apartos anteriores, sin grandes variaciones al respecto, las situaciones de mayor relevancia a las que debemos hacer alusión durante estos casi dieciséis años son las siguientes:

1.- La creación en el año mil novecientos ochenta y nueve de la Sala Constitucional, como un órgano especializado adscrito al Poder Judicial. Para la instauración de esta Sala, con la finalidad de otorgarle la facultad de conocer todos aquellos asuntos relacionados con la violación de los derechos y garantías contemplados en la Constitución Política y los Tratados Internacionales y de Derechos Humanos vigentes en nuestro país, fue preciso reformar, a través de la Ley número 7128 de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, los artículos diez, cuarenta y ocho, ciento cinco y ciento veintiocho de la Constitución Política.

Mediante Ley número 7531 del once de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, denominada como "Ley de la Jurisdicción Constitucional", se dispuso la estructura, integración y forma en que tramitaría los asuntos sometidos a su conocimiento. Ésta Sala empezó sus funciones el veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, conformada por siete magistrados propietarios y doce suplentes, todos de nombramiento de la Asamblea Legislativa; los suplentes cumplen la función de sustituir a los propietarios cuando estos se separan del conocimiento de los asuntos por diferentes

motivos (impedimento, excusa, recusación, enfermedad, vacaciones, o permisos con o sin goce de salario.<sup>192</sup>

La creación de la Sala Constitucional, fué una cuestión de suma importancia para la consolidación de nuestro Estado Democrático, y vino a modificar muchas cosas en la interpretación de la Ley, como lo observaremos a posterioridad.

2.- La creación de la Defensoría de los Habitantes de la República, mediante Ley número 7319 del diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos, y reformada por Ley número 7423 del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro. A esta Institución, ya nos hemos referido en páginas precedentes, y se detalla ampliamente en el anexo segundo de esta investigación. Ciertamente, estos dos organismos, no los estamos tipificando como órganos directos de control político, pero por sus funciones tan específicas conllevan una relación muy directa con la temática en análisis.

3.- También durante este período, después de haber transcurrido más de cuarenta y cinco años de haber establecido la Carta Magna, el instrumento de la moción de censura para los ministros de gobierno, el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se presentó en la República de Costa Rica, la aprobación del primer voto de censura, en contra del ministro de seguridad, licenciado Juan Diego Castro Fernández.

Antecedentes de este voto de censura:

En una publicación, aparecida en la portada del periódico la nación, del siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se hace referencia, a una conferencia de prensa, proporcionada por el ministro Castro Fernández, el seis

---

<sup>192</sup> Cantillo Gamboa, Vanlli, Cubero Barquero, Karen, Blanco León, Daniel, Jiménez Lizano, Alexander, Madriz Piedra, Gerardo, Rivera Ramírez, Jorge, Tosso Jara, Reiner  
Obra citada. Op.cit. Editado por la Sala Constitucional, Año 1999. p. 23.

de diciembre, en la cual el ministro culpaba a los diputados de la inseguridad que se vivía en la República, al respecto según indica la portada del periódico, el ministro responsabilizó a la Asamblea Legislativa, en especial a los diputados del PUSC, por los atrasos en la aprobación de reformas penales que permitirían atacar ese problema. Al respecto Castro dijo:

Han ocurrido varios "hechos graves" en el país, pero de inmediato afirmó que él es responsable "solo en parte" de la situación. El funcionario no dudó en achacarle al Congreso, el no tener la voluntad política, para mejorar los instrumentos legales para combatir este mal. En relación a lo cual, tanto Antonio Álvarez, presidente del Poder Legislativo, como el jefe de la bancada socialcristiana, Bernal Aragón, rechazaron tajantemente los cargos.<sup>193</sup>

Posteriormente, el día siete de diciembre el Ministro Castro Fernández, llega al congreso a aclarar sus comentarios:

Ésta visita se narra el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, de la siguiente forma en una publicación del periódico la nación de la República de Costa Rica: Una visita sin invitación

"El ulular de las sirenas policiales penetró por las ventanas del segundo piso del Castillo Azul, ubicado en la esquina sureste del edificio central de la Asamblea Legislativa, como para anunciar la llegada de un visitante.

Después se escuchó el golpeteo de los cascos de caballo contra el asfalto, seguido por el atempado trote de un bosque de botas. Los cinco diputados que conversaban en la Presidencia Legislativa no entendían qué sucedía. Pasaban escasos minutos de las 10 a.m. de ayer cuando una de las secretarías de Antonio Álvarez, presidente del Congreso, ingresó para anunciar la visita del

---

<sup>193</sup> El ministro Juan Diego Castro Fernández, culpa a diputados por inseguridad.

Publicación en la portada del periódico la nación de la República de Costa Rica, día siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. [www.nacion.com](http://www.nacion.com)

ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro. En el despacho se encontraban, además de Álvarez, los jefes de fracción Luis Gerardo Villanueva, del PLN; Bernal Aragón, del PUSC; Gerardo Trejos, de Fuerza Democrática; y Víctor Hugo Núñez, del Partido Agrario Nacional. Aragón relató anoche que su primera reacción al escuchar el nombre del visitante fue manifestarle a Álvarez que quería reunirse con él. Los otros tres jefes secundaron esta decisión y decidieron abandonar el recinto. En el primer piso, en la salita de espera, Castro aguardaba con un grupo de comandantes policiales para iniciar una visita de escasos 15 minutos que desató fuertes fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo..... Además se señala en dicha publicación:

"Un acta notarial del diputado Carlos Luis Vargas señala que en la manifestación -de varias cuadras de extensión- participaron 24 motoristas, tres patrullas y ocho uniformados de la Quinta Comisaría y un pelotón de 52 policías. El escrito también menciona la presencia de oficiales armados con fusiles M-1. Entre ellos figuran 38 policías de la Cuarta Comisaría, 28 de la Segunda Comisaría, 32 de la Primera Comisaría y 28 de la Sexta Comisaría. Incluso tomaron parte caballistas de la Policía Montada. Curiosos que se acercaron al lugar notaron que varios oficiales uniformados portaban revólveres de nueve milímetros y chalecos antibalas". Se continúa narrando fría reunión:

"Antonio Álvarez describió el encuentro con Castro como una reunión tranquila y fría. El legislador, según dijo, aprovechó la ocasión para reclamarle al ministro por acusar a la Asamblea Legislativa de no apoyar la aprobación de leyes que permitiría combatir la violencia y por el desfile de la Policía. Castro le aseguró que los periódicos no decían la verdad puesto que sus críticas iban en realidad dirigidas al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y le expuso los avances técnicos que ha logrado su cartera". Además se describe "El me dijo que saliera a darle un mensaje a la policía y yo le dije que me parecía totalmente improcedente. Llegó a ponerme la Fuerza Pública a la orden de la Asamblea y yo le dije que la Fuerza Pública está a la orden del Estado", narró.....<sup>194</sup>

---

<sup>194</sup> Una Visita sin invitación,

Además, sobre la visita del ministro, y cuando se discutió la censura, comentan algunos diputados en el acta número ciento nueve lo siguiente: aclaramos realizaremos mención únicamente a tres comentarios y anexaremos íntegramente el acta en lo conducente al final:

DIPUTADO RODOLFO MÉNDEZ MATA:

"He solicitado el uso de la palabra en el Capítulo de Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, porque me parece que los hechos que se han sucedido en este día, concretamente en horas de la mañana, obligan a este cuerpo legislativo a hacer una reflexión, provocar un análisis y discusión y llegar a tomar una determinación, porque no recuerdo en mis largos años, ya, de servicio público, un acto similar a la naturaleza del realizado esta mañana, cuando el Ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, acompañado de la Fuerza Pública, armas en mano, viene aquí, a la Asamblea Legislativa en ánimo de intimidación, en ánimo de violación de la majestad legislativa. No recuerdo jamás un acto tan insólito, tan brutal y despiadado en una democracia como la democracia costarricense. Este país que se precia de la paz, este país que se precia de la democracia, del respeto a la institucionalidad, del respeto a los derechos humanos; un país que trata de ser ejemplo y que quiere ser ejemplo para otros países del mundo, viene a experimentar actos violentos y violatorios como los que hoy tenemos que lamentar..... Asimismo dice: "quiero, señor Presidente de esta Asamblea Legislativa, expresar a usted mi solidaridad, mi respeto y reconocimiento por la forma íntegra en que usted ha salido a responder a estos actos, a nombre de la Asamblea Legislativa. De la misma manera, mi respeto, mi solidaridad, mi aprecio y reconocimiento a los Jefes de Fracción que acuerparon al señor Presidente de la Asamblea Legislativa y actuaron en conjunto en defensa de la institucionalidad, en defensa de la

---

ministro llegó al Congreso a aclarar sus comentarios

Publicación en la portada del periódico la nación de la República de Costa Rica, día ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. [www.nacion.com](http://www.nacion.com)

democracia, del respeto entre los Poderes que ha caracterizado a la democracia costarricense.....

Diputado Gerardo Trejos Salas:

"No quiero minimizar de modo alguno, los hechos graves que ocurrieron hoy. Sin embargo, debo reconocer una nota de folklore en ese desfile de hoy, propia de un Ministro folklórico. En cambio, grave me parece, el respaldo que ha recibido el Ministro folklórico del señor Presidente de la República. Creo, en buena lógica, que quien debería renunciar es el señor Presidente de la República junto con su Ministro de Relaciones Exteriores, sus dos Vicepresidentes, para que, como lo prevé la Constitución Política, el Presidente de la Asamblea Legislativa asuma la Presidencia de la República".

Diputado Francisco Antonio Pacheco Fernández:

"Cuando uno ha tenido relación con los asuntos públicos por varias décadas, resulta menos dramáticamente turbado ante acontecimientos que, momentáneamente, hacen que la conciencia de un grupo se altere. Creo que el Ministro de Seguridad Pública, hoy cometió un error; un error grave, al presentarse con un grupo de policías a la Asamblea Legislativa, y estacionarlos en frente. Debo añadir que este hecho encuentra además reacciones fáciles en nuestra actitud nacional de rechazo de todo lo que tenga que ver con militares, pero a veces de un mal surgen bienes. En primer lugar, una reacción concertada de distintas fuerzas de la Asamblea Legislativa, lo cual prueba que hay solidaridad cuando se da ciertos actos que consideramos dignos de ser rechazados. Por otra parte, creo que esto nos permite abrir un debate serio, sobre algunos asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y el primero de ellos, en el que tenemos que insistir, hasta que todo costarricense se lo meta en la cabeza, es que, la seguridad ciudadana puede ser, debe ser



favorecida por normas legales, como las que hemos venido dando durante este año, pero que no depende de una transformación de las leyes.....<sup>195</sup>

Finalmente en el acta legislativa ciento trece, se registra que el voto de censura, fue aprobado por cincuenta y un votos a favor y cinco en contra, se anexa en lo conducente dicha acta para consulta.<sup>196</sup>

Con la aprobación del voto de censura, precedentemente descrito con amplitud, por ser el único que se ha producido desde mil novecientos cuarenta y nueve a la fecha de hoy, no se logró nada notorio, debido a que el señor ministro siguió contando con el apoyo del presidente de la República, con lo que no presentó su renuncia, otro aspecto a destacar es, el voto de censura no contaba con la aprobación del pueblo. Y personalmente sin disculpar el acto del ministro, por que si cometió un error al desplazar la fuerza pública al congreso, aprecio que en el pasado se han dado hechos más merecedores a una moción de censura y no se a conseguido aprobar.

Por todo lo descrito, es más que notorio, que la moción de censura en la República de Costa Rica, viene a ser un medio de control político, totalmente ineficaz, e ineficiente. Lo que comparten todos los doctrinarios costarricenses consultados durante el desarrollo de esta investigación.

Comisiones de investigación de la Asamblea Legislativa.

En la República de Costa Rica, las comisiones de investigación que habían sido conformadas por la Asamblea Legislativa, hasta el año mil novecientos ochenta

---

<sup>195</sup> "Acta legislativa número ciento nueve, de fecha siete de diciembre del año mil novecientos noventa y cinco" se anexa íntegramente para consulta.

<sup>196</sup> "Acta legislativa número ciento trece, de fecha catorce de diciembre del año mil novecientos noventa y cinco" se anexa íntegramente para consulta.

y nueve, habían actuado con total libertad, pero a partir de los fallos emitidos por la Sala Constitucional, se les vinieron a establecer las siguientes restricciones referidas a sus alcances y competencias.

Respecto a la competencia, objeto y funcionamiento de las Comisiones Legislativas de investigación, estas se derivan de lo dispuesto en la propia Constitución Política costarricense, así como en lo normado en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

En lo relacionado con la competencia y objeto, que poseen las comisiones de investigación, el inciso veintitres del artículo ciento veintiuno constitucional es sumamente claro y amplio, ya que como precedentemente explicamos, se instituye que esas comisiones pueden investigar cualquier asunto que la Asamblea Legislativa les encomiende, de tal manera que su poder investigativo, no está limitado constitucionalmente a determinada materia, exceptuando aquellos asuntos que sean calificados como secretos de Estado.

En relación con el trabajo de las comisiones de investigación, la Sala Constitucional, desde su creación ha emitido diversas disposiciones, pero únicamente voy a referir aquellas que están en vigencia y que norman en la actualidad el trabajo de las Comisiones legislativas.

Al respecto la Sala Constitucional, mediante la sentencia número 06802-98 de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, resolviendo recurso de amparo, presentado por el ex ministro de trabajo, Farid Ayales Esna, en contra de la Asamblea Legislativa, en la persona de su presidente. Al respecto aludía el señor Ayales Esna:

"El acuerdo de crear una Comisión legislativa para que investigue hechos relacionados con las inversiones en FODESAF, sin que se limite el asunto al campo político, viola el principio de separación de poderes, porque la materia es objeto de investigación por el Ministerio Público y la Contraloría General, y

porque como resultado de la imprecisión del acuerdo, la Comisión ha sobrepasado el ámbito del control político, para convertirse en un Tribunal Especial o de Conciencia que no respeta sus derechos de defensa y debido proceso; que las violaciones en que incurre la Comisión alcanzan a la separación de poderes, el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y no discriminación, el derecho a la legalidad, la garantía del debido proceso, el derecho a la justicia, la prohibición de tribunales especiales, el derecho de comparecencia y defensa, el principio de intimación y el de imputación; que cuando compareció ante la Comisión, no se le hicieron cargos ni imputaciones, y se le interrogó sobre asuntos de carácter jurídico o administrativo, no político; que hizo ver al Presidente de la Comisión y al de la Asamblea Legislativa, que el proceder de la primera la convertía en un tribunal de derecho o de conciencia; que en una segunda comparecencia, insistió en estos puntos de vista, sin que entonces se le imputaran cargos, y se le invitó como testigo; que el Presidente de la Comisión ha externado criterios sobre la investigación, antes de que esta concluya; que se le ha causado grave perjuicio moral, personal y profesional”.

En lo tocante la Sala Constitucional manifestó:

“El acuerdo legislativo de nombramiento de la Comisión Especial que origina este caso hace referencia expresa a hechos relacionados con la inversión de dineros públicos, en una situación concreta. Esto es del todo compatible con lo que dispone la Constitución. Por consiguiente, en sí mismo considerado, el acuerdo que el recurrente impugna no contraviene la Constitución en lo tocante al principio de separación de poderes. 2. Las atribuciones de la Comisión Especial. Por su parte, las comisiones de investigación están dotadas de amplias facultades por la propia Constitución: tienen libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios, y pueden recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla (inciso 23 del artículo 121). Puesto que su objeto es la investigación de hechos determinados, cuando hacen comparecer a las personas ha de entenderse que es en relación con esos

hechos: en consecuencia, para interrogar a las personas en conexión con los hechos investigados, no hay motivo para exigir de las comisiones que hagan imputaciones o intimaciones a esas personas; lo que deben hacer es interrogarlas, e interrogarlas respecto de los hechos que constituyen, a juicio de cada comisión, el asunto que se ha encomendado. En este sentido, el interrogatorio no tiene porqué radicarse en el elusivo campo de "lo estrictamente político": es comprensible e inevitable, pues, que se indague sobre actos o actuaciones administrativas. Expuestos a la luz de estos criterios los reproches que el recurrente hace a lo actuado por la Comisión Especial en su propio caso, no advierte la Sala que haya motivo tampoco para conceder el amparo. 3. Las comisiones de investigación como tribunales especiales. Dados los límites en que se desenvuelven las comisiones de investigación, es evidente que la Constitución, al atribuir a la Asamblea Legislativa la facultad exclusiva de nombrarlas, no tiene la pretensión de abrir la posibilidad de que por esta ruta se llegue a la creación de tribunales especiales. El ejercicio de la jurisdicción es cosa del Poder Judicial y de sus tribunales. Esto, desde luego, no califica la hipótesis de que las comisiones, de hecho, trascendiendo sus límites, incidan en el ámbito jurisdiccional, reservado a ese Poder. Pero no es posible, a estas alturas, considerar que se hayan desviado en ese sentido las facultades de la Comisión Especial de que aquí se trata, ni aun admitiendo que tanto el Ministerio Público como la Contraloría General efectúan actualmente investigaciones en sus propios órdenes de competencia: en primer lugar, porque la Comisión no ha rendido informe alguno, y, en segundo lugar, por el carácter preparatorio de las decisiones legislativas que tienen los informes de esta clase de comisiones. En este extremo pues, tampoco hay fundamento para estimar el recurso.<sup>197</sup>

Con relación a lo expuesto hasta el momento estoy de acuerdo con las primeras consideraciones de la Sala Constitucional, para desestimar el recurso.

---

<sup>197</sup> "Sentencia Constitucional número 06802 de veintidós de septiembre de 1998".

En esta misma sentencia la Sala Constitucional, hace referencia a su resolución número 1954-97 de las quince horas nueve minutos del ocho de abril de mil novecientos noventa y siete en la cual indicó:

que las comisiones Investigadoras, como instrumento de control político mantienen, la potestad de investigación, proporcionada a la Asamblea Legislativa, y se realiza por medio de las Comisiones Especiales integradas para investigar un asunto en particular. Las que como instrumento de control político, desempeñan, una función de esclarecimiento de situaciones o actuaciones de funcionarios públicos o personajes de la vida política – en relación con determinados hechos. que una vez esclarecidos son expuestos a la opinión pública, con el fin de establecer si son o no reprochables. De tal forma que lo investigado por las comisiones, faciliten a formar opiniones de cara al público, con esto se esta realizando el principio democrático, base de nuestro sistema jurídico y, en ese sentido, las actuaciones de esas Comisiones, lejos de vulnerar los derechos fundamentales, refuerzan la constitucionalidad del orden jurídico. Además manifiesta la Sala, “el ejercicio del control político en relación con actuaciones privadas que alcancen relevancia pública en los hechos investigados, no obstante, podrían eventualmente, ser objeto de investigación de una Comisión cuando ellas trascienden la esfera de lo meramente privado y alcancen relevancia pública por estar relacionadas con los hechos investigados, ya que, en tales circunstancias, no se trataría de la protección del ámbito de intimidad al cual se refiere el artículo 24 constitucional, sino de actuaciones que podrán ser objeto de la acción de la ley de conformidad con lo establecido en el artículo 28 , párrafo segundo”.

También ha afirmado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, que las comisiones investigadoras de la Asamblea Legislativa, no tienen la obligación de observar el debido proceso, ya que no se trata del encauzamiento de ningún funcionario público o particular sino de la investigación de hechos, de cuya actuación no se deriva ninguna sanción disciplinaria ni jurídica para nadie. Por no serles aplicables el debido proceso

no pueden considerarse que sus actuaciones violen dicho principio en general, o el derecho de defensa en particular.<sup>198</sup>

Asimismo, ha establecido la Sala Constitucional que los actos preparatorios de las Comisiones de Investigación, no pueden ser denunciados ante ella; excepto que constituyan actos separables que, por sí mismo causen o amenacen causar lesiones a los derechos fundamentales de un sujeto en concreto. Por lo demás corresponderá al Plenario Legislativo determinar al examinar y pronunciarse sobre el informe o informes rendidos, si la Comisión cuestionada se excedió, o, no, en las facultades de investigación otorgadas, aspecto en el cual no hay comprometido ningún derecho fundamental y, por ello, es ajeno a la jurisdicción de la Sala.<sup>199</sup>

Adicionalmente la Sala Constitucional, deja claro que las Comisiones investigadoras no constituyen tribunales de justicia, por tanto les está prohibido invadir competencias de otros órganos. En ese sentido, no pueden juzgar ni imponer penas a persona alguna, función propia del poder judicial, pues de lo contrario se constituirían en Tribunales especiales, creados para el juzgamiento de un caso en particular, con quebranto de lo dispuesto en los artículos nueve y treinta y cinco constitucionales. Lo anterior permite ultimar que dichas Comisiones no realizan funciones jurisdiccionales y, por ello, no se les ha conferido el poder de juzgar e imponer sanciones. Son órganos de carácter político – no judicial- cuya actividad principal consiste en la recolección de información, de la cual, por sí sola, no se derivan consecuencias jurídicas de ningún tipo para los servidores públicos o los particulares. Podría afirmarse que el Poder Legislativo realiza entonces una suerte de juzgamiento político, pues su función en muchas ocasiones puede culminar en una censura moral a funcionarios o particulares, por conductas que social o políticamente sean reprochables, aún cuando no pudieran ser objeto de juzgamiento por parte de los tribunales de justicia. Por esto no constituye una sanción en los

---

<sup>198</sup> "Sentencia Constitucional número 06802 de veintidós de septiembre de 1998".

<sup>199</sup> "Sentencia Constitucional número 06802 de veintidós de septiembre de 1998".

términos en que se establece en el artículo treinta y nueve constitucional , pues las recomendaciones que se hagan en los informes de la Comisión o, en su caso en el Plenario de la Asamblea Legislativa, no son jurídicamente vinculantes, aún cuando puedan tener un peso social o político innegable.<sup>200</sup>

Es importante aclarar que las comisiones investigadoras, deben respetar los derechos fundamentales, aunque no del debido proceso: Ahora bien, las Comisiones de Investigación deben respetar los derechos fundamentales de los comparecientes, no el debido proceso – que no es aplicable en el caso de las Comisiones Investigadoras, según lo expuesto , sino a todos aquellos reconocidos por la propia Constitución Política, la legislación Internacional e interna y que, aún cuando puedan relacionarse con el debido proceso, tienen autonomía propia, y, como tales, forman parte de los derechos que el ordenamiento le reconoce a todas las personas. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho a no declarar contra sí mismo , el cónyuge , ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad acorde a lo establecido por el artículo treinta y seis constitucional, lo que significa que el compareciente ante una Comisión Investigadora puede invocar a su favor dicho precepto constitucional y negarse a declarar, de considerar que, de lo contrario podría surgir una responsabilidad penal para él o los familiares cubiertos por dicha norma; o del derecho de hacerse acompañar de un abogado para que lo asesore o solicitar traductor si no domina el idioma español...<sup>201</sup>

El exdiputado y reconocido jurista Alex Solís Fallas, nos comenta en uno de sus tantos libros, el trabajo de una comisión especial investigadora, concluye con la elaboración de un dictamen, mediante el cual se formalizan, en un documento escrito, las conclusiones a las cuales ha llegado la comisión correspondiente. Nos agrega; la Sala equivocadamente ha establecido que, «(...) lo que la

---

<sup>200</sup> "Sentencia Constitucional número 06802 de veintidós de septiembre de 1998".

<sup>201</sup> "Sentencia Constitucional número 1898-97".

comisión elabora es un informe, es decir, una relación de las actuaciones verificadas durante la investigación y las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, no un dictamen, pues éste, a diferencia de aquél, implica un juicio de valor, lo que es ajeno a la labor de la comisión». Comenta de acuerdo con esa definición, una comisión sólo podría concluir su trabajo con un «informe», mediante el cual de parte de algo, brinde una noticia o bien comunique determinados hechos, situaciones o acontecimientos. Reitera, este criterio no se comparte. Continúa se ha reconocido que el control político posee un incuestionable valor como medio de información, para que el Parlamento cumpla con las competencias que la Constitución Política le ha asignado. Sin embargo, quedarse en este nivel conlleva una concepción muy equivocada de qué es el control político. No es inteligente, ni práctico reducir la función de control político a una labor informativa. Si de eso se tratara, los medios de comunicación colectiva, ya de por sí lo hacen y de una forma mucho más eficiente y eficaz. Concluye, si constitucionalmente las comisiones pueden investigar cualquier asunto, esa investigación debe conducir a la redacción de un dictamen final.<sup>202</sup>

Para evaluar en detalle y profundidad todas las sentencias que ha brindado la Sala Constitucional en materia de las Comisiones investigadoras constituidas por la Asamblea Legislativa, considero se requiere una investigación completa, exclusivamente destinada a estos efectos, y dado a que el tiempo que dispongo para ello no me lo permite, le abordaré en un próximo estudio a posterior de concluir con esta investigación.

Con el propósito de que el tema no quede muy en el aire, como decimos en el albor costarricense, voy a reproducir algunos aspectos muy importantes, que menciona el reconocido jurista nacional, doctor Alex Solís Fallas en su libro, "Control Parlamentario y jurisprudencia constitucional". Sobre la doctrina más importante creada por la Sala Constitucional, a favor de la función contralora de

---

<sup>202</sup> Solís Fallas Alex

Obra citada. Op.cit. San José, CONAMAJ, año, 2000, p. 191.



la Asamblea Legislativa. Asimismo, como indicar las contradicciones más destacables, en que ha incurrido ese órgano jurisdiccional, según la opinión del doctor Solís Fallas.

Nos dice el doctor Solís Fallas; criterios rescatables de la jurisprudencia constitucional.

1.- "La función de control es de naturaleza política, la cual se produce de conformidad con criterios de oportunidad política, libremente valorados por los diputados".

2.- "El control político carece de efectos jurídicos vinculantes; es decir las recomendaciones que se producen bajo su amparo no son de acatamiento obligatorio".

3.- "Las opiniones de los diputados, que se produzcan en los informes de las comisiones investigadoras, no son revisables ante la Sala Constitucional. Consecuentemente, los diputados no son responsables por las opiniones que emitan en el ejercicio de la función de control político y en la actividad legislativa en general".

4.- "La atribución de la Asamblea Legislativa, para nombrar comisiones especiales investigadoras, constituye un instrumento indispensable para que se pueda desempeñar la función de control político".

5.- "Las investigaciones legislativas son producto del principio democrático del control político, que debe ejercer el Parlamento".

6.- "El Parlamento o las comisiones especiales de investigación, en el ejercicio de la función de control político, no puede invadir las competencias propias de los otros poderes. En términos generales, se acepta que puedan existir investigaciones paralelas entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, ya

que las competencias de esos poderes obedecen a propósitos de naturalezas muy diferentes”.

7.- “Las comisiones investigadoras constituyen un poderoso instrumento de control, las cuales poseen el más amplio acceso a las dependencias oficiales de cualquier poder o institución pública, para recabar las pruebas y la información que consideren necesarios. No obstante ese amplio poder, las comisiones investigadoras y en general la Asamblea Legislativa, cuando ejerce la función de control político, están limitadas por el Derecho de la Constitución. En el estado de derecho no existen poderes absolutos. Las comisiones investigadoras no están facultadas para invadir, sustituir o entorpecer, total o parcialmente, la función jurisdiccional de los tribunales de justicia. Consecuentemente, se encuentran sujetas a las mismas restricciones que los particulares, para tener acceso a los expedientes judiciales”.<sup>203</sup>

Además el doctor Solís Fallas destaca como contradictorios los siguientes criterios emanados de la jurisprudencia constitucional

1.- “Afirmar que la comisión carece de potestades para elaborar dictámenes, por los juicios de valor que ellos implican”.

2.- “Establecer que el control político no se puede dirigir contra funcionarios o figuras públicas”.

3.- “Señalar que el objeto del control político está limitado únicamente a determinados hechos o situaciones de interés público”.

4.- “Afirmar que el control es una función de naturaleza política que se ejerce por criterio de oportunidad política libremente valorado por los diputados, «en el que la discreción se volvería complicidad, y el recato hipocresía»; para, acto

---

<sup>203</sup> Solís Fallas Alex

Obra citada. Op.cit. San José, CONAMAJ, año, 2000, p. 234 y 235.

seguido, caer en la contradicción de afirmar que una recomendación elaborada con esos criterios es desproporcionada, jurídicamente hablando”.

5.- “Reducir la función de control político solo a los actos dictados por el Pleno Legislativo, cuando aprueban los informes rendidos por las comisiones especiales, desconociendo otros instrumentos que, en el nivel formal e informal, existen para ejercer la función de control político”.

6.- “Sostener que las recomendaciones de las comisiones investigadoras son amparables y constituirse en una especie de segunda instancia de la función de control político”.

7.- “Creerse competente para fiscalizar el contenido de la función de control político. Considerar que, mediante la función de control político, la Asamblea Legislativa está inhibida para calificar las conductas de las personas involucradas. Anular recomendaciones por desproporcionadas”.

8.- “Analizar y juzgar de acuerdo con la técnica jurídica juicios políticos, elaborados conforme a un criterio de oportunidad política, libremente valorado por los diputados. Anular recomendaciones de comisiones investigadoras, con el argumento de que podrían afectar la esfera de los derechos fundamentales. Desconocer el principio de inviolabilidad o irresponsabilidad parlamentaria, que la Constitución Política garantiza a los diputados. Violar el principio de la inmediatez o de la valoración de la prueba por el funcionario que la recibió”.<sup>204</sup>

Todo lo citado por el doctor Solís Fallas, únicamente viene a ratificar la eminente necesidad de proceder a modificar los instrumentos de control político para asignarles funciones más claras y precisas.

---

<sup>204</sup> Solís Fallas Alex

Obra citada. Op.cit. San José, CONAMAJ, año, 2000, p. 235 y 236.

Las comisiones investigadoras requieren una revisión que se ajusten en lo posible a las resoluciones de la Sala Constitucional, pero también para clarificar límites en los cuales el Tribunal Constitucional se puede equivocar, debido a que personalmente sostengo el criterio, que ciertas resoluciones de las comisiones investigadoras, se precisa que sean obligatorias y vinculantes para que las instituciones públicas deban iniciar procedimientos administrativos internos que verifiquen o rechacen situaciones perjudiciales del actuar de algunos funcionarios públicos y que de probarse anomalías se apliquen las sanciones disciplinarias pertinentes acorde con lo dispuesto en la normativa vigente, dejando claro que la sanción no la aplica la comisión investigadora, pero que si su estudio cobra vigencia, ya que obliga a la investigación administrativa y no que queda al libre criterio de la institución, si investiga al funcionario o no. También se precisa que las investigaciones legislativas, de haber suficientes indicios puedan dirigirse contra personas individuales. Otro aspecto que debe quedar totalmente claro que una vez aprobado un estudio por el plenario de una comisión investigadora esta debe facultar de inmediato de considerarse necesario a solicitar la intervención del Ministerio Público para que también inicie una investigación tendiente a demostrar la necesidad de aplicar sanciones penales de ser del caso.

## ***Capítulo II***

### ***Resultados producidos del análisis del trabajo de campo desarrollado en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.***

#### **A) Presentación de la forma en la cual se tratarán las informaciones recolectadas a través de la aplicación de la encuesta de opinión:**

Iniciamos con el desarrollo de esta parte del capítulo, aclarando que las informaciones relacionadas con los datos obtenidos, de la aplicación del primer apartado de la encuesta de opinión, le vamos a organizar de la siguiente forma:

Primeramente, explicamos, cuántos del total de los señores diputados y señoras diputadas, respondieron al instrumento de la investigación, y cual es el porcentaje estadístico que alcanzan las respuestas recibidas.

Seguidamente puntualizamos, a qué porcentaje de cada uno de los Partidos Políticos, representados en la Asamblea Legislativa, de la República de Costa Rica, conciernen cada una de las respuestas obtenidas tanto de los señores diputados como de las señoras diputadas.

Finiquitamos este primer apartado de la encuesta de opinión, determinando el grado de formación profesional de cada uno de los señores diputados y señoras diputadas, que integran el Poder Legislativo, de la República de Costa Rica, para la legislatura que transcurre del primero de mayo del año dos mil dos al primero de mayo del año dos mil sels. Aclaremos, que en esta ocasión les estamos agrupando por gremio de formación profesional.

En cambio el segundo apartado de esta encuesta de opinión, lo organizamos de la siguiente manera:

Se presentan las preguntas una a una, y se agrupan las respectivas respuestas, de conformidad a cada uno de los ítems seleccionados, por los diferentes legisladores y legisladoras, distribuyendo el porcentaje correspondiente a cada ítems, considerando este factor, con relación al total de los señores diputados y señoras diputadas, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, quienes amablemente nos colaboraron respondiendo a la presente encuesta de opinión.

Adicionalmente realizamos un análisis de cada una de las respuestas recibidas, a las distintas preguntas, destacando a nuestro juicio, las características que consideramos como más importantes, para evaluar el trabajo sobre el ejercicio del control político, que lleva a cabo el Poder Legislativo de la República de Costa Rica.

Finalmente nos permitimos recordar, que el instrumento utilizado para recopilar la información, fue una encuesta de opinión, formada por preguntas cerradas, abiertas y semi abiertas, conformado por dos apartados, el cual se anexa íntegramente, y puede ser consultado ya que lo hemos agregado en el anexo tercero de la presente investigación.

## **A1.- Primer apartado de la encuesta de opinión aplicada a los señores diputados y señoras diputadas de la República de Costa Rica.**

Desarrollo de las respuestas obtenidas, al instrumento de la investigación por parte de los señores legisladores y señoras legisladoras, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Esta encuesta de opinión, fué aplicada al cien por ciento de los señores diputados, y señoras diputadas. (cincuenta y siete legisladores).

La encuesta de opinión, fue contestada de forma positiva, por cuarenta y nueve de los cincuenta y siete señores diputados y señoras diputadas; respuesta que nos equivale, al ochenta y seis por ciento de la totalidad de los señores legisladores de la Asamblea Legislativa costarricense. Únicamente no le contestaron ocho de los señores diputados, para un porcentaje del catorce por ciento.

De los diecinueve señores legisladores y señoras legisladoras, que representan al Partido Político de gobierno, Partido Unidad Social Cristiana, le respondieron catorce señores diputados y señoras diputadas, para un porcentaje del setenta y cuatro por ciento.

Del Partido Liberación Nacional, segunda fuerza política representada en la Asamblea Legislativa, de los diecisiete señores diputados y señoras diputadas, la respondieron quince de ellos, para un porcentaje del ochenta y ocho por ciento.

Del Partido Acción Ciudadana, tercera fuerza política representada en la Asamblea Legislativa, de sus ocho señores legisladores, le respondieron ocho, para un porcentaje total del cien por ciento.

En cambio de los seis señores diputados que inicialmente, vinieron a agrupar al Bloque Patriótico, le respondieron, cinco de los señores legisladores, para un porcentaje del ochenta y tres por ciento.

Nos permitimos explicar, que este grupo conformado por seis legisladores, al inicio de la legislatura, formaban parte del partido político Acción Ciudadana, fuerza política, que les llevó como diputados al Congreso, del cual posteriormente se separaron y constituyeron, el movimiento que llamaron como Bloque Patriótico. Pero a este mismo grupo, luego se le fueron alejando otros diputados y diputadas con lo que en la actualidad, el movimiento denominado como Bloque Patriótico, únicamente se encuentra integrado, por tres señores diputados. Pero con la finalidad de mantener la estructura planteada, y la discreción en las respuestas de los dos señores legisladores que en la actualidad están tramitando inscribir, nuevos partidos políticos, que participaran en las elecciones, dos mil seis- dos mil diez. Entonces incluiremos sus respuestas en las del bloque Patriótico, movimiento al cual pertenecieron, cuando se separaron del Partido Político que les llevó como diputados, a la Asamblea Legislativa, que como ya aclaramos fue el Partido Acción Ciudadana. Además, porque los alejamientos no se han ocurrido de una sola vez, si no que se han ido sucediendo gradualmente.

Mientras de los cinco señores diputados que representan en la actualidad al Partido Movimiento Libertario respondieron la encuesta de opinión, los cinco legisladores para un porcentaje del cien por ciento.

También, la respondió el único diputado que representa al Partido Auténtico Herediano, para un porcentaje del cien por ciento.

Cabe aclarar, que este legislador llegó electo a la Asamblea Legislativa, como diputado, por el Partido Movimiento Libertario, al cual renunció, y procedió a inscribir al Partido que representa en la actualidad.



Finalmente, fue contestada por el único señor diputado representante del Partido, Renovación Costarricense, para un porcentaje del cien por ciento.

Todos estos porcentajes en conjunto suman el ochenta y ocho por ciento de las respuestas logradas.

El grado de formación profesional de los cincuenta y siete diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, es el siguiente:

Quince licenciados en Derecho, para un porcentaje del veintiséis por ciento.

Siete educadores, para un porcentaje del doce por ciento.

Cinco médicos para un porcentaje del nueve por ciento.

Tres periodistas, para un porcentaje del cinco por ciento.

Tres bachilleres universitarios para un porcentaje del cinco por ciento.

Tres licenciados en ciencias políticas para un porcentaje del cinco por ciento.

Dos economistas para un porcentaje del tres punto cinco por ciento.

Otras profesiones ocho, para un porcentaje del catorce por ciento.

Estudios universitarios incompletos once para un porcentaje del diecinueve por ciento.

Adicionalmente aclaramos, que muchos de los señores diputados y señoras diputadas a la Asamblea Legislativa costarricense, cuentan con más de una profesión, a las puntualizadas anteriormente, ya que varios de los mismos, ostentan los grados académicos de doctores o masteres, pero en esta oportunidad, no vamos a profundizar en estos aspectos, porque lo que pretendemos, es proporcionar una visión general del grado de profesionalización existente en la Asamblea Legislativa de la República costarricense, y no de forma individualizada por cada uno de los señores y señoras que conforman en la legislatura actual, el Poder Legislativo de la República de Costa Rica.

En la siguiente tabla, representamos, las respuestas obtenidas en porcentajes estadísticos:

Poder Legislativo	Responden la encuesta	No responden encuesta	Partidos Políticos	Porcentaje de respuestas	Porcentaje de no respuestas
57	49	8	7	86%	14%
19	14	5	Unidad Social Cristiana	74%	26%
17	15	2	Liberación Nacional	88%	12%
8	8	0	Acción Ciudadana	100%	0
6	5	1	Bloque Patriótico	83%	17%
5	5	0	Movimiento Libertario	100%	0
1	1	0	Renovación Costarricense	100%	0
1	1	0	Auténtico Herediano	100%	0

En esta primera tabla es posible apreciar, la valiosa e importante aceptación, que entre los señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, ha alcanzado la investigación, que elaboramos, y por ende la encuesta de opinión, lo cual es muy satisfactorio, permitiéndonos, con esto, ofrecer una valoración más objetiva y ajustada a la realidad sobre el ejercicio del control político, que en esta legislatura desempeña la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, asimismo, conocer en primera fuente, los pareceres que mantienen los señores legisladores y señoras legisladoras, acerca de los instrumentos de control político, que mantiene la Asamblea

Legislativa, para desarrollar tan preponderante función como es la del ejercicio del control político, sobre el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, y demás Entidades públicas del país.

Adicionalmente, las recomendaciones, que finalmente propondremos tomarán muy en consideración, las opiniones y sugerencias, recibidas de los señores diputados y señoras diputadas. Con el propósito de lograr que por parte de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, se llegue a conseguir el desempeño de un trabajo en materia de control político, que aparezca de manera oportuna, eficaz y eficiente. Con instrumentos de control político, adecuados, vitalizados y apropiados que no les vengán a circunscribir, ni limitar su función, al momento de tener que llevar adelante su labor contralora, sobre el gobierno de la nación.

Nota aclaratoria:

Nos permitimos clarificar, que con relación al ítems, que pretendía medir el juicio acerca del ejercicio del control político, desempeñado por la Asamblea Legislativa, que tienen, los señores legisladores difiriendo sus discernimientos por el sexo de ambos grupos de legisladores y de legisladoras, no exponemos ninguna información, debido que al plantearse en forma anónima la encuesta de opinión, varios de los señores diputados y señoras diputadas no procedieron a complementar la casilla, que interrogaba acerca de su sexo. Lo cual no permitió la posibilidad, en esta oportunidad, de presentar ningún detalle al respecto. En el cual pudiéramos haber realizado relaciones comparativas, implicando diferencias de creencias, por género de sexos, y de posiciones por partidos políticos.



## **A2.- Segundo apartado de la encuesta de opinión aplicado a los señores legisladores de la República de Costa Rica:**

Se informa que para un mejor manejo del desarrollo de cada una de las preguntas hemos elaborado la siguiente tabla.

Tabla guía que contiene las páginas entre las cuales se desarrolla el contenido de cada pregunta perteneciente al segundo apartado de la encuesta de opinión

Nombre de pregunta	# de Página
1. Criterio sobre el control político	290-301
2. Nuevos instrumentos de control político en C.P.	302-313
3. Conocimiento de instrumentos de control político	314-323
4. Criterio sobre la moción de censura	324-333
5. Grado de coordinación	334-342
6. Concepto de control político	343-347
7. Aspectos entorpecedores del control político	348-355
8. Recomendaciones para mejorar instrumentos de control político	356-360
9. Influencia del fenómeno partidocrático	361-367
10. Criterios de evaluación por el pueblo al control político	368-371
11. Necesidad de capacitación a diputados en control político	372-377

**1.- Considera usted, que el control político que ejerce el poder Legislativo, es:**

**A- Eficiente**

**B- Poco eficiente**

**C- Ineficiente**

**Justifique su respuesta.**

Dieciocho, del total de los cincuenta y siete señores diputados y señoras diputadas, que conforman en la actualidad la Asamblea Legislativa, de la República de Costa Rica, y responden a la encuesta de opinión, lo hacen afirmando, que consideran que la función de control político, que desempeña la Asamblea Legislativa costarricense, le califican como eficiente, para un porcentaje del treinta y siete por ciento.

Cabe resaltar, de los dieciocho señores legisladores, que determinan que el ejercicio del control político, desarrollado por la Asamblea Legislativa es eficiente, únicamente doce de los mismos, aportan sus justificaciones, en las cuales fundamentan su posición, de porqué motivo valoran el trabajo de la función contralora como eficiente.

Con lo anteriormente descrito tenemos, que quienes justifican su opinión, personifican, únicamente un veinticuatro por ciento, del treinta y siete por ciento de las justificaciones precedentemente mencionadas.

Esto nos crea una gran interrogante, al no explicar los restantes señores diputados y señoras diputadas, sus razones en las cuales se fundamentan, para basar, sus consideraciones en las cuales acreditan que el trabajo desarrollado en materia de control político es eficiente. ¿Lo tendrán claro realmente?

Entre algunas de las justificaciones que los señores legisladores, ofrecen para reconocerle como eficiente se pueden designar las subsiguientes:

Uno de los señores diputados afirma, esta Asamblea Legislativa en particular, le apostó más a la función de control político propiamente dicha, que a la labor de legislación.

Otros de los legisladores y legisladoras, determinan como un factor más a tomar en consideración, los recursos con los cuales disponen para desarrollar esta función contralora.

Además apuntan como otro motivo a tener en cuenta a los mismos intereses particulares, que se mueven a lo interno de la Asamblea Legislativa costarricense.

Algunos señores diputados y señoras diputadas, esgrimen, como otras razones de peso, para imaginarle como eficiente, su trabajo individual, o el de sus fracciones políticas.<sup>205</sup>

Llama la atención sobremanera la siguiente justificación, proporcionada por uno de los señores diputados, para indicar que la función de control político que se cumple es eficiente. Con relación a esto nos proporciona la siguiente justificación:

"No corresponde al momento actual, poco vemos para investigar".

Esto resulta ser contradictorio, cuando en las últimas fechas existe una gran preocupación, por la transparencia de algunos de los políticos. Y la prensa nacional, de la República costarricense, ha denunciado algunos casos, que han ocasionado bastantes críticas, a la función desempeñada por la Asamblea

---

"Esta Asamblea Legislativa le apostó más al control político, que a la labor de legislación, creo que reduce a la cantidad de fracción".

"Esta Asamblea en particular, la fracción del PLN (Partido Liberación Nacional) han realizado un extenso control político".

"El Parlamento es el Foro Político por excelencia, me parece que esta Asamblea Legislativa, ha dedicado mucho tiempo al control político, aspecto que beneficia a la democracia".

"Por los recursos que se tienen y intereses particulares".

"En mi caso, la contraloría ha dado su respaldo técnico a mis denuncias".

Legislativa, no voy a entrar a juzgar, ni valorar en esta oportunidad, si merecidas o no.

Al contrario, otro de los señores legisladores, nos manifiesta que ninguna de las opciones expuestas en la pregunta se presenta, para un porcentaje del dos por ciento. Precisa que el ejercicio del control político dentro de la Asamblea Legislativa, en nuestro país, se despliega con altibajos.

Me permito aclarar, este criterio en el momento de tabular los datos, será asumido como poco eficiente, ya que los altibajos señalados, no nos enmarcan con este juicio, de ninguna manera que el ejercicio del control político, que se esta desempeñando por la Asamblea Legislativa, sea de ninguna forma eficiente.

A contrario sensu, uno de los señores diputados es del criterio, que la función de control político, que efectúa la Asamblea Legislativa costarricense, se enmarca en el grado de ineficiente. Para un porcentaje del dos por ciento.

Este legislador nos justifica su creencia, manifestando que el trabajo de control político le considera como ineficiente, asegurando que por parte de nuestra Asamblea Legislativa, no se maximiza su empleo.

En cambio, veintinueve de los cincuenta y siete señores diputados y señoras diputadas, han calificado la función de control político, que lleva a cabo el Poder Legislativo, como poco eficiente, para un porcentaje del cincuenta y nueve por ciento. De estos señores diputados y señoras diputadas, veintiséis de los mismos, exponen las siguientes justificaciones y razones, para emitir sus juicios:

Uno de los señores legisladores asegura, la mayoría de los casos, son denunciados por la prensa nacional, y es entonces cuando los señores



diputados y señoras diputadas, vienen a reaccionar, avisados por el conocimiento público de tales revelaciones.

Otros de los señores legisladores, manifiestan que debería existir un control previo, y no convertirse esto exclusivamente en una caja de resonancia sobre las noticias que informa la prensa nacional.

Mientras algún otro diputado apunta, a situaciones tales como que el concepto que se emplea, es limitado y sus efectos escasos. Afirma, se efectúan denuncias sobre todo contra personas, pero no se les proporciona seguimiento, ni término, debido a que las comisiones investigadoras se han politizado, y no existe por ello un verdadero proceso de control, que culmine con las sanciones y correcciones correspondientes. Explican que si bien cuentan, con amplias facultades otorgadas constitucionalmente, las limitaciones principales se producen al momento de conocer, los informes de las comisiones investigadoras en plenario.

Al respecto anexo a pie de página parte del contenido, del discurso, del diputado Olman Vargas Cubero, en la sesión plenaria del 11 de noviembre del dos mil cuatro, cuando se analizaba un asunto en estudio por una comisión investigativa. En relación a lo cual este diputado manifestó:

“Por que hoy, al igual, que desde el 1º de mayo del año 2002 no estoy de acuerdo con las Comisiones Investigadoras, no creo en ellas. Ya que la principal función de la Asamblea es legislar y no investigar y mucho menos condenar”.

206

---

<sup>206</sup> Discurso del Diputado Olman Vargas Cubero, en la Sesión Plenaria del Jueves 11 de Noviembre de 2004:

Yo, asumo mi responsabilidad, señor Presidente, no tiene que recordármelo.

Sí, antes que usted y que muchos compañeros, a las nueve en punto yo estaba presente en el Plenario. Que conste en actas, como usted lo solicitó, que no concurrí a hacer quórum a las nueve y quince. Sí, yo al igual que 19 compañeros más, no concurrimos a la sesión de la mañana. Para esa sesión extraordinaria, su convocatoria, no conté con mi voto y no estoy de acuerdo con ellas.

Por que, hoy, al igual, que desde el 1º de mayo del año 2002 no estoy de acuerdo con las Comisiones Investigadoras, no creo en ellas. Ya que la principal función de la Asamblea es legislar y no investigar y mucho menos condenar. El control político, es inherente a nuestra condición de Diputados, pero se ejerce principalmente a través de la irresponsabilidad e inmunidad y no siguiendo la agenda de los medios de comunicación o de un Diputado de mala fe.

Otras de las causas mencionadas por los señores legisladores, para que el ejercicio del trabajo de control político sea valorado como poco eficiente, es que en muchas oportunidades el gobierno, hace caso omiso a las denuncias del control político, y no cuentan, con un efectivo mecanismo de control político, que les permitan hacer cumplir a las instituciones de gobierno con las recomendaciones de los diputados, al concluir con una investigación.

En cambio, otro de los señores legisladores, es más radical en su respuesta y afirma, en algunos casos, la profesionalización de la corrupción, impide el desarrollo de un eficaz y eficiente trabajo de control político.

A contrario sensu otro de los señores diputados considera necesario, llegar a perfeccionar los mecanismos de control, para que éste no venga a invadir las competencias de otros sectores.

Con relación a esta opinión, observemos, lo que comenta uno de los doctrinarios costarricenses más experimentados y connotados, como viene a ser el licenciado Rubén Hernández Valle. Quién manifiesta:

"La interpretación lógico-sistemática de los artículos, nueve, ciento veintiuno inciso veintitrés y ciento cuarenta y nueve inciso tres y cinco de la Carta Política Costarricense, nos lleva a la conclusión de que las potestades de las comisiones de investigación en la Asamblea Legislativa, en virtud del principio de la división de poderes están constitucional, y lógicamente limitadas, por las atribuciones constitucionales y legalmente otorgadas a otros poderes y órganos constitucionales, por lo que no es jurídicamente factible, que tales comisiones, investiguen validamente asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de

---

Yo pregunto:

¿Cuántos millones de colones habrán costado las cien sesiones de las mega comisiones investigadoras que este plenario aprobó al inicio de nuestra gestión?

¿Qué resultados tenemos de esas comisiones? Y más bien, ¿no le habremos economizado dinero al fisco por no sesionar en la mañana?.

justicia o que se encuentren en apelación ante la Contraloría General de la República o sean de la competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones".<sup>207</sup>

Por otra parte, algunos legisladores, creen que el ejercicio del control político, podría ser mejor, si los señores diputados y señoras diputadas, no estuvieran sometidos a los designios de sus partidos políticos, y por estos motivos señalan que las opiniones vertidas, en muchas ocasiones vienen a ser de carácter partidista, y por estas razones imaginan, que se discute mucho, y como resultado tenemos que el objetivo principal del control político se desvirtúa, pasando a un segundo plano, la esencia real de la finalidad que pretende alcanzarse con el trabajo desarrollado a través del ejercicio de este control.

Una insuficiencia más, a la cual hacen referencia los legisladores, para que se presente la poca eficiencia en el ejercicio del control político, es que sus resultados finales, se quedan únicamente en buenas intenciones, como pueden ser la condena moral y ética.

Para varios de los señores legisladores y señoras legisladoras, es forzoso que por parte de la Asamblea Legislativa, se efectúe una modificación del Reglamento Legislativo, con el propósito, de poder llegar a convertir a la función, que se desarrolla a través del ejercicio del trabajo de control político, en un medio oportuno, eficaz y eficiente, a la hora de cumplir con esta responsabilidad constitucionalmente instituida, en el país.<sup>208</sup>

---

<sup>207</sup> Hernández Valle, Rubén.

Obra citada. Op.cit. Editorial Juriscentro San José, Costa Rica, año, 1991, p. 94.

<sup>208</sup> "La mayoría de los casos, son denunciados por la prensa, y los diputados reaccionan ante esa denuncia".

"Debería darse un control previo, en la medida de lo posible, y no ser una caja de resonancia sobre lo que dice la prensa".

"Se hacen denuncias sobre todo contra personas, pero no se les dá seguimiento, ni término. Las comisiones investigadoras, se han politizado y no hay un verdadero proceso de control, que culmine con las sanciones y correcciones correspondientes. Han sido utilizadas para el show político".

"Se discute, habla mucho y se desvirtúa el control político".

"El concepto que se emplea es limitado y sus efectos escasos".

"El mismo, se queda en buenas intenciones como la condena moral y ética".

En la siguiente tabla, distribuimos individualizados los porcentajes de las respuestas recibidas, entre los distintos partidos políticos, en donde exponen sus valoraciones, de como se desarrolla el ejercicio del control político por la Asamblea Legislativa durante esta legislatura.

Fuerza Política	Valoración			Porcentaje/ valoración		
	E.	P.E	I.	E.	P.E	I.
Unidad Social Cristiana	5	9	0	26%	47%	0%
Liberación Nacional	4	11	0	24%	65%	0%
Acción Ciudadana	5	3	0	63%	38%	0%
Bloque Patriótico	2	3	0	40%	60%	0%
Movimiento Libertario	2	3	0	40%	60%	0%
Renovación Costarricense	0	0	1	0%	0%	100%
Auténtico Herediano	1	0	0	100%	0%	0%
Total general	19	29	1	39%	59%	2%

P. E . = Poco eficiente. E = Eficiente

I . = Ineficiente.

Del análisis de esta pregunta, se nos evidencia, que en la República de Costa Rica, está ocurriendo un importante problema, durante el ejercicio del

"En algunos casos, la profesionalización de la corrupción, impide un eficiente control político. En otros casos, no existe, un efectivo mecanismo para hacer cumplir a las instituciones de gobierno con las sugerencias de un diputado, después de una investigación".

"Lamentablemente el gobierno, la mayoría de las veces, hace caso omiso a las denuncias que se ponen en el control político".

"Podría mejorar, si los diputados, no estuvieran sometidos a las fracciones, es decir a los designios de sus partidos. No existe independencia real, frente a los partidos".

"Si bien cuenta, con amplias facultades otorgadas constitucionalmente, las limitaciones principales están en:

1.- la dificultad de conocer, los informes de las comisiones investigadoras en plenario. 2.- Intereses partidistas".

"Primero, por el poco tiempo que se dispone, segundo porque en muchas oportunidades, las opiniones vertidas son partidistas y hay, o a veces muy poco, seguimiento".

"Falta perfeccionar mecanismos y invade competencias de otros sectores".

"Hay que modificar el reglamento legislativo".

desempeño del trabajo de control político, por parte de su Asamblea Legislativa, porque si tomamos, en consideración, la opinión vertida por el cincuenta y nueve por ciento de los señores legisladores y señoras legisladoras, que declaran considerar que el desempeño del control político, es poco eficiente, y además de esto le añadimos el dos por ciento que le aprecia con altibajos, y conjuntamente le sumamos el dos por ciento que le considera como ineficiente, nos proporciona como resultado, que el grado de la poca eficiencia indicada ascienda del cincuenta y nueve por ciento inicial, a un sesenta y tres por ciento.

Además como puede observarse claramente, de las respuestas aludidas para justificar el grado de eficiencia atribuido al control político, vienen a ser bastante superficiales, y los fundamentos empleados por los legisladores, para defenderlas, a mi criterio, resultan ser muy poco convincentes y clarificadores.

A contrario sensu, todos los señores diputados y señoras diputadas, que le distinguen como poco eficiente, ineficiente o con altibajos, consideran y señalan obstáculos muy complicados de llegar a enfrentar y solucionar, con un gran problema más a recalcar, es que los titulares del poder, están conscientes de la existencia de tales problemáticas, y preocupantemente, muy pocos de ellos, nos señalan acciones concretas que se estén operando para corregir tales anomalías en el ejercicio del control político. Ciertamente, mencionan algunas acciones que se pueden llegar a realizar, con la finalidad de mejorar, tanto el desempeño del control político, así como sus instrumentos, pero no nos indican cuando se va a iniciar con estas urgentes, y a mi dictamen prioritarias acciones correctivas.

Por todo lo que hemos detallado hasta el momento, considero que se nota la urgencia, de que nuestros señores legisladores y señoras legisladoras, realicen un alto en el camino, e inicien con la evaluación de esta importante y fundamental función. Con el propósito de llegar a vitalizarle, con los instrumentos apropiados y requeridos, para poder enfrentar los próximos años,

con mecanismos de control político, que rindan para el pueblo costarricense, los resultados esperados, de una función tan importante como es desde luego, la función que se debe desarrollar, por el poder Legislativo, a través de un eficaz y eficiente ejercicio de un correcto control político.

El cual debe ser ejercitado de forma cuidadosa, responsable, enérgica, pero de manera prudente y respetuoso sobre todas las instituciones democráticas, existentes en el Estado de la República de Costa Rica, para poder obtener del mismo, los resultados esperados.

Lo que cabe indicar, no siempre necesariamente han de ser sanciones disciplinarias inmediatas, sino más bien beneficiarse a través de su buen ejercicio, manteniendo al pueblo bien informado de lo que esta ocurriendo a lo interno de la nación, y con ello, conseguir una critica publica, del actuar del gobierno o institución de la cual se este tratando. Otro aspecto más, que no debemos olvidar al momento de evaluar el eficiente y eficaz, éxito del ejercicio del trabajo de control político, es el concerniente con las sanciones inmediatas que éste conlleva en los regímenes parlamentarios, en donde dichas sanciones son absolutamente, excepcionales. Y no de modo frecuente. Como interpreto les están percibiendo, en la República de Costa Rica, tanto los señores diputados como las señoras diputadas.

Adicionalmente advierto de las respuestas obtenidas, la existencia de ciertos niveles de confusión entre los legisladores y legisladoras, al querer encontrar la funcionalidad, eficiencia y eficacia, del ejercicio del control político, exclusivamente en sanciones disciplinarias inmediatas, desatendiendo con este pensamiento una de las funciones primordiales del control político, la cual es que el pueblo se mantenga informado del trabajo que desarrolla el gobierno, por que de esto en mucho dependerá, la permanencia en el poder del grupo que en ese momento este gobernando a la nación. Por esas circunstancias es fundamental que el trabajo de control político, grave entre los partidos de oposición, mucho más que en el partido de gobierno.

En razón, que son los partidos políticos de oposición, los interesados en llegar a obtener el poder prevaleciéndose de la irregular función del gobierno en ejercicio.

Con relación a lo indicado anteriormente, es que no se puede olvidar, que de una efectiva y eficaz función de control político, puede provenir un cambio de mandatarios en la República, pues es el mismo pueblo quién a través de sus votos, el que viene a otorgar el premio, o castigo a los gobernantes.

Al respecto de todo lo expuesto, observemos, lo que comenta el doctrinario costarricense, Alex Solís Fallas, en su libro titulado, el control parlamentario, acerca de cómo se desarrolla la función contralora, por parte del Poder Legislativo, de la República de Costa Rica, en lo que interesa dice:

"La función contralora de la Asamblea Legislativa se lleva a cabo, mediante una gran variedad de mecanismos, escasamente regulados o del todo carentes de cualquier procedimiento para su concreción, por lo que el control, en la mayoría de los casos, si no en todos, se produce sobre la base de criterios de oportunidad política, libremente valorados por los legisladores. Por ejemplo, la Constitución prevé la posibilidad de interpelar y censurar a un ministro, pero no define ningún procedimiento para tal efecto". <sup>209</sup>

Como puede notarse, del dictamen del doctor Alex Solís Fallas, se hace evidente y notoria la ausencia, de procedimientos claros, al momento, de la aplicación del control político.

Esto se complementa, con la respuesta que ofrece, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, al señor diputado Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, mediante nota del cinco de agosto del dos mil dos ante una de sus consultas, en relación a lo cual se le responde, esta asesoría concluye que:

---

<sup>209</sup> Solís Fallas Alex.

Obra citada. Op.cit. 2.ed. San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia año, 1995, p. 54-55

“el control político, si bien no se encuentra definido en nuestra Constitución, es una actividad cuyo ejercicio no se encuentra subordinado a límite alguno, ergo, es irrestricta;

las prácticas de control político pueden incluir todas aquellas actuaciones que, a juicio de los diputados, sean de utilidad para dar cumplimiento al mandato genérico contenido en la Carta Magna y, en particular, en el Reglamento de la Asamblea Legislativa; Que el Reglamento legislativo le encomendó la tarea de control político sobre la Hacienda Pública a la Comisión Especial Permanente para el Control sobre el Ingreso y el Gasto Públicos; y, - Que en el ejercicio de tales facultades, la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Públicos no se encuentra limitada ni material ni formalmente, de modo que podría ejercerlas, incluso, al margen del mismo Reglamento, siempre y cuando con ello no se desmerezca el principio democrático”.<sup>210</sup>

Como podemos observar del dictamen expuesto, por la asesoría de la Asamblea Legislativa, queda claro la poca normatividad existente, para que los legisladores puedan cumplir con el trabajo relacionado con el control político.

Esta es una de las causas que a mi juicio, viene a incidir de forma sustancial en la poca eficiencia del ejercicio del trabajo de control político, precedentemente examinada a través de las opiniones, recolectadas de los actuales legisladores.

Aunque algunos consideran que la ausencia de procedimientos subsiste como una ventaja, porque no se encuentran limitaciones al momento de tener que actuar. A mi criterio esto se viene a convertir en una desventaja, porque el

---

<sup>210</sup> Respuesta al diputado.

San José, 5 de agosto de 2002

SEÑOR Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, Diputado

En atención a su consulta formulada mediante nota de 30 de julio de 2002, en el sentido de referirnos a “los alcances de las competencias de la Comisión para el Control sobre el ingreso y el Gasto Público, para realizar funciones de control político en sus distintas expresiones”, me permito dar cumplida respuesta.



mecanismo entonces se puede venir a realizar de forma antojadiza, y eventualmente podría perjudicar, más que favorecer la eficacia y eficiencia del trabajo del control político. Ya que al no existir claridad en los procedimientos se pueden llegar a cometer errores de forma hasta involuntaria.

Asimismo, considero oportuno que los instrumentos establecidos de forma específica, para desempeñar la función de control político, es preciso, sean establecidos con la mayor claridad, y al contrario de algunos pensamientos expresados en el país, reflexiono que se debe dejar muy claro que en toda función en la cual se investiguen posibles anomalías, a través del ejercicio del control político se debe respetar el debido proceso, en razón que aunque la investigación este dirigida a evaluar el actuar de equis institución, no podemos por ello obviar que ésta no se representa sola sino que siempre, intervendrá en su nombre una persona.

También es muy necesario clarificar y reglamentar algunos aspectos, del trabajo de control político, para que este tenga una mayor relevancia, solo como ejemplo:

que las investigaciones desarrolladas por las comisiones de investigación, de la Asamblea Legislativa, no se deban quedar en un apacible informe, si no que conduzcan a algo más importante, conseguido del impacto del trabajo desplegado por los legisladores, en la comisión que tuvieron bajo su responsabilidad. Y que los instrumentos instituidos para cumplir con la función controladora, no vengán a limitar por su deficiente establecimiento el trabajo que se pueda desempeñar con su utilización.

## **2.- ¿Considera usted necesario incluir nuevos instrumentos de control en la Constitución política de Costa Rica?**

**Si. No. Justifique su respuesta:**

Treinta y uno, de los señores legisladores y señoras legisladoras, manifiestan, que se necesita introducir nuevos instrumentos de control político, en la Constitución Política de la República de Costa Rica, para un porcentaje del sesenta y tres por ciento.

Para fundamentar su parecer nos exponen las razones siguientes:

Algunos legisladores, mencionan que en el país, se requiere efectuar una constituyente, y con ello crear opciones, reales y verdaderas para poder obligar al Poder Ejecutivo a investigar, o actuar ante las denuncias que se den por parte de los diputados y diputadas. Adicionalmente, consideran que deben ser incluidas, las interpelaciones a los ministros, como un capítulo ordinario en la agenda legislativa, así como proceder a ampliar las facultades actuales, dispuestas para la moción de censura, con el propósito de que la misma venga a permitir poder abarcar a otros funcionarios, además de los ministros de Gobierno, como solamente se puede realizar en la actualidad.

Otro aspecto que se recalca por los legisladores, como necesario, para tener un control político eficaz y eficiente, es que se lleguen a aprobar mecanismos de control político, que permitan poder aplicar sanciones políticas reales, con una votación de dos terceras partes del total de los diputados o diputadas.

Asimismo varios diputados, insisten que en el país, urge la aprobación de la ley del referéndum, para que el pueblo tenga la posibilidad de manifestar ante la Asamblea Legislativa, lo que considere aconsejable y prudente, deba efectuarse en determinados asuntos de relevancia, para el avance del Estado nacional.

Cabe señalar en este aspecto, que es mencionado por los legisladores, que constitucionalmente, según lo establecido en el artículo ciento cinco constitucional, el referendo ya fué aprobado, pero la Asamblea Legislativa, sigue en deuda con la ley que permitirá su implementación.<sup>211</sup>

Ante esta omisión, la Defensoría de los Habitantes de la República presentó un recurso ante la Sala Constitucional. La cual el once de mayo del dos mil cinco resolvió en los siguientes términos:

"Sentencia 2005-05649, expediente 04-08653-0007-CO. A las catorce horas con treinta y nueve minutos. Defensoría de los Habitantes y otro en contra de la omisión de la Asamblea Legislativa en dictar leyes referéndum e iniciativa popular en la formación de leyes. Se declara INCONSTITUCIONAL la omisión absoluta de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su poder normativo y en el cumplimiento del mandato expreso impuesto por el poder constituyente

---

<sup>211</sup> Artículo 105.- de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

"La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional.

El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

(Así reformado por ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002).

NOTA: El transitorio único de la ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002 dispone: "Las leyes especiales referidas en los artículos 105 y 123 de la Constitución Política, aquí reformados, deberán dictarse dentro del año siguiente a la publicación de esta Ley. Durante este plazo, no entrará en vigor lo aquí dispuesto."

derivado en la reforma parcial a la Constitución Política a los artículos, entre otros, 105 y 123 mediante Ley número 8281 del 28 de mayo del 2002, para dictar, según el Transitorio Único, en el plazo de un año siguiente a la publicación de ésta -el cual venció el pasado 20 de junio del 2003- las leyes de desarrollo del referéndum y de iniciativa popular en la formación de la ley. Se le otorga a la Asamblea Legislativa el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, para que dicte las referidas leyes. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a todas las partes y al Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. Los Magistrados Mora y Cruz salvan el voto en cuanto se fija un plazo para que la Asamblea Legislativa cumpla con la obligación establecida en el Transitorio de la Ley número 8281. El Magistrado Vargas pone nota". <sup>212</sup>

Con relación de esta sentencia, las diputadas Laura Chinchilla, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y la diputada Marta Zamora Castillo, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), comentaron al periódico la nación lo siguiente :

Laura Chinchilla, dijo que ya fijaron una fecha para dictaminar el tema. fijamos como plazo máximo para dictaminar la ley el 15 de junio. En cambio Marta Zamora añadió, "se va a hacer, como lo ordenó la Sala". Y agregó, "Da pena que la Sala, una vez más, nos tenga que decir qué tenemos que hacer, ante el vacío de la toma de decisiones". <sup>213</sup>

Existen dos cuestiones más, que también son reiteradamente mencionadas, por los diputados, para poder mejorar en el desempeño del control político, las cuestiones a las que se hace alusión, es en primer término, la rendición de

---

<sup>212</sup> Sentencia de la Sala Constitucional,

"2005-05649, expediente 04-08653-0007-CO. A las catorce horas con treinta y nueve minutos".

Para más información, <http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/>

<sup>213</sup> Publicación en el periódico, la nación de Costa Rica, sección nacionales día doce de mayo del 2005. [www.nación.com](http://www.nación.com)

"Diputados obligados a aprobar leyes que regulan el referendo La Sala Constitucional obligó ayer a la Asamblea Legislativa a aprobar el proyecto de ley que permitirá aplicar el referendo".

cuentas, y la necesidad de otorgar mayores recursos para la investigación y así poder ejercer reales sanciones políticas. El otro aspecto, que mencionan, se precisa atender, consiste en proceder a reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa, para acoplar esa norma jurídica, a los requerimientos actuales del control político.<sup>214</sup>

Cabe subrayar, que varias de estas cuestiones son aludidas, también en las respuestas obtenidas a la pregunta anterior, lo difícil de esto; es cuándo se va a realizar esto?

A contrario sensu, dieciocho de los señores diputados y señoras diputadas, nos responden a esta pregunta, advirtiéndolo que no consideran necesario, incorporar nuevos instrumentos de control político en la Constitución Política de la República de Costa Rica, para un porcentaje del treinta y siete por ciento.

Para lo anterior estos señores diputados y señoras diputadas, aportan las siguientes justificaciones:

Afirman que no se necesitan, nuevos instrumentos de control político, y reiteran que lo requerido, es realizar modificaciones en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, que permitan mayores participaciones en plenario, y con esto hacer

---

<sup>214</sup> "Es necesaria una constituyente".

"La aprobación de la ley del referéndum, para que el pueblo se manifieste".

"Una opción que obligue al Poder Ejecutivo a investigar, o actuar ante las denuncias que se den por parte de los diputados".

"Deben darse, posibilidades de sanciones políticas reales, con una votación de dos terceras partes del total de los diputados o diputadas".

"Las interpelaciones a los ministros, como un capítulo ordinario en la agenda legislativa".

"La pregunta parlamentaria a nivel de plenario para ministros".

"Ampliarse, las facultades relativas a la censura, para que abarque otros funcionarios además de los ministros de Gobierno".

"Rendición de cuentas, recursos para investigar y ejercer sanciones políticas".

"se requieren, en el reglamento de la Asamblea Legislativa, no precisamente en la Constitución Política".

"Es evidente, la necesidad de establecer, nuevos poderes y facultades para realizar este control".

"Costa Rica, necesita cambios estructurales, pues su modelo ha decaído y el control político, requiere de un nuevo concepto y estructuración".

más efectivo el ejercicio del trabajo de control político. Otro aspecto que los legisladores, dictaminan como necesario entrar a considerar, es el relacionado con darles mayores potestades, a sus órganos auxiliares, como son la Contraloría General de la República, y la Defensoría de los Habitantes de la República.

Lo que los señores diputados y señoras diputadas, no aclaran es, a qué tipo de facultades se están refiriendo; si estas son económicas, legales o de que clase serán las mismas?

En cambio, algunos de los señores legisladores y señoras legisladoras, aseguran que la Constitución Política costarricense, es muy amplia en la normativa, que regula el accionar de los diputados, debido a que tienen las posibilidades, de acceder información para las distintas comisiones; afirman es irresponsable en su opinión, lo que consideran, les autoriza para un eficiente e importante desempeño del trabajo de control político.<sup>215</sup>

Comparto la opinión que nuestra Constitución Política, sea muy bondadosa, en instrumentos de control político, lo malo es que estos no estén bien clarificados y algunos en si mismos, limitan la función que la Asamblea Legislativa, pueda

---

<sup>215</sup> "La Constitución Política, establece los fundamentales para nuestro estado de Derecho".

"No hacen falta nuevos instrumentos, estos están. Quizás hace falta cambios en el Reglamento Legislativo para hacer más efectivo el control político".

"A nivel de parlamento, se requiere reformar Reglamento, que permita mayor participación en plenario".

"Las reformas, se pueden hacer mediante ley o reglamento legislativo".

"La Constitución Política costarricense, tiene en la normativa que regula el accionar de los diputados, es muy amplia en donde tiene la posibilidad, de acceder información para sus comisiones; es irresponsable en su opinión, lo que le permite un importante control político".

"Existen suficientes medios de control, lo que hace falta es su efectiva y oportuna aplicación".

"Lo que debe hacerse, es aplicar las leyes oportunamente".

"Hay que establecer mecanismos más claros y expeditos. Se habla de que están las leyes, quizás faltan los recursos, mecanismos y la voluntad política para cumplirlos. Quizás el mecanismo del Referéndum, fortalezca el sistema de control nacional, a través de la participación y control ciudadano; por su parte, talvez haya que darles mayores potestades, a los órganos de control como la Contraloría o la Defensoría de los Habitantes".

desarrollar, al momento de recurrir a estos mecanismos de control político, para cumplir con una tarea instituida constitucionalmente por nuestra Carta Política.

Quizá adelantando criterio, deseo manifestar, considero que con una modificación al reglamento de la Asamblea Legislativa, los problemas identificados en el control político, siempre subsistirán.

En la subsiguiente tabla, mostramos el grado de aceptación expresado por parte de los señores diputados y señoras diputadas, para incorporar nuevos instrumentos de control político en la Constitución Política de la República de Costa Rica.

Considera necesario nuevos instrumentos de control político en la C. P.
---

A favor del si	31
Justifican. %	26 / 53%
No Justifican. %	5/ 10%
Total. %	63%

A favor del no	18
Justifican. %	12 / 24%
No Justifican. %	6 / 12%
Total. %	37%

Conozcamos estos mismos resultados pero ahora distribuidos de forma individualizada por partido político.

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Unidad Social Cristiana	Si	7 = 37%	5	26%	2 = 11%
	No	7 = 37%	4	21%	3 = 16%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Liberación Nacional	Si	12 = 71%	11	65%	1 = 6%
	No	3 = 18%	2	12%	1 = 6%

fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Acción Ciudadana	Si	5 = 62.5%	4	50%	1 = 12.5%
	No	3 = 37.5%	2	25%	1 = 12.5%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Bloque Patriótico	Si	2 = 33%	2	33%	0%
	No	3 = 50%	3	50%	0%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Movimiento Libertario	Si	2 = 40%	1	20%	1 = 20%
	No	3 = 60%	1	20%	2 = 40%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Renovación Costarricense	Si	1 = 100%	1	100%	0%
	No	0	0	0%	0%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Auténtico Herediano	Si	0	0	0%	0%
	No	1 = 100%	1	100%	0%



Del análisis, de las respuestas, recibidas a esta pregunta, conjeturamos varios y complejos problemas, que aparentemente vienen a incidir, en la eficiencia y eficacia del ejercicio del control político, desempeñado por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

En primer término, queda expuesto, el criterio emitido por los señores legisladores, en donde advierten de la necesidad, que se dispone de introducir en la Constitución Política de la República de Costa Rica, nuevos instrumentos de control político, asimismo, como proceder a reformar el Reglamento Legislativo, y con esto llegar a vitalizar esta preponderante función, para el fortalecimiento de la democracia existente en la República costarricense.

Conjuntamente, queda claramente evidenciado, los diputados, que opinan no consideran necesario incorporar, nuevos instrumentos de control político, en la Constitución Política, señalan visualizar problemas en el ejercicio del control político, y deficiencias en los instrumentos dispuestos para tal función, por tal motivo tanto, los señores diputados, que se encuentran a favor, como aquellos que dicen no lo aprecian necesario, insisten, en la necesidad de proceder a realizar reformas al Reglamento Legislativo, para hacer más eficiente y eficaz, el empleo del control político.

También se recalca, por los diputados, la deficiencia emanada, de los instrumentos de control político, en razón que los mismos, no les autorizan de ninguna forma a llegar a imponer a los investigados, ninguna clase de sanción disciplinaria. Aun cuando los diputados lo acreditasen de esta manera, como necesario debido a la falta cometida por el funcionario investigado.

Con todo lo determinado, hasta el momento, es evidente, que aún cuando un apreciable grupo de legisladores,(dieciocho), manifiestan no estar de acuerdo con la instauración de nuevos instrumentos de control político, por otro lado, se encuentran señalando la necesidad de los mismos, quizás la única diferencia real que se enmarca, es el medio que visualizan para llegar a implementarlos,

ya que como podemos notar, un grupo de legisladores, les advierten propiamente incluidos en la Constitución Política, mientras que otro grupo de señores diputados y señoras diputadas, les determinan aprobados mediante Ley o reformas al Reglamento legislativo.

Esto nos permite advertir, que las dos posiciones analizadas, de una u otra forma nos han mostrado y dejado de manifiesto, las limitaciones que perciben, están presentes en los instrumentos de control político con los cuales disponen para desarrollar su labor, por ello, no nos ocultan su insatisfacción en las pocas facilidades que encuentran, en tales instrumentos. Para poder desplegar una adecuada y oportuna función de control político, sobre el gobierno, y demás entidades públicas, por tanto podemos señalar el indiscutible requerimiento que se posee en la Asamblea Legislativa, de contar con nuevos y vitalizados instrumentos de control político, para el efectivo cumplimiento de su función controladora.

Los instrumentos actuales de control político, vigentes en la República costarricense, datan de la Constitución Política, del siete de noviembre del año mil novecientos cuarenta y nueve, cuando dichos instrumentos de control, fueron incorporados por primera vez en la Constitución Política, como una función exclusiva de la Asamblea Legislativa, y desde esa época no se les han procedido a efectuar modificaciones, por ello dictamino que se precisa, realizarles correcciones, para acoplarles a las exigencias, y requerimientos que se acontecen en la sociedad que nos corresponde vivir en el siglo veintiuno.

Al respecto, cita el costarricense, licenciado Bernal Arias Ramírez, en su libro, Reformas Constitucionales de Costa Rica, el criterio, de Malavassi Vargas, cuando se discutía, una modificación parcial a la Constitución para suprimir que el presidente de la República debiese solicitar permiso a la Asamblea Legislativa, para poder salir del país.

Con relación a esta modificación determinaba el señor Malavassi Vargas que:

La reforma acentuaba la independencia del presidente, y venía a debilitar el "control político de la Asamblea, respecto de su persona".

Reflexionaba de la importancia que para la opinión pública, en vida democrática, tenía discutir estos viajes, por ser de un representante de la nación.<sup>216</sup>

Por todas las razones, que hemos venido analizando, y fundamentado en problemas de transparencia de algunos de los políticos, denunciados por la prensa nacional, y por los mismos diputados es que sigo recalcando, que se evidencia la eminente necesidad, de proceder a revisar los instrumentos con que se cuenta para desarrollar las funciones contraloras. También es notorio y palpable, se requiere, establecer medios de contacto, eficaces, eficientes y oportunos, que vengán a estrechar y fortalecer las relaciones existentes, tanto entre la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa de la República, como su superior jerárquico.

Con todo lo enumerado hasta el momento, las dos variables propuestas para esta investigación empiezan a ser demostradas, ya que en ellas indicamos, que la utilización de los instrumentos de control político, influyen, en la eficacia y eficiencia, del ejercicio del control político. Y hasta el momento éste es uno de los aspectos, mayoritariamente mencionados por los señores diputados, para no poder ejercer una eficaz y eficiente función de control político.

En relación a lo descrito :

estimo necesario, referenciar que, bajo el número de expediente 14.588, la Asamblea Legislativa conoció el proyecto de ley, denominado gobernabilidad. Presentado al conocimiento de la corriente legislativa, por el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República. Que procuraba un cambio

---

<sup>216</sup> Arias Ramírez, Bernal.

"Reformas Constitucionales, Constitución de 1949".

Costa Rica. 1ºed. San José, Costa Rica.

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Noviembre del 2001. p. 257-258.

de nuestro modelo de gobierno, a “un sistema semipresidencial o semiparlamentario, como una fórmula que puede ser eficaz, para alcanzar mayor gobernabilidad democrática, lograr que las decisiones puedan adoptarse en un tiempo razonable y hacer responsable políticamente al Parlamento ante la sociedad; y al Ejecutivo frente al Parlamento”.

Cabe determinar que esta propuesta, se originó del mensaje presidencial a la Asamblea Legislativa, del pasado primero de mayo del año dos mil uno.

Como dicho proyecto no obtuvo la aprobación legislativa, me permito incorporar a pie de página las principales reformas que pretendía introducir y que tienen relación directa, con este estudio.<sup>217</sup>

También a este aspecto hace referencia el licenciado Bernal Arias Ramírez, en su libro denominado, reformas constitucionales, en donde en sus conclusiones, comenta lo siguiente:

---

<sup>217</sup> Nota: este Proyecto no fue aprobado:

La Asamblea Legislativa DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

Reforma al sistema político Costarricense para alcanzar mayor responsabilidad y gobernabilidad democráticas.

Artículo 3.- Reformase el inciso 24) del artículo 121 de la Constitución Política el cual dirá:

“Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

24) Formular interpelaciones y exigir el rendimiento de cuentas a los ministros de Gobierno y a los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, y además, por dos tercios de los miembros de la Asamblea, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. La censura deberá votarse dentro de las cinco sesiones siguientes a la propuesta de la moción. En caso de aprobarse la moción, el ministro o jerarca presentarán su dimisión dentro de los quince días siguientes y el Presidente o Consejo de Gobierno nombrarán su sustituto”.

“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 25) Un tercio del total de los diputados, podrá presentar una moción de censura general a los ministros de Gobierno, la que será aprobada por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. La moción se discutirá y votará dentro de las cinco sesiones legislativas siguientes a esa sesión. Vencido el plazo de cinco sesiones, no podrá votarse la moción. Los mismos diputados no podrán plantear una moción general de censura hasta que pase un año, desde la última moción. En caso de aprobarse la moción general de censura, el Ministro de la Presidencia y los ministros de Gobierno presentarán su dimisión ante el Presidente de la República, quien deberá nombrar otro Ministro de la Presidencia y sustituir al resto de los ministros de conformidad con la Constitución, o solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones que convoque a elecciones legislativas anticipadas”.....

“Sin embargo hay un buen número de personas y políticos que hoy en día propugnan y luchan por seguir la ruta hacia un parlamentarismo de forma gradual”.<sup>218</sup>

---

<sup>218</sup> Arias Ramírez, Bernal.

Obra citada op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Noviembre del año, 2001, p. 334.

**3.- ¿Qué tanto conoce usted los mecanismos que la Constitución Política, otorga a los diputados para que ejerzan su función contralora?**

**Marque con equis su respuesta**

**A- Mucho**

**B- Más o Menos**

**C- Lo desconoce**

**Justifique su respuesta:**

Treinta y uno de los señores legisladores, y señoras legisladoras, afirman, conocer mucho los mecanismos de control político, establecidos en la Constitución Política de la República de Costa Rica, para un sesenta y tres por ciento. Cabe destacar, que solamente veintiuno de los mismos, o sea el cuarenta y tres por ciento justifican con sus explicaciones lo que aseguran al respecto.

Manifestando, las razones, que a continuación procedemos a nombrar:

Uno de los señores legisladores, afirma, es algo que se debe manejar en un órgano, que dentro de sus facultades está la del ejercicio del control político, y nos destaca, todos los días los diputados, contamos con una hora para ejercer esta función.

Mientras que otro legislador nos manifiesta, a través de los mecanismos de rendición de cuentas, los supremos poderes pueden y deben tomar acciones correctivas, tanto de la administración, como de los funcionarios públicos. Es parte de la relación y uso que tienen las y los legisladores respecto de las figuras constitucionales y legales.

En cambio, varios de los señores diputados y señoras diputadas, subrayan lo dispuesto en el artículo ciento veintiuno de la Constitución política costarricense.

Una de las respuestas más concretas, que se recibe de parte de uno de los señores legisladores nos asegura, que están claramente indicados, sobre todo en los incisos veintitrés y veinticuatro del artículo ciento veintiuno de la Constitución Política de la República costarricense, y en los artículos ciento ochenta y cinco al ciento noventa y cuatro del Reglamento de la Asamblea Legislativa, comisiones investigadoras, interpelaciones a ministros de Gobierno, censura a ministros, levantamiento del fuero de miembros de los Supremos Poderes, análisis del mensaje presidencial y del Informe del Presupuesto.

Uno de los señores diputados considera que, se debe estar alimentado de información veraz, que las instituciones otorguen al legislador. Sin embargo, sostiene se producen serios problemas para obtenerle veraz y oportuna.<sup>219</sup>

A contrario sensu, dieciocho de los señores diputados y señoras diputadas, determinan conocer, más o menos los instrumentos de control político, para un porcentaje del treinta y siete por ciento.

---

<sup>219</sup> "Con los mecanismos de rendición de cuentas, los supremos poderes pueden y deben tomar acciones correctivas, tanto de la administración, como de los funcionarios".

"Es parte de la relación y uso que tienen las y los legisladores respecto de las figuras constitucionales y legales".

"Artículo ciento veintiuno, Constitución Política, y a través de la contraloría".

"Están claramente indicados, sobre todo en los incisos veintitrés y veinticuatro del artículo ciento veintiuno de la Constitución Política y en los artículos ciento ochenta y cinco al ciento noventa y cuatro del Reglamento de la Asamblea Legislativa, comisiones investigadoras, interpelaciones a ministros de Gobierno, censura a ministros, levantamiento del fuero de miembros de los Supremos Poderes, análisis del mensaje presidencial y del Informe del Presupuesto".

"Constitucionalmente se encuentran los establecidos en el artículo ciento veintiuno de la Constitución Política, presupuesto, elección de magistrados, contralor".

"El instituto del control fiscalizador, debe estar alimentado con información veraz, que las instituciones otorguen al legislador. Sin embargo, hay serios problemas para obtenerla veraz y oportuna".

"Es algo que se debe manejar en un órgano, que dentro de sus facultades está la de control político, cabe agregar que todos los días los diputados, cuentan con una hora para ejercer esta función".

"He estudiado por mucho tiempo esta función".

Con relación a lo que se les consulta manifiestan;

Uno de los señores diputados expone, tenemos el derecho de solicitar información y pedir cuentas a los funcionarios públicos, además de que nos protege la inmunidad, asimismo podemos utilizar el veto y la moción de censura.

Otro de los señores legisladores, apunta a la obligatoriedad que mantienen las instituciones públicas de la República, de proporcionar respuesta a las consultas de un diputado o diputada.

En cambio, en esta otra respuesta alguno de los diputados, nos opina, los mecanismos de control político, están establecidos y se requiere de mejor sentido común, para lograr que estos sean más efectivos.

Mientras uno más, de los señores legisladores, afirma en su respuesta, dado a mis funciones, conozco los mecanismos de control político. Por cierto, con esta justificación, prácticamente no nos está respondiendo nada a lo consultado.

En otra más de las respuestas, uno de los señores diputados afirma, conozco los instrumentos más empleados en las sesiones de plenario, esta respuesta al igual que la contestación anterior, viene a ser bastante ambigua e imprecisa.<sup>220</sup>

Como podemos advertir de estas contestaciones tan poco profundas no podemos extraer, resultados muy claros, para valorar este aspecto de forma

---

<sup>220</sup> "Tenemos el derecho de solicitar información y pedir cuentas a los funcionarios públicos, además de que nos cubre la inmunidad parlamentaria. Por su parte, podemos hacer uso del veto o la censura".

"Es la clave del artículo ciento veintiuno, que me permite actuar con total firmeza".

"Más o menos, porque no se puede ser tan pretencioso, al decir que se conoce mucho, ni tampoco se desconoce del todo. Los mecanismos de control están dados y se requiere mejor sentido común, para lograr que estos sean más efectivos".

"Obligatoriedad de respuesta de las instituciones públicas"

"Dadas mis labores conozco los mecanismos".

"Los más utilizados en sesiones de plenario".



general, y poder afirmar de forma rotunda, que estos legisladores realmente conocen de los instrumentos de control político, establecidos en la Constitución Política de la República costarricense.

Para una mejor comprensión de esta pregunta, observemos los resultados generales que proyectamos en la siguiente tabla:

Conoce usted los mecanismos que la C. P. otorga a los diputados para la función contralora?

Opciones	Responden	Justifican respuesta	Porcentaje	Responden y no justifican	Porcentaje	Porcentaje total de respuestas
Mucho	31	21	43%	10	20%	63%
Más o menos	18	11	23%	7	14%	37%
Lo desconocen	0	0	0	0	0	100%

Observemos estos mismos resultados pero ahora distribuidos entre los distintos partidos Políticos, representados en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica:

Fuerza política	Opciones	Responden	Justifican respuesta	Porcentaje	Responden y no justifican	Porcentaje
Unidad Social Cristiana	Mucho	10	6	53%	4	32%
	Más o menos	4	1	5%	3	16%
	desconoce	0	0	0	0	0

Fuerza política	Opciones	Responden	Justifican respuesta	Porcentaje	Responden y no justifican	Porcentaje
Liberación Nacional	Mucho	13	9	76%	4	24%
	Más o menos	2	0	12%	2	12%
	desconoce	0	0	0	0	0

Fuerza política	Opciones	Responden	Justifican respuesta	Porcentaje	Responden y no justifican	Porcentaje
Acción Ciudadana	Mucho	3	2	25%	1	12.5%
	Más o menos	5	3	37.5%	2	25%
	desconoce	0	0	0	0	0

Fuerza política	Opciones	Responden	Justifican respuesta	Porcentaje	Responden y no justifican	Porcentaje
Bloque Patriótico	Mucho	1	1	17%	0	0%
	Más o menos	4	4	67%	0	0%
	desconoce	0	0	0	0	0

Fuerza política	Opciones	Responden	Justifican respuesta	Porcentaje	Responden y no justifican	Porcentaje
Movimiento Libertario	Mucho	3	2	40%	1	20%
	Más o menos	2	0	0%	2	40%
	desconoce	0	0	0	0	0

Fuerza política	Opciones	Responden	Justifican respuesta	Porcentaje	Responden y no justifican	Porcentaje
Renovación Costarricense	Mucho	1	1	100%	0	0%
	Más o menos	0	0	0%	0	0%
	desconoce	0	0	0	0	0

fuerza política	Opciones	Responden	Justifican respuesta	Porcentaje	Responden y no justifican	Porcentaje
Auténtico Herediano	Mucho	1	1	100%	0	0%
	Más o menos	0	0	0%	0	0%
	desconoce	0	0	0	0	0

De las respuestas de esta pregunta, y observando cada uno de los ítems señalados, en las tablas mostradas, se evidencian ciertas interrogantes, acerca del verdadero conocimiento, que tienen los señores diputados, y señoras diputadas, sobre los instrumentos de control político, establecidos en la Constitución Política de la República de Costa Rica, y regulados, en el Reglamento Legislativo de la Asamblea Legislativa.

En relación a lo comentado anteriormente, en primer término debemos subrayar, como un aspecto de debilidad, el conocimiento, que los señores legisladores y señoras legisladoras, expresan tener de los instrumentos de control político, establecidos en la Constitución Política, de la nación, debido a que muchos de ellos no fundamentan o justifican con propiedad y profundidad, el conocimiento que afirman tener de esos instrumentos de control político. Y aquellos legisladores que justifican su posición, lo realizan con respuestas muy escuetas, y en algunas oportunidades como se puede advertir, lo hacen, incluso refiriéndose a cuestiones diferentes, a lo que se les está preguntando, por tal razón, no nos queda muy claro el exacto y preciso conocimiento que mantienen de los instrumentos de control político, a través de los cuales desarrollan su trabajo de la función controladora.

Notamos que esta cuestión se repite nuevamente, y quizá un poco más agudizada en los legisladores y legisladoras, que manifiestan conocer más o menos los instrumentos de control político, establecidos en la Constitución Política de la nación costarricense. Por lo que nos podríamos arriesgar a dictaminar que bajo estas circunstancias, se evidencia la necesidad, que los nuevos señores diputados y señoras diputadas, traen de alguna capacitación previa, antes de asumir sus curules, para que conozcan de los mecanismos de los cuales disponen, para llevar acabo todas sus funciones, en este caso en particular, las contraloras que a mi juicio, son fundamentales para el fortalecimiento, crecimiento y estabilidad del sistema democrático, existente en la República de Costa Rica.

Al respecto de lo que se analiza, comenta el ex-diputado Alex Solís Fallas, en su libro titulado el Control Parlamentario en donde indica:

"Fué la evidencia del desconocimiento general, tanto de los diputados, como de la opinión pública, sobre el control parlamentario".

Añade "Aún hoy se desconoce la naturaleza, los alcances y los límites de esta función parlamentaria". Agrega "este desconocimiento se manifiesta en dos direcciones, se tiende a creer que el único mecanismo de control parlamentario del que dispone la Asamblea Legislativa, son las comisiones especiales de investigación, se ignora o al menos no se tiene conciencia de una gama riquísima de posibilidades que el texto constitucional ofrece a los legisladores, para controlar y pedir cuentas"....<sup>221</sup>

Por lo consignado, de las opiniones de los diputados y del doctor Solís Fallas, considero se hace necesario, algún tipo de capacitación para clarificar en los nuevos legisladores algunos aspectos específicos en materia parlamentaria.

---

<sup>221</sup> Solís Fallas, Alex.

Obra citada. Op.cit. 2.ed. San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia año, 1995, p. 47.

Aunque también soy de la opinión que, estos son asuntos evidenciadores, del poco trabajo realizado por los partidos políticos, con los futuros legisladores. Por ende dictamino, esta es una de las tareas pendientes de los partidos políticos. De hecho que uno de los diputados a los cuales encueste personalmente, me manifestó:

"a los partidos políticos les interesa muy poco la función, que en materia de control político llegue a desarrollar un diputado".

**4.- ¿Considera usted que la moción de censura incluida en la Constitución Política de Costa Rica, como mecanismo de control es:**

**A- Funcional**

**B- Poco funcional**

**C- Disfuncional**

**Justifique su respuesta:**

Seis, de los señores legisladores y señoras legisladoras, se pronuncian indicando, que consideran a la moción de censura incluida en la Constitución Política de la República de Costa Rica, como un instrumento funcional, para un porcentaje total del doce por ciento.

Estos diputados y diputadas, justifican su convicción, sosteniendo las siguientes razones:

Primeramente, afirman, que han obligado, a rendir cuentas a funcionarios y jerarcas públicos, asimismo, manifiestan que consideran es funcional, argumentando, que el partido de gobierno, utiliza toda clase de recursos para impedir su conocimiento.<sup>222</sup>

En cambio, una gran mayoría, treinta y tres de los señores diputados, y señoras diputadas, se pronuncian declarando, que conciben, a la moción de censura, incluida en la Constitución Política, como un instrumento de control político, que a su juicio es poco funcional, para un porcentaje del sesenta y siete por ciento de las opiniones vertidas.

---

<sup>222</sup> " Se obligó a rendir cuentas a funcionarios y jerarcas institucionales".

"Es tan funcional que el partido de gobierno, ha utilizado todo tipo de recursos para impedir su conocimiento".



Estos diputados manifiestan, que es un instrumento de control político, poco funcional infiriendo lo siguiente:

Nos manifiestan la moción de censura, para el régimen de gobierno, vigente en la República de Costa Rica, es únicamente un instrumento de control político, que proporciona como resultado, una censura moral.

Otros legisladores, aseguran que a la moción de censura, le han politizado y no hay criterios que sobrepongan, el bien común antes que la decisión de llegar a remover a un funcionario del cargo que ocupa. Además, aluden que consideran que la sanción, debería contar con algún grado de ejecutividad, ya que la censura, es necesario llegue a proporcionar, la destitución del ministro censurado.

Tratando acerca de la moción de censura en el libro, Temas Claves de la Constitución Política el doctor Carlos José Gutiérrez Gutiérrez, hace referencia al criterio de dos destacados juristas costarricenses, por considerarlas interesantes les reproduzco en este acto.

Se comenta el voto de censura en contra de los Ministros no ha llegado a adquirir verdadera importancia. Se trató de ver en él una innovación del régimen Parlamentario.

Por esta razón "Rodrigo Fació, le restó años después verdadera importancia diciendo que un indudable injerto de prácticas parlamentarias dentro de un sistema presidencial, pero que no obedecen a ninguna consideración de tipo doctrinario". También, "Eduardo Ortíz dijo: que "se trata de una institución fallida, tomada de la Constitución de Cuba de 1940.. .que debe eliminarse a la brevedad posible en bien del prestigio de las instituciones públicas".<sup>223</sup>

---

<sup>223</sup> A A. V V.

Obra citada. Op.cit. Editorial, INVESTIGACIONES JURÍDICAS S.A. septiembre del año, 1999 P. 44.

Prosiguiendo con las opiniones de los legisladores, tenemos que otro aspecto negativo, de la moción de censura al cual hacen referencia, es el relacionado, con que la misma, únicamente, puede ser aplicada a los ministros de Gobierno, y no así a otros funcionarios de alto nivel, como a los Presidentes Ejecutivos de las instituciones autónomas.

Asimismo se asegura, el voto de censura en nuestro país, carece de importancia real, debido que no contempla, mecanismos de sanción efectivos.

También, afirman los legisladores y legisladoras, el procedimiento a seguir para el conocimiento de una moción de censura, es muy entrabado y finalmente, no produce consecuencias reales. Como las que reiteradamente han venido señalando.

Otros de los diputados y diputadas, exponen, la historia ha demostrado que éste instrumento de control político, es poco funcional, por responder a intereses político partidistas.

Uno de los señores legisladores, nos asegura, la moción de censura por si sola no produce nada, pero si es acompañada por la prensa nacional, entonces sí resulta ser efectiva.<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup> "En nuestro régimen político, solo es una censura moral".

"La censura se ha politizado y no hay criterios que sobrepongan, el bien común antes que la decisión de remover un funcionario de su cargo, por intereses del país. Se nombran personas con criterios políticos y no las personas más idóneas para ejercer cargos públicos de importancia".

"Debería darse algún tipo de ejecutividad a la sanción".

"Se requiere que exija un mecanismo ágil, para que se discuta oportunamente, la censura debe conllevar la destitución del ministro".

"Sólo se aplica a los ministros de Gobierno, no así a otros funcionarios de alto nivel, como lo son los Presidentes Ejecutivos de las instituciones autónomas".

"Porque no existe, la posibilidad de remoción temporal o definitiva".

"Carece de importancia real, en la medida en que el voto de censura no contempla, mecanismos de sanción efectivos".

"Es de mera sanción política, no es obligatoria ni vinculante".

"El procedimiento para conocerla es entrabado y no produce consecuencias".

"El Reglamento de la Asamblea Legislativa, señala el procedimiento de interpelación o a través de una moción de orden. Pero, la historia ha demostrado que es poco funcional, por responder a intereses político partidistas".

"por si sola no produce nada. Pero si la prensa la acompaña es efectiva".

Finalmente diez de los señores diputados y señoras diputadas, califican a la moción de censura, dispuesta en la Constitución Política, como un instrumento de control político, que es totalmente disfuncional, para un porcentaje del veinte por ciento. Y justifican su posición afirmando lo que a continuación describimos:

Nos aseguran, es un instrumento, que jamás funciona. Pues los diputados y diputadas de gobierno, no apoyan a la moción de censura, con el objetivo de tapar las anomalías cometidas, por algún funcionario público, conjuntamente manifiestan, la moción de censura, es uno de los instrumentos de control, que produce menos efectos materiales, ya que su resultado no es vinculante para el ministro censurado, ni para el Poder Ejecutivo.

Los Legisladores y legisladoras, aclaran, esto es tan evidente y notorio, que únicamente una moción de censura se ha conseguido lograr aprobar, por parte de la Asamblea Legislativa, durante un periodo de treinta años, dicho sea de paso, como ya hemos indicado en varias ocasiones, sus efectos no son vinculantes, ni para el Poder Ejecutivo ni tampoco para el ministro que ha sido censurado por el Poder Legislativo.<sup>225</sup>

Mostramos numéricamente, los distintos grados de valoración que los señores legisladores y señoras legisladoras, han proporcionado a la moción de censura incluida en la Constitución Política de la República de Costa Rica, como instrumento de control político:

---

<sup>225</sup> "Nunca funciona, pues los diputados de gobierno, nunca apoyan esta moción, con el objetivo de tapar las anomalías cometidas, por algún funcionario de gobierno".

"No tiene efectos vinculantes, debería tenerlos".

"Solo una, se ha aprobado en treinta años".

"En toda la historia reciente, creo que solo un caso llegó hasta la moción de censura, de un ministro que dicho sea de paso, sus efectos no son vinculantes".

"Es uno de los instrumentos que produce menos efectos materiales".

"con los mecanismos de rendición de cuentas, los supremos poderes pueden y deben tomar acciones correctivas, tanto de la administración como de los funcionarios".

Moción de censura:

Alternativas		Porcentaje
Funcional	6	12%
Poco funcional	33	67%
Disfuncional	10	20%
Total	49	

Observemos estos mismos resultados pero ahora distribuidos entre los distintos partidos Políticos, representados en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica:

Fuerza Política	Opciones	Respuestas.	%. Justifican	%. No justifican
Unidad Social Cristiana	Funcional	2 = 11%	1 = 5%	1 = 5%
	Poco Funcional	12 = 63%	8 = 42%	4 = 21%
	Disfuncional	0	0	0

Fuerza Política	Opciones	Respuestas.	%. Justifican	%. No justifican
Liberación Nacional	Funcional	0	0	0
	Poco Funcional	10 = 59%	9 = 53%	1 = 6%
	Disfuncional	5 = 29%	4 = 24%	1 = 6%

Fuerza Política	Opciones	Respuestas.	% Justifican	% No justifican
Acción Ciudadana	Funcional	1 = 12.5%	1 = 12.5%	0
	Poco Funcional	5 = 62.5%	4 = 50%	1 = 12.5%
	Disfuncional	2 = 25%	2 = 25%	0

Fuerza Política	Opciones	Respuestas.	% Justifican	% No justifican
Bloque Patriótico	Funcional	1 = 17%	1 = 17%	0
	Poco Funcional	2 = 33%	2 = 33%	0
	Disfuncional	2 = 33%	2 = 33%	0

Fuerza Política	Opciones	Respuestas.	% Justifican	% No justifican
Movimiento Libertario	Funcional	2 = 40%	1 = 20%	1 = 20%
	Poco Funcional	3 = 60%	1 = 20%	2 = 40%
	Disfuncional	0	0	0

Fuerza Política	Opciones	Respuestas.	% Justifican	% No justifican
Renovación Costarricense	Funcional	0	0	0
	Poco Funcional	1 = 100%	1 = 100%	0
	Disfuncional	0	0	0

Fuerza Política	Opciones	Respuestas.	%. Justifican	%. No justifican
Auténtico Hereditario	Funcional	0	0	0
	Poco Funcional	1 = 100%	1 = 100%	0
	Disfuncional	0	0	0

De las respuestas recibidas a esta pregunta, se evidencia en forma mayoritaria, que los señores diputados y señoras diputadas, advierten a la moción de censura, como un mecanismo de control político, poco funcional. Y podríamos considerar hasta inútil, para nuestro régimen político de gobierno, esto es tan claro y evidente, si valoramos y tomamos en consideración, la opinión del sesenta y siete por ciento de los legisladores, que declaran a la moción de censura, como un instrumento de control político, poco funcional y además, a este porcentaje le añadimos, las opiniones del veinte por ciento, de los diputados y diputadas que aseguran, que la moción de censura, es un instrumento de control político disfuncional, entonces nos proporciona como resultado, que el nivel de la impopularidad de la moción de censura, como instrumento de control político, ascienda, del sesenta y siete por ciento inicial, a un ochenta y siete por ciento final.

Puede observarse de las respuestas recibidas, que los señores diputados y señoras diputadas, consideran a la moción de censura como un instrumento de control político, con muchas blanduras, porque no le encuentran más que efectos morales y políticos.

En este caso considero que tanto los diputados como las diputadas que piensan de esa manera, llevan suficiente razón en su posición, debido que en ocasiones, la discusión de la moción de censura, se produce a los pocos meses de haber iniciado el gobierno, lo cual proporciona como resultado, que el pueblo al final de la legislatura, no recuerde las razones por las cuales, se discutió la moción de censura, con mucha más razón si ésta no se llega a aprobar, que es lo que

normalmente ha ocurrido. Cuando se apela al empleo de éste instrumento de control político. Otra dificultad, que conlleva la moción de censura, en nuestro país, es que resulta ser un mecanismo de control, sumamente oneroso, económicamente para ser sostenido en una nación, pequeña y pobre, como es la República de Costa Rica, y para complicar más su inaplicación, ésta tiene limitado su empleo exclusivamente para los ministros de gobierno, lo que incrementa su poca funcionalidad, debido a que no puede ser utilizada para solicitar cuentas, de sus actuaciones a otros jerarcas del Estado. Reflexiono en este asunto, que tampoco los partidos de oposición, le sacan el provecho que podrían obtenerle, si efectuaran un control político eficaz y eficiente.

Al analizar esta pregunta, advertimos la necesidad y obligatoriedad, que tiene la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, de empezar a valorar, qué hacer con este instrumento de control político, bien podría excluirse, y cambiársele por otro que brinde mejores réditos, o en su defecto mediante una modificación constitucional, proceder a otorgarle, mayores facultades a las que actualmente contiene, con las implicaciones que esto podría llegar a tener, para el régimen de gobierno vigente en la actualidad.

Este es un aspecto, que ya los legisladores y legisladoras, mencionan en casi todas las preguntas anteriormente citadas, cuando comentan que es necesario, ampliar las facultades relativas a la moción de censura, para que en el futuro, ésta pueda ser empleada con otros funcionarios públicos, además de los ministros de gobierno. También consideran como necesario, para fortalecer el ejercicio del control político, que la moción de censura traiga en su efectividad, sanciones tales como, la caída del jerarca, que llegue a ser censurado. Debido a que creen, que la República de Costa Rica, requiere cambios estructurales, pues su modelo ha decaído y el control político necesita un nuevo concepto.

Lo que comparto, porque de no ser así, existen varios mecanismos de control político, diferentes, que son mucho más económicos y con un mayor grado de eficacia y eficiencia para el régimen de gobierno, vigente en la República

costarricense, como son; las interpelaciones o las comisiones de investigación, que podrían eventualmente culminar con que si la Asamblea Legislativa, encontrare anomalías muy graves, en el actuar de un funcionario público, pueda acordar ponerle en manos de la Corte Suprema de Justicia, para que esta proceda con su respectivo juzgamiento. Este es un aspecto a clarificar, debido a las resoluciones de la Sala Constitucional.

Con relación a la moción de censura prevista en el ordenamiento costarricense, comenta en su libro *Derecho Parlamentario Costarricense* el experimentado profesor Rubén Hernández Valle:

En la República de Costa Rica, el voto de censura conlleva varios límites:

"El primer límite consiste en que los efectos del voto de censura son meramente morales, puesto que no implica la automática caída del Ministro censurado, dado que el nombramiento y remoción de éstos es potestad exclusiva y discrecional del Presidente de la República de conformidad con lo señalado en el artículo 139 inciso 1) de la Constitución.

El segundo límite lo establece la misma norma en comentario, al prohibir los votos de censura respecto de asuntos diplomáticos en trámite o que se refieren a operaciones militares pendientes". Además, añade; "El voto de censura cabe sólo por actos inconstitucionales o ilegales o bien de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Este último concepto jurídico indeterminado es lo que permite, en la mayoría de los casos, que se presenten mociones de censura, pues, por lo general, los actos inconstitucionales o ilegales son recurridos en las vías jurisdiccionales correspondientes". <sup>226</sup>

---

<sup>226</sup> Hernández Valle, Rubén.

Obra citada. Op.cit.

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, septiembre del año, 2000, p. 461-462.



Por lo comentado por el profesor Hernández Valle, es que mayoritariamente los señores y señoras diputados, no aprecian a la moción de censura como un instrumento de control político, funcional para nuestro régimen de gobierno. Personalmente comparto esa posición, porque la moción de censura además de no tener más que efectos políticos se encuentra limitada en su acción. Además de las limitaciones mencionadas por el profesor Hernández Valle, tampoco es posible utilizarle con otros jerarcas de la administración pública costarricense, debido a que su empleo constitucionalmente está definido de forma exclusiva, únicamente para los ministros de gobierno. Lo cual considero que es una limitante más, conjuntamente la moción de censura viene a convertirse en uno de los instrumentos de control político más costosos de los existentes, lo cual es una limitante más a las ya aludidas, en razón que un país pobre y tercer mundista, no puede darse el placer de mal gastar los pocos recursos del pueblo, en la utilización de instrumentos tan costosos como la moción de censura, cuando existen otros mecanismos mucho más económicos y a mi dictamen con una mayor efectividad.

**5.- “Considera adecuado el grado de coordinación existente entre la Asamblea Legislativa y sus Entes asesores, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes?”**

**Si            No.**

**Justifique su respuesta:**

Once de los señores diputados y señoras diputadas, afirman que si aprecian, adecuado el grado de coordinación existente entre la Asamblea Legislativa, y sus dos entes auxiliares como son la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República, para un porcentaje del veintidós por ciento.

Cabe determinar, que únicamente seis de los once legisladores que opinan que realmente existe la coordinación, justifican, porqué motivos, aseguran que la coordinación opera entre esas tres entidades, para lo cual brindan las siguientes justificaciones:

Uno de estos señores legisladores afirma, quizá no exista coordinación perfecta, pero si existe alguna, con la Contraloría General de la República, ésta es menos, dado que el contralor general de la República, se subordina a fuerza política y no a los civiles.

Otro de los señores legisladores manifiesta, cada cual hace su trabajo y la información fluye entre todos.

Algún otro diputado, argumenta, sí, en mi gestión particular tengo relación expedita con los dos jerarcas, tanto el de la Contraloría General de la República, como el de la Defensoría de los Habitantes de la República.<sup>227</sup>

---

<sup>227</sup> “Quizá no haya una coordinación perfecta, pero si existe alguna coordinación, con la Contraloría General de la República, esta es menos, el contralor se subordina a fuerza política y no a los civiles”.

“Cada cual hace su trabajo y la información fluye entre todos”.

A contrario sensu, treinta y ocho de los señores diputados y señoras diputadas, nos exponen su criterio, en el cual afirman, consideran que entre la Asamblea Legislativa y sus dos órganos auxiliares, como vienen a ser la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República, prácticamente no existe coordinación, para un gran porcentaje del setenta y ocho por ciento.

Este destacado número de legisladores y legisladoras, explican sus razones, por las cuales determinan, que tanto entre la Asamblea Legislativa, superior en jerarquía, de la Contraloría General de la República, y la Defensoría de los Habitantes de la República, no exista coordinación de trabajo. Con relación a lo que hemos comentado, manifiestan lo que a continuación procedemos a destacar:

La coordinación, es deficiente, ya que no hay un sistema normativo que los amarre en minimus de coordinación, aunque cada cual conserve independencia. Para algunos diputados, esos entes, mantienen total autonomía en sus decisiones. Manifiestan la contraloría General de la República, no se percibe a veces, como un órgano asesor, sino como un ente ajeno a la Asamblea Legislativa. Por tal razón se asegura, faltan mecanismos, que permitan una coordinación permanente y efectiva. En la práctica, los instrumentos de coordinación no existen, de lo único que se dispone es de los informes que presenta la contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, informes que por cierto, a opinión de algunos legisladores, casi no se estudian, por parte de la Asamblea Legislativa.

Otros de los legisladores, nos informan, a pesar de ser la Contraloría General de la República, y la Defensoría de los Habitantes de la República, órganos auxiliares de la Asamblea Legislativa, la coordinación existente es mínima e

---

"Debe existir, sobre todo en razón de la relevancia en las funciones, que cumplen todos estos órganos que pertenecen al Poder Legislativo".

"Ahora sí, en mi gestión particular tengo relación expedita con ambos jerarcas".

incluso nula. Manifiesta, se requiere un mejor acercamiento y coordinación, para lograr una vigilancia más efectiva de la hacienda pública, ya que no existe coordinación, debido a que nunca nos reunimos para definir prioridades de trabajo.

Reproducimos parte del comentario, realizado por el consultor Rodolfo Saborío Valverde en el periódico, la Nación de Costa Rica, en la página opinión, el día siete de octubre de mil novecientos noventa y seis.

"No podemos culpar únicamente a la Contraloría General de la República por todos los desmanes ocurridos con los recursos públicos a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, el desfalco del fondo de emergencias, las estafas con el fondo de contingencias agrícolas, el asalto al Banco Anglo, las pérdidas de BICSA, las ejecuciones defectuosas de las obras públicas y tantas otras agresiones al patrimonio nacional han ocurrido sin que el guardián institucional por excelencia haya podido anticipar, evitar o lograr reparaciones por ninguno de estos ilícitos". Agrega, esto es preocupante, ya que la Contraloría es la encargada, por mandato constitucional, de velar por la integridad de la Hacienda Pública y, para cumplir con ese deber, tiene a su disposición uno de los equipos profesionales mejor calificados en el campo del control, presupuestario y la auditoría. Hay gran cantidad de leyes que lesionan el patrimonio público..... También comenta el doctor Saborío Valverde, resulta violatorio de la Constitución el traslado de fondos de entes públicos a dependencias ministeriales sin contar con la aprobación legislativa. Esta situación quebranta el control político que debe ejercerse sobre el gasto público. Qué hará la Contraloría ante todas estas normas? En fin, el ciudadano espera que los resultados de los informes de la Contraloría dejen de tener ese tinte arqueológico, que hace que la irregularidad se descubra años después, cuando ya no queda nada por hacer. Debe superarse el inacabable debate entre el control previo y el control posterior, para dar paso a medidas efectivas....<sup>228</sup>

---

<sup>228</sup> Artículo en el periódico, la nación de Costa Rica, página opinión

Otros diputados y diputadas, afirman, que la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República, mantienen la agenda de su jerarca como prioridad, y sostienen una escasa conexión directa, con su superior o sea con la Asamblea Legislativa. Aunque, para algunos de los legisladores, la Asamblea Legislativa tampoco potencia el uso de esos recursos, y reflexionan, indicando debería haber opinión de ambas dependencias, en la Asamblea Legislativa.

Otros diputados, más bien afirman, no existen acciones preventivas, siempre se produce la acción al calor de los acontecimientos.

En esta tabla representamos numéricamente, como entienden los señores legisladores y señoras legisladoras, se desarrolla la coordinación:

Considera adecuada la coordinación entre la Asamblea y sus entes auxiliares					
Si	No	Justifican el si	Justifican el no	Porcentaje	Total
11	38	6	30	78%	49

Observemos estos mismos resultados pero ahora distribuidos entre los distintos partidos Políticos, representados en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica:

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Unidad Social Cristiana	Si	3 = 16%	1	5%	2 = 11%
	No	11 = 58%	9	47%	2 = 11%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Liberación Nacional	Si	3 = 18%	2	12%	1 = 6%
	No	12 = 71%	10	59%	2 = 12%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Acción Ciudadana	Si	2 = 25%	2	25%	0
	No	6 = 75%	5	62.5%	1 = 12.5%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Bloque Patriótico	Si	0	0	0	0
	No	5 = 83%	5	83%	0

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Movimiento Libertario	Si	1 = 20%	0	0%	1 = 20%
	No	4 = 80%	2	40%	2 = 40%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Renovación Costarricense	Si	1 = 100%	1	100%	0
	No	0	0	0	0

fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Auténtico	Si	0	0	0	0
Hereditario	No	1 = 100	1	100%	0

De la diversidad de respuestas obtenidas a esta pregunta, nos podemos dar cuenta, que el grado de coordinación existente entre la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, con sus dos órganos auxiliares; Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes, se evidencia como muy deficiente, e incluso podríamos pensar que crítica.

Los señores legisladores y señoras legisladoras, que consideran que existe la coordinación, argumentan su posición, en ocasiones hasta en forma contradictoria. Por un lado, nos señalan que subsiste coordinación entre estas tres entidades, luego manifiestan que con la Contraloría General de la República es menos, lo que nos viene a demostrar, que tal coordinación es prácticamente inexistente, de la forma tan contradictoria, en la cual se apoyan para justificarle.

Más preocupante, es comprobar, que de los cuarenta y nueve señores diputados y señoras diputadas, que respondieron la encuesta de opinión, treinta y ocho de los mismos, reconocen la grave problemática, de la no existencia de coordinación, entre estos tres órganos, que son vitales para el buen funcionamiento del Estado costarricense.

Respecto de estos dos Órganos auxiliares de la Asamblea Legislativa, el doctor Alex Solís Fallas nos aporta lo siguiente:

“La Contraloría General de la República es un órgano constitucional, concebido como una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa para la vigilancia de la Hacienda Pública; pero con absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores”. Además, este órgano especializado de control

está a cargo de un Contralor y un Sub-contralor, de nombramiento de la Asamblea Legislativa para un período de ocho años y estos funcionarios gozan de las mismas inmunidades y prerrogativas que tienen los miembros de los supremos poderes. Las funciones ejercidas por la Contraloría están enmarcadas en su Ley Orgánica y la Constitución Política. las relaciones entre la Asamblea Legislativa y la Contraloría se expresan mediante actos de control y asistencia recíproca. A la Asamblea le corresponde entre algunas de las funciones:

Emitir las leyes que regulan la competencia de esa Institución, nombrar y remover al Contralor y Sub-contralor, así como revisar los informes periódicos y la memoria que el órgano contralor debe presentarle cada año.

Mientras que al órgano contralor le corresponden importantes funciones de asistencia y asesoría en materias relativas a la Hacienda Pública, así como ejercer el control jurídico contable de la actividad financiera del Poder Legislativo.<sup>229</sup>

La Defensoría de los Habitantes de la República nació como un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, pero con absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores. La Defensoría está a cargo de un funcionario nombrado por la Asamblea Legislativa, por mayoría absoluta de los diputados presentes y para un período de cuatro años. La Defensoría de los Habitantes debe rendir cuentas, mediante un informe anual, que deberá ser presentado y defendido por su titular ante el Plenario de la Asamblea Legislativa.

El ámbito de acción de la Defensoría de los Habitantes es sumamente amplio. Primero, esta institución es la encargada de proteger los derechos e intereses de los habitantes. La ley no define cuáles derechos, razón por la cual se ha interpretado que son todos los regulados en la Constitución Política. También a. Segundo a la Defensoría le corresponde velar porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes,

---

<sup>229</sup> Solís Fallas Alex.

Obra citada. Op.cit. /Alex Solís Fallas, San José, CONAMAJ, año, 2000, p. 103-104.



los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del derecho. De acuerdo con lo anterior, la Defensoría es un contralor de constitucionalidad, de legalidad y moralidad en el ejercicio de la función pública.....<sup>230</sup>

A nuestro juicio, en especial, la Contraloría General de la República, por sus funciones tan especializadas, es evidente y obligatorio que mantenga una estrecha coordinación con la Asamblea Legislativa, coordinando prioridades de trabajo, para que el primer Poder de la República, se encuentre informado, de lo que esta ocurriendo en la República costarricense; y cuando le aprecie necesario, pueda tomar la decisión de intervenir en cualquier asunto, que considere absolutamente oportuna su intervención.

También por el fundamental trabajo que en nuestro país, desarrolla, la Defensoría de los Habitantes de la República, es casi imperdonable que no existan mecanismos propios de coordinación y control, entre esta entidad y la Asamblea Legislativa, por lo que se hace urgente, buscar los medios, que corrijan esta gravísima y crítica problemática, en aras, que no se llegue a complicar en un corto plazo, con los sabidos perjuicios para la democracia de la República de Costa Rica.

Considero que para no duplicar funciones y optimizar el uso de los recursos, la coordinación a establecer debe incluir a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes, conjuntamente con la Asamblea Legislativa, o sea, que ésta coordinación, debe ser algo que las incluya a todas, para que la Contraloría General de la República, pueda ser alimentada de la información que esta fluyendo o emanando de la Defensoría de los Habitantes.

---

<sup>230</sup> Solís Fallas, Alex.

Obra citada. Op.cit. /Alex Solís Fallas, San José, CONAMAJ, año, 2000, p. 104-105.

El doctor Rodolfo Saborío Valverde comenta en el periódico la nación de Costa Rica, en la página opinión del diecisiete de octubre del dos mil cuatro, en donde indica:

Fracaso del control. La Contraloría debe ser órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa

"Si una cosa ha quedado en evidencia con las trascendentes investigaciones periodísticas de los últimos meses, complementadas con la oportuna respuesta del Ministerio Público, es el absoluto fracaso de los mecanismos ordinarios de control de la Hacienda Pública". Añade, De una Asamblea Legislativa en una pendiente de desprestigio acelerado, incapaz de diseñar su organización interna de manera que se racionalice el control político, a una Contraloría General de la República absorbida por lo banal y las pesquisas arqueológicas, no podemos menos que concluir en la urgente necesidad de introducir ajustes institucionales que permitan restablecer el papel que dichos órganos están llamados a cumplir..... En síntesis, es necesario reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa para que la función de control político se asuma como una actividad permanente y especializada de las comisiones legislativas, no como algo casuístico y reactivo ante situaciones ya consumadas....<sup>231</sup>

De estos comentarios puedo definir, que muchos de los problemas se derivan no del control político, si no de otro tipo de controles tales como los contables o jurídicos. Quizá, el defecto del control parlamentario, radica, en no hacer la presión necesaria en la población y en los legisladores para regular y normar apropiadamente las carencias, descubiertas para que las mismas no sigan ocurriendo.

---

Artículo en el periódico, la nación de Costa Rica, página opinión

Fracaso del control.

La Contraloría debe ser órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa

[http://www.nacion.com/ln\\_ee/2004/octubre/17/opinion7.html](http://www.nacion.com/ln_ee/2004/octubre/17/opinion7.html)

## **6.- "Qué entiende usted cuando se habla de control político, como lo debe ejercer la Asamblea Legislativa?**

### **Explique su respuesta:**

En esta pregunta, cuarenta y uno de los señores legisladores y señoras legisladoras, manifiestan lo que entienden como control político, para un gran porcentaje del ochenta y cuatro por ciento.

En cambio ocho de los señores diputados y señoras diputadas, no le responden, para un dieciséis por ciento.

Como el objetivo de esta pregunta, es verificar, como entienden el control político los señores diputados y señoras diputadas, y como creen, debe desarrollarle la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, ofrecemos unas cuantas de las definiciones, que recolectamos a través de la encuesta de opinión.

Uno de los señores legisladores, nos dice que entiende al control político como: La potestad legislativa, de exigir rendición de cuentas a otros órganos en aspectos, relativos al cumplimiento de deberes y adecuado uso de los bienes públicos.

Otro señor diputado nos indica que concibe al control político, como: El ejercicio de una de las funciones de la Asamblea Legislativa, dirigida a controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo y Judicial, para mantener el equilibrio entre los poderes de la República, necesario en un país democrático.

Otro señor legislador, dice entenderle como:

El control político parlamentario, consiste en la actividad de verificación y formación de opinión y denuncia de los diferentes actos, de las entidades públicas y privadas en la administración de los intereses de la colectividad.

Mientras para otros señores diputados y señoras diputadas, el control político consiste en:

La fiscalización de las acciones, de funcionarios y sus instituciones. Indican la Asamblea Legislativa, lo debe ejercer, como lo está haciendo cada diputado en forma individual, pero también en comisiones investigadoras.

En cambio, otro señor legislador proporciona la siguiente definición:

Manifiesta entender al control político: como una función de naturaleza política, realizada por la Asamblea Legislativa, con efectos o consecuencias políticas, tan importante, como la función legisladora propiamente dicha.

Para otro de los señores diputados, el control político, es:

La valoración y la investigación, que hace la Asamblea Legislativa, sobre órganos del Estado e instituciones, así como de sus jerarcas, y la política pública.

Finalmente, ofrecemos una última visión o definición sobre el control político, de las muchas recibidas de parte de los señores legisladores y señoras legisladoras, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Este último señor diputado nos expone que le entiende como:

La potestad que tienen los señores diputados y las señoras diputadas, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, para velar por el correcto funcionamiento, de los otros poderes del Estado, en el marco del sistema de pesos y contrapesos, detectando y denunciando, actos de corrupción o que atenten contra la buena marcha del estado costarricense, en los márgenes del cumplimiento constitucional.<sup>232</sup>

---

<sup>232</sup> "El control político, es una función de naturaleza política, realizada por la Asamblea Legislativa con efectos o consecuencias políticas y que es tan importante, como la función legisladora propiamente dicha".

"rendición de cuentas a otros órganos en aspectos relativos al cumplimiento de deberes y adecuado uso de los bienes públicos".

"El control político, es la valoración y la investigación, que hace la Asamblea sobre órganos del Estado e instituciones, así como sus jerarcas, sobre la política pública".

También introducimos tres definiciones de doctrinarios del Derecho, para que se pueda comparar con las precedentemente citadas.

Para Alex Solís Fallas el control político parlamentario se puede definir como:

"Como la actividad formal e informal que lleva a cabo el Poder Legislativo con el propósito de determinar si las acciones del Poder Ejecutivo órganos y entes públicos, así como la de sus titulares, se adecúan al ordenamiento jurídico, al respeto por la ética en el ejercicio de la función pública y otros mandatos fundados en la voluntad popular". <sup>233</sup>

---

"Es el ejercicio de una de las funciones de la Asamblea Legislativa, dirigida a controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo y Judicial, para mantener el equilibrio entre los poderes de la República, necesario en un país democrático".

"Entiendo que el control político parlamentario, consiste en la actividad de verificación y formación de opinión y denuncia de los diferentes actos de las entidades públicas y privadas en la administración de los intereses de la colectividad".

"Un adecuado control político, serio y eficaz en que el beneficio directo sea el ciudadano – es sin duda el necesario. La actual forma de hacer política, en lo que se excluyen los intereses nacionales, conspiran para lograr tal propósito".

"Como la vigilancia y control sobre el Estado, para que cumpla sus obligaciones constitucionales y legales".

"Es la fiscalización de las acciones, de funcionarios y sus instituciones. La Asamblea lo debe ejercer, como lo está haciendo cada diputado en forma individual, pero también en comisiones investigadoras".

"Es el control sobre la actividad de la Administración Pública en general".

"Respuesta pronta de denunciar, irregularidades y desviación de la administración. Pedir transparencia y rendición de cuentas".

"Ejercer representación y efectiva vigilancia, de los intereses de los ciudadanos hacia su administración".

"Una efectiva investigación de tanto actos de corrupción, así como acciones de despilfarro, ineficiencia y pobre atención al público de instituciones gubernamentales".

"Se refiere a la potestad que tienen las y los legisladores, así como la Asamblea Legislativa, para velar por el correcto funcionamiento de los otros poderes del Estado en el marco del Sistema de pesos y contrapesos, detectando y denunciando actos de corrupción o que atenten contra la buena marcha del estado costarricense, en los márgenes del cumplimiento constitucional. En general se ha ejercido contra personas y se convierte, en una especie de cacería de brujas, que no prosperan en las sanciones ni en el mejoramiento institucional. A mi parecer, y con algunas excepciones, no ha dado los frutos que se esperaban, de igual forma sucede con las comisiones investigadoras".

"Potestad de los diputados de investigar y analizar y denunciar hechos que en la función pública atentan contra el ordenamiento jurídico y moral".

"Es el control que ejerce la Asamblea Legislativa, sobre los recursos públicos, y como se utilizan estos. Que resultados se obtienen o no. Esto incluye las investigaciones, sobre actos de gobierno. Control a los demás poderes".

"En términos generales, es la operación que lleva a cabo el parlamento, para determinar si los gobernantes y funcionarios públicos, ajustan o no su política con el ordenamiento jurídico. La eficacia, eficiencia y la moral".

<sup>233</sup> Solís Fallas, Alex.

En cambio para el Doctor Hugo Alfonso Muñoz Quesada, citado en el libro Temas Claves de la Constitución Política, de A A V V; le debemos entender como:

"El conjunto de instrumentos políticos y jurídicos del poder legislativo tendientes a fiscalizar la actividad de gobierno". <sup>234</sup>

Mientras que para el catedrático español, doctor Francisco Rubio Llorente, debe ser entendido como:

"El procedimiento o conjunto de procedimientos que la representación popular emplea para verificar si la acción del Gobierno se acomoda o no a su criterio y exigir, en caso de que el examen resulte negativo, la responsabilidad del Gobierno o, lo que es lo mismo, imponer su cese". <sup>235</sup>

En esta pequeña tabla, resaltamos los porcentajes emanados de las respuestas de esta pregunta:

Dan concepto porcentaje	No responden porcentaje
41 / 84%	8 / 16%

Como podemos visualizar, de las respuestas recibidas a esta pregunta, vemos que tanto los señores diputados y señoras diputadas, mantienen un aceptable conocimiento, de lo que significa el concepto del control político o parlamentario. Teóricamente nos aportan buenas definiciones, aunque en algunas oportunidades, comentan situaciones que no mantienen una relación directa con la definición solicitada. Pero en términos reales, sus definiciones son

---

Obra citada. Op.cit. /Alex Solís Fallas, San José, CONAMAJ, año, 2000, p. 94.

<sup>234</sup> Hernández Valle, Rubén.

Obra citada. Op.cit. Editorial, Investigaciones Jurídicas, S. A. Abril del año 1999, p. 105.

<sup>235</sup> Rubio Llorente, Francisco.

Obra citada.op.cit, Centro de Estudios Constitucionales 2º edición Madrid, año, 1997, p. 214.

bastante ajustadas, a lo que la doctrina, generalmente suele conceptualizar como control político o parlamentario.

Lo que sí, nos quedo evidenciado, de las respuestas a la pregunta que analizamos, es que la misma, fue contestada de manera parcial, o sea que exclusivamente nos respondieron la mitad de la pregunta, ya que nos brindaron la definición requerida, pero la segunda parte de la pregunta que interrogaba, la forma en la cual consideraban que la Asamblea Legislativa, debía desarrollar el control político, prácticamente no fue evacuada por los señores diputados y señoras diputadas, y los poquísimos, que le llegaron a responder, lo hicieron de una forma sumamente escueta y poco convincente. Esto lamentablemente, no nos permite conocer cual es el pensamiento, que al respecto mantienen los legisladores y legisladoras. Y en consecuencia produce un desconocimiento, de la forma en que se debe desempeñar una función tan vital y preponderante, para mantener informado al pueblo costarricense, como están funcionando a lo interno, las diferentes instituciones públicas del Estado. Esto sin tomar en consideración, que no quedan expuestas las actividades, que se estén asumiendo, ya sea de forma preventiva o correctivas, para hacer más eficaz y eficiente el desempeño del control político desarrollado por parte de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Por tanto, esta es una laguna que nos produce esta pregunta y nos impide evaluar con total propiedad el criterio de los señores legisladores y señoras legisladoras, de la forma en que consideran debe ser realizada por parte de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, la función de control político, explorada mediante lo que consultábamos a través del planteamiento de esta pregunta, subdividida en dos apartados. Que como pudimos observar las contestaciones se centraron exclusivamente en darnos, el significado relacionado con lo que comprendían como control político.

**7.- Señale los principales aspectos en orden de importancia que pueden entorpecer la labor del control político. Marque la respuesta en orden de importancia**

**A- Los partidos políticos**

**B- Presión del Poder Ejecutivo**

**C- Presión de los empresarios privados**

**D- Desconocimiento de como realizar esta labor contralora**

**E- Intereses personales**

**F- Negativa o entorpecimiento a entregar información por parte de las instituciones públicas.**

Las respuestas que los señores diputados y señoras diputadas, brindaron a los diferentes ítems, que se evalúan en esta pregunta, fue sumamente variada, como podrán advertir, de las alternativas seleccionadas, por los distintos legisladores.

La alternativa, que con mayor frecuencia, fue preferida para determinarle como el factor, que mayoritariamente puede estar entorpeciendo, el buen desarrollo del ejercicio de la función del control político, la debemos presentar en dos formas:

Primeramente fue mencionado por los señores legisladores y señoras legisladoras, como el factor que mayoritariamente puede venir a entorpecer el ejercicio del control político, a la negativa o entorpecimiento a entregar información por parte de las instituciones públicas. Éste factor fue aludido por los legisladores en treinta y nueve ocasiones, para un porcentaje del ochenta por ciento.

En cambio cuando agrupamos las respuestas por grado de preferencia o prioridad, el factor que entonces llega a ocupar el primer lugar se modifica, y



cambia, pasando a ocupar entonces ese lugar, la presión que se recibe de parte de los partidos políticos, el agente que en forma mayoritaria es mencionado por los señores diputados y las señoras diputadas. Citándose en quince ocasiones este factor para un porcentaje del treinta y uno por ciento.

Treinta y seis de las respuestas recibidas, de parte de los legisladores y legisladoras, identifican, como el segundo factor que prioritariamente puede obstaculizar, la función del control político, lo identifican, se origina en los intereses personales, para un porcentaje del setenta y tres por ciento. Asimismo, en la elección individualizada, este factor fue marcado como una segunda opción con diez votos, para un porcentaje del veinte por ciento.

Cabe destacar que como tercer factor que entorpece el buen desempeño del ejercicio del control político, fue identificado el desconocimiento, que tanto los señores diputados como las señoras diputadas, mantienen del cómo desarrollar la función contralora. Éste elemento se menciona treinta y tres veces, para un porcentaje del sesenta y siete por ciento. Y en la forma preferencial, se alude durante diez oportunidades, para un porcentaje del veinte por ciento.

Como cuarto factor, que viene a entorpecer la función de control político, fue identificada en treinta y dos ocasiones, la presión que reciben los diputados y diputadas, de parte del Poder Ejecutivo de la República, para un porcentaje del sesenta y cinco por ciento. Y en forma preferencial, recibió nueve votos para un porcentaje del dieciocho por ciento.

Finalmente el factor, que menos fue aludido por los legisladores, como entorpecedor, de la función contralora es la presión que proviene hacia los legisladores, de los empresarios privados, este ítem únicamente fue marcado en veintidós oportunidades, para un porcentaje del cuarenta y cinco por ciento. Y en forma preferencial, solo una vez fue citada.

Representamos en esta tabla, numéricamente los resultados explicados, precedentemente, a introducir nuestro análisis de esta pregunta.

Factores que entorpecen la función de control político:

Grado de valoración	# de respuestas	Orden de importancia
Partidos Políticos	26 = 53%	15
Presión del Poder Ejecutivo	32 = 65%	9
Presión de los empresarios privados	22 = 45%	1
Desconocimiento de como realizar esta función contralora	33 = 67%	10
Intereses personales	36 = 73%	10
Negativa o entorpecimiento a entregar información por parte de las instituciones públicas	39 = 80%	5

Observemos estos mismos resultados pero ahora distribuidos entre los distintos partidos Políticos, representados en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica:

Fuerza política	Grado de valoración	# de respuestas
Unidad Social Cristiana	Partidos políticos	8 = 42%
	Presión del Poder Ejecutivo	6 = 32%
	Presión de los Empresarios Privados	5 = 26%
	Desconocimiento de cómo realizar función contralora	10 = 53%
	Intereses personales	10 = 53%
	Negativa a entrar información por instituciones públicas	10 = 53%

Fuerza política	Grado de valoración	# de respuestas
Liberación Nacional	Partidos políticos	5 = 29%
	Presión del Poder Ejecutivo	12 = 71%
	Presión de los Empresarios Privados	9 = 53%
	Desconocimiento de cómo realizar función contralora	8 = 47%
	Intereses personales	11 = 65%
	Negativa a entregar información por instituciones públicas	12 = 71%

Fuerza política	Grado de valoración	# de respuestas
Acción Ciudadana	Partidos políticos	6 = 75%
	Presión del Poder Ejecutivo	6 = 75%
	Presión de los Empresarios Privados	6 = 75%
	Desconocimiento de cómo realizar función contralora	6 = 75%
	Intereses personales	7 = 87.5%
	Negativa a entrar información por instituciones públicas	7 = 87.5%

Fuerza política	Grado de valoración	# de respuestas
Bloque Patriótico	Partidos políticos	5 = 83%
	Presión del Poder Ejecutivo	4 = 66%
	Presión de los Empresarios Privados	4 = 66%
	Desconocimiento de cómo realizar función contralora	5 = 83
	Intereses personales	4 = 66%
	Negativa a entregar información por instituciones públicas	4 = 66%

Fuerza política	Grado de valoración	# de respuestas
Movimiento Libertario	Partidos políticos	3 = 60%
	Presión del Poder Ejecutivo	4 = 80%
	Presión de los Empresarios Privados	2 = 40%
	Desconocimiento de cómo realizar función contralora	3 = 60%
	Intereses personales	4 = 80%
	Negativa a entrar información por instituciones públicas	6 = 120%

Fuerza política	Grado de valoración	# de respuestas
Renovación Costarricense	Partidos políticos	
	Presión del Poder Ejecutivo	
	Presión de los Empresarios Privados	
	Desconocimiento de cómo realizar función contralora	1 = 100%
	Intereses personales	
	Negativa a entrar información por instituciones públicas	

Fuerza política	Grado de valoración	# de respuestas
Auténtico Herediano	Partidos políticos	1 = 100%
	Presión del Poder Ejecutivo	
	Presión de los Empresarios Privados	
	Desconocimiento de cómo realizar función contralora	
	Intereses personales	
	Negativa a entregar información por instituciones públicas	

Es sumamente preocupante, conocer de parte de los señores diputados y señoras diputadas, que una causa mayoritaria, para no poder ejercer un efectivo y eficiente control político, se produzca en la negativa o entorpecimiento de las instituciones públicas de entregar, informaciones a la Asamblea Legislativa, más cuando, ésta es una de sus obligaciones ineludibles, y mediante las cuales se revela la transparencia, de las actuaciones, a través de las que deben estar operando, las instituciones públicas, las cuales se les requiere la información por parte de nuestra Asamblea Legislativa.

Como hemos aludido, anteriormente, ha sido comentado por los señores diputados y las señoras diputadas, en preguntas precedentemente descritas, la problemática que deben enfrentar, con la negativa que reciben de las instituciones públicas, a brindar informaciones para un efectivo control político.

Por tal motivo, visualizo absolutamente necesario que la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, se establezca como una tarea prioritaria y urgente, establecer y aprobar instrumentos de control político, que sean eficaces, eficientes y adecuados, para que las entidades públicas de ninguna

manera puedan entorpecer, ni negarse a cumplir con su obligación y deber de suministrar la información que por parte del congreso, les llegue a ser requerida en determinado momento.

Un aspecto que llama la atención, y hasta preocupa bastante, es la escogencia mayoritaria que obtuvo uno de los ítems, que considera como un factor limitador, de un buen ejercicio del control político, a los intereses particulares, porque esto, nos esta indicando, que los llamados padres de la patria, están contraponiendo sus intereses personalistas al bien común o sea, al del pueblo, que es obligación suya tener como un estandarte, y defender a capa y espada incluso, cuando esto les conlleve el perjuicio de sus propios beneficios.

En general advertimos, que los señores diputados y señoras diputadas, se encuentran sometidos a diferentes niveles de presión, cuando deben ejercer la preponderante y vital función de control político, debido a que como ya nombramos precedentemente, también reciben presiones, tanto del Poder Ejecutivo como de los dirigentes de los partidos políticos nacionales.

El aspecto más positivo, de la selección de esta pregunta, es el relacionado con la presión que determinan los señores diputados y señoras diputadas, recibe la Asamblea Legislativa, por parte de los empresarios privados del país. Porque aunque en este campo, se muevan muchos y diferentes intereses, el elemento relacionado con la presión de los empresarios privados, fue el que ocupó en la escogencia de los diputados, la última posición, lo que nos viene a satisfacer, porque este acontecimiento viene a fortalecer y acrecentar la confianza que tiene todo el pueblo costarricense en su régimen político democrático.

## **8.- ¿cómo considera que se pueden mejorar los instrumentos de control político?**

### **Explique:**

De las respuestas a esta pregunta, encontramos varias proposiciones bastante interesantes, que si se llevaran a la práctica, verdaderamente fortalecerían al ejercicio del control político, que debe ser desempeñado, por nuestra Asamblea Legislativa.

Cuarenta de los señores diputados y señoras diputadas, mencionan algún tipo de recomendación, tendiente a llegar a mejorar los instrumentos de control político, para un porcentaje del ochenta y dos por ciento.

Entre algunas de las principales alternativas, mencionadas por los señores legisladores y señoras legisladoras, nos permitimos destacar las que apreciamos más atrayentes:

Un grupo muy mayoritario, de señores diputados y señoras diputadas, aluden que para hacer más efectivo el control político, se requieren modificaciones constitucionales, pero en lo que prioritariamente insisten, es en la necesidad, que tiene la Asamblea Legislativa, de llegar a modificar su Reglamento Legislativo.

A contrario sensu, varios de los señores diputados y señoras diputadas, consideran necesario, en primer lugar, fortalecer la coordinación existente entre la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes de la República y la propia Asamblea Legislativa. En segundo término, asignarles mayores recursos económicos, para que puedan desempeñar las funciones, para las cuales han sido creadas.



Con relación a esta situación, me permito comentar sobre una tercera opción, la cual es tan necesaria e importante, como contar con los recursos económicos y humanos. Estoy haciendo referencia a la situación que enlazada con las dos anteriores, realmente si fortalecería el funcionamiento y trabajo, tanto de la Contraloría General de la República, como el de la Defensoría de los Habitantes de la República, y esto consiste, en llegar a otorgar a ambas, mayores facultades legales, porque muy poco pueden hacer estas instituciones, si se encuentran amarradas en limitaciones derivadas de la misma legislación vigente en la nación.

En cambio, para otro grupo de señores legisladores y señoras legisladoras, para poder llegar a fortalecer y hacer eficiente y eficaz el ejercicio del control político, es necesario que en el país, se llegue a realizar una asamblea constituyente.

En cambio otro señor diputado aprecia, que para poder hacer efectivo y eficiente, el ejercicio del control político, en la nación costarricense, es necesario, que en ésta se llegue, a tomar la decisión de modificar su régimen de gobierno actual, y le sea cambiado por un régimen político, semi parlamentario.

Otro de los señores legisladores, mira la solución en una reducción del tamaño del estado, ya que manifiesta, con esta acción se podrá hacer, una mejor labor de control político, pues afirma habrían, mucho menos instituciones, que tener que proceder a controlar.

Para otro señor diputado se requiere, eliminar la inmunidad a los legisladores para que cuando ejerzan el uso de la palabra en el plenario, lo realicen de forma respetuosa y responsable.

Algún otro señor diputado, nos habla, de la necesidad que existe en el país, de llegar a constituir, un sistema efectivo de rendición y medición de resultados.

Me cuestiono al respecto; será esto lo que requieren la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa para mejorar su nivel de coordinación?

La última recomendación, a la cual nos vamos a referir es la que sugiere, operacionalizar en la Constitución Política, una línea ochocientos gratuita, que venga a servir al pueblo, para que éste, pueda interponer quejas y denuncias, en la oficina de atención popular, existente para estos efectos en la Asamblea Legislativa de la república de Costa Rica.<sup>236</sup>

---

<sup>236</sup> " Creando los instrumentos de control político, en la Constitución Política, y en el reglamento Legislativo",

"Debe existir una reforma constitucional, para mejorar el Reglamento Legislativo".

"Mediante reformas constitucionales, y al Reglamento de la Asamblea Legislativa costarricense".

"Operacionalizandoles en la Constitución política, línea ochocientos, para quejas, de los ciudadanos, en la oficina de atención popular".

"Mediante reformas legales, incluyendo reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa, que permita a los diputados, y diputadas contar con mecanismos de sanción, a la hora de llamar a cuentas, a funcionarios públicos. Además de procurar una real independencia de poderes, dejando de lado el interés político, a la hora de controlar la labor del Poder Ejecutivo".

"A través de reformas al Reglamento Legislativo, y mecanismos de sanción".

"Reformas al Reglamento Legislativo del parlamento".

"Reformas al Reglamento Legislativo, agilizar procedimientos; establecer mayores consecuencias y recursos".

"Desentramando el quehacer legislativo, de LA Asamblea Legislativa, y dedicando un mayor tiempo al control político".

"Fortaleciendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes de la República, sus reuniones, dándoles más presupuesto".

"Coordinación directa entre la Contraloría General de la República, y la Defensoría de los Habitantes, con los diputados".

"Coordinación, entre la Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes de la República, y la Contraloría General de la República".

"Mayor coordinación entre los órganos de control, establecidos en el Estado".

"Mediante una Constituyente; por ahora, sería necesario una legislación, más acorde".

"Avanzando hacia un régimen político, semi parlamentario".

"Estableciendo más facultades para llamar o traer información".

"Con una mayor participación ajena a intereses personales, y formación de debates nacionales, con soluciones a los problemas".

"Que los medios periodísticos sean más objetivos e imparciales".

"Evaluación cívica política, patriotismo, ética y moral en la función pública".

"Eliminando la inmunidad a los diputados, para que ejerzan el uso de la palabra en forma responsable".

"Creando un sistema efectivo de rendición y medición de resultados".

"Estableciendo procedimientos claros y concretos en relación con el tema, incentivando la denuncia ante posibles irregularidades que se cometan".

"Estableciendo como principio general de la actuación de los órganos públicos, la transparencia administrativa, posibilitando siempre su pleno ejercicio".

Todas las recomendaciones, mencionadas y otras más que no comentamos, porque ya se hacen demasiado extensas en el desarrollo de este documento, pero que si se requirieran analizar en mayor profundidad, estamos incorporándoles a pie de pagina. Porque pensamos, éstas recogidas en un documento, en el cual se estudien y analicen a profundidad, podrían muy bien llegar a convertirse en un instrumento, que daría un real y eficaz medio vitalizador del control político. Con mucha más razón, si observamos, que prácticamente, casi en todo el desarrollo de todas las preguntas de la encuesta de opinión, las deficiencias aludidas se vienen reiterando constantemente en las distintas respuestas recibidas, tanto de los señores diputados como de las señoras diputadas.

Por tal razón creo, este es un asunto muy importante a no descuidar y tomar en consideración por los señores legisladores, a la hora de llegar a evaluar las deficiencias enmarcadas. Ya que son ellos mismos, quienes tienen que luchar con las mismas diariamente, por medio del trabajo que les compete cumplir, como diputados electos a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Cuando les compete, ejercer sobre el gobierno de la República, la preponderante función de control político, ya que éste es un pilar fundamental, en el sostenimiento de cualquier democracia, por ende la responsabilidad que se tiene para desarrollarle, de forma eficaz y eficiente.

---

"Anteponiendo los intereses nacionales a los intereses partidarios, generando mayor participación ciudadana en el control político".

"Educando a los diputados sobre los problemas nacionales".

"Con rendición de cuentas, principalmente".

"Creando espacios de debate".

"Promoviendo la ética en los partidos políticos".

"Con un sistema de partidos políticos fuertes, consolidados, con ideologías claras, con capacitación y generación permanente de ideas".

"Con menor proyección electoral, fortaleciendo algunas instituciones y pidiendo cuentas a funcionarios y representantes".

"Mayores facultades y más posibilidades de exigir coercitivamente la presencia de personas o pruebas".

"Primero, siendo más beligerantes en el plenario, y dando más tiempo a cada diputado en los momentos del control político".

También me permito incorporar, una propuesta comentada en el periódico la nación de Costa Rica, por el doctor Rodolfo Saborío Valverde. al respecto indica:

"Una de las tareas fundamentales de los representantes populares es ejercer control permanente sobre la buena marcha del conjunto del sector público. Los mecanismos y procedimientos por los que esta función se ejerce se encuentran totalmente desajustados a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas que deben prevalecer en un Estado democrático moderno". Además manifiesta; "el origen se encuentra en el Reglamento de la Asamblea Legislativa y más específicamente en la obsoleta distribución de comisiones que impera en la actualidad. Aparte de existir un número desproporcionado de comisiones, que saturan de trabajo a los legisladores, no responden a una distribución sistemática de la labor de innovación legislativa y mucho menos a las funciones de control que en muchas ocasiones se asignan a comisiones especiales, acrecentando la dispersión y la ineficiencia. Agrega, "Es necesario que se rediseñen por completo las comisiones, de modo que respondan a criterios sistemáticos de especialización de funciones, lo que permitirá la racionalización del tiempo de los diputados y un incremento en la calidad del trabajo"..... Concluye indicando, "lo propuesto supone un cambio profundo en la forma en que se asume el control político en nuestro país, pero es el resultado lógico de un cambio sustancial en las reglas de juego que los mismos ciudadanos se han encargado de establecer mediante la superación del bipartidismo y la composición multipartidista de la Asamblea Legislativa. La sociedad exige un Congreso más eficiente y vigilante de los asuntos públicos y esto no se puede alcanzar con las regulaciones vigentes". <sup>237</sup>

---

<sup>237</sup> Artículo en el periódico, la nación de Costa Rica, página opinión.

Control parlamentario

Rendición de cuentas permanente

[http://www.nacion.com/ln\\_ee/2002/mayo/23/opinion4.html](http://www.nacion.com/ln_ee/2002/mayo/23/opinion4.html)

**9.- "Considera usted que la República de Costa Rica, esta sometida o al menos influida por el fenómeno partidocrático?"**

**Si No**

**Justifique su respuesta**

Treinta y cinco de los señores diputados y señoras diputadas, nos responden la pregunta indicando, que consideran como una realidad la influencia del fenómeno partidocrático, en la República de Costa Rica, para un porcentaje del setenta y uno por ciento.

Los señores legisladores y señoras legisladoras, justifican su posición de la influencia de los partidos políticos, en la República costarricense, manifestando lo siguiente.

Algunos de los señores diputados y señoras diputadas, proceden a comentarnos que, los dirigentes principales de los partidos políticos, aún mantienen mucha ingerencia, a la hora que se van a realizar nombramientos de jerarcas importantes, en razón de que manejan mucho poder, sobre los diputados y diputadas.

Otro de los señores legisladores afirma, esta influencia si existe, pero la misma, afortunadamente, se advierte ha venido degenerando en los últimos años.

Uno de los señores legisladores, asegura, esto se produce por la alternatividad que de forma exclusiva, se ha originado en el poder, entre los dos partidos tradicionales consolidados, en la República de Costa Rica , (Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional), desde el año mil novecientos cuarenta y nueve, hasta los últimos años en que esto ha empezado a cambiar, con el surgimiento de nuevas fuerzas políticas.

Otro de los señores legisladores asevera, tengo la seguridad de que los partidos viejos, manejan el lema de pensar primero en el bienestar del partido político, y posteriormente en el de la patria.

En cambio, otro de los señores diputados manifiesta, lo que ocurre es que en la República de Costa Rica, existen dueños de partidos, que son quienes a opinión de este legislador, manejan desde sus casas u oficinas, el funcionamiento de sus fracciones políticas, las cuales realizan exclusivamente, lo que éstos les ordenan.

A contrario sensu, uno de los señores diputados nos manifiesta; al existir en la República de Costa Rica, un sistema político presidencialista, y de partidos políticos muy fuertes, lógicamente nos hemos encontrado sometidos, a la estructura partidista.<sup>238</sup>

---

<sup>238</sup> "El problema no son los partidos políticos, mecanismos fundamentales en toda democracia, sino la existencia de un sistema de partidos débiles, sin cuadros con capacitación y generación permanente de ideas y propuestas nacionales, con escasa capacidad de respuesta a los grandes problemas y retos que enfrenta el país y con ideologías cada vez más difusas e inciertas. Con partidos políticos con las anteriores características, existe un gran riesgo de que las decisiones se tomen con base en intereses meramente electoreros y personales".

"Los partidos emergentes son el espejo del bipartidismo. Arrastran los mismos males y están viciados como los partidos tradicionales".

"Al existir en nuestro país, un sistema de gobierno presidencialista, y de partidos políticos muy fuertes, hemos estado sometidos al sometimiento de la estructura partidista, a la hora de gobernar".

"Lamentablemente, todavía los partidos políticos, influyen en demasía en las decisiones del país".

"Si cada vez, se ha vuelto más personalista".

"Los partidos políticos, tienen mucha ingerencia en los nombramientos, y tienen mucho poder".

"Los partidos políticos viejos, tienen el lema de que primero está, el partido y después la Patria".

"Algunas fracciones, se someten a las enteras ordenes partidarias. En mi caso tomo las decisiones, a mi mejor saber".

"Los señores diputados y señoras diputadas, siguen asumiendo la denominada línea de partido, para resolver asuntos de control político".

"Sí, ha existido la fuerza del personalismo partidista".

"Sí, por la alternabilidad en el poder".

"Sí, pero su influencia, a disminuido en los últimos años".

"Es la manera como hemos venido cambiando desde el 48 el clamor popular".

"Todo el acceso al poder gira alrededor de los partidos políticos".

"Las decisiones se toman para favorecer a los miembros de una agrupación política convertida en fin en si mismo".

"En la medida que los presidentes son electos a través de un partido político, eso es inevitable. Costa Rica es una democracia de partidos. No creo que estén sometidos, pero claramente el o los partidos tienen gran incidencia".

En cambio siete de los legisladores y legisladoras, son de la opinión, que en la República de Costa Rica, no prevalece la influencia del fenómeno partidocrático, para un porcentaje del catorce por ciento. De los siete legisladores que niegan la existencia de tal fenómeno, únicamente tres, ofrecen sus razones por las cuales consideran, no ocurre tal fenómeno.<sup>239</sup>

Mientras que, tres de los señores diputados y señoras diputadas, nos determinan, en su respuesta no comprender el alcance que conlleva el concepto de la pregunta planteada, para un porcentaje del seis por ciento.

Al mismo tiempo cuatro de los señores legisladores y señoras legisladoras, simplemente omiten responder a la pregunta planteada, para un porcentaje del ocho por ciento.

Reflejamos en esta tabla, numéricamente, los datos emanados de la pregunta en descripción.

Influencia del fenómeno partidocrático

Si	No	No comprende el concepto expuesto porcentaje	% equivalente al si	% equivalente al no	No responden
35	7	3. 6%	71	14	4

Observemos estos mismos resultados pero ahora distribuidos entre los distintos partidos Políticos, representados en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica:

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no iustifican
-----------------	----------	------------	------------	------------	--------------------

<sup>239</sup> "Hay otros actores infrapolíticos, grupos de interés y de presión y mediáticos".

"no en Costa rica, los partidos políticos, han dejado de ser referente, para la población costarricense. Entonces por ese motivo, la República de Costa Rica, no esta sometida al fenómeno partidocrático".

					justifican
Unidad Social	Si	12 = 63%	10	53%	2 = 11%
Cristiana	No	2 = 11%	1	5%	1 = 5%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican	No responde	No comprend concepto
Liberación	Si	9 = 53%	8	47%	1 = 6%	2 = 12%	1 = 6%
Nacional	No	3 = 18%	1	6%	2=12%		

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican	No responde	No comprend concept
Acción	Si	5 =62.5%	5	62.5%	0	1=12.5%	1=12.5%
Ciudadana	No	1 =12.5%	1	12.5%	0		

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican	No responde
Bloque	Si	5=83%	4	83%	0	1=17%
Patriótico	No	-	-	-	-	-

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Movimiento	Si	4=80%	2	40%	2=40%
Libertario	No	1=20%	-	-	1=20%



Fuerza política	No comprende concepto	Porcentaje
Renovación Costarricense	1	100%

Fuerza política	Opciones	Porcentaje	Justifican	Porcentaje	% no justifican
Auténtico	Si	1 = 100%	1	100%	0
Hereditario	No	-	-	-	-

Debo indicar que comparto, la opinión de la mayoría de señores diputados y señoras diputadas, quienes manifiestan, que en la República de Costa Rica se presenta el fenómeno partidocrático, o al menos nos desarrollamos bajo su influencia. Esto se produce, en la República de Costa Rica, debido a que constitucionalmente esta dispuesto en el artículo noventa y ocho, de su Carta Magna lo que literalmente se describe:

Artículo 98.-

“Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República.”<sup>240</sup>

Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

---

<sup>240</sup> Altamirano Ramírez, Marina, Fallas Vega, Elena y Linkimer Bedoya Llihanni.

Obra citada. Op.cit. 3.ed.- San José, Costa Rica.

Editorial Investigaciones Jurídicas, abril del año 2005, Artículo 98.

Como puede notarse en la República costarricense, no existe otra forma posible de llegar al poder, si no es presentando su nombre ante el electorado, a través de un partido político. Por esto tanto, el presidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa, Alcaldes, regidores y munícipes, obligatoriamente, para acceder a esos cargos de representación popular, exclusivamente, lo pueden realizar, si sus nombres se encuentran respaldados por medio de la estructura de un partido político, debidamente inscrito en el tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica.

Don Fernando Volio, citado por Alex Solís Fallas, en su libro el control Parlamentario, afirma que hoy en día:

“Vivimos en la época de la partidocracia y que, querámoslo o no, son los partidos políticos los que hacen funcionar las democracias representativas”. Por su parte, Lord Bryce expresa que los partidos políticos son refinadores de ideas al aclarar, sistematizar y exponer, constantemente, la doctrina del partido. Y, Añade Alex Solís Fallas, “al denunciar y hacer públicos los errores y las políticas del Poder Ejecutivo, los órganos, los entes y los funcionarios públicos”.<sup>241</sup>

Pero es preciso dejar aclarado, para no provocar confusiones en quienes nos lean, que estas personas, cuando ascienden al poder no están obligadas a obedecer los preceptos o lineamientos del grupo político, que les impulsó para llegar a los cargos para los cuales fueron electos, el mejor ejemplo lo podemos representar en esta propia legislatura, cuando varios de los señores diputados y señoras diputadas, por dificultades internas entre la dirigencia de los partidos políticos, que les llevaron como diputados a la Asamblea Legislativa, han procedido a tomar las decisiones de renunciar a sus partidos políticos, y declararsen, legisladores o legisladoras independientes.

---

<sup>241</sup> Solís Fallas, Alex.

Obra citada. Op.cit. 2.ed. San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia año, 1995, p. 28.

De hecho que en el momento actual, en la Asamblea Legislativa, hay por lo menos siete legisladores, que se encuentran como diputados independientes, y de esta debacle, solo a escapado el Partido Político de Renovación Costarricense, será esto porque solo tiene un representante?

En razón que de todos los otros partidos políticos, por lo menos un diputado se encuentra alejado, del partido político que le llevo a la Asamblea Legislativa, ya sea fundamentado por razones, que el legislador se encuentra sancionado por el tribunal de ética de su partido, o por renuncia voluntaria a esa fuerza política. Lo que sí, es una realidad, es que tal situación no había ocurrido tantas veces en el pasado. Lo que hará que este Poder Legislativo pase a la historia, como uno de los más convulsos.

Con relación a la influencia de los partidos políticos, para que los ciudadanos puedan llegar a acceder al poder, en Costa rica, y otros muchos países, nos comenta el doctrinario costarricense, Rubén Hernández Valle, lo siguiente:

“en la mayoría de los ordenamientos electorales el derecho de ser elegido para cargos de elección popular sólo puede ejercerse a través de los partidos políticos. Por tanto, la legislación electoral tiene una naturaleza esencialmente pública, pues regula el acceso a los cargos de elección popular, Si los partidos son normalmente los canales jurídicos para participar en las elecciones, es claro entonces que su organización y funcionamiento están sujetos a una normativa de carácter público, pues a través de ellos se expresa no sólo el derecho público subjetivo del voto, sino que además los partidos, en última instancia, son los que hacen posible, tanto jurídica como políticamente, el que un grupo organizado de particulares pueda devenir eventualmente titular de los poderes públicos”.<sup>242</sup>

---

<sup>242</sup> Hernández Valle Rubén.

Obra citada, Op.cit. Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, año, 1991, p. 61.

**10.- ¿Cómo percibe usted que evalúa el pueblo la labor de control que cumple la Asamblea Legislativa de Costa Rica**  
**Marque con equis su respuesta**

**A- Muy buena**

**B- Buena**

**C- Aceptable**

**D- Inaceptable**

Dos de los señores diputados, manifiestan que aprecian que el pueblo evalúa la labor de control político, que cumple la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, como muy buena, para un porcentaje del cuatro por ciento.

En cambio cinco señores diputados y señoras diputadas, nos afirman que ellos consideran que el pueblo, califica la labor de control político, desempeñada por la Asamblea Legislativa, como buena, para un porcentaje del diez por ciento.

Uno de los señores diputados responde a esta pregunta, manifestando, el pueblo no conoce, la función de control político que desarrolla la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, para un porcentaje del dos por ciento.

,No comparto la respuesta, de este legislador, en donde afirma que el pueblo costarricense, no le conozca, pero si considero que es una gran realidad, y que cuenta con muy poca información al respecto para poder evaluarle objetivamente.

Con relación a este aspecto el exdiputado costarricense, y reconocido doctrinario del Derecho, Alex Solís Fallas a escrito en su libro titulado el Control Parlamentario lo siguiente:

"La Asamblea Legislativa ha perdido su majestad. Todos los días se oye hablar de manera negativa del Primer Poder de la República: en el aula universitaria, los medios de comunicación colectiva, la calle y hasta en los bares. Todos hemos escuchado que los diputados no trabajan, pero que, a pesar de eso, se aumentan periódicamente su salario. También es corriente oír que los "padres de la Patria" rompieron el quorum o que muchos andan de viaje. Los periodistas, con frecuencia, presentan estadísticas sobre cuánto tiempo dedican los diputados a hablar por teléfono, así como de los gastos en que incurre el Parlamento, en alimentación y bebidas alcohólicas. Asimismo, se acusa a la Asamblea de no legislar con la prontitud que demandan los tiempos modernos. Se alarman los ciudadanos por el tiempo invertido en frecuentes y superficiales discusiones políticas y por su lentitud para tomar decisiones, aun en asuntos de mucha trascendencia". Añade "En fin, la calidad de la gestión legislativa ha contribuido para que se perciba al Parlamento varado en un mismo asunto de una agenda que parece interminable". Continúa comentando, lamentablemente, mucho de lo que se afirma es cierto. Existen niveles de irresponsabilidad que irritan a los ciudadanos y dañan la fe en las instituciones democráticas". Finaliza su opinión afirmando "parte del desprestigio sufrido por la Asamblea se debe al desconocimiento generalizado de sus funciones. Para la mayoría de la población, la competencia del Parlamento sólo se reduce a la función legislativa, razón por la cual su eficacia se mide conforme al número de leyes que produce, sin comprender que, por la posición central y representativa que ocupa en el sistema político, la Constitución le ha asignado otras tareas". <sup>243</sup>

Dos señores legisladores, expresan que el pueblo les evalúa la función de control político, que ejercen como regular o más o menos, para un cuatro por ciento.

A contrario sensu, veintiuno de los señores legisladores y señoras legisladoras, aseguran que aprecian, el pueblo costarricense, acredita a la Asamblea

---

<sup>243</sup> Solís Fallas, Alex.

Obra citada. Op.cit. 2.ed. San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia año, 1995, p. 23-24.

Legislativa, una calificación de aceptable, para el trabajo ejercido en materia de control político, para un porcentaje del cuarenta y tres por ciento.

En cambio diecinueve de los señores diputados y señoras diputadas, manifiestan, que el pueblo de la República de Costa Rica, califica la labor que en materia de control político desarrolla, la Asamblea Legislativa costarricense, de forma inaceptable, para un porcentaje del treinta y nueve por ciento.

En esta tabla representamos numéricamente los resultados expuestos precedentemente:

Criterios de evaluación sobre control político	Muy bueno	Bueno	Aceptable	Inaceptable	Otro
Unidad Social Cristiana	0	1	7	6	0
Liberación Nacional	1	1	5	8	0
Acción Ciudadana	0	0	4	2	2
Movimiento Libertario	0	2	2	1	0
Bloque Patriótico	1	1	1	2	0
Renovación Costarricense	0	0	1	0	0
Auténtico Herediano	0	0	1	0	0
Porcentajes totales	5%	10%	43%	39%	5%

Debemos reconocer, tanto a los señores diputados como a las señoras diputadas, su sinceridad y honestidad, al momento de manifestar, la forma en que consideran evalúa, el pueblo la labor de control político, desempeñada por esta Asamblea Legislativa.

Esto es satisfactorio y bueno, porque nos hace pensar que quizá, con el conocimiento que tienen, de la problemática existente, tengan la voluntad política, de emprender las medidas correctivas, para en primer lugar procurar, que el pueblo costarricense, modifique su visión negativa de su trabajo en materia de control político, y en segundo término, profundizar en esta problemática, legislando, de tal manera que los instrumentos de control político,

les vengán a facilitar y por ende a permitir desempeñar una función de control político, de manera eficaz y eficiente. Que procure que los costarricenses, podamos permanecer muy tranquilos en la estabilidad de nuestro sistema democrático, conociendo y confiando, que en nuestra Asamblea Legislativa, existen los mecanismos necesarios, para un desarrollo adecuado y oportuno de una función tan vital y preponderante, como es la proporcionada por el eficaz y eficiente ejercicio de un buen control político.

Asimismo considero, que el criterio expuesto por los legisladores, sobre la evaluación otorgada por el pueblo costarricense, a la función de control político desempeñada por la Asamblea Legislativa, se origina en gran manera, fundamentada en el escaso conocimiento que reciben del ejercicio de tan vital función. Por lo cual es preciso, debe generarse, una mayor información de parte de los legisladores y legisladoras, hacia el pueblo, con la finalidad de que la mayoría, y de ser posible la totalidad de los costarricenses, se encuentren informados, en todo momento del trabajo, que en materia de control político se encuentra desempeñando su Asamblea Legislativa.

Esto vendrá a mejorar la imagen, que los ciudadanos tengan de la función del control político, y a su vez por ende dará como resultado que al estar mayor informado el pueblo, de los resultados del control político, el mismo pueblo y sus organizaciones sociales, vendrán a convertirse, en otros medios de control, sobre el actuar de las instituciones de gobierno, y de los políticos que están dentro de las mismas, con lo que los únicos ganadores, en este caso, seremos los propios costarricenses.

Con todo lo enunciado creo, que es necesario aprovechar los recursos disponibles, para crear una cultura de control político, en el pacífico pueblo de la República de Costa Rica.

**11. ¿En qué aspectos considera usted necesario que los señores diputados reciban capacitación específica para ejercer la función de control político?**

**Explique por favor**

Treinta y tres de los señores diputados y señoras diputadas responden esta pregunta, para un porcentaje del sesenta y siete por ciento. Señalan es necesario, que los diputados y diputadas reciban capacitación en diferentes temáticas.

Cabe subrayar, que esta es una de las preguntas en donde se generan variadas y diferentes respuestas. Por lo cual vamos a comentar algunas de las mismas, y otras más, por si se requieren analizar en mayor detalle, les agregamos a pie de página.

Algunos de los señores diputados y señoras diputadas opinan, que los legisladores requieren capacitación, en las siguientes cuestiones:

Para uno de los señores diputados, requieren de capacitación en el manejo de la comunicación política.

Otro de los señores legisladores nos indica, se necesita en el como realizar el ejercicio del juicio político, y los mecanismos para poder interpretar las respuestas que les brindan en determinadas oportunidades.

En cambio para varios de los señores legisladores, la precisan en el rol fundamental del quehacer legislativo, en el rol que cumple la Contraloría General de la República, y la Defensoría de los Habitantes, así como en el conocimiento y manejo de los informes, emanados tanto de la Contraloría General de la República, como de la Defensoría de los Habitantes de la República, ambas instituciones auxiliares de la Asamblea Legislativa. Por ello,



los diputados recalcan en la necesidad, de las relaciones que deben mantenerse entre estas dos entidades con su superior jerárquico, o sea el Poder Legislativo.

Respecto a la necesidad de capacitación de los diputados y otros funcionarios públicos, el doctrinario costarricense Alex Solís Fallas manifiesta en su libro *Reyes sin Corona, Rendición de Cuentas y Evaluación de Resultados*, lo siguiente:

“En las semanas previas a asumir sus cargos, tanto al Presidente de la República como a los diputados, ministros, miembros del servicio exterior, presidentes de instituciones autónomas, gerentes y otros servidores de confianza, se les deberían programar seminarios, en los que se les instruya sobre temas de auditoría, gerencia pública y liderazgo político. En la lista, convendría incluir los relacionados con sus competencias institucionales, el principio de legalidad y, por supuesto, todos los que se refieren con el tema de la responsabilidad penal, civil, disciplinaria y política, a que están obligados los servidores públicos”.

Luego a este preámbulo proseguimos, describiendo las opiniones de los legisladores.<sup>244</sup>

Así, otros señores diputados, señalan la eminente necesidad de capacitación, en todos los instrumentos que la Constitución política, les dispone para el desempeño de su trabajo, debido a que algún diputado afirma, no conocen, ni la misma Constitución Política, ni el Reglamento Legislativo.

A contrario sensu, muchos señores diputados y señoras diputadas, advierten la necesidad de capacitación en materia jurídica, en investigación, en comunicación. También en la importancia, significación, procedimientos, y

---

<sup>244</sup> Solís Fallas, Alex.

Obra citada. Op.cit. Editorial del Este, San José, Costa Rica, año 2002 p. 108-109

efectos, del control político. Asimismo, como en política fiscal y Derecho constitucional.

Una señora legisladora nos añade que la capacitación es necesaria, en la nueva normativa internacional sobre corrupción y derecho penal, así, como en derecho comparado parlamentario, además de en materia de género.<sup>245</sup>

---

<sup>245</sup> "En el manejo de la comunicación política".

"Rol fundamental del quehacer legislativo, rol del que hacer de la Contraloría General de la República y capacitación parlamentaria".

"En los instrumentos y alcances que tiene para realizarlo, relaciones entre Defensoría de los Habitantes de la República y Contraloría General de la República, conocimientos sobre funciones del Estado, conocimiento sobre relaciones entre ingresos y gastos, suplencias de gasto sin contenido económico e inflación y de esta con la pobreza, sobre educación y pobreza".

"Conocimiento de las evaluaciones de la defensoría de los Habitantes y Contraloría General de la República".

"Relaciones entre Defensoría de los Habitantes de la República, y Contraloría General de la República, conocimientos sobre funciones del Estado, conocimiento sobre relaciones entre ingresos y gastos, suplencias de gasto sin contenido económico e inflación y de esta con la pobreza, sobre educación y pobreza".

"1. Investigaciones tendientes a ejercer un efectivo control político. 2. Valorar las denuncias puestas por la sociedad civil".

"En aspectos técnicos, y legales de manejo presupuestario y todo lo relacionado con la hacienda pública. Así como en el conocimiento de legislación relacionada con otros métodos de control de la labor ejecutiva de los funcionarios públicos, sin dejar de lado la evaluación de trabajo en cuanto a la administración de justicia".

"Capacidad de análisis del Presupuesto Nacional, muchas veces incomprendido en su extensión e implicaciones".

"En la nueva normativa internacional sobre corrupción y derecho penal y en derecho comparado parlamentario. Agrego además en materia de género".

"Legal, en investigación y en comunicación".

"Legal e investigación".

"En política fiscal y Derecho constitucional".

"En materia jurídica".

"En todos los instrumentos que la Constitución les otorga, ya que no conocen ni la Constitución Política, ni el Reglamento Legislativo".

"Mejoras en el conocimiento de la Constitución política, para usarla como criterio guía".

"Legislación nacional existente al respecto (competencias constitucionales, administración pública, etc).

b. Temas relacionados a rendición de cuentas".

---

"Explicándoles qué es el control, parámetros o procedimientos, efectos, importancia".

"En instrumentos de control, facultades y alcances de dichos instrumentos".

"En investigación".

"Los diputados requieren capacitación en muchos campos. Es necesario explorar los instrumentos que permitan una mayor especialización. No obstante, en su función de control, más que capacitación se requiere una toma de conciencia y un mayor espíritu de servicio".

"Conocimiento orgánico y funcional del aparato público. Alcances de las formas de control".

"En formulas de desarrollo exitosas".

"En todos los aspectos dado a que a los partidos políticos no les interesa la labor que un diputado realiza".

"En el ejercer el juicio político, mecanismos para interpretar respuestas".

Para ocho de los señores diputados y señoras diputadas, los legisladores no requieren ninguna clase de capacitación, para un dieciséis por ciento, de estas opiniones.

Mencionan, que la deficiencia en el desarrollo del control político, se origina más bien en diferentes factores, externos a lo que tiene relación con la capacitación. Hacen referencia a aspectos relativos, como a la aptitud de los señores diputados y señoras diputadas, frente a los problemas nacionales, afirman esto es una cuestión de educación y principios. Añaden, como que los diputados y diputadas sabemos cómo hacerlo. Sucede que algunos les interesa más participar del mismo que a otros, al menos en el Plenario.<sup>246</sup>

Seis de los señores diputados y diputadas, no responden a esta pregunta para un doce por ciento.

Mientras, que dos de las respuestas recibidas, se apartan totalmente de lo consultado para un porcentaje del cuatro por ciento

En la tabla que prosigue ofrecemos numéricamente los resultados derivados de las respuestas que competen a esta pregunta.

---

<sup>246</sup> "No considero que sea asunto de capacitación de los diputados para ejercer el control político, sino más bien es un asunto de aptitud de los diputados y diputadas, frente a los problemas nacionales"..

"es una cuestión de educación y formación de principios. Desde niños se nos debe enseñar el amor a la Patria y no pensar sólo en el bien personal".

"Esto es una cuestión de educación y formación de principios. Desde niños se nos debe enseñar el amor a la Patria y no pensar sólo en el bien personal".

"Como que los diputados(as) sabemos cómo hacerlo. Sucede que algunos(as) les interesa más participar del mismo que a otros, al menos en el Plenario, pero mi experiencia me permite decir que en comisiones permanentes y especiales casi todos ejercemos y participamos de este instituto".

Necesidad de Capacitación	Si	No se requiere	No responde	No coincide respuesta
Unidad Social Cristiana	11	1	2	0
Liberación Nacional	10	3	2	0
Acción Ciudadana	4	2	1	1
Movimiento Libertario	3	1	1	0
Bloque Patriótico	4	0	0	1
Renovación Costarricense	1	0	0	0
Auténtico Herediano	0	1	0	0
Porcentajes totales	67%	16%	12%	4%

Como podemos observar de las respuestas reflejadas, tanto la mayoría de los señores diputados como las señoras diputadas, manifiestan la necesidad que tienen los legisladores y legisladoras, de recibir algún tipo de capacitación, a la hora de asumir sus cargos como diputados, para enfrentar las funciones, para las cuales han sido electos.

En razón de lo anterior, considero pertinente, que el área de capacitación del Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, establezca un programa que incluya una breve capacitación para los nuevos señores diputados y señoras diputadas, que considere los aspectos primordiales a los cuales deberán hacer frente en su gestión, dando énfasis, a aquellos factores en los cuales los nuevos legisladores y legisladoras, no estén especializados.

Con la finalidad de optimizar la capacitación, además de hacerle atractiva, a los nuevos diputados, porque le podrán observar como una buena opción y no como una pérdida de tiempo, considerando que lo ofrecido ya le manejan.

Adicionalmente, es aconsejable que lo detallado se realice con anterioridad a que los señores diputados asuman sus puestos de forma oficial. También es necesario, de no estarse realizando, que se mantengan instructivos o manuales actualizados, a disposición de los señores legisladores y señoras legisladoras, para que por su cuenta los mismos, puedan disponer de ellos para consultarles en forma individual, como un mecanismo de trabajo, al cual puedan también recurrir en el momento que le aprecien como necesario.

Además, considero, es preciso que la Asamblea Legislativa, se preocupe de mantener un estaf de funcionarios, ampliamente capacitados en las diferentes temáticas, a las cuales tiene que hacer frente el Poder Legislativo. Con la finalidad de que los señores diputados y señoras diputadas, puedan recurrir a sus consejos y colaboración, cuando así lo consideren necesario, para asesorarse de la mejor manera y no ir a cometer hierros, en asuntos importantes y vitales para la buena marcha de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.



## **B) Presentación de las respuestas brindadas por el segundo grupo de encuestados y encuestadas, para el trabajo de esta investigación.**

### **B1. Primer apartado de la encuesta de opinión aplicado al segundo grupo de encuestados.**

Continuamos con el segundo apartado de este capítulo, aclarando en primer lugar, que la encuesta de opinión, que aplicamos a este segundo grupo de encuestados, es exactamente la misma, que fue aplicada a los diputados y diputadas, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Recordamos que el instrumento utilizado para recopilar la información, de ambos grupos es una encuesta de opinión, de preguntas cerradas, abiertas y semi abiertas, conformado por dos apartados, que se anexa íntegramente, y puede ser consultado en el anexo tercero de esta investigación.

En segundo término, clarificamos que las informaciones relacionadas con los datos que se solicitan, en la aplicación del primer apartado de la encuesta de opinión. No se van a tomar en consideración, con este siguiente grupo de encuestados y encuestadas. Por varias y justificadas razones; las cuales procedemos a explicar inmediatamente:

La mayoría de los funcionarios que responden la encuesta de opinión, son funcionarios públicos, que no pueden representar a Partidos Políticos, dado a que por ley tienen prohibición para hacerlo.

Otro motivo que valoramos para no realizarlo, es que todos ellos son personas con una formación académica, altamente cualificada, entre los cuales, encontramos a profesionales, tales como doctores, masteres y licenciados. Con una consolidada experiencia, en el ejercicio de la función pública del país.

Adicionalmente, muchos de ellos son actualmente o han sido, profesores universitarios. Conjuntamente son doctrinarios del Derecho. Y finalmente, para que se pueda entender, de los calificados funcionarios a los cuales hacemos referencia, diremos que entre algunos de ellos, tenemos al:

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica.

La Procuradora General de la República.

Quién ocupaba el cargo de Contralor General de la República, en el momento que se aplicó la encuesta de opinión.

La Subcontralora actual de la Contraloría General de la República.

El actual, Defensor y Codefensor de los Habitantes de la República.

Así como reconocidos y connotados asesores de la Asamblea Legislativa de la República. Y de otras entidades públicas nacionales.

Para concluir también tenemos entre estas opiniones, a las aportadas por uno de los más reconocidos y experimentados asesores externos de la República de Costa Rica.

Por todo lo determinado, podemos considerar las opiniones de éste segundo grupo de encuestados y encuestadas, como si se tratará del criterio emanado de un grupo de expertos, seleccionados para tales propósitos.

Se debe explicar, para evitar suspicacias, que lo afirmado, en ningún caso quiere decir, que sus dictámenes, van a ser los que determinen, las propuestas que se ofrecerán al finalizar. Aunque obviamente es evidente, que las opiniones y recomendaciones que se emitirán al concluir, tomarán muy en consideración, indiscutiblemente, los valiosos e importantes pareceres recibidos, de este segundo grupo de reconocidos funcionarios y reconocidas funcionarias, quienes son autoridades altamente calificadas y de reconocida honorabilidad en el Estado de la República de Costa Rica.



Lógicamente todo este trabajo, se ha desarrollado con el único propósito de tratar de facilitar, que por parte de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, se llegue a conseguir el desempeño de un control político, que venga a ser oportuno, eficaz y eficiente. Con instrumentos de control político, apropiados y vitalizados, que no les vengán a limitar su función, al momento de tener que actuar, como ente contralor de las actuaciones de las diferentes instituciones públicas, instituidas en el Estado de la República costarricense.

Asimismo a través del presente estudio, nos hemos propuesto realizar una de las funciones más importantes, que se pueden efectuar, como es, ofrecer un trabajo con opciones preventivas, que siempre serán mejores que las correctivas. Por tal razón, con la elaboración de esta investigación nos proponemos, no facilitar la posibilidad, a Asambleas Legislativas en el futuro de llegar a presentárseles el caso, que los diputados o diputadas que ocupen las curules, se nieguen a actuar en determinados asuntos, que sean de gran interés para el beneficio de la nación, o en su caso que lo hagan tímidamente, apoyándose, en la razón de que los instrumentos de control político disponibles en el país, no les permite intervenir o les deja muy pocas posibilidades, de poder realizar actuaciones importantes al respecto.

Por todo lo expresado, es que tratamos de obtener opiniones tan importantes y valiosas, como las de los señores diputados y señoras diputadas, para complementarlas con las calificadas y cualificadas opiniones de este segundo grupo de señores y señoras encuestadas. Que también se complementaran con los aportes de los doctrinarios en la materia.

En el segundo apartado de esta encuesta de opinión, realizamos lo que prosigue:

Presentamos las preguntas una a una, y se agrupan las respectivas respuestas, de conformidad a cada uno de los ítems seleccionados, por cada uno de los encuestados y encuestadas; distribuyendo el porcentaje que corresponde a cada ítem, considerando este factor, con relación al total de respuestas que

nos brindan estos distinguidos profesionales que amablemente nos responden la encuesta de opinión.

Nos permitimos aclarar que en esta oportunidad el número de respuestas, se considerarán exclusivamente como una forma referencial. Debido a que en este caso, no estamos usando ni una población total, ni tampoco hemos sacado un muestreo estadístico en toda la República de Costa Rica. Por tal motivo, es que estamos manifestando que los datos obtenidos de este segundo grupo de encuestados, exclusivamente se pueden valorar de manera referencial. Y no como un porcentaje estadístico, científicamente logrado. Aunque a mi juicio, estas valiosas aportaciones, por proceder de estos consagrados profesionales, mantiene una muy importante y equivalente valoración.

Aclaramos, que la encuesta de opinión, fué aplicada a once calificados funcionarios públicos y a un consultor externo altamente reconocido y respetado en la República de Costa Rica. En total doce reconocidas y consolidadas personalidades.

De los doce destacados profesionales a los cuales aplicamos la encuesta de opinión, únicamente uno de ellos no respondió la encuesta, o sea, nos contestaron la encuesta de opinión, once de los profesionales, para un porcentaje del noventa y dos por ciento.

Para nuestra gran satisfacción, al igual que con los señores diputados y señoras diputadas, nuevamente en este segundo grupo de señores y señoras encuestados, encontramos una gran apertura a cooperar con la investigación que desempeñamos. Y a responder la encuesta de opinión, que les hemos aplicado, a la mayoría de ellos de forma personal, con lo que también pudimos explorar otros aspectos, no incluidos en el instrumento de la investigación. Así como obtener su criterio del presente trabajo.

Me permito clarificar, que aunque me encantaría haber podido comentar todas las respuestas logradas, por falta de tiempo, únicamente podré proceder a desarrollar durante mi análisis, algunas de las significativas y relevantes contestaciones recibidas, de este grupo de encuestados y las demás que se aprecien, como aquellas recomendaciones que son de gran relevancia, para la investigación en desarrollo, o porque coincidan en las respuestas emitidas anteriormente, procederemos a agregarlas a pie de página, con el único y exclusivo propósito, de que quienes se encuentren interesados en observarles y tratarles de forma individualizada, les puedan consultar con mayor detalle y profundidad. Esto con mucha más razón, si no perdemos de vista, que nos estamos refiriendo a opiniones y recomendaciones, ofrecidas por destacados y reconocidos funcionarios públicos, doctrinarios, profesores y juristas del ámbito del Derecho político, de la República de Costa Rica.

Por tal razón reflexiono, que quizá para futuros estudiantes, investigadores en la materia, poder valorar la información a la cual hago referencia, venga a ser de importancia, e incluso en la misma Asamblea Legislativa, cuando se considere oportuno y necesario, establecer un plan de capacitación para los señores legisladores, estas opiniones, les puedan ser de referencia y de gran ayuda proviniendo las mismas de un grupo de profesionales tan calificados y cualificados como el precedentemente descrito. .

## **B2. Segundo apartado de esta encuesta de opinión aplicado al segundo grupo de encuestados de la República de Costa Rica:**

Tabla guía que contiene las páginas entre las cuales se desarrolla cada pregunta perteneciente al segundo apartado de la encuesta de opinión, aplicada al segundo grupo de encuestados, o sea a los no legisladores.

Nombre de pregunta	# de Página
1. Criterio sobre el control político	385-389
2. Nuevos instrumentos de control político en C.P.	390-393
3. Conocimiento de instrumentos de control político	394-396
4. Criterio sobre la moción de censura	397-399
5. Grado de coordinación	400-403
6. Concepto de control político	404
7. Aspectos entorpecedores del control político	405-407
8. Recomendaciones para mejorar instrumentos de control político	408
9. Influencia del fenómeno partidocrático	409
10. Criterios de evaluación por el pueblo al control político	410
11. Necesidad de capacitación a diputados en control político	411-412

**1.- ¿Considera usted, que el control político que ejerce el poder Legislativo, es:**

**A- Eficiente**

**B- Poco eficiente**

**C- Ineficiente**

**Justifique su respuesta:**

De los once profesionales, que nos responden a esta segunda parte de la encuesta de opinión, ocho de los mismos, afirman, que consideran que la función de control político, que desempeña la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, se puede calificar como poco eficiente para un promedio porcentualizado de estas opiniones pertenecientes, al setenta y tres por ciento.

Estos ocho profesionales, exponen las siguientes justificaciones y razones, para emitir sus juicios:

Uno de los profesionales encuestados nos expone la siguiente posición:

En la República de Costa Rica, la prensa nacional, ha venido a sustituir en buena medida el rol que debe ser desempeñado, a través del trabajo del control político, asimismo, los partidos de oposición, no tienen medios, ni personal, que realice labores investigativas. Prosigue comentando, existen pocos instrumentos, con eficacia que hagan del control político, una actividad que venga a redireccionar políticas públicas o bien que despeje irregularidades en la administración pública, de la República de Costa Rica.

Otro de los profesionales que responden a la encuesta de opinión, manifiesta que el desempeño del control político, le estima como poco eficiente, fundamenta su criterio indicando, que en el país no existe una normativa clara al respecto.

En cambio otro de estos profesionales, nos responde, que considera al ejercicio del control político, desarrollado por la Asamblea Legislativa, como poco eficiente, debido a que el concepto empleado, es limitado y los diputados y diputadas, desconocen de su importancia. Lo cual provoca, que los efectos del trabajo de control político vengan a ser escasos y deficientes.

En cambio este otro de los encuestados, brinda la siguiente posición, para valorar al desarrollo del control político, como poco eficiente, afirma el entramamiento legislativo, vivido en los últimos años, acredita la parálisis general que afronta la Asamblea Legislativa y dentro de ella, la lentitud en los procesos de control político.

Para este otro encuestado, temas que jurídicamente no son tan complejos en la realidad, en la Asamblea Legislativa lamentablemente se dispersan por parte de los diputados y diputadas.

Otro de los encuestados nos expresa, el ejercicio del control político, es poco eficiente, ya que en la Asamblea Legislativa se habla y discute mucho, y con esto se desvirtúa, el verdadero control político, que se puede desempeñar en forma eficaz y eficiente.

Para otra de las personas encuestadas, la función de control político, que se desarrolla es poco eficiente, justifica lo que cree en las razones siguientes, afirma tanto el partido de gobierno, como los partidos de oposición, no han entendido bien, cual es el rol que se debe cumplir en cuanto a esta actividad, con lo que el partido de gobierno trata de ser muy condescendiente, mientras que los partidos de oposición en ocasiones se desgastan en temas que no son, propiamente de interés del control político.

Mientras que este otro funcionario, indica la labor de los diputados se concentra en la función legislativa, y además les falta conocimiento de cómo se ejecuta esta función de control político.<sup>247</sup>

En cambio, para tres de los profesionales encuestados, el desempeño del control político es ineficiente, para un porcentaje del veintisiete por ciento.

Estos profesionales aportan las justificaciones siguientes, para valorar al ejercicio del control político como ineficiente.

Primeramente, para este encuestado, en la Asamblea Legislativa, no existe sistematización, no se mantiene especialización y para complicar lo anterior, no se asume como una actividad permanente, por parte del Poder Legislativo de la República de Costa Rica.

En cambio en esta segunda respuesta, el encuestado manifiesta, partiendo que el control político, debe ser visto como algo más que información. En la Asamblea Legislativa, la actividad de los diputados en esta materia, anualmente no tiene efecto alguno, a veces no se logra aprobar ni siquiera un informe.<sup>248</sup>

---

<sup>247</sup> "El concepto que se emplea es limitado, se desconoce su importancia, y por tanto los efectos del trabajo de control, resultan ser escasos".

"Es poco eficiente, debido a que el partido de gobierno, como los partidos de oposición, no han entendido cual es el rol en cuanto a esta actividad. El partido de gobierno trata de ser muy condescendiente, mientras que los partidos de oposición hay veces que se desgastan en temas que no son propiamente de interés".

"No se le conocen consecuencias políticas importantes. Los informes rara vez logran superar la defensa de intereses político partidistas. Además, no existen mecanismos legislativos que garanticen que los resultados de las Comisiones de Investigación arrojarán resultados importantes y de impacto para el sistema".

"El entramamiento legislativo de los últimos años acredita la parálisis general que afronta la Asamblea y dentro de ella, la lentitud en los procesos de control político".

"Porque la labor de los diputados se concentra en la función legislativa. Además a faltado conocimiento sobre como se ejerce un control político".

"Temas que no son tan complejos jurídicamente en la Asamblea Legislativa se dispersan"

"Es poco eficiente, llevado a que no hay una normativa clara al respecto"

<sup>248</sup> "No se le conocen consecuencias políticas importantes. Los informes rara vez logran superar la defensa de intereses político partidistas. Además, no existen mecanismos legislativos, que garanticen que los resultados de las Comisiones de Investigación arrojarán resultados importantes y de impacto para el sistema".

"Partiendo que el control político es algo más que información, la actividad de los diputados, anualmente no tiene efecto alguno, a veces no se logra aprobar ni siquiera un informe"

En esta tabla exponemos los resultados derivados de las respuestas recibidas a esta pregunta:

Eficiente	Poco eficiente	Ineficiente	Responden encuesta	Total de encuestados
0	8	3	11	12

No nos queda más opción, que señalar que este segundo grupo de encuestados, encuentra graves limitaciones en el ejercicio del control político, que cumple la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, si advertimos un setenta y tres por ciento de los once que responden la encuesta, indican que el ejercicio del control político es poco eficiente, y para agravar la problemática el otro veintisiete por ciento le considera como ineficiente, para que el grado de poca eficiencia, ascienda entonces al cien por ciento. De conformidad con las respuestas obtenidas, del segundo grupo de encuestados.

Podemos rescatar, de estas opiniones, que la culpa mayoritariamente a la poca eficiencia del control político, entendemos, los encuestados y encuestadas lo achacan a la poca eficiencia de los instrumentos de control político, con los que se cuenta, para el trabajo del control político, y en el poco conocimiento e interés que tienen y demuestran los señores diputados y señoras diputadas, quienes son los responsables directos para desarrollarle.

Esta situación nos permite advertir, que los dos grupos de encuestados, tanto los señores diputados y señoras diputadas, como el segundo grupo de encuestados precedentemente descritos, de una u otra forma nos han manifestado y justificado, las limitaciones que perciben, están presentes en los instrumentos de control político, de los cuales dispone la Asamblea Legislativa de la Nación, para desempeñar la función contralora, por ello, nos recalcan las

---

"No hay sistematización, no hay especialización, y no se asume como una actividad permanente".



pocas facilidades que observan, en tales instrumentos. Para poder ejercitar, una adecuada y oportuna función de control político, sobre el gobierno y demás entidades públicas.

Por todas las razones, que he ido analizando, y fundamentado en problemas de transparencia de algunos de los políticos, y posibles grados de corrupción, o ingerencia dentro de la Asamblea Legislativa, denunciados por la prensa nacional, y por algunos de los mismos diputados o diputadas, es que sigo insistiendo, que se evidencia en nuestra Asamblea Legislativa, la eminente necesidad, de proceder a revisar los instrumentos con que se cuenta en la nación, para desarrollar las funciones de control político. Que corresponde llevar a buen curso.

Con todas las opiniones que hemos venido refiriendo y enumerando hasta el momento, y con fundamento en las respuestas obtenidas de ambos grupos de encuestados, podemos determinar, que las dos variables presentadas para esta tesis doctoral, se nos prosiguen ratificando y demostrando, ya que los dos grupos de encuestados y encuestadas, han venido determinando que la utilización de los instrumentos de control político, disponibles en la República de Costa Rica, influyen de forma sustancial, en la eficacia y eficiencia, del trabajo de control político, que le corresponde desarrollar a nuestra Asamblea Legislativa.

**2.- ¿Considera usted necesario incluir nuevos instrumentos de control en la Constitución política de Costa Rica, Si No. Justifique su respuesta:**

Para siete de los señores y señoras encuestados, que responden a la encuesta de opinión, sí se requiere incorporar nuevos instrumentos de control político, en la Constitución Política de la República de Costa Rica, para un porcentaje de estas opiniones del sesenta y cuatro por ciento.

El primer profesional nos afirma, que es necesario incluir la moción de censura, pero que esta sea vinculante a ministros, asimismo, nos señala se debe dar la aprobación, del plan de desarrollo por parte de la Asamblea Legislativa costarricense, y establecer en nuestro país, una cultura de evaluación de resultados, del rendimiento institucional.

Para este otro funcionario encuestado, se requieren algunas modificaciones en nuestra Constitución Política, como pueden ser modificar la moción de censura, en razón que esta resulta ser insuficiente, y con mucha más razón, si esta moción de censura, no mantiene ninguna consecuencia, como lo establece nuestra Constitución Política. Además añade, no debía ser este control político, solamente una limitación de cuestionar, la labor política de los ministros y otros funcionarios únicamente, sino que eventualmente, podría llegarse hasta solicitar sustituciones, lógicamente bien fundamentadas. Evidentemente, también podrían procurasen cambios de aptitudes, de los funcionarios y no solamente la revocatoria de su nombramiento, sino también llegar a enderezar, una determinada acción política, que se estime, equivocada por parte de cualquier funcionario público.

Mientras este profesional nos sostiene, se deben realizar varios cambios en la Constitución política, como es establecer, la revocatoria de mandato, bajo condiciones excepcionales, asimismo ccla Asamblea Legislativa por el plenario. Además, se requiere aumentar la interpelación, a un mayor número de

funcionarios de alta jerarquía. Finalmente, se necesita una redefinición de las Comisiones Especiales de Investigación, reincorporándoles las potestades que le eliminó la Sala Constitucional.<sup>249</sup>

En cambio, cuatro de los profesionales encuestados, manifiestan, que no se necesita introducir nuevos instrumentos de control político, en la Constitución Política de la República de Costa Rica, para un porcentaje del treinta y seis por ciento.

Estos profesionales para fundamentar su criterio exponen las razones siguientes:

Una de las personas encuestadas indica, en principio, no considero necesario introducir nuevos instrumentos de control político. Pero a su vez, nos apunta, podría considerarse, la posibilidad de introducir, la pregunta parlamentaria a nivel de plenario, para que los ministros y otros funcionarios de alta jerarquía, comparezcan a responder preguntas, de forma muy puntualizada y concretas sobre el actuar, del ámbito de su ministerio o institución pública.

---

<sup>249</sup> "Habría que avanzar hacia mecanismos que existen en regímenes parlamentarios en los que la censura parlamentaria, por ejemplo, podría tener como consecuencia la destitución del funcionario. Deben establecerse mecanismos, asimismo, para dar seguimiento efectivo a informes de instituciones como la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General".

"Censura vinculante para ministros, aprobación del plan de desarrollo, por parte de la Asamblea Legislativa y una cultura de evaluación de resultados".

"La censura resulta ser insuficiente y más si esta censura no tiene ninguna consecuencia como lo dispone nuestra Constitución. Además no debe ser el control político una limitación de cuestionar la labor política de los ministros y otros funcionarios solamente, sino que eventualmente podría llegarse hasta pedir sustituciones debidamente fundamentadas y cambios de aptitudes para enderezar una determinada acción política que se estime resulte errada por parte de un funcionario público".

"Si, son necesarios, estos nuevos instrumentos de control político, particularmente en orden a la moción de censura, y reforzar interpelaciones".

"Si, son necesarios, debido a que los existentes son omisos en relación con sus efectos".

"particularmente lo relativo con la moción de censura y reforzar la interpelación".

"El otorgar rango constitucional a la Defensoría ayudaría en ese sentido".

En cambio este segundo encuestado, nos manifiesta no se precisan nuevos instrumentos de control político en la Constitución Política, pero añade, los que existen deben ser perfeccionados, y no recomienda ninguna solución al respecto.

A contrario sensu, este otro señor encuestado manifiesta en su respuesta que no lo aprecia conveniente, basándose, en que considera, que la Constitución Política, costarricense, establece los instrumentos de control político, fundamentales, para nuestro Estado de Derecho.

Este encuestado afirma, no se necesitan nuevos instrumentos de control político, los que existen dentro de nuestra Constitución Política, si se utilizan adecuadamente, son suficientes para el país.<sup>250</sup>

En esta tabla reflejo los resultados de las respuestas de esta pregunta.

Si se necesitan	No se requiere	Responden encuesta	Total de encuestados
7	4	11	12

De las opiniones examinadas, podemos advertir, que el ejercicio del control político en la República de Costa Rica, primordialmente, se califica como que es poco eficiente, fundamentalmente a causa de los instrumentos de control político, con los cuales se dispone para desarrollar tal función. Ya que aparentemente estos no son suficientes o adecuados, de ahí que la mayoría de este segundo grupo de encuestados, refieren a la necesidad que se tiene, de introducir nuevos instrumentos de control político, y reforzar los existentes.

<sup>250</sup> "En principio no considero necesario incorporar nuevos instrumentos de control político. Sin embargo podría considerarse la necesidad de introducir la pregunta parlamentaria, en el nivel del plenario para que los ministros y otro tipo de funcionarios de muy alta jerarquía acudan a contestar preguntas de manera muy puntual y muy concretas, sobre el ámbito de su ministerio o institución".

"La Constitución Política, establece los instrumentos de control fundamentales para nuestro Estado de Derecho"

Los encuestados y encuestadas, que manifiestan que no se requiere, introducir nuevos instrumentos de control político en nuestra Constitución Política, no rechazan la posibilidad de realizarlo, o en su defecto, afirman que se necesita perfeccionar, los instrumentos de control político existentes, con lo que también, están citando deficiencias, en la aplicación o descripción de éstos mecanismos, establecidos para que la Asamblea Legislativa, lleve a cabo el ejercicio de la función contralora.

Soy de la opinión, que realmente en la República de Costa Rica, existen bastantes y suficientes instrumentos de control político, pero falta, iniciar con un trabajo legislativo, para proceder a ampliar sus potestades, operacionalizarles y regularles; su reglamentación de una forma más clara y expedita, en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Además de describirles, con mayor amplitud.

**3.- ¿Qué tanto conoce usted los mecanismos que la Constitución Política, otorga a los diputados para que ejerzan su función contralora?**

**Marque con equis su respuesta**

**A- Mucho**

**B- Más o Menos**

**C- Lo desconoce**

**Justifique su respuesta**

Ocho de los encuestados y encuestadas, afirman conocer mucho los mecanismos de control político, establecidos en la Constitución Política de la República de Costa Rica, para un setenta y tres por ciento.

Manifestando, las razones que a continuación mencionamos:

Este profesional nos justifica; mi conocimiento, se fundamenta, en virtud de mi trabajo en una institución de control de legalidad, adscrita a la Asamblea Legislativa. También por mi formación profesional, en Derecho Público.

En esta respuesta el funcionario indica, me considero un operador de la Constitución y del Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que conozco bien el tipo de instrumentos de control político establecidos, tanto como sus alcances.<sup>251</sup>

---

<sup>251</sup> "El conocimiento lo tengo en virtud de mi trabajo en una institución de control de legalidad adscrita a la Asamblea Legislativa como lo es la Defensoría de los Habitantes. También lo obtengo por mi formación profesional en Derecho Público".

"Conozco mucho los instrumentos de control político, vigentes en la Constitución Política de Costa Rica, debido a que por muchos años he estudiado de manera concreta la función de control que lleva a cabo el parlamento costarricense".

"Soy un operador de la Constitución y del Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que conozco bien el tipo de instrumentos y sus alcances".

"Porque me correspondió analizar las comisiones del contralor".

"esto en función de mi labor académica".

"debido a que labore catorce años para la Asamblea Legislativa".

"Experiencia personal, y mediante la redacción de proyectos de ley, y el trabajo durante la tramitación de esos proyectos como asesor externo de la Asamblea Legislativa".

En cambio, tres de los funcionarios nos aseguran conocer más o menos los instrumentos de control político, existentes en la República de Costa Rica, para un porcentaje del veintisiete por ciento.

Uno de los profesionales encuestados nos manifiesta, considero que conozco más o menos, la función de control político, debido que por las funciones que me ha correspondido desempeñar, no he sido una persona muy cercana con el control político, ni con la Asamblea Legislativa, porque mi perfil ha sido muy técnico en materia de contraloría.

El otro funcionario encuestado asegura, yo les conozco más o menos, justificando, en realidad, no se como se desarrolla, el tramite legislativo propiamente interno, ya que no me encuentro vinculado directamente con ello, y en las ocasiones que me ha correspondido revisarle, ha sido en aspectos muy puntuales.

Este otro profesional, nos aclara, considero que conozco más o menos, el ejercicio del control político, por que si bien lo conozco a nivel normativo, no sigo la práctica diaria.<sup>252</sup>

En esta siguiente tabla mostramos numéricamente las respuestas a esta pregunta.

---

"Mi labor de cerca con dicho proceso permite un conocimiento extenso al respecto".

"Mucho ya que por muchos años he estudiado de manera concreta la función de control que lleva a cabo el parlamento costarricense".

<sup>252</sup> "Más o menos, dadas mis labores conozco algunos de los mecanismos de control político, por mi perfil profesional, no he sido una persona muy cercana al control político ni a la Asamblea Legislativa".

"Los mecanismos que otorga la Constitución Política, para el ejercicio del control político, les conozco más o menos, en realidad no se como se desarrolla el tramite legislativo propiamente interno, dado a que no estoy vinculado con esa actividad y las veces que debo revisarlo es en puntos muy puntuales".

"Marco la opción b porque si bien conozco a nivel normativo la práctica diaria no la sigo".

Mucho	Más o menos	Lo desconoce	Responden encuesta	Total de encuestados
8	3	0	11	12

Como podemos observar de las respuestas expuestas de los encuestados y encuestadas, presentadas en la tabla antes mostrada en donde algunos de ellos afirman conocer mucho el ejercicio del control político. Debemos comentar que sus fundamentos no nos dejan ningunas dudas del conocimiento que manifiestan tener acerca del tema en análisis.

Por tal motivo, considero que estos son aportes importantes y muy valiosos de cara al desarrollo de la investigación que ejecutamos.

Respecto de aquellos encuestados y encuestadas, que aseguran conocer más o menos, los instrumentos de control político, también juzgo como bien fundamentadas las razones que nos ofrecen. En razón que no se puede pretender, que quienes no mantienen un contacto diario con el desarrollo y ejercicio del trabajo, del control político, les lleguen a conocer y manejar en detalle.

Pero puedo agregar al respecto, que a la mayoría de estos profesionales, conté con el placer de aplicarles la encuesta de forma personal, por lo que pude advertir, que tienen un buen manejo de los aspectos normativos referentes a la temática que estudiamos.



#### **4.- ¿Considera usted que la moción de censura incluida en la Constitución**

**Política de Costa Rica, como mecanismo de control es:**

**A- Funcional**

**B- Poco funcional**

**C- Disfuncional**

**Justifique su respuesta:**

Me permito aclarar que únicamente, voy a realizar referencia a tres de las posiciones recogidas, por la sencilla razón que de este instrumento y de su poca eficiencia se ha venido tratando prácticamente en todas las preguntas precedentemente descritas. Aunque dejo para incorporar a pie de página las respuestas más destacadas.

Para siete de los profesionales encuestados y encuestadas, la moción de censura estatuida en la República de Costa Rica, aparece como un instrumento de control político, poco funcional, de las opiniones vertidas, estas representan un sesenta y cuatro por ciento de las mismas.

Los profesionales encuestados y encuestadas, justifican su posición basándolos en los siguientes motivos.

El primer funcionario nos indica: la moción de censura en nuestro país, únicamente mantiene valor moral. Por lo que es poco funcional, en el tanto y en el cuanto, carece del efecto normal, que en otros sistemas, mantiene este instrumento de control político.

Esta otra persona en su respuesta nos manifiesta es un instrumento de control político, poco funcional, porque no conlleva la pérdida del cargo del ministro que sea censurado.

En cambio este otro profesional afirma, no implica en términos prácticos, resultado alguno, lo cual puede hacer inferir que no es suficiente; pero su aplicación está en función directa, de la magistratura de influencia que ejerce la Asamblea Legislativa, a través de su peso moral y si este es bajo ... <sup>253</sup>

En cambio, cuatro de los señores y señoras encuestados, se pronuncian, advirtiendo que consideran a la moción de censura incluida en la Constitución Política de la República de Costa Rica, como un instrumento de control político totalmente disfuncional, para un porcentaje total del treinta y seis por ciento de sus valoraciones.

Estos profesionales, justifican su pensamiento, afirmando las siguientes razones:

Este funcionario, afirma en su respuesta, es un instrumento de control político, disfuncional y me atrevo a decir que hasta inútil, el mecanismo es absurdo, no vinculante y aplicado excepcionalmente. Además añade, cuando se pretenden conocer ese tipo de mociones, siempre son desactivadas las intenciones de censurar a través de la bancada oficialista.

Este otro funcionario manifiesta, la moción de censura es un instrumento de control político disfuncional, debido a que no tiene efectos vinculantes, pero nos añade, antes de pensar en eliminarle, más bien debería considerar otorgársele efectos jurídicos obligatorios.

En esta otra respuesta uno de los encuestados indica, la moción de censura es un instrumento de control disfuncional, por el motivo de que el voto de censura, en la República de Costa Rica, es una acción que no tiene sanción, ni es vinculante, ni obligatoria para el ministro.

---

<sup>253</sup> "La moción de censura es poco funcional, ello en el tanto carece del efecto normal de este instrumento".

"La censura solo tiene valor moral".

"La moción de censura, es un mecanismo de control poco funcional, creo el legislador, debería tener a sus manos mayores facultades".

"Si no hay una variación del sistema completo, no creo que sea funcional".

En cambio este otro de los señores encuestados nos afirma, nunca se ha conocido en la República costarricense de ninguna moción de censura, que haya provocado una reacción política, que se pueda considerar como importante en el gobierno.<sup>254</sup>

En esta tabla mostramos numéricamente como observan la moción de censura los señores y señoras encuestados y encuestadas.

Funcional	Poco funcional	Disfuncional	Responden encuesta	Total de encuestados
0	7	4	11	12

Como podemos observar de la tabla anterior, estos profesionales, no consideran a la moción de censura, como un instrumento de control político adecuado para nuestro régimen de gobierno, de hecho, que le valoran como poco funcional o en su defecto como disfuncional.

Debo indicar que estoy de acuerdo con las opiniones vertidas, en virtud de que creo que existen instrumentos de control político, tales como la interpelación que bien reglamentada y utilizada de forma eficaz y eficiente, viene a ser bastante mejor a la censura, y pueden proporcionar mayores beneficios y réditos, al Estado costarricense.

---

<sup>254</sup> "pues nunca se ha conocido de alguna que haya provocado una reacción política importante en el gobierno. De hecho, aún se encuentran en agenda legislativa censuras, que fueron planteadas hace casi dos años, por ejemplo".

"Es disfuncional ya que no tiene efectos vinculantes, en mi opinión antes de eliminarla debería otorgársele efectos jurídicos obligatorios"

"El voto de censura, es un voto que no tiene sanción y no es vinculante".

"considero que el legislador debería tener a sus manos mayores facultades, para ejercer el control político".

**5.- Considera adecuado el grado de coordinación existente entre la Asamblea Legislativa y sus Entes asesores, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes?**

**Si, No. Justifique su respuesta:**

Diez de los señores y señoras encuestadas, afirman que no aprecian, adecuado el grado de coordinación existente, entre la Asamblea Legislativa y sus entes auxiliares, como son la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República, para un porcentaje del noventa y uno por ciento.

Los encuestados y encuestadas explican sus razones, por las cuales determinan, que tanto entre la Asamblea Legislativa, superior en jerarquía, de la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República, no exista coordinación de trabajo. Con relación a esto indican las justificaciones siguientes.

El doctor Alex Solís Fallas, excontralor de la República, declara; considero que la coordinación no se produce, me parece que debería ser mucho más estrecha y coordinada, en el caso expreso de la Contraloría General de la República, realizamos mucho trabajo para la Asamblea Legislativa, pero en términos generales, sentimos que el producto que genera la Contraloría, para la Asamblea Legislativa no es aprovechable, ya que los diputados nos preguntan sobre todo, y esto obliga a la Contraloría a generar documentos muy largos y extensos, y en oportunidades técnicamente muy complicados, que más tarde no son utilizados en profundidad por el parlamento.

Otro de los profesionales encuestados manifiesta; no, la coordinación entre estos tres entes no se produce, creo que debe existir un mayor acercamiento y

coordinación, para conseguir una vigilancia mas efectiva y eficiente de la hacienda pública.

En esta otra respuesta el encuestado nos asegura, lo que existe es una enorme desorganización, y un gran incumplimiento de funciones de parte de la Contraloría General de la República y de la Defensoría de los Habitantes.

Uno más de los encuestados dice, esta no prevalece, existe descoordinación, la Contraloría General de la República, no asume su papel auxiliar. Y en algunos casos la Defensoría de los Habitantes, duplica funciones con la Contraloría General de la República.

Mientras que otro de los funcionarios encuestados afirma, considero que no existe una coordinación, en razón que no han sido entendidos, la Contraloría General de la República, y la Defensoría de los Habitantes como entes que deban coordinar su actividad, por ser asesores directamente de la Asamblea Legislativa, en determinados temas, sino es para casos específicos, por lo cual considero que esta relación puede mejorarse, debido a que ambas instituciones trabajan con una gran autonomía funcional. Que también se puede considerar como conveniente, por el trabajo que vienen desarrollando tanto, la Contraloría General de la República, como la Defensoría de los Habitantes de la República.

Este otro funcionario nos dice la coordinación no existe, dado a que la Asamblea Legislativa, no da seguimiento a los informes de la Contraloría General de la República y de la Defensoría de los Habitantes.

Este otro encuestado también nos dice, considero que esta no se proporciona, debido a que siempre será un área perfectible y que se complejiza en la medida en que se tornan más complejos y difíciles los retos democráticos que afronta el país.<sup>255</sup>

---

<sup>255</sup> "Hay mucho que hacer en coordinación y cooperación. Los órganos subalternos o auxiliares se manejan autónomamente, y hay un cierto desprecio hacia el funcionamiento de la Asamblea, por ser un órgano difuso, colegiado, horizontal, mientras que ellos son verticales, concentrados, con misiones mayormente objetivas, que un órgano político como es una Cámara Legislativa. Ciertamente hay que ser creativos y elaborar algunas relaciones más

En cambio, únicamente uno de los profesionales nos expresa que si considera que la coordinación existe, justifica indicando la siguiente razón.

"Si, la coordinación existe, si partimos de la independencia de criterio de la Contraloría General de la República".

En esta tabla presentamos numéricamente, los resultados de esta pregunta:

Si existe coordinación	No se da coordinación	Responden encuesta	Total de encuestados
1	10	11	12

Es muy preocupante saber que de los once encuestados y encuestadas, diez de ellos, advierten la problemática, consistente en la no existencia de coordinación,

---

estrechas que vengan en beneficio, sobre todo en el control de los recursos, los presupuestos, la eficiencia de la administración y el ejercicio de los derechos ciudadanos".

"De hecho la Defensoría siempre ha señalado que la Asamblea desperdicia la información que contienen sus memorias anuales tanto en su función legislativa como en la de control político. En el caso de la Contraloría entiendo que la relación se limita a solicitar algún acompañamiento en el trabajo de comisiones legislativas que conocen de materia técnica de la Hacienda Pública".

"No, esta debería ser más estrecha y coordinada, en el caso expreso de la Contraloría General de la República, se hace mucho trabajo, para la Asamblea Legislativa, en términos generales, sentimos que el producto que genera la Contraloría, para la Asamblea Legislativa, no es aprovechable. Ya que los diputados preguntan sobre todo, y esto obliga a la Contraloría a generar documentos muy largos y extensos, a veces técnicamente muy complicados que más tarde no son utilizados en profundidad por el parlamento"

"Debe existir mayor, acercamiento y coordinación para una vigilancia más efectiva de la Hacienda Pública".

"No existe coordinación, la Contraloría General de la República no asume su papel auxiliar. En algunos casos, también la defensoría de los Habitantes de la República, duplica funciones con la Contraloría General de la República".

"No hay una apropiada coordinación, ya que no han sido entendidos, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República, como entes que deben coordinar su actividad, por ser asesores directos de la Asamblea Legislativa, en determinados temas, sino esto es para temas específicos. Lo que si es cierto es que estas entidades trabajan con una gran autonomía funcional".

"el punto es establecer, que es coordinación, indica la Asamblea Legislativa ha querido someter sobre todo a la Contraloría General de la República, a una relación de subordinación orgánica, pero tampoco por su forma de actuación tan lenta, la asesoría técnica que le corresponde. Entiendo no es oportuna".

entre estos tres órganos, que son vitales para la estabilidad del Estado costarricense.

Somos del criterio que en especial, la Contraloría General de la República, por sus funciones tan técnicas, es obligatorio que mantenga una estrecha coordinación con la Asamblea Legislativa, coordinando prioridades de trabajo, para que el primer Poder de la República, se encuentre informado, de lo que esta sucediendo en la República costarricense; y por tanto cuando le estime necesario, pueda tomar la decisión de intervenir en cualquier asunto que considere absolutamente necesario. Además, por el valioso trabajo que en el país despliega, la Defensoría de los Habitantes de la República, es necesario que existan mecanismos propios, de coordinación y control, entre esta entidad y la Asamblea Legislativa, surgiendo la urgente necesidad de buscar los medios, que corrijan esta gravísima y critica problemática, en aras de que se pueda aprovechar mejor el trabajo, generado por esta entidad.

Reflexiono, que con la finalidad de no duplicar funciones y optimizar la buena utilización de los recursos disponibles, la coordinación, que se debe establecer, no debe ser individualizada, entre la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa y entre esta última y la Defensoría de los Habitantes, sino más bien, la coordinación a establecer, debe ser algo que las incluya a todas, de tal forma, que la Contraloría General de la República, también en determinado momento, venga a ser alimentada de la importantísima información, que constantemente esta fluyendo o emanando de la Defensoría de los Habitantes de la República.

Además es importante, que estas dos instituciones puedan desempeñar sus funciones, seguras de que si requieren de la colaboración, apoyo y confianza, de su superior jerárquico, como viene a ser en esta oportunidad la Asamblea Legislativa, lo van a conseguir de una manera que sea rápida, pronta y oportuna.

## **6.- "Qué entiende usted cuando se habla de control político, como lo debe ejercer la Asamblea Legislativa?**

### **Explique su respuesta:**

Esta pregunta es contestada por los once de los señores y señoras encuestados, manifiestan lo que conciben como control político, para un gran porcentaje del cien por ciento

Las respuestas son interesantes y llamativas, pero como la mayoría son conceptuales, preferimos agregarlas a pie de página ya que estas respuestas, se hacen muy extensas para comentarles una a una, por lo que considero más apropiado realizar lo precedentemente precisado.<sup>256</sup>

---

<sup>256</sup> "Por control político, debe entenderse, el control sobre la forma en que ejerce el poder la Administración. Debe centrarse en evaluar programas y acciones de gobierno, desde la perspectiva de la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas, además de la legalidad y transparencia en la ejecución de responsabilidades y el alcance de los resultados obtenidos. Debe focalizarse en las áreas prioritarias del desarrollo, es decir, en aquellos aspectos que impacten la situación social, económica y políticas del país y que logren satisfacer los derechos fundamentales de la población".

"Hay varios mecanismos para ejercerlo, comisiones de investigación, interpelación voto de censura, etc".

"Es la función encomendada a la Asamblea Legislativa para la investigación de funcionarios o para la constitución de comisiones de investigación"

"Es un control fundado, en criterios distintos o no a los jurídicos, y fundado sobre todo, en la consideración de los efectos políticos de las decisiones políticas o administrativas".

"Labores de Crítica de oposición y ventilación del correcto uso de los fondos públicos, así como de las actuaciones de todos los funcionarios públicos".

"En términos generales, es la supervisión o vigilancia, que lleva a cabo el parlamento, para determinar si los gobernantes y agencias públicas en general, así como empleados públicos en general ajustan o no sus políticas y actuaciones con el ordenamiento jurídico, la eficiencia, la eficacia y la moral o los principios éticos que imperan en la sociedad por ejemplo".

"El control político, es aquel control, o incluye aquellas investigaciones sobre actos del gobierno, o de los demás poderes en búsqueda de la forma en como se están utilizando los recursos públicos".

"El control político, es el control de los ciudadanos, por medio de sus representantes, sobre el buen ejercicio de la función pública, y de los recursos públicos".

"Esta es una labor propiamente parlamentaria y se debe desarrollar como se desarrolla la labor parlamentaria, esto quiere decir que en toda investigación deben respetarse los principios básicos del debido proceso, o sea a cualquier funcionario, que se le atribuya hechos que resulten ser ilegítimos, o que eventualmente le puedan representar responsabilidad penal o disciplinaria, se le debe representar el derecho a defensa".

"Control político se puede entender en varios sentidos, uno el control sobre el ideario, programa de gobierno, políticas públicas, ejecución o inejecución, etc. Otra acepción sería el control político ligado a la denuncia, la irregularidad, el



7.- Señale los principales aspectos en orden de importancia que pueden entorpecer la labor del control político. Marque la respuesta en orden de importancia

A- Los partidos políticos

B- Presión del Poder Ejecutivo

C- Presión de los empresarios privados

D- Desconocimiento de como realizar esta labor contralora

E- Intereses personales

F- Negativa o entorpecimiento a entregar información por parte de las instituciones públicas.

Las respuestas que los señores y señoras encuestados , brindaron a los diferentes ítems, que se evalúan en esta pregunta, fue variada, como podrán advertir, de las alternativas seleccionadas, por los distintos encuestados y encuestadas.

La alternativa, que con mayor frecuencia, fue preferida para determinarle como el factor, que mayoritariamente puede estar entorpeciendo, el buen desarrollo del ejercicio de la función del control político, la debemos presentar en dos formas:

Primeramente fue mencionado por los señores y señoras encuestados, como el factor que mayoritariamente, puede venir a entorpecer, el ejercicio del control político, la presión que reciben los diputados y diputadas por parte de los partidos políticos, éste factor fue aludido por los encuestados, en nueve ocasiones. Y cuando procedimos a agrupar las respuestas, por grado de preferencia o prioridad, el factor que ocupa el primer lugar se repite, y es nuevamente, la presión que se recibe de parte de los partidos políticos, el

---

despilfarro, la corrupción de los funcionarios y jefes de los otros poderes o instituciones descentralizadas. Una tercera visión sería el control de presupuestario, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados rendimientos”.

agente que en forma mayoritaria, es mencionado por los señores y señoras encuestados, citándose en cinco ocasiones este factor.

Como este factor repitió en las dos formas expuestas, únicamente seguiremos haciendo mención, a las opciones que mayoritariamente fueron citadas, como factores que podrían ser entorpecedores, del trabajo sobre el control político.

En relación a esto, nueve de las respuestas recibidas, de parte de los encuestados y encuestadas, identifican, como el segundo factor que prioritariamente puede obstaculizar, la función del ejercicio del control político, lo ubican en el desconocimiento, que tanto los señores diputados como las señoras diputadas, puedan mantener del cómo desarrollar la función contralora. Este factor lo ubicamos de segundo en razón que, los partidos políticos, como lo explicamos precedentemente, repitieron en el punto anterior.

Como tercer factor, que puede ser un entorpecedor del control político, los señores y señoras encuestados, nos aluden en ocho ocasiones, a los intereses personales y a la presión que pueden recibir por parte del Poder Ejecutivo, los señores diputados y señoras diputadas.

En último lugar, los encuestados y encuestadas, señalan en seis oportunidades, a la negativa o entorpecimiento a entregar información por parte de las instituciones públicas. Igualmente se cita como un factor más, que puede venir a ser entorpecedor de la función contralora, a la presión que proviene hacia los legisladores, de los empresarios privados.

Representamos en esta tabla, numéricamente los resultados explicados, precedentemente, a introducir nuestro análisis de esta pregunta.

Factores que entorpecen la función de control político:

Grado de valoración	# de respuestas	Orden de importancia
Partidos Políticos	9 = 82%	1
Presión del Poder Ejecutivo	8 = 73%	2
Presión de los empresarios privados	6= 55%	6
Desconocimiento de como realizar esta función contralora	9 = 82%	3
Intereses personales	8 = 73%	3
Negativa o entorpecimiento a entregar información por parte de las instituciones públicas	6 = 55%	6

Es preocupante que los profesionales encuestados y encuestadas, vean en la presión de los partidos políticos, a uno de los factores que mayoritariamente puedan estar entorpeciendo, la buena marcha del ejercicio del control político, porque esto, nos estaría indicando que los señores diputados y señoras diputadas, no estarían actuando con total independencia, lo cual amenazaría el desarrollo de nuestra democracia, de la cual siempre hemos hecho alarde los costarricenses, y por ende el desenvolvimiento de la República de Costa Rica.

## **8.- ¿cómo considera que se pueden mejorar los instrumentos de control político?**

### **Explique**

De las respuestas a esta pregunta, hallamos varias propuestas bastante llamativas, que si se pudieran llegar a implementar, realmente reforzarían el trabajo del control político, que debe ser desempeñado, por nuestra Asamblea Legislativa.

Las once personas encuestadas, nombran alguna clase de recomendación, para llegar a mejorar los instrumentos de control político, de la República de Costa Rica, o sea que el cien por ciento respondieron la pregunta:

Uno de los encuestados nos afirma, que se requiere de una reforma constitucional, para poder llegar a mejorar los instrumentos de control político. Mientras que otra de las recomendaciones, tomada de uno de los encuestados, manifiesta, es necesario que las Comisiones de Investigación, sólo estén integradas por miembros de los partidos de oposición. Y asegura se requiere modificar, la moción de censura, para que ésta sea vinculante y por lo tanto, conlleve la caída del jerarca, que llegue a ser censurado. También dice se necesita ampliar las interpelaciones, para que abarque a otros funcionarios. Muchas de las recomendaciones recibidas, prosiguen nombrando alternativas similares, para mejorar el trabajo de control político, aunque se esta tratando, de propuestas para su mejora, se mencionan, sus inconsistencias. Para quienes deseen conocer las otras recomendaciones, se anexan a pie de página.<sup>257</sup>

---

<sup>257</sup> "Las comisiones legislativas, deben organizarse como un espejo del sector público, y ejercer un control permanente especializado y profesional"

"Mediante reformas al reglamento legislativo".

"Con una mayor capacitación a los diputados y fracciones, y un entendimiento con otras instancias, incluida la Sala Cuarta".

"Importante resultará el verdadero desarrollo, de una cultura de rendición de cuentas del país, que establezca la obligación de los funcionarios, de dar cuenta de las responsabilidades y el poder que se les delega y el derecho de los habitantes, como titulares de la autoridad, de solicitarla. Debe reformarse el sistema, para establecer mecanismos de control parlamentario más efectivos como los que posee el régimen parlamentario".

## **9.- Considera usted que la República de Costa Rica, esta sometida o al menos influida por el fenómeno partidocrático?**

**Si, No. Justifique su respuesta.**

Once de los profesionales encuestados y encuestadas nos dicen que consideran que, en la República costarricense, si se produce el factor del fenómeno partidocrático, para un cien por ciento de las respuestas.

Este encuestado nos manifiesta, las siguientes justificaciones para confirmar la existencia de tal fenómeno, en la República costarricense; señala esto es así, porque todas las decisiones en el parlamento, se basan en lo que opinan los partidos políticos mayoritarios.

En esta otra respuesta el encuestado nos afirma, claro que sí se produce, pero esta en vías de debilitamiento.

Las demás justificaciones dado a que tienen muchas similitudes, les agrego a pie de página.<sup>258</sup>

---

"Empoderamiento ciudadano, en labores de control y rendición de cuentas".

"Las Comisiones de Investigación, sólo deben estar integradas por miembros de partidos de oposición. La censura vinculante con la caída del ministro, Interpelación ampliada a otros funcionarios. Debate real con el Presidente en el recinto parlamentario, sobre la conducción y marcha del gobierno".

<sup>258</sup> "Si entendemos por partidocracia el concepto de SARTORI, si me parece que tenemos una alta influencia de esa visión, es una democracia de monopolio partidario, hay disciplinas partidarias, uniones de cúpulas, el partido está antes que el ciudadano. Tómese en cuenta que hay crisis de partidos y en este momento no son buenos mediatizadores de las demandas, hay problema de adherencias, prueba de ello es el abstencionismo".

"Si, claro, y ese es un factor que entorpece la función de control político, no obstante, se debe decir, que hay una tendencia hacia su debilitamiento, como se puso de manifiesto en las últimas elecciones".

"Sí, los partidos políticos tienen muchísima ingerencia en los nombramientos y mantienen mucho poder".

"Si ocurre tal fenómeno, ya que no hay ninguna otra forma de acceder a la Asamblea Legislativa, si no es por medio de un partido político, al cual se representa. Aunque de hace unos años para acá hay menos tesis de partido obligatorias, talvez, nuestros partidos han decaído un poco en sus principios y exigencia de respeto a sus principios, y en este momento los diputados tienen una gran independencia en su función propiamente legislativa, y fácilmente se declaran independientes".

"El acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas así lo acredita".

10.- ¿Cómo percibe usted que evalúa el pueblo la labor de control que cumple la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Marque con equis su respuesta

A- Muy buena

B- Buena

C- Aceptable

D- Inaceptable

En la subsiguiente tabla, presento la valoración que los once profesionales encuestados y encuestadas ofrecen a la pregunta expuesta

Muy buena	Buena	Aceptable	Inaceptable	Responden encuesta	Total de encuestados
0	1	3	7	11	12

El criterio expuesto por los encuestados sobre la valoración que creen otorga el pueblo costarricense, a la función de control político, es una advertencia para que, el Poder Legislativo, comience a examinar, de qué manera se puede llegar a legislar mejor en este asunto, y de qué forma ir creando una cultura de confianza, en el ejercicio del control político, desempeñado por la Asamblea Legislativa, que gane la aprobación del pacífico pueblo costarricense.

---

"Aunque no lo hacen, en defensa de ideologías de partido sino de representación concreta, en instancias de poder (cargos en instituciones). Ello porque los partidos, sólo actúan como maquinarias electorales y luego de la elección pierden su vigencia en el sistema, la Asamblea sigue funcionando con esa lógica, por lo menos desde el punto de vista de los partidos mayoritarios (PUSC y PLN). Los otros partidos (salvo el Movimiento Libertario), que actualmente tienen presencia en la Asamblea, no logran desarrollar una línea ideológica lo que los hace incurrir en imprecisiones en cuanto a la toma de posiciones".

## **11.- ¿En qué aspectos considera usted necesario que los señores diputados reciban capacitación específica para ejercer la función de control político?**

**Explique por favor:**

Los once encuestados responden la pregunta, aunque uno de ellos nos manifiesta que se va abstener de responderle.

Todos los demás encuestados y encuestadas conceden alguna sugerencia, pero al ser éstas, demasiadas comentaré algunas y las demás serán agregadas a pie de página, como he hecho en ocasiones anteriores.

Lo más relevante de estas respuestas, es que la gran mayoría de encuestados y encuestadas, consideran como necesario, que los señores diputados reciban algún tipo de capacitación, en temáticas muy específicas, entre las que resaltan las parlamentarias, jurídicas e investigativas, los detalles propiamente dichos, como se expreso anteriormente, pueden ser consultados en la nota de pie de página. Pero me parece muy apropiada, la siguiente recomendación por lo que le destaco de forma especial. Este encuestado nos manifiesta:

“El primer paso hacia la profesionalización del control político, es la creación de la carrera parlamentaria o reelección continua de los diputados, luego de esto, la capacitación tendría más sentido”.

Me parece muy lógica esta posición, porque además, de que la capacitación se aprovecharía de mejor forma, los diputados y diputadas, se preocuparían más por su gestión particular. <sup>259</sup>

---

<sup>259</sup> “Se avanzaría mucho en el país, si unas semanas previas a que los diputados asuman sus funciones o muy pronto, después de su juramentación participen en seminarios, donde se les diga, explique o enseñe que es el control, los parámetros o procedimientos, para ejercer la función de control, los efectos que posee el control, en el sentido, de que si son mandatos jurídicamente vinculantes o recomendaciones de tipo ético políticas, moral etc. Y por último enseñar a los diputados, la importancia que para el sistema tiene la función de control, es básico que todos entendamos, que el sistema democrático, esta fundado en un sistema muy amplio de mecanismos de control, que se diferencian entre si,

Lo anterior lo pienso así, debido a que para los legisladores sería, un factor motivador, poder aspirar a la reelección, ya que en muchas ocasiones, escuchamos la queja, de que en cuatro años, se pueden hacer muy pocas cosas, por el motivo de que los dos primeros años, son de acomodo y en los otros dos años se suele decir, ya se esta pensando en las nuevas elecciones. O sea, como se puede considerar el trabajo a realizar por los diputados y diputadas, percibido de esta manera, es muy limitado.

---

por los sujetos, los procedimientos y los efectos que produce el control, así por ejemplo una clase de control, es el que lleva acabo la Sala Constitucional, otra muy diferente, es el que lleva a cabo la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República, o las auditorias de entidades financieras, o las autoridades reguladoras de precios y de esa misma manera también, es diferente el control que lleva a cabo la Asamblea Legislativa”.

“Conocimiento de los procedimientos legislativos, reglas de comportamiento en su gestión, sobre todo en uso de recursos, manejo presupuestario, conocimiento sistémico de la administración, también instrumentos o mecanismos para rendir cuenta a las comunidades que representan”.

“En proceso legislativo y en derecho parlamentario”.

“Conocimiento de Derecho parlamentario, la diferenciación entre diversos grados del accionar institucional, así como la misma distinción entre lo jurídico y lo político y sus efectos”.

“Cuando inician sus labores en materia de procedimiento legislativo y Derecho Constitucional”.

“Investigación jurídica con énfasis en el control”.

“En materia parlamentaria, o sea en todo el quehacer, de la misma Asamblea Legislativa y en el rol que cumple la Contraloría General de la República con la finalidad de mejorar la coordinación”.

“Los procesos de escogencia y selección democrática de diputados es el que determina el control y tipo de control que éstos realizan”.

“Muchos no conocen, detalles del funcionamiento del Estado de Derecho, (división entre poderes, actuación del parlamento en el sistema institucional, funciones de la Sala Constitucional, supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales, como límites y guía para cualquier política estatal, naturaleza de los órganos de control, procedimientos y alcances de las Comisiones de Investigación”.



## C. Recapitulación de los resultados logrados, de las respuestas obtenidas de los dos grupos estudiados.

### C1. Grados de congruencia, entre las opiniones de ambos grupos de encuestados.

Mediante el desarrollo de este tercer apartado, se exponen ilustrados, en cuadros estadísticos generales, las diferentes preguntas, en que tanto los legisladores como los no legisladores encuestados, llegan a coincidir, en sus respectivas respuestas.

En la primer pregunta, examinamos, la opinión, que ambos grupos de encuestados, mantienen sobre el ejercicio del trabajo de control político, desempeñado por la Asamblea Legislativa. Observemos en este cuadro el grado de congruencia, entre ambas posiciones.

Pregunta 1	Legisladores que responden	Opciones	Porcentaje	No Legisladores	Opciones	Porcentaje
Control político	49	Eficiente	19 = 39%	11	Eficiente	0
		Poco eficiente	29=59%		Poco Eficiente	8=73%
		Ineficiente	1 = 2%		Ineficiente	3=27%

Podemos reflexionar con estos resultados, la existencia de un problema, en el ejercicio del trabajo de control político, en razón, que tanto los legisladores, como los no legisladores, están señalando y reconociendo mayoritariamente, que esta labor por parte de la Asamblea Legislativa, de la República de Costa Rica, se está efectuando de forma poco eficiente.

En la segunda pregunta, examinamos, la necesidad o no, que ambos grupos de encuestados, advierten sobre la incorporación de nuevos instrumentos de control político, en la Constitución Política de la República de Costa Rica. Observemos en este siguiente cuadro nuevamente el grado de congruencia, que se muestra, entre ambas posiciones.

Pregunta 2	Legisladores que responden	Opciones	Porcentaje	No Legisladores	Opciones	Porcentaje
Necesidad de instrumentos de control político	49	Si	31=63%	11	Si	7 = 64%
		No	18 = 37%		No	4 = 36%

Con estos resultados, queda desenmascarada y evidenciada la necesidad, que de forma mayoritaria, tanto el grupo de legisladores, como los no legisladores, están advirtiendo del requerimiento, que se tiene de proceder con el trabajo de modificar la Constitución Política, de la República de Costa Rica, para proceder con el trabajo, de incorporar nuevos instrumentos de control político, o en su defecto, de ampliar las potestades de los ya existentes. Que a mi opinión viene a ser prácticamente lo mismo.

En cambio en la tercera pregunta, examinamos, el conocimiento que ambos grupos de encuestados, afirman tener de los instrumentos de control político, establecidos en nuestra Constitución Política. Observemos en este subsiguiente cuadro sus opiniones.

Pregunta 3	Encuestados	Opciones	Porcentaje
Conocimiento de los instrumentos para la función contralora	Legisladores	Mucho	31 = 63%
		Más o menos	18 = 37%
	No legisladores	Mucho	8 = 73%
		Más o menos	3 = 27%

Ante estos resultados, nos damos cuenta, que tanto los legisladores, como los no legisladores, están indicando, tener un buen conocimiento de los instrumentos de control político, vigentes en el país. De sus opiniones, inferimos, que si les conocen, aunque los señores legisladores, muestran en relación, con los no legisladores, un menor detalle y profundidad en sus manifestaciones. Ya que como podemos notar de las respuestas de los no legisladores, estos establecen tener un manejo más preciso y amplio de estos mecanismos de control político.

Mientras en la cuarta pregunta, evaluamos el criterio, que ambos grupos de encuestados, mantienen acerca de la eficacia de la moción de censura, establecida en nuestra Constitución política. Observemos en este cuadro sus discernimientos al respecto.

Pregunta 4	Encuestados	Opciones	Porcentajes
Valoración de moción de censura	Legisladores	Funcional	6 = 12%
		Poco funcional	33 = 67%
		Disfuncional	10 = 20%

Pregunta 4	Encuestados	Opciones	Porcentajes
Valoración de moción de censura	No legisladores	Funcional	0
		Poco funcional	7 = 64%
		Disfuncional	4 = 36%

De estos resultados, queda más que evidenciada y probada la ineficacia, que de la moción de censura, estatuida en la República costarricense, como instrumento de control político, poseen tanto el grupo de legisladores, como los no legisladores. Su poca eficiencia la fundamentan primordialmente, en que no tiene más que efectos morales, y sus resultados no son vinculantes para el ministro censurado.

A contrario sensu, en la quinta pregunta, valoramos los criterios, que ambos grupos de encuestados, sostienen sobre la coordinación, existente entre la Asamblea Legislativa y sus dos entes auxiliares, como son la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República. Denotemos en este siguiente cuadro sus razonamientos al respecto.

Pregunta 5	Encuestados	Opciones	Porcentaje
Existencia de coordinación entre la Asamblea y sus entes auxiliares	Legisladores	Si	11 = 22%
		No	38 = 78%
	No legisladores	Si	1 = 9%
		No	10 = 91%

De estos resultados, queda más que recalcada y evidenciada la carencia de coordinación entre la Asamblea Legislativa y sus dos órganos auxiliares, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes.

En la pregunta número seis, procurábamos medir, lo que entendían por control político, los encuestados y como consideraban ellos, debía ejercerlo la Asamblea Legislativa, miremos en este pequeño cuadro los resultantes de la pregunta.

Pregunta 6	Encuestados	Dan Concepto	No Responden
Concepto sobre el control político	Legisladores	41 = 84%	8 = 16%
	No legisladores	11 = 100%	0

Como se puede notar ambos grupos de encuestados, tienen una aceptable opinión, del como se debe entender al control político, en donde si encontramos una debilidad, es en el como se debe ejecutar, ya que prácticamente, este aspecto fue obviado en las respuestas logradas.

En la pregunta número ocho, procurábamos recolectar las opiniones, de los dos grupos de encuestados de la forma en que consideraban ellos, podrían mejorarse los instrumentos de control político, dispuestos en la Constitución Política de Costa Rica. Observemos en este pequeño cuadro, los resultantes obtenidos de la pregunta en análisis.

Pregunta 8	Encuestados	Ofrecen recomendación	No Responden
Formas para mejorar instrumentos de control políticos	Legisladores	40 = 82%	9 = 18%
	No legisladores	11 = 100%	0

Como puede apreciarse, de los resultados expuestos, se dieron a mi criterio varias interesantes y buenas recomendaciones, para poder mejorar los instrumentos de control político, vigentes en la actualidad, nos queda esperar cuando serán puestas en ejecución?

En la pregunta nueve consultamos, a los encuestados, si consideran que la República de Costa Rica, se encuentra sometida o al menos influida por el fenómeno partidocrático. Conozcamos en este subsiguiente cuadro sus argumentaciones al respecto.

Pregunta 9	Encuestados	Opciones	Porcentaje
Influencia del fenómeno partidocrático	Legisladores	Si	35 = 71%
		No	7 = 14%
	No legisladores	Si	11 = 100%
		No	0

En este caso nos queda muy poco que comentar, en razón que la existencia de dicho fenómeno, ha quedado mas que demostrado, de los resultantes de esta pregunta. Y de la normativa costarricense, comentada en páginas anteriormente citadas.

En la pregunta once, planteábamos la interrogante si los encuestados estimaban necesario, que los señores diputados y las señoras diputadas recibieran capacitación en materia de control político. Observemos en el cuadro siguiente estos resultados.

Pregunta 11	Encuestados	Opciones	Porcentaje
Necesidad de capacitación a legisladores	Legisladores	Si	33 = 67%
		No	8 = 16%
	No legisladores	Si	10 = 91%
		No	1 = 9%

Como podemos notar, de los resultados de esta pregunta, quedó evidenciada la necesidad, que ambos grupos de encuestados advierten, de algún tipo de capacitación, para los legisladores y legisladoras de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Por tal razón considero, que es preciso que tanto los partidos políticos, así como la propia Asamblea Legislativa comience, a valorar el aspecto referente a la capacitación de los diputados. Y los partidos políticos, trabajen un programa formativo, tendiente a mejorar la capacitación para aquellos futuros legisladores que lleguen al Poder Legislativo.

## **C2. Divergencias, en las opiniones brindadas por ambos grupos de encuestados.**

Como pudimos observar del apartado anterior, las opiniones de los legisladores, tanto como la de los no legisladores, encontramos una gran congruencia en sus respuestas, esto es tan evidente, que únicamente poseemos dos preguntas en donde se presenta algún tipo de divergencia, ni siquiera de forma total, porque en la pregunta número siete, comparten una parte de la respuesta aportada, a ésta pregunta.

Las preguntas a las cuales hacemos referencia son la número siete y la número diez. En la pregunta siete, buscábamos posibles influencias negativas, que podían influir en el grado de la eficiencia, del ejercicio del control político. Observemos en este cuadro los resultados de las respuestas obtenidas.

Grado de valoración	# de respuestas	Orden de importancia
Partidos Políticos	26=53%	15
Presión del Poder Ejecutivo	32 = 65%	9
Presión de los empresarios privados	22 = 45%	1
Desconocimiento de como realizar esta función contralora	33 = 67%	10
Intereses personales	36 = 73%	10
Negativa o entorpecimiento a entregar información por parte de las instituciones públicas	39 = 80%	5



Grado de valoración	# de respuestas	Orden de importancia
Partidos Políticos	9 = 82%	1
Presión del Poder Ejecutivo	8 = 73%	2
Presión de los empresarios privados	6 = 55%	6
Desconocimiento de como realizar esta función contralora	9 = 82%	3
Intereses personales	8 = 73%	3
Negativa o entorpecimiento a entregar información por parte de las instituciones públicas	6 = 55%	6

La segunda pregunta, que presupone la existencia de alguna breve divergencia, entre las opiniones brindadas por ambos grupos de encuestados, hallamos los resultados siguientes, los que procedemos a ofrecer en el cuadro que prosigue.

Pregunta 10	Encuestados	Opciones	Porcentajes
Percepción de valoración de la función de control político	Legisladores	Muy buena	2 = 5%
		Buena	5 = 10%
		Aceptable	21 = 43%
		Inaceptable	19 = 39%

Pregunta10	Encuestados	Opciones	Porcentajes
Percepción de valoración de la función de control político	No legisladores	Muy buena	0
		Buena	1 = 9%
		Aceptable	3 = 27%
		Inaceptable	7 = 64%

Como podemos observar no son muy notables, ni significativas las diferencias mostradas, que se han expuesto de los pareceres examinados y exhibidos previamente.

### **C3. Aspectos de mayor relevancia a resaltar sobre los resultados de la encuesta de opinión.**

Queda probado, de los dictámenes emitidos por ambos grupos de encuestados, (Legisladores y no legisladores), que el trabajo que se esta desempeñando, en materia de control político, se realiza de manera poco eficiente. Esto, según sus consideraciones, obedece a varias razones, entre las que resaltan :

1.- Los instrumentos de control político, no son eficaces, ni eficientes, debido a que no proporcionan a los legisladores, ninguna clase, de posibilidad de aplicar ninguna sanción disciplinaria, que venga a ser inmediata.

Tampoco están bien instrumentalizados, ni regulados. La interpelación, se encuentra establecida exclusivamente, para los ministros de gobierno. Igualmente ocurre con la moción de censura, la que tiene limitado su empleo, únicamente también para los ministros, y no produce más que sanciones morales y políticas, sus efectos no vienen a ser vinculantes, ni para el jerarca censurado, ni para el Poder Ejecutivo.

Además, el gobierno no atiende a las denuncias del control político, y la Asamblea Legislativa no cuenta con mecanismos, para obligarle a dar seguimiento o cumplimiento con dichas denuncias.

2.- Los instrumentos de control político, no son correctamente aplicados, ni manejados por los legisladores. Prevalece cierto grado, de desconocimiento, cómo desempeñar eficazmente, la función contralora.

3. - La prensa nacional, en gran manera ha venido, a sustituir al parlamento, en su función de control político, ya que es ésta, la que denuncia mayoritariamente las deficiencias e irregularidades, en el actuar de las instituciones públicas y de sus jerarcas.

4.- En las preguntas una, dos, cuatro, y ocho, se insiste de manera reiterativa, en la necesidad que se tiene, de llegar a reformar el reglamento legislativo, para poder hacer eficiente y eficaz, el trabajo de control político. Agrego yo lo que se necesita es emitir un nuevo Reglamento Legislativo, que corrija, las anomalías en materia de control político, pero que abarque otras funciones de la Asamblea Legislativa. O sea que sea acorde a los tiempos modernos.

5.- En las preguntas una, dos, cuatro, ocho y once se insiste y recalca, en la eminente necesidad, de llegar a otorgar mayores facultades, a la moción de censura, para que pueda ser empleada con otros funcionarios, además de los ministros de gobierno y para que se le otorguen facultades inmediatas; como es provocar la caída del jerarca, que llegue a ser censurado por parte de la Asamblea Legislativa.

6.- Para poder, llegar a implementar la mayoría de los requerimientos mencionados, por los legisladores y no legisladores, se requiere obligatoriamente, que por parte de la Asamblea Legislativa, se proceda con una modificación parcial a la Constitución Política de la República de Costa Rica. En razón que la mayoría de limitaciones determinadas, están contenidas dentro de la propia Constitución Política.

7.- De los resultados de la pregunta número ocho, queda claro, que se requieren de modificaciones:  
constitucionales y al reglamento legislativo, para poder hacer eficiente el ejercicio de la labor de control político.

8.- Otro factor, según las opiniones vertidas, que esta influyendo en la eficacia y eficiencia, del ejercicio del trabajo de control político, es la presión que reciben los diputados, por parte de los dirigentes de los partidos políticos.

9.- Se demuestra que existe una total carencia, de coordinación entre la Asamblea Legislativa y sus entes auxiliares como son:

La Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República.

10.- Se establece, en la República de Costa Rica, la influencia del fenómeno partidocrático. Ya que no existe, otra forma de acceder al poder, si no es a través de un partido político. Así se estatuye constitucionalmente.

11.- Queda probada la necesidad que los legisladores, mantienen de algún tipo de capacitación, en temáticas específicas, como las señaladas en el desarrollo, de la pregunta número once.

Por tal motivo, es evidente el requerimiento de que por parte de la Asamblea Legislativa, se mantenga preparado algún programa de capacitación, para los nuevos diputados y diputadas, para el momento que lleguen a asumir sus curules.

12.- Se determinan ciertos niveles de confusión entre los legisladores y legisladoras, al querer encontrar la funcionalidad, eficiencia y eficacia, del ejercicio del trabajo de control político, únicamente en sanciones inmediatas, como por ejemplo puede ser la caída del jerarca. Obviando y desatendiendo con este pensamiento una de las funciones primordiales del control político, la cual tiene por finalidad que el pueblo se mantenga informado del trabajo que desarrolla el gobierno, por que de esto en mucho dependerá, la permanencia en el poder del grupo que en ese momento este gobernando a la nación. Dado a que será el mismo pueblo, quién finalmente aplique la sanción a ese gobierno. Por esas circunstancias es fundamental que el trabajo de control político, grave entre los partidos de oposición, mucho más que en el partido de gobierno.

13.- Tampoco se puede olvidar que de un efectivo trabajo de control político, pueden llegarse a obtener resultados, tales como que el Poder Legislativo advierta la necesidad y hasta la obligatoriedad de normar y regular ciertos

asuntos, con la finalidad de no permitir o facilitar abusos que se estén consintiendo por ausencias de normas jurídicas, que permitan acometer contra esas deficiencias.

14.- De este estudio, se prueban nuestras variables, en las cuales afirmamos, que los instrumentos de control político, están influyendo de forma negativa, en el trabajo desarrollado en materia de control político. En razón que los mismos no se encuentran adecuadamente operacionalizados, lo que da como resultado muchas de las limitaciones existentes, en el ejercicio de esta labor contralora.

15.- También de la investigación efectuada se prueban en gran manera los objetivos planteados, ya que evaluamos tanto, la función de control político, como los instrumentos estatuidos, para su ejercicio, asimismo, se evidencia un perfil del real conocimiento que de esta materia tienen los diputados de la Asamblea Legislativa, de la República de Costa Rica.

Además, se evidencia el requerimiento de nuevos instrumentos de control político, como la necesidad de perfeccionar o proceder a operacionalizar los ya existentes.

Asimismo, está demostrada la poca eficiencia de la moción de censura, y por ello la justificación de llegar a excluirle como mecanismo de control político. Finalmente, ha quedado más que demostrado la necesidad de crear mecanismos de coordinación entre la Asamblea Legislativa y sus entes auxiliares, como vienen a ser la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República.

### **Capítulo III**

***Análisis comparado entre los mecanismos de control político, empleados en el régimen de gobierno parlamentario español, en CONTRAPOSICIÓN con los mecanismos de control político, utilizados en el régimen de gobierno presidencialista de la República de Costa Rica. Y propuestas de cambios a su modelo de control político, ejercido por su Asamblea legislativa.***

#### **A) Análisis comparado entre ambos REGÍMENES de gobiernos.**

El propósito que se pretende con el desarrollo de esta parte de la investigación, es valorar y comparar la eficacia y eficiencia de los mecanismos de control político, que prevalecen tanto en la legislación española, así como en la legislación costarricense. Por tal razón profundizaremos en aquellos instrumentos de control político que sean comunes en ambos gobiernos.

Es preciso señalar que la comparación se va a efectuar entre dos regímenes políticos de gobierno, diferentes en razón que el régimen de gobierno español, como es sabido es de corte parlamentario, mientras que el régimen de gobierno costarricense es de carácter presidencialista.

## **Las preguntas parlamentarias.**

Iniciamos este trabajo comparativo, haciendo mención a un instrumento de control político, muy valioso e importante que contempla la legislación española, para desarrollar la función de control parlamentario sobre el gobierno, como son las preguntas parlamentarias, las cuales se regulan en el reglamento del Congreso de los diputados, en los artículos del ciento ochenta y cinco, al ciento noventa, y en el Reglamento del Senado del ciento sesenta al ciento sesenta y ocho.<sup>260</sup>

Mediante las preguntas parlamentarias, los diputados y senadores españoles están autorizados para acceder como un todo al gobierno español, formulándoles preguntas sobre su actuar, a cada uno de sus miembros.

Para poder ejercitar su derecho a preguntar, deben presentar por escrito, ante la mesa del Congreso o del senado las respectivas preguntas. Es significativo destacar que no se admiten preguntas, de exclusivo interés personal de quien la formula, ni la que suponga consulta de índole estrictamente jurídica. Asimismo, cuando se solicita la respuesta oral ante el Pleno, el escrito no puede contener más que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto, o si el Gobierno va a remitir al Congreso algún documento o a informarle acerca de algún extremo. Los escritos deben presentarse con un termino no superior a una semana ni inferior a cuarenta y ocho horas. En el debate, tras la escueta formulación de la pregunta por el Diputado u senador, contesta el Gobierno. Aquél puede intervenir a continuación para replicar o repreguntar y, tras la nueva intervención del Gobierno, termina el debate. Los

---

<sup>260</sup> Constitución Española y Reglamentos del Congreso de los diputados.

Obra citada, op.cit,Madrid, septiembre año, 2004



tiempos se distribuyen de tal forma que en ningún caso la tramitación de la pregunta pueda exceder de cinco minutos.<sup>261</sup>

Considero que las preguntas parlamentarias, son una herramienta de control político, de gran utilidad, ya que a través de ellas es posible encontrarse enterado de muchas cosas, que ocurren a lo interno del gobierno. Porque éstas adicionalmente a ser un mecanismo de control parlamentario, se constituyen en una forma de lograr alcanzar información por parte de los parlamentarios, tal como lo dispone el artículo siete del reglamento del congreso de los diputados españoles.

Tampoco se debe olvidar que por medio de las preguntas parlamentarias, el parlamento mantiene un verdadero instrumento fiscalizador sobre el gobierno, que cumple con esto con uno de sus principales roles concerniente en clarificar y evaluar cuestiones que resulten ser dudosas o inconvenientes para la buena marcha de la nación.

Podríamos pensar inicialmente que las preguntas parlamentarias no conllevan una sanción en si mismas, pero como ya lo hemos comentado bastante durante el desarrollo de ésta investigación, la efectiva sanción provendrá del desprestigio que pueda sufrir el interrogado, con el perjudicial efecto político, que sin dudarlo llegará a ser significativo en cuanto más sea la publicidad que a través de los medios de comunicación pública, se conceda a las preguntas parlamentarias.

En relación a las preguntas parlamentarias, nos comenta el profesor, Manuel Aragón lo siguiente:

---

<sup>261</sup> Constitución Española y Reglamento del Congreso de los diputados.

Obra citada, op.cit,Madrid, septiembre año, 2004.

Artículos Reglamento del Congreso 185-190.

"El instrumento resulta capital en el control, concebido como control "en el Parlamento", ya que supone un campo abierto a las iniciativas individuales de los parlamentarios. Su efectividad descansa no sólo en la actividad fiscalizadora que a su través puede desarrollarse (de vital importancia para las minorías), sino también en la trascendencia que ello puede tener para la opinión pública, poniendo en marcha posteriores controles sociales o acentuando el control político/electoral". Nos agrega, "fiscalización que se intensifica especialmente a través de las preguntas urgentes". <sup>262</sup>

O sea que con lo anterior, podemos concluir, que la finalidad de la pregunta puede solventar varios objetivos, tales como: advertir o amonestar al Ejecutivo sobre su mala actuación, a su vez se obtiene una explicación de la misma, y todo ello, desde la prontitud que con este medio se consigue. A través <sup>io</sup> de las preguntas se practica una permanente y tenaz acción de vigilancia en el ejercicio de la función pública.

Pese a la gran valía y utilidad que ostentan las preguntas parlamentarias éstas lamentablemente no forman parte de los instrumentos de control político, con los cuales cuentan los diputados de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, para ejercitar su función controladora sobre el gobierno y demás entidades públicas.

Por lo cual se encuentra un vacío muy importante en ese campo y se evidencia la necesidad de incorporarles entre los instrumentos de control político, de tal forma que los diputados de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, puedan contar con tan vital medio de control político para desempeñar su función controladora.

---

<sup>262</sup> Aragón, Manuel.

Obra citada, op.cit. Ediciones Ciudad Argentina año, 1995, p. 175.

El primer instrumento de control parlamentario, que encontramos, emplean en común ambos gobiernos, para llevar a cabo el trabajo de control político, es el concerniente a la interpelación.

### **La interpelación en el gobierno español.**

La interpelación es un instrumento de control político, que en el Régimen de gobierno español, se encuentra instituida en el artículo ciento once de su Carta magna, y en los artículos del ciento ochenta al ciento ochenta y cuatro del Reglamento del Congreso de los diputados, además se regula en el Reglamento del Senado, de los artículos del ciento setenta al ciento setenta y tres.

En lo tocante se establece que tanto, los diputados y los Grupos Parlamentarios, así como los senadores, pueden formular interpelaciones al gobierno y a cada uno de sus miembros; ajustándose para esto a las siguientes reglas:

El artículo ciento ochenta y uno del Reglamento del Congreso de los diputados, en el numeral uno, establece para las interpelaciones lo siguiente:

“habrán de presentarse por escrito ante la Mesa del Congreso y versarán sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general, bien del Gobierno o de algún departamento ministerial”.

Además la Mesa valorará, el manifiesto y en caso de que su tenor no sea apto de una interpelación, acorde a lo establecido, lo comunicará a su autor para su conversión en pregunta con respuesta oral o por escrito.

En cambio el artículo ciento setenta del Reglamento del Senado, dispone para cuando haya que tratar a cerca de la interpelación lo siguiente:

“Cualquier Senador tiene el derecho de interpelar al Gobierno manifestando, de un modo explícito, el objeto de la interpelación”.

Esto de conformidad con lo establecido por el artículo ciento once constitucional.

La interpelación debe ser formulada por escrito, dirigida al Presidente del Senado y deberá tratar:

“sobre la política del Ejecutivo en cuestiones de interés general”.

Para poder incluir las interpelaciones en el orden del día del congreso tienen que haber transcurrido quince días desde su publicación. En cambio, en el Senado cuando las tareas lo impidiesen. El plazo se extenderá por no más de un mes, conforme lo dispone el artículo ciento ochenta y tres del Reglamento del Congreso de los diputados, y acorde lo establece el artículo ciento setenta y uno, del Reglamento del Senado.

Igualmente se estatuye en el artículo ciento setenta y dos del Reglamento, que en una misma sesión no podrán conocerse más de dos interpelaciones de un mismo Grupo Parlamentario y además se dicta, cuando finalice el periodo de sesiones, las interpelaciones que permanezcan sin conocer se tramitarán como preguntas por escrito, debiéndose contestar antes de que inicie el siguiente periodo de sesiones, excepto que su proponente disponga mantenerla como interpelación para el nuevo periodo de sesiones, conforme a lo normado en el Reglamento del Congreso de los Diputados.

La tramitación de la interpelación, en el Congreso de los Diputados, conforme lo dispone el artículo ciento ochenta y tres de su Reglamento, es la siguiente:

El ponente de la interpelación, procede a exponerle por diez minutos.

Entonces responde el representante del gobierno durante otros diez minutos, y a continuación se dan cinco minutos más a cada uno para la respectiva réplica.

Posterior a esto, intervienen para fijar su posición hasta por cinco minutos un representante de cada Grupo Parlamentario exceptuando de la participación a aquel grupo parlamentario que le haya propuesto.

El trámite para las interpelaciones en el Senado, de conformidad a lo dispuesto en su Reglamento, artículo ciento setenta y tres es el siguiente:

“El día señalado, después de exponer la interpelación el Senador que la haya promovido, contestará un miembro del Gobierno. Cada una de estas intervenciones no podrá exceder de quince minutos. Acto seguido, podrán intervenir los Portavoces de los Grupos parlamentarios por un tiempo máximo de cinco minutos cada uno de ellos”.

Si las explicaciones no son satisfactorias para el ponente, cabe proponer una moción, en la cual la Cámara manifieste su posición.

Para poder proceder con la moción indicada, el grupo Parlamentario interpelante o aquél al que pertenezca el firmante de la interpelación, deberá presentar la moción en el día siguiente al de la sustanciación de aquélla ante el Pleno. Dicha moción será admitida por la Mesa si es congruente con la interpelación; y una vez Admitida a trámite se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión plenaria. Pudiendo presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo del conocimiento de la misma. Finalmente el debate y la votación se realizarán de acuerdo con lo establecido para las proposiciones no de ley.

Las interpelaciones incluidas en el orden del día, deberán ser conocidas, a más tardar un mes después. Salvo que la ordenación de las tareas de la Cámara lo impidiesen. Cuando por cualquier razón se presentare una urgencia, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá reducir el plazo previsto en el apartado anterior para la exposición de las interpelaciones.

Asimismo, el gobierno puede gestionar, de forma motivada, el aplazamiento del conocimiento de una interpelación para un plazo que no sea superior a un mes.

## **La interpelación en el gobierno de la República de Costa Rica.**

Una vez expuesto el trámite que se cumple con las interpelaciones en el gobierno español, así como el alcance de las mismas. Conozcamos el procedimiento que las interpelaciones reciben en la República de Costa Rica.

Las interpelaciones, en la nación costarricense se establecen en el artículo ciento veintiuno constitucional, numeral veinticuatro, y en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, en los artículos ciento ochenta y cinco, ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete.<sup>263</sup>

En lo tocante la Carta Magna costarricense establece:

"24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de

---

<sup>263</sup> Reglamento Legislativo.

Interpelación y censura a los ministros.

Artículo 185. Moción de Interpelación

"Tienen derecho los diputados de pedir a la Asamblea que acuerde llamar a cualquiera de los Ministros de Gobierno, sea para interpellarlo o para que dé informes o explicaciones sobre los asuntos que se discuten. La moción que se presente para el caso, es una moción de orden".

Artículo 186. Visita del Ministro

"Cuando en atención al llamado, ingrese el Ministro al recinto de la Asamblea, el Presidente le informará el motivo de su comparecencia y le concederá inmediatamente la palabra para que haga la exposición o dé las explicaciones del caso. Una vez concluida la intervención del Ministro, se les concederá la palabra a los diputados que deseen hacerle preguntas concretas".

Artículo 187. Debate general sobre la comparecencia del Ministro

"Cuando no las hubiere, o estén contestadas las que se formularen, se abrirá, si algún diputado lo solicita, un debate general sobre la materia objeto de la comparecencia del Ministro, conforme con las disposiciones generales de este Reglamento. Durante este debate, será optativo para el Ministro permanecer en el recinto parlamentario".

errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes".<sup>264</sup>

Como puede notarse las interpelaciones en la República costarricense, se caracterisan por estar instituidas únicamente para ser utilizadas con los Ministros de Gobierno, y además, se exceptúan de las mismas a los asuntos de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes, o aquellas cuestiones que sean calificadas como secretos de Estado.

Tampoco, existe previsto ningún procedimiento, que culmine con ningún pronunciamiento de la Asamblea Legislativa, a cerca de la interpelación, como si ocurre en España, con la moción, ni es obligatorio para el ministro, que tenga que comparecer a la comparecencia a la cual ha sido citado por parte de la Asamblea Legislativa. Debido a que se deja a su criterio, determinar si acude o no lo realiza.

Como puede observarse este es un instrumento de control político, sumamente valioso, pero que en la República de Costa Rica, tiene muy limitado su empleo, además que no esta establecido un procedimiento claro del porqué motivo se puede aplicar y cuantos diputados pueden solicitar su aplicación.

### **Diferencias que se pueden destacar entre la interpelación en España, en contraposición con la interpelación en el Estado costarricense:**

---

<sup>264</sup> Ramírez Altamirano, Marina.

"Manual de Procedimientos Legislativos".

2.ed, San José Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, octubre año 1998, p. 38

1.- En el Estado español, las interpelaciones están establecidas para todos los miembros del gobierno y ninguno de ellos puede negarse a acudir a una interpelación, citada ya sea por la Mesa de los diputados, o por la Cámara del Senado.

2. Mientras en la República de Costa Rica, las interpelaciones están destinadas exclusivamente para los ministros de gobierno, y no existe la obligatoriedad para el ministro de acudir, a la interpelación citado por la Asamblea Legislativa. además, se exceptúan de las interpelaciones a los asuntos de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes, o aquellas cuestiones que sean calificadas como secretos de Estado.

3. En España, si el proponente de la moción no queda satisfecho con las respuestas recibidas del representante del gobierno, puede gestionar una moción en la cual la Cámara establezca su posición al respecto.

4. En cambio, en el Estado costarricense, ni siquiera es obligatorio para el ministro, interpelado, quedarse en el Plenario, queda a su criterio si desea permanecer o en su defecto, retirarse si se establece algún debate basado en los resultados de la interpelación.

Las comisiones de investigación también son otros instrumentos de control parlamentario que se emplea tanto por España como por la República costarricense.

### **Las comisiones investigadoras en el gobierno español.**

Para estos efectos la Constitución Española, en el artículo setenta y seis, otorga, al parlamento la facultad de constituirles, disponiendo al respecto:



“El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”.

Asimismo se establece:

“será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación”.<sup>265</sup>

Además en el Reglamento del Congreso de los diputados en los artículos del cuarenta al cincuenta y cuatro, se pueden destacar las siguientes regulaciones.

Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los miembros que designen los Grupos Parlamentarios en el número que, respecto de cada uno, indique la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a la importancia numérica de aquéllos en la Cámara.

Los miembros del Gobierno podrán asistir con voz a las Comisiones, pero sólo podrán votar en aquellas de que formen parte.

Para el funcionamiento interno de la comisión se dispone en el artículo cuarenta y uno del Reglamento del Congreso de los Diputados:

“Las Comisiones, con las excepciones previstas en este Reglamento, eligen de entre sus miembros una Mesa, compuesta por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios”.

Para convocar a una comisión el artículo cuarenta y dos del citado Reglamento dispone:

---

<sup>265</sup> Constitución Española 27 de diciembre año, 1978.

Artículo 76. Centro de Estudios Políticos y constitucionales, Madrid año, 2001.

“Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, de acuerdo con el del Congreso, por iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Comisión”.

Además, se establece que:

“El Presidente del Congreso podrá convocar y presidir cualquier Comisión aunque sólo tendrá voto en aquellas de que forme parte”.

Por otra parte, la Mesa del Congreso, por propia iniciativa o a petición de una Comisión interesada, podrá acordar que sobre una cuestión que sea de la competencia principal de una Comisión, informe previamente otra u otras Comisiones.

Adicionalmente se establece que:

“Las Comisiones deberán concluir la tramitación de cualquier asunto en un plazo máximo de dos meses, excepto en aquellos casos en que la Constitución o este Reglamento impongan un plazo distinto o la Mesa de la Cámara, atendidas las circunstancias excepcionales que puedan concurrir, acuerde ampliarlo o reducirlo”.

Ambito de acción de las comisiones investigadoras, según dispone el artículo cuarenta y cuatro del Reglamento del Congreso de los Diputados, las Comisiones, por conducto del Presidente del Congreso, podrán recabar:

1. “La información y la documentación que precisen del Gobierno y de las Administraciones Públicas, siendo aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 7”.
2. “La presencia ante ellas de los miembros de Gobierno para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos Departamentos”.

3. "La presencia de autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar a la Comisión".

4. "La comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión".

Asimismo, se establece en el artículo cuarenta y cinco del Reglamento en mención, que:

"Los Letrados prestarán en las Comisiones y respecto de sus Mesas y ponencias, el asesoramiento técnico jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas, y redactarán sus correspondientes informes y dictámenes, recogiendo los acuerdos adoptados".

Además, el artículo cincuenta y dos del Reglamento del Congreso de los Diputados, indica que:

"El Pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público".

Adicionalmente se establece:

"las Comisiones de Investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar Ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída. Tales comparecencias se ajustarán a lo dispuesto en la Ley prevista en el artículo 76.2 de la Constitución, y responderán, en todo caso, a los siguientes requisitos":

a) "La notificación del requerimiento para comparecer y de los extremos sobre los que se deba informar habrá de hacerse con quince días de antelación, salvo

cuando, por concurrir circunstancias de urgente necesidad, se haga con un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días”.

b) “En la notificación, el ciudadano requerido será advertido de sus derechos y obligaciones y podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo”.

3. “La Presidencia de la Cámara, oída la Comisión, podrá dictar las oportunas normas de procedimiento. En todo caso, las decisiones de las Comisiones de Investigación se adoptarán en función del criterio de voto ponderado”.

4. “Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la Cámara. El Presidente del Congreso, oída la Junta de Portavoces, está facultado para ordenar el debate, conceder la palabra y fijar los tiempos de las intervenciones”.

5. “Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el <Boletín Oficial de las Cortes Generales> y comunicadas al Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa del Congreso de traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”.

6. “A petición del Grupo Parlamentario proponente se publicarán también en el <Boletín Oficial de las Cortes Generales> los votos particulares rechazados”.

### **Las comisiones investigadoras en la República de Costa Rica.**

En relación al empleo de las comisiones investigadoras, por parte de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, la Constitución Política, establece en el artículo ciento veintiuno numeral veintitres, que una de las

atribuciones de la Asamblea Legislativa, es la conformación de comisiones investigadoras, para tales fines, ordena:

"Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente".

Adicionalmente establece que:

"Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla".

A este tenor expone, la licenciada Marina Ramírez Altamirano;

"Las Investigadoras son las que autoriza la Constitución Política, como medio de control político de la Asamblea Legislativa. Son de carácter temporal y se integran con el fin de que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende y rindan el informe correspondiente".<sup>266</sup>

En el Estado costarricense, únicamente están exentos, de poder ser investigados aquellos asuntos, que sean calificados como secreto de Estado, esto en obediencia con lo que ordena la Constitución Política en el artículo treinta, párrafo segundo. Por lo demás, la Carta Magna otorga y garantiza total libertad, con el propósito de que se pueda investigar cualquier asunto en el cual la Asamblea Legislativa, centre su interés, sin mayores limitaciones al respecto.

<sup>267</sup>

Las Comisiones de investigación, una vez recabadas todas las probanzas concernientes, debe presentar uno o varios dictámenes al Plenario, los cuales

---

<sup>266</sup> Ramírez Altamirano, Marina.

Obra citada. Op.cit. 2.ed, San José Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, octubre año 1998, p. 65.

<sup>267</sup> Ramírez Altamirano, Marina y Fallas Vega Elena.

Obra citada. Op.cit. 2.ed.- San José:

Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen I, octubre del año 1999, p. 245-255.

pueden ser de mayoría, y uno o varios de minoría. Si el dictamen, no es rendido dentro del plazo establecido por el Plenario, sin que lo haya prorrogado el Presidente, mandará a archivar el asunto correspondiente sin más trámite, resolución que carece de todo recurso.

Los dictámenes no se publican, salvo que la Comisión conviniere lo contrario. En tales hipótesis, la publicación incluye, de manera forzosa, todos los dictámenes; si fueren varios. Exceptuando, cuando por acuerdo unánime se excluyan algunos de ellos. Si se acuerda la publicación, el asunto no puede ingresar en la Orden del Día del Plenario; sino transcurridos dos días después de su publicación.<sup>268</sup>

El Reglamento de la Asamblea Legislativa de la República costarricense, en su artículo noventa, dispone que son Comisiones Especiales investigadoras:

“Las referidas en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, las que actuarán conforme a las disposiciones de la Carta Magna, así como aquéllas que nombre la Asamblea para el estudio de un asunto determinado o el cumplimiento de una misión”.

Asimismo, se determina en el artículo noventa y seis del Reglamento Legislativo:

“Los informes de las comisiones especiales se pondrán en conocimiento de los diputados, en forma impresa o por cualquier otro medio idóneo. Se elevarán a conocimiento del Plenario, para el trámite correspondiente, pero no podrán ser conocidos antes de que transcurran, al menos dos días, después de que fueron puestos a disposición de los diputados”.

---

<sup>268</sup> Hernández Valle, Rubén.

Obra citada. Op.cit. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, septiembre del año, 2000, p. 454.

Y se aclara que; “cuando su gestión se refiera a proyectos de ley, los respectivos dictámenes sufrirán el trámite que para ellos señala el Reglamento, sin que el asunto deba ser conocidos por ninguna de las comisiones permanentes”.

También se establece en el artículo noventa y seis bis. del mismo Reglamento; informes de las Comisiones Especiales de Investigación.

Se dispone, que los informes de las comisiones especiales de investigación, se deberán tramitar conforme al siguiente procedimiento:

A.- “Los informes de las comisiones especiales de investigación no podrán ser modificados. No obstante, mediante moción de fondo podrá solicitarse la exclusión de una o más recomendaciones contenidas en el informe. Dicha moción debe ser aprobada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa”. (Treinta y ocho legisladores).

B.- “Si durante la discusión del informe de una comisión especial de investigación, surgieren hechos nuevos de relevancia, la Asamblea podrá otorgar a la misma Comisión que informó un nuevo plazo para analizar tales hechos. En este caso, se suspenderá la discusión del informe hasta tanto la comisión rinda el informe respectivo. El nuevo informe se incorporará a las recomendaciones generales y se modificará en lo pertinente el informe en discusión del Plenario.

C.- Si finalizado el período constitucional en que se llevó a cabo la investigación no se hubiere votado el informe respectivo, el mismo será conocido y discutido, únicamente, en la primera legislatura del siguiente período constitucional, sin que sea procedente una nueva prórroga. En caso de no votarse, el Presidente, sin más trámite ordenará el archivo del expediente”.<sup>269</sup>

---

<sup>269</sup> Reglamento Legislativo, artículos 90, 96 y 96.bis.  
Constitución Política artículo 121, inciso 23.

Como puede notarse de lo explicado las comisiones investigadoras en España, tanto como en la República de Costa Rica, tienen un gran campo de acción para actuar. Como medio de llevar a delante una eficaz y eficiente función de control político.

**Diferencias que se enmarcan entre las comisiones de investigación que se constituyen en el Estado español, en contraposición con las que se integran en el Estado costarricense.**

1. En el Estado español, siempre las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara son publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales e igualmente comunicadas al Gobierno, esto sin perjuicio de que la Mesa del Congreso tome la decisión de dar traslado de las conclusiones al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones pertinentes.
2. En cambio en la República de Costa Rica, Los dictámenes no se publican, salvo que la Comisión conviniere lo contrario. Tampoco se encuentra dispuesto remitirles al gobierno, ni esta implícito que puedan ser trasladados al ministerio público, para lo que corresponda.

En general, el ámbito de acción de las comisiones investigadoras en los dos gobiernos es bastante amplio y fundamentado en disposiciones constitucionales. Lo que faculta a dichas comisiones para poder intervenir prácticamente en cualquier investigación, excepto en las salvedades indicadas.



En la República de Costa Rica, en este momento se vive una polémica, fundamentada en los fallos de la Sala Constitucional del País, que ha indicado entre algunas cosas que las comisiones investigadoras no emiten dictámenes si no lo que producen son informes, que no se debe respetar el debido proceso y otros aspectos que ya han sido de análisis en otro apartado de esta tesis doctoral.

Otro instrumento de control parlamentario, que encontramos en común entre España, y la República de Costa Rica, es la moción de censura:

### **La moción de censura en el Estado español.**

Para poder tramitar una moción de censura en el Estado español, se debe cumplir con lo que se establece, en el artículo ciento trece de la Constitución, y a lo estatuido en los artículos del ciento setenta y cinco al ciento setenta y nueve.

Para tales efectos , la Constitución Española, establece en el artículo ciento trece lo siguiente:

1. "El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura".
2. "La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno".
2. "La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas".

“Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones”.

El Reglamento del Congreso de los Diputados dispone en el artículo ciento setenta y cinco, que para poder exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de una moción de censura. Ésta debe ser propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados en escrito motivado dirigido a la Mesa del Congreso y además, habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno que previamente, haya aceptado la candidatura.

Además, conforme dispone el artículo ciento setenta y seis del Reglamento en mención, si la Mesa del Congreso, comprueba que la moción de censura reúne los requisitos, la admitirá a trámite, informando de su presentación al Presidente del Gobierno y a los portavoces de los Grupos Parlamentarios. Asimismo se regula que, dentro de los dos días siguientes a la presentación de la moción de censura podrán presentarse otras mociones alternativas, que deberán cumplir con los mismos requisitos.

Una vez admitida la moción de censura, y cumplidos los plazos establecidos, se iniciará el debate con la defensa de la moción de censura que, sin limitación de tiempo, hará uno de los Diputados firmantes de la misma. Posteriormente, y tampoco sin limitación de tiempo, intervendrá el candidato que ha sido propuesto para la presidencia del gobierno, de llegarse a aprobar la moción, a efectos de que exponga el programa político del Gobierno que pretende formar.

En el evento que se hubieran presentado más de una moción de censura, el Presidente de la Cámara oída la Junta de Portavoces, podrá acordar el debate conjunto de todas las incluidas en el orden del día, pero habrán de ser puestas a votación por separado, siguiendo el orden de su presentación.

La moción o mociones de censura serán presentadas a votación a la hora que previamente haya sido anunciada por la Presidencia pero no podrá ser anterior

al transcurso de cinco días desde la presentación de la primera en el Registro General.

Para lograrse la aprobación de una moción de censura, se requerirá, en todo caso, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. De aprobarse la primer moción de censura sometida a votación, entonces no se someterán a votación las restantes que se hubieren presentado.

Una vez aprobada la moción de censura, por el Congreso de los diputados, inmediatamente, su Presidente lo pondrá en conocimiento del Rey y del Presidente del Gobierno. Entonces el candidato a la Presidencia del Gobierno incluido en aquélla se considerará investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución.

O sea con la aprobación de la moción de censura el anterior gobierno debe marcharse o dimitir, como lo dice la Constitución Española, debido a que perdió la confianza del parlamento.

Una vez explicado ampliamente el proceso de la moción de censura en el régimen de gobierno español, así como sus resultados, conozcamos cual es el tramite que se presenta para la moción de censura en el Estado costarricense y cuales son sus resultados.

### **La moción de censura en el Estado costarricense.**

La moción de censura en la República de Costa Rica, se encuentra regulada en el artículo ciento veintiuno constitucional numeral veinticuatro, y los votos de censura están definidos únicamente para ser empleados con los ministros de gobierno.

Para su utilización la Carta Política costarricense, estatuye lo siguiente:

Para poderse censurar a los ministros de gobierno, deberá contarse con los votos de dos tercios de los diputados presentes, y haber acontecido lo siguiente:

Que "a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos".

Para la censura en el mismo artículo constitucional, se presenta la siguiente salvedad:

"se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes".

Con esto esos ministros es imposible que puedan ser censurados por la Asamblea Legislativa, aun infrijan las prohibiciones anteriores.

Me permito aclarar que en este caso relativo a la moción de censura, no voy a profundizar en mayores detalles, debido a que del voto de censura y de sus resultados se ha tratado con amplitud en la mayoría de los apartados de esta investigación, por lo que de realizarlo sería repetir muchos de los conceptos anteriormente expuestos.

## **Diferencias que sobresalen de la aplicación del voto de censura en el Estado Español, en comparación con los resultados que se obtienen del empleo en el Estado costarricense.**

**1.-** Cuando en el Estado español, una moción de censura consigue ser aprobada por su parlamento, forzosamente ese gobierno debe marcharse y dejar el poder, al nuevo presidente que obtuvo la confianza del parlamento. O sea con la moción de censura ese parlamento le retiro el apoyo al gobierno, quiere decir en términos fuertes que le hecho del poder.

2. En cambio cuando la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica con grandes dificultades consigue aprobar una moción de censura, debido a que se requiere una mayoría calificada de la totalidad de los votos de los diputados, los resultados, son irrelevantes, ya que la moción de censura no es vinculante para el ministro censurado. Con lo que éste no se da por aludido y prosigue en su cargo tranquilamente, en razón que sus resultados son solo morales y políticos.

3. La moción de censura en el gobierno costarricense, es exclusiva solo para los ministros de gobierno, y no puede ser usada con otro miembro del gobierno, como podría ser el presidente de la República, en donde considero que aunque la censura fuera solo moral podría tener un mayor impacto, social y político.

## **B) Propuestas de cambios al sistema de control político, desempeñado por la Asamblea legislativa de la República de Costa Rica.**

1.- Se recomienda realizar una modificación parcial a la Constitución Política, para poder acoplar los parámetros del control político a las necesidades actuales, en razón que muchas de las limitantes encontradas en el ejercicio del trabajo de control político, surgen de la propia norma constitucional y de ahí, que solo mediante una reforma parcial a la Constitución Política, podrán ser subsanadas muchas de las limitaciones detectadas en la funcionalidad de los instrumentos de control político:

Por tanto se recomienda se debe modificar la Constitución Política en el artículo ciento veintiuno, numerales once, veintitrés y veinticuatro.

Numerales constitucionales que actualmente se leen de la siguiente manera:

11) "Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República";

En relación a este numeral se esta recomendando que:

Se amplíe incorporando, la aprobación de los presupuestos de las instituciones autónomas, así como el de las Municipalidades.

Para que con tal modificación se logre aprobar un real proyecto nacional de presupuesto.

Esto necesariamente también implicará revisar y ajustar las funciones dispuestas para la Contraloría General de la República, tanto en la Constitución Política, como en su ley orgánica.

23) "Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente.

Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla”;

En referencia a este numeral se propone lo siguiente:

Para que el numeral, en lo referente a las comisiones investigadoras, se ajuste en lo posible a las disposiciones de la Sala Constitucional. Además para que, una vez aprobado por el plenario de la Asamblea Legislativa un informe de una comisión investigadora, éste sea obligatorio y vinculante para que las instituciones públicas deban iniciar procedimientos administrativos internos que evalúen situaciones, del actuar de determinados funcionarios públicos y que de probarse anomalías se apliquen las sanciones disciplinarias.

Además, regular que una vez aprobado un estudio de una comisión investigadora, por parte del plenario de la Asamblea Legislativa, éste debe facultar de inmediato de considerarse necesario a solicitar la intervención del Ministerio Público.

Adicionalmente, se debe dejar muy claro, que el trabajo de la comisión culmina con el informe o dictamen. Y que si se llegasen a asumir otras medidas, éstas no les esta aplicando la comisión investigadora.

24) "Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos.

Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes”.

En este tenor el numeral constitucional en análisis debe modificarse para lo siguiente:

Las interpelaciones, deben ser ampliadas para poder incluir a cualquier jerarca del gobierno, incluyendo al presidente de la República, o a cualquiera otra autoridad de las instituciones autónomas.

Asimismo, las interpelaciones a ministros deben ser reglamentadas, para que se den en forma ordinaria cada seis meses y de manera extraordinaria cuando la Asamblea Legislativa lo acuerde por votación de mayoría simple de los legisladores presentes.

Adicionalmente, se recomienda suprimir el texto que indica:

“se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes”.

:Además se sugiere que sean:

Excluidos de la Constitución Política, Los votos de censura para los ministros. Por no ser éste instrumento de control parlamentario, propio de nuestro régimen de gobierno. Además por ser muy costoso de ser empleado en una República pobre, como es la costarricense y porque se cuenta con otros instrumentos de control político, que bien utilizados proporcionarán mejores réditos al Estado de Costa Rica.



2.- Se recomienda modificar el artículo ciento cuarenta y cuatro constitucional, que en la actualidad se lee de la siguiente forma:

Artículo 144.-

“Los Ministros de Gobierno presentarán a la Asamblea Legislativa cada año, dentro de los primeros quince días del primer período de sesiones ordinarias, una memoria sobre los asuntos de su dependencia”.

Este artículo debe ser modificado para que sea ampliado incorporándole, que las memorias ministeriales, deberán ser expuestas por el respectivo ministro en el plenario legislativo y aprobadas por la Asamblea Legislativa.

3.- Se está recomendando, modificar en el numeral tres, el artículo ciento ochenta y cuatro constitucional, que actualmente para lo que interesa dispone:

Artículo 184.- Son deberes y atribuciones de la Contraloría:

3) “Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugerencias que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos”.

Al respecto se sugiere sea modificado este numeral para que establezca; que esta memoria, deberá ser analizada y expuesta, por el Contralor en el plenario legislativo.

4.- Se solicita modificar el artículo ciento treinta y nueve constitucional en el numeral cuarto, en donde se lee testualmente:

Artículo 139.- Son deberes y atribuciones exclusivos de quien ejerce la Presidencia de la República:

- 4) "Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación".

Este numeral se requiere sea modificado para que, incorpore que el informe deberá ser presentado de forma personal por el presidente de la República, porque tal como se encuentra redactado, cualquier presidente podría tomar la decisión de enviar el informe por escrito y no hacerse presente al plenario legislativo. A éste mismo tenor debe ser modificado el Reglamento Legislativo en los artículos doscientos once y ciento noventa y tres. Artículos que resan en lo que importa al efecto;

Artículo 11.- Sesión del 1 de mayo.

"A la segunda sesión se invitará a los miembros de los Supremos Poderes, a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al Contralor y al Subcontralor General de la República, a los Jefes de las Misiones Diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de Costa Rica y a los jerarcas de la Iglesia Católica. En esta sesión se presentará el mensaje, al que se refiere el artículo 139, inciso 4) de la Constitución Política, y en ella ningún diputado podrá hacer uso de la palabra, salvo el Presidente de la Asamblea".

### Artículo 193. Debate reglado

“Las sesiones del Plenario de la Asamblea Legislativa, del primer y segundo días hábiles después de cada primero de mayo, se dedicarán al análisis del mensaje constitucional del Presidente de la República.

Estos días se realizará sesión desde las quince horas y no se podrá levantar antes de las diecinueve horas.

Cada fracción de un solo diputado tendrá un turno de hasta media hora, las de dos o más diputados, de hasta una hora y las dos mayores, de hasta dos horas. La fracción de gobierno podrá hacer sus observaciones al final”.

Se requiere que por parte de la Asamblea Legislativa, se proceda a revisar y modificar estos artículos. Para llegar a convertir el informe del presidente de la República, en un verdadero debate del estado de la nación, disponiendo un tiempo determinado, para cada una de las fracciones políticas, representadas en el plenario, para que puedan realizarles replicas al informe presidencial. Eso sí haciéndole el mismo primero de mayo, y contando con la presencia del presidente de la República.

5.- Se recomienda que de manera urgente, se proceda a regular en el Reglamento Legislativo, el impedimento constitucional que tienen los diputados para poder aspirar a cargos en los otros Poderes del Estado o en las instituciones autónomas, debido a que no se ha realizado hasta el momento y esto está induciendo a errores.

Las prohibiciones a las cuales hago referencia, se regulan en la Carta Magna de la siguiente manera, en los artículos ciento once y ciento doce constitucionales.

#### Artículo 111.-

“Ningún diputado podrá aceptar, después de juramento, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones.

Esta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones internacionales, ni para los que desempeñen cargos en instituciones de beneficencia, o sean catedráticos de la Universidad de Costa Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del Estado”.

#### Artículo 112.-

“La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular.

Los Diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado obras, suministros o explotación de servicios públicos.

La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la credencial de Diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un Ministerio de Gobierno, el Diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones”.

Además urge determinen ¿cuál es el órgano al que corresponderá aplicar al diputado, la sanción prevista en el artículo ciento doce constitucional?.

6.- Se aconseja incorporar como instrumento de control político, a la Constitución política, las preguntas parlamentarias por escrito para los miembros del gobierno en general.

7.- Se recomienda proceder a elaborar un nuevo Reglamento Legislativo, en el cual se modifiquen todos aquellos factores del control político que sea posible, y que se mencionan en el desarrollo de esta tesis doctoral, además de ajustar esta norma a una serie de requerimientos que se encuentran pendientes de mejoras.

8.- Se recomienda, proceder a evaluar la coordinación de la Asamblea Legislativa, con sus instituciones auxiliares, Contraloría General de la República, organismo que fiscaliza los fondos públicos; y con la Defensoría de los Habitantes, entidad, que supervisa, en favor de los derechos humanos, para que la conducta de la administración pública, se ajuste al ordenamiento jurídico, a la ética y a la justicia”.

Por esta razón se requiere realizar un esfuerzo institucional para establecer vínculos estables, constantes y sistemáticos; entre el Poder Legislativo y sus entidades auxiliares. Es urgente que por parte de la Asamblea se proceda a crear tales canales de comunicación, debido a que estos son vitales y fundamentales a estas alturas de esta época.

9.- Se Recomienda a la Asamblea Legislativa, proceder a automatizar, y clasificar todos los expedientes que se encuentran en su archivo. Para poder acceder con seguridad a esas fuentes informativas.

10.- Como propuesta final, y aunque el punto se aparta de lo que tiene relación con el control político, únicamente con el propósito de realizar una justicia histórica, es que se propone proceder a Reconocer oficialmente a la Constitución de Cádiz de diecinueve de marzo de mil ochocientos doce, como la primera Constitución con que se organizó el Estado costarricense, entendiendo a esta norma constitucional española, como fuente inspiradora del constitucionalismo costarricense.

## **Capítulo IV.**

### **Conclusiones finales de la investigación:**

1.- Se prueba, demuestra y justifica la importancia que mantiene la utilización de la doctrina de la separación de los poderes del Estado, durante el desarrollo de la presente investigación con fundamento en que de las opiniones extraídas de los diferentes doctrinarios consultados, se determina y concluye en que: la teoría de la separación de poderes del Estado, es básica y fundamental para un eficiente, eficaz y apropiado ejercicio del trabajo de control parlamentario u político, desempeñado sobre los gobiernos, debido a que sin los aportes de ésta importante doctrina, los efectos del ejercicio del control político se diluirían o serían prácticamente ineficaces en el funcionamiento del Estado democrático.

2.- Debemos resaltar que la doctrina, de la separación de poderes, implica para todas las personas, un aspecto de suma importancia, como ha sido el venir a convertirse en un garante para la protección y tutela de la libertad de los pueblos, a través de una apropiada y adecuada separación del poder, el cual como es bien sabido, es uno solo, pero que requiere encontrarse en diferentes órganos, para poder evitar de sus titulares, abusos; de allí, la separación de éste en los tres poderes clásicos, como son (ejecutivo, legislativo y judicial); para de esta forma poder llegar a alcanzar su ideal. El cual consiste en lograr que no se den abusos excesivos por parte de todos aquellos a los cuales les venga a corresponder su ejercicio.

Por esta razón es necesario precisar que, el respeto a la libertad necesariamente implica, el sometimiento y acatamiento al ordenamiento jurídico, en igualdad de condiciones para todos sus ciudadanos, independientemente, del poder que se represente en el Estado, o del cargo que se ejerza.

3.- La doctrina de la separación de los poderes del Estado, adquiere, una gran importancia, para el ejercicio del control parlamentario, o político, en razón que esta doctrina procura, que el poder por su propia fuerza operativa, permita que el poder venga a frenar al poder, y de esta forma, es como viene a cumplir un papel fundamental, el control político, desarrollado por los parlamentos, a través de su función evaluadora, supervisora y contralora, que se ejercita sobre los gobiernos. Ya que por medio de la utilización de los mecanismos de control político; se evalúa y limita, el ejercicio del poder.

4.- Ciertamente, podemos concretar que, Montesquieu interpretó, a la teoría de la separación de poderes, de una manera estricta y mecanicista, como se menciona y hasta critica, por algunos de los doctrinarios; pero es importante destacar, que el transcurso del tiempo y la evolución de la sociedad han llevado a imponer mejoras y cambios a la doctrina propuesta, y esta las ha aceptado, lo que quiere decir que su mecanicismo cede o se adapta ante las mejoras.

Entre estas podemos destacar, la implementación del control político, que viene a cumplir con el fin mismo de la doctrina de la separación de poderes, concerniente a evitar que se manifiesten abusos en el empleo del poder, de modo que el poder por su propia fuerza operativa, frene al mismo poder, lo cual se logra de una forma eficaz y eficiente con un buen desempeño de las funciones de control político.

En consecuencia, afirmamos que la doctrina de la separación de los poderes del Estado, fue un develamiento, sumamente extraordinario para el desarrollo del Derecho Constitucional y, por ende, para el progreso y desarrollo del control político. Pues de no existir diferentes poderes en manos de distintos titulares, el control político, o parlamentario, carecería de total sentido, Ya que el titular del poder, podría emplearle a su mejor juicio, sin tener que brindar a los ciudadanos del pueblo justificaciones de lo que realiza, ni tener que someterse por ello a ningún control.



5.- El control político, surgió como una función exclusiva del parlamento; pero posteriormente al apareamiento de los partidos políticos, ha dejado de ser una materia exclusivamente, del parlamento, para también ser llevada a cabo por otros Organismos tales como el Defensor del pueblo o de los habitantes, con lo que se produce la extensión del control parlamentario, hacia otros Entes, o a actividades desempeñadas por Entidades de carácter administrativo, en la multiplicación, por vías formales, de otros medios de control del poder desarrollado por asociaciones, sindicatos o grupos de interés. Con lo cual en la actualidad el control político, es responsabilidad de muchos entes y no solo del parlamento, o Asambleas Legislativas.

6.- Del análisis efectuado durante el desarrollo de esta tesis doctoral, y de las opiniones de los doctrinarios consultados, se ultima que la poca eficiencia y eficacia del ejercicio del trabajo de control político, desempeñado sobre los gobiernos por parte de los parlamentos o Asambleas Legislativas, la orientamos e identificamos con una crisis de la institución parlamentaria, esto con independencia, del régimen político del cual se trate. La posición expresada se apoya, en el gran poder que manejan los poderes ejecutivos y la influencia de los partidos políticos, a lo interno de estos órganos.

7.- Nos damos cuenta que no existe claridad en muchos de los ciudadanos, al identificar al control jurídico o jurisdiccional, en contraposición con el control político. Por ello, precisamos que el control jurídico, siempre es una responsabilidad del poder judicial, y que se ejerce en función de la legalidad, y para garantizar la adecuación de la conducta a la norma jurídica preestablecida. Mientras que el control político, es un control de valoración de criterios subjetivos, el cual no se fundamenta en normas jurídicas, ni implica, ninguna sanción inmediata, salvo en los regímenes parlamentarios con la aplicación de la moción de censura que de aprobarse ocasiona la caída del gobierno, o por

medio de la cuestión de confianza. Que de perderse también implica la dimisión del gobierno.

8.- Con relación a aquellos instrumentos de control político, que se consideran como más eficaces de ser empleados en los regímenes de gobiernos presidencialistas, dictaminamos, que las preguntas parlamentarias, las comparecencias, las interpelaciones y las comisiones de investigación son los mecanismos de control político, más apropiados para ser empleados en los regímenes políticos, que ostentan gobiernos presidencialistas. Además de estos mecanismos clásicos de control político, existe otro medio de control político, que se inicia a utilizar en muchos Estados democráticos, hago referencia al referendun, que a mi juicio es un medio de control que ha futuro puede llegar a cobrar una gran vigencia, debido a que de una u otra manera viene a romper, con las componendas que puedan llegar a pactarse, entre los Poderes Ejecutivos con los Poderes Legislativos. O sea el referendo constitucional, proporciona un mecanismo al pueblo para que como legítimo detentador del poder pueda manifestarse, a cerca de las actuaciones de aquellos en los cuales a delegado el ejercicio del poder.

9.- En el análisis de los instrumentos de control político, necesariamente debemos concluir que las mociones de censura y la cuestión de confianza, tienen unas utilidades, imposibles de alcanzarles en los sistemas de gobiernos presidencialistas. Como son lograr que el gobierno al recibir la aprobación de una moción de censura se encuentre obligado a presentar al parlamento su dimisión, o dicho más claro a verse obligado a marcharse debido a que ha sido echado del gobierno.

En cambio, en los regímenes presidencialistas el voto de censura, no tiene sanción coactiva, ya a que no produce la caída del gobierno, entonces la sanción es exclusivamente de carácter moral y político, en razón a que en esas condiciones la moción de censura, no llega a establecer en la norma

constitucional su respectiva sanción coactiva, lo que sí se hace en los regímenes parlamentarios.

10.- En esta tesis doctoral el autor, establece la siguiente diferencia entre el concepto de control político y el concepto de control parlamentario.

Al control político, le define de la siguiente forma:

“Como aquel control que es ejercido, por el pueblo, congreso de los diputados, grupos parlamentarios, diputados individuales y órganos como el defensor del pueblo, grupos sociales como sindicatos, prensa y otros. Con este control político, todos los anteriores, vigilan y supervisan que el gobierno no se abuse y extralimite en el poder que le a sido designado por el pueblo. Este control es de naturaleza política y no obtiene una sanción coactiva inmediata”.

En cambio al control parlamentario, le define de la siguiente forma:

“Como aquel control, que es ejercitado por el parlamento, en virtud de no estar de acuerdo con determinada actuación gubernamental, por tanto, se les somete a un juicio parlamentario, por medio de la moción de censura o cuestión de confianza y dependiendo de ese resultado se puede ocasionar o no la caída del gobierno, en el entendido que estos medios de reprobación sean aprobados por el parlamento”.

11.- De esta investigación se determina, que en la República de Costa Rica, se inicia a aplicar el presidencialismo y la doctrina de la separación de los poderes del Estado; hasta con la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de veintiuno de enero del año, mil ochocientos veinticinco. Porque con anterioridad a esa fecha es difícil determinar el modelo político de gobierno que se utilizaba.

12.- De lo establecido en todas las constituciones políticas, que han regido a la República de Costa Rica, desde el primero de diciembre de mil ochocientos veintiuno hasta antes del siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, se precisa que oficialmente, a las Asambleas Legislativas no se les fijaban funciones relacionadas con el ejercicio del control político, que practicaban los parlamentos en los países democráticos.

13.- Se determina que en la República de Costa Rica, la función de control político se asigna por primera vez como responsabilidad de una Asamblea Legislativa, hasta en la Constitución Política, promulgada el siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve. Aunque el control político no se encuentra formalmente definido, por lo que la interpretación queda a opinión del que corresponda analizarle. Por eso, es variada la opinión de los doctrinarios costarricenses, al momento de determinar los mecanismos de control político, que ofrece nuestra Carta Magna para cumplir con tan preponderante función contralora, o controladora como también se le suele denominar. Por ello, en el artículo ciento veintiuno constitucional, principalmente se fijan estas funciones: Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, constituir comisiones de investigación, las interpelaciones y las censuras. Además de estos medios de control político, en muchos otros apartos de la Carta Política, también podemos identificar otras formas tanto formales como informales para el ejercicio del control parlamentario.

14.- Debemos precisar que en los instrumentos de control político, de los cuales dispone la Asamblea Legislativa, para cumplir con la función de control político, encontramos diversas y variadas debilidades que no permiten una eficiente y eficaz función de control político, debilidades de las cuales se ha tratado con amplitud, durante el desarrollo de esta investigación. Solo como recordatorio, considero que, la disposición del artículo once del Reglamento Legislativo, que prohíbe la palabra a los diputados, cuando se expone el informe del presidente

de la República, tiene vicios de inconstitucionalidad, debido a que esta limitando, la intervención de los diputados en momentos sumamente importantes, con lo cual se está coartando el derecho al ejercicio del principio democrático.

15.- Las Comisiones de Investigación, son unos medios de control político muy interesantes, pero que en la actualidad, se encuentran bastante limitadas ya que en muchas ocasiones cuando la Asamblea Legislativa llama a comparecer, a alguna persona esta presenta un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y con ello elude la comparecencia. Por tal motivo considero, que las comisiones investigadoras en la República costarricense, requieren una revisión que se ajusten en lo posible a las resoluciones de la Sala Constitucional, pero también para clarificar límites en los cuales el Tribunal Constitucional se puede haber equivocado, debido a que soy del criterio, que ciertas resoluciones de las comisiones investigadoras, una vez aprobadas por el Plenario Legislativo, se precisa que sean obligatorias y vinculantes para que las instituciones públicas deban iniciar procedimientos administrativos internos que verifiquen o rechacen situaciones perjudiciales del actuar de algunos funcionarios públicos y que de probarse anomalías se apliquen las sanciones disciplinarias pertinentes acorde con lo dispuesto en la normativa vigente. Clarificando al respecto, que la sanción no la aplica la comisión investigadora como tal. Pero que si su estudio viene a cobrar importancia y vigencia, ya que obliga a la investigación administrativa y no que queda al libre criterio de la institución pública, si investiga al funcionario o no.

También se precisa que las investigaciones legislativas, de haber suficientes indicios puedan dirigirse contra personas individuales.

Otro aspecto que debe quedar totalmente claro que una vez aprobado un estudio por el plenario de una comisión investigadora esta debe facultar de inmediato de considerarse necesario a solicitar la intervención del Ministerio Público para que también inicie una investigación tendiente a demostrar la

necesidad de aplicar otra clase de sanciones entre las cuales podrían estar hasta sanciones penales de ser del caso.

16.- Se concluye que las interpelaciones, en la República costarricense, se convierten en un medio de control político en el cual encontramos, muy limitada su utilidad, debido a que solo es posible emplearle con los ministros de gobierno, pero además se exceptúan de ellas, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes, así, , como todos aquellos asuntos que sean calificados como secreto de Estado.

17.- Se concreta que uno de los instrumentos de control político, que posee la Constitución Política de la República de Costa Rica, con menor utilidad lo hallamos en los votos de censura a los ministros de gobierno, ya que la imposición del voto de censura, no conlleva ninguna sanción coercitiva, únicamente es un voto de carácter político y moral, por ende no obliga al ministro a dimitir ni al Poder Ejecutivo a destituirle. Por tal motivo, mantener la censura tal como se encuentra regulada es un gran error, en razón que resulta ser un mecanismo, de control político económicamente muy costoso para ser sostenido por un país, pobre, como el costarricense, y porque la propia Carta Magna establece, otros mecanismos más eficaces, eficientes y funcionales, que la moción de censura .

18.- De la aplicación de la encuesta de opinión, debemos resaltar que ambos grupos de encuestados legisladores y no legisladores, en las preguntas una, dos, cuatro, ocho y once insisten y recalcan, en la eminente necesidad, de llegar a otorgar mayores facultades, a la moción de censura, para que pueda ser empleada con otros funcionarios, además de los ministros de gobierno y para que se le otorguen facultades inmediatas; como es provocar la caída del jerarca, que llegue a ser censurado por parte de la Asamblea Legislativa. De

otra forma le entienden como un instrumento de control político, totalmente disfuncional.

19.- Un aspecto que establecemos como vital para la limitación existente en los instrumentos de control político, es el relacionado con que los instrumentos actuales de control político, vigentes en la República costarricense, datan de la Constitución Política, del siete de noviembre del año mil novecientos cuarenta y nueve, cuando fueron incorporados por primera vez en la Constitución Política, como una función exclusiva de la Asamblea Legislativa, y desde esa época no se les han procedido a efectuar modificaciones, para adaptarles a los cambios de los tiempos actuales.

Por tal razón dictamino que se precisa, realizarles correcciones, para acoplarles a las exigencias, y requerimientos que se acontecen en la sociedad que nos corresponde vivir en el siglo veintiuno.

20.- También hemos podido darnos cuenta a través de este estudio, que en las primeras décadas que se implementó el control político, su utilización fue muy escasa, e incluso confusa, debido a que hasta mil novecientos setenta y ocho, el desempeño del ejercicio del control político se suspendía, durante el período de sesiones extraordinarias. Finalmente, en 1978, se debatió ese punto en la Asamblea Legislativa. En razón que hasta esa fecha, se había interpretado que durante el período de sesiones extraordinarias, se suspendía el ejercicio del control político, sobre la base de lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Política. Esta interpretación fue variada a partir de diciembre del año mil novecientos setenta y ocho.

21.- Asimismo, detectamos, que los votos de censura promovidos del año mil novecientos cuarenta y nueve a mil novecientos ochenta y nueve fueron muy escasos, sin llegar a aprobarse ninguno. La única censura que se aprobó en

el país, lo fué en mil novecientos noventa y cinco. También las comisiones investigadoras empiezan a cobrar importancia hasta en el año mil novecientos ochenta y seis, con las investigaciones sobre el narcotráfico.

22.- Por todo lo anterior se concluye que el control político, en la Republica de Costa Rica, es una temática, que ha tomado importancia hace muy pocos años, de ahí, todas las inconsistencias, de las cuales se ha tratado con amplitud, durante el desarrollo de esta tesis doctoral.

23.- Finalmente en este punto concluimos que con todo el análisis, efectuado hasta el momento, cumplimos con lo propuesto en el objetivo, que pretendía, evaluar en la actualidad la función del control político, así como los instrumentos de control que utiliza, la Asamblea Legislativa para realizar su función de control político, sobre el gobierno de la República de Costa Rica. Y probamos que los instrumentos de control político, se encuentran muy mal instrumentalizados y carentes de procedimientos para su aplicación.

24.- En esta investigación hemos detectado, que durante esta legislatura, la Asamblea Legislativa, ha infringido varias veces los artículos ciento once y ciento doce constitucionales, los cuales establecen la prohibición concerniente a que los diputados, no pueden aceptar, cargos en los otros Poderes del Estado o en las instituciones autónomas, tampoco se les autoriza a celebrar, en ninguna forma posible contratos con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos. Pese a que estos artículos constitucionales se han infringido en reiteradas ocasiones, los diputados, ni siquiera, se han percatado de la enorme infracción constitucional, en la cual han estado cayendo con sus actuaciones en lo tocante.

Curiosamente éste asunto, también ha escapado, al análisis, de los principales constitucionalistas del país, y a la mirada crítica de la prensa nacional. Así como



de todos aquellos que pudieron ser perjudicados, ante las infracciones constitucionales acontecidas.

25.- Se debe puntualizar con claridad que si un nombramiento como los antes descrito se llegase a aprobar, por parte de la Asamblea Legislativa, necesariamente éste acto, devendría en nulidad, sería inválido e ineficaz, en virtud que ocurriría, en desobediencia e infracción al mandato constitucional, de conformidad a lo dispuesto en los artículos ciento once y ciento doce de la Constitución Política.

Además obligatoriamente el diputado debe hacerse acreedor a la sanción que la propia Constitución Establece y que consiste en perder la credencial de diputado.

La duda que nos surge es cuando ocurren estas infracciones constitucionales, a cual órgano corresponde aplicar la sanción que establece la Carta Política debido a que ésta, no lo determina, en tales circunstancias, queda la inquietud de a quién le compete declarar la perdida de la credencial del diputado?.

26.- Nuestro objetivo, con tal advertencia, es que nuestra Asamblea Legislativa, no continúe cometiendo errores de tal magnitud, como los anteriormente enumerados y poder evitar en el futuro, proseguir incurriendo en tan grandes contravenciones a nuestra Carta Política. Sólo de esta forma lograremos fortalecer nuestro sistema democrático y conseguir el respeto, obediencia y apego a los mandatos constitucionales. Y por ende construir que los controles vengan a ser más eficaces, eficientes y oportunos.

27.- Para finalizar con este asunto, Es muy importante dejar clarificado, que no es que cuando por la Asamblea Legislativa se convoca a un concurso público, para elegir cualquier funcionario para los otros poderes del Estado.

El diputado, por su rango y cargo, esta autorizado a retirarse de su curul a su conveniencia, para participar en la elección y de no ser electo para el puesto

por el que participa, entonces, regresar tranquilamente de nuevo, a ocupar la curul de diputado, porque esta actuación obligatoriamente esta infringiendo la disposición constitucional, cuya prohibición es muy precisa en lo consiguiente.

Considero, que es el momento de evitar que situaciones como estas no continúen ocurriendo, para esto es urgente y preciso normar esta cuestión apropiadamente, en el Reglamento Legislativo, de forma que el diputado conozca las limitaciones que le conlleva su cargo.

En razón que esta es una de las pocas ocasiones en la cual la Constitución, se preocupa de forma especial en limitar el acceso de los legisladores a otros puestos, en que ellos mismos, funjan como electores.

28.- De la aplicación de la encuesta de opinión encontramos que, una gran mayoría de los cincuenta y siete legisladores que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, han calificado la función de control político, que lleva a cabo el Poder Legislativo, como poco eficiente. Asimismo, el segundo grupo, de profesionales integrado por once calificadas personalidades, al cual se le aplicó también la encuesta de opinión; una gran cantidad de ellos, a su vez afirman, que consideran que la función de control político, que desempeña la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, se puede calificar como poco eficiente. Y los demás más bien le valoran como ineficiente.

29.- De los dictámenes, emitidos por ambos grupos de encuestados, (Legisladores y no legisladores), queda demostrado que el trabajo que se esta desempeñando, en materia de control político, se realiza de manera poco eficiente.

30.- A opinión de ambos grupos de encuestados, la poca eficiencia y eficacia en el ejercicio del trabajo de control político, obedece a varias razones, entre las que resaltan: los instrumentos de control político, no son eficaces, ni eficientes,

debido a que no proporcionan a los legisladores, ninguna clase, de posibilidad de aplicar ninguna sanción disciplinaria, que venga a ser inmediata.

Ni están bien instrumentalizados, ni regulados. La interpelación, y la moción de censura se encuentra establecida exclusivamente, para los ministros de gobierno; y no produce más que sanciones morales y políticas, sus efectos no vienen a ser vinculantes, ni para el jerarca censurado, ni para el Poder Ejecutivo.

31.- Se determina que en el país, la prensa nacional, en gran manera ha venido, a sustituir al parlamento, en su función de control político, ya que es ésta, la que denuncia mayoritariamente las deficiencias e irregularidades, en el actuar de las instituciones públicas y de sus jerarcas.

32.- También, este estudio nos evidencia, como un factor más que influye en la poca eficiencia y eficacia del trabajo de control político, a la presión que reciben los diputados, de parte de los dirigentes de los partidos políticos.

33.- De las opiniones de los dos grupos de encuestados, concluimos con la necesidad que se tiene de incluir nuevos instrumentos de control político en la Constitución Política del Estado costarricense, así como reformar el reglamento legislativo, para poder adaptarle al control político. Esto se evidencia del criterio de un gran número de los diputados. Así como de la opinión de los demás encuestados. De hecho que en las preguntas una, dos, cuatro, ocho y once se insiste y recalca, en la eminente necesidad, de llegar a otorgar mayores facultades, a la moción de censura, para que pueda ser empleada con otros funcionarios, además de los ministros de gobierno y para que se le otorguen facultades inmediatas; como es provocar la caída del jerarca, que llegue a ser censurado por parte de la Asamblea Legislativa.

34.- Hemos podido determinar que, treinta y tres de los señores diputados, se pronuncian declarando, que conciben, a la moción de censura, incluida en la Constitución Política, como un instrumento de control político, que a su juicio es poco funcional, para un porcentaje del sesenta y siete por ciento de las opiniones vertidas, y diez de los demás Legisladores le valoran como disfuncional. Además, el segundo grupo de encuestados manifiesta tener la misma opinión, a cerca de la moción de censura, como instrumento de control político.

35.- Un aspecto que se evidencia, como muy grave, es determinar, que treinta y ocho de los señores diputados, afirman, considerar que entre la Asamblea Legislativa y sus dos órganos auxiliares, como vienen a ser la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República, prácticamente no existe coordinación de trabajo, para un gran porcentaje del setenta y ocho por ciento. Esto se agrava si observamos que de los once encuestados no legisladores, diez de ellos o sea un noventa y uno por ciento, también manifiestan que entre la Asamblea Legislativa y sus entes auxiliares no existe coordinación de trabajo.

Esta es una cuestión muy grave por el rol que cumple en el país, tanto la contraloría General de la República, como la Defensoría de los Habitantes.

36.- Se confirma, en la República de Costa Rica, la influencia del fenómeno partidocrático. Debido a que en el país, no existe, otra forma de acceder al poder, si no es a través de un partido político. Así se estatuye constitucionalmente.

37.- Queda evidenciada y probada la necesidad que los legisladores, mantienen de algún tipo de capacitación, en temáticas específicas, como las señaladas en el desarrollo, de las preguntas ocho y once. Por tal motivo, es

evidente el requerimiento de que por parte de la Asamblea Legislativa, se mantenga preparado algún programa de capacitación, para los nuevos diputados y diputadas, para el momento que lleguen a asumir sus curules.

38.- Se determinan ciertos niveles de confusión entre los legisladores y legisladoras, al querer encontrar la funcionalidad, eficiencia y eficacia, del ejercicio del trabajo de control político, únicamente en sanciones inmediatas, como por ejemplo puede ser la caída del jerarca.

Obviando y desatendiendo con este pensamiento una de las funciones primordiales del control político, la cual tiene por finalidad que el pueblo se mantenga informado del trabajo que desarrolla el gobierno, por que de esto en mucho dependerá, la permanencia en el poder del grupo que en ese momento este gobernando a la nación.

Dado a que será el mismo pueblo, quién finalmente aplique la sanción a ese gobierno. Por esas circunstancias es fundamental que el trabajo de control político, grave entre los partidos de oposición y las minorías, mucho más que en el partido de gobierno.

39.- Es importante destacar, y resaltar que de un efectivo trabajo de control político, pueden llegarse a obtener resultados, tales como que el Poder Legislativo advierta la necesidad y hasta la obligatoriedad de normar y regular ciertos asuntos, con la finalidad de no permitir o facilitar abusos que se estén consintiendo por ausencias de normas jurídicas, que permitan acometer contra esas deficiencias.

40.- Para poder, llegar a implementar la mayoría de los requerimientos mencionados, por los legisladores y no legisladores, se requiere necesariamente y obligatoriamente, que por parte de la Asamblea Legislativa, se proceda con una modificación parcial a la Constitución Política de la República de Costa Rica.

Esto en razón que la mayoría de limitaciones determinadas, están contenidas dentro de la propia norma constitucional.

41.- Del análisis comparado entre los instrumentos de control político de, España y de la República costarricense, únicamente, se consiguió ratificar y evidenciar la debilidad de los instrumentos de control político existentes, en la nación costarricense.

42.- De este estudio, se prueban y demuestran nuestras variables, en las cuales afirmamos, que los instrumentos de control político, están influyendo de forma negativa, en el trabajo desarrollado en materia de control político. En razón que los mismos no se encuentran adecuadamente operacionalizados, lo que da como resultado muchas de las limitaciones existentes, en el ejercicio de esta labor contralora.

43.- También de la investigación efectuada se prueban en gran manera los objetivos planteados, ya que evaluamos tanto, la función de control político, como los instrumentos estatuidos, para su ejercicio, asimismo, se evidencia un perfil del real conocimiento que de esta materia tienen los diputados de la Asamblea Legislativa, de la República de Costa Rica.

44.- También se demuestra el requerimiento de nuevos instrumentos de control político, en la Constitución Política de la República de Costa Rica, como de la urgente necesidad de perfeccionar o proceder a operacionalizar los ya existentes.

45.- También quedó con creces demostrada la poca eficiencia de la moción de censura, y por ello la justificación de llegar a excluirle como mecanismo de control político, primordialmente por no ser un instrumento de control político, propio de los regímenes de gobiernos presidencialistas como lo es el costarricense.

46.- Ha quedado más que demostrado la necesidad de crear mecanismos de coordinación entre la Asamblea Legislativa y sus entes auxiliares, como vienen a ser la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República.

47.- Desde un punto de vista doctrinal en función de lo que he estudiado, observo la insuficiencia del ejercicio del trabajo del control político como de sus instrumentos.

Asimismo los legisladores y no legisladores encuestados que no lo valoran desde el punto de vista de la doctrina sino más bien práctico, también mantienen la misma percepción. O sea que finalmente se llega a una misma conclusión fundamentada en la ineficiencia del ejercicio del trabajo de control político.

48.- Se ha demostrado la poca eficiencia y eficacia de los instrumentos de control político actuales, por lo tanto ante tales insuficiencias, el doctorando, como última conclusión de esta tesis doctoral, propone una serie de modificaciones constitucionales y legales, que vendrán a facilitar la eficacia y eficiencia del trabajo de control político; propuestas que se incluyen en el segundo apartado del capítulo anterior.





## ***Bibliografía.***

### **Monografías:**

Aristóteles. "La Política".

Traducción y notas García Valdez, Manuela.

Editorial Gredos, año 1988.

Aragón, Manuel.

"Constitución y Control del Poder".

Ediciones Ciudad Argentina año, 1995.

Alonso de Antonio, José Antonio, Alonso de Antonio, Ángel Luis.

Introducción al Derecho Parlamentario".

Editorial DYKINSON, S. L. Madrid, año, 2002.

Águilar Burgarelli, Oscar.

"La Constitución de 1949".

A A. V V. "Temas Claves de la Constitución Política".

Homenaje al doctor Carlos José Gutiérrez Gutiérrez.

Editorial INVESTIGACIONES JURÍDICAS S.A. septiembre del año, 1999.

Arias Ramírez, Bernal.

"Reformas Constitucionales, Constitución de 1949".

Costa Rica. 1ºed. San José, Costa Rica.

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Noviembre del 2001.

Araujo Díaz de Terán, Mercedes.

Letrada de las Cortes, revisora de:

Constitución Española y Reglamento del Congreso de los diputados.

Madrid, septiembre año, 2004. Imprenta Nacional del boletín nacional del Estado, novena edición

Altamirano Ramírez, Marina, Fallas Vega, Elena y Linkimer Bedoya Llihanni.

"Constitución Política de la República de Costa Rica, anotada y concordada con jurisprudencia de la Sala Constitucional". 3.ed.- San José, Costa Rica.

Editorial Investigaciones Jurídicas, abril del año 2005.

Bauvall, Francesc.

"Parlamento y Opinión Pública".

Editorial Tecnos Madrid, año, 1995.

Charles de Secondat, baron de Montesquieu.

"El Espíritu de las Leyes".

Introducción Enrique Tierno Galván. Traducción Mercedes Blázquez y Pedro de Vega. Editorial Tecnos año 1985.

Carvajal carvajal, Ana Fiorella.

"El poder de investigación de la Asamblea Legislativa Costarricense".

Tesis para optar por el Título de Licenciada en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, año, 1990.

Córdoba Ortega, Jorge, Fallas Vega, Elena, Ramírez Altamirano, Marina y Valerín Rodríguez.

Constitución Política de la República de Costa Rica. Concordada, anotada y con resoluciones de la Sala Constitucional. 2º ed. San José:

Investigaciones Jurídicas, 1996.

Constitución Española veintisiete de diciembre 1978.

"Centro de Estudios Políticos y Constitucionales". Madrid, 2001.

Cruz de Lemos, Vladimir:

"Historia General de Costa Rica".

San José; Costa Rica: Euroamericana de Ediciones, año 1987.

Cantillo Gamboa, Vanlli, Cubero Barquero, Karen, Blanco León, Daniel,

Jiménez Lizano, Alexander, Madriz Piedra, Gerardo, Rivera Ramírez, Jorge,

Tosso Jara, Reiner

"La Sala Constitucional al Alcance de todos".

Editado por la Sala Constitucional, Año 1999.

Disponible en <http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/>

De Esteban Jorge,

"Tratado de Derecho Constitucional I".

Servicio de publicaciones, de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense,

tomo I, Ediciones Castaña, año 2001.

Duguit León:

"Manual de Derecho Constitucional". Madrid 1913.

Fernández Guardia Ricardo:

"La Independencia y otros Episodios".

Editorial Trejos Hermanos. San José, Costa Rica, año 1928.

Fernández Guardia Ricardo:

"Cartilla Histórica de Costa Rica".

Imprenta Lehmann, San José Costa Rica, año 1957.

Fraga Iribarne, Manuel.

"El Parlamento Británico".

Instituto de Estudios Políticos, Madrid, año 1961.

García Martínez, Asunción

"La Actividad Legislativa del Parlamento, como mecanismo de control político".

En revista de las Cortes Generales, segundo cuatrimestre año, 1988.

García Belaunde, Domingo, Fernández Segado, Francisco, y Hernández Valle, Rubén.

Los Sistemas Constitucionales Iberoamericanos.

Editorial Dykinson: Madrid, año 1992.

Garrorena Morales, Ángel, Editor.

"El Parlamento y sus transformaciones actuales".

Jornadas organizadas por la asamblea regional de Murcia once al trece de abril de 1988.

El futuro de la institución parlamentaria, por Yordi Zule tura.

Editorial Tecnos 1990.

González Viquez, Cleto:

"Obras históricas. Tomo I".

Editorial Universitaria, San José, Costa Rica, año 1958.

Hauriou, Maurice.

"Derecho Público y Constitucional".

Editorial Comares, S.L. año 2003.

Hauriou, André.

"Derecho Constitucional e Instituciones Políticas".

Ediciones Ariel Barcelona, año 1961.

Hernández Valle, Rubén.

"Democracia y Participación Política".

Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, año, 1991.

Hernández Valle, Rubén.

"Derecho Parlamentario Costarricense".

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. septiembre del año 2000.

Jiménez Mario Alberto:

"Desarrollo Constitucional de Costa Rica". Tercera edición.

Editorial Costa Rica, San José, año 1974.

Jiménez Mario Alberto:

"Desarrollo Constitucional de Costa Rica". Tercera edición.

Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, año (1979).

Kelsen, Hans.

"Teoría General del Derecho".

Editorial Comares S.L año 2002.

Karpinski, Rose Marie. Castillo, Fernando. Trejos, Adrián

"Reflexiones sobre el Poder Legislativo Costarricense".

CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA DE 1949. Primera Edición. Asamblea Legislativa, año, 1989.

Locke, John.

Traducción, prologo y notas, Carlos Mellizo.

"Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, un Ensayo acerca del Verdadero  
Origen, Alcance y fin sobre el Gobierno Civil".

Alianza Editorial, Madrid, primera edición 1990.

Lucas Verdú, Pablo.

"Curso de Derecho Político, volumen II, la Crisis de la Teoría del Estado en la actualidad, Federalismo y Estado Federal. La Teoría de la Constitución en el Marco del Derecho Político".

Editorial Tecnos año 1986.

Lucas Verdú, Pablo, y Lucas Murillo de la Cueva, Pablo.

"Manual de Derecho Político". volumen I.

Editorial Tecnos, Madrid, año 1987.

Lucas Verdú, Pablo.

"Problemas actuales de la institución parlamentaria, la crisis del parlamento articulación técnico jurídica, análisis científico-político, y reajuste de reingeniería constitucional".

Separata de revista comparada, universidad internacional Menéndez Pelayo, número nueve verano, del año 1982.

López Guerra, Luis.

"Introducción al Derecho Constitucional".

Tirant lo blanch libros edita Tirant lo blanch Valencia, año 1994.

Loewenstein, Karl:

"La Teoría de la Constitución".

Editorial Ariel, segunda edición cuarta reimpresión, Barcelona 1986.

Muñoz Quesada, Hugo Alfonso.

"La Asamblea Legislativa en Costa Rica".

San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica año, 1977.

Muñoz Quesada Hugo Alfonso y Urcuyo F, Constantino.

"Desarrollo Legislativo y reforma Política en América Latina".

San José, Costa Rica. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, (CAPEL),  
año, 1997.

Miñana Emilio.

"La División de los Poderes del Estado".

Madrid: año, 1917.

Moliner María

"Diccionario del uso del español año 1996".

Ediciones Gredos, dirección electrónica 1996.

Mena Brenes, Marco A:

"Compilador. Colección de Constituciones de Costa Rica del Pacto de Concordia  
a la Constitución Política de 1949".

San José, Costa Rica. Imprenta Nacional, año 2000.

Ojea y Somoza Telesforo.

"Parlamentarismo". Madrid: año 1884.

Obregón Quesada, Clotilde:

"El Proceso Electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 1808-1998".

Editorial de la Universidad de Costa Rica. Primera edición año 2000.

Obregón Loría, Rafael.

"El Poder Legislativo en Costa Rica". Asamblea Legislativa año 1966.

Posada Adolfo.

"Tratado de Derecho Político"

Editorial Comares S.L, año 2003.

Prats, José María, dirección de obra:

"Enciclopedia de Costa Rica su historia, tierra y gentes".

ed. San José, Océano grupo Editorial, volumen I, año, 1997.

Peralta Hernán G:

"Agustín de Iturbide y Costa Rica".

Editorial Costa Rica, año 1968.

Peralta, Hernán G.

"el Derecho Constitucional y la Independencia de Costa Rica".

Trejos Hermanos San José Costa Rica, año, 1965.

Peralta Hernán G:

"Las Constituciones de Costa Rica".

Instituto de Estudios Políticos, Madrid, año 1962.

Ramírez Altamirano, Marina:

"Manual de Procedimientos Legislativos". 2.ed San José, Costa Rica.

Editorial Investigaciones Jurídicas, octubre del año 1998.

Ramírez Altamirano, Marina y Fallas Vega Elena:

"Constitución Política de la República de Costa Rica, anotada y concordada con jurisprudencia de la Sala Constitucional". 2.ed.- San José,

Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen II, octubre del año 1999.

Ramírez Altamirano, Marina y Fallas Vega Elena:

"Constitución Política de la República de Costa Rica, anotada y concordada con jurisprudencia de la Sala Constitucional". 2.ed.- San José:

Editorial Investigaciones Jurídicas, volumen I, octubre del año 1999.



Rubio Llorente, Francisco.

"La Forma del Poder".

Centro de Estudios Constitucionales, 2º edición Madrid, año, 1997.

Solís Fallas, Alex.

"Reyes sin Corona, Rendición de Cuentas y Evaluación de Resultados".

Editorial del Este, San José, Costa Rica, año 2002.

Solís Fallas Alex.

"El Control Parlamentario". 2.ed San José, Costa Rica, Asamblea Legislativa, Centro para la Democracia, año, 1995.

Solís Fallas Alex

"Guía práctica para el control parlamentario".

Ed. San José, CR : Asamblea Legislativa : Centro para la Democracia, año, 1996.

Solís Fallas, Alex.

"Tráfico de drogas : consecuencias y soluciones".

San José : Imprenta Nacional, año 1988.

Solís Fallas, Alex.

"Control Parlamentario y jurisprudencia constitucional".

San José, CONAMAJ, año, 2000.

Schmitt, Carl.

"La Teoría de la Constitución".

Editorial, Alianza S.A. Año 1982.

Saborío Valverde, Rodolfo.

"Rendición de Cuentas en Costa Rica, diagnóstico y Propuesta de Sistematización".

Primera Edición. Editorial Juriscentro, San José, Costa Rica, año 2004.

Touchard, Jean:

"Historia de las Ideas Políticas".

Editorial Tecnos Madrid, SA. Año, 1985".

Van Dalen D.B. y Meyer W J:

"Manual de Técnicas de Investigación Educacional".

Buenos Aires: -Editorial Paisdós, año 1978.

## **Artículos de periódicos.**

Reportajes del periódico, la nación de Costa Rica, días dos de junio del dos mil cuatro, sección sala de redacción y tres de junio sección nacionales.  
[www.nacion.com](http://www.nacion.com)

Entrevista con el diputado, Federico Vargas Ulloa, en referencia a su aspiración a Defensor de los Habitantes de la República de Costa Rica.  
Publicada en el periódico la Nación de la República de Costa Rica, día seis de abril del año dos mil cinco. [www.nacion.com](http://www.nacion.com)

Publicación en la portada del periódico la nación de la República de Costa Rica, día siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.  
El ministro Juan Diego Castro Fernández, culpa a diputados por inseguridad.  
[www.nacion.com](http://www.nacion.com)

Publicación en la portada del periódico la nación de la República de Costa Rica, día ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.  
Una Visita sin invitación, ministro llegó al Congreso a aclarar sus comentarios.  
[www.nacion.com](http://www.nacion.com)

Publicación en el periódico, la nación de Costa Rica, sección nacionales día doce de mayo del 2005. [www.nación.com](http://www.nación.com)  
"Diputados obligados a aprobar leyes que regulan el referendo, La Sala Constitucional obligó ayer a la Asamblea Legislativa a aprobar el proyecto de ley que permitirá aplicar el referendo".

Artículo de prensa publicado en el periódico la nación de Costa Rica.  
"Qué podemos esperar de la Contraloría?" Nación de 7 de octubre de 1996.  
Por el doctor Rodolfo Saborío Valverde.  
[www.nacion.co.cr/ln\\_ee/1996/octubre/07/opinion2.html#foro](http://www.nacion.co.cr/ln_ee/1996/octubre/07/opinion2.html#foro).

Artículo de prensa publicado en el periódico la nación de Costa Rica.  
"Fracaso del control. Por el doctor Rodolfo Saborío Valverde  
La Contraloría debe ser órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa".  
[Http://www.nacion.com/ln\\_ee/2004/octubre/17/opinion7.html](http://www.nacion.com/ln_ee/2004/octubre/17/opinion7.html)

Artículo de prensa publicado en el periódico la nación de Costa Rica.  
Por el doctor Rodolfo Saborío Valverde.  
"Control parlamentario, rendición de cuentas permanente".  
[www.nacion.com/ln\\_ee/2002/mayo/23/opinion4.html](http://www.nacion.com/ln_ee/2002/mayo/23/opinion4.html)

Artículo de prensa publicado en el periódico la nación de Costa Rica.  
[www.nación.com](http://www.nacion.com) sección nacionales día 31 de mayo del 2002.

## **Otras fuentes informativas.**

"Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, Guía de diputados".

[www.asamblea.go.cr](http://www.asamblea.go.cr)

Acta legislativa número ciento nueve, de fecha siete de diciembre del año mil novecientos noventa y cinco, se anexa íntegramente.

Acta legislativa número ciento trece, de fecha catorce de diciembre del año mil novecientos noventa y cinco, se anexa íntegramente.

"documento general informativo, proporcionado por la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica". [www.dhr.go.cr](http://www.dhr.go.cr),

Elaborado por Argentina Artavia Medrano, Jefe Unidad Asuntos Internacionales  
Se adjunta íntegramente como anexo.

"Discurso del diputado Olman Vargas Cubero en la sesión plenaria, del jueves once de noviembre del 2004".

expediente legislativo a-22e-5432.

Interpelación tramitada bajo el expediente número A-16E10001 a iniciativa del diputado Valverde Vega. Estas interpelaciones se dieron el doce de abril de mil novecientos sesenta y seis. En contra de los ministros de Seguridad Pública, Mario Quirós Sasso, y del Ministro de Agricultura, Abundio Gutiérrez Matarrita.

Interpelación tramitada bajo el expediente número A-40E-7665 iniciada por Varios diputados en contra del ministro de Transportes, señor Hernán Azofeifa.

"Moción de censura gestionada, por el señor diputado Saborío Alvarado, en contra del ministro de agricultura y ganadería, señor Fernando Batalla esquivel".

Moción de censura, tramitada el dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, "bajo el número de expediente a-40e7671". Presentada por el Diputado Ricardo Rodríguez S. CONTRA el Ministro de Seguridad Pública Benjamín Piza C.

Proyecto de ley titulado "Gobernabilidad tramitado bajo el expediente N° 14.588. Propuesta presidencial de reforma política".  
Por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Respuesta del Asesoría de la Asamblea Legislativa al diputado,  
Rodrigo Alberto Carazo Zeledón.

"En atención a su consulta formulada mediante nota de 30 de julio de 2002, en el sentido de referirnos a los alcances de las competencias de la Comisión para el Control sobre el ingreso y el Gasto Público, para realizar funciones de control político en sus distintas expresiones",.

Sentencia de la Sala Constitucional, de la República de Costa Rica.

"2005-05649, expediente 04-08653-0007-CO. A las catorce horas con treinta y nueve minutos". Para más información.

<http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/>

"Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica".  
[www.tse.go.cr](http://www.tse.go.cr).

## ***ANEXOS que contiene la investigación.***

### ***I.- Procedimiento metodológico empleado durante el desarrollo de la investigación.***

#### **1.1. Tipo de Estudio.**

Se aclara que el tipo de estudio, que emprendemos en esta investigación, es de carácter descriptivo, en razón a que en el mismo, se pretende conocer de que manera se desempeña la labor de control político, que le corresponde ejercer a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Con que instrumentos de control político, cuenta para llevar a buen puerto la tarea mencionada y en que forma son utilizados esos mecanismos de control político, adicionalmente se requiere saber de que manera se encuentran instrumentalizados los mecanismos propios de control político, tanto en la Constitución Política costarricense vigente, así como en el Reglamento interno de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Por esta razón es que en cualquier investigación, descriptiva como la que se desarrolla en esta ocasión se destaca lo siguiente, debido a que se tiene como finalidad:

“Llegar a conocer las situaciones, costumbres y aptitudes predominantes, mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Pero la investigación descriptiva, no se limita exclusivamente a la mera recolección de datos, la meta es también la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables”.<sup>270</sup>

---

<sup>270</sup> Van Dalen, D.B. y Meyer, W. J.

El presente estudio se desarrolla en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, con los cincuenta y siete diputados que conforman su Poder Legislativo, los cuales se proceden a describir en la muestra, para proceder posteriormente a inferir los resultados que se despliegan en las conclusiones finales de la investigación que se elabora en esta oportunidad.

## **1.2. Población.**

Aclaremos que en la presente investigación, se justifica que una vez consultados expertos en la temática estadística, se concluye con lo siguiente:

Que el total de la muestra y de la población, utilizados son iguales y se encuentran conformados, por los cincuenta y siete diputados, que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

La población que estudiamos en este trabajo, es una población cautiva, o sea que la encuesta de opinión o (instrumento de investigación) se aplica a la totalidad de los señores diputados de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, que constituyen la población total, por tal razón es que en esta ocasión obligatoriamente la muestra y la población vienen a ser iguales.

Por este motivo es que explicamos que en esta oportunidad no estamos trabajando con muestra estadística, porque se está incluyendo, como ya indicamos precedentemente, en este estudio a la población completa, o sea a todos los señores diputados de la Asamblea Legislativa de la nación costarricense.

---

"Manual de Técnicas de Investigación Educativa".

Buenos Aires: Editorial Paidós, año 1978 P. 49.



### 1.3. Descripción de los sujetos a encuestar.

Los sujetos comprendidos para esta investigación se encuentran conformados por los siguientes funcionarios:

Los cincuenta y siete diputados de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, que han sido electos por el pueblo, para el periodo constitucional de gobierno que transcurre del 1 de mayo del 2002 al 1 de mayo del 2006, legislatura en donde actualmente gobierna el partido Unidad Social Cristiana.

En éste Poder Legislativo se encuentran representados los siguientes partidos políticos como precedentemente se manifestó:

Partido Político	Diputados	Diputadas	Total
Unidad Social Cristiana	13	6	19
Liberación Nacional	10	7	17
Acción Ciudadana	3	5	8
Bloque Patriótico	4	2	6
Movimiento Libertario	5	0	5
Auténtico Herediano	1	0	1
Renovación Costarricense	1	0	1
Porcentaje	65%	35%	57

Como se puede observar en la tabla descrita, en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, en esta legislatura se encuentran representadas siete fuerzas políticas, lo que provoca mayores dificultades para desarrollar el trabajo legislativo; debido a que ningún partido ostenta una mayoría calificada y producto a esta situación, entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, es necesario que se deba

mantener un proceso constante de negociación, para poder llegar a acuerdos políticos que sean importantes para la Nación.

Asimismo se debe destacar, durante este periodo legislativo en la República de Costa Rica; la alta participación que ha venido logrando la mujer, como parte integradora del Poder Legislativo, dado que en este periodo de los cincuenta y siete diputados de la Asamblea Legislativa, un treinta y cinco por ciento de los mismos, son mujeres y aunque todavía no se alcanza el cincuenta por ciento que se pretende llegar a lograr, este es un logro muy importante, tomando en consideración que las mujeres, adquieren en la República de Costa Rica, el derecho a la participación política hace muy pocos años, esto, después de la segunda mitad del siglo XX. Con la Constitución Política emitida el siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, en donde se le reconoce la condición de ciudadana a la mujer y con este acto, el derecho al sufragio.

Derecho que ejercen por primera oportunidad en el año, mil novecientos cincuenta, durante un plebiscito interno entre dos cantones. Y a nivel nacional ejercitan ese mismo derecho, en el año mil novecientos cincuenta y tres, cuando en la República de Costa Rica, resultaron designadas las tres primeras mujeres como diputadas a la Asamblea Legislativa, señoras de nombres:

Estela Quesada Hernández,  
María Teresa Obregón Zamora y  
Ana Rosa Chacón González.<sup>271</sup>

Aclaramos que por interés de la propia investigación que se desarrolla, se seleccionaron para ser encuestados altos jerarcas pertenecientes a las siguientes instituciones del Estado de la República de Costa Rica:

Contraloría General de la República,

---

<sup>271</sup> Arias Ramírez, Bernal.

Obra citada op.cit, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Noviembre del año, 2001, p. 327-328.

Procuraduría General de la República,  
Defensoría de los Habitantes de la República,  
Corte Suprema de Justicia,  
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,

Además, de un reconocido y prestigioso Consultor Externo, de la República de Costa Rica, de nombre: señor, Rodolfo Saborío Valverde

Considerando que estas personas tienen un alto nivel de conocimiento sobre el tema en estudio, porque muchos de ellos han sido diputados a la Asamblea Legislativa de la República, o en su lugar ministros, viceministros o altos asesores de gobierno, integrantes del Poder Judicial o en algunas ocasiones asesores de la misma Asamblea Legislativa, o de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República, Embajadores del país etc.

A todos estos funcionarios también les aplicamos la encuesta de opinión, con el fin de poder contraponer sus opiniones, en contraposición con el criterio expresado por los señores diputados, en relación con la materia que se analiza en esta investigación.

Esto nos va a permitir poder realizar un mejor análisis y valoración acerca del real y verdadero conocimiento que los señores legisladores, manejan sobre el control político así como de los instrumentos que la Constitución Política costarricense, les dispone para que puedan llevar acabo su función contralora, sobre el gobierno.

## **1.4. Variables.**

### **1.4.1. Variable número uno:**

Utilización de los instrumentos de control político en la República de Costa Rica.

### **1.4.2. Variable número dos:**

Eficacia del control político en la República de Costa Rica.

### **1.4.3. Definición e instrumentación de las variables.**

Partiéndose de que el estudio que desarrollamos es de tipo descriptivo, entonces se toma la definición de variable brindada por C. Freeman 1978, quien describe las variables como:

“Características observables de algo que son susceptibles de adoptar distintos valores o de ser expresadas en varias categorías”.

Definición que se viene a adaptar a los objetivos de la presente investigación ya que con los mismos pretendemos llegar a determinar ciertas categorías variables y medibles que inciden en el fenómeno del ejercicio del control político, que por parte de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, se desempeña sobre su Poder Ejecutivo y demás instituciones gubernamentales.

#### **1.4.4. Definición conceptual de la eficacia de los instrumentos de control político en la República de Costa Rica.**

Para efectos de la presente investigación deberemos entender como eficacia de los instrumentos de control político:

“Que los instrumentos de control político, cumplan los objetivos de forma eficaz, eficiente y oportuna para aquella función para la cual fueron creados”.

#### **1.4.5. Instrumentación y definición operacional sobre la eficacia de los instrumentos de control político en la República de Costa Rica.**

Para conocer la eficacia de los instrumentos de control político, existentes en la República de Costa Rica se utiliza una encuesta de opinión, ver anexo número (dos) en cuyo apartado 2, se exploraron las características básicas de este interés y en los ítems de las preguntas (dos, tres, cuatro, y ocho) se examinaron las características básicas de este interés.

#### **1.4.6. 1.4.6. Instrumentación y definición operacional sobre la eficacia de los instrumentos de control político en la República de Costa Rica.**

1.4.7. Para efectos de la presente investigación debemos entender como instrumento de control político:

"A aquellos mecanismos de control político, de los cuales disponen los legisladores para cumplir con su función contralora.

Asimismo debemos entender por control político, en la República de Costa Rica, a aquel acto que realiza la Asamblea Legislativa para supervisar las labores del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y demás entes de la administración pública para constatar que sus actuaciones se ajusten al ordenamiento jurídico vigente en la República de Costa Rica".

Para medir este aspecto, se considera el apartado dos de la encuesta de opinión que se pueden contemplar en los ítems de las preguntas (uno, cinco, seis, siete, nueve, diez y once) del instrumento construido para estos propósitos.

### **1.5. Definición e instrumentación.**

#### **1.5.1 Construcción del instrumento.**

El presente instrumento de investigación fué elaborado por el autor, partiendo de los objetivos de la investigación y del problema en estudio, para su construcción se dieron las siguientes etapas.

1.5.1.1. Se elaboró un instrumento de control tipo encuesta de opinión en San José de Costa Rica, que se aplicó a sesenta y nueve personas de ambos sexos, adultos, profesionales; que en su mayoría ejercen, la función pública; que brindo aproximaciones al conocimiento de las variables (A y B) que se presentan en este estudio. Las personas consideradas en esta investigación se describen a continuación estos son:

Los cincuenta y siete diputados, a la Asamblea Legislativa, de la República de Costa Rica , periodo constitucional que transcurre del año dos mil dos al año dos mil seis.

Dos asesores legales de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica,  
un consultor externo de la República de Costa Rica,  
nueve jerarcas de las siguientes Instituciones Públicas:

Contraloría General de la República de Costa Rica.

Procuraduría General de la República, de Costa Rica.

Corte Suprema de Justicia, de Costa Rica.

Defensoría de los Habitantes de la República, de Costa Rica.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, República de Costa Rica.

Las respuestas obtenidas nos brindan aproximaciones al conocimiento de las variables A y B que se presentan acerca de la eficacia de los instrumentos de control político. Los ítems que obtuvieron mayor frecuencia, fueron seleccionados para construir las conclusiones principales del presente estudio.

Adicionalmente de la bibliografía consultada, se obtuvieron los conceptos de carácter histórico, jurídicos y políticos del tema en análisis.

Asimismo, la encuesta de opinión, comprende ítems que se fundamentan en aspectos teóricos consultados en el material bibliográfico existente.

### **1.5.2. Descripción del instrumento: encuesta de opinión.**

El instrumento que se utiliza, es una encuesta de opinión de respuestas cerradas, abiertas y semi abiertas que permite al sujeto que contesta, responder con mayores alternativas y ubicarse en la opción que se adapta a lo que cree, en el momento de la respuesta.

La encuesta de opinión se divide en once preguntas; de las cuales dos son cerradas y nueve entre abiertas y semi abiertas. Recoge datos personales y de carácter socio político que identifican a cada uno de los señores diputados que son incluidos en la muestra. Determina la opinión que manifieste el encuestado, la condición académica que tenga el sujeto, la madurez política y el momento histórico político que vive el país.

Además, la encuesta recoge la opinión de carácter político y práctico que puede colaborar para que el investigador se forme una opinión apropiada y con una mejor visión pueda presentar las recomendaciones que considere oportunas. Con la finalidad de que la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, pueda tomar las medidas correctivas oportunas para mejorar su labor de control político.



### **1.5.3. Actividades desarrolladas para realizar el trabajo de campo.**

Durante el mes de septiembre del 2004, el investigador elaboró y remitió correos electrónicos a la totalidad de los despachos de los señores diputados de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica y a las siguientes Instituciones públicas del país:

Corte Suprema de Justicia, despacho Presidencia.

Contraloría General de la República, despacho Contralor General.

Procuraduría General de la República, despacho Procuradora General.

Defensoría de los Habitantes de la República, despacho del Defensor.

Transmitiéndoles información sobre la tesis doctoral que estaba desarrollando en la Universidad Complutense de Madrid, y solicitándoles su colaboración para recopilar informaciones al efecto y sus opiniones concernientes al estudio que elabora.

También se emitieron cartas por parte de la Universidad Complutense de Madrid, las cuales fueron firmadas por el catedrático, director de la tesis doctoral, doctor, Pablo Lucas Verdú, dirigidas a los siguientes funcionarios:

Presidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica,  
Licenciado Gerardo González Esquivel.

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica,  
Doctor, Luis Paulino Mora Mora.

Contralor general de la República de Costa Rica,  
Doctor, Alex Solís Fallas.

Procuradora general de la República de Costa Rica,

Licenciada, Ana Lorena Brenes Esquivel.

Defensor de los habitantes de la República de Costa Rica,  
Licenciado, José Manuel Echandi Mesa.

En donde se les informaba de la tesis doctoral, que sobre el control político, de Costa Rica elabora en la Universidad Complutense de Madrid, el Licenciado, Señor Olman Ugalde González. Asimismo se les notificaba de la visita que del 21 de octubre al 7 de noviembre 2004, realizaría a la República de Costa Rica el señor Ugalde González, con el único propósito de recopilar informaciones de primera fuente, para su investigación, por lo que respetuosamente se les solicitaba su colaboración a tal efecto.

Las cartas antes detalladas, fueron entregadas por el interesado en Costa Rica, el 22 de octubre del 2004, en cada uno de los despachos anteriormente señalados.

Asimismo, el interesado elaboró a su vez cartas, para cada uno de los cincuenta y siete señores diputados, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, y Para el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, para el señor contralor de la República, para el señor Defensor de los Habitantes de la República y para la señora, procuradora de la República.

Todas estas cartas fueron entregadas en cada uno de los despachos, informándoles de la tesis que desarrolla y reiterándoles de su interés de obtener su colaboración para tales fines.

Para desarrollar todo el trabajo programado, el investigador se desplazo desde la Universidad Complutense de Madrid, ubicada en Madrid España, hasta San José de Costa Rica, del 21 de octubre del 2004 al 7 de noviembre 2004.

Igualmente se visitaron en sus despachos personas importantes de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, que colaboraron amablemente para la investigación, nombres que se destacan a continuación:

Señora Carla Granados Brenes,  
licenciada en administración, directora del Departamento de Relaciones públicas, prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Señor Ricardo Ruiz González,  
licenciado en administración pública, Departamento de Relaciones públicas, prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Señor Olman Ramírez Moreira,  
estadístico, Coordinador del Área de Estadísticas del Departamento de Servicios Bibliotecarios, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Señora Julieta Volio Guevara,  
doctora en bibliotecología, Directora, de la Biblioteca Monseñor Sanabria Martínez, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Señora Virginia Vargas Ayales,  
licenciada en bibliotecología, subdirectora de la Biblioteca Monseñor Sanabria Martínez, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Señor Bernal Arias Ramírez,  
licenciado en Derecho y Master en Derecho constitucional y ciencia política, asesor jurídico, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Señora Adriana Rojas Rivero,  
licenciada en Derecho, asesora jurídica, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Señorita Katthya Monge Artavia,  
licenciada en Derecho, asesora jurídica, de la Asamblea Legislativa de la  
República de Costa Rica.

Además, se visitó en su despacho privado al señor Rodolfo Saborío Valverde,  
doctor en Derecho público, consultor externo persona con una amplia  
experiencia en el tema en estudio, además de profesor universitario.

La encuesta de opinión se aplicó de forma personal por el interesado a quince  
de los señores diputados y a seis de los demás encuestados, para mostrarles el  
tipo de investigación que se desarrollaba e incorporarlos al proceso de la  
investigación.

En la aplicación personal de cada encuesta de opinión se tardó  
aproximadamente una hora de tiempo, y el resto de las encuestas de opinión se  
aplicaron por medio de un colaborador debidamente capacitado al efecto, el  
que se encargó de recoger las encuestas de opinión y remitirlas a Madrid,  
España, por correo electrónico y posteriormente por correo postal.

Las encuestas fueron realizadas en cada uno de los despachos de los señores  
diputados y de sus asesores ubicados en la Asamblea Legislativa de la  
República de Costa Rica, cita en San José de Costa Rica, y en las oficinas de la  
Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Procuraduría  
General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Sala  
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en el despacho privado del  
consultor externo doctor, Rodolfo Saborío Valverde.

Debido al tipo de encuesta y al personal al que se dirige, se debió crear un  
clima especial que propiciara una buena empatía entre el entrevistador y los  
entrevistados, para conocer un poco mejor su posición. Esto se hizo más difícil  
debido al clima político que le correspondió vivir a Costa Rica entre las fechas  
citadas, en donde los señores diputados debían sesionar más veces de lo

normalmente acostumbrado. En razón que supuestamente se presentaron unos problemas de manejos de dineros en forma irregular por dos expresidentes de la República de Costa Rica. A esta situación no nos referimos por estar en investigación por la Corte Suprema de Justicia costarricense.

Se informo a los entrevistados que la encuesta de opinión era anónima, y que en consecuencia de ello, la información se trataría de forma confidencial por lo que podían expresar con absoluta libertad, lo que consideraran necesario de no ser que ellos mismos accedieran a que sus nombres fueran mencionados en la presente tesis doctoral, lo que ocurrió con los siguientes encuestados:

Señor Rodolfo Saborío Valverde,  
consultor externo, doctor En Derecho Público, experto en Derecho Público, con un amplio manejo de la materia constitucional y administrativa del Derecho Público, costarricense. Ex-asesor parlamentario y catedrático universitario.

Señor Alex Solís Fallas,  
doctor En Derecho Público, exdiputado y excontralor General de la República de Costa Rica.

Señor Miguel Hueso Arias,  
Médico cirujano, diputado a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006.

Señora María Lourdes Ocampo Fernández,  
Licenciada en ingeniería industrial, diputada a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional, 2002-2006.

Señora Ligia Zúñiga Clachar,  
Estudios universitarios incompletos, Secretaria ejecutiva bilingüe (español-inglés), diputada a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional, 2002-2006.

Señora Marta Zamora Castillo,  
bachiller en administración, diputada a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional, 2002-2006.

Señora Gloria Valerín Rodríguez,  
licenciada en Derecho, con estudios de doctorado con énfasis en Derechos Humanos, diputada a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional, 2002-2006.

Señora Emilia Rodríguez Arias,  
licenciada en Derecho, diputada a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006.

Señora Kira Dunia de la Rosa Alvarado,  
doctora en medicina, con estudios en neuroci-rugía y una especialidad en endocrinología, diputada a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006.

Señora Elvia Navarro Vargas,  
Licenciada en docencia y ciencias de la educación y master en administración educativa, diputada a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006.

Señor Rodrigo Alberto Carazo Zeledón,  
doctor en ciencias políticas, licenciado en Ciencias Económicas y Sociales con énfasis en Administración de Negocios, licenciado en Derecho. diputado a la Asamblea Legislativa, de la República de Costa Rica. Periodo constitucional 2002-2006.

Señor Federico Guillermo Malavassi Calvo, licenciado en Derecho  
Diputado a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006.

Señor Carlos Salazar Ramírez,  
Economista agrícola, Diputado a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006.

Señor José Francisco Salas Ramos,  
master en Administración, Diputado, a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006.

Señor Federico Vargas Ulloa,  
licenciado en Derecho, con un posgrado en Derecho Administrativo y Constitucional, diputado a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006. Primer diputado discapacitado que llega al Poder Legislativo de la República de Costa Rica.

Señor José Miguel Corrales Bolaños,  
licenciado en Derecho, Diputado a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006

Señor Bernal Jiménez Monje,  
licenciado en Economía, y Administración de Empresas, Diputado a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006

Señor Quírico Jiménez Madrigal,  
Ingeniero Forestal, master en Gestión y Con-servación de Flora, Diputado a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006.

Señor Sigifredo Aiza Campos,  
Medico con un posgrado en medicina interna, diputado a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo constitucional 2002-2006.

Señor Edwin Patterson Bent,  
diputado a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo  
constitucional 2002-2006.

Señor Alvaro González Alfaro,  
diputado a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo  
constitucional 2002-2006.

Señor Fernando Castillo Víquez,  
Doctor en Derecho, procurador, de la Procuraduría General de la República de  
Costa Rica.

Señora Magda Inés Rojas Chávez,  
licenciada en Derecho, procuradora, de la Procuraduría general de la República  
de Costa Rica.

El resto de las informaciones conseguidas a través de la aplicación de las  
encuestas de opinión se maneja en una forma confidencial.



## **1.6. Proyección para el Análisis de la información y procesamiento de los datos.**

En este apartado se describe el comportamiento de los instrumentos de control político, en la República de Costa Rica. Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la población investigada. No vamos a generalizar los resultados obtenidos, porque no fue una muestra representativa de toda la nación costarricense, sino que las conclusiones van dirigidas en forma exclusiva a la población investigada.

Por lo cual las variables consideradas en el instrumento de la investigación son analizadas cuantitativamente, con base en la frecuencia, de la escogencia de las preguntas por parte de los encuestados.

1.6.1. Una vez que ha sido administrado el instrumento de investigación, y procedido con el respectivo análisis de las concernientes respuestas se procede a agruparles con base en las dos variables en estudio, para conocer el resultado final.

## **1.7. Alcances y proyecciones del estudio.**

En este trabajo de investigación se trata de destacar la importancia que poseen las dos variables que están en estudio, sobre el control político que se ejerce por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, aportando elementos de juicio partiendo del marco teórico para contraponerlo con la realidad actual y presentar posteriormente, de ser necesario propuestas de reformas parciales a la Constitución Política de la República de Costa Rica, al reglamento interno de su Poder Legislativo o a cualquier otra norma jurídica que se considere necesario, con el fin de alcanzar una correcta eficacia y eficiencia, en el uso de los instrumentos de control político y con ello lograr una optimización en el

ejercicio del control político y conseguir que los políticos que lleguen a gobernar la nación costarricense, en los próximos años, lo hagan mostrando una efectiva transparencia en todas sus actuaciones, que vengan a fortalecer la democracia costarricense y por ende la confianza de los ciudadanos, en nuestro sistema político y jurídico.

Asimismo, se deja de manifiesto que el presente estudio se encuentra limitado exclusivamente a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica y por ello únicamente se refieren a todas las personas que han sido encuestadas, (cincuenta y siete diputados y demás seleccionados de las instituciones públicas del Estado, además del consultor externo).

Con lo cual, nos produce que los resultados no puedan recibir una generalización para toda la nación costarricense. Sino exclusivamente, como ya se ha puntualizado en algunas oportunidades anteriores, estos deben ser dirigidos a la población incorporada en el proceso de la investigación que ejecutamos, o sea, a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

## **Anexo número dos.**

### **Encuesta de opinión sobre el control político de la República de Costa Rica.**

La presente encuesta, tiene como objetivo, evaluar la eficiencia del control parlamentario y forma parte de un trabajo de investigación, que se realiza para optar al grado de doctor en Estudios Superiores de Derecho Constitucional, otorgado por la Universidad Complutense de Madrid.

Agradezco, la colaboración que se sirvan brindar en el presente estudio.

San José, Costa Rica

Fecha y

año\_\_\_\_\_

La presente encuesta de opinión es anónima, pero si usted autoriza que mencione su nombre por favor indíquelo a continuación:

---

#### **I PARTE. DATOS GENERALES:**

Por favor marque con equis (X) su respuesta:

Partido Político, que representa:

A- Unidad Social Cristiana (    )

B- Liberación Nacional (    )

C.- Acción Ciudadana (    )

D- Movimiento Libertario (    )

E- Renovación Costarricense (    )

F- Auténtico Herediano (    )

G- Bloque Patriótico (    )

2.- Provincia o Cantón de representación

3.- Sexo    Femenino (    )    Masculino (    )

4.- Formación académica

A- Primaria incompleta(    )

B- Primaria completa (    )

C- Secundaria incompleta (    )

D- Secundaria completa (    )

E- Universitaria incompleta (    )

F- Universitaria completa (    )    Bach (    ) Lic. (    ) Master (    ) Dr. (    )

Otros especifique: \_\_\_\_\_

## II PARTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

1.- Considera usted, que el control político que ejerce el poder Legislativo, es:

A) Eficiente ( )

B) Poco eficiente ( )

C) Ineficiente ( )

Justifique su respuesta:

---

---

---

2.- ¿Considera usted necesario incluir nuevos instrumentos de control en la Constitución política de Costa Rica,

Si ( ) no ( )

Justifique su respuesta:

---

---

---

3.- ¿Qué tanto conoce usted los mecanismos que la Constitución Política, otorga a los diputados para que ejerzan su función contralora?

Marque con equis su respuesta

A) Mucho ( )

B) Más o Menos ( )

C) Lo desconoce ( )

Justifique su respuesta:

---

---

---

4.- ¿Considera usted que la moción de censura incluida en la Constitución política de Costa Rica, como mecanismo de control es:

- A) Funcional ( )
- B) Poco funcional ( )
- C) Disfuncional ( )

Justifique su respuesta:

---

---

---

5.- ¿Considera adecuado el grado de coordinación existente entre la Asamblea Legislativa y sus Entes asesores, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes?

Si ( )      No ( )

Justifique su respuesta:

---

---

---

6.- ¿Qué entiende usted cuando se habla de control político, como lo debe ejercer la Asamblea Legislativa?

Explique su respuesta:

---

---

---

7.- Señale los principales aspectos en orden de importancia que pueden entorpecer la labor del control político. Marque la respuesta en orden de importancia

A) Los partidos políticos (    )

B) Presión del Poder Ejecutivo (    )

C) Presión de los empresarios privados (    )

D) Desconocimiento de como realizar esta labor contralora (    )

E) Intereses personales (    )

F) Negativa o entorpecimiento a entregar información por parte de las instituciones públicas (    ).

8.- ¿Cómo considera que se pueden mejorar los instrumentos de control político?

Explique:

---

---

---

9.- ¿Considera usted que la República de Costa Rica, esta sometida o al menos influida por el fenómeno partidocrático?

Si (    )                      No (    )

Justifique su respuesta:

---

---

---

10.- ¿Como percibe usted que evalúa el pueblo la labor de control que cumple la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Marque con equis su respuesta:

- A) Muy buena (    )
- B) Buena (    )
- C) Aceptable (    )
- D) Inaceptable (    )

11.- ¿En qué aspectos considera usted necesario que los señores diputados reciban capacitación específica para ejercer la función de control?

Esplique por favor:

---

---

---



## **Anexo número tres:**

### ***Principales características de los siete Partidos Políticos, representados en el Poder Legislativo, de la República de Costa Rica, para el período constitucional que transcurre del ocho de mayo del dos mil dos, al ocho de mayo dos mil seis.***

#### **1. Partido Político Unidad Social Cristiana.**

El partido político Unidad social Cristiana es el más joven de los dos partidos Políticos mayoritarios existentes en la República de Costa Rica, ha participado con su nombre actual, en seis elecciones nacionales, obteniendo el triunfo en cuatro de las ocasiones:

(1978-1982. 1990-1994. 1998-2002. 2002-2006).

El Partido Unidad Social Cristiana, posee carácter nacional y está organizado de acuerdo con la Constitución Política costarricense, y la legislación electoral vigente.

Este Partido político, se inspira en los principios socialcristianos y se enmarca en las aspiraciones de libertad, solidaridad, democracia, justicia social y paz que caracterizan al pueblo costarricense.

Esta fuerza política promete a los costarricenses, no subordinar su acción política a las disposiciones de organizaciones, o estados extranjeros, y asegura

formalmente respetar y defender la Constitución Política y el orden constitucional de la república de Costa Rica, de acuerdo con su sistema de democracia representativa.

Los fines que propugna el Partido Unidad Social Cristiana son:

Promover, fortalecer y defender el estado social de derecho en Costa Rica, servir a Costa Rica como instrumento promotor del desarrollo humano, orientado por los valores del socialcristianismo, procurar el Bien Común, entendido como el conjunto de las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y espirituales que permiten a todos los miembros de la sociedad costarricense desarrollarse plenamente como personas, impulsar el desarrollo integral de Costa Rica, mediante la dignificación de los trabajadores, a través del trabajo, el incremento de la producción, el uso apropiado de los recursos productivos y una justa distribución de las riquezas, fortalecer y ampliar las instituciones republicanas y democráticas, promover la participación de los costarricenses y las costarricenses en las actividades que son fundamentales para la vida nacional, promover, fortalecer y defender el reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana y, en consecuencia, el respeto a los derechos fundamentales de cada costarricense, tanto individuales como colectivos, y la garantía de los derechos y condiciones sociales requeridos por esa dignidad, y Garantizar la representación de los géneros en todos los órganos del Partido, de conformidad con la Ley y su Estatuto.

Adicionalmente el partido señala tener entre algunos los siguientes objetivos:

a. Alcanzar el poder público y político para realizar el modelo de gobierno socialcristiano cuya meta esencial sea el pleno bienestar del pueblo costarricense, en un marco de paz, libertad, solidaridad, democracia, justicia social, equidad y progreso.

b. Ejercer sus responsabilidades cívico-políticas cuando se alcance el gobierno de la República y cuando le corresponda desempeñarse como fuerza política de oposición.

c. Promover el estudio y conocimiento de la Doctrina Social Cristiana.

d. Realizar un permanente análisis de la realidad nacional para encontrar soluciones a los problemas, dentro de una concepción socialcristiana del hombre, de la sociedad, del Estado y del mundo.

e. Fortalecer y acrecentar el ejercicio de las conquistas sociales incorporadas al Capítulo Constitucional de las Garantías Sociales, garantizar su permanente actualización y promover el principio de Concertación Social como instrumento de respuesta a los conflictos nacionales.

f. Mantenerse como una institución política organizada, permanente, programática e ideológica, en el contexto de la legislación que regula la democracia costarricense.

g. Manifestarse públicamente en torno a los problemas nacionales y plantear las soluciones inspiradas en su marco doctrinario e ideológico.

J. Propiciar la difusión y adopción de valores éticos de la doctrina socialcristiana y combatir la corrupción de todos los campos de la acción política y gubernamental.

El partido es una organización política, democrática, popular y permanente, que fundamenta sus principios en los valores de la filosofía socialcristiana, así como en las más puras tradiciones del pueblo costarricense.<sup>272</sup>

---

<sup>272</sup> Tribunal Supremo de elecciones de la república de Costa Rica. [www.tse.go.cr](http://www.tse.go.cr).

## **2. Partido político, Liberación Nacional.**

Este es el Partido político, más antiguo de los vigentes en la República de Costa Rica. Fué fundado en el año 1952 y un año después participa y gana sus primeros comicios electorales. Se ha mantenido como agrupación política permanente desde entonces, participando en doce campañas electorales, obteniendo en siete de las oportunidades el triunfo.

---

Su fundamento ideológico es la social democracia, que propugna la obtención de reformas sociales por medios parlamentarios. En su carta fundamental se propone construir una democracia basada en la justicia social y en la libertad política, consagra el derecho a la propiedad, educación, salud y seguridad social.

Procura los principios y objetivos siguientes:

El Partido político, de Liberación Nacional se define como un partido democrático, popular, independiente, doctrinario y permanente. Se fundamenta en el ejercicio efectivo de la soberanía popular y el respeto a la dignidad del ser humano.

Representa el esfuerzo organizado y solidario del pueblo de Costa Rica, sin distinciones de sexo, raza, religión, o clase social, para promover, de acuerdo con sus principios doctrinarios y su ideología social demócrata expresada en su carta fundamental, dice buscar el bienestar integral del pueblo costarricense.

Son fines esenciales de su acción política:

defender la libertad, la paz y la justicia; asimismo el Partido se compromete formalmente a respetar el orden constitucional, de acuerdo con su sistema de democracia representativa.

Expresamente se establece que su acción política no estará subordinada a disposiciones o lineamientos de organizaciones o estados extranjeros.

Los principios que orientan el pensamiento y la acción del Partido son los enunciados en su carta fundamental, principios que sólo podrán ser revisados y modificados por el Congreso Nacional.<sup>273</sup>

---

<sup>273</sup> Tribunal Supremo de elecciones de la república de Costa Rica. [www.tse.go.cr](http://www.tse.go.cr).

### **3. Partido político Acción Ciudadana.**

Esta fuerza política participó por primera vez en las elecciones nacionales de febrero del 2002. Con una participación que se puede calificar de muy extraordinaria debido a que esta nueva agrupación política consigue elegir catorce escaños; de los cincuenta y siete en disputa. Debilitando grandemente, con esto a las dos fuerzas políticas, tradicionales del país, (Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana), que desde 1949 han sido los que siempre han ganado las elecciones nacionales y obtenido la mayoría de curules a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Este novel partido político, se fundamenta en proponer la defensa de la libertad y la promoción de la justicia y del bien común, para mantener un clima de paz y propiciar el desarrollo armónico del país en todos los ámbitos. Además dicen asegurar promover la participación efectiva de los costarricenses en la conducción y vigilancia de los asuntos públicos mediante el ejercicio pleno de los derechos democráticos, así como velar por la aplicación efectiva de los principios de transparencia y de rendición oportuna de cuentas a los ciudadanos, como medio efectivo para asegurar un ejercicio ético de la función pública.

Asimismo se apoyan en la defensa de las instituciones republicanas sustentadas en los principios de la democracia representativa y indican que impulsarán, a través del fortalecimiento de los poderes comunales y del régimen municipal, nuevas formas de democracia participativa.

Adicionalmente, manifiestan buscar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos del desarrollo humano. Además, de la excelencia, transparencia y certeza en la prestación de los servicios públicos,

como instrumentos esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida y facilitar las tareas productivas del sector privado.<sup>274</sup>

En el mes de febrero del 2003, por discordias internas entre los dirigentes y diputados del Partido Acción Ciudadana, el cual hemos descrito brevemente, seis de ellos toman la decisión de separarse del novel partido político y proceden a conformar la fuerza política que hoy en día denominan con el nombre de; "Bloque Patriótico".

Aclaremos que esta nueva fuerza política, no aparece aún inscrita como tal en el Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica, y además, algunos de los diputados que le integraron inicialmente, también le han dejado para intentar integrar otros partidos políticos, que aún están en fases de formación.

---

<sup>274</sup> Tribunal Supremo de elecciones de la república de Costa Rica. [www.tse.go.cr](http://www.tse.go.cr).

#### **4. "Partido Político, Bloque Patriótico".**

Esta es una fuerza política, en fase de formación, que dice inspirarse y comprometerse en los siguientes principios doctrinarios:

Los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad constituyen la columna vertebral de nuestro Estado de Derecho, Social y Democrático; por tal razón indican, reivindicar estos cuatro grandes principios como su principal fuente de inspiración y asumir su defensa como razón última de sus luchas, convencidos de que la Democracia es el mejor sistema de gobierno. Además manifiestan, aspiramos a vivir una libertad que permita a todos los ciudadanos desarrollar sus capacidades y participar dignamente de la economía de mercado, sin caer en la paradoja de que las mercancías puedan llegar a ser más libres que las personas. Aseguran, luchar por una igualdad jurídicamente establecida y respaldada por el correcto desenvolvimiento de las instituciones democráticas, para acabar con cualquier privilegio en la aplicación de la justicia y en la toma de decisiones que afecten el interés público. Propugnan, promover la justicia social que exige al Estado dar igualdad de oportunidades para que toda persona pueda desarrollar sus capacidades y talentos, independientemente de su condición individual. Alegan, creer en la solidaridad como el fruto más fecundo de la propia libertad, que enseña a disfrutar el bienestar de los demás y a realizarse colectivamente. Manifiestan que impulsaran la solidaridad como instrumento que realiza la justicia e impulsa el auténtico desarrollo de las naciones, en tanto nos hace comprender que nadie debe ostentar riquezas que a otros impongan pobreza.

Adicionalmente, dicen creer en la Democracia como el mejor sistema de gobierno, porque respeta y acrecenta la dignidad de las personas, otorgándoles, bajo el imperio de la Ley, iguales derechos y obligaciones. Por ello aseguran promoverán la construcción de una democracia real, dinámica y participativa, en la que el Pueblo pueda decidir su destino, escoger a los



gobernantes que lo representen en la conducción de los asuntos públicos y exigir que cumplan sus deberes con fidelidad, honradez y transparencia.

También señalan, mantener el progreso social como objetivo central de la política, opinan la erradicación de la pobreza y el logro del bienestar para todos debe ser el centro de la acción política y social, pública y privada.

Asimismo, dicen Confiar en que el progreso social sea el resultado de un derrame casi providencial de los beneficios económicos, desde las empresas al conjunto de la sociedad, significaría abandonarse ciegamente a lo que hoy confirmamos como una falsedad ideológica. Esta actitud impide asumir una posición crítica frente a quienes pretenden combatir la pobreza con políticas públicas compensatorias y selectivas, que crean desigualdades aún entre los pobres, en lugar de promover cambios estructurales orientados a una más justa distribución de la riqueza y a mayor igualdad en el acceso a los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo personal y comunitario. Asimismo, expresan, la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del poder, Constituye un mandato de servicio a la comunidad y no una fuente de privilegio personal, por lo que dicen que esta es una obligación de la función pública.

## **5. Partido político Movimiento Libertario.**

Este Partido Político, es la segunda ocasión en que participa en las elecciones nacionales y consigue elegir seis curules a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Su nacimiento como partido político, surgió como consecuencia de lo que consideran el estancamiento económico y social del país al que lo han llevado los políticos tradicionales.

El Partido Político, Movimiento Libertario, propugna estos principios doctrinales:

Cada Individuo es Dueño de Sí Mismo, ser dueño de uno mismo significa que uno debe ser libre de decidir qué hacer con respecto a su vida, su cuerpo, sus opiniones, sus acciones y su propiedad adquirida honestamente.

Dado que todos los individuos tenemos derechos iguales, todos los demás son también dueños de sí mismos, o sea que todos deben respetarse, por lo que el ejercicio de la fuerza es inmoral, excepto para defender los derechos individuales contra cualquier agresión o usurpación. El principio de ser dueño de uno mismo crea una cerca imaginaria alrededor de cada individuo, concediéndole una zona de privacidad y de acción. Todos debemos respetar el derecho de cada uno de actuar como quiera dentro de su propia zona. Ese principio implica también que toda relación voluntaria entre individuos, donde no medie ni la fuerza ni el engaño, es aceptable, y que ninguna otra persona o gobierno debe intervenir en ella. Por eso, el único sistema económico compatible con ese principio es el del libre mercado.

Todas las posiciones del Movimiento Libertario son consistentes con la idea de que cada individuo tiene el derecho a controlar sus acciones, expresión, cuerpo y propiedad, siempre y cuando no viole los derechos iguales de otros; y que al

Estado le corresponde colaborar en la protección de esos derechos individuales contra cualquier agresión.

Para el Movimiento Libertario, el desempleo, la pobreza y la delincuencia están ligados entre sí y para combatirlos hay que generar oportunidades de empleo, eliminando trabas, promoviendo la competencia y eliminando los monopolios.

Ahora debemos hacer referencia a una nueva contienda, esta vez ocurrida en las fuerzas del partido Movimiento Libertario, que dió como resultado que el 31 de mayo del 2002 el diputado José Francisco Salas Ramos; renunciara al Partido que representaba. Se declaro diputado independiente y constituyó la agrupación política, que denominan con el nombre de: Partido Político Auténtico Herediano". <sup>275</sup>

---

<sup>275</sup> [www.periódico la nacion.com](http://www.periódico la nacion.com)

sección nacionales día 31 de mayo del 2002

## **6. Partido político Auténtico Herediano.**

El Partido Autentico Herediano, se desarrolla, con una organización a escala provincial, representando a la provincia de Heredia, con la finalidad de participar en las elecciones nacionales de acuerdo con la Constitución Política y las leyes electorales vigentes en la nación para participar en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, y eventualmente de Asamblea Constituyente; e igualmente, para participar en las elecciones de alcaldes, regidores y síndicos municipales.

Este Partido Político, expresa, tener los principios políticos, económicos y sociales, que enumeramos:

En relación a los asuntos económicos, estimulará a los productores nacionales agrícolas e industriales para que sean más eficientes y puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado nacional y mundial. Luchan por un comercio más justo y por una verdadera distribución de la riqueza productos del trabajo de todos los costarricenses. Además dicen velar porque la sociedad y el gobierno revaloren, fomenten y protejan el trabajo humano y le otorguen su justa dimensión. Manifiestan que la producción debe estar en función del consumo social, el lucro en función del servicio, y, el trabajo en función al acceso a una vida digna, y la economía estar al servicio de la sociedad y no, la sociedad al servicio de la economía.

En relación a los aspectos políticos del país, como creyentes declarados del sistema político Democrático Representativo, asume la Democracia en su sentido más amplio, no solo como sistema político, económico y social, sino incluso, como apertura, forma y actitud de vida, de tal manera, que los ciudadanos no sólo tengan el acceso al tener y al poder, sino también al ser, al valer y al saber.

En cuanto a los asuntos sociales de la República, postulan:

Creer en la creatividad del hombre y de la mujer, en su capacidad de renovación, en sus afanes y esfuerzos, por ello dicen luchar, por abrir nuevas y permanentes oportunidades para el desarrollo del individuo. Dado a que consideran la familia como la célula básica del cuerpo social. Aseguran la familia tiene derechos anteriores al Estado, y es necesario preservarlos; por eso dicen luchar por el trabajo, el salario justo, la educación, la cultura, la vivienda digna, la participación política, la paz y por un medio ambiente adecuado, y para que el desarrollo material y espiritual lleguen a todas las familias costarricenses.

Hacen la formal promesa de respetar el orden Constitucional de la República de acuerdo con su sistema de Democracia Representativa; de conformidad con el artículo noventa y ocho de la Constitución Política, de la República de Costa Rica, y el inciso d) del artículo cincuenta y ocho del Código Electoral; y será el instrumento fundamental para la participación de todos los ciudadanos.<sup>276</sup>

Cabe señalar que van a participar por primera vez en las elecciones del periodo constitucional que irá del ocho de mayo del dos mil seis al ocho de mayo del dos mil diez.

---

<sup>276</sup> Tribunal Supremo de elecciones de la república de Costa Rica. [www.tse.go.cr](http://www.tse.go.cr).

## **7. Partido Político, Renovación Costarricense**

---

Este partido político, nace en octubre de 1994 y participa por primera ocasión en las elecciones de 1998, logrando elegir una curul por la provincia de San José.

---

El partido Renovación Costarricense es un partido pluralista que fundamenta sus principios doctrinarios en los postulados universales del cristianismo, tales como el amor a DIOS, a sus semejantes y el respeto a la dignidad de la persona humana, procurando la exaltación de la integridad de la persona, como una criatura física y espiritual, en permanente renovación y en comunicación estrecha con DIOS.

El partido Renovación Costarricense dice tener como orientación fundamental de su quehacer político el luchar por una sociedad igualitaria, en la cual todos los ciudadanos superemos los principios individualistas y colectivistas que promueven las sociedades del mundo contemporáneo.

Además el partido Renovación Costarricense manifiesta reconocer como derechos irrenunciables, naturales y no enajenables del hombre, el derecho a la vida, al respeto de la dignidad humana, a la libertad incondicional y a la inviolabilidad de la propiedad.

Entre sus Principios Doctrinales descuellan:

Respetar y promover el orden institucional y legal de la República, incentivar la inversión en la economía nacional que garantice trabajo bien remunerado para los costarricenses, impulsar una Educación que fortalezca la relación entre estudiantes, entre profesores y entre estudiantes y profesores, como medio eficaz para crear un ambiente que promueva el aprendizaje, además, dicen promover el desarrollo económico y social de las distintas regiones del país, para lograr que retengan su población, con condiciones de vida útil. Que no obliguen a las personas de esas zonas rurales, a dejar sus tierras y a emigrar

hacia la capital de la República. En muchas ocasiones con gravísimas repercusiones para los campesinos.

Conjuntamente, dicen que para asegurar una real y verdadera participación de todas las mujeres en la elección de puestos elegibles, para Diputados y Regidores aseguran que tomarán en consideración para integrar sus papeletas un mínimo de 40% de elección femenina por los cinco primeros puestos de cada nómina, que sea preparada, en cada provincia y Cantón para tales propósitos.<sup>277</sup>

Finalmente una vez que hemos descrito brevemente cada uno de los partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, procedemos a introducir, cada uno de los nombres de los diputados pertenecientes a la legislatura que corre de mayo del 2002 a mayo del 2006; exponiendo sus nombres, por partido político, y de esa misma forma se agrupan en la tabla que se elabora para tales efectos.

Nombre y Apellidos	Partido Político
Gerardo Alberto González Esquivel	Unidad Social Cristiana
Jorge Luis Álvarez Pérez	Unidad Social Cristiana
Mario Calderón Castillo	Unidad Social Cristiana
Miguel Huezo Arias	Unidad Social Cristiana
Rolando Lacle Castro	Unidad Social Cristiana
German Rojas Hidalgo	Unidad Social Cristiana
Federico Guillermo Vargas Ulloa	Unidad Social Cristiana
Edgar Mohs Villalta	Unidad Social Cristiana
Marco Tulio Mora Rivera	Unidad Social Cristiana
Mario Redondo Poveda	Unidad Social Cristiana

---

<sup>277</sup> Tribunal Supremo de elecciones de la república de Costa Rica. [www.tse.go.cr](http://www.tse.go.cr).

Francisco Sanchún Morán	Unidad Social Cristiana
Ricardo Jaime Toledo Carranza	Unidad Social Cristiana
Olman Vargas Cubero	Unidad Social Cristiana
Aída Faingezicht Waisleder	Unidad Social Cristiana
Carmen María Gamboa Herrera	Unidad Social Cristiana
Lilliana Salas Salazar	Unidad Social Cristiana
María del Rocío Ulloa Solano	Unidad Social Cristiana
Gloria Valerín Rodríguez	Unidad Social Cristiana
Ligia María Zúñiga Clachar	Unidad Social Cristiana
Laura Chinchilla Miranda	Liberación Nacional
Joyce Mary Zürcher Blen	Liberación Nacional
Kyra Dunia de la Rosa Alvarado	Liberación Nacional
Nury Garita Sánchez	Liberación Nacional
María Elena Núñez Chaves	Liberación Nacional
Maria Lourdes Ocampo Fernández	Liberación Nacional
Maria de los Ángeles Víquez Sáenz	Liberación Nacional
Sigifredo Aiza Campos	Liberación Nacional
Carlos Ricardo Benavides Jiménez	Liberación Nacional
Guido Vega Molina	Liberación Nacional
Luis Gerardo Villanueva Monge	Liberación Nacional
José Miguel Corrales Bolaños	Liberación Nacional
Bernal Jiménez Monge	Liberación Nacional
Álvaro González Alfaro	Liberación Nacional
Luis Ángel Ramírez Ramírez	Liberación Nacional
Paulino Rodríguez Mena	Liberación Nacional
Julian Watson Pomear	Liberación Nacional
Epsi Campbell Carr	Acción Ciudadana
Ruth María Montoya Rojas	Acción Ciudadana
Daisy Quesada Calderón	Acción Ciudadana
Margarita Penón Gómgora	Acción Ciudadana
Marta Iris Zamora Castillo	Acción Ciudadana



Edwin Patterson Bent	Acción Ciudadana
Rodrigo Alberto Carazo Zeledón	Acción Ciudadana
Gerardo Vargas Leiva	Acción Ciudadana
Carlos Herrera Calvo	Movimiento Libertario
Federico Guillermo Malavassi Calvo	Movimiento Libertario
Ronaldo Alfaro García	Movimiento Libertario
Carlos Salazar Ramírez	Movimiento Libertario
Peter Guevara Guth	Movimiento Libertario
Rafael Angel Varela Granados	Bloque Patriótico
Quirico Jiménez Madrigal	Bloque Patriótico
Juan José Vargas Fallas	Bloque Patriótico
José Humberto Arce Salas	Bloque Patriótico
Emilia María Rodríguez Arias	Bloque Patriótico
Elvia Navarro Vargas	Bloque Patriótico
Carlos Luis Avendaño Calvo	Renovación Costarricense
José Francisco Salas Ramos	Auténtico Herediano

Nos permitimos aclarar que estos son los diputados que iniciaron la legislatura, porque en el transcurso de la misma a pasado de todo, debido a que esta a sido una de las legislaturas más convulsas, que se han vivido durante la historia legislativa de la República costarricense, por lo menos del año 1949 a la fecha actual.

Para iniciar, En mayo del 2002, el diputado José Francisco Salas Ramos, renuncia al Partido Movimiento Libertario, y constituye el Partido Auténtico Herediano. Consecutivamente, en febrero 2003, seis diputados renuncian al Partido Acción Ciudadana, y se agrupan en un movimiento que denominan Bloque Patriótico Parlamentario. Las separaciones no acaban aquí, ya que en julio 2004, la diputada Elvia Nabarro Vargas, procede a declararse diputada independiente. Asimismo durante el mes de agosto 2004 el diputado Edgar

Mohs Villalta, renuncia a su curul, y es sustituido por el señor Rodolfo Delgado Valverde.

Las divergencias entre los representantes de los Partidos Políticos prosiguen y En diciembre 2004, el diputado Juan José Vargas fallas, se separa del Bloque Patriótico Parlamentario, asimismo lo realiza la diputada Emilia María Rodríguez Arias, solo que en febrero 2005. Pero con anterioridad a esto en enero del 2005, el diputado José Miguel Corrales Bolaños, había renunciado al Partido Liberación Nacional al cual representaba y procedió a declararse como legislador independiente.

También durante el transcurso del mes de febrero 2005, la legisladora del partido Acción Ciudadana, señora Margarita Penón Góngora renuncia a su curul a la Asamblea Legislativa, entonces le viene a sustituir la señora Teresita Aguilar Mirambell.

Para concluir, brevemente con la descripción de todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, durante el transcurso de esta legislatura, 2002-2006, no nos queda más remedio que informar, que lamentablemente durante el mes de febrero del año dos mil cinco, fallece, la señora legisladora Nuri Garita Sánchez.

Quién representaba durante esta legislatura, al Partido Liberación Nacional, y le viene a suplir la señora, Daisy Serrano Vargas, la que asume la curul como legisladora independiente, por estar suspendida por el tribunal de ética del Partido Político Liberación Nacional al cual le correspondía venir a representarle.

278

Este es un asunto que sucede en la República de Costa Rica, y que personalmente no comparto, que una persona suspendida por el tribunal de ética de su partido político, obligatoria y necesariamente deba asumir el escaño.

---

<sup>278</sup> Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, Guía de diputados: [www.asamblea.go.cr](http://www.asamblea.go.cr)

## ***Anexo número cuatro.***

### ***Documento oficial proporcionado por la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.***

Información General sobre la Defensoría de los Habitantes de la República, de Costa Rica. Su creación, se produjo mediante Ley número 7319 del diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos, reformada por Ley número 7423 del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

#### **Jerarcas**

José Manuel Echandi Meza

Defensor de los Habitantes

Max Alberto Esquivel Faerron

Defensor Adjunto de los Habitantes

#### **La Defensoría de los Habitantes de la República**

La Defensoría de los Habitantes de la República nace a la vida institucional costarricense con el propósito de defender, promocionar y divulgar los derechos e intereses de los habitantes de la República; para ello debe velar porque el buen funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho.

## Antecedentes de la figura

La figura del Ombudsman nace y se desarrolla en Suecia. Desde un inicio la misión de este funcionario consistió en ejercer una estricta vigilancia para asegurar el cumplimiento de las leyes y las normas existentes, además de velar porque los servidores públicos cumplieran con sus obligaciones. Para cumplir con dichas atribuciones, este funcionario podía recurrir y plantear cualquier tipo de acción ante los Tribunales de Justicia.

En un inicio, este Procurador era designado directamente por el rey. Sin embargo, como producto de una serie de revueltas que se produjeron en Suecia en 1809, se dictó una nueva Constitución que incluyó en su artículo 96 la designación del Ombudsman por parte del Parlamento. Según dicho texto constitucional, el Parlamento debía designar a un jurisconsulto de “probada ciencia y de singular integridad” encargado de controlar la observancia de las leyes y velar porque los funcionarios las cumplan en el ejercicio de sus funciones.

Casi inmediatamente, la figura del Ombudsman fue incorporada al régimen jurídico-político finlandés y más adelante, ya entrado el siglo XX, se difundió por el resto de los países nórdicos. Luego pasó a formar parte del sistema institucional de Nueva Zelanda y de ahí la figura del Ombudsman fue difundida por los países anglosajones; posteriormente se extendió a Francia y España. A partir de ese momento, su difusión alcanzó gran cantidad de países, incluyendo más recientemente a los del Continente Americano. No obstante que estas instituciones conservan la esencia originaria, la figura ha sido en cada caso adaptada a las exigencias propias del sistema social, político y jurídico de las sociedades que la adoptaron. Ello ha sido posible gracias a la flexibilidad que presenta y a los rasgos que la caracterizan.

## Antecedentes de la institución en Costa Rica

La incorporación de la figura al sistema institucional costarricense fue parte de una tendencia que se desarrolló desde muchos años atrás.

En un inicio, la Procuraduría de Derechos Humanos, creada como órgano de la Procuraduría General de la República en setiembre de 1982, cumplió funciones de defensa de derechos humanos. En la misma ley en que se creó la Procuraduría, se estableció la figura del Procurador del Consumidor. Posteriormente, se crearon el Defensor de Derechos Humanos para el Sistema Penitenciario, el Defensor de los Usuarios del Registro Nacional y el Defensor de los Derechos de los Refugiados. Este último órgano fue suprimido tiempo después.

Más adelante, en el seno del Ministerio de Justicia, se crearon instancias específicas para velar por la tutela de los derechos de la mujer y de la infancia. Este proceso tomó fuerza con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley Nº 7124) que vino a crear lo que se denominó la Defensoría General de los Derechos Humanos. Esta Defensoría se creó como un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y tuvo como función la protección de los derechos humanos, por lo que se dividió en seis órganos específicos: Defensoría General (que atendía asuntos relacionados con minorías y grupos vulnerables), Defensoría de la Mujer, Defensoría de la Infancia, Defensoría del Consumidor, Defensoría de los Internos y las Internas del Sistema Penitenciario y Defensoría del Usuario del Registro Nacional.

La organización, atribuciones y competencias de estas Defensorías fueron determinadas por reglamento ejecutivo. Aún cuando estas oficinas lograron alcanzar ciertos resultados de importancia, su vinculación jerárquica y presupuestaria con el Poder Ejecutivo, específicamente con el Ministerio de Justicia, significó una limitación para su trabajo.

De ahí la importancia de que, conforme lo señala la doctrina, el órgano de control de la Administración Pública se ubique en una posición de independencia que le permita ejercer su función con la mayor libertad posible.

De forma paralela a este proceso, se trabajó en la elaboración de un Proyecto de "Ley del Defensor de los Habitantes de la República", el cual fue presentado a la Asamblea Legislativa el 7 de noviembre de 1985 por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia de ese entonces. La redacción de dicho proyecto se basó en la Ley del Defensor del Pueblo Español (Ley Orgánica del 6 de abril de 1981).

En el mes de noviembre de 1992 la Ley Nº 7319 del Defensor de los Habitantes de la República fue aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada en la Gaceta #287 del 10 de diciembre de 1992, con vigencia a partir del 10 de marzo de 1993. Reformada mediante la Ley Nº 7423 del 18 de julio de 1994, se sustituyó la palabra "Defensor" por "Defensoría", tanto en el título como en algunos de los artículos.

La Defensoría de los Habitantes abrió sus puertas el 1º de octubre de 1993, luego de que su primer Defensor, Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, asumiera su cargo a partir del 22 de marzo de 1993. La primera Defensora Adjunta, Joyce Zürcher Blen de Carrillo, fue elegida el 28 de abril de 1993. Desde entonces, la Defensoría ha velado por el buen funcionamiento de los servicios del sector público, procurando que sus actos se ajusten a la moral, la justicia y a todo el ordenamiento jurídico. Además, le corresponde divulgar y promover los derechos de los habitantes de todo el territorio nacional.

Como segunda Defensora, fue nombrada la señora Sandra Pizsk (1997-2001) y como Defensor Adjunto el señor Rolando Vega Robert (1997-1999) y Max Esquivel Faerron (1999-2001).

## Competencia y responsabilidades

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, la Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano adscrito al Poder Legislativo, con plena independencia funcional, administrativa y de criterio. Esto significa que, junto con la Contraloría General de la República, es auxiliar de la Asamblea Legislativa en la labor de control que ejerce este poder público.

En esta triada que compone al Poder Legislativo, la Asamblea es la que ejerce el control político directa y explícitamente, mientras que la Contraloría lo ejerce a través de la vigilancia superior de la hacienda pública y la Defensoría de los Habitantes lo hace mediante el control de la legalidad, la moralidad y la justicia de las acciones u omisiones de la actividad administrativa del sector público, en tanto puedan afectar derechos e intereses de los habitantes.

La Defensoría actúa de oficio o a solicitud de parte. En estos casos, no existe costo alguno para el quejoso ni se le exige ninguna formalidad especial.

Si en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría llega a tener conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe recomendar y prevenir al órgano respectivo, la rectificación correspondiente, bajo los apercibimientos de ley, pero si se considera que el hecho puede constituir delito, debe denunciarlo ante el Ministerio Público.

El ámbito de acción de la Defensoría es el sector público; carece de competencia para intervenir en asuntos entre sujetos privados. Tampoco puede intervenir en asuntos que estén en conocimiento de los tribunales de justicia (incluye Sala Constitucional y Tribunales Contencioso-Administrativos).

En principio, no puede actuar en casos que tengan más de un año de haber ocurrido; no obstante, la ley da un margen de discrecionalidad para atender asuntos fuera de ese plazo.

La Defensoría no puede sustituir los actos, actuaciones materiales ni las omisiones de la actividad administrativa. No puede ordenar que se ejecute o se deje de ejecutar un acto ni mucho menos puede realizarlo. El principio de separación de poderes que inspira nuestro ordenamiento asigna a cada uno de los poderes su ámbito de acción. Corresponde al Poder Ejecutivo primordialmente dictar los actos y al Poder Judicial, eventualmente, ordenar la suspensión de los mismos o por el contrario, ordenar su ejecución.

Atendiendo el principio de obligación de consulta y obviamente el derecho de respuesta, el artículo 361 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública establece la obligación de consultar a las entidades representativas de intereses generales o corporativos que se vean afectadas por alguna disposición, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia. La Defensoría ha manifestado al Poder Ejecutivo que el espíritu de esa norma, que data de 1978, implica la intervención del Ombudsman en tal proceso de consulta.

La Defensoría, en coordinación con la Asamblea Legislativa y a través de una oficina de enlace, ha dispuesto un mecanismo que permite darle seguimiento a los proyectos de ley y debates parlamentarios, con el objetivo de incidir en el proceso legislativo, contribuyendo a mejorar de alguna manera la emisión de leyes, lo que brinda la posibilidad de actuar preventivamente en la defensa de los derechos e intereses de los habitantes.

La institución también considera que la divulgación y promoción de los derechos humanos es una acción necesaria en el cumplimiento de sus objetivos y la participación comunitaria se convierte en un factor fundamental en la protección de esos intereses. En este sentido, la Defensoría de los Habitantes ha desarrollado una serie de proyectos con la asistencia de la cooperación internacional, con la finalidad de rescatar y fortalecer el principio de que los habitantes no sólo deben ser los receptores pasivos de los servicios de la



institución sino los actores protagonistas de un proceso de lucha cívica por los derechos, bajo la premisa de que el mejor defensor de los habitantes es el habitante mismo.

### Composición e independencia

La Asamblea Legislativa nombra al Defensor de los Habitantes de la República por un período de cuatro años, mediante mayoría absoluta de los diputados presentes. El Defensor podrá ser reelegido únicamente por un nuevo período.

Como órgano independiente, la Defensoría de los Habitantes dicta sus propios reglamentos internos de funcionamiento y no requiere de directrices o instrucciones para la administración de sus propias oficinas. Así mismo, el Defensor de los Habitantes goza de independencia de criterio para la resolución de los asuntos que son sometidos a su conocimiento, de tal manera que no está sujeto a directrices ni orden superior alguna.

Lo anterior no significa que el Defensor no tenga que rendir cuenta de sus actuaciones. Debe rendir anualmente un informe escrito en la primera semana de junio a la Asamblea Legislativa, la cual debe evaluarlo para establecer cuál ha sido el funcionamiento de la institución en su conjunto y cuál el de las instituciones cuya labor la Defensoría de los Habitantes debe vigilar.

Desde el punto de vista presupuestario, la Defensoría de los Habitantes tiene un título aparte en el Presupuesto Nacional, dedicado exclusivamente a la institución e independiente del de la Asamblea Legislativa.

De conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley N° 7319, el Defensor de los Habitantes tiene la potestad de nombrar y remover libremente al personal de la institución.

La idea promovida por el Defensor de los Habitantes desde un inicio fue la de conformar una institución pequeña, sin excesos en el número de funcionarios, muy eficiente y con una amplia capacidad de respuesta, con el objetivo de conformar una institución de carácter multidisciplinario en la que se contara con la colaboración de profesionales de los más variados campos del saber. Por ese motivo, se creyó necesario buscar una combinación entre experiencia, dinamismo, entusiasmo, formación profesional y capacidad de gestión, para tener una visión institucional mucho más amplia que la de organismos que se limitan a enfocar su accionar desde un punto de vista exclusivamente jurídico. A ello se agrega la decisión de contar con un equipo de trabajo conformado en igualdad de condiciones por hombres y mujeres.

### Funcionamiento

Los habitantes cuentan con la posibilidad de presentar sus quejas, reclamos, o consultas en forma personal, por escrito (correo, telegrama o facsímil), por teléfono o cualquier otro medio idóneo. La queja es recibida por personal calificado y después de valorar su contenido y determinar que reúne los requisitos establecidos se distribuye a alguna de las áreas de la Defensoría.

Una vez asignada al área respectiva, ésta inicia el proceso de investigación, ya sea mediante un contacto informal con la autoridad involucrada o a quien atañe el asunto con la finalidad de orientar y buscar una solución satisfactoria a los intereses del habitante, o bien iniciando la tramitación formal del asunto mediante el traslado de la denuncia y solicitud de informe al funcionario denunciado y al jefe o jerarca de la entidad denunciada. De este traslado se le envía copia al denunciante para su información.

El funcionario o el jerarca de la institución, según corresponda, cuenta con un plazo de cinco días hábiles a partir de recibida la notificación respectiva para referirse al asunto, presentar los alegatos que estime pertinentes y las pruebas de descargo, así como cualquier otra información que se relacione con el

asunto. Este informe se caracteriza por ser obligatorio, debe rendirse a la mayor brevedad, de manera informal y concreta.

La ley le otorga al Defensor de los Habitantes una serie de potestades para el mejor desempeño de su función. Así, podrá realizar inspecciones en cualquier oficina pública sin previo aviso, podrá requerir cualquier tipo de documentos o información y se encuentra legitimado para interponer cualquier tipo de acciones o recursos administrativos o judiciales. Igualmente, la ley establece expresamente que todos los funcionarios y órganos públicos deberán colaborar en forma preferente con las gestiones que realice esta institución. La falta de colaboración puede dar lugar a sanciones penales y disciplinarias para el funcionario renuente.

Los funcionarios públicos citados por la Defensoría, deben comparecer personalmente el día y la hora señalados; de no hacerlo, podrán ser obligados a comparecer por medio de la Fuerza Pública, salvo en los casos de legítimo impedimento. Se exceptúan los funcionarios que gozan de inmunidad.

La Defensoría emite recomendaciones basadas en la investigación del hecho denunciado y la constatación de la existencia de una acción u omisión lesiva para los intereses y derechos de los administrados.

Las resoluciones pueden ser de dos tipos:

**Informe Final:** Corresponde a los casos en los cuales una vez realizada la investigación se ha podido constatar que no existe acto, actuación u omisión de la Administración Pública, que atente o amenace los derechos e intereses de los habitantes. En esta resolución se informa al interesado del resultado de la investigación, se explica la actuación del funcionario o de la entidad involucrada y, en algunas situaciones, se le confirma el cumplimiento de los deberes de la Administración Pública. De esta resolución se remite copia al funcionario o al

jerarca al cual se solicitó el informe respectivo, con el fin de dejar constancia de que no se ha encontrado ningún tipo de violación.

**Recomendación:** Cuando la investigación realizada evidencia la existencia de actos, actuaciones u omisiones por parte de un funcionario o de una dependencia o entidad pública que sean violatorios de los derechos e intereses de los habitantes, de manera fundamentada, el Defensor de los Habitantes o la Defensora Adjunta, por delegación de éste, emite las recomendaciones que se estimen pertinentes, con el fin de que se proceda a tomar las previsiones necesarias para corregir la falta y se restituya o reconozca al interesado los derechos o intereses lesionados.

Las recomendaciones pueden ser de carácter general o específico. Son generales cuando se trata de corregir procedimientos o criterios que son violatorios de derechos y que afectan a un número indeterminado de personas. En este supuesto, cuando el acto violatorio emane de una disposición legal o reglamentaria podrá sugerirse su modificación o la adopción de la normativa pertinente.

La Defensoría de los Habitantes se encuentra facultada para acudir a los medios de comunicación colectiva para hacer de conocimiento de la opinión pública la actuación irregular del funcionario o la entidad. Esta facultad se ejerce en forma discrecional, atendiendo criterios de oportunidad y conveniencia, el interés de la colectividad y el derecho a la información, en la cual siempre media, por supuesto, el derecho fundamental de todo funcionario público de ser respetado en su persona y en su honor.

## Estructura orgánica

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Defensoría de los Habitantes cuenta con los siguientes órganos:

- a) Despacho
  - i. Auditoría Interna
  - ii. Departamento de Prensa
  - iii. Unidad de Estadísticas
  - iv. Unidad de Asuntos Internacionales
  - v. Oficinas Regionales
- b) Dirección de Admisibilidad
- c) Direcciones de Defensa
  - i. Dirección de la Defensoría de la Mujer
  - ii. Dirección de Protección Especial
  - iii. Dirección de Calidad de Vida
  - iv. Dirección de Control de Gestión Administrativa
  - vi. Dirección de Niñez y Adolescencia
  - vii. Dirección de Asuntos Económicos
- d) Dirección de Asuntos Jurídicos
- e) Dirección de Promoción y Divulgación
- f) Dirección Administrativa

### A) Despacho

Está conformado por el Defensor de los Habitantes y el Defensor Adjunto, así como por el personal de confianza, profesional y de apoyo que requiera para desempeñar sus funciones. El personal del Despacho se encargará de velar por la efectiva y homogénea aplicación de los criterios técnicos y las políticas institucionales.

## Auditoría Interna

Le corresponde ejercer el control interno de la institución de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Manual para el Ejercicio de la Auditoría Interna y demás normas del ordenamiento relacionadas con el control y fiscalización de la Hacienda Pública.

## Departamento de Prensa

Le corresponde al Departamento de Prensa coordinar las relaciones, así como la información que se suministre a los medios de comunicación colectiva. Algunas de las funciones que realiza son las siguientes:  
divulgar y promover oportunamente las actividades institucionales; analizar la información de prensa, radio y televisión relacionada con la institución; preparar los boletines y comunicados de prensa; mantener una adecuada comunicación con los medios de comunicación tanto a nivel nacional como local.

## Unidad de Estadísticas

Es la encargada de mantener actualizada toda la información relativa a las consultas, quejas, expedientes, instituciones denunciadas, casuística, entre otros datos.

## Unidad de Asuntos Internacionales

La Defensoría de los Habitantes sostiene de manera permanente, relaciones con instituciones homólogas, organismos internacionales, agencias no gubernamentales, gobiernos, entre otros. Además, participa de instancias regionales y mundiales vinculadas con los derechos humanos y de las cuales se derivan labores específicas y responsabilidades. Asimismo, con el objetivo de cumplir con los fines establecidos por su ley de creación, requiere de la puesta en práctica de acciones concretas con el fin de lograr el apoyo externo que posibilite el cumplimiento de su misión.

Entre los objetivos más importantes de esta Unidad pueden mencionarse:

apoyar e incrementar la capacidad de gestión, coordinación y negociación de recursos externos para la ejecución de proyectos y programas institucionales; coordinar y velar por la correcta elaboración de los proyectos y programas que serán propuestos a los organismos y agencias de cooperación internacional; evaluar el efectivo cumplimiento de los compromisos adquiridos; asesorar al Defensor en todo lo que se refiere a las relaciones con las instituciones homólogas y las agencias de cooperación internacional; contribuir con el fortalecimiento de los vínculos de cooperación y apoyo con instituciones afines.

### Oficinas Regionales

Son los órganos encargados de recibir las quejas y atender las consultas que se les formulen en las regiones a su cargo. Asimismo, deberán colaborar con las Direcciones de Defensa en las investigaciones que éstas tramitan. En coordinación con la Dirección de Promoción y Divulgación estarán encargadas de realizar actividades de esta naturaleza en su respectiva región.

Como producto del proceso de regionalización llevado a cabo, se procedió a fortalecer la Casa del Habitante en Liberia (la cual inició funciones en el segundo semestre de 1998, con el fin de ofrecer los servicios de defensa y divulgación de derechos de los habitantes de la región Chorotega) y se abrió una Oficina en la Región Huetar Norte.

#### b. Dirección de Admisibilidad

Tiene por función la recepción de las quejas que se presenten ante la Defensoría de los Habitantes, la declaratoria de admisibilidad o inadmisibilidad de las quejas, la orientación a los habitantes cuyas quejas resulten inadmisibles, la evacuación de consultas que formulen los habitantes y la

atención inmediata de aquellos asuntos que por su naturaleza requieran la urgente intervención de la Defensoría.

### C) Direcciones de Defensa

Son los órganos encargados de atender, tramitar, investigar y preparar el informe final de las investigaciones de oficio y de las quejas admitidas de conformidad con la competencia institucional. Para ello podrán solicitar información, emitir prevenciones y realizar inspecciones sin previo aviso, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

#### Dirección de la Defensoría de la Mujer

Le corresponde la función de proteger, promover y divulgar los derechos de las mujeres. Asimismo, promoverá y velará por la incorporación de la perspectiva de género en todo el quehacer de la Defensoría de los Habitantes.

La Dirección contará con personal capacitado y especializado en la perspectiva metodológica, teórica y práctica de género, con el fin de garantizar la especialidad en la atención de los casos sobre violaciones a los derechos de las mujeres originados en actuaciones u omisiones del sector público.

#### Dirección de Protección Especial

Le corresponde conocer los casos sobre posibles violaciones a los derechos de las personas que por su especial condición o situación resultan particularmente vulnerables a las acciones u omisiones del sector público y que por lo tanto requieren de una protección especial o de garantía reforzadas. Se incluyen en esta definición, entre otros, los siguientes sectores de la población: indígenas, privados de libertad, vendedores ambulantes y estacionarios, personas



migrantes y discriminadas por cualquier otra razón. Estas acciones de defensa irán acompañadas de las actividades de promoción, divulgación e investigación que resulten necesarias.

Esta Dirección conocerá asimismo, los asuntos relacionados con actuaciones arbitrarias de las fuerzas policiales y la dilación de justicia y otros aspectos vinculados a la actividad no jurisdiccional del Poder Judicial.

#### Dirección de Calidad de Vida

Le corresponde conocer los casos relacionados con la protección del ambiente, el acceso a la salud, la vivienda de interés social y la incidencia de la actividad humana en el entorno.

#### Dirección de Control de Gestión Administrativa

Le corresponde conocer los asuntos específicos relacionados con la prestación de los servicios públicos, los derechos de los habitantes como contrapartes del Estado, el servicio público, el funcionamiento administrativo y financiero de los gobiernos locales, el derecho de acceso a la tierra y el derecho al trabajo.

#### Dirección de la Niñez y la Adolescencia

Le corresponde la función de proteger, promover y divulgar los derechos de la niñez y la adolescencia. Asimismo, promoverá y velará por la incorporación de la perspectiva de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el quehacer de la Defensoría de los Habitantes.

La Dirección de Niñez y Adolescencia contará con personal capacitado y especializado en la perspectiva metodológica, teórica y práctica de la protección de la niñez y la adolescencia, con el fin de garantizar la especialidad en la

atención de los casos sobre violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia, originados en actuaciones u omisiones del sector público.

#### Dirección de Asuntos Económicos

Es el órgano consultivo técnico económico de la institución. Le corresponde realizar las investigaciones de carácter general sobre los asuntos relacionados con los intereses económicos de los habitantes y el manejo de la Hacienda Pública. Asimismo, le corresponde representar a la Defensoría de los Habitantes en los procesos de fijación de tarifas de servicios públicos.

#### d. Dirección de Asuntos Jurídicos

Es el órgano consultivo técnico jurídico de la Defensoría de los Habitantes de la República. Además, es el órgano encargado de representar a la institución en los procesos judiciales y administrativos en que intervenga.

#### e. Dirección de Promoción y Divulgación

Es el órgano encargado de facilitar el conocimiento de los habitantes acerca de sus derechos, de las instituciones creadas para hacerlos efectivos y de la Defensoría como un recurso útil en la defensa y protección de éstos. Los conceptos de educación, promoción y divulgación de los derechos se sitúan en una etapa preventiva de protección de los derechos de los habitantes e implica la generación de una verdadera cultura de los derechos que permee todos los sectores sociales e institucionales.

#### f. Dirección Administrativa

Es el órgano encargado de brindar el soporte administrativo necesario a la gestión institucional. Tiene por función garantizar la correcta planificación y ejecución de las actividades administrativas, financieras, informáticas y documentales de la Defensoría.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección Administrativa estará integrada por los siguientes departamentos: Recursos Humanos, Financiero-Contable, Proveeduría y Servicios Generales, Informática, Archivo y Correspondencia y Centro de Documentación.

#### Funcionamiento y manejo del Presupuesto

El presupuesto de la Defensoría es asignado a través del Ministerio de Hacienda y aprobado finalmente por la Asamblea Legislativa.

La Institución se encuentra cubierta bajo el ámbito de acción de la Contraloría General de la República, órgano de rango constitucional adscrito a la Asamblea Legislativa, que tiene la responsabilidad de fiscalizar el manejo y uso de los recursos financieros del Estado costarricense. De tal forma que la Defensoría de los Habitantes está sujeta a las normas y directrices que emite el órgano contralor para la utilización del presupuesto asignado.



**Anexo número cinco acta legislativa ciento nueve del año mil novecientos noventa y cinco, que versa sobre el primer voto de censura, que se ha producido en el país.**

Directorio

Antonio Álvarez Desanti PRESIDENTE

Álvaro Azofeifa Astúa

María Luisa Ortiz

Meseguer primer Secretario primera Prosecretaria

Diputados presentes

Albán López, Mary	Martínez Ramírez, Luis Antonio
Álvarez Desanti, Antonio	Méndez Mata, Rodolfo
Álvarez González, Mario	Núñez Torres, Víctor Hugo
Álvarez Murillo, Víctor Eduardo	Pacheco Fernández, Francisco Ant.
Aragón Barquero, Bernal	Piszk Feinziiber, Sandra
Araya Paniagua, Gerardo	Obando Venegas, Roberto
Arguedas Rivera, Guillermo	Ortiz Messeguer, María Luisa
Azofeifa Astúa, Álvaro	Román Trigo, Luis Alejandro
Benavides Benavides, Bernardo	Salas Araya, Alexánder
Bravo Trejos, Hernán	Sánchez Valverde, María Lidya
Brenes Castillo, Juan Guillermo	Solís Fallas, Ottón
Brenes Gómez, Rodolfo	Solís Piedra, Leonel

Brenes Rojas, Víctor Julio	Trejos Salas, Gerardo
Cañas Escalante, Alberto	Urcuyo Fournier, Constantino
Carazo Zeledón, Mario	Ureña Ureña, Óscar
Castilblanco Vargas, Edelberto	Valverde Acosta, Carmen María
Cole Scarlett, Teddy	Vásquez Badilla, Lorena María
Corrales Blanco, María Elsy	Velázquez Acuña, José Luis
Coto Molina, Wálter	Venegas Porras, Bienvenido
Chaves Ovarés, Alejandro	Villalta Fernández, Rafael Ángel
Díez Martín, Anabella	Villanueva Monge, Luis Gerardo
Fajardo Salas, Gonzalo	Weisleder Weisleder, Saúl
Fernández Alvarado, Carlos Manuel	Zumbado Arias, José Roberto
Fournier Origgi, Hernán	
Fuentes González, Humberto	
González Ulloa, Rolando	
González Villalobos, Orlando	
Gutiérrez Schwanhauser, Rodrigo	
Jiménez Succar, Juan Luis	

## ÍNDICE

### A) Discusión y Aprobación del acta

El presidente:

En discusión el acta de la sesión N° 108 \_\_\_\_\_ 3 Aprobada

### B) ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO

Dip. Rodolfo Méndez Mata _____	3
Dip. Gerardo Trejos Salas _____	5
Dip. Francisco Ant. Pacheco Fernández ____	5
Dip. Alejandro Chaves Ovarés _____	6
Dip. Carmen María Valverde Acosta _____	8
Dip. Carlos Manuel Fernández Alvarado ____	9
Dip. Luis Antonio Martínez Ramírez ____	11
Dip. Leonel Solís Piedra _____	13
Dip. Bienvenido Venegas Porras _____	14
Dip. Mario Carazo Zeledón _____	17
Dip. Wálter Coto Molina _____	20

El presidente: Anuncio de mociones de censura contra el

Ministro de Seguridad Pública \_\_\_\_\_ 22

Levanta la sesión \_\_\_\_\_ 22

El presidente Antonio Álvares Desanti: Se abre la sesión.

Discusión y aprobación del acta

En discusión el acta de la sesión No. 108.

Discutida el acta. APROBADA.

Ruego a los no Diputados y no Diputadas abandonar el recinto parlamentario.

## ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO

Ha solicitado la palabra el Diputado Méndez Mata.

### DIPUTADO RODOLFO MÉNDEZ MATA:

He solicitado el uso de la palabra en el Capítulo de Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, porque me parece que los hechos que se han sucedido en este día, concretamente en horas de la mañana, obligan a este cuerpo legislativo a hacer una reflexión, provocar un análisis y discusión y llegar a tomar una determinación, porque no recuerdo en mis largos años, ya, de servicio público, un acto similar a la naturaleza del realizado esta mañana, cuando el Ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, acompañado de la Fuerza Pública, armas en mano, viene aquí, a la Asamblea Legislativa en ánimo de intimidación, en ánimo de violación de la majestad legislativa.

No recuerdo jamás un acto tan insólito, tan brutal y despiadado en una democracia como la democracia costarricense. Este país que se precia de la paz, este país que se precia de la democracia, del respeto a la institucionalidad, del respeto a los derechos humanos; un país que trata de ser ejemplo y que quiere ser ejemplo para otros países del mundo, viene a experimentar actos violentos y violatorios como los que hoy tenemos que lamentar.

Hemos mantenido, en lo político, discrepancias con el Gobierno; hemos mantenido en lo político, discrepancias con funcionarios de Gobierno, pero eso se tiene que quedar hoy al lado. Hoy, es la Asamblea Legislativa de Costa Rica, es este cuerpo institucional, en su integridad el que se ha visto lastimado por el acto perpetrado en su contra por el Ministro de Seguridad Pública.



Quiero, señor Presidente de esta Asamblea Legislativa, expresar a usted mi solidaridad, mi respeto y reconocimiento por la forma íntegra en que usted ha salido a responder a estos actos, a nombre de la Asamblea Legislativa. De la misma manera, mi respeto, mi solidaridad, mi aprecio y reconocimiento a los Jefes de Fracción que acuerparon al señor Presidente de la Asamblea Legislativa y actuaron en conjunto en defensa de la institucionalidad, en defensa de la democracia, del respeto entre los Poderes que ha caracterizado a la democracia costarricense.

No encuentro, no podría encontrar, bajo ningún tipo de razonamiento, excusa alguna que llegase a justificar un acto como el que tenemos que lamentar, perpetrado esta mañana. No le cabe razón, en lo fundamental, al Ministro de Seguridad Pública, tratar de esconder propias responsabilidades en la Asamblea Legislativa y en el trabajo de los Diputados de esta Asamblea Legislativa.

No le cabe, porque nosotros, muy bien lo sabemos, ¡él lo sabe!, ¡el Gobierno lo sabe! que los Diputados de esta Asamblea Legislativa han venido trabajando con intensidad, precisamente, en busca de solución a algunas de las leyes que están en nuestras manos y que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Se ha venido coordinando, en ese trabajo, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial en procura de la mejor solución en materia legislativa.

No le cabe razón al Ministro de Seguridad Pública porque es falso y él lo sabe, que es causal del problema de delincuencia de este país, la ausencia de trabajo o de decisión de esta Asamblea Legislativa. Es falso y el Ministro de Seguridad lo sabe, lo conoce, que no es cierto que pueda atribuírsele responsabilidad a los Diputados de esta Asamblea Legislativa por el problema que tiene acongojado al país, por la escalada de violencia que se ha venido sucediendo.

No hay nada peor, no existe en el desempeño de cualquier tarea, pero máxime cuando se trata del desempeño de una función pública, no hay nada peor que la mentira, que el engaño y no hay nada peor que la falta a los deberes

constitucionales que es parte de los hechos que hoy tenemos que lamentar en esta Asamblea Legislativa.

Si el señor Ministro de Seguridad Pública cree que va a intimidar, con sus actos a los Diputados y a las Diputadas, está totalmente equivocado, porque estoy seguro que aquí va a encontrar a cincuenta y siete mujeres y hombres dispuestos a responder por la institucionalidad de este país.

Que no quiera venir a poner la Fuerza Pública alrededor de esta institución, a mancillar a esta institución, porque cree que al hacerlo va a ver agacharse a ninguno de los cincuenta y siete Diputadas y Diputados en esta Asamblea Legislativa.

Si es una prueba lo que ha querido venir a hacer el Ministro de Seguridad Pública, que sepa que aquí hay cincuenta y siete mujeres y hombres, señalados y asignados por los costarricenses, que dignamente estamos desempeñando nuestra posición, y que estamos dispuestos a responder integral y personalmente por este tipo de actos de matonismo que insultan la dignidad de todos los costarricenses.

Hemos estado pensando, meditando y aspirando a que existiera una iluminación en el señor Presidente de la República para que corrija el daño que este Ministro le ha inferido a la institucionalidad, a la democracia, a la paz, a la tranquilidad y a los derechos de los costarricenses.

Distantes ante los hechos de aspectos políticos partidaristas. Hemos pensado, hemos querido creer que por encima de eso, está la Patria; la Patria que hoy se ha visto ofendida. Y por eso creo que las heridas que ha recibido el conglomerado que conforman todos los ciudadanos de este país, la vida misma del ser costarricense tendrá que ser reparada a través de la decisión y la voluntad de este cuerpo legislativo, y buena muestra de eso -y lo vuelvo a

reconocer, señor Presidente- es la acción que usted ha emprendido al lado de los Jefes de Fracción de los distintos Partidos que componen este Parlamento.

DIPUTADO GERARDO TREJOS SALAS:

No quiero minimizar de modo alguno, los hechos graves que ocurrieron hoy. Sin embargo, debo reconocer una nota de folklore en ese desfile de hoy, propia de un Ministro folklórico.

En cambio, grave me parece, el respaldo que ha recibido el Ministro folklórico del señor Presidente de la República. Creo, en buena lógica, que quien debería renunciar es el señor Presidente de la República junto con su Ministro de Relaciones Exteriores, sus dos Vicepresidentes, para que, como lo prevé la Constitución Política, el Presidente de la Asamblea Legislativa asuma la Presidencia de la República.

DIPUTADO FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ:

Cuando uno ha tenido relación con los asuntos públicos por varias décadas, resulta menos dramáticamente turbado ante acontecimientos que, momentáneamente, hacen que la conciencia de un grupo se altere.

Creo que el Ministro de Seguridad Pública, hoy cometió un error; un error grave, al presentarse con un grupo de policías a la Asamblea Legislativa, y estacionarlos en frente. Debo añadir que este hecho encuentra además reacciones fáciles en nuestra actitud nacional de rechazo de todo lo que tenga que ver con militares, pero a veces de un mal surgen bienes. En primer lugar, una reacción concertada de distintas fuerzas de la Asamblea Legislativa, lo cual

prueba que hay solidaridad cuando se da ciertos actos que consideramos dignos de ser rechazados.

Por otra parte, creo que esto nos permite abrir un debate serio, sobre algunos asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y el primero de ellos, en el que tenemos que insistir, hasta que todo costarricense se lo meta en la cabeza, es que, la seguridad ciudadana puede ser, debe ser favorecida por normas legales, como las que hemos venido dando durante este año, pero que no depende de una transformación de las leyes.

Hay una actitud mágica en la gente. Siempre que se presenta un problema, siempre que se da una crisis, se dice, modifíquense las leyes y mañana no existirá el problema. Nosotros podemos aprobar veinticinco proyectos de ley al respecto, podemos variar todo el sistema penal, que seguiremos con un problema de seguridad ciudadana por mucho tiempo.

Me parece que la reacción del señor Presidente de la Asamblea Legislativa, y me parece que la reacción de los Jefes de Fracción, especialmente, del Jefe de Fracción de Liberación Nacional, correspondieron a lo que su deber llamaba que hicieran. En el hecho mismo de haber tomado esa decisión importante, hay evidentemente una censura para un acto que no aprobamos.

¿Qué sigue de aquí en adelante? Ya todos lo sabemos. Estas cosas no son el fin de la República. No son estas cosas el fin de la Asamblea, son un episodio que no debe alterarnos en nuestro trabajo y en nuestra voluntad de seguir transformando el país, sobre todo en los aspectos penales. No debemos ir con una rapidez excesiva que nos obligue a rectificar; tampoco debemos ir con la lentitud con que en otros períodos, otras Asambleas Legislativas caminaron. Hagamos un recuento frío de lo que hemos hecho este año y el año anterior en leyes que favorecen la seguridad ciudadana, y creo que el país se sorprendería de lo que hemos avanzado, si llegara a enterarse de ello.

Propongámonos, como lo hemos hecho, sacar otras leyes con urgencia. Pero también digámosle a la gente, que no cifre sus expectativas en reforma de leyes, sino que las cifre en un movimiento nacional que tiene que darse, de repulsa al crimen, de disciplina y de unidad nacional en torno a estos objetivos.

Espero que pronto la concordia vuelva, y espero que no se repitan hechos lamentables como los que ocurrieron hoy. Estoy seguro de que estas experiencias dejan huella, y creo que la vida democrática, aún de los males, se enriquece.

DIPUTADO ALEJANDRO CHAVES OVARES:

Desde el mes de mayo de 1994, cuando en una sesión de esta Asamblea Legislativa, se hizo presente el señor Ministro de Seguridad Pública, don Juan Diego Castro -a dar un informe de las arbitrariedades y situaciones que se habían presentado esos días, allá por Sarapiquí- esta Fracción manifestó ante esta Asamblea Legislativa, su preocupación por la forma de manejar la seguridad de este país, del Ministro Juan Diego Castro. En esa oportunidad le dijimos al país, de la forma arbitraria, de la forma prepotente y de la forma de tomar las decisiones, no tradicionales en este país, del señor Ministro Castro.

Muy lamentable para esta Asamblea Legislativa, ver en el día de hoy, cómo el señor Ministro de Seguridad se presenta ante esta institución, tratando de intimidar a este Poder de la República, y tratando de venir a esta Asamblea Legislativa, jugando de militar. Porque en la mañana del día de hoy, el señor Ministro Castro movilizó un contingente de la Fuerza Pública, constituido por cincuenta y dos efectivos uniformados, un pelotón de veintiocho hombres a caballo, veinticuatro motocicletas y ciento sesenta y cinco efectivos más, de las diversas comisarías de San José, armados con fusiles M-1 o escuadras de nueve milímetros.

Señores Diputados, señor Presidente, no es como dijo el señor Presidente de la República, en unas declaraciones que acaba de darle a los medios, que fue una manifestación pacifista, para pedirle a la Asamblea Legislativa, apoyo a la seguridad ciudadana.

¡No, señores! el venir armados con M-1, el venir armados con escuadras de nueve milímetros no es ninguna manifestación pacifista. Y es que ese nuevo Napoleón tropical del señor Ministro de Seguridad, que en el día de hoy ha violado la Constitución Política, en su artículo 12, donde dice: " ... prohíben las manifestaciones individuales o colectivas de los miembros de la Fuerza Pública..." es una violación muy grave a la Constitución Política, es la ruptura del orden constitucional, es un insulto al Parlamento costarricense, y este Parlamento el día de hoy, con el apoyo de los cuatro Jefes de Fracción, y con el apoyo del señor Presidente de esta Asamblea Legislativa, han pedido la renuncia o la destitución del señor Ministro de Seguridad.

Lo lleva a uno a recordar tiempos pasados, cuando el señor Ministro Juan Diego Castro pertenecía a aquellos partidos leninistas y que muchas veces hicieron actos de intimidación y sobre todo allá por el pueblo de él, Paraíso de Cartago. Le da a uno el temor de que estos hechos que se viven hoy y con un planteamiento que hizo el día de ayer el señor Ministro Castro ante el país, en la reestructuración de la fuerza policial, hacerla de un solo contingente a nivel nacional, le da a uno temor de esas ideas, porque su forma de actuar, su forma de tomar decisiones, su forma de intimidar, no es de la persona ecuánime y capaz de manejar la seguridad de este país.

Creo que es el momento para que esta Asamblea Legislativa tome las decisiones como Primer Poder de la República, que se dé a respetar como Primer Poder de la República, que esta Asamblea Legislativa llame a los señores Ministros a respetar la Constitución. Considero que es hora de que nosotros como Diputados, pidamos un voto de censura para el señor Ministro. Pidamos su destitución del Gabinete, porque el fin de semana fuimos deshonrados por

extranjeros aquí mismo en la Asamblea Legislativa, al colocar una bandera de otro país, y además, poner figuras de marines dentro de la Asamblea Legislativa y hoy es la policía encabezada por don Juan Diego Castro, quien viene a insultar al Parlamento costarricense, haciendo actos de prepotencia y de intimidación al Primer Poder de la República.

Señor Presidente, le doy todo el apoyo a usted y a los cuatro Jefes de Fracción, en lo que el día de hoy externaron a la opinión pública, y a todos nosotros, compañeros Diputados, les pido que seamos solidarios con la decisión de los cuatro Jefes de Fracción y del señor Presidente, y pidamos un voto de censura y la destitución del señor Ministro de Seguridad, porque ningún bien le está haciendo a la imagen y a la institucionalidad de este país.

**DIPUTADA CARMEN MARÍA VALVERDE ACOSTA:**

Indudablemente que el problema de la seguridad ciudadana es un problema que viene preocupando a los costarricenses desde hace bastante tiempo. En el programa que el Partido Liberación Nacional presentó a los costarricenses en la campaña, se presentó eso como uno de los aspectos fundamentales que este Gobierno debía enfrentar. En ese análisis que se hace en el programa liberacionista para el bienestar de los costarricenses, se presenta un resumen de los factores que inciden en la seguridad de los ciudadanos costarricenses.

Analizábamos ahí, quienes participamos un poco en la elaboración de esos programas, que hay dos aspectos fundamentales en esto de la seguridad ciudadana: 1.- La prevención de la delincuencia. 2.- El aspecto represivo de la delincuencia. En el aspecto de la prevención de la delincuencia, hay aspectos muy importantes que tienen que ver con la legislación -es cierto- y algunos que tienen que ver con el desempeño del Ejecutivo. Hay aspectos que tienen que ver, también, con el correcto castigo de los delincuentes relacionados con la legislación.

Quisiera decirle a los costarricenses que esta Asamblea Legislativa -compuesta por cincuenta y siete Diputadas y Diputados de Fracciones mayoritarias y minoritarias- ha trabajado arduamente sobre esto durante el año y medio que llevamos de laborar. Hemos aprobado leyes muy importantes para contribuir, en lo que corresponde a la Asamblea Legislativa, con la seguridad ciudadana.

Apenas ingresamos a esta Asamblea, muy pocos días después, se aprobó una Ley General de Policía. Aprobamos la Ley de armas, la Ley de intervenciones telefónicas y la Ley de espectáculos públicos, que hace posible que en Costa Rica se limite, de alguna manera, uno de los factores que inciden muchísimo en aspectos de violencia, como los que hoy estamos lamentando.

Los programas de violencia que se transmitían libremente, deben ser controlados, y en ese sentido también aprobamos una legislación.

Hace bastantes meses, más de doce, que hemos discutido algunos aspectos relacionado con el ordenamiento penal. Seriamente hemos analizado el Código Penal, el Código de Procedimientos; otras leyes como la ejecución de la pena y la situación del castigo a los menores. Este análisis que hemos venido haciendo, debe estudiarse de una manera pausada, técnica, académica y correcta, y eso es lo que hemos hecho.

Pienso que hemos adelantado muchísimo porque hemos trabajado extraordinariamente; sin embargo, no podemos tener una legislación en el orden penal en un tiempo rápido, puesto que esto traería el peligro de festinarla.

La Comisión Especial que estudia las reformas penales tiene en sus manos actualmente el producto de año y pico de reflexión de parte de especialistas y altas personalidades en el campo del derecho penal costarricense.



Hemos coordinado con la Corte Suprema de Justicia, con el ILANUD, con la Defensoría de los Habitantes y con otras organizaciones interesadas e involucradas en el tema del derecho penal.

Considero que, de esta manera, hemos contribuido en la parte que corresponde a la legislación, con el tema de la seguridad ciudadana, y estamos dispuestos a seguir trabajando en esta línea y sobre este tema con la seriedad que, hasta el momento, lo hemos hecho.

Lamento profundamente la acción del Ministro de Seguridad esta mañana. Creo que no fue prudente ni pertinente. El Gobierno de la República ha venido desarrollando un trabajo también congruente con ese planteamiento que se hizo en el programa liberacionista para el bienestar de los costarricenses, y que sometimos a consideración del pueblo de Costa Rica en la campaña.

Se ha mejorado en la capacitación policial, se ha mejorado en el ordenamiento del Ministerio de Seguridad Pública. Pero eso de ninguna manera justifica la acción de hoy en la mañana; y repito, lamento profundamente que eso haya sucedido. Me parece un acto absolutamente discordante con lo que es la democracia, la civilidad costarricense y la institucionalidad del país. Considero que eso no debió ocurrir, y así esta Fracción lo ha manifestado.

Hemos estado de acuerdo con las acciones en el campo de la capacitación y de la puesta en orden, y eso lo respaldamos. Hemos estado de acuerdo con el trabajo que se ha estado haciendo en legislación, y estamos dispuestos a trabajar más. Los Diputados de la Fracción liberacionista estamos dispuestos a dar nuestra contribución a lo que Costa Rica necesita en el tema de la seguridad, pero no estamos dispuestos a aceptar un acto como el de la mañana.

Tampoco estamos dispuestos a reconocer que es responsabilidad de la Asamblea el tema de la seguridad. Es responsabilidad de la Asamblea, es

responsabilidad del Poder Ejecutivo, es responsabilidad de los costarricenses también, es responsabilidad de las organizaciones que tienen que velar por una mejor educación, por un control de los espectáculos públicos, etc.

De manera, compañeras y compañeros Diputados, que lamento y repudio el hecho de la mañana, y sí aseguro a ustedes y al pueblo costarricense que pondré el mejor de mis esfuerzos, como lo estamos haciendo ahora, para que la Comisión de Reformas Penales, en un tiempo corto, no porque festinemos sino porque trabajamos extraordinariamente, ofrezcamos al pueblo de Costa Rica los dictámenes que corresponden de las leyes que tenemos en nuestras manos.

**DIPUTADO CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ ALVARADO:**

En las últimas horas y días, el Ministro de Seguridad Pública, don Juan Diego Castro, ha estado manifestando que el Congreso de la República ha retardado la aprobación de reformas legales en la legislación penal.

Habría que reiterar que el señor Ministro de Seguridad Pública miente una vez más, porque eso no es correcto. La Comisión Penal Especial Mixta está trabajando en una legislación penal sistemática, incluyendo el Código Penal, su parte general, su parte especial, contravenciones, penas alternativas, la Ley tutelar juvenil y el Código Procesal Penal.

Y el señor Ministro de Seguridad Pública, lamentablemente miente tanto que la propia Corte Suprema de Justicia sabe que el Código Penal nuevo no podría entrar en vigencia de inmediato, lo que implicaría que su entrada en vigencia tardaría varios meses para su aplicación.

Entonces el señor Ministro lo que trata de decir es que el problema de seguridad ciudadana, que lo ha manejado tan mal, es culpa de que el Código

Penal no esté aprobado, lo cual no es cierto. Ese Código no entraría a regir inmediatamente, lo que significa que el problema no está ahí.

De las reformas que presentó el señor Ministro de Seguridad Pública en forma aislada, y que dice que no se las han querido aprobar, se le manifestó en alguna oportunidad que algunas de ellas no tenían viabilidad jurídica, varias de ellas tenían vicios de inconstitucionalidad. Algunas de ellas, desde el punto de vista penal, los tipos eran excesivamente abiertos, cuestionables y no tenían aplicación.

Lo que ocurre es que el problema de seguridad ciudadana no se arregla solamente con la creación y la reforma penal. Requerimos también que se incorpore al Presupuesto de la República dinero suficiente para el sistema penitenciario nacional. También requerimos que la vigilancia en las calles y que el sistema de cuido de barrios sea totalmente diferente.

Tal y como lo dijo la señora Vicepresidenta del Congreso, doña Carmen María Valverde, la Comisión Penal Especial Mixta integrada por Diputados de diversas Fracciones de este Parlamento, por Magistrados, litigantes, profesores universitarios, ha hecho todo un esfuerzo, por meses, para tratar de corregir el problema de orden penal; pero no es cierto, que se haya dado, ningún retardo en la aprobación y el señor Ministro lo sabe perfectamente, porque ha asistido sistemáticamente, a muchas reuniones que se han hecho, ha tenido conocimiento del esfuerzo y la dedicación con la que se ha trabajado, con personal competente y capacitado y estudioso de la problemática penal.

No es cierto entonces, que la tardanza en la aprobación de una legislación, que es sustancial en el país, donde se están, incluso, dando la posibilidad, de la creación de penas alternativas, en el caso de las penalizaciones, que va permitir la penalización en forma fuerte, al delincuente que comete delitos, que por su naturaleza sean atroces, y también permitir a la gente, al imputado, al

condenado, que pueda reintegrarse a la actividad social productiva en el país, cuando así lo requieran las circunstancias.

Para terminar, me da pena, que un Ministro de Seguridad Pública, que sabe el esfuerzo que ha hecho esta Asamblea Legislativa para trabajar en reformas penales importantes, en reuniones que hemos tenido frecuentemente, en grupos de estudio, para corregir las deficiencias, que no son de ahora, que han sido deficiencias porque el derecho siempre va más atrasado que la dinámica de la vida social, y han quedado esas normas, esos preceptos legales, han quedado deteriorados, por el transcurso de la dinámica de la vida social.

Entonces señor Ministro, si ese problema también lo tuvo la anterior Administración, era el mismo código, era la misma legislación, y siento que eso fue esfuerzo, que esta Comisión Penal Especial Mixta la ha estado haciendo, lo hizo en su oportunidad la señora Ministra de Justicia, doña Elizabeth Odio, también integrando grupos, parte del trabajo que hemos usado, valioso, ha sido aporte importante, que vivió también doña Elizabeth, trabajo importante que se ha aportado en esta oportunidad por gente muy valiosa, y me parece que es bueno y es saludable para el país hacer esa corrección, en tanto el Ministro de Seguridad Pública ha querido hacer una falsa representación de la realidad al país, diciendo cosas que no son correctas ni verdaderas.

**DIPUTADO LUIS ANTONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ:**

Realmente es lamentable, que hoy el Congreso de la República, tenga que abocarse a una situación tan penosa. Espero y deseo que esta actitud, iniciada el día de ayer con una conferencia de prensa, no sea la premonición de cosas peores. Que no sea el Congreso de la República el pararrayo o el perro flaco al que se le estén pegando las pulgas, con las cuales poder salir avante, en una actitud irreflexiva.

Que la majestad, que los principios y la base republicana de este país, se mantenga intacta, a través de mantener la institucionalidad costarricense. Que no se socaven, bajo ningún pretexto, esas bases institucionales que valen más que la labor o la popularidad de un Ministro, es eso lo preocupante. Lo preocupante porque un conocedor de la ciencia penal sabe que este país no puede seguir legislando casuísticamente, como ha venido aconteciendo desde hace muchos años, desde los años setenta, con la promulgación del Código Procesal Penal.

Este país no puede seguir llenando de parches y de baches nuestra legislación penal, llegó el momento, si se quiere verla a futuro, que lo organicemos armoniosamente, de acuerdo al signo de los tiempos y de acuerdo a la experiencia acumulada de nuestros tribunales, a la experiencia y lo que está señalando la Sala Constitucional, y podamos acomodarla como corresponde. No podemos tener un Código Penal inspirado en una doctrina y una corriente de pensamiento, y tener un Código Procesal inspirado en otra corriente de la ciencia penal.

Es necesario que armonicemos nuestra legislación penal, para hacerla absolutamente consistente, y cuando logremos eso, quizás, vamos a evitar los recursos de inconstitucionalidad, que han venido a dar al traste, en gran parte, con los deseos y con las intenciones del legislador, cuando se ha promulgado este tipo de legislaciones.

El frío no está en las cobijas, ino vamos a arreglar el problema de la delincuencia, y la escalada en esta actividad en el país, tan lamentable! ¡No creo que haya un solo costarricense, que no desee parar inmediatamente la ola de delincuencia que se vive! Pero no es con parches, no es con leyes casuísticas como vamos a lograr parar esto, ya los tiempos nos lo han señalado con vehemencia y nos los están reprochando en el presente.

Las causas, como lo señalé ayer, están en otras partes, y vienen desde muy lejos, que son causas que también debe llevarnos a meditar, a profundizar en ellas, porque ahí vamos a encontrar la génesis de lo que estamos viviendo.

Señalaba ayer la desintegración familiar, y hablábamos de los chapulines, como una cosa hasta folkórica del costarricense, pero es que hemos perdido, hemos perdido ese valor de poder meditar sobre lo que significa los propios niños y la propia identidad de los costarricenses, resumida en niños delincuentes, es que hemos perdido la sensibilidad de poder ver en estos costarricenses, el daño que estamos causando, con una sociedad, que debemos revisar inmediatamente, es que los chapulines, como infortunadamente se les llama, no es el producto de una generación espontánea, sino es el producto de la sociedad que estamos construyendo todos los costarricenses, y todos en muchas partes del planeta.

Los chapulines provienen de familias que no tienen ese cariño del hogar, esa formación del hogar, y ni qué decir de la formación espiritual, que ya se ha perdido, y ni qué decir de la deserción en las escuelas y en los colegios, para llegar al mundo fácil, el mundo aterrado por filibusteros nuevos, como la drogadicción, en donde no hay ese sentimiento maternal, y no hay ese cariño, isino la embestida salvaje, de quienes quieren seguir comerciando con los niños de la calle!

La violencia en televisión, si eso es la otra escuela que les estamos dando a estos jóvenes y a los costarricenses, y el sexo, y nos extrañamos por qué las escaladas de los delitos sexuales, si con solo prender la televisión pueden encontrar toda la represión moral que tiene un montón de gente, y pueden encontrar ahí todas las desviaciones posibles, y gratuitamente, solo con encender el televisor. Violencia y sexo a la vez, un denodado consumismo y provocar tenerlo fácil y de la manera más fácil posible. Finalmente, acceso a las oportunidades.

Estas son causas fundamentales, causas que provocan y devienen en lo que estamos sufriendo hoy. Ignorarla y decir que la Asamblea Legislativa es la culpable, porque no ha hecho los remiendos, sin llegar a tocar el fondo en estas causas, es irresponsable, pero aún hay otros detalles que hay que tomar muy en cuenta, antes de averiguar y antes de analizar las causas de la criminalidad en este país, y es la formación ino es haciendo más grande el aparato represivo de este país, como vamos a arreglar el problema de la delincuencia! ¡No es haciendo más grande el aparato represivo de este país, como vamos a arreglar el problema de la seguridad ciudadana! ¡Lo vamos a hacer cuando entendamos revisar ese aparato represivo, que si no funciona de una manera centralista - como lo tenemos ahora- debemos revisarlo para descentralizarlo, y entonces pensar en la policía municipal; pensar en una policía más cerca de la comunidad, más íntima y más llegadera, una policía que obedezca más a los principios comunales, una policía que conozca, puesta y dirigida por las comunidades organizadas a través de los municipios. Digo esto y quizás no es la solución, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero pienso que con la imaginación y la creatividad del costarricense, podemos encontrar fórmulas viables que atenúen la criminalidad que está sufriendo el país.

Y entonces llevamos dos efectos: Las causas y la reorganización, la revisión estructural del sistema o del aparato represivo del país. Y entonces sí, llegamos a la legislación penal. Llegamos a la legislación penal. Yo creo, compañeros, que pedirle a este Congreso que festine un Código Penal, un Código Procesal Penal, una ley de ejecución de la pena o una Ley penal juvenil es echar por la borda el esfuerzo que se está realizando en este tema.

Lograr conciliar y converger a los distintos sectores que deben alimentar un proceso que le dé al país una legislación penal acorde a nuestras necesidades, no es tan fácil. Que converja la Escuela de Derecho, el Colegio de Abogados, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en un as de voluntades, es importante y no debemos menospreciarlo.

En la Administración anterior se hizo un notable esfuerzo para aumentar las penas, y se aumentó el límite máximo de la pena. Se aumentaron también las penas y se revisaron algunos tipos penales. Pero como dije, el frío no está en las cobijas, no es ahí donde vamos a remediar. Si bien la legislación penal va a ayudar en mucho, lo cierto es que si no atacamos otros factores como los que he señalado, no vamos a tener posibilidad de contar con una Costa Rica segura, como todos añoramos.

Por eso es que debemos ver este problema con absoluta seriedad y absoluta responsabilidad. No podemos salir a la prensa hoy, y decirle a ella que es el atraso del Congreso el que genera la inseguridad que vivimos. No es posible que tal manifestación se haga. Y si a eso le unimos que, casualmente, un día después de esas expresiones se hace una de las manifestaciones más vergonzosas que pueda conocer el costarricense, como fue poner a todos los coroneles de este país a desfilas, es cuando llamo a la meditación, y creo más que es necesario la descentralización de la policía para hacerla menos fuerte, para hacerla más segura, para hacerla más efectiva, para hacerla más congruente con el espíritu, los idearios e idiosincrasia de los costarricenses.

Debemos verlo de esa manera. Y ahí creo que es el error del Ministro de Seguridad. No es bajo ese contexto. Se equivocó, y de ahí que yo me una y me solidarice con el Presidente de la Asamblea Legislativa y los señores Jefes de Fracción.

Quizás esto no sea bien entendido por los costarricenses, porque como señalé, parece que lo más fácil cuando se quiere subir la popularidad de un político o de una actividad cualquiera, es darle duro a la Asamblea Legislativa. Pero la base republicana se está lesionando, y no pasará mucho tiempo -y espero equivocarme- que alguna persona, en una manifestación parecida, se atreva a lanzar un grito más, y entonces provoque algo que los costarricenses no deseáramos.



Este es un Congreso que ha trabajado, y lo ha hecho seriamente. Este es un Congreso que ha trabajado por reformar el Estado, y ayer señalé que aspiraba a una reforma del Estado con rostro humano. Este es un Congreso que ha trabajado por darle a este país una legislación responsable y de cara al futuro. Este es un Congreso que ha trabajado en todos los aspectos, para poder dimensionar y proyectar el trabajo que el país requiere de cara al próximo milenio.

Por eso, tildar en estos momentos al Congreso de falto de voluntad, tildar al Congreso de vagabundo, tildar al Congreso como desinteresado en los asuntos de la Patria, es irresponsabilidad por parte de quienes se atreven a tal afrenta contra el Congreso, y desde ese punto, es reprochable y hay que condenarlo.

DIPUTADO LEONEL SOLÍS PIEDRA:

Deseara venir aquí a tirarle flores a estos funcionarios públicos. Ese sería mi deseo, y pienso que ese sería el deseo de cada uno de los costarricenses; ese sería su deseo, venir a alabar el trabajo y los esfuerzos que hacen estos funcionarios. Pero desgraciadamente para con todos los costarricenses, tenemos la obligación de ser serios y honestos; y en este caso no puedo renunciar a eso.

Vengo aquí a aceptar con vergüenza, con mucha vergüenza el Ministro de Seguridad que tenemos. Y podemos hacer un poco de historia sobre esto. Desde el año pasado, de los errores que yo recuerdo están cuando en el peaje ubicado en la carretera que va hacia Cartago, se llevó la barra, porque eso es lo que está enseñando a los costarricenses: la violencia.

Recuerdo cuando se ha dedicado a decir que los problemas que tenemos de seguridad, es culpa de los Diputados. Y no solamente ha dicho eso, sino que le ha manifestado a los subalternos que ellos algunas veces no tienen comida,

transporte, ni medios de comunicación y otros, porque es culpa de los Diputados.

Cada uno de nosotros sabemos la serie de errores que este señor ha cometido. Y realmente nos da muchísima pena, porque cuando tenemos violencia, la cual no podemos ocultarla, tampoco, la persona indicada, la persona que está al frente de esa Cartera es el que está dando mal ejemplo.

Venir hoy al Primer Poder de la República a ofender, a humillar, con esa semejante malacrianza, con un despliegue, en un país como este que no está acostumbrado, en un mes de diciembre que estamos celebrando esa fiesta navideña, donde debemos estar alegres, este señor no se fija en ninguna cosa de estas y sigue cometiendo semejantes errores.

Es muy difícil pedirle a este señor, porque nos damos cuenta de que no atiende, pero si atendiera, si quisiera entender estas cosas, desde esta tribuna le pediría, que por estar en el mes de diciembre, por ser este un país muy bonito, que le haga el favor y el bien a los costarricenses y, tal vez, que si tiene vergüenza, que renuncie como Ministro.

Queremos personas que vengan a trabajar por el bienestar de los habitantes y no queremos personas que vengan a manchar, a dar un mal ejemplo como lo está dando este señor, si es que se le puede llamar señor.

Realmente no me gusta hablar en esos términos, pero siento indignación. Me siento muy molesto. Siento que este país está de luto con estas cosas que están pasando. Me duele, enormemente, porque cuando estamos conscientes que esta Asamblea está haciendo un trabajo muy positivo, un trabajo que va a poner en los primeros lugares -y la historia lo va a decir así- por el trabajo tan efectivo que ha hecho.

Me siento sumamente complacido, seguro de que las medidas que se han tomado en esta Administración son positivas. Eso lo reconozco, pero no puedo reconocer estas cosas. Me parecen malas. Y tengo que decirle al pueblo que acepte las disculpas porque me da pena que estén ocurriendo estas cosas. Por eso, con vehemencia, le pedimos al señor Presidente, le pedimos a este mismo señor, que ayude a este país, que presente la renuncia cuanto antes, para que nosotros podamos pasar una Navidad más tranquilos.

DIPUTADO BIENVENIDO VENEGAS PORRAS:

No podía dejar pasar esta oportunidad para referirme a los hechos vergonzosos y al atropello que el Primer Poder de la República ha sufrido hoy por parte del señor Ministro de Seguridad Pública.

Es que esto no nos debe extrañar. Este Ministro, a lo largo de toda su gestión, ha demostrado ser un prepotente. Ha demostrado ser una persona que cree tener, siempre, la razón y conocer todas las cosas. Ayer, denunciaba que la Asamblea Legislativa era la culpable de todo el problema de delincuencia que hay en este país -porque así lo dejó entrever en la denuncia que él hizo- y que él había enviado un proyecto, hace un año, a la Asamblea Legislativa y que ese proyecto no se había aprobado.

Sencillamente es que ese proyecto que envió Juan Diego Castro, fue revisado y tiene más de un defecto. Es un proyecto con normas inquisitorias, donde pareciera que el Ministro Juan Diego Castro está respondiendo muy bien a la asesoría que le están dando los carabineros chilenos.

Eso lo demostró el Ministro, el día de hoy. Porque resulta que estudiando un poco la historia de Chile, esa es la costumbre de los militares en Chile. La costumbre de ellos es que cuando no están de acuerdo con las gestiones que realiza alguna institución del Gobierno, se presenta toda la policía a amenazar y a querer amedrentar a los miembros de esa institución.

Esa estrategia de hoy, porque es una estrategia del señor Ministro de Seguridad Pública, para crear una cortina de humo ante la opinión pública y hacerle creer a los costarricenses que él no tiene nada que ver en el problema de la delincuencia y que la delincuencia no es un problema del Ministerio de Seguridad Pública, sino que es un problema de la Asamblea Legislativa ¡por Dios! Si en la Asamblea Legislativa estamos los Diputados para legislar. El que ejecuta las leyes es el Poder Ejecutivo. Y las leyes que tienen que ver con la represión las ejecuta el Ministro de Seguridad Pública.

¿A quién pretende engañar este Ministro o cree que en este país hay tontos o ingenuos? Sencillamente es una demostración de su incapacidad total. Y hoy el Ministro demuestra una vez más, con esta acción, desgraciadamente, que los costarricenses estamos más inseguros que nunca. Que estamos comandados por un Ministro de Seguridad Pública incompetente, que actúa por impulsos, que lo primero que se le ocurre es lo primero que hace y lo primero que dice.

Yo no puedo entender cómo el señor Presidente de la República sostiene tanto a una persona tan incompetente en un puesto tan importante. No me entra en la cabeza. Todavía no entiendo cómo el señor Presidente se empeña en sostener a este señor en un Ministerio tan delicado y tan importante para la seguridad del país.

Espero que el señor Presidente de la República recapacite y que vea que aquí está en juego la seguridad de todo un país, que si quiere pensar en él mismo y en la imagen de su Gobierno también es muy importante que proceda, inmediatamente, a remover del cargo a este señor Ministro.

Estoy seguro que entre las filas de Liberación Nacional hay gente mucho más competente para desempeñar un puesto tan importante como éste. Estoy seguro que ustedes tienen gente capacitada y que han desempeñado estos puestos, en el pasado, algunos de ellos, en los cuales el señor Presidente de la República podría dejar esta gran responsabilidad.

Como bien lo mencionaban algunos compañeros de la Comisión Mixta de Reformas Penales, como don Carlos Fernández, don Luis Martínez y doña Carmen Valverde, nos hemos empeñado en esa Comisión y ya empezamos a trabajar a horas extraordinarias y vamos a seguir trabajando horas extraordinarias; pero es importante recalcar que la solución a los problemas de delincuencia en este país no estriban, solamente, en las reformas penales. Es que eso es lo que se le ha querido decir al país. ¿Acaso es que no existen normas legales para reprimir el secuestro o la violación o el homicidio, como el que se dio en Tibás? Sí existe un ordenamiento jurídico que sanciona y que regula eso.

No se puede crear una cortina de humo sobre algo tan serio y querer decirle al país que este es un problema de la Asamblea Legislativa. No he escuchado mayor falacia que esta.

Sencillamente, la última palabra la tiene el señor Presidente de la República, porque, he escuchado a algunos Diputados de Liberación Nacional, decir que este Ministro ni siquiera viene de las filas de Liberación Nacional. ¿Por qué lo defienden tanto?, si la formación que tiene - según tengo entendido- es bastante formación marxista; estuvo en un país extranjero preparándose en cuestiones militares, en Albania, y no tiene raíces liberacionistas, entonces, por qué defender tanto a alguien que ni siquiera es del Partido que está en el poder, eso no lo puedo entender.

Este despliegue que hizo el Ministro en esta Asamblea Legislativa, no tiene ninguna comparación en la historia de este país; no recordamos en el pasado que se haya dado una situación parecida. Y es que, lo que falta a este señor, es que se le ocurra con esas ocurrencias -valga la redundancia- tomar el poder en este país, así solo eso le falta! solo le falta darle un golpe de Estado al mismo Gobierno liberacionista. La acción que él hizo hoy, en este Primer Poder de la República, para un golpe de Estado, falta muy poco.

La seguridad ciudadana de este país está en manos de un incompetente y de un desequilibrado mental; eso es lo que se le puede decir a este señor; sencillamente, una persona que no utiliza bien sus cinco sentidos, solo una persona así puede tomar la acción de prácticamente, invadir con policías y con ametralladoras la Asamblea Legislativa, en un país que nos hemos jactado de democráticos, y que respetamos el derecho de todas las personas.

Nosotros debemos ser más firmes, y sin distinguos de color político, porque aquí está en juego la seguridad de todo el país, debemos presionar al máximo al Gobierno de la República, no para un voto de censura como se ha hablado, ¡no! para destituir a este señor por incompetente; este señor debe ser destituido de ese puesto tan importante lo antes posibles, y nosotros no debemos ceder hasta que el Gobierno no tome esa decisión. Lo demostrado el día de hoy, es peligrosísimo para este país y faltaría muy poco para que sucedan hechos más serios en este país.

Las reformas penales son muy importantes, estamos trabajando en ellas, primero está el Código Penal, luego el Código de Procedimientos Penales, luego la Ley Penal Juvenil y la Ley de Ejecución de la Pena. Pero es importante que todos sepamos que podemos promulgar en esta Asamblea Legislativa las leyes más buenas y más efectivas que todos nos podamos imaginar, pero no basta con eso; no basta con que hagan leyes más buenas que la imaginación del hombre pueda dar, no basta con contar con los profesionales más capacitados, para que nos ayuden a crear estas nuevas leyes. Es importante decir, que se requieren más de seis mil millones de colones para poder reformar el sistema penitenciario de este país, que está colapsado. Es importante decir también, que las penas alternativas que se contemplan en el Código Penal, -que es una de las grandes innovaciones que tiene este nuevo código- es darle la posibilidades al juez de no llevar a todas las personas a prisión, sino que da la posibilidad de dar otras penas.

Se requieren más de seis mil millones de colones para poder implementar un moderno sistema penitenciario en este país, donde los delincuentes que se puedan readaptar a la sociedad a través del trabajo, darle también, esa posibilidad.

Cuando se dan hechos atroces como el de Tibás y algunos que se han dado últimamente, como también se han dado en el pasado; es que estos hechos no son de ahora; estos hechos atroces de violencia y de homicidio se han dado también en el pasado. Recordemos lo de la Cruz en Alajuelita, cuando murieron un montón de personas inocentes, incluyendo niñas y niños, mujeres. Este es un problema muy añejo, y por ello, no puede venir el Ministro a decirnos hoy, que es un problema de la Asamblea Legislativa.

Las leyes están contempladas en el ordenamiento jurídico, hay que mejorarlas, pero se ocupa la otra parte, que es la parte de la voluntad del Poder Ejecutivo para destinar los recursos, para implementar estas leyes y llevarlas a un feliz término.

Es importante que la opinión pública sepa, -como creo que fue el Diputado Francisco Antonio Pacheco, quien lo dijo muy acertadamente- que no bastaba con reformar todos los códigos penales y las leyes que haya que reformar, que el problema de la delincuencia de este país es más profundo, tiene raíces mucho más profundas y van a pasar muchos años, siempre y cuando haya voluntad para poder corregir problemas que vienen desde que el niño está en el vientre de la madre, desde que es rechazado en el vientre de la madre y llega a la sociedad, y ésta también lo rechaza.

Cuando nos damos cuenta -de acuerdo con las estadísticas- que casi un cincuenta por ciento de los niños que nacen en este país son hijos de madres solteras. El problema de la delincuencia en este país es muy profundo y no se puede lanzar una cortina de humo diciendo que llevando a prisión a los menores de edad se va a resolver el problema. En las condiciones actuales, si

llevamos a los menores de edad a prisión por diez, quince años, o por lo que sea, vamos a tener en unos años perfectos profesionales de la delincuencia, porque en las cárceles lo que llegan a aprender es más delincuencia.

No estoy diciendo que no haya que reprimir a la persona que no se adapta a la sociedad, hay que reprimirlos, hay que apartarlos y hay que tratar de ayudarles, pero es importante decir que por mejores leyes que aprobemos en esta Asamblea legislativa, no se va a solventar el problema de la seguridad ciudadana, el problema es más profundo, y eso hay que decirlo y todos tenemos que saberlo.

**DIPUTADO MARIO CARAZO ZELEDÓN:**

Hoy estamos aquí, haciendo manifiesta la indignación ciudadana, por medio de la representación, que por ley, por Constitución y por Dios, tenemos los Diputados de esta Asamblea Legislativa; hoy estamos aquí, no para discutir los temas de seguridad ciudadana, porque bien lo han dicho los compañeros, que en materia de seguridad ciudadana esta Asamblea ha actuado responsablemente, hoy, ayer y siempre en el pasado.

Hoy estamos aquí, porque estamos defendiendo la Constitución Política de Costa Rica; estamos defendiendo la Constitución Política de Costa Rica . Estamos defendiendo la Constitución Política de Costa Rica que hoy, en un espectáculo bochornoso, los ciudadanos presenciaron como un intento de violentar los sagrados principios de la división de Poderes sobre los que descansa nuestra institucionalidad.

Hoy estamos aquí, precisamente, para tener presente, señoras y señores Diputados, que si vivimos una democracia y juramos respetar esos valores que son lo más sagrado de la Patria, tenemos que actuar acorde con nuestro juramento.



Yo no quiero repetir argumentos que aquí se han señalado, pero si quiero recordar con mucha claridad lo que sucedió hace más de un año, cuando recibimos aquí la primera de las intempestuosas visitas del que todavía, en este momento, sigue ostentando el cargo de Ministro de Seguridad Pública.

Recuerdo cómo, en este mismo Plenario, ese señor osó retar a la Asamblea Legislativa, desde el principio de su labor, y no en cuestión de defensa de la seguridad ciudadana, sino en el sentido de que nosotros no teníamos que meternos con el trabajo que él tenía. Acordémonos de los hechos lamentables de Sarapiquí y de la respuesta, que a balazos, recibieron humildes costarricenses, por parte de Castro y sus huestes.

Recuerdo también cómo quiso proceder con sorna y burla, frente a lo que fueron las imputaciones que los Diputados le hicieron en ese momento. Eso no lo olvido, porque yo también recuerdo -y, hoy aquí se lo recuerdo a los señores Diputados- que en esa oportunidad hice la advertencia de que tarde o temprano ese caballero, de nombre Juan Diego Castro, volvería a la Asamblea Legislativa a irrespetar de nuevo la majestad de su Poder.

Respeto muchísimo las palabras de doña Carmen Valverde y le agradezco que ella tenga la humildad y la sencillez de explicarle al pueblo de Costa Rica, a través de su curul, las tareas que la Comisión que ella preside está realizando en esta Asamblea Legislativa. Se lo agradezco mucho, pero le digo a la compañera Carmen Valverde que ella no tiene que defender el trabajo que dignamente realizan ella y sus compañeros en la Asamblea Legislativa porque se lo reconocemos todos, porque antes que nada y sobre todo, nosotros reconocemos que los Diputados a esta Asamblea Legislativa actúan con el decoro y la dignidad del cargo que juramos cumplir.

Hoy, esta Asamblea fue vilmente atropellada. Fue vilmente atropellada en la misma forma como fue atropellado un humilde trabajador público de los peajes de Costa Rica, hace unos meses, cuando Juan Diego Castro Fernández, en un

desplante de chabacanería y matonismo, se llevó la barda del peaje de la Autopista Florencio del Castillo.

Hoy, Juan Diego Castro Fernández, ese mismo sujeto vino, y se rompió la barda que la Constitución Política le establece al Poder Ejecutivo, mediante lo que es el equilibrio de Poderes que representa esta Asamblea Legislativa.

Hoy nosotros tenemos que manifestarnos como uno, diciendo que no puede haber impunidad frente a lo que es la violación constante de las obligaciones constitucionales.

Hoy hemos escuchado la indignación justa y dolorida de nuestros compañeros Diputados de Liberación Nacional. Es muy difícil para los que lo conocemos, escuchar la voz fuerte y decidida de Leonel Solís reclamándole señorío a una persona que no lo tiene. Yo vengo hoy a decir, que me uno a esa posición de mi compañero Leonel Solís y le reclamo señorío a quien debe tenerlo y el que debe tener señorío es el Presidente de la República, en la persona que nombró al sujeto que viola las bardas de la institucionalidad del país y que en este momento, debe sufrir la condena plena de todos los ciudadanos representados en esta Asamblea Legislativa. Quiero terminar diciendo que la responsabilidad reside en quien lo nombró.

Hace unos minutos escuchábamos en la radio al señor Presidente de la República pretender darle un mensaje a los costarricenses diciendo que es una cuestión pasajera de estilo. No, señores, no es una cuestión pasajera de estilo y el que vio al Presidente de la República en la televisión estoy seguro que le vio su cara empalidecida y vio sus gestos dubitosos frente a lo que es una afrenta que él, en razón de la dignidad de la Patria, no puede dejar pasar.

Hago un llamado, desde esta tribuna que el pueblo me dio, al Presidente que el pueblo escogió, para que respete la dignidad del pueblo mancillado, que respete la dignidad del pueblo al que se le miente, que respete la dignidad del

pueblo al que se le quieren echar las culpas de aquello que es, simple y sencilla incompetencia.

Yo vengo a manifestar, también, mi indignación personal. Hubo oportunidades donde en silencio tuvimos que sufrir la inquina y el irrespeto. En esas oportunidades recuerdo bien las palabras de mis compañeros. Pero también me ha tocado, durante todo este largo transitar, saber que cuando en alguna entrevista este sujeto ha tenido que referirse, en alguna forma, a la oposición, sigue utilizando formas burlonas e irrespetuosas, frente a lo que es la dignidad de mi cargo y ¿qué decir? la dignidad de mi persona y de mi nombre.

Pero como bien dicen las cosas, el cántaro que mucho va al agua termina por romperse y hoy se rompió esa paciencia del pueblo de Costa Rica. Esta Asamblea Legislativa tiene que hacer el propósito de respaldar plenamente a nuestro Presidente, don Antonio Álvarez, de quien hoy me sentí orgulloso, al verlo defender con dignidad, lo que es la grandeza del cargo que ostentamos todos los Diputados, la actuación de los señores Jefes de Fracción, de todas las fracciones y la actuación de todos los Diputados.

Quiero, en honor a esas personas que aquí hoy nos representaron, pedir también que se le haga un mensaje claro al señor Presidente de la República, en el sentido de que con esos juegos no se le hace favor alguno a la Patria.

Señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados, estamos hoy de luto, estamos de luto porque la institucionalidad del país ha sido mancillada. Busquemos hacia adelante la luz de la esperanza, que nos permita dentro de muy poco, poder decirle a la ciudadanía, que efectivamente puede haber seguridad ciudadana, porque comenzaremos mediante un hecho, que haga posible, que a cargo de la seguridad ciudadana, haya una persona que merezca la confianza de todos los costarricenses.

DIPUTADO WÁLTER COTO MOLINA:

Deseo manifestar que considero que el señor Ministro de Seguridad se equivocó el día de hoy, que cometió un error y que la actuación del Presidente de esta Asamblea y de los Jefes de Fracción ha sido una actuación correcta, porque aquí no solamente está en juego el tema de la falta de seguridad ciudadana, sino que está en juego, también, el respeto a la institucionalidad del país, y de manera particular, el respeto a la Asamblea Legislativa.

Es cierto que a lo largo de estos dieciocho meses, se han venido produciendo algunos roces del señor Ministro de Seguridad con algunos Diputados y con otros sectores de la población. Pero esos roces son intrascendentes, cuando está por encima la institucionalidad del país y el tema que exige responsabilidad de darle seguridad a nuestros ciudadanos.

La visita que hizo el señor Ministro esta mañana, no me cabe la menor duda, fue una visita torpe, y me pone un poco triste, porque en repetidas oportunidades he manifestado acá en este Plenario, que para enfrentar los grandes problemas que tiene el país, y de manera especial, el problema de la seguridad ciudadana, que a mi juicio es el problema número uno que viven hoy los costarricenses, y que en la agenda de Gobierno debería ser el problema prioritario, para atender ese problema, señores Diputados, señoras Diputadas, es necesario sustituir el método de la confrontación, por el método del entendimiento, de la cooperación y de la colaboración entre los distintos Poderes, las organizaciones de la sociedad civil y algunos otros sectores que tienen responsabilidad en el tema de la falta de seguridad ciudadana.

El tema de la seguridad, es un tema que hay que abordarlo, como bien se ha dicho esta tarde por muchos de los señores Diputados, con una visión integral. No se trata simplemente de mejorar la legislación del país, lo cual está bien, y hace pocos años, aquí en esta Asamblea Legislativa, incluso se aumentaron las penas, estableciéndose -si mi memoria no me falla- en cincuenta años, la pena más alta de prisión. El espíritu de quienes legislaron en ese momento, fue que

el aumento de la pena iba a tener un efecto disuasivo en la criminalidad del país.

El problema de la falta de seguridad, como aquí ha sido dicho también, tiene que ver con la pérdida de valores, con la desintegración de la familia, con la situación de miseria y de pobreza en que viven sectores amplísimos de nuestra población, con el ingreso a veces irresponsable de extranjeros indeseables, que en lugar de venir a compartir nuestros valores, vienen a matar y a asesinar a nuestros ciudadanos, por la violencia también que circula día a día, en todas las horas prácticamente en los programas que transmiten los medios de comunicación.

Frente a esa problemática tan compleja, reducir la solución del problema de la seguridad, exclusiva o casi únicamente al tema de la Asamblea Legislativa, que tiene una responsabilidad de carácter legislativo, me parece que es no entender la integralidad del desafío que tenemos.

Señalaba hace unos doce meses en esta misma Asamblea Legislativa, que era necesario diseñar un plan nacional para atender este problema; y llamaba a que todos los Poderes del Estado -como ahora se está haciendo en una Comisión- trabajaran intensamente por diseñar mecanismos y propuestas, para que todos pudiéramos atender ese problema, y desde luego por la participación civil, como otro elemento necesario a tener, dentro de una política nacional para reflejar lo que son las acciones encaminadas a resolver este problema.

Para resolver este problema con el esfuerzo de todos, se requiere la cooperación, se requiere el diálogo, se requiere la colaboración, se requiere la coordinación. No es posible que podamos -y esto es una reflexión que debemos tener aquí presentes y que debe estar bien puesta en nuestros gobernantes- no es posible resolver el problema de la seguridad ciudadana mediante el método del conflicto; mediante el método del enfrentamiento,

mediante el método de los roces permanentes con las diferentes instancias de poder institucionalizado, o con otros sectores de nuestra sociedad.

A la larga, el mejor Ministro de Seguridad que puede existir en Costa Rica, es aquel que sea capaz de encontrar y de tender puentes entre la sociedad civil y las instituciones de nuestro país, para alcanzar e integrar en una sola voluntad, la responsabilidad que tenemos todos, cada uno, de conformidad con su quehacer, en el desempeño de darle a nuestra querida Costa Rica más seguridad para nuestros ciudadanos.

Termino diciendo que incluso la Sala Constitucional tiene una gran responsabilidad, en el tema de la seguridad ciudadana, porque existiendo mucha legislación destinada a atender el problema de la delincuencia y a penalizar los delitos que se producen en el país, las interpretaciones a veces excesivamente liberales, de algunas instancias del Poder Judicial, que a veces atienden más los problemas jurídicos de orden individual que las necesidades colectivas del orden público y de la seguridad, tienen que ver también con este problema.

Deseara, estimados compañeros y compañeras de esta Asamblea, que este grave incidente que se ha presentado esta mañana, que ha hecho reaccionar al Presidente de la Asamblea Legislativa y a los Jefes de Fracción, en defensa legítima del Estado de derecho y de la institucionalidad, sirva también para que haya más reflexión en el seno de quienes tienen que tomar responsabilidades también en el Poder Ejecutivo, en relación con la necesidad de entender, de una vez por todas, que la falta de seguridad ciudadana se debe resolver buscando el diálogo, el entendimiento, la cooperación, la coordinación y no el enfrentamiento, permanente y constante, como de alguna manera ha sido la tónica, que ha desarrollado el Ministro de Seguridad desde que asumió sus funciones.

Esto no es, en absoluto, nada personal contra nadie, aquí, esta reflexión está puesta bajo el mayor sentido patriótico, porque todos estamos alarmados de ver cómo está desdibujándose la Costa Rica que en el pasado fue ejemplo de paz y de tranquilidad, donde nuestros ciudadanos caminaban, día y noche, sin ningún problema, por los lugares de nuestros campos y por nuestras ciudades.

Aquí de lo que se trata, compañeros y compañeras, es de insistir, una vez más, que los gravísimos problemas, y uno de ellos, esencial y prioritario, como el de la seguridad de nuestros ciudadanos, solo se pueden atender con el concurso, con el diálogo, y con la cooperación entre las diferentes instancias de los Poderes. En ese sentido, sea Juan Diego Castro, o sea cualquier Ministro que llegue a ocupar el Ministerio de Seguridad, en el futuro, deben tener presente, que no se puede construir la seguridad de nuestros ciudadanos, a base de enfrentamientos, menos con el Primer Poder de la República, con la Asamblea Legislativa.

EL PRESIDENTE ANTONIO ÁLVAREZ DESANTI:

Quiero informar a las señoras y señores Diputados, que se han presentado tres mociones de censura, contra el Ministro de Seguridad Pública, hay una de ellas que es firmada por el Diputado Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser, una segunda moción, ha sido presentada por la Fracción en pleno del Partido Liberación Nacional y una tercera moción ha sido presentada por la Fracción en pleno del Partido Unidad, con la firma de algunos otros Diputados, entre ellos don Gerardo Trejos.

De conformidad con el Reglamento, estas mociones no pueden ser conocidas antes de cinco días, ni después de diez días, por tal razón las pondremos a votación el jueves de la próxima semana.

La Secretaría del Directorio le dará traslado al señor Ministro, tal y como lo establece el Reglamento respectivo.

Quiero agradecer a los señores Diputados, las manifestaciones que han dado en sus intervenciones el día de hoy.

Se levanta la sesión.

(Diecinueve horas y quince minutos)

Antonio Álvarez Desanti

PRESIDENTE

Álvaro Azofeifa Astúa María L. Ortiz Meseguer

PRIMER SECRETARIO PRIMER PROSECRETARIA



**Anexo número seis acta legislativa ciento trece de fecha catorce de diciembre del año mil novecientos noventa y cinco, en donde se aprobó el único voto de censura, que se ha producido en contra de un ministro de gobierno de la República de Costa Rica.**

Directorio

Antonio Álvarez Desanti Presidente

Álvaro Azofeifa Astúa

María Luisa Ortiz

Meseguer primer Secretario primera Prosecretaria

Diputados presentes

Albán López, Mary	Gutiérrez Schwanhauser, Rodrigo
Álvarez Desanti, Antonio	Jiménez Succar, Juan Luis
Álvarez González, Mario	Lobo Solera, José Antonio
Álvarez Murillo, Víctor Eduardo	Martínez Ramírez, Luis Antonio
Aragón Barquero, Bernal	Méndez Mata, Rodolfo
Araya Paniagua, Gerardo	Morera Ávila, Claudio
Arguedas Rivera, Guillermo	Núñez Torres, Víctor Hugo
Azofeifa Astúa, Álvaro	Obando Venegas, Roberto E.
Benavides Benavides, Bernardo	Ortíz Meseguer, María Luisa

Bravo Trejos, Hernán	Pacheco Fernández, Francisco Ant.
Brenes Castillo, Juan Guillermo	Piszk Feinziiber, Sandra
Brenes Gómez, Rodolfo	Román Trigo, Luis Alejandro
Brenes Rojas, Víctor Julio	Salas Araya, Alexánder
Cañas Escalante, Alberto	Sánchez Valverde, María Lidya
Carazo Zeledón, Mario	Solís Fallas, Ottón
Castilblanco Vargas, Edelberto	Solís Piedra, Leonel
Cole Scarlett, Teddy	Trejos Salas, Gerardo
Corrales Blanco, María Elsy	Urcuyo Fournier, Constantino
Coto Molina, Wálter	Ureña Ureña, Óscar
Chaves Ovaes, Alejandro	Valverde Acosta, Carmen María
Díez Martín, Anabella	Vásquez Badilla, Lorena María
Fajardo Salas, Gonzalo	Velázquez Acuña, José Luis
Fernández Alvarado, Carlos Manuel	Venegas Porras, Bienvenido
Fournier Origgi, Hernán	Villalta Fernández, Rafael Ángel
Fuentes González, Humberto	Villanueva Monge, Luis Gerardo
Garrón Figuls, Ricardo	Weisleder Weisleder, Saúl
Gómez Calderón, Marlene	Zumbado Arias, José Roberto
González Ulloa, Rolando	
González Villalobos, Orlando	

A) Discusión y aprobación del acta

EL PRESIDENTE:

En discusión el acta de la sesión N°

112 aprobada el acta

EL PRESIDENTE ANTONIO ÁLVAREZ DESANTI: Se abre la sesión.

Segunda parte de la sesión al ser las dieciocho horas, pasamos a la segunda parte de la sesión.

Iniciamos con la discusión de las mociones de censura que han sido presentadas. La primera es la moción presentada por la Fracción Parlamentaria del Partido Liberación Nacional, la cual dice lo siguiente:

De los Diputados de la Fracción del Partido Liberación Nacional, Ortiz Meseguer, Villanueva Monge, Álvarez González, Sánchez Valverde, Cañas Escalante, Pizsk Feinzilber, Pacheco Fernández, Coto Molina, Obando Venegas, Álvarez Desanti, Weisleder Weisleder, Velázquez Acuña, Solís Piedra, Morera Ávila y otras firmas ilegibles:

"Para que de conformidad con el inciso 24) del artículo 121 de la Constitución Política, el Plenario de la Asamblea Legislativa imponga voto de censura al Licenciado Juan Diego Castro Fernández, Ministro de Seguridad Pública, por los hechos acontecidos el día 7 de diciembre, cuando se presentó al Parlamento costarricense con un contingente policial desproporcionado. Este acto es un error grave que causa perjuicio a los intereses públicos y violenta la institucionalidad del Primer Poder de la República."

En discusión la presente moción de censura.

¿Se considera suficientemente discutida?

Ruego a los señores Diputados retornar al salón de sesiones para proceder a votar la presente moción. Ruego a los señores Diputados ocupar sus curules. No vamos a empezar la votación hasta que todos los señores Diputados estén debidamente sentados.

¿Sí, señor Diputado?

Diputado José ANTONIO LOBO SOLERA:

Señor Diputado Presidente, quisiera solicitarle, muy respetuosamente, explique el procedimiento de votación, si no tiene inconveniente.

El presidente Antonio Alvarez Desanti:

Con mucho gusto, ya lo iba a hacer.

Ruego a los señores Diputados ocupar sus curules. No vamos a iniciar el proceso de votación hasta que no estén todos debidamente sentados. Ruego a los señores Diputados retornar al salón de sesiones, para proceder a la votación.

Antes de iniciar la votación, me permitiré explicar cuál será el procedimiento.

Quienes estén de acuerdo con la moción de censura, deberán depositar una bola blanca. Quienes estén en contra de la moción de censura, deberán depositar una bola negra. La bola blanca implica respaldo al voto de censura, la bola negra significa oponerse al voto de censura.

Ruego a los señores Diputados ocupar sus curules.

Llamaremos de uno en uno, por lista. Les solicito, encarecidamente, permanecer sentados en sus curules. Cincuenta y seis señores Diputados presentes en el salón de sesiones.

En la urna hay únicamente cincuenta y seis bolas de cada color. Esto para que ningún Diputado se equivoque tomando más de una, porque nos haría incurrir en una nueva votación.

Ruego a los señores ujieres que se encuentran en las puertas, proceder a cerrarlas, debido a que iniciaremos la votación.

Se va a votar la moción que leí, presentada por los Diputados del Partido Liberación Nacional. En votación la moción de censura presentada por los Diputados del Partido Liberación Nacional. Los señores Diputados que estén de acuerdo con la moción, deberán depositar una bola blanca. Los señores Diputados que estén en contra, deberán depositar una bola negra.

(Se procede de conformidad)

Concluida la votación, ruego a los señores ujieres trasladar la urna de votación a la Mesa del Directorio.

Los señores Diputados permanecerán en sus curules para proceder a contar los votos.

Recuerdo a los señores Diputados que de conformidad con la Constitución Política, para su aprobación la moción requiere de dos terceras partes de los votos de los Diputados presentes. Habiendo cincuenta y seis señores Diputados presentes, la moción requiere para su aprobación de al menos treinta y ocho votos. Se han recibido cincuenta y seis votos, hay cincuenta y una bolas blancas, hay cinco bolas negras. APROBADA.

En consecuencia ha sido aprobado el voto de censura, según la moción presentada por la Fracción del Partido Liberación Nacional, que fue leída y votada.

Di por innecesario, no se someten a votación las dos mociones restantes.

DIPUTADO BERNAL ARAGÓN BARQUERO:

Estando en la hora de control político, permítame, señor Presidente, aunque sea, brevemente, referirme al acto que acaba de pasar en el Capítulo anterior, por tener una trascendencia institucional y por ser de importancia para todo el país.

Los hechos lamentables que presenciamos el pasado jueves, deben llamarnos a la reflexión. La presencia de los efectivos armados de los cuerpos policiales, liderados por el Ministro de Seguridad, don Juan Diego Castro, ante el edificio principal de esta institución, no puede tomarse a la ligera.

Por ello quiero reiterarle, señor Presidente, nuestra más efusiva felicitación por su valiente actuación en defensa de la institucionalidad del Parlamento y ratificarle nuestro apoyo decidido a las manifestaciones que usted hiciera en ese sentido.

Con ello ha reafirmado usted la tradición civilista de los costarricenses y ha dado muestras de firme voluntad política democrática al proponer el diálogo como camino en la búsqueda de la solución a los problemas nacionales.

Su actuación reafirma la necesidad de un mayor entendimiento y cooperación entre los Poderes del Estado y lleva al centro del escenario político a esta Asamblea. Esto es, particularmente necesario, tanto por la negativa del Poder Ejecutivo a destituir al Ministro de Seguridad, quien lleva la nave del Estado hacia peligrosos arrecifes, como por la indiferencia del Gobierno ante las peticiones del señor Presidente de la Asamblea Legislativa. Desde el inicio de este Gobierno, tomó la ruta del enfrentamiento, alejándose del camino de la conciliación. Primero fue con el principal partido de oposición. Luego siguió el Poder Judicial. Siguieron con la prensa y los maestros y hoy se enfrentan a la institucionalidad parlamentaria, a su propia fracción y a su partido.

Hay un vacío de apoyo popular y de legitimidad social que nos lleva a una clara situación de ingobernabilidad. Esto configura un peligroso escenario, nada

favorable para la estabilidad social y política de la Nación. Uno de los elementos esenciales para la gobernabilidad es la legitimidad y por eso hemos hecho bien en exigir y reafirmar el respeto a la Constitución y a la tradición democrática costarricense.

Tenemos que decirle claro al país que los conflictos sociales se resuelven sin violencia y sin amenazas de uso de ella, sean éstas veladas o manifiestas. La presencia del Ministro Castro con las armas detrás suyo, no es sino un síntoma más del estado de violencia generalizado que carcome a nuestra sociedad.

Don Juan Diego es un triste ejemplo de ello; es por esto que hacemos bien en censurar su actuación frente al Parlamento y sus acusaciones en la prensa nacional.

Debemos también censurarlo por pretender crear un figuruyismo propio, un populismo ignorante para justificar sus fracasos y para llevar adelante sus antidemocráticos planes. El famoso profesor S. E. Finner, quizás el más famoso experto en el tema del militarismo y su intervención en el campo de la política, ha dicho que " ... lo asombroso no es que los militares intervengan en la política, sino todo lo contrario, lo sorprendente es que éstos no lo hagan más frecuentemente, pues por las características centralizadas de su organización y con recursos armados a su disposición, sería de esperar que lo hiciera más continuamente. Una organización que cuenta con la obediencia casi ciega de sus integrantes, una organización que cuenta con medios de violencia físicas y con el monopolio legítimo de su uso, es una organización a la que hay que ponerle frenos para que no intervenga cotidianamente en la política, haciendo uso de los enormes recursos y facultades con que cuenta. La desproporción entre los medios a su disposición y aquellos que tienen los ciudadanos comunes, hacen imperativo que se pongan límites muy claros y estrictos a su participación sociopolítica.

Fueron sabios los constituyentes del cuarenta y nueve, cuando elaboraron el artículo 12, de la Constitución e incluyeron en éste una clara prohibición para los miembros de la fuerza de policía de manifestarse individual o colectivamente.

Si a los recursos que gozan estas fuerzas, se agrega la posibilidad de manifestarse, ya sea en desfiles o en peticiones como miembros de este cuerpo o como cuerpo en sí, se estaría creando un desequilibrio enorme con relación a otros grupos sociales o burocráticos.

Pregunto: ¿qué pasaría si los campesinos se manifestaran con rifles al hombro?, ¿qué pasaría si los obreros se manifestaran con ametralladoras?, ¿qué ocurriría si los sindicatos del sector público hicieran uso del derecho de petición con pistola al cinto? Muy fácil, señores Diputados, nos encontraríamos al borde de la guerra civil, por eso, la fuerza del Estado solo se aplica y se exhibe cuando ésta es requerida por el interés común y no por un interés sectorial.

Por eso se equivoca el señor Presidente de la República, cuando justifica la acción del Ministro Castro, al decir que la policía ha hecho del mismo derecho que hacen otros grupos sociales. Las fuerzas de Seguridad Pública no son cualquier grupo social, tienen una prohibición constitucional de no hacerlo y no deben hacerlo porque representan al Estado y no sus intereses sectoriales de grupo burocrático. Tampoco, se puede justificar el cerco policial al Parlamento, aduciendo que se venía a poner a la orden del Poder Legislativo la Fuerza de Seguridad, eso es también una violación constitucional, pues el único que ejerce el mando de esa fuerza es el Presidente de la República.

El Ministro merece también este voto de censura, porque de una manera simplista, como él lo ha reconocido después, acusó al Poder Legislativo de ser el responsable del aumento de la delincuencia. De esta manera no solo ha pecado de simpleza intelectual, sino también ha dificultado la resolución del



problema de la seguridad ciudadana, al estorbar, haciendo imposible la necesaria coordinación entre los Poderes del Estado. También se hace merecedor del voto de censura, por haber insultado a los Diputados en los días posteriores a estos penosos sucesos, equiparándolos con narcotraficantes y señalándolos como los culpables de la situación de inseguridad que vive el país.

La Constitución Política dice: "que procede el voto de censura, cuando un Ministro ha cometido actos inconstitucionales, ilegales o errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos".

Si en algún caso se justifica la aplicación de esta norma constitucional, es en éste. Juan Diego Castro quebrantó la Constitución al ordenar a humildes policías manifestarse colectivamente, frente a la Asamblea Legislativa. Juan Diego Castro violó la Constitución al poner la Fuerza Pública a las órdenes de otro Poder del Estado. Juan Diego Castro cometió un error gravísimo al insultar a los Diputados, imposibilitando de esta manera cualquier diálogo con el Poder Ejecutivo para resolver el gran problema de la inseguridad ciudadana.

Votando esta censura, no solo defendemos la institucionalidad, sino que restablecemos también el principio del respeto a la Constitución, cuerpo de leyes que se encuentra por encima de cualquier funcionario público y que es el origen y causa del mantenimiento de la paz social. Votando esta censura cumplimos también con la tradición costarricense, de predominio de las tradiciones civilistas y rechazamos de manera rotunda, cualquier tentación castrense que se incuben en el espíritu de fuerzas reaccionarias y antidemocráticas.

El presidente Antonio Alvarez Desanti:

Por el orden tiene la palabra el Diputado Gutiérrez Schwanhauser.

Diputado Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser:

Aprovechando también la hora de control político, me parece fundamental que nosotros dejemos en claro nuestra posición, en relación con este hecho histórico transcendental para la vida republicana y democrática de nuestros pueblos, lo sucedido hoy en este Plenario Legislativo.

Quiero dejar constando en actas mi voto afirmativo a la moción de censura, voté bola blanca, y quiero aprovechar esta ocasión para dejar muy clara mi posición. En primer lugar, debo decir que fuimos nosotros los primeros en presentar la moción de interpelación y censura por violación al artículo 12 de la Constitución Política. Esta moción estaba en primer lugar, de las tres presentadas, pero accedí con el señor Presidente de la Asamblea Legislativa, don Antonio Álvarez Desanti, a que fuera conocida la moción de censura presentada por el Partido Liberación Nacional.

A usted, señor Presidente de la Asamblea Legislativa, don Antonio Álvarez Desanti, quiero testimoniar mi apoyo a la posición digna en defensa de la Constitución Política, de la República y de la institucionalidad del Primer Poder de la República. Lo anterior, a pesar de que no fui invitado a la reunión de Jefes de Fracción por instancia de uno de ellos, pero déjeme decirle, señor Presidente, que no había otra opción, pocos somos los que hoy estamos dispuestos, decididos a defender la vigencia de la Constitución Política sin importar las circunstancias o los intereses políticos burdos o de otro tipo que se invoquen en ese momento.

Usted, señor Presidente, ha sintetizado los valores y los principios de la República; de la República democrática de los pueblos, porque la democracia no solo es el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino que también es con los pueblos. La acción del señor Ministro de Seguridad y abogado, don Juan Diego Castro, fue un hecho consumado; las disculpas del señor Ministro Juan Diego Castro fueron extemporáneas y tardías, no podemos

ni podíamos aceptar posiciones blandengues como la expresada por el señor Vicepresidente de la República, cuando se trata de la defensa de la Constitución Política.

La acción del señor Ministro Juan Diego Castro, trasladada a otro país, señoras y señores Diputados, costarricenses, donde existe un ejército, sería calificada inmediata y automáticamente como una intentona de golpe de Estado, y es precisamente en ese contexto en que debe ser calificada la renuncia de la señora Ministra de Información doña Florisabel Rodríguez, como la proclama de justificación de esa intentona de golpe de Estado.

Lo más grave de todo -costarricenses- es que se aprovechó la violación al artículo 12 de la Constitución Política, para montar una maniobra política de mejorar la imagen del Gobierno de la República, aprovechándose, precisamente, de la buena labor del señor Ministro Juan Diego Castro. Así lo reconoció el señor Presidente de la República, don José María Figueres, cuando admitió públicamente, que sabía, que conocía con antelación de la acción de su Ministro de Seguridad.

De estos tres personajes que participaron directamente en esta maniobra, tratando de mejorar la imagen del Gobierno, ¿qué papel habrá jugado el siniestro asesor don Roberto Hidalgo? Este tipo de maniobras tan burdas, protagonizada en primer lugar por don Juan Diego Castro y luego por el señor Presidente de la República, por doña Florisabel Rodríguez y por don Roberto Hidalgo, no hace más que acrecentar la falta de credibilidad de los pueblos costarricenses hacia su clase política tradicional. Gracias a Dios, todavía existe gallardía y vergüenza. Costa Rica sabe el rol que cada Diputado y cada político de este país ha jugado en este asunto; lástima, que ninguno de los precandidatos dijo: "esta boca es mía".

Tanto el Poder Ejecutivo -en la persona de su señor Ministro Juan Diego Castro- como la Asamblea Legislativa, hay que reconocerlo, tenemos nuestra cuota de

responsabilidad en materia de seguridad ciudadana. Ni la mejor profesionalización, ni las mejores leyes acabarán con la delincuencia en este país. El problema de la seguridad ciudadana, costarricenses, tiene raíces más profundas, son las políticas neoliberales que impulsan algunos sectores de las cúpulas políticas, de los dos partidos tradicionales y de la dirigencia empresarial, que han abandonado ellos, la senda de la economía mixta, en donde precisamente, han empujado estas políticas neoliberales, a través del pacto Calderón-Figueres.

Esto es importante decirlo, una y otra vez, porque los últimos hechos que nosotros hemos visto, en materia de violencia ciudadana, sobre todo aquellos en que han resultado empresarios envueltos en acciones violentas de la delincuencia, queremos decir que en otros países, como Chile, México, Colombia, Brasil, existen ya, empresas dedicadas totalmente a la vigilancia privada, a la seguridad privada. En esos países, prácticamente hay una fuerte industria dedicada a los vehículos blindados, dedicada a la vigilancia privada de los mismo empresarios. Si ese es el tipo de país que nosotros queremos, entonces que lo digan de una vez, abiertamente, a fin de que los costarricenses, la inmensa mayoría de ese 80% de costarricenses que no se verán beneficiados con las políticas neoliberales, de manera que ellos estén prevenidos.

En esto, concluyo mi intervención, insistiendo en que la experiencia de modelos similares en México, Argentina, Chile y Perú, nos hacen concluir decididamente, en las siguientes características de las políticas neoliberales, políticas que han sido condenadas, una y otra vez, por la Iglesia Católica nacional e internacional. La semana pasada, recientemente, se reunió un cónclave de iglesias católicas centroamericanas y condenaron, una vez más, estas políticas neoliberales que se impulsan.

Pero debo decir, en razón de la verdad, que hay una serie de características de estas políticas, que no podemos dejar pasar por alto, ni los costarricenses

tampoco pueden dejarlas pasar por alto; la primera de ellas, es que consolidan fuertes procesos de concentración de la riqueza y el capital. En segundo lugar, fortalece democracias formales tipo marketing, donde el ciudadano se transforma en un simple consumidor de lo que se ofrece en el libre mercado electoral. En tercer lugar, un Estado al servicio del gran capital transnacional, con débiles funciones en lo social, donde solo importan las cifras macroeconómicas y de control fiscal. En cuarto lugar, promueve el individualismo, así como el consumismo desaforado y el materialismo, la pérdida de valores, donde la riqueza es sinónimo de éxito y poder, y no importan los medios, lícitos, ilícitos o cuasilícitos que se utilizaron para obtenerla. En quinto lugar, estas políticas neoliberales, desarrollan fuertes procesos de exclusión social, y por tanto, genera automáticamente la violencia, a distintos niveles en la sociedad, y en último lugar, una última característica de estas políticas neoliberales, es que se deterioran fuertemente los valores tradicionales, y los elementos de cohesión social, haciendo nugatorios los mecanismos de ascenso y movilidad social.

He querido mencionar esto último, señoras y señores Diputados, porque tenemos que tener conciencia, los costarricenses, de que ni la mejor profesionalización de la Fuerza Pública, ni las mejores leyes, harán que se le solucione el problema de la seguridad ciudadana en este país.

Es necesario que efectivamente nosotros volvamos a entrar por la senda de la economía mixta, de los valores tradicionales, de la defensa de la República, de propiciar y profundizar la evolución democrática, de la participación y la representación política de los distintos sectores de la sociedad civil, de la sociedad política y de los costarricenses, de manera que, efectivamente, se pueda ejercer un control político sobre las políticas que impulsan los sectores dominantes en una sociedad, como es la costarricense.

Diputado Gerardo Trejos Salas:

Nos correspondió esta tarde, desprovistos de toda pasión y haciendo un esfuerzo por ser justos y objetivos, proceder a votar una moción de censura, contra el Ministro de Seguridad Pública, señor Juan Diego Castro.

Desde el punto de vista del Partido Fuerza Democrática, esta moción, por las razones que explicaré más adelante, es también y principalmente, una moción de censura contra el señor Presidente de la República. Con el Ministro de Seguridad Pública, cualquiera que sea la simpatía o la antipatía que en el orden personal le tengamos, no podemos ser mezquinos o injustos.

Es preciso reconocer que el señor Juan Diego Castro se ha desempeñado en el ejercicio de su cargo, en forma mucho más eficiente que su predecesor, el Licenciado Luis Fishman. Solo un espíritu mezquino podría ignorar o desconocer los esfuerzos serios que ha hecho durante su gestión, el actual Ministro de Seguridad Pública, por profesionalizar la policía y mejorar las condiciones de trabajo de esos costarricenses que laboran en la Fuerza Pública.

Sin embargo, como ha sido reiteradamente señalado por observadores imparciales, la personalidad del Ministro, su falta de tacto político, su intemperancia y su inmadurez, dificultan enormemente la posibilidad de realizar un trabajo armonioso y conjugado con los otros Poderes del Estado, para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.

La personalidad, un tanto exaltada del señor Ministro de Seguridad Pública, lo condujo, en días pasados, a formular públicamente, críticas injustas y sin fundamento contra la Asamblea Legislativa. En efecto, el señor Ministro, por una parte culpa a la Asamblea Legislativa de negligencia en la aprobación de la reforma penal y por otro lado, subrepticamente, hace creer a los costarricenses, mal informados, que para combatir la delincuencia basta con la aprobación de leyes más severas y represivas.

Dentro de esa línea de pensamiento, el señor Ministro, junto con el Presidente de la República, remitieron, hace varios meses, un proyecto de reforma parcial a la legislación penal, para aumentar algunas penas y crear nuevas figuras delictivas. Este proyecto fue remitido, para su estudio, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que me honro en presidir.

Como no soy penalista, pero sí soy un Diputado consciente de que es conveniente y necesario perfeccionar nuestra legislación penal, el mismo día que recibí el proyecto del Poder Ejecutivo, lo consulté con especialistas nacionales e internacionales, de alto prestigio, capaces de juzgar con objetividad y conocimiento. Cito, entre otros, al profesor Wolfgang Schone, y al costarricense Alfredo Chirino, quien realiza estudios penales en la República Federal de Alemania, cuyos dictámenes tengo en mi poder.

No puedo cansarlos leyendo amplios y desarrollados dictámenes técnicos, que pongo a disposición de cualquier interesado, y que coinciden en señalar que las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo son altamente inconvenientes.

La mala calidad de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para mejorar la seguridad ciudadana, no debe sorprender a nadie. El equipo de Gobierno que el Presidente Figueres escogió para que colaborara con él en sus funciones a partir del 8 de mayo de 1994, no estaba preparado para gobernar. Se habían preparado únicamente para ganar las elecciones. Y este hecho ha repercutido negativamente en el trabajo legislativo, donde los Diputados se han visto obligados a trabajar dura y pacientemente para mejorar y corregir los proyectos que envía a esta Asamblea el Poder Ejecutivo.

La mejor prueba de esta incapacidad del Poder Ejecutivo para enviar a la Asamblea proyectos de ley bien elaborados, fue lo que aconteció con los proyectos denominados Justicia Tributaria y Ajuste Tributario. Estos proyectos, tan necesarios para evitar que la crisis económica del país se acentuara y para impedir que las tasas de interés subieran aún más, tuvieron que ser

reelaborados varias veces en la Asamblea Legislativa. Y a última hora, pese a que todos los Diputados de la Asamblea Legislativa, dijeron lo que dijeron, estaban a favor del proyecto, le tocó a un Diputado del Partido Fuerza Democrática sacarle las castañas del fuego al Gobierno, para lograr que el proyecto se aprobara.

Dije al principio de mi intervención, que mi voto de censura es, principalmente, una censura para el señor Presidente de la República.

Como bien lo señaló el Licenciado Federico Vargas Peralta, Exministro y Exdiputado liberacionista, los hechos protagonizados por el señor Ministro de Seguridad Pública el jueves pasado, no pasan de ser una chiquillada. Una chiquillada donde faltó el ingenio infantil. Una chiquillada, sí, pero una chiquillada consentida por el señor José María Figueres Olsen.

Al Ministro de Seguridad Pública le reconozco también el mérito de haber relanzado, con sus imprudentes palabras, el debate sobre la reforma penal. Y en ese gran debate, quiero expresar la voz, en forma nítida y clara, del Partido Fuerza Democrática.

Al respecto, me permito adelantar que nuestro Partido no comulga con quienes pretenden resolver el problema de la seguridad ciudadana, con meros instrumentos represivos, ampliando penas y llenando las cárceles de jóvenes y adultos.

Quienes de esa manera simplifican el problema, desconocen el carácter rehabilitador que debe tener cualquier sistema de penas en una sociedad civilizada, y desatienden a la evidencia de que el aumento de la delincuencia corre parejo con la polarización social y económica, producida por los programas de ajuste estructural de los últimos gobiernos, y el trasvase a nuestra sociedad de valores importados, que ante la apertura de fronteras culturales, inunda nuestros países.



No somos tan ilusos en creer que un país como Costa Rica, pueda cerrarse a la influencia de valores degradados que penetran nuestra vida diaria. Pero sí estimamos fundamental, que el sistema político costarricense, empezando por los partidos políticos y las instituciones de Gobierno, deben cambiar su paradigma actual de corte antidemocrático y clientelista, ofreciéndole a las nuevas generaciones y a la ciudadanía en general, una vida cívica, limpia y participativa, como contribución de la clase política al rescate y a la transparencia de los valores.

Diputado Víctor Hugo Núñez Torrez:

Primero quiero pedir disculpas por mi improvisada intervención. Como García Márquez, yo sigo diciendo "no tengo quién me escriba". Pero lo que digo es lo más profundo de mi convicción y de mi pensamiento.

Me siento orgulloso de encontrarme dentro de esas cinco bolas negras que se han depositado. Porque como abogado que soy, y como juez que, en algunas oportunidades, me ha correspondido ejercer, nunca me apego al texto de la ley sino que voy más allá, para valorar la intención del sujeto que se acusa de transgredir la ley.

He votado negativamente la moción de censura, y lo he hecho por dos razones fundamentales: Una de hecho y otra de derecho. Si a mí me demuestran, compañeras y compañeros Diputados, que censurando al señor Ministro de Seguridad Pública se va a terminar con la delincuencia en Costa Rica, posiblemente me hubiera sumado a este voto. Si ese voto o esa moción de censura hubiese estado acompañada de un compromiso de esta Asamblea Legislativa, de realizar ingentes esfuerzos para terminar con la problemática social y económica, que son los factores fundamentales que generan la violencia y la inseguridad en Costa Rica, posiblemente mi voto hubiera sido diferente.

Pregunto, costarricenses que nos escuchan: ¿Qué sería de la Asamblea Legislativa, si los costarricenses tuvieran el mismo procedimiento para juzgarnos en nuestras actuaciones?

Comprendo la posición del señor Presidente de la Asamblea Legislativa, y siempre admiro y respeto sus valientes posiciones, aunque en esta oportunidad no lo pueda acompañar. Quizás, si hubiese sido liberacionista, y si hubiese estado en la Presidencia de este Poder, hubiera actuado diferente. Pero no estoy, por suerte, en ninguna de esas dos posiciones. Y aun cuando no comparto las políticas neoliberales del actual Gobierno, no contribuí a censurar a don José María Figueres, como ha sido censurado hoy, por sus propios Diputados. Porque, costarricenses, no podemos olvidar que don Juan Diego Castro desfiló hasta la Asamblea Legislativa en un acto imprudente que yo no comparto, pero con el aval, el respaldo y el conocimiento previo del señor Presidente de la República, de manera que un voto de censura para el señor Ministro de Seguridad Pública, es ante todo, un voto de censura para el señor Presidente de la República, y no nos lavemos las manos, no nos lavemos las manos diciendo que fue únicamente para el señor Ministro.

Antes que censurar al señor Ministro y al señor Presidente de la República, censuro a los causantes del pacto político que se interesaron por introducir reformas fiscales y económicas en contra de las grandes mayorías de los costarricenses, pero no tuvieron la sensibilidad social para incluir en ese pacto las reformas penales, que los costarricenses estaban exigiendo a gritos, y durante estos años, la Asamblea Legislativa ha estado abocada a conocer de los proyectos que se pactaron y ahí hay responsabilidad también, y debiéramos censurar a los que pensaron, esos intereses de partido, esos intereses fiscales y económicos, y no pensaron que con ello sembraban la pobreza, la desconcertación social, la emigración del campesino a la ciudad, el cierre de puertas de la educación a los pobres y en consecuencia, el aumento ineludible de la delincuencia en Costa Rica!

Don Juan Diego Castro sabe, porque se lo he expresado personalmente, que no comparto su criterio de que la inseguridad sea un problema de leyes. Es cierto, tenemos que modernizar y readecuar nuestras leyes, pero eso no es suficiente, mientras no tengamos los centros adecuados para alojar a los delincuentes y lograr que ellos vayan a trabajar, no a vivir gratuitamente, a costa del honrado que trabaja, no vamos a combatir la delincuencia en Costa Rica.

Mientras sigamos desoyendo a los campesinos que claman tierra y que tienen que venir a la ciudad a enfrentar una situación a que no están acostumbrados, va a continuar la generación de delincuentes. Mientras aquí en la Asamblea Legislativa, quiero denunciarlo, no nos aboquemos a conocer de proyectos sociales, profundos, capaz de hacer justicia, democracia económica, donde todos los costarricenses tengan acceso, por lo menos a sus básicos alimentos, seguiremos incrementando la delincuencia.

De allí que, no es solamente un problema de leyes, pero no podemos lavarnos las manos diciendo que no tenemos parte de culpa. A los costarricenses les consta, que a mi llegada a la Asamblea Legislativa, el 30 de mayo de 1994, presenté un proyecto de ley para combatir la delincuencia juvenil y ese proyecto, no solamente fue prontamente archivado, sino que no sirvió siquiera para despertar la conciencia en esta Asamblea Legislativa, del problema que está viviendo el humilde costarricense, que viaja en bus, que tiene que ir al mercado, que tiene que deambular por las calles, ineludiblemente a cualquier hora del día o de la noche.

Si bien es cierto que en los últimos meses, con el empeño del señor Presidente de la Asamblea Legislativa y de la señora Vicepresidenta, estamos trabajando arduamente por reformar esas leyes, también tenemos que reconocer que si esa misma actitud la hubiéramos asumido el 1º de mayo de 1994, como lo denuncié en forma reiterada, ya también los costarricenses contarán con esas normativas penales, debidamente emitidas.

Esas son las razones de hecho que he tenido para no votar en favor, el voto de censura, pero además dije que como abogado, no puedo, sencillamente, interpretar el texto de la ley. Cuando un ciudadano transgrede una norma, el juez debe buscar su intención, el juez debe investigar cuál era el propósito del sujeto que se comportó de una o de otra manera, y puedo asegurar, que en este momento, la intención del señor Ministro es la misma del señor Presidente de la República, es la misma de las señoras y señores Diputados y de todos los costarricenses: buscar un medio, de despertar aquí la acción necesaria para combatir la delincuencia y la inseguridad. Aun cuando fuese un medio equivocado, el proceder del señor Ministro, estoy seguro, nunca llevaba en su intención más que exigir, como él lo ha dicho sinceramente, instrumentos que le permitan a su policía actuar con más eficacia.

Todavía hay más, me remonto a lo que dispone el artículo 24, de la Constitución Política, cuando autoriza a esta Asamblea Legislativa a censurar: "Censurar a los mismos funcionarios -estoy leyendo textualmente costarricenses- cuando a juicio de la Asamblea Legislativa, fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales -claro que sí, pero agrega la norma- o de errores graves -y aquí viene lo que en Derecho Penal se llama la determinación del verbo, o la tipicidad- que hayan causado, o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos". Quiero que un solo compañero o compañera Diputada, con el respeto y el aprecio que les tengo, me demuestre cuál interés público se lesionó con la llegada del señor Ministro, aquí a la Asamblea Legislativa.

El interés público se está lesionando con la delincuencia, ieso si es un interés público, que está en este momento afectado!, y en eso tenemos todos responsabilidad, Gobierno, Diputados, Ministros y todos los que los costarricenses nos confiaron el deber de conducir a Costa Rica, en paz y tranquilidad; allá sí está afectado el interés público, pero no se afectó por la llegada del señor Ministro, que aunque imprudente y que no la comparto, no

tuvo el efecto legal que la Constitución Política exige, para que proceda un acto de censura.

Por ese fundamento legal y porque estoy seguro, reitero, que todos coincidimos en la necesidad de luchar juntos, en forma solidaria, por hacer que la delincuencia disminuya, haciendo que la pobreza disminuya, y porque estoy seguro, que ni censurando al señor Presidente de la República, ni botando a todos los ministros, es posible combatir la delincuencia, mientras no combatamos la pobreza, por esas razones, compañeras y compañeros, costarricenses, voté negativamente el voto de censura, y así quiero dejarlo constando para la historia.

Diputado Ottón Solís Fallas:

Voté negativamente la moción de censura, porque compañeras y compañeros, lo que lesiona la majestad del Primer Poder de la República no es un ordenado desfile de la Fuerza Pública frente a la Asamblea Legislativa, sino lo que a lo interno de ésta se hace o se deja de hacer.

Se ha dicho que la Asamblea exige respeto y que en virtud de tal exigencia, es que se ha propuesto esta tarde, un voto de censura contra el Ministro de Seguridad Pública. Lo que no se ha dicho ni parece recordarse nunca, es que la medida de lo que podemos exigir a otros, viene dada, ante todo y sobre todo, por lo que seamos capaces de exigirnos a nosotros mismos.

Parece que esa severidad crítica que esta Asamblea es capaz de manifestar para tratar o juzgar a otros, cuando quiere o le conviene, no está dispuesta a aplicarla, en primer término, a sí misma. Es por ello que mientras no se dé ejemplo de congruencia entre lo que se predica para los demás y lo que practicamos nosotros; mientras no se corrijan errores, mientras no se erradiquen abusos y se eliminen privilegios existentes en el propio seno de este Poder, difícilmente se podrá exigir respeto para el Parlamento.

En tanto esta Asamblea Legislativa no empieza por poner orden en su interioridad, adoptando para sí misma y compartiendo las medidas de austeridad y sacrificio que se quieren imponer sobre el resto de la ciudadanía, será bien poco lo que se esté haciendo en pro del rescate y la potenciación de su imagen.

A pesar de todas las campañas propagandísticas que se paguen a hacer y de todos los floridos discursos que se quieran pronunciar sobre la majestad del Primer Poder de la República, si no se corrigen esos errores, no vamos a recobrar la credibilidad ante los costarricenses.

En la era de la información en que vivimos, es obligación de los dirigentes políticos y, en especial de los que tienen el poder, de hacer las leyes, actuar en forma consecuente con los valores éticos que se pregonan. El mal ejemplo que provoca una práctica contraria, inevitablemente propicia la corrupción en todos los demás niveles sociales, por un elemental principio de emulación.

Ciertas actitudes que parecen haber sentado firmemente sus fueros en esta Asamblea Legislativa y en muchas otras anteriores, recuerdan la expresión que nuestro pueblo utiliza para designar a ciertas personas, de las que se dice "que tras que deben, cobran".

En lugar de ponerse a cobrarle al Ministerio de Seguridad Pública, el desfile policial de la semana pasada, esta Asamblea debería más bien preocuparse de cosas como las siguientes: la negativa a eliminar privilegios para los Diputados, tales como el disfrute de los servicios de una soda exclusiva y gratuita, uso de vehículos oficiales, viajes inútiles al exterior, gastos en recepciones y comidas, la no modificación del régimen de pensiones de los Diputados, en flagrante incumplimiento de lo que se prometió al momento de aprobarse las modificaciones al Régimen de Pensiones del Magisterio, autorización de teléfonos celulares para los Diputados -donde se logró el único acuerdo pentapartidista, que yo recuerde- en esta legislatura, existencia de un régimen

preferencial por parte de los Diputados, ya que no pagan el impuesto sobre la renta, ni cargas sociales, por la totalidad de los ingresos, y eso, cuando se ha propuesto solucionar ha sido rechazado casi por unanimidad; la no eliminación de la nefasta, corrupta y sucia práctica de repartir políticamente placas de taxi, políticamente, en lo cual, los Diputados de esta Asamblea Legislativa han participado; aprobación de un día de receso la semana pasada para ir a una fiesta, cuando no se han corregido los excesos en nuestro Régimen de Pensiones; la aprobación con saldos pagados de veinticinco millones, que es lo que nos ganamos en un mes sin trabajar, de un receso, sin haber corregido ese Régimen de Pensiones, que no hay justificación moral o ética, para que no lo hayamos corregido, siete meses después de que le dijimos a los pensionados del Magisterio, que el maltrato a su Régimen de Pensiones, era parte de una política general de eliminación de privilegios.

Compañeras y compañeros, aquí a veces se sale con argumentos espurios para enfrentarse a esta argumentación que he mantenido por mucho tiempo, que es como por quedarle bien a la prensa. A mí la prensa no me importa. Me enfrenté a la prensa en el tema del PAE por cinco años, hasta que compañeros de mi partido reconocieron lo nefasto de esos programas. Hoy por dicha, para que esos que me acusan con esa argumentación no salgan con lo mismo, la prensa está con ustedes, la prensa cree que hay que censurar a Juan Diego Castro, el periódico La Nación así lo ha escrito.

Aquí entonces no me salgan con el argumento de que es para quedarle bien a la prensa. Es porque creo que el crimen contra la propiedad y la inseguridad ciudadana obedecen a que hoy la información le permite a toda la ciudadanía, conocer de las cositas que se hacen por ciertas clase política. Eso siempre ha existido y quizás hoy es menos que en la Edad Media. Pero hoy la gente lo sabe, y la fuerza moral para detener el crimen contra la propiedad se acaba, cuando los que están arriba, impunemente, se apropian de recursos públicos bajo la excusa de que son herramientas de trabajo.

Hoy tenemos la obligación de corregir eso, y no lo digo por mortificar a nadie, esto es una práctica no inventada por esta Asamblea. Compañeras y compañeros, hagamos el cambio en el año entrante, eliminemos esos gastos, y demos un ejemplo de que el sacrificio que le hemos impuesto a los costarricenses, con tributos, con corrección de regímenes de pensiones y con otras cargas muy duras, nos lo aplicamos a nosotros mismos, primero que todo.

El respeto de los demás solo se gana cuando sabemos respetarnos a nosotros mismos. En lugar de censurar a otros, empecemos por censurar y corregir lo que concierne a esta Asamblea Legislativa.

Gracias Presidente, por permitirme usar la palabra.

El presidente Antonio Alvarez Desanti:

Con mucho gusto, señor Diputado.

Diputado Luis Gerardo Villanueva Monge:

Hoy la Asamblea Legislativa ha hecho uso de una de las facultades constitucionales. En ese uso de las facultades constitucionales, nosotros pretendemos defender la institucionalidad de la misma Asamblea Legislativa. La Fracción del Partido Liberación Nacional hace defensa de la Asamblea Legislativa, con ocasión precisamente de acciones censurables, de un Ministro de Gobierno. Nosotros no podemos de ningún modo, apoyar una acción que pretende lesionar el Primer Poder de la República.

La Fracción del Partido Liberación Nacional manifiesta ahora que actuamos en defensa de la Asamblea Legislativa, que sea quien sea, quien pretenda hacer actos bochornosos que el mismo Ministro de Seguridad Pública aceptaba en una nota que nos dirigiera al Presidente de la Asamblea y a los Jefes de Fracción,



nosotros entonces hemos actuado de conformidad a como corresponde, según la Constitución Política, a este Poder de la República.

Quiero decirles, que no debe entenderse jamás, que esta censura al Ministro de Seguridad Pública, es una división del equipo de Gobierno.

Nosotros, aquí lo reiteramos, somos la Fracción de Gobierno, somos la Fracción del Partido Liberación Nacional, leal al Presidente Figueres, estamos con el Gobierno del Presidente Figueres y estamos apoyándolo en las reformas que estamos impulsando y que estamos aprobando en esta Asamblea Legislativa.

Creemos en la reforma del Estado, creemos en los cambios, creemos en el recorte y los privilegios, creemos en las reformas penales que estamos haciendo desde esta Asamblea Legislativa. Y al creer en todo esto, es porque creemos en la labor de Gobierno del Presidente, Ingeniero José María Figueres Olsen.

Hoy, venimos únicamente a decirles, que esta censura que le estamos imponiendo a un Ministro, es por la acción muy personal, señalada ya en la moción que nosotros hemos aprobado. Pero queremos entonces reiterar que esto no se extiende ni a todos los actos de Gobierno porque los apoyamos, ni a todas las personas que acompañan al Presidente Figueres en sus funciones.

Reiteramos hoy el apoyo al Presidente Figueres. Vamos a buscar mayor coordinación con todas las fuerzas políticas en esta Asamblea Legislativa, desde luego coordinación amparada bajo el liderazgo del Presidente de la República, a quien hoy reiteramos nuestro apoyo.

Quiero decir, que hoy ha ganado la Asamblea Legislativa, hoy ha ganado la institucionalidad. Esto es un voto de censura aceptado por el señor Ministro de Seguridad Pública, al confesar su acción en la nota a la cual ya me he referido,

dirigida ante esta Asamblea Legislativa. Esta era una moción de censura aprobada, esta era una moción ya anunciada como aprobada.

Queremos entonces decirles, que de ahora en adelante nosotros, la Fracción de Liberación Nacional, propondremos ante esta Asamblea Legislativa que sigamos coordinando, aquí internamente, y la Fracción de Liberación Nacional, seguirá coordinando.

Se levanta la sesión

(Diecinueve horas con veinticuatro minutos)

Antonio Alvarez Desanti presidente

Álvaro Azofeifa Astúa María Luisa Ortiz Meseguer primer secretario primera prosecretaria.